

ASUNTO: Por este conducto se presenta denuncia en contra del **C. Guillermo Romero Rodríguez**, con el carácter en su momento de Precandidato, actual candidato a presidente Municipal de Mazatlán, Sinaloa. Así como de los Partidos Políticos **PAN, PRI, PAS Y PRD** que forman la coalición "Fuerza y Corazón X Sinaloa".

Lic. Aida Palafox Villalobos

Presidenta del Consejo Municipal Electoral

de Mazatlán, del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

Presente.

C. José Luis Gómez Núñez, en mi carácter de representante propietario del **Partido Político Morena**, ante el Consejo Municipal en Mazatlán, personalidad que tengo acreditada ante este Consejo Municipal con cabecera en Mazatlán, Sinaloa, del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa; señalando domicilios para oír y recibir notificaciones derivadas de la presente **Queja y/o denuncia**, los domicilios siguientes: **1) Avenida Insurgentes número 2996, Local 6, Colonia Estero de Mazatlán, Sinaloa, 2) Comité Ejecutivo Estatal de Morena, cito; en Avenida Nicolas Bravo, número 1515, popular, 82120, Culiacán Rosales, Sinaloa;** autorizando para recibirlos a los licenciados Julio César Ramos Robledo y Abraham Alfonso Avalos Osuna, y el Contador Público Alejandro Miguel López Aguilar; así mismo autorizo el correo electrónico **morenamzt2024@gmail.com**; ante ustedes con respeto comparezco para exponer lo siguiente:

En términos de lo dispuesto por el artículo 295, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como los artículos 3, 12, 42 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, vengo a presentar formal **DENUNCIA** en contra del **C. Guillermo Romero Rodríguez** al momento de los hechos, con carácter de precandidato a presidente municipal de Mazatlán, y contra los Partidos Políticos PAN, PRI, PAS Y PRD que forman la coalición "Fuerza y Corazón X Sinaloa", por la comisión de conductas que contravienen a los artículos **7, 8 y 14 de los Lineamientos Generales para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de Propaganda y Mensajes Electorales** establecidos por el Instituto Nacional Electoral; **38, 39 y 40, del Reglamento del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, para la difusión, fijación y retiro de la propaganda política y electoral; y en la Jurisprudencia de la Sala Superior 5/2017, de rubro PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CUMPLIRSE CUANDO SE DIFUNDAN IMÁGENES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES;** por lo que solicito a esta Comisión instruya el **PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR**, en contra de los mencionados.

El ciudadano denunciado **Guillermo Romero Rodríguez**, mismo que se encuentra debidamente acreditado ante este consejo municipal por corresponder hoy a un candidato a la presidencia municipal de Mazatlán, con domicilio manifestado en diversas actuaciones ante esta autoridad, teniendo este instituto conocimiento pleno de su domicilio, y de su representante legal y/o jurídico por ser uno de los requisitos legales para el otorgamiento de registro como precandidato, a efecto de ser llamado a juicio y responda por los actos contraventores de la normativa electoral.

En cuanto a los partidos políticos denunciados **PAN, PRI, PRD Y PAS**, se encuentran debidamente acreditados sus domicilios ante esta autoridad electoral, ya que son parte de la coalición electoral "**FUERZA Y CORAZÓN POR SINALOA**", coalición que fue debidamente registrada para participar en el proceso electoral 2023-2024 teniendo como requisito el señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, así como señalar un representante legal para ser notificado de actos relacionados con los mismos.

En cumplimiento a los requisitos establecidos por los artículos 295 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como los artículos 3, 12 y 42 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa; se cumplen con los requisitos siguientes:

I. Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella digital: mi nombre **José Luis Gómez Núñez** ha quedado escrito en el proemio y la firma al final de esta denuncia.

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones y en su caso el correo electrónico: de la misma manera lo he señalado en el proemio de este documento.

III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería: no aplica para este caso, porque mi personalidad ya se encuentra acreditada ante el Consejo Municipal.

IV. Narración expresa y clara de los:

Hechos:

Primero. Que el **C. Guillermo Romero Rodríguez**, con el carácter en su momento de Precandidato a presidente Municipal de Mazatlán, Sinaloa y actual candidato a presidente Municipal, cuenta con una página (cuenta política verificada) en la red social Facebook como se observa en la siguiente liga electrónica: <https://www.facebook.com/Memoromerooficial>.



Segundo. Que el 11 de febrero del 2024, a las 2:10 pm, con el título "Gracias Villa Unión", como se aprecia en la siguiente liga electrónica https://www.facebook.com/Memoromerooficial/posts/pfbid0tYy5cdGgsHFyZwueQV_LfgLKoJfoFv7i6sa1wgSATmMmGSQopeJqKXMR4aoRk5ur8l, en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del **C. Guillermo Romero Rodríguez**, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, es importante señalar que en primer término se debe considerarse propaganda electoral, así como un acto político por cumplir con los requisitos para el efecto, y de lo acontecido el precandidato difundió varias imágenes de niños, niñas y adolescentes, ello para promocionar su campaña política y posicionar su imagen ante los electores, lo cual vulnera el derecho a la intimidad de los infantes que aparecen en su promoción electoral, y se presume puede devenir en un riesgo potencial, en relación con la imagen, honra o reputación presente en su ambiente escolar o social y en su futuro, pues en la edad adulta al decidir sobre su ideología política puede no aprobar con la que fue relacionado desde la infancia, en consecuencia a lo anterior el entonces precandidato **Guillermo Romero Rodríguez**, así como los partidos políticos **PAN, PRI, PAS Y PRD**, no protegen el interés superior del menor pues anteponen la auto determinación arbitraria del candidato y los partidos en el contenido de sus promocionales, publicados en diversos medios, sin cumplir con la normatividad electoral, señalada en el

Lineamiento para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, emitido el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo General, mediante Acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales, en acatamiento a la sentencia SUP-REP60/2016 de la Sala Superior, y SRE-PSC-102/2016 de la Sala Regional Especializada, ambas salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación” (en adelante Lineamientos), identificado con la clave INE/CG20/2017.

En los cuales se señalan las formas de aparición y participación de niñas, niños o adolescentes, siendo de manera directa en propaganda político electoral y mensajes electorales; y directa o incidental en actos políticos, actos de precampaña o campaña. En un acto político, un acto precampaña o campaña, la aparición es incidental, siempre y cuando las niñas, niños o adolescentes sean exhibidos de manera involuntaria y sin el propósito de que formen parte de éstos, por ser situaciones no planeadas o controladas por los sujetos obligados.

Así mismo se observa de la fotografía publicada en fecha 11 de febrero del 2024, a las 2:10 pm, en la red social Facebook del entonces precandidato **Guillermo Romero Rodríguez**, mediante la cual se difundieron varias imágenes de niñas, niños o adolescentes, donde se tienen una participación **DIRECTA, lo anterior** en un acto político electoral, pues de la imagen en un análisis exhaustivo se observa a los menores, manifestando un apoyo directo al hacer gestos de manera corporal, acreditando entonces su participación activa y directa, con objeto de promocionar la campaña política del precandidato, y posicionar su imagen ante los electores, lo cual vulnera el derecho a la intimidad de los infantes así como su imagen, honra o reputación, presente en su ambiente escolar o social y en su futuro, pues a la edad adulta puede NO APROBAR la ideología política con la que fue identificado en su infancia.

La aplicación convencional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala que la aparición de menores de edad en propaganda política o electoral implica un riesgo potencial de ASOCIAR a los menores con una determinada preferencia política o ideológica.

Es de importancia señalar que la protección del interés superior del menor se antepone a la libertad de los partidos de autodeterminar el contenido de sus promocionales.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala que se debe partir de una concepción de niños, niñas y adolescentes como titulares activos de derechos y no solamente como sujetos de protección, bajo el derecho del infante a la preservación de su imagen, considerando que una exposición inadecuada puede fomentar estereotipos o una situación de riesgo para el menor, garantizando con una correcta aplicación de la norma, no ser objeto de injerencias en su vida privada, familia, domicilio, y correspondencia, así como no ser atacado en su honor y reputación.

En todas las decisiones y actuaciones el Estado velará y cumplirá con el principio del Interés superior de la Niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Es decir, los niños, las niñas y adolescentes tienen derecho a que, antes de que se tome cualquier medida que pueda influir sobre estos se evalúen y ponderen las posibles repercusiones, a fin de decidir por la que promueva y proteja sus derechos, considerando que **la propia imagen de los menores de edad, goza de protección, por lo que su exhibición implica un riesgo potencial**, así mismo la propaganda política o electoral es un riesgo potencial porque siempre hay un elemento ideológico o preferencia política.

Concatenado a lo anterior, la resolución número **SRE-PSC-121/2015 tituló USO INDEBIDO DE LA PAUTA POR LA DIFUSIÓN PROPAGANDA ELECTORAL QUE AFECTA AL INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES**, señala lo siguiente;

El promovente alude a la supuesta vulneración a los derechos de los menores que aparecen en el promocional denominado Quien pompo 2, en torno a la utilización de su imagen y la protección de sus datos personales, e invoca y transcribe el contenido del artículo 4, párrafo noveno⁹³, de la Constitución Federal, en el cual se prescribe la obligación del Estado de velar por el interés superior de la niñez y garantizar de manera plena los derechos de los menores.

Al respecto, se tiene en cuenta que el contenido de la propaganda difundida por los partidos políticos se encuentra amparada por la libertad de expresión, en relación a la cual, el Tribunal Electoral ha sostenido en reiteradas ocasiones que debe ser objeto de maximización en el contexto del debate político, a efecto de que se aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática.⁹⁴

No obstante, el ejercicio de dicha libertad fundamental no es absoluto, sino que tiene límites, entre los que se encuentran, los vinculados con la dignidad o la reputación de las personas y los derechos de terceros, acorde con lo dispuesto en los artículos 6º, párrafo primero de la Constitución Federal⁹⁵, así como 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles⁹⁶ y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos⁹⁷.

En tal virtud, la acotación en torno a los aspectos que no deben perturbarse con las expresiones de ideas, se traduce en una obligación de abstenerse de incurrir en tales conductas a efecto de salvaguardar los bienes jurídicos ahí protegidos, como lo es, el pleno respeto a los derechos de terceros, incluyendo, por supuesto los derechos de los menores, cuya protección se encuentra expresamente ordenada en el artículo 4º de nuestra Constitución Federal.

Por tanto, la comisión de alguna conducta que provoca la inobservancia de tal obligación, implica por sí misma un aspecto que atenta contra el propio orden constitucional y, en el caso de la materia electoral, constituye una vulneración específica en cuanto al uso del tiempo pautado por el INE para la difusión de la propaganda electoral, en términos de lo dispuesto en el artículo 247, párrafo 1, de la Ley Electoral.

Así, la Sala Superior⁹⁸ ha señalado que en el derecho administrativo sancionador electoral el "tipo" infractor se constituye con los elementos siguientes:

- (i) Una norma que contenga una obligación o una prohibición a cargo de algún sujeto.
- (ii) Otra norma con una prevención general, relativa a que, si alguien inobserva la ley (ya sea por incumplir alguna obligación o por violar una disposición), se impondrán sanciones.
- (iii) Un catálogo general de sanciones aplicables cuando se inobserve la normativa.

Luego, en el caso de la normativa sobre la cual se afirma su incumplimiento, los elementos que constituyen el tipo administrativo electoral que nos ocupa, se obtienen de los referidos artículos 4 y 6, párrafo primero de la Constitución Federal en torno a que en la difusión de las ideas se atienda a la obligación de respetar los derechos de terceros y, en específico, los derechos de los menores; ello, en relación con el artículo 247, párrafo 1, de la Ley Electoral, referente al mandato específico de que en el uso de las pautas asignadas para la difusión de propaganda electoral se acaten los lineamientos constitucionales.

Lo anterior, se relaciona con lo dispuesto en los diversos 25, párrafo 1, incisos a) y u), de la Ley de Partidos Políticos y 443, párrafo 1, incisos a) y n) de la Ley Electoral, en los que se establece la prevención general concerniente a la inobservancia de las disposiciones establecidas en la normativa electoral.

Y finalmente, el catálogo de sanciones aplicables se encuentra previsto en el artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la Ley Electoral, toda vez que el sujeto denunciado en el presente caso, resulta ser un partido político.

En tales condiciones, el tipo administrativo electoral antes referido se actualiza cuando en el uso de las pautas asignadas por el INE se difundan mensajes que puedan afectar derechos de terceros, y que en el caso, resultan ser menores de edad, a quienes debe garantizarles sus derechos en el marco de su interés superior.

Al respecto, se tiene en cuenta el concepto de "interés superior del niño", el cual ha sido descrito por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al destacar que "implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño".⁽¹¹⁾

Así, el Estado Mexicano, a través de sus instituciones, autoridades y tribunales, está constreñido a tener en consideración primordial el respeto al interés superior del menor, a través de la adopción de las medidas necesarias para asegurar y maximizar la protección y efectividad de los derechos de los niños, acorde con lo establecido en los artículos 3, párrafo 1 y 4,⁽¹²⁾ de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En esa tesitura, acorde con el "Protocolo de actuación de quienes imparten justicia en caso que involucren niñas, niños y adolescentes" emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el interés superior del niño tiene las siguientes implicaciones:

- a) coloca en plena satisfacción de los derechos del niño como parámetro y fin en sí mismo;
- b) define la obligación del Estado respecto del niño, y
- c) orienta decisiones que protegen los derechos del niño.

Por ello, la Primera Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la mera situación de riesgo de los menores es suficiente para que se estime que se afectan los derechos de los niños y, ante ello, deben adoptarse las medidas que resulten más benéficas para la protección de los infantes.⁽¹³⁾

Pues bien, en el caso que nos ocupa, la supuesta vulneración al interés superior del menor se desarrolla a través de la exposición de la imagen de diversos niños que participan en el promocional denunciado, de ahí que, la afectación concreta a analizar se refiera al derecho a la propia imagen de los menores participantes.

Para tal efecto, se parte de la base relativa a que el derecho a la propia imagen de los menores goza de una protección especial, de ahí que para el otorgamiento de la salvaguarda judicial es suficiente que los menores se ubiquen en una situación de riesgo potencial, sin que sea necesario que esté plenamente acreditado el perjuicio ocasionado, pues, en congruencia con el interés superior de los niños, debe operar una modalidad del principio in dubio pro infante, a fin de dar prevalencia al derecho de los menores, por encima del ejercicio de la libertad de expresión, con el objeto de que se garanticen los derechos de los niños, por encima de cualquier duda que se presente en los casos que se analicen.

En similares términos el Tribunal Constitucional de España ha establecido que "en los casos en que se analice la captación y difusión de fotografías de niños en medios de comunicación social[...] es preciso tener en cuenta, que el ordenamiento jurídico establece una protección especial, en aras a proteger el interés superior del menor".⁽¹⁴⁾

Asimismo, señala el mismo Tribunal Constitucional Español que el derecho a la propia imagen "se configura como un derecho de la personalidad, que atribuye a su titular la facultad de disponer de la representación de su aspecto físico que permita su identificación, lo que conlleva tanto el derecho a determinar la información gráfica generada por los rasgos físicos que le hagan reconocible que puede ser captada o tener difusión pública, como el derecho a impedir la obtención, reproducción o publicación de su propia imagen por un tercero no autorizado".⁽¹⁵⁾

Así, en el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño⁽¹⁶⁾, se establece que ningún niño puede ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, ni ataques ilegales a su honra y reputación y, por su parte, en los artículos 76 y 77 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes⁽¹⁷⁾ se contempla igualmente la salvaguarda de los menores ante cualquier riesgo de afectación o manejo directo de su imagen, nombre, datos o referencias que permitan su identificación.

Pues bien, en el caso de la propaganda política o electoral hay siempre presente un elemento ideológico que identifica a la opción política que la presenta, por tanto, en principio, la utilización de menores en la misma implica un riesgo potencial de asociar a tales infantes con una determinada preferencia política e ideológica.

Lo anterior puede devenir en un riesgo potencial en relación con su imagen, honra o reputación presente en su ambiente escolar o social y, por supuesto, en su futuro,

pues al llegar a la vida adulta pueden no aprobar la ideología política con la cual fueron identificados en su infancia.

En ese sentido, acorde con la disposiciones internacionales y nacionales antes descritas, esta Sala Especializada se encuentra obligada a determinar la implementación de todas aquellas medidas que sirvan para evitar que se presenten tales situaciones de riesgo potencial que puedan afectar el interés superior del menor en relación con los promocionales de contenido político electoral.

Así, en una primera actuación, necesaria para garantizar que no se presenta alguna situación de riesgo, es criterio de esta Sala, que la autoridad que analice en algún momento, un promocional político en que participen menores, deberá contar con la plena certeza de que se respetó el elemento relativo al consentimiento parental o, en su caso, de los tutores, en torno a su participación en la propaganda electoral, toda vez de lo dispuesto por los artículos 424 y 425 del Código Civil Federal y sus correlativos de los códigos civiles de la República Mexicana.

Igualmente, tal autoridad deberá garantizar el derecho que tienen los infantes de ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, en términos de lo dispuesto en el artículo 71^º de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Al efecto, y como elementos instrumentales de tales derechos, directamente relacionados con el interés superior del menor, la autoridad que analice la validez de promocionales de contenido político electoral deberá verificar lo siguiente:

i. Consentimiento por escrito debidamente firmado por el padre y la madre o por quien(es) ejerza(n) efectivamente la patria potestad o tutela del menor.

Tal documento se acompañara de copia certificada del acta de nacimiento, o bien, constancia de pérdida de patria potestad o acta de defunción del padre o madre que no firme (para el caso de que se otorgue solo por uno de los padres o tutores).

ii. Manifestación del menor por cuanto hace a su opinión libre y expresa respecto de su participación en el promocional electoral en cuestión. Tal opinión será valorada atendiendo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

iii. El consentimiento parental o, en su caso, de los tutores, y la manifestación de la opinión del menor deberá ser ratificado ante la Oficialía Electoral del INE o fedatario público, a fin de que se haga constar el otorgamiento del mismo en un acto revestido de fe pública. Lo anterior a fin generar certeza y garantizar plenamente el interés superior de los menores.

Asimismo, aunado a contar con la certeza plena en torno al otorgamiento del consentimiento respectivo, acorde con las condiciones antes relatadas, la autoridad que en su momento, analice la validez del promocional político en que participen menores de edad deberá valorar minuciosa y neutralmente su contenido, a fin de que, tomando en cuenta su edad y madurez, se les garantice entre otras cuestiones: pleno respeto a su imagen, honra, nombre o datos personales, evitando en todo caso situaciones de riesgo, que de manera actual o al menos potencial, pudieran correr en su entorno social o educativo por su participación en tal promocional electoral.

Además, tal autoridad, ya sea administrativa o judicial, deberá allegarse de los elementos necesarios para analizar y justificar de manera razonable el motivo y necesidad sustantiva para la participación de los menores en mensajes de propaganda política electoral. Tal cuestión deberá ser ponderada en cada caso, en relación con el interés superior del menor y garantizando objetivamente el pleno respeto a su desarrollo físico, psíquico y emocional.

Ahora bien, en la especie, no se tiene plena certeza en relación a que efectivamente se haya otorgado el consentimiento necesario para la participación de los menores en el promocional denominado Quien pompo 2.

El PAN allegó documentación con la intención de acreditar que efectivamente se recabó la autorización de los padres o tutores, para la participación de los menores en el promocional denunciado, sin embargo, se trata de elementos que no cumplen con las características y formalidades legales razonables para acreditar lo que pretenden

Esto es, en el promocional denunciado se aprecia a simple vista que en el desarrollo del mismo participaron cuando menos veintiún niños y, a pesar de ello,

el PAN solamente allegó nueve "cartas de autorización";⁽¹⁹⁾ aunque la Unidad Técnica le requirió la documentación que acreditara el otorgamiento del consentimiento de parte de quienes ejercen la patria potestad o tutela de quienes aparecen en el promocional.

En tales condiciones, no se cuenta con elementos que sirvan para acreditar el otorgamiento del consentimiento en torno a cuando menos doce menores que participaron en la propaganda denunciada, lo cual, es suficiente para estimar que se vulneró al menos potencialmente, el derecho a la propia imagen de tales menores, al no contar con la autorización relativa a su aparición en el promocional.

Además, el contenido mismo de tales cartas carece de las formalidades necesarias para dotar de plena certeza el acto de autorización que ahí se pretende hacer constar, de hecho, en tres de ellas⁽²⁰⁾ ni siquiera se asienta el nombre del padre o la madre quienes firmaron tal documento.

Por otra parte, en la totalidad de las cartas aportadas, consta solamente la firma de uno de los padres y no de ambos, sin que se haga precisión respecto a la razón de la ausencia del otro padre o madre; ni se acompaña documentación que acredite el parentesco de quien firma en representación de los menores.

En ese sentido, no hay certeza de que quien firmó efectivamente sea el padre o la madre del menor, en ejercicio efectivo de su patria potestad.

Finalmente, no obra en autos documento alguno que evidencie que se tomó en cuenta la opinión libre y expresa del menor.

Así las cosas, esta Sala Especializada determina que no se implementaron las medidas necesarias para garantizar que los padres o tutores de los menores otorgaran su consentimiento para la aparición de los mismos en el promocional electoral denunciado, de ahí que se estime que se vulneró el interés superior del menor y, por ende, se actualiza la infracción que se denuncia, sin que sea necesario analizar el contenido del mismo.

Luego entonces, al haberse acreditado la infracción relativa al uso indebido de la pauta por la difusión de propaganda electoral que vulnera el interés superior del menor, se vincula al Instituto Nacional Electoral para que adopte las medidas necesarias a fin de que no se difunda el promocional denominado Quien pompo 2 (RV00738-15) bajo ningún tipo de pauta, ni federal ni local, atendiendo a que él mismo ha sido determinado ilegal en esta resolución y con la finalidad de evitar que se genere alguna situación que pueda poner en riesgo a los menores que aparecen en el mismo.

Asimismo, cabe indicar que es criterio de esta autoridad judicial que en el caso de los asuntos en que se aborde una posible afectación al interés superior del menor, corresponde a la persona que realiza la exposición de los niños acreditar que efectivamente actuó salvaguardando la integridad y las prerrogativas de los mismos, pues de lo contrario, se desnaturalizaría por completo la obligación de las autoridades de velar por el pleno respeto a los derechos de los niños, en tanto que actuaría una suerte de presunción de legalidad en torno a potenciales situaciones de riesgo para los menores, en vez de que se optara por emprender acciones que sirvan para tener la plena certeza respecto a la protección de los mismos.

En ese sentido, y considerando que el PAN en la contestación al requerimiento de fecha doce de mayo, indicó que no había contratado a empresa alguna para la participación de los menores en el promocional referido, se evidencia que es el único responsable por su participación sin el debido consentimiento parental o, en su caso, de los tutores, en el promocional político electoral pautado por ese mismo instituto político.

De la misma manera la resolución **TESIN-PSE-39-2021**, emitida por el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, declara la existencia de la infracción por incurrir en actos violatorios a los Lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños, y adolescentes en materia político-electoral por parte de Fernando Pucheta Sánchez, candidato a la presidencia municipal de Mazatlán, mismo que señala lo siguiente:

En el perfil de la red social Facebook del denuncia, los días 14 de marzo, 09, 10, 14, 15, 19, y 21 de abril, 06, 07, 17, y 28 de mayo, publica y difunde varias imágenes de niños, niñas y adolescentes, ello para promocionar su campaña política y posicionar su imagen ante los electores,

lo cual a su decir, vulnera el derecho a la intimidad de los infantes que aparece en su promoción electoral, sin cumplir con la normativa electoral ya que divulga el rostro de niños y niñas sin tener el consentimiento de las personas que ejercen sobre ellos la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente en función de la edad y madurez, sin que se advierta que el denunciado haya difuminado el rostro de los menores.

Marco normativo. Interés superior de la niñez.-

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 19, establece que toda niña, niño y adolescente, tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del estado.

Por su parte la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña en su artículo 3, establece que en todas las medidas que los involucren se deberá atender como consideración primordial el interés superior de la niñez.

sobre lo anterior, el comité de los derechos del niño y de la niña de la organización de las naciones unidas, en su observación general 14 del 2013, sostuvo que el concepto del interés superior de la niñez, implica tres vertientes;

Derecho sustantivo: Consistente en el derecho de la niñez a que su interés superior sea valorado y tomado como de fundamental protección cuando diversos intereses estén involucrados, con el objeto de alcanzar una decisión sobre la cuestión a resolver.

Un principio fundamental de interpretación legal: cuando se esté ante una previsión legal abierta, a más de una interpretación, se debe optar por aquella que ofrezca una protección más efectiva al interés superior de la niñez.

una regla procesal: cuando exista una decisión que pudiera afectar a la niñez o adolescencia, específicamente o en general a un grupo identificable o no identificable, en el proceso para la toma de la misma, se debe incluir una evaluación del posible impacto, ya sea negativo o positivo, de la decisión sobre la persona menor de edad involucrada.

Así mismo se ha señalado que el concepto de interés superior de la niñez no es nuevo, sino que ya se consagraba en la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, y en la convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, por lo que se toma como un concepto dinámico que debe evaluarse adecuadamente en cada concepto., cuyo objetivo debe ser el garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos para él o la menor.

Por su parte el artículo cuarto de nuestra Constitución General, en su noveno párrafo establece que el Estado en todas sus decisiones y actuaciones velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando así de manera plena sus derechos.

Así mismo, en la ley general de las niñas, niños y adolescentes, en sus artículos segundo y dieciocho se establece que el interés superior de la niñez, deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucren niñas, niños y adolescentes.

Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en la jurisprudencia de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO", que, para la determinación en concreto del interés superior de la niñez, se debe atender a sus deseos, sentimientos, y opiniones, siempre que sean compatibles con sus necesidades vitales.

Aparición de niñas, niños, y adolescentes en la propaganda electoral.

La propaganda electoral difundida por los partidos políticos, se encuentra amparada por la libertad de expresión, que se consagra en el artículo sexto Constitucional, sin embargo, dicha libertad no es absoluta pues encuentra sus límites en la dignidad, y reputación de las personas y los

derechos de las mismas, dentro de las cuales se encuentran las de los niños, niñas y adolescentes.

Por lo expuesto el Instituto Nacional Electoral emitió los Lineamientos para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en materia político-electoral, cuyo objetivo es establecer las directrices para la protección de los citados que aparezcan en la propaganda político-electoral, mensajes electorales y en actos políticos, actos de precampaña o campaña de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas independientes, así como de los mensajes transmitidos por las autoridades electorales, federales y locales, o las personas físicas o morales que se encuentren vinculadas directamente a uno de los sujetos mencionado, atendiendo a su calidad o naturaleza jurídica, por cualquier medio de comunicación y difusión, incluida las redes sociales o cualquier plataforma digital, sea esta transmitida en vivo o videograbada, debiendo ajustar los sujetos antes mencionados sus actos de propaganda político-electoral, o mensajes a través de radio o televisión, toda vez que:

- a. pueden aparecer de manera directa e incidental en la propaganda.
- b. Cuando se utilice la imagen, voz o cualquier otro dato que les haga identificable, se deberá proporcionar la máxima información sobre sus derechos, opiniones y riesgos respecto de su aparición en la propaganda político electoral.
- c. Si la aparición es incidental y ante la falta de consentimientos, se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, voz, o cualquier otro dato que le haga identificable, garantizando la máxima protección de su dignidad o derechos.

Aunado a lo anterior, la resolución número **SUP-JE-144/2021**, Sentencia que confirma la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, en el procedimiento especial sancionador, que declaró existente la violación a los requisitos sobre la aparición de menores en propaganda electoral, atribuida a Fernando Alejandro Larrazábal Bretón y al Partido Acción Nacional, este último promovente del juicio electoral. señala lo siguiente;

La imagen de una niña, niño o adolescente en fuentes de acceso público es insuficiente para poderla incluir en propaganda electoral a) Marco jurídico La imagen es la reproducción identificable de los rasgos físicos de una persona sobre cualquier soporte material. 9 El derecho a la propia imagen constituye uno de los derechos inherentes de la persona, que le permite disponer de su apariencia; considerado por la Suprema Corte como un derecho de defensa y garantía esencial para la condición humana, porque puede reclamarse tanto en defensa de la intimidad violada o amenazada como exigir del Estado que prevenga la existencia de eventuales intromisiones que lo lesione. 10 Si bien no es un derecho absoluto tendría que justificarse su intromisión por un interés público, o bien, cuando se cuente con el consentimiento u autorización de la persona. 11 Estos límites sobre la captación, reproducción o publicación de la imagen de una persona tratándose de menores de edad exige una protección reforzada debido al interés superior de la niñez. El interés superior de la niñez es un principio constitucional y convencional de interpretación que ante la toma de una decisión que involucre niñas, niños y adolescentes se debe evaluar y ponderar las 9 Véanse artículos 16 y 17 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal. 10 Véase tesis P. LXVII/2009, emitida por el Pleno, de rubro: "DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA." 11 Por ejemplo, la Ley Federal del Derecho de Autor establece como infracción en materia de comercio el utilizar una imagen de una persona sin su autorización o la de sus causahabientes (artículo 231, f.II). SUP-JE-144/2021 10 posibles repercusiones en sus derechos y asegurar una protección plena. 12 Dicho principio exige la prevalencia de los derechos de la infancia frente a cualquier otro interés, por lo que ante un conflicto se debe ponderar por encima de cualquier otro ese derecho infantil. 13 Así, la Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 3 que el niño (a) tiene derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten. 14 De modo que, cualquier medida o decisión pública que pueda afectarlos (a) requiere adoptar medidas reforzadas o gravadas, para protegerlos con una mayor intensidad. 15 12 Véase artículo 4º de la Constitución, en su párrafo noveno, que dice: "En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez." Asimismo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece en su artículo 2 y 3 párrafos: "El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales." 13 Acción de inconstitucionalidad 2/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pfo. 129: "En suma, el ejercicio de los derechos fundamentales de las niñas y los niños se encuentran por encima de cualquier otro interés, incluyendo el de sus padres, pues, al ser la infancia concebida ya como sujeto de derechos, los niños y las niñas pueden ejercerlos en todo momento y las autoridades están no sólo obligadas a garantizar ese ejercicio, sino a velar porque el mismo se cumpla. Cuando se anteponen los derechos de la infancia con los de sus padres, la autoridad tiene obligación de ponderar por encima de cualquier otro, ese derecho infantil." 14 Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 15 Tesis aislada 1a. LXXXIII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL." SUP-JE-144/2021 11 Por eso, las autoridades del Estado deben garantizar y sancionar aquellas intromisiones arbitrarias e ilegales en la intimidad de las niñas, niños y adolescentes, que atenten contra su honra, imagen y reputación. Así, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes considera una violación a su intimidad, cualquier manejo directo de su imagen en los medios de comunicación con una concesión o medios impresos (art. 77). Asimismo, dicha ley considera una vulneración a la intimidad de las y los menores, cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación, bien porque menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o los ponga en riesgo. Ahora bien, el INE emitió los Lineamientos para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes que aparezcan en la propaganda políticoelectoral. Los sujetos obligados a esas directrices son los partidos políticos, coaliciones, candidaturas, autoridades y personas físicas o morales que se encuentren vinculadas. Los Lineamientos obligan a que en cualquier acto, mensaje o medio de difusión de propaganda político-electoral en el que aparezcan niñas, niños o adolescentes ya sea de manera directa o incidental, debe existir el consentimiento de quien o quienes ejerzan la patria potestad o el tutor o, en su caso, la autoridad debe suplirlos. Al igual deben contar con las manifestaciones de los menores sobre su opinión libre e informada respecto a la propaganda en la que participen. En caso de que no se tenga esa documentación, independientemente si la aparición fue directa o incidental se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que haga SUP-JE-144/2021 12 identificable a los niños, niñas o adolescentes, a fin de salvaguardar su imagen y, por ende, su derecho a la intimidad. 16 También, este órgano jurisdiccional ha señalado que los Lineamientos son aplicables en las imágenes que difundan las candidaturas en redes sociales. 17 b. Valoración de la Sala Superior El actor se duele de que la responsable omitió pronunciarse respecto a que en el motor de búsqueda "https://tineye.com" se podía observar que al menos hay otras ciento un publicaciones que utilizan la misma imagen genérica de la menor que apareció en las publicaciones del candidato denunciado y que no se podía presumir que el material hubiera sido producido en México o que correspondiera al presente año. Señaló que la plataforma estaba sujeta a las leyes de Israel con uso lícito de la propiedad intelectual. Al respecto, el Tribunal local determinó que los Lineamientos del INE eran aplicables sin importar que la imagen hubiera sido generada en otro país o tuviera un uso comercial, por lo que debían observarse las pautas de consentimiento e información ahí establecidas. Esta Sala Superior considera apegada a Derecho la determinación de la responsable porque el partido político parte de la premisa inexacta de que si las imágenes de menores se alojan en algún sitio público es innecesario demostrar una autorización para su uso en propaganda electoral. Jurisprudencia 20/2019 de rubro: "PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN." Véase tesis XXIX/2019, de rubro: "MENORES DE EDAD. LOS LINEAMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA SU PROTECCIÓN, SON APLICABLES A LAS IMÁGENES QUE DE ELLOS DIFUNDAN LAS CANDIDATURAS EN SUS REDES SOCIALES EN EL CONTEXTO DE ACTOS PROSELITISTAS." SUP-JE-144/2021 La premisa es incorrecta porque: El derecho a la imagen es uno de los derechos esenciales de la persona, que tratándose de menores de edad requiere de un escrutinio más

estricto sobre su difusión, reproducción o captura, derivado del interés superior de la niñez y de que son un grupo vulnerable. Por eso, en materia electoral se necesita recabar el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela y la opinión informada de la o el menor, sin que se prevean excepciones al respecto. No puede extenderse un permiso o derecho de autor para disponer de una imagen de un infante o adolescente para usos electorales. En efecto, una autorización o consentimiento de una imagen para uso comercial o para aparecer en cierta página o sitio web no puede considerarse una cláusula abierta y usarse para fines no expresamente señalados. Pues la forma en cómo y dónde se muestran a los demás es un derecho esencial de toda persona derivado de su dignidad humana, que impide una difusión irrestricta de ésta. Más aún si la imagen o fotografía corresponde a menores de edad, el escrutinio es aún más estricto, porque no se puede perder de vista que ellas y ellos precisan de la representación de un adulto y son un grupo vulnerable que requieren una protección reforzada ante una posible afectación a su desarrollo. Por esa razón, en materia electoral rigen los Lineamientos emitidos por el INE que fijan los requerimientos para que puedan aparecer niñas, niños y adolescentes en la propaganda electoral. SUP-JE-144/2021. Los Lineamientos no establecen alguna excepción en su aplicación, incluso son exigibles en aquellos casos de apariciones incidentales de menores en propaganda electoral. Por lo que también en esos casos, los sujetos obligados deben recabar el consentimiento de la madre, padre o tutor, o en su caso, de la autoridad que los supla y de la opinión informada de la o el menor, de lo contrario tendrán que difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, voz o cualquier otro dato que los haga identificables. La circunstancia de que no existan hipótesis de excepción en las que sea innecesario el consentimiento es precisamente porque se trata de menores de edad, a los que se les debe garantizar la máxima protección de la dignidad y sus derechos. Si un partido político no confeccionó o adquirió la imagen no lo releva de la obligación constitucional y convencional de salvaguardar el interés superior de cualquier niña, niño o adolescente que aparezca en su propaganda política electoral. Lo anterior, debido a que los partidos políticos y las personas candidatas son responsables de proteger los derechos de la infancia desde el momento en que deciden insertar tales imágenes en su propaganda. Sin que sea suficiente exhibir un permiso del uso de la imagen porque en todo caso habría que revisar los términos y condiciones en que fue emitido, es decir, que contenga la autorización de quienes representan al menor y, en su caso, un consentimiento informado del menor, pero, sobre todo, que permita su utilización para fines político electorales. De ahí que, deba desestimarse el planteamiento de que por tratarse de una fotografía extraída de una galería digital pública, eran inexigibles los Lineamientos porque esa razón es insuficiente para concluir que la SUP-JE-144/2021 15 imagen, el honor y la intimidad de la menor en cuestión efectivamente se encuentre protegido en ese sitio electrónico. 2. El partido no demostró tener una autorización para el uso electoral de la imagen de la menor. Era deber del partido demostrar que efectivamente tuviera una autorización electoral para poder incluir la imagen de la menor en las publicaciones del candidato. Sin embargo, el actor se limita a sostener que deben existir excepciones en la aplicación de los Lineamientos cuando la persona no está expuesta a riesgos que afecten su integridad personal. De modo que se trata de afirmaciones genéricas y subjetivas sin sustento probatorio que permita corroborar la licitud y autorización electoral para divulgar la fotografía de la menor, pues el hecho de que ésta se encuentre alojada en un buscador de Internet no equivale a demostrar que sea lícita su aparición. Máxime si se considera que la información, documentos, imágenes que circulan en la Red no necesariamente son lícitos, dado que no hay un control previo sobre el contenido de las plataformas electrónicas. Incluso tratándose de niñas, niños y adolescentes hay muchos riesgos de que sus fotografías, imágenes, videos circulen sin autorización alguna y debido a que no todos pueden reclamar por sí mismos la violación a sus derechos puedan impedir su divulgación. En esos casos se deben adoptar medidas mucho más estrictas sobre imágenes de menores alojadas en redes sociales o en la web. Por tanto, carece de razón el partido al sostener que era suficiente con demostrar que la imagen aparece en un buscador de internet y que ha sido publicada en infinidad de páginas electrónicas, dado que no SUP-JE-144/2021 16 demuestra que su difusión o divulgación sea lícita y, menos, para fines electorales. La imagen denunciada correspondía a una menor con una discapacidad lo que exige una tutela reforzada. En las constancias de autos se aprecia que la menor incluida en las publicaciones del candidato tiene síndrome de Down, que es una alteración genética que puede llevar algún grado de discapacidad intelectual. En ese sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad garantiza que todos los niños y niñas gocen plenamente de los derechos humanos en igualdad de condiciones con los demás niños y que puedan expresar su opinión libremente sobre las cuestiones que les afecten (art.7). También, se debe garantizar su derecho a expresar su opinión y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad. Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en su artículo 56 que tienen derecho a que en todo momento a que se les facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que les permitan obtener información

de forma comprensible. Por ello, al estar involucrada una niña con una discapacidad exige que se hubieran respetado los principios de no discriminación, de una protección reforzada y atender a la especial vulnerabilidad en que se encuentran. Garantizando a la niña su derecho a opinar y a recibir información de manera accesible, para poder divulgar su fotografía. información extraída de: <https://www.un.org/es/observances/down-syndrome-day> SUP-JE-144/2021 17 Sin embargo, dado que nada de eso obra en el expediente de forma alguna puede concluirse que todas estas condiciones ocurrieron para la difusión de su imagen. Por lo que, esta Sala Superior concluye que fue correcta la determinación de la responsable porque el candidato vulneró el interés superior de la niñez lo que actualizó la infracción y, en el caso del partido político hoy actor, le generó una responsabilidad indirecta.

Es importante mencionar la Jurisprudencia **20/2019** en la que se determina la obligación que CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN; como sea;

PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º y 4º, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 y 14 de los Lineamientos Generales para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de Propaganda y Mensajes Electorales establecidos por el Instituto Nacional Electoral; y en la Jurisprudencia de la Sala Superior 5/2017, de rubro PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CUMPLIRSE CUANDO SE DIFUNDAN IMÁGENES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, se advierte que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. En ese sentido, cuando en la propaganda político-electoral, independientemente si es de manera directa o incidental, aparezcan menores de dieciocho años de edad, el partido político deberá recabar por escrito el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o tutela, y en caso de que no cuente con el mismo, deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que haga identificable a los niños, niñas o adolescentes, a fin de salvaguardar su imagen y, por ende, su derecho a la intimidad.

Concatenado a lo anterior, la resolución número **SRE-PSC-039/2017**, Sentencia que resuelve el procedimiento especial sancionador UT/SCG/PE/PRI/CG/39/2017, en la que se determina la existencia del uso indebido de la pauta por parte del Partido Unidad Democrática por Coahuila, de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila; así como la vulneración al interés superior del menor por parte de la citada Coalición, como sea;

Por cuestión de método, en primer lugar, se estudiará, de manera conjunta, el supuesto uso indebido de la pauta por parte de la Coalición y tres de sus cuatro partidos, por supuestamente haber promocionado a la Coalición durante la precampaña y, si la Coalición, indebidamente, difundió promocionales relacionados con el proceso de selección interna del PAN y uno de sus precandidatos, a través de su tiempo en radio y televisión; posteriormente, se abordará lo correspondiente a la supuesta promoción indebida de la Coalición por parte del Partido Unión Democrática de Coahuila; y por último, se examinará lo SRE-PSC-039/2017 18 relacionado con el uso de imágenes de menores de edad en uno de los promocionales de la Coalición. 3.1 Marco Normativo respecto del uso indebido de la pauta. La Constitución Federal en su artículo 41, Base III, Apartados A y B, así como la Ley Electoral en los diversos 159, párrafos 1 y 2, 160, párrafos 1 y 2 y 226, párrafo 5, han establecido que los partidos políticos nacionales tienen derecho al uso permanente de los medios de comunicación social. Asimismo, que el INE es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los fines propios, a los de otras autoridades electorales, así como a los partidos políticos; y, que será también este quien garantizará a los partidos políticos el uso de sus prerrogativas constitucionales en radio y televisión. Además, establecen que los precandidatos tienen prohibido contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempo en cualquier modalidad

de radio y televisión. Por otro lado, el artículo 226 de la referida Ley Electoral, en su párrafo cuarto, señala que los partidos políticos harán uso del tiempo en radio y televisión que conforme a Derecho les corresponda, para la difusión de sus procedimientos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular. Asimismo, que los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, accederán a radio y televisión en el tiempo que corresponda a los institutos políticos. En este mismo sentido, el artículo 168 de la Ley Electoral, dispone que cada partido político podrá decidir libremente la asignación, por tipo de precampaña, de los mensajes que le correspondan, incluyendo su uso para precampañas locales en las entidades federativas. SRE-PSC-039/2017 19 A su vez, el Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral del INE en su artículo 5, párrafo primero, fracción III, inciso i), dispone que por materiales se entiende a los promocionales o mensajes realizados por los partidos políticos, coaliciones o candidatos/as independientes y autoridades electorales, fijados o reproducidos en los medios de almacenamiento y formatos que determine el INE, para su transmisión en términos de lo que dispone la Constitución Federal y la Ley Electoral. Mientras que, en el inciso m), establece que la pauta es el documento técnico en el que se distribuye el tiempo, convertido a número de mensajes, que corresponde a los partidos políticos, coaliciones y candidatos/as independientes, así como a las autoridades electorales en un periodo determinado, precisando la estación de radio o canal de televisión, la hora o rango en que debe transmitirse cada mensaje, y el partido político, coalición, candidato/a independiente o autoridad electoral al que corresponde. El artículo 7 párrafos 1, 3, 4 y 9 del citado Reglamento establece que los partidos políticos y sus candidatos y precandidatos a cargos de elección popular, accederán a mensajes de radio y la televisión, a través del tiempo que la Constitución Federal otorga como prerrogativa en la forma y términos establecidos legalmente; asimismo, que el INE es la única autoridad competente para ordenar la transmisión de propaganda política o electoral en radio o televisión, para el cumplimiento de sus propios fines y de los partidos políticos; y, que la propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas electorales difundan por radio y televisión los partidos políticos, se ajustarán a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6 y el artículo 41, Base III, Apartado A, de la Constitución Federal; así como el artículo 25, fracción I, incisos a) y u), de la Ley de Partidos Políticos y 247, párrafo 1, de la Ley Electoral. SRE-PSC-039/2017 20 El artículo 13, párrafo cuarto, dispone que, si por cualquier causa un partido político no realiza actos de precampaña electoral, los tiempos a que tengan derecho serán utilizados para la difusión de mensajes del partido político de que se trate, en los términos que establezca la ley. Asimismo, el artículo 37, párrafo 1, establece que, en ejercicio de su libertad de expresión, los partidos políticos determinarán el contenido de sus promocionales, por lo que no podrán estar sujetos a censura previa por parte del INE ni de autoridad alguna, sino, en su caso, a ulteriores responsabilidades. Ahora bien, no pasa desapercibido que a nivel local, el artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Coahuila, establece que los partidos políticos tendrán derecho al uso permanente de los medios de comunicación social y que el acceso a radio y televisión durante los procesos electorales se realizará en los términos establecidos en los ordenamientos antes referidos. La Ley General de Partidos Políticos establece que los partidos políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones para las elecciones de Gobernador, diputados a las legislaturas locales de mayoría relativa y ayuntamientos, de conformidad con el artículo 87, numeral 2. De conformidad con el artículo 88, numerales 1, 2, y 3, de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos podrán formar coaliciones totales, parciales y flexibles. Se entiende como coalición total, aquella en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso federal o local, a la totalidad de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral. Tratándose de coaliciones, se estará a lo previsto en los artículos 91, numerales 3, 4 y 5 de la Ley General de Partidos Políticos; 167, numeral 2 de la Ley General de SRE-PSC-039/2017 21 Instituciones y Procedimientos Electorales y 16 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, que establecen que a la coalición total que constituyan los partidos políticos les será otorgada la prerrogativa de acceso a radio y televisión en un treinta por ciento que corresponde distribuir en forma igualitaria, como si se tratara de un solo partido, incluso para efectos de la optimización de promocionales sobrantes. En cambio, para el setenta por ciento restante, deben ser tratados en forma separada. En el supuesto de coaliciones totales, el convenio de coalición establecerá la distribución de dicho tiempo entre los candidatos de la coalición. Asimismo, es aplicable a las coaliciones electorales, cualquiera que sea su ámbito territorial y tipo de elección, en todo tiempo y circunstancia, lo previsto por el artículo 91, numeral 4, de la Ley General de Partidos Políticos. En todo caso los mensajes en radio y televisión que correspondan a candidatos de coalición deberán identificar esa calidad y el partido responsable del mensaje. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el artículo 227 de la Ley General, se entiende por precampaña el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido; y por actos de precampaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los precandidatos a una

candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado a un cargo de elección popular. El párrafo 3 del citado precepto legal, así como los párrafos 1 y 3 del artículo 211 de dicha ley, estipulan que la propaganda de precampaña es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, y expresiones que durante el periodo establecido por la ley y el que señale la convocatoria respectiva, difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a SRE-PSC-039/2017 22 conocer sus propuestas, debiendo señalarse de manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de quien es promovido.

3.2. Casos concretos. Como se ha quedado acreditado con antelación, no se tiene constancia de que los Partidos Acción Nacional y Encuentro Social hubieran difundido alguno de los spots denunciados, por lo que atendiendo al principio indubio pro reo, debe absolverse a dichos partidos de las conductas que se les imputa; y por tanto, únicamente se analizará la difusión de los promocionales pautados por el Partido Unidad Democrática por Coahuila y de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila. Sirve como sustento a lo anterior, lo determinado por la Sala Superior en la jurisprudencia intitulada "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES"⁷ en donde determinó que cuando no se cuente con una prueba que acredite la responsabilidad de los denunciados, lo procedente es absolverlos.

3.2.1 Uso indebido de la pauta por parte de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, por la difusión de spots en precampaña. Como se ha dicho, el primer punto a dilucidar es si existió un uso indebido de la pauta, ya que, en concepto del promovente, no está permitido que las Coaliciones, por sí mismas, puedan difundir spots en radio y televisión, durante la etapa de precampañas, pues, en su consideración, dicha prerrogativa es de uso exclusivo de los partidos políticos que contienden en el proceso electoral correspondiente.

7 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60. SRE-PSC-039/2017 23 En ese sentido, el promovente refiere que con la difusión de spots de la Coalición se está realizando una sobreexposición de dicho consorcio político, ya que las coaliciones únicamente se pueden posicionar, a sí mismas, durante la etapa de campañas. Dicho lo anterior, esta Sala Especializada considera que es inexistente esta falta atribuida a la Coalición, ya que el actor parte de una premisa errónea; a saber: "las coaliciones no tienen acceso a radio y televisión durante las precampañas". En efecto, de la lectura integral de la denuncia, se advierte que el actor encamina sus argumentos a evidenciar que sólo los partidos políticos tienen acceso a radio y televisión durante la etapa de precampañas, mientras que las Coaliciones tendrán acceso a partir del inicio de las campañas. Sin embargo, de conformidad con lo previsto en los artículos 87, 88, párrafo 2, 91, párrafos 3, 4 y 5 167, párrafo 2 de la Ley de Partidos; 167, párrafo 2 de la Ley General, en relación con los numerales 13, párrafo 4 y 16 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, los partidos políticos podrán formar coaliciones para contender de manera conjunta en alguna elección, siendo que una de esas modalidades puede ser la de Coalición total, como lo es en el caso que nos ocupa. Además, se advierte que las Coaliciones podrán acceder a tiempo aire en radio y televisión, ya sea en el periodo de precampaña o campaña. Para ello, en caso de Coalición total, se le considerará como si fuera un solo partido político; y por tanto, tendrá acceso al 30% del tiempo en radio y televisión que se reparte de manera igualitaria entre los partidos. No obstante, no tendrá acceso al 70% del tiempo que se distribuye de manera proporcional entre dichos institutos políticos, ya que en este caso, los partidos coaligados accederán a dicha prerrogativa, de manera individual y separada, SRE-PSC-039/2017 24 atendiendo a la votación que cada uno hubiera obtenido en la elección del congreso local inmediata anterior. Bajo ese contexto, ha quedado demostrado que el Comité de Radio y Televisión del INE concedió el uso de la prerrogativa constitucional a la Coalición, situación que fue confirmada por la Sala Superior al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP74/2017, en donde estableció que en el artículo 167 de la Ley General no se hacía ninguna distinción en cuanto a la etapa del proceso electoral en la que se debía repartir el tiempo en radio y televisión destinado a las coaliciones; y por tanto, la regla de distribución que en dicho artículo se contemplaba debía ser aplicada tanto a precampañas como campañas. De ahí que no asista la razón al promovente cuando refiere que la Coalición usó indebidamente la pauta en radio y televisión al difundir los spots: "Registro Coahuila Coalición", en su versión televisiva con número de folio RV00097-17 y en su versión de radio con el registro RA00106-17.

3.2.2 Uso indebido de la pauta por parte de la Coalición, al difundir spots en donde difundió actos relacionados con el proceso de selección interna del PAN. En este punto, el promovente refiere que el hecho de que la Coalición difundiera promocionales en los que se aludía al proceso de selección interna del PAN y a uno de sus precandidatos, es contrario a Derecho, puesto que el PAN únicamente podía haber destinado su pautado para promocionar cualquier acto relacionado con su elección interna. SRE-PSC-039/2017 25 En ese sentido, el promovente refiere que el hecho de que se utilizara el emblema de la Coalición, puede inducir al error de que lo que se promociona es un precandidato de dicho consorcio político; y no así, del PAN

en lo individual. Al respecto, como se ha dicho con antelación, las Coaliciones gozan de la prerrogativa de acceso a radio y televisión para el periodo de precampaña, siendo que en el caso que nos ocupa, la autoridad administrativa electoral consideró que la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila era una coalición total; y por tanto, para efectos de la distribución de tiempo aire se le debía considerar como un solo partido y, en consecuencia, sólo tenía acceso a la distribución del 30% que se reparte de manera igualitaria entre los partidos políticos. Por lo que al tener acceso en radio y televisión, dicha Coalición tenía la posibilidad de difundir propaganda genérica o de precampaña, con su propio tiempo aire. Cabe mencionar que similar criterio utilizó la Sala Superior al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP-74/2017, en donde determinó que: "una vez asignado el tiempo en radio y televisión que le corresponde a la coalición [...] para las etapas electorales, corresponde a dichos institutos políticos, en ejercicio de su libre autodeterminación, a través de su convenio de coalición, establecer la forma y los términos en que se hará uso del tiempo que le fue asignado, mismo que puede ser usado no sólo para la difusión de propaganda de precampañas, sino también para la difusión de propaganda genérica". Así, resulta evidente que las coaliciones están facultadas para difundir spots en radio y televisión, ya sea con contenido genérico o con propaganda electoral atinente a una precampaña; sin embargo, dicha prerrogativa no es absoluta ni ilimitada, sino que se debe ajustar a los parámetros que rigen la difusión de propaganda en la época de precampaña. SRE-PSC-039/2017 26 Al respecto, la Sala Superior al emitir la jurisprudencia intitulada: "RADIO Y TELEVISIÓN. LA UTILIZACIÓN DE LOS TIEMPOS ASIGNADOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PARA PROMOCIONAR LA IMAGEN DE CANDIDATOS POSTULADOS POR OTROS INSTITUTOS POLÍTICOS O COALICIONES, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD"⁸ determinó que los partidos políticos no deben utilizar los espacios en radio y televisión que les corresponden, para promocionar la imagen de candidatos postulados o registrados por otros institutos políticos o coaliciones, pues puede generarse una exposición desigual y, en consecuencia, un mayor posicionamiento a alguna de las opciones políticas en detrimento de las restantes, contraviniendo el principio de equidad en la contienda electoral. En ese contexto, esta Sala Especializada considera que los partidos políticos y coaliciones, ya sea durante las precampañas y campañas, únicamente podrán hacer uso de los tiempos o pautas en radio y televisión para difundir su propia propaganda política o electoral, sin que exista posibilidad alguna de que algún precandidato o candidato de un diverso partido político o coalición pueda participar o beneficiarse de dicha prerrogativa, dado que ello afectaría el principio de equidad en el proceso de selección interna de un partido, puesto que se estaría dotando de mayores beneficios a una sola oferta política. Precisado lo anterior, debe recordarse que en el caso, se tiene acreditado que durante el periodo de precampañas del proceso electoral del estado de Coahuila, la Coalición Alianza, como parte de su prerrogativa en radio y televisión, difundió los spots: "Registro Coahuila Coalición" con folio RV00097-17 [versión televisión] y RA00106-17 [versión radio], cuyo contenido se muestra a continuación: RV00097-17 8 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, SRE-PSC-039/2017 29 En tales circunstancias, a juicio de esta Sala Especializada, dichos promocionales deben ser considerados como spots de precampaña, puesto que el mensaje que se emitió se encontraba vinculado con el proceso de selección interna del PAN, uno de los precandidatos que contendió y la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila. En ese contexto, esta Sala Especializada considera que es existente la infracción atribuida a la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, relacionada con el uso indebido de la pauta que le fue asignada en el periodo de precampaña de la elección de Gobernador de Coahuila. Ello, habida cuenta que ha sido acreditado que los spots controvertidos son de carácter electoral, y que están encaminados a difundir actos relacionados con el proceso de selección interna que, de manera individual, realizó uno de los partidos coaligados, sin que mediara una justificación para ello, puesto que en el convenio no se estableció que la Coalición participaría o coadyuvaría en la elección del Candidato a Gobernador que realizaría el PAN. Lo anterior se considera así, ya que con independencia de que durante las precampañas, el PAN formó parte de la Coalición, lo cierto es que de conformidad con el convenio que integró el consorcio político, ningún otro partido coaligado o la Coalición misma, estaban en posibilidades de realizar actos de promoción de precandidatos o de etapas del proceso de selección interna del PAN, puesto que en el convenio únicamente se refirió que el candidato emanaría de la selección de candidatos del PAN, atendiendo a la determinación que adoptara la Comisión Permanente del Consejo Nacional de dicho partido. En esa lógica, la difusión de promocionales vinculados a la precandidatura de José Guillermo Anaya Llamas debió ser realizada exclusivamente por el PAN con el tiempo que, de manera individual, le correspondía en el periodo de precampaña; es decir, que los spots alusivos a dicho precandidato debieron estar comprendidos entre el tiempo que le fue asignado al PAN como parte del 70% del tiempo aire que SRE-PSC-039/2017 30 se distribuyó de manera proporcional a cada uno de los partidos en lo individual y del cual no le fue asignado a la Coalición denunciada. Lo anterior, ya que la Coalición denunciada, por sí misma, no llevó a cabo un proceso de selección

interna, sino que dicha situación fue realizada de manera particular por uno de sus partidos coaligados; y por tanto, la Coalición no estaba facultada para promocionar actos de precampaña que pudieran causar una afectación a la equidad del proceso de selección interna del PAN, al otorgar mayor tiempo del que debía de tener alguno de los sujetos que participarían en dicho proceso electivo. En efecto, al no realizar un proceso de selección interna, la Coalición únicamente debió constreñirse a difundir propaganda genérica sobre temas de interés general; y no así, la exhibición de promocionales con propaganda de precampaña; cuestión diversa hubiera sido que en el convenio de coalición se hubiera establecido que para la elección de candidato a Gobernador, dicho consorcio político realizaría un proceso de selección en el cual se incluyeran, entre otros, a los precandidatos de los partidos coaligados; o bien, que la Coalición participaría en el proceso interno que implementara individualmente alguno de sus coaligados, pues en estos supuestos se justificaría que el tiempo en radio y televisión de la Coalición fuera distribuido y usado por los diferentes precandidatos que participaran en dicha elección interna. De ahí que la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila utilizó indebidamente su pauta en radio y televisión que le fue asignada durante el periodo de precampaña del proceso electoral que se desarrolla en el estado de Coahuila; y por tanto, contravino lo previsto en 41 párrafo segundo base III apartado A, de la Constitución; 159; 211, 227, párrafo 3, y 443, párrafo 1 incisos a) y n), de la Ley General; 25 párrafo 1 incisos a) y u), de la Ley General de Partidos Políticos; así como 13, párrafos 1 y 3 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. SRE-PSC-039/2017 31 3.2.3 Uso indebido de la pauta por el Partido Unidad Democrática de Coahuila, por la promoción de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila. En este punto, el promovente aduce que dicho partido usó indebidamente la pauta que le fue asignada en el periodo de precampaña de la elección que actualmente se desarrolla en el estado de Coahuila, al haber promocionado a la Coalición por medio de la difusión de los spots: "Coahuila libérate" con folio RV001918 [versión televisión] y RA002366 [versión radio]; "Lenin Precampaña" con folio RV00037-17 [versión televisión] y RA00039-17 [versión radio]; y "Video Alianza" con folio RV00100-17 [versión televisión] y RA00114-17 [versión radio]. En ese sentido, el promovente refiere que es ilegal que se promocioe el logotipo de una coalición en la etapa de precampaña, puesto que se le está posicionando en un momento que no es permitido; más aún, cuando, en su concepto, en dichos promocionales se advierten propuestas de gobierno y campaña, dirigidas a la ciudadanía en lo general. Al respecto, como ya se ha señalado, los partidos políticos gozan de la prerrogativa constitucional de acceso a la radio y televisión, ya sea durante o fuera de algún proceso electoral, puesto que su acceso es de manera permanente atendiendo a las modalidades que establece la propia Constitución y las normas electorales. Bajo ese contexto, debe decirse que en el caso particular, se tiene constancia de que el Partido Unidad Democrática de Coahuila no realizó un proceso de selección interna para elegir candidato a Gobernador de Coahuila, puesto que atendiendo al convenio de coalición que firmó, el candidato a dicho puesto sería el que resultara electo en el proceso interno del PAN. SRE-PSC-039/2017 corrupción se te hizo normal. Y es que mientras ellos se enriquecen, tú te vuelves más pobre. Cada vez trabajas más y te pagan menos. ¿Qué pasa Coahuila? Alégrate, decídette, tú tienes la solución. Ahora les toca sufrir a ellos. Que paguen por lo que han hecho. Es ahora o nunca. Voz de un hombre: Unidad Democrática de Coahuila. UDC. Voz de un hombre: Coahuila. Libérate. Como puede advertirse, en estos spots no se hace referencia alguna a la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, sino que únicamente se utiliza el nombre y logo del Partido Unidad Democrática de Coahuila; además, contrario a lo afirmado por el actor, no se aprecia alguna propuesta de campaña de dicho partido político ni alguna referencia a un plan de gobierno. Por el contrario, lo único que se advierte es el posicionamiento de dicho partido frente al supuesto problema de corrupción y pobreza que existe en el estado de Coahuila; usando para ello preguntas retóricas con las que pretende reafirmar su idea, tales y como lo son: "¿Por qué la corrupción se te hizo tan normal?" y "¿Qué pasa Coahuila?". En esas circunstancias, dichos promocionales deben ser considerados como genéricos, pues únicamente pretenden mostrar el posicionamiento del partido en torno a temas de interés social, sin que se aprecie que se haga algún posicionamiento de alguna fuerza política que pudiera influir en la contienda electoral. Por lo que es factible calificar como dentro de la legalidad estos promocionales. Ahora por lo que hace a los promocionales: Promocional Video Alianza con folio RV00100-17 [versión televisión] Imágenes representativas Voz de un hombre: Para llegar a una meta es necesario construir un camino. Para una sola persona o grupo, la tarea no es fácil. Pero ¿qué pasa cuando son miles, millones de Promocional Video Alianza con folio RV0010. Promocional Lenin precampaña con folio RA00039-17 [versión radio] Voz de un hombre: No podemos fallarle a Coahuila viendo como sufre nuestra gente. Basta ya de divisiones. Basta ya de egoísmo. Es tiempo de una Alianza Ciudadana para construir el Coahuila que todos queremos. Este es el reto y la oportunidad. Dejar a un lado el interés personal y darle esperanza a nuestro pueblo. Hasta la victoria. ¡Venceremos! Voz de un hombre: UDC. Voz de un hombre: Libérate. Voz en off: Alianza Ciudadana por Coahuila. En el caso de estos spots, se advierte que el contenido del mensaje es idéntico, puesto que se escucha el uso de las mismas

palabras tanto en radio y televisión; lo cual, permite que se estudien de manera conjunta, a fin de evitar repeticiones innecesarias, con la diferenciación del uso de imágenes en el caso del spot televisivo. Como puede advertirse, en estos promocionales se hace alusión a la visión que tienen tanto UDC como la Coalición Ciudadana por Coahuila, respecto del sufrimiento que se causa a los coahuilenses con la división y egoísmo del interés personal; y ante ello, manifiestan una oportunidad de esperanza al renunciar a ese interés individual. En ese contexto, en dichos promocionales no se aprecia alguna referencia que permita deducir que se pretende posicionar a un partido político; o bien, que se está llamando a votar a favor de determinada fuerza política, ya que lo que realmente se tiene es un posicionamiento general, relacionado con la condición social del Estado y la posibilidad de que ésta cambie con la renuncia de los intereses personales de la población en general. En esa tesitura, es indubitable que estos spots contienen un mensaje genérico, habida cuenta que únicamente refieren la postura ideológica del partido, por lo que no se advierte referencias que impliquen un llamado al voto.

SRE-PSC-039/2017 46 En este tenor, este órgano jurisdiccional estima que los promocionales denunciados, por la temporalidad en la que fueron difundidos, están apegados a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias en cuanto a su contenido, de tal suerte que no se acredita la infracción, pues no existe prohibición alguna para que durante el periodo de precampañas, el partido político difunda ideas, críticas o manifestaciones en torno a temas de interés general, propio de todo sistema democrático. Esto es, en la época de precampañas, los partidos políticos pueden hacer uso de las pautas en radio y televisión otorgadas por el INE, sin que necesariamente deban contener mensajes de precampaña o campaña, pudiendo versar sobre cuestiones de carácter general. Por otra parte, tampoco se acredita el argumento del quejoso en el sentido de que la difusión de los promocionales denunciados constituye un uso indebido de la pauta, en razón de que fueron hechos con la finalidad de posicionar ilícitamente a la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila ante el electorado. Lo anterior, ya que se reitera que lo que realmente se difunde es un contenido propio de la ideología del partido político, con expresiones críticas, lo cual no encuentra una prohibición expresa en la legislación aplicable, sino por el contrario, dicho contenido se encuentra permitido a los partidos políticos ya sea fuera o dentro de los periodos electorales, al constituir una de las formas que permiten a los institutos políticos alcanzar los fines constitucionales establecidos en el artículo 41 de la Constitución Federal. En ese sentido, esta Sala Especializada considera que del análisis integral y contextual de los promocionales no es posible presumir algún riesgo de afectación en materia electoral; de ahí que el objetivo de los promocionales otorgados al partido SRE-PSC-039/2017 político, en este caso específico, no se encuentra desvirtuado, ya que atendiendo al contenido se trata de materiales genéricos con posicionamiento partidista, por lo que es inexistente la conducta señalada por el Promovente.

3.2.4 Uso indebido de la pauta por la Coalición, al usar imágenes de menores de edad en un spot. Es oportuno señalar que esta Sala Especializada, en un nuevo paradigma de protección de los Derechos Humanos, implementó un método tendente a verificar la posible existencia de alguna situación de vulnerabilidad, en el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad auditiva, o bien, cuando en los promocionales se incluyan personas menores, aun cuando forme o no parte de la controversia. Proceder que es plenamente acorde con lo previsto por el artículo 1º, párrafo tercero de la Constitución Federal; en cuanto ordena que todas las autoridades, incluida por supuesto esta Sala Especializada, tienen la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los Derechos Humanos. Acorde con lo anterior, al verificar el contenido del promocional de televisión con folio RV0097-17 se aprecia la aparición de siete niños. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Al respecto, se tiene en cuenta que el contenido de la propaganda difundida por los partidos políticos se encuentra amparada por la libertad de autodeterminación de contenidos; empero, el ejercicio de dicha libertad fundamental no es absoluta, sino que tiene límites, entre los que se encuentran los vinculados con la dignidad o la reputación de las personas y los derechos de terceros, acorde con lo dispuesto en los artículos 6º, párrafo primero de la Constitución Federal, así como 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dicen: Artículo 6º.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Artículo 19.[...] 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por

cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesaria para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. SRE-PSC-039/2017 50 Destaca de estos preceptos constitucionales y convencionales una limitación coincidente: esto es, el pleno respeto a los derechos de terceros, incluidos, por supuesto los derechos de la niñez, cuya protección, se encuentra expresamente ordenada en el artículo 4º de nuestra Constitución Federal. En tales condiciones, cuando en el uso de las pautas asignadas por el Instituto se difundan mensajes que puedan afectar derechos de terceros, y que en el caso, resultan ser personas menores de edad, se debe garantizar sus derechos en el marco de su interés superior. Ahora bien, en el orden conceptual, el "interés superior del niño", ha sido descrito por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: "Implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Al amparo de esa previsión convencional, el Estado Mexicano, a través de sus instituciones, autoridades y tribunales, está constreñido a tener en consideración primordial el respeto al interés superior del menor, con la adopción de medidas necesarias para asegurar y maximizar la protección y efectividad de los derechos de las niñas y niños, acorde con lo establecido en los artículos 3, párrafo 1 y 4, de la Convención sobre los Derechos del Niño: Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Artículo 4. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional. SRE-PSC-039/2017 51 Con tal directriz de protección a la niñez, el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes" emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el interés superior del menor tiene las siguientes implicaciones: a) Coloca en plena satisfacción los derechos de los infantes como parámetro y fin en sí mismo; b) Define la obligación del Estado respecto de los niños, niñas y adolescentes; y c) Orienta decisiones que protegen sus derechos. En sincronía con estos postulados, la Primera Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis de rubro: "DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS" estableció que la mera situación de riesgo de los infantes es suficiente para que se estime que se afectan los derechos de la niñez y, ante ello, deben adoptarse las medidas que resulten más benéficas para la protección de los infantes. En el caso, la posible afectación al interés superior del infante se advierte a través de la exposición de la imagen de diversos niños y posibles adolescentes (sin que de esta circunstancia se tenga absoluta seguridad, atento a su fisonomía), de ahí que el análisis se deba hacer en relación al derecho a la propia imagen de los infantes participantes. Entonces la importancia del asunto radica, precisamente, en la protección reforzada que goza la imagen de las y los menores de edad involucrados en el promocional. SRE-PSC-039/2017 52 Por tanto, para el otorgamiento de la salvaguarda judicial es suficiente que se les ubique en una situación de riesgo potencial, sin que sea necesario que esté plenamente acreditado el perjuicio ocasionado, porque, atento a los valores en juego, el interés superior de las niñas y niños, está por encima del ejercicio de la libertad de autodeterminación del contenido de los spots que tienen los partidos políticos. Con ese parámetro de ponderación, el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece, que ningún niño puede ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, ni ataques ilegales a su honra y reputación. Por su parte, los artículos 2, 5, 76, 77 y 78 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes contemplan, igualmente, la salvaguarda de los infantes ante cualquier riesgo de afectación o manejo directo de su imagen, nombre, datos o referencias que permitan su identificación, así: Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los

principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán: I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno; II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia. El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la SRE-PSC-039/2017 53 asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley. ... Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño. ... Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán orientar, supervisar y, en su caso, restringir, las conductas y hábitos de niñas, niños y adolescentes, siempre que atiendan al interés superior de la niñez. Artículo 77. Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, así como medios impresos, o en medios electrónicos de los que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez. Artículo 78. Cualquier medio de comunicación que difunda entrevistas a niñas, niños y adolescentes, procederá como sigue: I. Deberá recabar el consentimiento por escrito o cualquier otro medio, de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente, respectivamente, conforme a lo señalado en el artículo anterior y a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 76 de la presente Ley, y II. La persona que realice la entrevista será respetuosa y no podrá mostrar actitudes ni emitir comentarios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. En el caso de que no sea posible recabar el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de un menor, éste podrá otorgarlo siempre que ello no implique una afectación a su derecho a la privacidad por el menoscabo a su honra o reputación. SRE-PSC-039/2017 54 Por otra parte, no se requerirá el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de niñas, niños o adolescentes, cuando la entrevista tenga por objeto que éstos expresen libremente, en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, su opinión respecto de los asuntos que les afecten directamente, siempre que ello no implique una afectación a sus derechos, en especial a su honra y reputación. El interés superior a proteger es la sola posibilidad de poner en peligro su imagen con una latente identificación de su persona. Este principio protector, vinculado al tema, nos orienta a reflexionar que en el caso de la propaganda política o electoral, hay siempre un elemento ideológico que identifica a la opción política, por tanto, la presencia de infantes implica un riesgo potencial de asociar a tales infantes con una determinada preferencia política e ideológica, a una edad que todavía no es oportuna. Lo anterior puede devenir en un riesgo potencial en relación con su imagen, honra o reputación presente, en su ambiente escolar o social y, por supuesto, en su futuro, pues al llegar a la vida adulta pueden aceptar o no aprobar la ideología política, con la cual fueron identificados en su infancia. En esta concurrencia de derechos involucrados, acorde con las disposiciones nacionales e internacionales antes descritas, esta Sala Especializada debe hacer un ejercicio de ponderación el cual se decante por la protección reforzada de los menores de edad involucrados en los promocionales de televisión que se analizan. Con tal parámetro este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a implementar todas aquellas medidas que sirvan para evitar que se presenten situaciones de riesgo potencial que puedan afectar el interés

superior del menor en relación con los promocionales de contenido político electoral, como en el asunto. SRE-PSC-039/2017 55 De suma importancia destaca tener la seguridad que los infantes fueron escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece: "Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez". Los requerimientos reforzados tienen sustento en los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a ser informados, como una directriz convencional que debe atenderse por todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales, como lo indica la UNICEF, en las Directrices éticas para la información sobre la infancia; conducentes y aplicables a la aparición de infantes en los spots de los partidos políticos, precisamente porque aparecen en medios de comunicación social como la televisión genera su exposición pública. Este instrumento internacional indica, en lo destacable: "Directrices éticas de UNICEF para la información sobre la infancia Protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la exposición pública ... De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, todos los niños, niñas y adolescentes, sin excepción, deben tener garantizados sus derechos. Uno de esos derechos es el de la protección de la vida privada, por lo que la exposición pública de los niños, niñas o adolescentes... UNICEF plantea una serie de directrices éticas para la información sobre infancia, que tienen como objetivo aportar orientaciones básicas para los medios de comunicación, pero que también son de utilidad para autoridades administrativas, policiales y judiciales que participan en los procesos de justicia, sobre cómo abordar los temas relacionados con la protección de la infancia a fin de respetar en todo momento su interés superior y su dignidad como seres humanos... Directrices éticas de UNICEF para la información sobre la infancia I. Principios 1. Se deberán respetar la dignidad y los derechos de cada niño o niña en toda circunstancia...." SRE-PSC-039/2017 56 Por tanto, a efecto de garantizar el pleno respeto al interés superior de los infantes, la autoridad administrativa electoral conforme a sus facultades adoptó las medidas necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos que procedan, en los términos apuntados y, en su caso, requirió la documentación necesaria a fin de privilegiar y proteger el interés superior de los niños, niñas y/o adolescentes menores de dieciocho años. Conforme lo anterior, mediante acuerdo de siete de marzo, la Unidad Técnica requirió a la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, remitiera la documentación a través de la cual fuera posible advertir las personas que, en su caso, ejercieran la patria potestad de los menores involucrados; así como el documento en el cual se asentara la libre manifestación de la voluntad de los menores. En respuesta, la Coalición exhibió copia fotostática de siete autorizaciones de uso de imagen y voz, en el que se consigna información como el nombre del menor, domicilio, Ciudad/Estado/Código Postal, Teléfono, RFC o CURP; así como la leyenda: "Soy el padre/la madre (o tutor legal) del menor que ha firmado esta autorización y consentimiento, y por la presente acuerdo que yo y el menor estaremos sujetos a todos los términos y condiciones de la presente." Enseguida de lo anterior, se encuentra consignado el nombre de la persona que se dice ostentar como el padre o madre del menor referido en el formato correspondiente. Al respecto, esta Sala Especializada considera que dichos formatos, al ser pruebas documentales privadas 9 por ser documentos elaborados por particulares y 9 Acorde con lo dispuesto en los artículos 461, párrafo 3, inciso b), así como 462, párrafos 1 y 3, de la Ley General. SRE-PSC-039/2017 57 proporcionados por la Coalición denunciada, por sí solos, resultan insuficientes para acreditar que los menores que en ellos se refiere son los mismos que aparecen en el spot controvertido; más aún, cuando la Coalición no proporcionó ningún otro documento que permitiera identificar plenamente a los menores involucrados. En efecto, en los formatos referidos no hay ningún elemento que permita la identificación visual de los menores y tampoco se adjuntó alguna credencial escolar o documento que permitiera a esta autoridad electoral distinguir a que menor de los que aparecen en el video corresponde cada uno de los permisos. Por lo que los citados formatos no son la prueba idónea para acreditar la persona que supuestamente otorgó el permiso. Aunado a ello, es preciso señalar que con la documentación remitida por la Coalición, tampoco se puede acreditar que las personas que firman la autorización, en realidad ostenten la patria potestad de los menores que aparecen en los videos, puesto que únicamente se aportó copia de la licencia de manejo de cada uno de los signantes, pero se omitió acompañar copia certificada del acta de nacimiento de los menores o de cualquier otro documento oficial con el que se pudiera identificar plenamente al mayor adulto que tuviera los derechos de representación de cada uno de los niños y/o adolescentes que se observa en el spot en comento. En ese sentido, dada la laxitud que presentan los citados formatos y la falta de algún documento que acredite la persona que tiene la patria potestad de los menores, es que esta Sala Especializada no tener por cierta la existencia del consentimiento pleno, cierto e idóneo, por escrito, debidamente firmado por los padres o quienes ejerzan la patria potestad o tutela del menor, pues como se ha manifestado, no hay mayores elementos que permitan concatenar y tener por acreditado que la participación de los niños en el promocional denunciado ocurrió con apego a las formalidades

exigibles. SRE-PSC-039/2017 58 Además, respecto al requisito consistente en la manifestación del menor por cuanto hace a su opinión libre y expresa respecto de su participación en el promocional electoral en cuestión, opinión que será valorada atendiendo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, en el caso concreto, el PAN omitió presentar cualquier tipo de documentación para el cabal cumplimiento de este requisito, sin que el partido político emitiera pronunciamiento al respecto, en el presente procedimiento. No pasa desapercibido a esta autoridad que la representación de la Coalición, en su defensa alegó que: • El plazo otorgado para el desahogo y cumplimiento al requerimiento resultaba insuficiente; • Se trata de documentos ajenos y privados, lo que provocó necesariamente una labor de recaudación de dichos documentos; y por tanto, era claro, evidente y lógico, que el tiempo y la posibilidad de los titulares de los documentos no estaba a disposición del partido político; lo cual retrasaba y tornaba difícil su recaudación. • En vista del plazo otorgado, resultaba imposible la protocolización del consentimiento de los padres y los menores; más aún si se toma en cuenta el tiempo que conllevan los trámites protocolarios ante fedatario público. • El requerimiento no tiene sustento legal que permita al partido prevenir la obligación de recaudar los documentos que se requirieron, sin embargo no se pretende desconocer los criterios que el INE citó en el acuerdo de requerimiento, solo trata de evidenciar que resulta complicado prever y SRE-PSC-039/2017 59 recaudar documentos para dar exhaustivo cumplimiento a requisitos no contemplados en la legislación. No obstante, a juicio de esta Sala Especializada, dichas consideraciones deben desestimarse, ya que tal y como se ha referido con antelación, la normas constitucionales, convencionales y legales, prevén que quienes difundan en medios de comunicación la imagen de menores, deberán tomar en cuenta aquellas medidas que impliquen la salvaguarda de los infantes ante cualquier riesgo de afectación o manejo directo de su imagen, entre las que se encuentra el recabar con antelación a la difusión, los permisos correspondientes. Por lo que no es aceptable que la Coalición denunciada aduzca que no se le otorgó el tiempo necesario para recabar dicha documentación, ya que estaba plenamente vinculada a contar con ella, desde el momento en que realizó el promocional que posteriormente difundiría como parte de su prerrogativa constitucional de acceso a televisión. En esa lógica, tampoco asiste razón a la Coalición denunciada cuando refiere que resultaba imposible realizar la protocolización del consentimiento de los padres y de los menores, ya que se insiste, dicha situación debió ser realizada con antelación a la difusión del promocional; además, la parte denunciada pasa por alto que los Notarios Públicos no son los únicos que, en materia electoral, podrían realizar una protocolización, ya que también contaba con la posibilidad de solicitar el auxilio de la Oficialía Electoral del INE; sin embargo, no se aportó ningún documento que, cuando menos, generara un indicio de que se solicitó su apoyo ni tampoco se tiene constancia de que la Coalición hubiera requerido los servicios de protocolización ante fedatario público. SRE-PSC-039/2017 60 De ahí que se tengan por desestimadas las manifestaciones de la representación de la Coalición; y por consiguiente, sea dable concluir que esta Sala Especializada no cuenta con los elementos idóneos y suficientes, como puede ser una fotografía, identificación escolar o cualquier otro elemento que sirva para establecer la identidad de los menores; lo cual, permitiría cotejar y establecer el vínculo entre las niñas y niños que aparece en el promocional y de quien, supuestamente, dio el consentimiento es su madre o tutora. Lo que deja en evidencia el riesgo potencial al que se expuso a los menores, por la difusión del promocional, al no tener certeza de que se emitió un consentimiento pleno, cierto e idóneo por parte de los padres, madres o tutores de aquellos, y, sobre todo, por no cuidar de manera idónea el uso de las imágenes de éstos. En consecuencia, se estima que se vulneró el interés superior de los menores involucrados y, por ende, se actualiza por parte de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila la infracción que se denuncia, en contravención a lo dispuesto por los diversos artículos 1, 4, párrafo noveno y 6, párrafo primero de la Constitución Federal; 25, párrafo 1, inciso a) y u), de la Ley de Partidos Políticos; 247, párrafo 1 y 443, párrafo 1, incisos a), h) y n) de la Ley Electoral. CUARTA. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Una vez que ha sido acreditada la existencia de diversas faltas, procede establecer la clase de sanción que legalmente corresponda, tomando en cuenta, entre otras, las siguientes directrices: 1. La importancia de la norma transgredida, es decir, señalar qué principios o valores se violaron o se vieron amenazados y la importancia de esa norma dentro del sistema electoral (principio, valor, ordenamiento, regla). SRE-PSC-039/2017 61 2. Efectos que produce la transgresión, los fines, bienes y valores jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o resultado). 3. El tipo de infracción y la comisión intencional o culposa de la falta, análisis que atañe verificar si el responsable fijó su voluntad para el fin o efecto producido, o bien, pudo prever su resultado. 4. Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así como si la conducta fue reiterada. Para tal efecto, esta Sala Especializada estima procedente retomar la tesis histórica S3ELJ 24/2003, de rubro "SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN", que sostenía que la determinación de la falta puede calificarse como levisima, leve o grave, y, en este último supuesto, como grave ordinaria, especial o mayor, lo que corresponde a una condición o paso

previo para estar en aptitud de determinar la clase de sanción que legalmente se deba aplicar al caso concreto, y seleccionar de entre alguna de las previstas en la ley. Ello en virtud de que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior en diversas ejecutorias, que la calificación de las infracciones obedezca a dicha clasificación. Por lo tanto, para una correcta individualización de la sanción, en primer lugar es necesario determinar si la falta a calificar es: i) levisima, ii) leve o iii) grave, y si se incurre en este último supuesto, precisar si la gravedad es de carácter ordinaria, especial o mayor. 10 En los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-45/2015 y acumulados, SUPREP-57/2015 y acumulados, SUP-REP-94/2015 y acumulados, SUP-REP-120/2015 y acumulados, SUP-REP-134/2015 y acumulados, SUP-REP-136/2015 y acumulados y SUP-REP-221/2015. SRE-PSC-039/2017 62 Adicionalmente, es menester precisar que cuando se establece un mínimo y un máximo de la sanción a imponer, se deberá proceder a graduar la misma atendiendo a las circunstancias particulares del caso. Al respecto, una vez que han quedado demostradas la infracciones a la normativa electoral en que incurrió la Coalición Alianza Ciudadana de Coahuila, se procede a imponer la sanción correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la Ley General, que dispone que cuando se trate de infracciones cometidas por los partidos políticos, se podrá imponer desde amonestación pública, multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente, según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda. Para determinar la sanción respectiva, se deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodearon la conducta contraventora de la norma, de conformidad con lo previsto en el artículo 458, párrafo 5 de la Ley General, tomando en consideración los siguientes elementos: • Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila. 1. Singularidad o pluralidad de faltas. En este punto, en principio, resulta necesario establecer que con una sola conducta se acreditaron dos faltas; esto es, que con la difusión del spot "Registro Coahuila Coalición" con folio RV00097 [versión tv] y 11 Se debe precisar que, mediante reforma al párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo decreto se publicó el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. De igual forma, en términos de los artículos segundo y tercero transitorios del decreto de reforma mencionado, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país. SRE-PSC-039/2017 63 RA00106 [versión radio] se actualizaron las faltas de uso indebido de la pauta y afectación al interés superior de un menor. 2. Bien Jurídico tutelado. Establecido el contexto anterior, debe decirse que con dicha conducta se transgredió, por una parte, el principio de equidad en la contienda interna de un partido político, puesto que se concedió mayor tiempo aire en radio y televisión a uno de los contendientes del proceso de selección interna del PAN; por otra parte, se afectó el interés superior de los menores que aparecieron en el spot televisivo controvertido, puesto que no se acreditó que la Coalición contará con los documentos necesarios para acreditar una participación libre y voluntaria, a sabiendas de la exposición de su imagen para fines electorales; y por tanto, se afectó la integridad, privacidad y reputación de los menores. 3. Circunstancias de modo, tiempo y lugar Modo. La conducta consistió en la difusión por televisión del promocional "Registro Coahuila Coalición" con folio RV00097 [versión tv] y RA00106 [versión radio], relativo al proceso electoral local de Coahuila, con un total de ciento ochenta y siete impactos en televisión y trescientos ochenta y cuatro en radio. Tiempo. La difusión del promocional se realizó durante el desarrollo de los comicios locales en Coahuila, en la etapa de precampañas, en el periodo del doce al quince de febrero. Lugar. La difusión del promocional se efectuó en los canales de televisión cuya transmisión se realiza en Coahuila. SRE-PSC-039/2017 64 4. Condiciones externas y medios de ejecución. El momento en que se realizó la transmisión del promocional, corresponde al periodo de precampaña del proceso electoral local del estado de Coahuila, y el medio de ejecución fueron los canales de radio y televisión de transmisión local, acorde con lo informado por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos en las diversas comunicaciones que han sido referidas en el apartado de acreditación de los hechos denunciados. 5. Beneficio o lucro. No se acredita un beneficio económico cuantificable para la Coalición responsable, en virtud de que se trata de la difusión de promocionales pautados por ella misma, en uso de su prerrogativa constitucional de acceso a los tiempos del Estado. 6. Comisión dolosa o culposa de la falta. Está acreditado que la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila pautó los promocionales aludidos como parte de su prerrogativa de acceso al tiempo aire en radio y televisión que le correspondía en el marco de las precampañas del proceso electoral de Coahuila; y por tanto, es posible afirmar que tenía pleno conocimiento del contenido de los promocionales pautados; lo cual, permite concluir que tuvo la voluntad, por una parte, de usar la imagen de los menores de

edad en el contenido de su promocional; y por otra parte, que tuvo el ánimo de difundir el promocional tildado de ilegal durante el periodo de precampañas en el proceso electoral del estado de Coahuila. Además, como Coalición que contiene en un proceso electoral local está plenamente vinculada al conocimiento de las normas constitucionales, convencionales y legales y de los criterios jurisprudenciales que rigen el acceso a la radio y televisión por parte de los actores políticos que participan en un proceso comicial; así como los tendentes a garantizar la salvaguarda del interés superior de los menores al ser utilizados en promocionales que se difundirán en un contexto electoral, a través de los medios electrónicos.

Se presume que el entonces precandidato en cuestión ni los partidos políticos que lo respaldan NO cuentan con los requisitos administrativos, expresos en el Lineamiento para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia político-electoral, **capítulo “Requisitos para mostrar niñas, niños o adolescentes en propaganda político electoral, mensajes electorales, actos políticos, actos de precampaña o campaña, en cualquier medio de difusión”, numeral 8**, con título “Consentimiento de la madre y del padre, de quien ejerza la patria potestad o de los tutores”, señala lo siguiente:

“...Por regla general, debe otorgar el consentimiento quien o quienes ejerzan la patria potestad o el tutor o, en su caso, la autoridad que debe suplirlos respecto de la niña, el niño o adolescente que aparezca o sea identificable en propaganda político-electoral, mensajes electorales o actos políticos, actos de precampaña o campaña, o para ser exhibidos en cualquier medio de difusión...”

Irregularidad que a simple vista es demostrada, toda vez que el precandidato ni los partidos políticos que lo respaldan, no cumplieron con este requisito, y debiendo esta autoridad electoral, solicitar al infractor de forma inmediata dicho consentimiento, y en caso de negarse a proporcionarlo, sancionarlo cómo corresponda.

Así mismo en el Lineamiento para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, **capítulo “Presentación del consentimiento y opinión ante el Instituto”, en el numeral 14**, señala lo siguiente;

... “Los sujetos obligados que exhiban la imagen, voz o cualquier dato identificable de niñas, niños o adolescentes en su propaganda político-electoral, mensajes o actos políticos, actos de precampaña o campaña, deberán:

... b) Conservar en su poder, durante el tiempo exigido por la normatividad aplicable en materia de archivos, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de otras leyes, la grabación en video de la conversación por medio de la cual se explicó a la niña, niño o adolescente el alcance, contenido, temporalidad y medio de difusión, así como el original del medio por el que se documentó la opinión informada de la persona menor de edad, sobre su participación en la propaganda político-electoral, mensajes electorales, o su presencia en actos políticos, actos de precampaña o campaña conforme al manual y las guías metodológicas referidas en el Lineamiento 9. ... (Sic)

Del análisis de la fotografía publicada el 11 de febrero del 2024, a las 2:10 p.m., en la red social Facebook del entonces precandidato **Guillermo Romero Rodríguez**, de la cual se observa difundió varias imágenes de niños, niñas y adolescentes, ello para promocionar su campaña política y posicionar su imagen ante los electores, vulnera el derecho a la intimidad de los infantes que aparecen en su promoción electoral, y se presume puede devenir en un riesgo potencial, por lo cual se debió cumplir con la obligación señalada en el numeral 14, con título “Presentación del consentimiento y opinión ante el Instituto”, del Lineamiento para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes en Materia Político-Electoral, es decir el precandidato tiene obligación de conservar en su poder, durante el tiempo exigido por la normatividad aplicable en materia de archivos, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de otras leyes, la grabación en video de la conversación por medio de la cual se explicó a la niña, niño o adolescente el alcance, contenido, temporalidad y medio de difusión, así como el original del medio por el que se documentó la opinión informada de la persona menor de edad, sobre

su participación en la propaganda político-electoral, mensajes electorales, o su presencia en actos políticos, actos de precampaña o campaña conforme al manual y las guías metodológicas referidas en el Lineamiento 9, hecho contrario la autoridad estará obligada a salvaguardar la integridad, de los menores, así como a determinar las sanciones pertinentes al entonces precandidato y a la brevedad tomar las medidas cautelares pertinentes.

Es importante señalar que la fotografía publicada el 11 de febrero del 2024, a las 2:10 p.m., en la red social Facebook del entonces precandidato **Guillermo Romero Rodríguez**, en la cual también se identifican de forma directa niños, niñas y adolescentes, se presume no cumple el entonces precandidato **Guillermo Romero Rodríguez**, ni los Partidos Políticos PAN, PRI, PAS Y PRD con la obligación de llevar a cabo el difuminado del rostro de los menores, con lo anterior se encuentra aprovechándose de los indefensos menores, actuando con alevosía menoscabando los derechos político electorales y humanos de los niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo a lo señalado en el Anexo 3. emitido por el Instituto Nacional Electoral, de nombre "Instructivo para realizar la conversación y recabar la opinión informada de las niñas, niños y adolescentes en base en las guías metodológicas anexas", redactado con objeto de proporcionar una guía para realizar las conversaciones con niñas, niños y adolescentes, la cual les brinde la información oportuna, necesaria y suficiente a fin de que entiendan el alcance y los riesgos de su participación en propaganda político-electoral, mensajes electorales, o en actos políticos, actos de precampaña o campaña, así como sobre exhibición de su imagen, voz o cualquier dato que los identifique a través de cualquier medio de difusión, mismo, que pretende que en la información que se les proporciona a niñas, niños o adolescentes se les indique en qué medios y durante cuánto tiempo se va a difundir su imagen y de qué forma será su participación (activa o pasiva), por quién podría ser visto (familia, amigos y gente que no conoce) y los riesgos que implica ello, buscando establecer el mecanismo para garantizar que la opinión que se recabe sea expresa, propia, individual, libre, informada y espontánea, además de que sea acorde a la edad, desarrollo cognitivo y madurez de la persona menor de edad, evidenciado con la fotografía subida el 11 de febrero del 2024, a las 2:10 p.m., a la red social Facebook del entonces precandidato **Guillermo Romero Rodríguez**, en la cual se identifican de forma directa niños, niñas y adolescentes, el denunciado tiene y tuvo la obligación de cumplir cabalmente dicha metodología, con el objetivo claro de brindar la información oportuna, necesaria y suficiente a fin de que entiendan el alcance y los riesgos de su participación en propaganda político-electoral, mensajes electorales, o en actos políticos, actos de precampaña o campaña, así como de darle certeza y seguridad jurídica a los niños, niñas y adolescentes.

El Anexo 2. con título "Manual para recabar la opinión y el consentimiento informado de niñas, niños y adolescentes para la utilización de su imagen, voz o cualquier dato que los haga identificables en propaganda político-electoral y mensajes electorales, actos políticos, de precampaña o campaña a través de cualquier medio de difusión", señala en su punto IV, inciso a), para las Niñas y niños de 6 a 11 años, la obligación de recabar la opinión y el consentimiento informado de niñas, niños y adolescentes para la utilización de su imagen, voz o cualquier dato que los haga identificables en propaganda político-electoral y mensajes electorales, actos políticos, de precampaña o campaña a través de cualquier medio de difusión, antes de la elaboración o producción de la propaganda político-electoral o mensajes electorales, o previo a la participación en un acto de precampaña o campaña, así como un consentimiento informado durante la elaboración de videos o cualquier tipo de propaganda o mensaje electoral (previo a la difusión) y después de la difusión; o durante la celebración de actos políticos, de precampaña o campaña y su aparición en redes sociales o cualquier plataforma digital tales como Twitter, x, YouTube, Facebook, y notas emitidas por periódicos digitales, o por influencers, que posicionan o apoyen al candidato.

Concatenado a lo anterior en el punto IV, inciso b), el cual señala que las niñas, niños y adolescentes, antes de la elaboración o producción de la propaganda

político-electoral o mensajes electorales, o previo a la participación en un acto de precampaña o campaña. Consentimiento informado durante la elaboración de videos o cualquier tipo de propaganda o mensaje electoral (previo a la difusión) y después de la difusión; o durante la celebración de actos políticos, de precampaña o campaña y su aparición en redes sociales o cualquier plataforma digital, considerando que el denunciado no cumplió con los requisitos mínimos necesarios establecidos en la Ley para utilizar la imagen de los menores de edad; aunado a que, a no existe motivo, causa o fin lícito y legítimo para la aparición de éste en la fotografía subida en fecha 11 de febrero del 2024, a las 2:10 pm, a la red social Facebook del entonces precandidato **Guillermo Romero Rodríguez**.

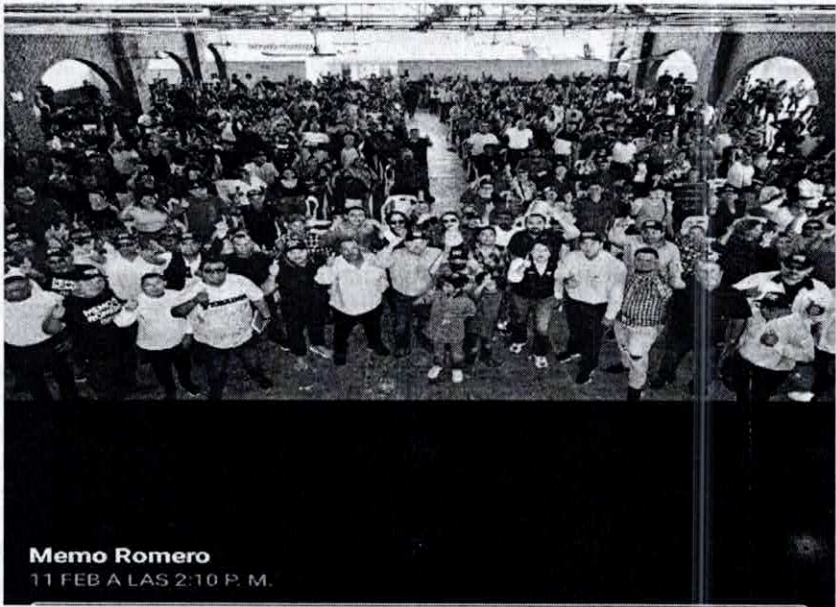
Así mismo, la resolución número **SUP-REP-170/2018** y **SUP-REP-5/2019**. Tesis XXIX/2018 PROPAGANDA POLÍTICA ELECTORAL. CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTOS DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN. señala lo siguiente;

... III. La protección reforzada del derecho a la propia imagen de menores de edad Los menores de edad, como cualquier persona, gozan del derecho a la propia imagen, como un derivado del derecho a la privacidad y, en dicho sentido, tienen la protección de dicho derecho fundamental frente a intromisiones indebidas. Esto ha sido reconocido no sólo por los tribunales nacionales, sino por diversos organismos internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño, firmada en 1989, establece que (Artículo 16): 1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. 2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef), en el documento de debate sobre los derechos de los niños en el mundo digital,¹⁷ señala que, a pesar de que el derecho a la intimidad de los menores y las personas adultas tiene la misma protección, es evidente que, considerando los demás derechos, el mejor interés y capacidades en evolución de los menores, es necesario un enfoque diferenciado de la protección del derecho a la intimidad de los menores. En dicho sentido, en la Observación General No. 14 del Comité de los Derechos del Niño (CRC/C/GC/14), se explica que el "interés superior del niño" es un concepto triple que involucra un derecho sustantivo, un principio interpretativo y una norma de procedimiento. Como principio interpretativo, este concepto implica que "si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño". Como norma de procedimiento implica que "siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados" (párr. 6). En el caso de que los derechos de otras personas entren en conflicto con el interés superior del niño y no sea posible armonizarlos, el referido Comité resalta que las autoridades "habrán de analizar y sopesar los derechos de todos los interesados, teniendo en cuenta que el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial significa que los intereses del niño tienen máxima prioridad y no son una de tantas consideraciones". El principio del interés superior de la niñez está también reconocido en el artículo 4, párrafo 9, de la Constitución Federal. En cuanto a la protección de la imagen de los menores, en el contexto español, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de España considera que "siempre que no medie el consentimiento de los padres o representantes legales de los menores con la ausencia del Ministerio Fiscal, la difusión de cualquier imagen de éstos ha de ser reputada contraria al ordenamiento jurídico" (Recurso 2895/2013). En dicho caso, el Tribunal determinó que publicar la fotografía de un menor en una revista gratuita sin el permiso de sus padres, vulnera su derecho a la imagen, a pesar de que la fotografía fue capturada por el tío del niño. Enfatizó que la violación se actualiza "por la inclusión de la imagen del menor en una revista con independencia de los fines perseguidos por su publicación o de que pudiera o no afectar a la reputación del afectado" y que lo decisivo es "la entrega de esta fotografía de un codemandado a otro sin que se acredite la existencia del consentimiento necesario para su publicación". Los derechos tutelados en el artículo 6 constitucional, no son exclusivamente oponibles a los partidos políticos, sino también a los particulares, por lo que es posible concluir que la propaganda y mensajes de contenido político o electoral que difundan las personas físicas y morales en la temporalidad referida por el numeral 24724 de la ley electoral, también deben ajustarse a la norma constitucional citada, siendo posible que en el caso de que no sea así, el sujeto emisor de la misma, pueda ser sancionado. • La Sala Especializada consideró necesario, a manera de acción preventiva, establecer un llamamiento respecto

de aquellas personas físicas y morales vinculadas con cualquier fuerza política que elaboren o difundan por cualquier medio de comunicación legalmente previsto para hacerlo, cualquier tipo de propaganda política o electoral que, en determinado momento pudieran emitir en ejercicio de su libertad de expresión y participación política ya sea a favor o en contra de algún partido político, precandidato/a, candidato/a, aspirante, candidato/a independiente, coalición, dentro o fuera de un proceso electoral federal o local, para que tengan especial cuidado al utilizar cualquier elemento audiovisual que pudiera colocar en riesgo el interés superior de la niñez, ya que siempre debe tenerse presente que los derechos humanos de la niñez requieren de mayor respeto, protección y cuidado reforzado por parte de cualquier persona y no sólo de las autoridades. ... (Sic)

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=381007264687815&set=pcb.381007338021141>

EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONCILIABLE SU IMAGEN, SEGUN LO SIGUIENTE:



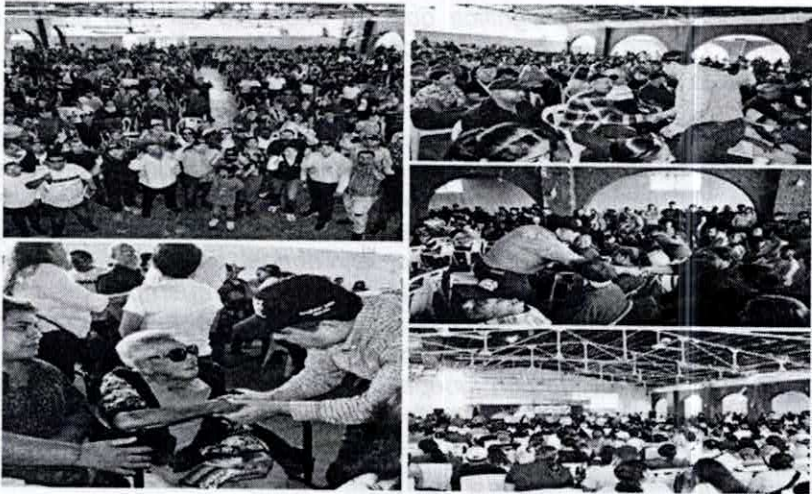
Memo Romero
11 FEB A LAS 2:10 P. M.



Memo Romero
11 feb · 🌐

Gracias, Villa Unión.

Me siento muy contento y entusiasmado ... Ver más



Hechos que evidentemente vulnera el derecho a la intimidad, violenta su imagen, honra o reputación presente en su ambiente escolar o social y en su futuro, pues al llegar a la edad adulta puede no aprobar la ideología política con la que sus tutores, o aprovechada mente el precandidato lo vinculó durante su infancia, violando así, la normatividad local, federal y la convencionalidad que protege los derechos de los infantes que aparecen en su promoción electoral, sin cumplir con la normatividad electoral y los derechos humanos, constituyendo violaciones al

proceso electoral, así como a la neutralidad, equidad e imparcialidad de la contienda a favor del precandidato conocido como Guillermo Romero Rodríguez.

Por su parte La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa establece lo siguiente:

... Artículo 11 Bis. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

...XVII. Derecho a la intimidad; ...

Artículo 66. *Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales.*

No podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquella que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación.

Quienes ejerzan su patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán orientar, supervisar, y en su caso, restringir sus conductas y hábitos sin que esto se considere injerencia, siempre que atiendan al interés superior de la niñez.

Artículo 67. *Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación locales, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez.*

Artículo 67 Bis. *Cualquier medio de comunicación que difunda entrevistas a niñas, niños y adolescentes, procederá como sigue:*

I. Deberá recabar el consentimiento por escrito o cualquier otro medio, de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente, respectivamente, conforme a lo señalado en el artículo anterior y a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 66 de la presente Ley; y,

II. La persona que realice la entrevista será respetuosa y no podrá mostrar actitudes ni emitir comentarios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

En el caso de que no sea posible recabar el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de un adolescente, éste podrá otorgarlo siempre que ello no implique una afectación a su derecho a la privacidad por el menoscabo a su honra o reputación.

(Adic. Según Decreto No. 434, publicado en el P.O. No. 063, del 24 de mayo de 2023).

Artículo 67 Bis 1. *Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la protección de la identidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes que sean víctimas, ofendidos, testigos o que estén relacionados de cualquier manera en la comisión de un delito, a fin de evitar su identificación pública.*

La misma protección se otorgará a adolescentes a quienes se les atribuya la realización o participación en un delito, conforme a la legislación aplicable en la materia.

(Adic. Según Decreto No. 434, publicado en el P.O. No. 063, del 24 de mayo de 2023).

Artículo 67 Bis 2. *Los medios de comunicación deberán asegurarse que las imágenes, voz o datos a difundir, no pongan en peligro, de forma individual o colectiva, la vida, integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes, aun cuando se modifiquen, se difuminen o no se especifiquen sus identidades, y evitarán la difusión de imágenes o noticias que propicien o sean tendentes a su discriminación, criminalización o estigmatización, en contravención a las disposiciones aplicables.*

En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente artículo, niñas, niños o adolescentes afectados, por conducto de su representante legal o, en su caso, de la Procuraduría de Protección, actuando de oficio o en representación sustituta, podrá promover las acciones civiles de reparación del daño e iniciar los procedimientos por

la responsabilidad administrativa a que haya lugar; así como dar seguimiento a los procedimientos hasta su conclusión. Niñas, niños o adolescentes afectados, considerando su edad, grado de desarrollo cognoscitivo y madurez, solicitarán la intervención de la Procuraduría de Protección.

En resumidas cuenta nos dichas publicaciones se encuentran plagadas de actos constitutivos de infracciones electorales y delitos, de los cuales debe enterarse a las autoridades pertinentes, cómo lo son, la violación a **los Lineamientos Generales para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de Propaganda y Mensajes Electorales establecidos por el Instituto Nacional Electoral y al Reglamento del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, para la difusión, fijación y retiro de la propaganda política y electoral, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, la Convención de los Derechos del Niño**, lo que lleva a violentar la neutralidad, equidad e imparcialidad de la contienda, por lo que se pide a esta Autoridad en apego al protocolo de actuación de quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tercero. Que el 11 de febrero del 2024, a las 9:02 pm con el título "La historia de Mazatlán se mide en carnavales y el que no es parte de esta fiesta se pierde de grandes historias y momentos de convivencia", como se aprecia en la siguiente [liga electrónica](https://www.facebook.com/photo/?fbid=381161694672372&set=pcb.381162014672340) <https://www.facebook.com/photo/?fbid=381161694672372&set=pcb.381162014672340> en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del **C. Guillermo Romero Rodríguez**, con el caracter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, es importante señalar que en primer término se debe considerarse propaganda electoral, así como un acto político por cumplir con los requisitos para el efecto, y de lo acontecido el precandidato difundió varias imágenes de niños, niñas y adolescentes, ello para promocionar su campaña política y posicionar su imagen ante los electores, lo cual vulnera el derecho a la intimidad de los infantes que aparecen en su promoción electoral, y se presume puede devenir en un riesgo potencial, en relación con la imagen, honra o reputación presente en su ambiente escolar o social y en su futuro, pues en la edad adulta al decidir sobre su ideología política puede no aprobar con la que fue relacionado desde la infancia, en consecuencia a lo anterior el precandidato **Guillermo Romero Rodríguez, así como los partidos políticos PAN, PRI, PAS Y PRD**, no protegen el interés superior del menor pues anteponen la auto determinación arbitraria del candidato y los partidos en el contenido de sus promocionales, publicados en diversos medios, sin cumplir con la normatividad electoral, señalada en el Lineamiento para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, emitido el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo General, mediante Acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales, en acatamiento a la sentencia SUP-REP60/2016 de la Sala Superior, y SRE-PSC-102/2016 de la Sala Regional Especializada, ambas salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación" (en adelante Lineamientos), identificado con la clave INE/CG20/2017.

En los cuales se señalan las formas de aparición y participación de niñas, niños o adolescentes, siendo de manera directa en propaganda político electoral y mensajes electorales; y directa o incidental en actos políticos, actos de precampaña o campaña. En un acto político, un acto precampaña o campaña, la aparición es incidental, siempre y cuando las niñas, niños o adolescentes sean exhibidos de manera involuntaria y sin el propósito de que formen parte de éstos, por ser situaciones no planeadas o controladas por los sujetos obligados.

Así mismo se observa de la fotografía publicada en fecha 11 de febrero del 2024, a las 9:02 pm con el título "La historia de Mazatlán se mide en carnavales y el que no es parte de esta fiesta se pierde de grandes historias y momentos de convivencia", como se aprecia en la siguiente [liga electrónica](https://www.facebook.com/photo/?fbid=381161694672372&set=pcb.381162014672340) <https://www.facebook.com/photo/?fbid=381161694672372&set=pcb.381162014672340>

2340 en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del **C. Guillermo Romero Rodríguez**, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, mediante la cual se difundieron varias imágenes de niñas, niños o adolescentes, donde se tienen una participación **DIRECTA, lo anterior** en un acto político electoral, pues de la imagen en un análisis exhaustivo se observa a los menores, manifestando un apoyo directo al hacer gestos de manera corporal, acreditando entonces su participación activa y directa, con objeto de promocionar la campaña política del precandidato, y posicionar su imagen ante los electores, lo cual vulnera el derecho a la intimidad de los infantes así como su imagen, honra o reputación, presente en su ambiente escolar o social y en su futuro, pues a la edad adulta puede NO APROBAR la ideología política con la que fue identificado en su infancia.

La aplicación convencional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala que la aparición de menores de edad en propaganda política o electoral implica un riesgo potencial de ASOCIAR a los menores con una determinada preferencia política o ideológica.

Es de importancia señalar que la protección del interés superior del menor se antepone a la libertad de los partidos de autodeterminar el contenido de sus promocionales.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala que se debe partir de una concepción de niños, niñas y adolescentes como titulares activos de derechos y no solamente como sujetos de protección, bajo el derecho del infante a la preservación de su imagen, considerando que una exposición inadecuada puede fomentar estereotipos o una situación de riesgo para el menor, garantizando con una correcta aplicación de la norma, no ser objeto de injerencias en su vida privada, familia, domicilio, y correspondencia, así como no ser atacado en su honor y reputación.

En todas las decisiones y actuaciones el Estado velará y cumplirá con el principio del Interés superior de la Niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Es decir, los niños, las niñas y adolescentes tienen derecho a que, antes de que se tome cualquier medida que pueda influir sobre estos se evalúen y ponderen las posibles repercusiones, a fin de decidir por la que promueva y proteja sus derechos, considerando que **la propia imagen de los menores de edad, goza de protección, por lo que su exhibición implica un riesgo potencial**, así mismo la propaganda política o electoral es un riesgo potencial porque siempre hay un elemento ideológico o preferencia política.

Concatenado a lo anterior, la resolución número **SRE-PSC-121/2015** tituló **USO INDEBIDO DE LA PAUTA POR LA DIFUSIÓN PROPAGANDA ELECTORAL QUE AFECTA AL INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES**. señala lo siguiente;

El promovente alude a la supuesta vulneración a los derechos de los menores que aparecen en el promocional denominado Quien pompo 2, en torno a la utilización de su imagen y la protección de sus datos personales, e invoca y transcribe el contenido del artículo 4, párrafo noveno⁹⁹, de la Constitución Federal, en el cual se prescribe la obligación del Estado de velar por el interés superior de la niñez y garantizar de manera plena los derechos de los menores.

Al respecto, se tiene en cuenta que el contenido de la propaganda difundida por los partidos políticos se encuentra amparada por la libertad de expresión, en relación a la cual, el Tribunal Electoral ha sostenido en reiteradas ocasiones que debe ser objeto de maximización en el contexto del debate político, a efecto de que se aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática.¹⁰⁰

No obstante, el ejercicio de dicha libertad fundamental no es absoluto, sino que tiene límites, entre los que se encuentran, los vinculados con la dignidad o la reputación de las personas y los derechos de terceros, acorde con lo dispuesto en

los artículos 6º, párrafo primero de la Constitución Federal⁷¹, así como 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles⁷² y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos⁷³.

En tal virtud, la acotación en torno a los aspectos que no deben perturbarse con las expresiones de ideas, se traduce en una obligación de abstenerse de incurrir en tales conductas a efecto de salvaguardar los bienes jurídicos ahí protegidos, como lo es, el pleno respeto a los derechos de terceros, incluyendo, por supuesto los derechos de los menores, cuya protección se encuentra expresamente ordenada en el artículo 4º de nuestra Constitución Federal.

Por tanto, la comisión de alguna conducta que provoca la inobservancia de tal obligación, implica por sí misma un aspecto que atenta contra el propio orden constitucional y, en el caso de la materia electoral, constituye una vulneración específica en cuanto al uso del tiempo pautado por el INE para la difusión de la propaganda electoral, en términos de lo dispuesto en el artículo 247, párrafo 1, de la Ley Electoral.

Así, la Sala Superior⁷⁴ ha señalado que en el derecho administrativo sancionador electoral el "tipo" infractor se constituye con los elementos siguientes:

- (i) Una norma que contenga una obligación o una prohibición a cargo de algún sujeto.
- (ii) Otra norma con una prevención general, relativa a que, si alguien inobserva la ley (ya sea por incumplir alguna obligación o por violar una disposición), se impondrán sanciones.
- (iii) Un catálogo general de sanciones aplicables cuando se inobserve la normativa.

Luego, en el caso de la normativa sobre la cual se afirma su incumplimiento, los elementos que constituyen el tipo administrativo electoral que nos ocupa, se obtienen de los referidos artículos 4 y 6, párrafo primero de la Constitución Federal en torno a que en la difusión de las ideas se atienda a la obligación de respetar los derechos de terceros y, en específico, los derechos de los menores; ello, en relación con el artículo 247, párrafo 1, de la Ley Electoral, referente al mandato específico de que en el uso de las pautas asignadas para la difusión de propaganda electoral se acaten los lineamientos constitucionales.

Lo anterior, se relaciona con lo dispuesto en los diversos 25, párrafo 1, incisos a) y u), de la Ley de Partidos Políticos y 443, párrafo 1, incisos a) y n) de la Ley Electoral, en los que se establece la prevención general concerniente a la inobservancia de las disposiciones establecidas en la normativa electoral.

Y finalmente, el catálogo de sanciones aplicables se encuentra previsto en el artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la Ley Electoral, toda vez que el sujeto denunciado en el presente caso, resulta ser un partido político.

En tales condiciones, el tipo administrativo electoral antes referido se actualiza cuando en el uso de las pautas asignadas por el INE se difundan mensajes que puedan afectar derechos de terceros, y que en el caso, resultan ser menores de edad, a quienes debe garantizárseles sus derechos en el marco de su interés superior.

Al respecto, se tiene en cuenta el concepto de "interés superior del niño", el cual ha sido descrito por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al destacar que "implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño".⁷⁵

Así, el Estado Mexicano, a través de sus instituciones, autoridades y tribunales, está constreñido a tener en consideración primordial el respeto al interés superior del menor, a través de la adopción de las medidas necesarias para asegurar y maximizar la protección y efectividad de los derechos de los niños, acorde con lo establecido en los artículos 3, párrafo 1 y 4,⁷⁶ de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En esa tesitura, acorde con el "Protocolo de actuación de quienes imparten justicia en caso que involucren niñas, niños y adolescentes" emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el interés superior del niño tiene las siguientes implicaciones:

- a) coloca en plena satisfacción de los derechos del niño como parámetro y fin en sí mismo;
- b) define la obligación del Estado respecto del niño, y
- c) orienta decisiones que protegen los derechos del niño.

Por ello, la Primera Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la mera situación de riesgo de los menores es suficiente para que se estime que se afectan los derechos de los niños y, ante ello, deben adoptarse las medidas que resulten más benéficas para la protección de los infantes.^[13]

Pues bien, en el caso que nos ocupa, la supuesta vulneración al interés superior del menor se desarrolla a través de la exposición de la imagen de diversos niños que participan en el promocional denunciado, de ahí que, la afectación concreta a analizar se refiera al derecho a la propia imagen de los menores participantes.

Para tal efecto, se parte de la base relativa a que el derecho a la propia imagen de los menores goza de una protección especial, de ahí que para el otorgamiento de la salvaguarda judicial es suficiente que los menores se ubiquen en una situación de riesgo potencial, sin que sea necesario que esté plenamente acreditado el perjuicio ocasionado, pues, en congruencia con el interés superior de los niños, debe operar una modalidad del principio *in dubio pro infante*, a fin de dar prevalencia al derecho de los menores, por encima del ejercicio de la libertad de expresión, con el objeto de que se garanticen los derechos de los niños, por encima de cualquier duda que se presente en los casos que se analicen.

En similares términos el Tribunal Constitucional de España ha establecido que "en los casos en que se analice la captación y difusión de fotografías de niños en medios de comunicación social[...] es preciso tener en cuenta, que el ordenamiento jurídico establece una protección especial, en aras a proteger el interés superior del menor".^[14]

Asimismo, señala el mismo Tribunal Constitucional Español que el derecho a la propia imagen "se configura como un derecho de la personalidad, que atribuye a su titular la facultad de disponer de la representación de su aspecto físico que permita su identificación, lo que conlleva tanto el derecho a determinar la información gráfica generada por los rasgos físicos que le hagan reconocible que puede ser captada o tener difusión pública, como el derecho a impedir la obtención, reproducción o publicación de su propia imagen por un tercero no autorizado".^[15]

Así, en el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño^[16], se establece que ningún niño puede ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, ni ataques ilegales a su honra y reputación y, por su parte, en los artículos 76 y 77 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes^[17] se contempla igualmente la salvaguarda de los menores ante cualquier riesgo de afectación o manejo directo de su imagen, nombre, datos o referencias que permitan su identificación.

Pues bien, en el caso de la propaganda política o electoral hay siempre presente un elemento ideológico que identifica a la opción política que la presenta, por tanto, en principio, la utilización de menores en la misma implica un riesgo potencial de asociar a tales infantes con una determinada preferencia política e ideológica.

Lo anterior puede devenir en un riesgo potencial en relación con su imagen, honra o reputación presente en su ambiente escolar o social y, por supuesto, en su futuro, pues al llegar a la vida adulta pueden no aprobar la ideología política con la cual fueron identificados en su infancia.

En ese sentido, acorde con la disposiciones internacionales y nacionales antes descritas, esta Sala Especializada se encuentra obligada a determinar la implementación de todas aquellas medidas que sirvan para evitar que se presenten tales situaciones de riesgo potencial que puedan afectar el interés superior del menor en relación con los promocionales de contenido político electoral.

Así, en una primera actuación, necesaria para garantizar que no se presenta alguna situación de riesgo, es criterio de esta Sala, que la autoridad que analice en algún momento, un promocional político en que participen menores, deberá contar con la plena certeza de que se respetó el elemento relativo al consentimiento parental o, en su caso, de los tutores, en torno a su participación en la propaganda electoral, toda vez de lo dispuesto por los artículos 424 y 425 del Código Civil Federal y sus correlativos de los códigos civiles de la República Mexicana.

Igualmente, tal autoridad deberá garantizar el derecho que tienen los infantes de ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, en términos de lo dispuesto en el artículo 71^[198] de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Al efecto, y como elementos instrumentales de tales derechos, directamente relacionados con el interés superior del menor, la autoridad que analice la validez de promocionales de contenido político electoral deberá verificar lo siguiente:

i. Consentimiento por escrito debidamente firmado por el padre y la madre o por quien(es) ejerza(n) efectivamente la patria potestad o tutela del menor.

Tal documento se acompañara de copia certificada del acta de nacimiento, o bien, constancia de pérdida de patria potestad o acta de defunción del padre o madre que no firme (para el caso de que se otorgue solo por uno de los padres o tutores).

ii. Manifestación del menor por cuanto hace a su opinión libre y expresa respecto de su participación en el promocional electoral en cuestión. Tal opinión será valorada atendiendo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

iii. El consentimiento parental o, en su caso, de los tutores, y la manifestación de la opinión del menor deberá ser ratificado ante la Oficialía Electoral del INE o fedatario público, a fin de que se haga constar el otorgamiento del mismo en un acto revestido de fe pública. Lo anterior a fin de generar certeza y garantizar plenamente el interés superior de los menores.

Asimismo, aunado a contar con la certeza plena en torno al otorgamiento del consentimiento respectivo, acorde con las condiciones antes relatadas, la autoridad que en su momento, analice la validez del promocional político en que participen menores de edad deberá valorar minuciosamente su contenido, a fin de que, tomando en cuenta su edad y madurez, se les garantice entre otras cuestiones: pleno respeto a su imagen, honra, nombre o datos personales, evitando en todo caso situaciones de riesgo, que de manera actual o al menos potencial, pudieran correr en su entorno social o educativo por su participación en tal promocional electoral.

Además, tal autoridad, ya sea administrativa o judicial, deberá allegarse de los elementos necesarios para analizar y justificar de manera razonable el motivo y necesidad sustantiva para la participación de los menores en mensajes de propaganda política electoral. Tal cuestión deberá ser ponderada en cada caso, en relación con el interés superior del menor y garantizando objetivamente el pleno respeto a su desarrollo físico, psíquico y emocional.

Ahora bien, en la especie, no se tiene plena certeza en relación a que efectivamente se haya otorgado el consentimiento necesario para la participación de los menores en el promocional denominado Quien pompo 2.

El PAN allegó documentación con la intención de acreditar que efectivamente se recabó la autorización de los padres o tutores, para la participación de los menores en el promocional denunciado, sin embargo, se trata de elementos que no cumplen con las características y formalidades legales razonables para acreditar lo que pretenden.

Esto es, en el promocional denunciado se aprecia a simple vista que en el desarrollo del mismo participaron cuando menos veintiún niños y, a pesar de ello, el PAN solamente allegó nueve "cartas de autorización",^[199] aunque la Unidad Técnica le requirió la documentación que acreditara el otorgamiento del consentimiento de parte de quienes ejercen la patria potestad o tutela de quienes aparecen en el promocional.

En tales condiciones, no se cuenta con elementos que sirvan para acreditar el otorgamiento del consentimiento en torno a cuando menos doce menores que participaron en la propaganda denunciada, lo cual, es suficiente para estimar que se vulneró al menos potencialmente, el derecho a la propia imagen de tales menores, al no contar con la autorización relativa a su aparición en el promocional.

Además, el contenido mismo de tales cartas carece de las formalidades necesarias para dotar de plena certeza el acto de autorización que ahí se pretende hacer constar, de hecho, en tres de ellas^[200] ni siquiera se asienta el nombre del padre o la madre quienes firmaron tal documento.

Por otra parte, en la totalidad de las cartas aportadas, consta solamente la firma de uno de los padres y no de ambos, sin que se haga precisión respecto a la razón de la ausencia del otro padre o madre; ni se acompaña documentación que acredite el parentesco de quien firma en representación de los menores.

En ese sentido, no hay certeza de que quien firmó efectivamente sea el padre o la madre del menor, en ejercicio efectivo de su patria potestad.

Finalmente, no obra en autos documento alguno que evidencie que se tomó en cuenta la opinión libre y expresa del menor.

Así las cosas, esta Sala Especializada determina que no se implementaron las medidas necesarias para garantizar que los padres o tutores de los menores otorgaran su consentimiento para la aparición de los mismos en el promocional electoral denunciado, de ahí que se estime que se vulneró el interés superior del menor y, por ende, se actualiza la infracción que se denuncia, sin que sea necesario analizar el contenido del mismo.

Luego entonces, al haberse acreditado la infracción relativa al uso indebido de la pauta por la difusión de propaganda electoral que vulnera el interés superior del menor, se vincula al Instituto Nacional Electoral para que adopte las medidas necesarias a fin de que no se difunda el promocional denominado Quien pompo 2 (RV00738-15) bajo ningún tipo de pauta, ni federal ni local, atendiendo a que el mismo ha sido determinado ilegal en esta resolución y con la finalidad de evitar que se genere alguna situación que pueda poner en riesgo a los menores que aparecen en el mismo.

Asimismo, cabe indicar que es criterio de esta autoridad judicial que en el caso de los asuntos en que se aborde una posible afectación al interés superior del menor, corresponde a la persona que realiza la exposición de los niños acreditar que efectivamente actuó salvaguardando la integridad y las prerrogativas de los mismos, pues de lo contrario, se desnaturalizaría por completo la obligación de las autoridades de velar por el pleno respeto a los derechos de los niños, en tanto que actuaría una suerte de presunción de legalidad en torno a potenciales situaciones de riesgo para los menores, en vez de que se optara por emprender acciones que sirvan para tener la plena certeza respecto a la protección de los mismos.

En ese sentido, y considerando que el PAN en la contestación al requerimiento de fecha doce de mayo, indicó que no había contratado a empresa alguna para la participación de los menores en el promocional referido, se evidencia que es el único responsable por su participación sin el debido consentimiento parental o, en su caso, de los tutores, en el promocional político electoral pautado por ese mismo instituto político.

De la misma manera la resolución **TESIN-PSE-39-2021**, emitida por el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, declara la existencia de la infracción por incurrir en actos violatorios a los Lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños, y adolescentes en materia político-electoral por parte de Fernando Pucheta Sánchez, candidato a la presidencia municipal de Mazatlán, mismo que señala lo siguiente:

En el perfil de la red social Facebook del denuncia, los días 14 de marzo, 09, 10, 14, 15, 19, y 21 de abril, 06, 07, 17, y 28 de mayo, publica y difunde varias imágenes de niños, niñas y adolescentes, ello para promocionar su campaña política y posicionar su imagen ante los electores, lo cual a su decir, vulnera el derecho a la intimidad de los infantes que aparece en su promoción electoral, sin cumplir con la normativa electoral ya que divulga el rostro de niños y niñas sin tener el consentimiento de las personas que ejercen sobre ellos la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente en función de la edad y madurez, sin que se advierta que el denunciado haya difuminado el rostro de los menores.

Marco normativo. Interés superior de la niñez. -

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 19, establece que toda niña, niño y adolescente, tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del estado.

Por su parte la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña en su artículo 3, establece que en todas las medidas que los involucren se

deberá atender como consideración primordial el interés superior de la niñez.

sobre lo anterior, el comité de los derechos del niño y de la niña de la organización de las naciones unidas, en su observación general 14 del 2013, sostuvo que el concepto del interés superior de la niñez, implica tres vertientes;

Derecho sustantivo: Consistente en el derecho de la niñez a que su interés superior sea valorado y tomado como de fundamental protección cuando diversos intereses estén involucrados, con el objeto de alcanzar una decisión sobre la cuestión a resolver.

Un principio fundamental de interpretación legal: cuando se esté ante una previsión legal abierta, a más de una interpretación, se debe optar por aquella que ofrezca una protección más efectiva al interés superior de la niñez.

una regla procesal: cuando exista una decisión que pudiera afectar a la niñez o adolescencia, específicamente o en general a un grupo identificable o no identificable, en el proceso para la toma de la misma, se debe incluir una evaluación del posible impacto, ya sea negativo o positivo, de la decisión sobre la persona menor de edad involucrada.

Así mismo se ha señalado que el concepto de interés superior de la niñez no es nuevo, sino que ya se consagraba en la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, y en la convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, por lo que se toma como un concepto dinámico que debe evaluarse adecuadamente en cada concepto., cuyo objetivo debe ser el garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos para él o la menor.

Por su parte el artículo cuarto de nuestra Constitución General, en su noveno párrafo establece que el Estado en todas su decisiones y actuaciones velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando así de manera plena sus derechos.

Así mismo, en la ley general de las niñas, niños y adolescentes, en sus artículos segundo y dieciocho se establece que el interés superior de la niñez, deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucren niñas, niños y adolescentes.

Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en la jurisprudencia de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO", que, para la determinación en concreto del interés superior de la niñez, se debe atender a sus deseos, sentimientos, y opiniones, siempre que sean compatibles con sus necesidades vitales.

Aparición de niñas, niños, y adolescentes en la propaganda electoral.

La propaganda electoral difundida por los partidos políticos, se encuentra amparada por la libertad de expresión, que se consagra en el artículo sexto Constitucional, sin embargo, dicha libertad no es absoluta pues encuentra sus límites en la dignidad, y reputación de las personas y los derechos de las mismas, dentro de las cuales se encuentran las de los niños, niñas y adolescentes.

Por lo expuesto el Instituto Nacional Electoral emitió los Lineamientos para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en materia político-electoral, cuyo objetivo es establecer las directrices para la protección de los citados que aparezcan en la propaganda político-electoral, mensajes electorales y en actos políticos, actos de precampaña o campaña de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas independientes, así como de los mensajes transmitidos por las autoridades electorales, federales y locales, o las personas físicas o morales que se encuentren vinculadas directamente a uno de los sujetos mencionado, atendiendo a su calidad o naturaleza jurídica, por cualquier medio de comunicación y difusión, incluida las redes sociales o cualquier plataforma digital, sea esta transmitida en vivo o videograbada, debiendo ajustar los sujetos antes mencionados sus actos de propaganda político-electoral, o mensajes a través de radio o televisión, toda vez que:

- d. pueden aparecer de manera directa e incidental en la propaganda.
- d. Cuando se utilice la imagen, voz o cualquier otro dato que les haga identificable, se deberá proporcionar la máxima información sobre sus derechos, opiniones y riesgos respecto de su aparición en la propaganda político electoral.
- d. Si la aparición es incidental y ante la falta de consentimientos, se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, voz, o cualquier otro dato que le haga identificable, garantizando la máxima protección de su dignidad o derechos.

Es importante mencionar la Jurisprudencia **20/2019** en la que se determina la obligación que CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN; como sea;

PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º y 4º, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 y 14 de los Lineamientos Generales para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de Propaganda y Mensajes Electorales establecidos por el Instituto Nacional Electoral; y en la Jurisprudencia de la Sala Superior 5/2017, de rubro PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CUMPLIRSE CUANDO SE DIFUNDAN IMÁGENES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, se advierte que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. En ese sentido, cuando en la propaganda político-electoral, independientemente si es de manera directa o incidental, aparezcan menores de dieciocho años de edad, el partido político deberá recabar por escrito el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o tutela, y en caso de que no cuente con el mismo, deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que haga identificable a los niños, niñas o adolescentes, a fin de salvaguardar su imagen y, por ende, su derecho a la intimidad.

Aunado a lo anterior, la resolución número **SUP-JE-144/2021**, Sentencia que confirma la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, en el procedimiento especial sancionador, que declaró existente la violación a los requisitos sobre la aparición de menores en propaganda electoral, atribuida a Fernando Alejandro Larrazábal Bretón y al Partido Acción Nacional, este último promovente del juicio electoral. señala lo siguiente;

La imagen de una niña, niño o adolescente en fuentes de acceso público es insuficiente para poderla incluir en propaganda electoral a) Marco jurídico La imagen es la reproducción identificable de los rasgos físicos de una persona sobre cualquier soporte material. 9 El derecho a la propia imagen constituye uno de los derechos inherentes de la persona, que le permite disponer de su apariencia; considerado por la Suprema Corte como un derecho de defensa y garantía esencial para la condición humana, porque puede reclamarse tanto en defensa de la intimidad violada o amenazada como exigir del Estado que prevenga la existencia de eventuales intromisiones que lo lesione. 10 Si bien no es un derecho absoluto tendría que justificarse su intromisión por un interés público, o bien, cuando se cuente con el consentimiento u autorización de la persona. 11 Estos límites sobre la captación, reproducción o publicación de la imagen de una persona tratándose de menores de edad exige una protección reforzada debido al interés superior de la niñez. El interés superior de la niñez es un principio constitucional y convencional de interpretación que ante la toma de una decisión que involucre niñas, niños y adolescentes se debe evaluar y ponderar las 9 Véanse artículos 16 y 17 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal. 10 Véase tesis P. LXVII/2009, emitida por el Pleno, de rubro: "DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA." 11 Por ejemplo, la Ley Federal del Derecho de Autor establece como infracción en materia de comercio el utilizar una imagen de una persona sin su autorización o la de sus causahabientes (artículo 231, f.II). SUP-JE-144/2021 10 posibles repercusiones en sus derechos y asegurar una protección plena. 12 Dicho principio exige la prevalencia de los derechos de la infancia frente a cualquier otro interés, por lo que ante un conflicto se debe

ponderar por encima de cualquier otro ese derecho infantil.¹³ Así, la Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 3 que el niño (a) tiene derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten.¹⁴ De modo que, cualquier medida o decisión pública que pueda afectarlos (a) requiere adoptar medidas reforzadas o gravadas, para protegerlos con una mayor intensidad.¹⁵ 12 Véase artículo 4º de la Constitución, en su párrafo noveno, que dice: "En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez." Asimismo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece en su artículo 2 y 3 párrafos: "El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales." 13 Acción de inconstitucionalidad 2/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pfo. 129: "En suma, el ejercicio de los derechos fundamentales de las niñas y los niños se encuentran por encima de cualquier otro interés, incluyendo el de sus padres, pues, al ser la infancia concebida ya como sujeto de derechos, los niños y las niñas pueden ejercerlos en todo momento y las autoridades están no sólo obligadas a garantizar ese ejercicio, sino a velar porque el mismo se cumpla. Cuando se anteponen los derechos de la infancia con los de sus padres, la autoridad tiene obligación de ponderar por encima de cualquier otro, ese derecho infantil." 14 Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 15 Tesis aislada 1a. LXXXIII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL." SUP-JE-144/2021 11 Por eso, las autoridades del Estado deben garantizar y sancionar aquellas intromisiones arbitrarias e ilegales en la intimidad de las niñas, niños y adolescentes, que atenten contra su honra, imagen y reputación. Así, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes considera una violación a su intimidad, cualquier manejo directo de su imagen en los medios de comunicación con una concesión o medios impresos (art. 77). Asimismo, dicha ley considera una vulneración a la intimidad de las y los menores, cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación, bien porque menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o los ponga en riesgo. Ahora bien, el INE emitió los Lineamientos para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes que aparezcan en la propaganda políticoelectoral. Los sujetos obligados a esas directrices son los partidos políticos, coaliciones, candidaturas, autoridades y personas físicas o morales que se encuentren vinculadas. Los Lineamientos obligan a que en cualquier acto, mensaje o medio de difusión de propaganda político-electoral en el que aparezcan niñas, niños o adolescentes ya sea de manera directa o incidental, debe existir el consentimiento de quien o quienes ejerzan la patria potestad o el tutor o, en su caso, la autoridad debe suplirlos. Al igual deben contar con las manifestaciones de los menores sobre su opinión libre e informada respecto a la propaganda en la que participen. En caso de que no se tenga esa documentación, independientemente si la aparición fue directa o incidental se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que haga SUP-JE-144/2021 12 identificable a los niños, niñas o adolescentes, a fin de salvaguardar su imagen y, por ende, su derecho a la intimidad. 16 También, este órgano jurisdiccional ha señalado que los Lineamientos son aplicables en las imágenes que difundan las candidaturas en redes sociales. 17 b. Valoración de la Sala Superior El actor se duele de que la responsable omitió pronunciarse respecto a que en el motor de búsqueda "https://tineye.com" se podía observar que al menos hay otras ciento un publicaciones que utilizan la misma imagen genérica de la menor que apareció en las publicaciones del candidato denunciado y que no se podía presumir que el material hubiera sido producido en México o que correspondiera al presente año. Señaló que la plataforma estaba sujeta a las leyes de Israel con uso lícito de la propiedad intelectual. Al respecto, el Tribunal local determinó que los Lineamientos del INE eran aplicables sin importar que la imagen hubiera sido generada en otro país o tuviera un uso comercial, por lo que debían observarse las pautas de consentimiento e información ahí establecidas. Esta Sala Superior considera apegada a Derecho la determinación de la responsable porque el partido político parte de la premisa inexacta de que si las imágenes de menores

se alojan en algún sitio público es innecesario demostrar una autorización para su uso en propaganda electoral. Jurisprudencia 20/2019 de rubro: "PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN." Véase tesis XXIX/2019, de rubro: "MENORES DE EDAD. LOS LINEAMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA SU PROTECCIÓN, SON APLICABLES A LAS IMÁGENES QUE DE ELLOS DIFUNDAN LAS CANDIDATURAS EN SUS REDES SOCIALES EN EL CONTEXTO DE ACTOS PROSELITISTAS." SUP-JE-144/2021 La premisa es incorrecta porque: El derecho a la imagen es uno de los derechos esenciales de la persona, que tratándose de menores de edad requiere de un escrutinio más estricto sobre su difusión, reproducción o captura, derivado del interés superior de la niñez y de que son un grupo vulnerable. Por eso, en materia electoral se necesita recabar el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela y la opinión informada de la o el menor, sin que se prevean excepciones al respecto. No puede extenderse un permiso o derecho de autor para disponer de una imagen de un infante o adolescente para usos electorales. En efecto, una autorización o consentimiento de una imagen para uso comercial o para aparecer en cierta página o sitio web no puede considerarse una cláusula abierta y usarse para fines no expresamente señalados. Pues la forma en cómo y dónde se muestran a los demás es un derecho esencial de toda persona derivado de su dignidad humana, que impide una difusión irrestricta de ésta. Más aún si la imagen o fotografía corresponde a menores de edad, el escrutinio es aún más estricto, porque no se puede perder de vista que ellas y ellos precisan de la representación de un adulto y son un grupo vulnerable que requieren una protección reforzada ante una posible afectación a su desarrollo. Por esa razón, en materia electoral rigen los Lineamientos emitidos por el INE que fijan los requerimientos para que puedan aparecer niñas, niños y adolescentes en la propaganda electoral. SUP-JE-144/2021. Los Lineamientos no establecen alguna excepción en su aplicación, incluso son exigibles en aquellos casos de apariciones incidentales de menores en propaganda electoral. Por lo que también en esos casos, los sujetos obligados deben recabar el consentimiento de la madre, padre o tutor, o en su caso, de la autoridad que los supla y de la opinión informada de la o el menor, de lo contrario tendrán que difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, voz o cualquier otro dato que los haga identificables. La circunstancia de que no existan hipótesis de excepción en las que sea innecesario el consentimiento es precisamente porque se trata de menores de edad, a los que se les debe garantizar la máxima protección de la dignidad y sus derechos. Si un partido político no confeccionó o adquirió la imagen no lo releva de la obligación constitucional y convencional de salvaguardar el interés superior de cualquier niña, niño o adolescente que aparezca en su propaganda política electoral. Lo anterior, debido a que los partidos políticos y las personas candidatas son responsables de proteger los derechos de la infancia desde el momento en que deciden insertar tales imágenes en su propaganda. Sin que sea suficiente exhibir un permiso del uso de la imagen porque en todo caso habría que revisar los términos y condiciones en que fue emitido, es decir, que contenga la autorización de quienes representan al menor y, en su caso, un consentimiento informado del menor, pero, sobre todo, que permita su utilización para fines político electorales. De ahí que, deba desestimarse el planteamiento de que por tratarse de una fotografía extraída de una galería digital pública, eran inexigibles los Lineamientos porque esa razón es insuficiente para concluir que la SUP-JE-144/2021 15 imagen, el honor y la intimidad de la menor en cuestión efectivamente se encuentre protegido en ese sitio electrónico. 2. El partido no demostró tener una autorización para el uso electoral de la imagen de la menor Era deber del partido demostrar que efectivamente tuviera una autorización electoral para poder incluir la imagen de la menor en las publicaciones del candidato. Sin embargo, el actor se limita a sostener que deben existir excepciones en la aplicación de los Lineamientos cuando la persona no está expuesta a riesgos que afecten su integridad personal. De modo que se trata de afirmaciones genéricas y subjetivas sin sustento probatorio que permita corroborar la licitud y autorización electoral para divulgar la fotografía de la menor, pues el hecho de que ésta se encuentre alojada en un buscador de Internet no equivale a demostrar que sea lícita su aparición. Máxime si se considera que la información, documentos, imágenes que circulan en la Red no necesariamente son lícito, dado que no hay un control previo sobre el contenido de las plataformas electrónicas. Incluso tratándose de niñas, niños y adolescentes hay muchos riesgos de que sus fotografías, imágenes, videos circulen sin autorización alguna y debido a que no todos pueden reclamar por sí mismos la violación a sus derechos puedan impedir su divulgación. En esos casos se deben adoptar medidas mucho más estrictas sobre imágenes de menores alojadas en redes sociales o en la web. Por tanto, carece de razón el partido al sostener que era suficiente con demostrar que la imagen aparece en un buscador de internet y que ha sido publicada en infinidad de páginas electrónicas, dado que no SUP-JE-144/2021 16 demuestra que su difusión o divulgación sea lícita y, menos, para fines electorales. La imagen denunciada correspondía a una menor con una discapacidad lo que exige una tutela reforzada En las constancias de autos se

aprecia que la menor incluida en las publicaciones del candidato tiene síndrome de Down, que es una alteración genética que puede llevar algún grado de discapacidad intelectual. En ese sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad garantiza que todos los niños y niñas gocen plenamente de los derechos humanos en igualdad de condiciones con los demás niños y que puedan expresar su opinión libremente sobre las cuestiones que les afecten (art.7). También, se debe garantizar su derecho a expresar su opinión y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad. Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en su artículo 56 que tienen derecho a que en todo momento a que se les facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que les permitan obtener información de forma comprensible. Por ello, al estar involucrada una niña con una discapacidad exige que se hubieran respetado los principios de no discriminación, de una protección reforzada y atender a la especial vulnerabilidad en que se encuentran. Garantizando a la niña su derecho a opinar y a recibir información de manera accesible, para poder divulgar su fotografía. 18 Información extraída de: <https://www.un.org/es/observances/down-syndrome-day> SUP-JE-144/2021 17 Sin embargo, dado que nada de eso obra en el expediente de forma alguna puede concluirse que todas estas condiciones ocurrieron para la difusión de su imagen. Por lo que, esta Sala Superior concluye que fue correcta la determinación de la responsable porque el candidato vulneró el interés superior de la niñez lo que actualizó la infracción y, en el caso del partido político hoy actor, le generó una responsabilidad indirecta.

Concatenado a lo anterior, la resolución número **SRE-PSC-039/2017**, Sentencia que resuelve el procedimiento especial sancionador UT/SCG/PE/PRI/CG/39/2017, en la que se determina la existencia del uso indebido de la pauta por parte del Partido Unidad Democrática por Coahuila, de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila; así como la vulneración al interés superior del menor por parte de la citada Coalición, como sea;

Por cuestión de método, en primer lugar, se estudiará, de manera conjunta, el supuesto uso indebido de la pauta por parte de la Coalición y tres de sus cuatro partidos, por supuestamente haber promocionado a la Coalición durante la precampaña y, si la Coalición, indebidamente, difundió promocionales relacionados con el proceso de selección interna del PAN y uno de sus precandidatos, a través de su tiempo en radio y televisión; posteriormente, se abordará lo correspondiente a la supuesta promoción indebida de la Coalición por parte del Partido Unión Democrática de Coahuila; y por último, se examinará lo SRE-PSC-039/2017 18 relacionado con el uso de imágenes de menores de edad en uno de los promocionales de la Coalición. 3.1 Marco Normativo respecto del uso indebido de la pauta. La Constitución Federal en su artículo 41, Base III, Apartados A y B, así como la Ley Electoral en los diversos 159, párrafos 1 y 2, 160, párrafos 1 y 2 y 226, párrafo 5, han establecido que los partidos políticos nacionales tienen derecho al uso permanente de los medios de comunicación social. Asimismo, que el INE es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los fines propios, a los de otras autoridades electorales, así como a los partidos políticos; y, que será también este quien garantizará a los partidos políticos el uso de sus prerrogativas constitucionales en radio y televisión. Además, establecen que los precandidatos tienen prohibido contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempo en cualquier modalidad de radio y televisión. Por otro lado, el artículo 226 de la referida Ley Electoral, en su párrafo cuarto, señala que los partidos políticos harán uso del tiempo en radio y televisión que conforme a Derecho les corresponda, para la difusión de sus procedimientos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular. Asimismo, que los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, accederán a radio y televisión en el tiempo que corresponda a los institutos políticos. En este mismo sentido, el artículo 168 de la Ley Electoral, dispone que cada partido político podrá decidir libremente la asignación, por tipo de precampaña, de los mensajes que le correspondan, incluyendo su uso para precampañas locales en las entidades federativas. SRE-PSC-039/2017 19 A su vez, el Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral del INE en su artículo 5, párrafo primero, fracción III, inciso i), dispone que por materiales se entiende a los promocionales o mensajes realizados por los partidos políticos, coaliciones o candidatos/as independientes y autoridades electorales, fijados o reproducidos en los medios de almacenamiento y formatos que determine el INE, para su transmisión en términos de lo que dispone la Constitución Federal y la Ley Electoral. Mientras que, en el inciso m), establece que la pauta es el documento técnico en el que se distribuye el tiempo, convertido a número de mensajes, que corresponde a los partidos políticos, coaliciones y candidatos/as independientes, así como a las autoridades electorales en un periodo determinado, precisando la estación de radio o canal de televisión, la hora o rango en que debe transmitirse cada mensaje, y el partido político, coalición, candidato/a independiente o autoridad electoral al que

corresponde. El artículo 7 párrafos 1, 3, 4 y 9 del citado Reglamento establece que los partidos políticos y sus candidatos y precandidatos a cargos de elección popular, accederán a mensajes de radio y la televisión, a través del tiempo que la Constitución Federal otorga como prerrogativa en la forma y términos establecidos legalmente; asimismo, que el INE es la única autoridad competente para ordenar la transmisión de propaganda política o electoral en radio o televisión, para el cumplimiento de sus propios fines y de los partidos políticos; y, que la propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas electorales difundan por radio y televisión los partidos políticos, se ajustarán a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6 y el artículo 41, Base III, Apartado A, de la Constitución Federal; así como el artículo 25, fracción I, incisos a) y u), de la Ley de Partidos Políticos y 247, párrafo 1, de la Ley Electoral. SRE-PSC-039/2017 20 El artículo 13, párrafo cuarto, dispone que, si por cualquier causa un partido político no realiza actos de precampaña electoral, los tiempos a que tengan derecho serán utilizados para la difusión de mensajes del partido político de que se trate, en los términos que establezca la ley. Asimismo, el artículo 37, párrafo 1, establece que, en ejercicio de su libertad de expresión, los partidos políticos determinarán el contenido de sus promocionales, por lo que no podrán estar sujetos a censura previa por parte del INE ni de autoridad alguna, sino, en su caso, a ulteriores responsabilidades. Ahora bien, no pasa desapercibido que a nivel local, el artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Coahuila, establece que los partidos políticos tendrán derecho al uso permanente de los medios de comunicación social y que el acceso a radio y televisión durante los procesos electorales se realizará en los términos establecidos en los ordenamientos antes referidos. La Ley General de Partidos Políticos establece que los partidos políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones para las elecciones de Gobernador, diputados a las legislaturas locales de mayoría relativa y ayuntamientos, de conformidad con el artículo 87, numeral 2. De conformidad con el artículo 88, numerales 1, 2, y 3, de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos podrán formar coaliciones totales, parciales y flexibles. Se entiende como coalición total, aquella en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso federal o local, a la totalidad de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral. Tratándose de coaliciones, se estará a lo previsto en los artículos 91, numerales 3, 4 y 5 de la Ley General de Partidos Políticos; 167, numeral 2 de la Ley General de SRE-PSC-039/2017 21 Instituciones y Procedimientos Electorales y 16 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, que establecen que a la coalición total que constituyan los partidos políticos les será otorgada la prerrogativa de acceso a radio y televisión en un treinta por ciento que corresponde distribuir en forma igualitaria, como si se tratara de un solo partido, incluso para efectos de la optimización de promocionales sobrantes. En cambio, para el setenta por ciento restante, deben ser tratados en forma separada. En el supuesto de coaliciones totales, el convenio de coalición establecerá la distribución de dicho tiempo entre los candidatos de la coalición. Asimismo, es aplicable a las coaliciones electorales, cualquiera que sea su ámbito territorial y tipo de elección, en todo tiempo y circunstancia, lo previsto por el artículo 91, numeral 4, de la Ley General de Partidos Políticos. En todo caso los mensajes en radio y televisión que correspondan a candidatos de coalición deberán identificar esa calidad y el partido responsable del mensaje. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el artículo 227 de la Ley General, se entiende por precampaña el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido; y por actos de precampaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado a un cargo de elección popular. El párrafo 3 del citado precepto legal, así como los párrafos 1 y 3 del artículo 211 de dicha ley, estipulan que la propaganda de precampaña es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, y expresiones que durante el periodo establecido por la ley y el que señale la convocatoria respectiva, difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a SRE-PSC-039/2017 22 conocer sus propuestas, debiendo señalarse de manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de quien es promovido. 3.2. Casos concretos. Como se ha quedado acreditado con antelación, no se tiene constancia de que los Partidos Acción Nacional y Encuentro Social hubieran difundido alguno de los spots denunciados, por lo que atendiendo al principio indubio pro reo, debe absolverse a dichos partidos de las conductas que se les imputa; y por tanto, únicamente se analizará la difusión de los promocionales pautados por el Partido Unidad Democrática por Coahuila y de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila. Sirve como sustento a lo anterior, lo determinado por la Sala Superior en la jurisprudencia intitulada "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES"⁷ en donde determinó que cuando no se cuente con una prueba que acredite la responsabilidad de los denunciados, lo procedente es absolverlos. 3.2.1 Uso indebido de la pauta por parte de la Coalición Alianza Ciudadana por

Coahuila, por la difusión de spots en precampaña. Como se ha dicho, el primer punto a dilucidar es si existió un uso indebido de la pauta, ya que, en concepto del promovente, no está permitido que las Coaliciones, por sí mismas, puedan difundir spots en radio y televisión, durante la etapa de precampañas, pues, en su consideración, dicha prerrogativa es de uso exclusivo de los partidos políticos que contienden en el proceso electoral correspondiente. 7 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60. SRE-PSC-039/2017 23 En ese sentido, el promovente refiere que con la difusión de spots de la Coalición se está realizando una sobreexposición de dicho consorcio político, ya que las coaliciones únicamente se pueden posicionar, a sí mismas, durante la etapa de campañas. Dicho lo anterior, esta Sala Especializada considera que es inexistente esta falta atribuida a la Coalición, ya que el actor parte de una premisa errónea; a saber: "las coaliciones no tienen acceso a radio y televisión durante las precampañas". En efecto, de la lectura integral de la denuncia, se advierte que el actor encamina sus argumentos a evidenciar que sólo los partidos políticos tienen acceso a radio y televisión durante la etapa de precampañas, mientras que las Coaliciones tendrán acceso a partir del inicio de las campañas. Sin embargo, de conformidad con lo previsto en los artículos 87, 88, párrafo 2, 91, párrafos 3, 4 y 5 167, párrafo 2 de la Ley de Partidos; 167, párrafo 2 de la Ley General, en relación con los numerales 13, párrafo 4 y 16 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, los partidos políticos podrán formar coaliciones para contender de manera conjunta en alguna elección, siendo que una de esas modalidades puede ser la de Coalición total, como lo es en el caso que nos ocupa. Además, se advierte que las Coaliciones podrán acceder a tiempo aire en radio y televisión, ya sea en el periodo de precampaña o campaña. Para ello, en caso de Coalición total, se le considerará como si fuera un solo partido político; y por tanto, tendrá acceso al 30% del tiempo en radio y televisión que se reparte de manera igualitaria entre los partidos. No obstante, no tendrá acceso al 70% del tiempo que se distribuye de manera proporcional entre dichos institutos políticos, ya que en este caso, los partidos coaligados accederán a dicha prerrogativa, de manera individual y separada, SRE-PSC-039/2017 24 atendiendo a la votación que cada uno hubiera obtenido en la elección del congreso local inmediata anterior. Bajo ese contexto, ha quedado demostrado que el Comité de Radio y Televisión del INE concedió el uso de la prerrogativa constitucional a la Coalición, situación que fue confirmada por la Sala Superior al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP74/2017, en donde estableció que en el artículo 167 de la Ley General no se hacía ninguna distinción en cuanto a la etapa del proceso electoral en la que se debía repartir el tiempo en radio y televisión destinado a las coaliciones; y por tanto, la regla de distribución que en dicho artículo se contemplaba debía ser aplicada tanto a precampañas como campañas. De ahí que no asista la razón al promovente cuando refiere que la Coalición usó indebidamente la pauta en radio y televisión al difundir los spots: "Registro Coahuila Coalición", en su versión televisiva con número de folio RV00097-17 y en su versión de radio con el registro RA00106-17. 3.2.2 Uso indebido de la pauta por parte de la Coalición, al difundir spots en donde difundió actos relacionados con el proceso de selección interna del PAN. En este punto, el promovente refiere que el hecho de que la Coalición difundiera promocionales en los que se aludía al proceso de selección interna del PAN y a uno de sus precandidatos, es contrario a Derecho, puesto que el PAN únicamente podía haber destinado su pautado para promocionar cualquier acto relacionado con su elección interna. SRE-PSC-039/2017 25 En ese sentido, el promovente refiere que el hecho de que se utilizara el emblema de la Coalición, puede inducir al error de que lo que se promociona es un precandidato de dicho consorcio político; y no así, del PAN en lo individual. Al respecto, como se ha dicho con antelación, las Coaliciones gozan de la prerrogativa de acceso a radio y televisión para el periodo de precampaña, siendo que en el caso que nos ocupa, la autoridad administrativa electoral consideró que la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila era una coalición total; y por tanto, para efectos de la distribución de tiempo aire se le debía considerar como un solo partido y, en consecuencia, sólo tenía acceso a la distribución del 30% que se reparte de manera igualitaria entre los partidos políticos. Por lo que al tener acceso en radio y televisión, dicha Coalición tenía la posibilidad de difundir propaganda genérica o de precampaña, con su propio tiempo aire. Cabe mencionar que similar criterio utilizó la Sala Superior al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP-74/2017, en donde determinó que: "una vez asignado el tiempo en radio y televisión que le corresponde a la coalición [...] para las etapas electorales, corresponde a dichos institutos políticos, en ejercicio de su libre autodeterminación, a través de su convenio de coalición, establecer la forma y los términos en que se hará uso del tiempo que le fue asignado, mismo que puede ser usado no sólo para la difusión de propaganda de precampañas, sino también para la difusión de propaganda genérica". Así, resulta evidente que las coaliciones están facultadas para difundir spots en radio y televisión, ya sea con contenido genérico o con propaganda electoral atinente a una precampaña; sin embargo, dicha prerrogativa no es absoluta ni ilimitada, sino que se debe ajustar a los parámetros que rigen la difusión de propaganda en la época de precampaña. SRE-PSC-039/2017 26 Al

respecto, la Sala Superior al emitir la jurisprudencia intitulada: "RADIO Y TELEVISIÓN. LA UTILIZACIÓN DE LOS TIEMPOS ASIGNADOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PARA PROMOCIONAR LA IMAGEN DE CANDIDATOS POSTULADOS POR OTROS INSTITUTOS POLÍTICOS O COALICIONES, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD"⁸ determinó que los partidos políticos no deben utilizar los espacios en radio y televisión que les corresponden, para promocionar la imagen de candidatos postulados o registrados por otros institutos políticos o coaliciones, pues puede generarse una exposición desigual y, en consecuencia, un mayor posicionamiento a alguna de las opciones políticas en detrimento de las restantes, contraviniendo el principio de equidad en la contienda electoral. En ese contexto, esta Sala Especializada considera que los partidos políticos y coaliciones, ya sea durante las precampañas y campañas, únicamente podrán hacer uso de los tiempos o pautas en radio y televisión para difundir su propia propaganda política o electoral, sin que exista posibilidad alguna de que algún precandidato o candidato de un diverso partido político o coalición pueda participar o beneficiarse de dicha prerrogativa, dado que ello afectaría el principio de equidad en el proceso de selección interna de un partido, puesto que se estaría dotando de mayores beneficios a una sola oferta política. Precisado lo anterior, debe recordarse que en el caso, se tiene acreditado que durante el periodo de precampañas del proceso electoral del estado de Coahuila, la Coalición Alianza, como parte de su prerrogativa en radio y televisión, difundió los spots: "Registro Coahuila Coalición" con folio RV00097-17 [versión televisión] y RA00106-17 [versión radio], cuyo contenido se muestra a continuación: RV00097-17 ⁸ Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016. SRE-PSC-039/2017 29 En tales circunstancias, a juicio de esta Sala Especializada, dichos promocionales deben ser considerados como spots de precampaña, puesto que el mensaje que se emitió se encontraba vinculado con el proceso de selección interna del PAN, uno de los precandidatos que contendió y la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila. En ese contexto, esta Sala Especializada considera que es existente la infracción atribuida a la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, relacionada con el uso indebido de la pauta que le fue asignada en el periodo de precampaña de la elección de Gobernador de Coahuila. Ello, habida cuenta que ha sido acreditado que los spots controvertidos son de carácter electoral, y que están encaminados a difundir actos relacionados con el proceso de selección interna que, de manera individual, realizó uno de los partidos coaligados, sin que mediara una justificación para ello, puesto que en el convenio no se estableció que la Coalición participaría o coadyuvaría en la elección del Candidato a Gobernador que realizaría el PAN. Lo anterior se considera así, ya que con independencia de que durante las precampañas, el PAN formó parte de la Coalición, lo cierto es que de conformidad con el convenio que integró el consorcio político, ningún otro partido coaligado o la Coalición misma, estaban en posibilidades de realizar actos de promoción de precandidatos o de etapas del proceso de selección interna del PAN, puesto que en el convenio únicamente se refirió que el candidato emanaría de la selección de candidatos del PAN, atendiendo a la determinación que adoptara la Comisión Permanente del Consejo Nacional de dicho partido. En esa lógica, la difusión de promocionales vinculados a la precandidatura de José Guillermo Anaya Llamas debió ser realizada exclusivamente por el PAN con el tiempo que, de manera individual, le correspondía en el periodo de precampaña; es decir, que los spots alusivos a dicho precandidato debieron estar comprendidos entre el tiempo que le fue asignado al PAN como parte del 70% del tiempo aire que SRE-PSC-039/2017 30 se distribuyó de manera proporcional a cada uno de los partidos en lo individual y del cual no le fue asignado a la Coalición denunciada. Lo anterior, ya que la Coalición denunciada, por sí misma, no llevó a cabo un proceso de selección interna, sino que dicha situación fue realizada de manera particular por uno de sus partidos coaligados; y por tanto, la Coalición no estaba facultada para promocionar actos de precampaña que pudieran causar una afectación a la equidad del proceso de selección interna del PAN, al otorgar mayor tiempo del que debía de tener alguno de los sujetos que participarían en dicho proceso electivo. En efecto, al no realizar un proceso de selección interna, la Coalición únicamente debió constreñirse a difundir propaganda genérica sobre temas de interés general; y no así, la exhibición de promocionales con propaganda de precampaña; cuestión diversa hubiera sido que en el convenio de coalición se hubiera establecido que para la elección de candidato a Gobernador, dicho consorcio político realizaría un proceso de selección en el cual se incluyeran, entre otros, a los precandidatos de los partidos coaligados; o bien, que la Coalición participaría en el proceso interno que implementara individualmente alguno de sus coaligados, pues en estos supuestos se justificaría que el tiempo en radio y televisión de la Coalición fuera distribuido y usado por los diferentes precandidatos que participaran en dicha elección interna. De ahí que la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila utilizó indebidamente su pauta en radio y televisión que le fue asignada durante el periodo de precampaña del proceso electoral que se desarrolla en el estado de Coahuila; y por tanto, contravino lo previsto en 41 párrafo segundo base III apartado A, de la Constitución; 159; 211, 227, párrafo 3, y 443, párrafo 1 incisos

a) y n), de la Ley General; 25 párrafo 1 incisos a) y u), de la Ley General de Partidos Políticos; así como 13, párrafos 1 y 3 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. SRE-PSC-039/2017 31 3.2.3 Uso indebido de la pauta por el Partido Unidad Democrática de Coahuila, por la promoción de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila. En este punto, el promovente aduce que dicho partido usó indebidamente la pauta que le fue asignada en el periodo de precampaña de la elección que actualmente se desarrolla en el estado de Coahuila, al haber promocionado a la Coalición por medio de la difusión de los spots: "Coahuila libérate" con folio RV001918 [versión televisión] y RA002366 [versión radio]; "Lenin Precampaña" con folio RV00037-17 [versión televisión] y RA00039-17 [versión radio]; y "Video Alianza" con folio RV00100-17 [versión televisión] y RA00114-17 [versión radio]. En ese sentido, el promovente refiere que es ilegal que se promoció el logotipo de una coalición en la etapa de precampaña, puesto que se le está posicionando en un momento que no es permitido; más aún, cuando, en su concepto, en dichos promocionales se advierten propuestas de gobierno y campaña, dirigidas a la ciudadanía en lo general. Al respecto, como ya se ha señalado, los partidos políticos gozan de la prerrogativa constitucional de acceso a la radio y televisión, ya sea durante o fuera de algún proceso electoral, puesto que su acceso es de manera permanente atendiendo a las modalidades que establece la propia Constitución y las normas electorales. Bajo ese contexto, debe decirse que en el caso particular, se tiene constancia de que el Partido Unidad Democrática de Coahuila no realizó un proceso de selección interna para elegir candidato a Gobernador de Coahuila, puesto que atendiendo al convenio de coalición que firmó, el candidato a dicho puesto sería el que resultara electo en el proceso interno del PAN. Cada vez trabajas más y te pagan menos. ¿Qué pasa Coahuila? Alégrate, decídeté, tú tienes la solución. Ahora les toca sufrir a ellos. Que paguen por lo que han hecho. Es ahora o nunca. Voz de un hombre: Unidad Democrática de Coahuila. UDC. Voz de un hombre: Coahuila. Libérate. Como puede advertirse, en estos spots no se hace referencia alguna a la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, sino que únicamente se utiliza el nombre y logo del Partido Unidad Democrática de Coahuila; además, contrario a lo afirmado por el actor, no se aprecia alguna propuesta de campaña de dicho partido político ni alguna referencia a un plan de gobierno. Por el contrario, lo único que se advierte es el posicionamiento de dicho partido frente al supuesto problema de corrupción y pobreza que existe en el estado de Coahuila; usando para ello preguntas retóricas con las que pretende reafirmar su idea, tales y como lo son: "¿Por qué la corrupción se te hizo tan normal?" y "¿Qué pasa Coahuila?". En esas circunstancias, dichos promocionales deben ser considerados como genéricos, pues únicamente pretenden mostrar el posicionamiento del partido en torno a temas de interés social, sin que se aprecie que se haga algún posicionamiento de alguna fuerza política que pudiera influir en la contienda electoral. Por lo que es factible calificar como dentro de la legalidad estos promocionales. Ahora por lo que hace a los promocionales: Promocional Video Alianza con folio RV00100-17 [versión televisión] Imágenes representativas Voz de un hombre: Para llegar a una meta es necesario construir un camino. Para una sola persona o grupo, la tarea no es fácil. Es tiempo de una Alianza Ciudadana para construir el Coahuila que todos queremos. Este es el reto y la oportunidad. Dejar a un lado el interés personal y darle esperanza a nuestro pueblo. Hasta la victoria. ¡Venceremos! Voz de un hombre: UDC. Voz de un hombre: Libérate. Voz en off: Alianza Ciudadana por Coahuila. En el caso de estos spots, se advierte que el contenido del mensaje es idéntico, puesto que se escucha el uso de las mismas palabras tanto en radio y televisión; lo cual, permite que se estudien de manera conjunta, a fin de evitar repeticiones innecesarias, con la diferenciación del uso de imágenes en el caso del spot televisivo. Como puede advertirse, en estos promocionales se hace alusión a la visión que tienen tanto UDC como la Coalición Ciudadana por Coahuila, respecto del sufrimiento que se causa a los coahuilenses con la división y egoísmo del interés personal; y ante ello, manifiestan una oportunidad de esperanza al renunciar a ese interés individual. En ese contexto, en dichos promocionales no se aprecia alguna referencia que permita deducir que se pretende posicionar a un partido político; o bien, que se está llamando a votar a favor de determinada fuerza política, ya que lo que realmente se tiene es un posicionamiento general, relacionado con la condición social del Estado y la posibilidad de que ésta cambie con la renuncia de los intereses personales de la población en general. En esa tesitura, es indubitable que estos spots contienen un mensaje genérico, habida cuenta que únicamente refieren la postura ideológica del partido, por lo que no se advierte referencias que impliquen un llamado al voto. SRE-PSC-039/2017 46 En este tenor, este órgano jurisdiccional estima que los promocionales denunciados, por la temporalidad en la que fueron difundidos, están apegados a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias en cuanto a su contenido, de tal suerte que no se acredita la infracción, pues no existe prohibición alguna para que durante el periodo de precampañas, el partido político difunda ideas, críticas o manifestaciones en torno a temas de interés general, propio de todo sistema democrático. Esto es, en la época de precampañas, los partidos políticos pueden hacer uso de las pautas en radio y televisión otorgadas por el INE, sin que necesariamente deban contener

mensajes de precampaña o campaña, pudiendo versar sobre cuestiones de carácter general. Por otra parte, tampoco se acredita el argumento del quejoso en el sentido de que la difusión de los promocionales denunciados constituye un uso indebido de la pauta, en razón de que fueron hechos con la finalidad de posicionar ilícitamente a la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila ante el electorado. Lo anterior, ya que se reitera que lo que realmente se difunde es un contenido propio de la ideología del partido político, con expresiones críticas, lo cual no encuentra una prohibición expresa en la legislación aplicable, sino por el contrario, dicho contenido se encuentra permitido a los partidos políticos ya sea fuera o dentro de los periodos electorales, al constituir una de las formas que permiten a los institutos políticos alcanzar los fines constitucionales establecidos en el artículo 41 de la Constitución Federal. En ese sentido, esta Sala Especializada considera que del análisis integral y contextual de los promocionales no es posible presumir algún riesgo de afectación en materia electoral; de ahí que el objetivo de los promocionales otorgados al partido SRE-PSC-039/2017 47 político, en este caso específico, no se encuentra desvirtuado, ya que atendiendo al contenido se trata de materiales genéricos con posicionamiento partidista, por lo que es inexistente la conducta señalada por el Promovente.

3.2.4 Uso indebido de la pauta por la Coalición, al usar imágenes de menores de edad en un spot. Es oportuno señalar que esta Sala Especializada, en un nuevo paradigma de protección de los Derechos Humanos, implementó un método tendente a verificar la posible existencia de alguna situación de vulnerabilidad, en el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad auditiva, o bien, cuando en los promocionales se incluyan personas menores, aun cuando forme o no parte de la controversia. Proceder que es plenamente acorde con lo previsto por el artículo 1º, párrafo tercero de la Constitución Federal; en cuanto ordena que todas las autoridades, incluida por supuesto esta Sala Especializada, tienen la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los Derechos Humanos. Acorde con lo anterior, al verificar el contenido del promocional de televisión con folio RV0097-17 se aprecia la aparición de siete niños. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Al respecto, se tiene en cuenta que el contenido de la propaganda difundida por los partidos políticos se encuentra amparada por la libertad de autodeterminación de contenidos; empero, el ejercicio de dicha libertad fundamental no es absoluta, sino que tiene límites, entre los que se encuentran los vinculados con la dignidad o la reputación de las personas y los derechos de terceros, acorde con lo dispuesto en los artículos 6º, párrafo primero de la Constitución Federal, así como 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dicen: Artículo 6º.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Artículo 19.[...] 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. SRE-PSC-039/2017 50 Destaca de estos preceptos constitucionales y convencionales una limitación coincidente: esto es, el pleno respeto a los derechos de terceros, incluidos, por supuesto los derechos de la niñez, cuya protección, se encuentra expresamente ordenada en el artículo 4º de nuestra Constitución Federal. En tales condiciones, cuando en el uso de las pautas asignadas por el Instituto se difundan mensajes que puedan afectar derechos de terceros, y que en el caso, resultan ser personas menores de edad, se debe garantizar sus derechos en el marco de su interés superior. Ahora bien,

en el orden conceptual, el "interés superior del niño", ha sido descrito por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: "Implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Al amparo de esa previsión convencional, el Estado Mexicano, a través de sus instituciones, autoridades y tribunales, está constreñido a tener en consideración primordial el respeto al interés superior del menor, con la adopción de medidas necesarias para asegurar y maximizar la protección y efectividad de los derechos de las niñas y niños, acorde con lo establecido en los artículos 3, párrafo 1 y 4, de la Convención sobre los Derechos del Niño: Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Artículo 4. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional. SRE-PSC-039/2017 51 Con tal directriz de protección a la niñez, el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes" emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el interés superior del menor tiene las siguientes implicaciones: a) Coloca en plena satisfacción los derechos de los infantes como parámetro y fin en sí mismo; b) Define la obligación del Estado respecto de los niños, niñas y adolescentes; y c) Orienta decisiones que protegen sus derechos. En sincronía con estos postulados, la Primera Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis de rubro: "DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS" estableció que la mera situación de riesgo de los infantes es suficiente para que se estime que se afectan los derechos de la niñez y, ante ello, deben adoptarse las medidas que resulten más benéficas para la protección de los infantes. En el caso, la posible afectación al interés superior del infante se advierte a través de la exposición de la imagen de diversos niños y posibles adolescentes (sin que de esta circunstancia se tenga absoluta seguridad, atento a su fisonomía), de ahí que el análisis se deba hacer en relación al derecho a la propia imagen de los infantes participantes. Entonces la importancia del asunto radica, precisamente, en la protección reforzada que goza la imagen de las y los menores de edad involucrados en el promocional. SRE-PSC-039/2017 52 Por tanto, para el otorgamiento de la salvaguarda judicial es suficiente que se les ubique en una situación de riesgo potencial, sin que sea necesario que esté plenamente acreditado el perjuicio ocasionado, porque, atento a los valores en juego, el interés superior de las niñas y niños, está por encima del ejercicio de la libertad de autodeterminación del contenido de los spots que tienen los partidos políticos. Con ese parámetro de ponderación, el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece, que ningún niño puede ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, ni ataques ilegales a su honra y reputación. Por su parte, los artículos 2, 5, 76, 77 y 78 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes contemplan, igualmente, la salvaguarda de los infantes ante cualquier riesgo de afectación o manejo directo de su imagen, nombre, datos o referencias que permitan su identificación, así: Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán: I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno; II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia. El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la SRE-PSC-039/2017 53 asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley. ... Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años

cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño. ... Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquella que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán orientar, supervisar y, en su caso, restringir, las conductas y hábitos de niñas, niños y adolescentes, siempre que atiendan al interés superior de la niñez. Artículo 77. Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, así como medios impresos, o en medios electrónicos de los que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez. Artículo 78. Cualquier medio de comunicación que difunda entrevistas a niñas, niños y adolescentes, procederá como sigue: I. Deberá recabar el consentimiento por escrito o cualquier otro medio, de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente, respectivamente, conforme a lo señalado en el artículo anterior y a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 76 de la presente Ley, y II. La persona que realice la entrevista será respetuosa y no podrá mostrar actitudes ni emitir comentarios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. En el caso de que no sea posible recabar el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de un menor, éste podrá otorgarlo siempre que ello no implique una afectación a su derecho a la privacidad por el menoscabo a su honra o reputación.

SRE-PSC-039/2017 54 Por otra parte, no se requerirá el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de niñas, niños o adolescentes, cuando la entrevista tenga por objeto que éstos expresen libremente, en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, su opinión respecto de los asuntos que les afecten directamente, siempre que ello no implique una afectación a sus derechos, en especial a su honra y reputación. El interés superior a proteger es la sola posibilidad de poner en peligro su imagen con una latente identificación de su persona. Este principio protector, vinculado al tema, nos orienta a reflexionar que en el caso de la propaganda política o electoral, hay siempre un elemento ideológico que identifica a la opción política, por tanto, la presencia de infantes implica un riesgo potencial de asociar a tales infantes con una determinada preferencia política e ideológica, a una edad que todavía no es oportuna. Lo anterior puede devenir en un riesgo potencial en relación con su imagen, honra o reputación presente, en su ambiente escolar o social y, por supuesto, en su futuro, pues al llegar a la vida adulta pueden aceptar o no aprobar la ideología política, con la cual fueron identificados en su infancia. En esta concurrencia de derechos involucrados, acorde con las disposiciones nacionales e internacionales antes descritas, esta Sala Especializada debe hacer un ejercicio de ponderación el cual se decante por la protección reforzada de los menores de edad involucrados en los promocionales de televisión que se analizan. Con tal parámetro este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a implementar todas aquellas medidas que sirvan para evitar que se presenten situaciones de riesgo potencial que puedan afectar el interés superior del menor en relación con los promocionales de contenido político electoral, como en el asunto. SRE-PSC-039/2017 55 De suma importancia destaca tener la seguridad que los infantes fueron escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece: "Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez". Los requerimientos reforzados tienen sustento en los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a ser informados, como una directriz convencional que debe atenderse por todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales, como lo indica la UNICEF, en las Directrices éticas para la información sobre la infancia; conducentes y aplicables a la aparición de infantes en los spots de los partidos políticos, precisamente porque aparecen en medios de comunicación social como la televisión genera su exposición pública. Este instrumento internacional indica, en lo destacable: "Directrices éticas de UNICEF para la información sobre la infancia Protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la exposición pública ... De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, todos los niños, niñas y adolescentes, sin excepción, deben tener garantizados sus derechos. Uno de esos derechos es el de la protección de la vida privada, por lo que la exposición pública de los niños, niñas o adolescentes... UNICEF plantea una serie de directrices éticas para la

información sobre infancia, que tienen como objetivo aportar orientaciones básicas para los medios de comunicación, pero que también son de utilidad para autoridades administrativas, policiales y judiciales que participan en los procesos de justicia, sobre cómo abordar los temas relacionados con la protección de la infancia a fin de respetar en todo momento su interés superior y su dignidad como seres humanos... Directrices éticas de UNICEF para la información sobre la infancia I. Principios 1. Se deberán respetar la dignidad y los derechos de cada niño o niña en toda circunstancia...." SRE-PSC-039/2017 56 Por tanto, a efecto de garantizar el pleno respeto al interés superior de los infantes, la autoridad administrativa electoral conforme a sus facultades adoptó las medidas necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos que procedan, en los términos apuntados y, en su caso, requirió la documentación necesaria a fin de privilegiar y proteger el interés superior de los niños, niñas y/o adolescentes menores de dieciocho años. Conforme lo anterior, mediante acuerdo de siete de marzo, la Unidad Técnica requirió a la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, remitiera la documentación a través de la cual fuera posible advertir las personas que, en su caso, ejercieran la patria potestad de los menores involucrados; así como el documento en el cual se asentara la libre manifestación de la voluntad de los menores. En respuesta, la Coalición exhibió copia fotostática de siete autorizaciones de uso de imagen y voz, en el que se consigna información como el nombre del menor, domicilio, Ciudad/Estado/Código Postal, Teléfono, RFC o CURP; así como la leyenda: "Soy el padre/la madre (o tutor legal) del menor que ha firmado esta autorización y consentimiento, y por la presente acuerdo que yo y el menor estaremos sujetos a todos los términos y condiciones de la presente." Enseguida de lo anterior, se encuentra consignado el nombre de la persona que se dice ostentar como el padre o madre del menor referido en el formato correspondiente. Al respecto, esta Sala Especializada considera que dichos formatos, al ser pruebas documentales privadas por ser documentos elaborados por particulares y 9 Acorde con lo dispuesto en los artículos 461, párrafo 3, inciso b), así como 462, párrafos 1 y 3, de la Ley General. SRE-PSC-039/2017 57 proporcionados por la Coalición denunciada, por sí solos, resultan insuficientes para acreditar que los menores que en ellos se refiere son los mismos que aparecen en el spot controvertido; más aún, cuando la Coalición no proporcionó ningún otro documento que permitiera identificar plenamente a los menores involucrados. En efecto, en los formatos referidos no hay ningún elemento que permita la identificación visual de los menores y tampoco se adjuntó alguna credencial escolar o documento que permitiera a esta autoridad electoral distinguir a que menor de los que aparecen en el video corresponde cada uno de los permisos. Por lo que los citados formatos no son la prueba idónea para acreditar la persona que supuestamente otorgó el permiso. Aunado a ello, es preciso señalar que con la documentación remitida por la Coalición, tampoco se puede acreditar que las personas que firman la autorización, en realidad ostenten la patria potestad de los menores que aparecen en los videos, puesto que únicamente se aportó copia de la licencia de manejo de cada uno de los signantes, pero se omitió acompañar copia certificada del acta de nacimiento de los menores o de cualquier otro documento oficial con el que se pudiera identificar plenamente al mayor adulto que tuviera los derechos de representación de cada uno de los niños y/o adolescentes que se observa en el spot en comento. En ese sentido, dada la laxitud que presentan los citados formatos y la falta de algún documento que acredite la persona que tiene la patria potestad de los menores, es que esta Sala Especializada no tener por cierta la existencia del consentimiento pleno, cierto e idóneo, por escrito, debidamente firmado por los padres o quienes ejerzan la patria potestad o tutela del menor, pues como se ha manifestado, no hay mayores elementos que permitan concatenar y tener por acreditado que la participación de los niños en el promocional denunciado ocurrió con apego a las formalidades exigibles. SRE-PSC-039/2017 58 Además, respecto al requisito consistente en la manifestación del menor por cuanto hace a su opinión libre y expresa respecto de su participación en el promocional electoral en cuestión, opinión que será valorada atendiendo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, en el caso concreto, el PAN omitió presentar cualquier tipo de documentación para el cabal cumplimiento de este requisito, sin que el partido político emitiera pronunciamiento al respecto, en el presente procedimiento. No pasa desapercibido a esta autoridad que la representación de la Coalición, en su defensa alegó que: • El plazo otorgado para el desahogo y cumplimiento al requerimiento resultaba insuficiente; • Se trata de documentos ajenos y privados, lo que provocó necesariamente una labor de recaudación de dichos documentos; y por tanto, era claro, evidente y lógico, que el tiempo y la posibilidad de los titulares de los documentos no estaba a disposición del partido político; lo cual retrasaba y tornaba difícil su recaudación. • En vista del plazo otorgado, resultaba imposible la protocolización del consentimiento de los padres y los menores; más aún si se toma en cuenta el tiempo que conllevan los trámites protocolarios ante fedatario público. • El requerimiento no tiene sustento legal que permita al partido prevenir la obligación de recaudar los documentos que se requirieron, sin embargo no se pretende desconocer los criterios que el INE citó en el acuerdo de requerimiento, solo trata de evidenciar que resulta complicado prever y SRE-PSC-

039/2017 59 recaudar documentos para dar exhaustivo cumplimiento a requisitos no contemplados en la legislación. No obstante, a juicio de esta Sala Especializada, dichas consideraciones deben desestimarse, ya que tal y como se ha referido con antelación, la normas constitucionales, convencionales y legales, prevén que quienes difundan en medios de comunicación la imagen de menores, deberán tomar en cuenta aquellas medidas que impliquen la salvaguarda de los infantes ante cualquier riesgo de afectación o manejo directo de su imagen, entre las que se encuentra el recabar con antelación a la difusión, los permisos correspondientes. Por lo que no es aceptable que la Coalición denunciada aduzca que no se le otorgó el tiempo necesario para recabar dicha documentación, ya que estaba plenamente vinculada a contar con ella, desde el momento en que realizó el promocional que posteriormente difundiría como parte de su prerrogativa constitucional de acceso a televisión. En esa lógica, tampoco asiste razón a la Coalición denunciada cuando refiere que resultaba imposible realizar la protocolización del consentimiento de los padres y de los menores, ya que se insiste, dicha situación debió ser realizada con antelación a la difusión del promocional; además, la parte denunciada pasa por alto que los Notarios Públicos no son los únicos que, en materia electoral, podrían realizar una protocolización, ya que también contaba con la posibilidad de solicitar el auxilio de la Oficialía Electoral del INE; sin embargo, no se aportó ningún documento que, cuando menos, generara un indicio de que se solicitó su apoyo ni tampoco se tiene constancia de que la Coalición hubiera requerido los servicios de protocolización ante fedatario público. SRE-PSC-039/2017 60 De ahí que se tengan por desestimadas las manifestaciones de la representación de la Coalición; y por consiguiente, sea dable concluir que esta Sala Especializada no cuenta con los elementos idóneos y suficientes, como puede ser una fotografía, identificación escolar o cualquier otro elemento que sirva para establecer la identidad de los menores; lo cual, permitiría cotejar y establecer el vínculo entre las niñas y niños que aparece en el promocional y de quien, supuestamente, dio el consentimiento es su madre o tutora. Lo que deja en evidencia el riesgo potencial al que se expuso a los menores, por la difusión del promocional, al no tener certeza de que se emitió un consentimiento pleno, cierto e idóneo por parte de los padres, madres o tutores de aquellos, y, sobre todo, por no cuidar de manera idónea el uso de las imágenes de éstos. En consecuencia, se estima que se vulneró el interés superior de los menores involucrados y, por ende, se actualiza por parte de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila la infracción que se denuncia, en contravención a lo dispuesto por los diversos artículos 1, 4, párrafo noveno y 6, párrafo primero de la Constitución Federal; 25, párrafo 1, inciso a) y u), de la Ley de Partidos Políticos; 247, párrafo 1 y 443, párrafo 1, incisos a), h) y n) de la Ley Electoral. CUARTA. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Una vez que ha sido acreditada la existencia de diversas faltas, procede establecer la clase de sanción que legalmente corresponda, tomando en cuenta, entre otras, las siguientes directrices: 1. La importancia de la norma transgredida, es decir, señalar qué principios o valores se violaron o se vieron amenazados y la importancia de esa norma dentro del sistema electoral (principio, valor, ordenamiento, regla). SRE-PSC-039/2017 61 2. Efectos que produce la transgresión, los fines, bienes y valores jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o resultado). 3. El tipo de infracción y la comisión intencional o culposa de la falta, análisis que atañe verificar si el responsable fijó su voluntad para el fin o efecto producido, o bien, pudo prever su resultado. 4. Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así como si la conducta fue reiterada. Para tal efecto, esta Sala Especializada estima procedente retomar la tesis histórica S3ELJ 24/2003, de rubro "SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN", que sostenía que la determinación de la falta puede calificarse como levisima, leve o grave, y, en este último supuesto, como grave ordinaria, especial o mayor, lo que corresponde a una condición o paso previo para estar en aptitud de determinar la clase de sanción que legalmente se deba aplicar al caso concreto, y seleccionar de entre alguna de las previstas en la ley. Ello en virtud de que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior en diversas ejecutorias,¹⁰ que la calificación de las infracciones obedezca a dicha clasificación. Por lo tanto, para una correcta individualización de la sanción, en primer lugar es necesario determinar si la falta a calificar es: i) levisima, ii) leve o iii) grave, y si se incurre en este último supuesto, precisar si la gravedad es de carácter ordinaria, especial o mayor. 10 En los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-45/2015 y acumulados, SUP-REP-57/2015 y acumulados, SUP-REP-94/2015 y acumulados, SUP-REP-120/2015 y acumulados, SUP-REP-134/2015 y acumulados, SUP-REP-136/2015 y acumulados y SUP-REP-221/2015. SRE-PSC-039/2017 62 Adicionalmente, es menester precisar que cuando se establece un mínimo y un máximo de la sanción a imponer, se deberá proceder a graduar la misma atendiendo a las circunstancias particulares del caso. Al respecto, una vez que han quedado demostradas la infracciones a la normativa electoral en que incurrió la Coalición Alianza Ciudadana de Coahuila, se procede a imponer la sanción correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la Ley General, que dispone que cuando se trate de infracciones

cometidas por los partidos políticos, se podrá imponer desde amonestación pública, multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente, según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda. Para determinar la sanción respectiva, se deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodearon la conducta contraventora de la norma, de conformidad con lo previsto en el artículo 458, párrafo 5 de la Ley General, tomando en consideración los siguientes elementos:

- Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila. 1. Singularidad o pluralidad de faltas. En este punto, en principio, resulta necesario establecer que con una sola conducta se acreditaron dos faltas; esto es, que con la difusión del spot "Registro Coahuila Coalición" con folio RV00097 [versión tv] y 11 Se debe precisar que, mediante reforma al párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo decreto se publicó el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. De igual forma, en términos de los artículos segundo y tercero transitorios del decreto de reforma mencionado, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país. SRE-PSC-039/2017 63 RA00106 [versión radio] se actualizaron las faltas de uso indebido de la pauta y afectación al interés superior de un menor. 2. Bien Jurídico tutelado. Establecido el contexto anterior, debe decirse que con dicha conducta se transgredió, por una parte, el principio de equidad en la contienda interna de un partido político, puesto que se concedió mayor tiempo aire en radio y televisión a uno de los contendientes del proceso de selección interna del PAN; por otra parte, se afectó el interés superior de los menores que aparecieron en el spot televisivo controvertido, puesto que no se acreditó que la Coalición contará con los documentos necesarios para acreditar una participación libre y voluntaria, a sabiendas de la exposición de su imagen para fines electorales; y por tanto, se afectó la integridad, privacidad y reputación de los menores. 3. Circunstancias de modo, tiempo y lugar Modo. La conducta consistió en la difusión por televisión del promocional "Registro Coahuila Coalición" con folio RV00097 [versión tv] y RA00106 [versión radio], relativo al proceso electoral local de Coahuila, con un total de ciento ochenta y siete impactos en televisión y trescientos ochenta y cuatro en radio. Tiempo. La difusión del promocional se realizó durante el desarrollo de los comicios locales en Coahuila, en la etapa de precampañas, en el periodo del doce al quince de febrero. Lugar. La difusión del promocional se efectuó en los canales de televisión cuya transmisión se realizó en Coahuila. SRE-PSC-039/2017 64 4. Condiciones externas y medios de ejecución. El momento en que se realizó la transmisión del promocional, corresponde al periodo de precampaña del proceso electoral local del estado de Coahuila, y el medio de ejecución fueron los canales de radio y televisión de transmisión local, acorde con lo informado por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos en las diversas comunicaciones que han sido referidas en el apartado de acreditación de los hechos denunciados. 5. Beneficio o lucro. No se acredita un beneficio económico cuantificable para la Coalición responsable, en virtud de que se trata de la difusión de promocionales pautados por ella misma, en uso de su prerrogativa constitucional de acceso a los tiempos del Estado. 6. Comisión dolosa o culposa de la falta. Está acreditado que la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila pautó los promocionales aludidos como parte de su prerrogativa de acceso al tiempo aire en radio y televisión que le correspondía en el marco de las precampañas del proceso electoral de Coahuila; y por tanto, es posible afirmar que tenía pleno conocimiento del contenido de los promocionales pautados; lo cual, permite concluir que tuvo la voluntad, por una parte, de usar la imagen de los menores de edad en el contenido de su promocional; y por otra parte, que tuvo el ánimo de difundir el promocional tildado de ilegal durante el periodo de precampañas en el proceso electoral del estado de Coahuila. Además, como Coalición que contiene en un proceso electoral local está plenamente vinculada al conocimiento de las normas constitucionales, convencionales y legales y de los criterios jurisprudenciales que rigen el acceso a la radio y televisión por parte de los actores políticos que participan en un proceso comicial; así como los tendentes a garantizar la salvaguarda del interés superior de los menores al ser utilizados en promocionales que se difundirán en un contexto electoral, a través de los medios electrónicos.

Se presume que el entonces precandidato en cuestión y los partidos políticos que lo respaldan no cuentan con los requisitos administrativos, expresos en el Lineamiento para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia político-electoral, **capítulo "Requisitos para mostrar niñas, niños o adolescentes en propaganda político electoral, mensajes electorales, actos políticos, actos de precampaña o campaña, en cualquier medio de difusión"**,

numeral 8, con título "Consentimiento de la madre y del padre, de quien ejerza la patria potestad o de los tutores", señala lo siguiente:

"...Por regla general, debe otorgar el consentimiento quien o quienes ejerzan la patria potestad o el tutor o, en su caso, la autoridad que debe suplirlos respecto de la niña, el niño o adolescente que aparezca o sea identificable en propaganda político-electoral, mensajes electorales o actos políticos, actos de precampaña o campaña, o para ser exhibidos en cualquier medio de difusión..."

Irregularidad que a simple vista es demostrada, toda vez que el precandidato ni los partidos políticos que lo respaldan, no cumplieron con este requisito, y debiendo esta autoridad electoral, solicitar al infractor de forma inmediata dicho consentimiento, y en caso de negarse a proporcionarlo, sancionarlo cómo corresponda.

Así mismo en el Lineamiento para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, **capítulo "Presentación del consentimiento y opinión ante el Instituto"**, en el **numeral 14**, señala lo siguiente:

... "Los sujetos obligados que exhiban la imagen, voz o cualquier dato identificable de niñas, niños o adolescentes en su propaganda político-electoral, mensajes o actos políticos, actos de precampaña o campaña, deberán:

... b) Conservar en su poder, durante el tiempo exigido por la normatividad aplicable en materia de archivos, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de otras leyes, la grabación en video de la conversación por medio de la cual se explicó a la niña, niño o adolescente el alcance, contenido, temporalidad y medio de difusión, así como el original del medio por el que se documentó la opinión informada de la persona menor de edad, sobre su participación en la propaganda político-electoral, mensajes electorales, o su presencia en actos políticos, actos de precampaña o campaña conforme al manual y las guías metodológicas referidas en el Lineamiento 9. ... (Sic)

Del análisis de la fotografía publicada el 11 de febrero del 2024, a las 9:02 pm con el título "La historia de Mazatlán se mide en carnavales y el que no es parte de esta fiesta se pierde de grandes historias y momentos de convivencia", como se aprecia en la siguiente liga electrónica <https://www.facebook.com/photo/?fbid=381161694672372&set=pcb.381162014672340> en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del **C. Guillermo Romero Rodríguez**, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, de la cual se observa difundió varias imágenes de niños, niñas y adolescentes, ello para promocionar su campaña política y posicionar su imagen ante los electores, vulnera el derecho a la intimidad de los infantes que aparecen en su promoción electoral, y se presume puede devenir en un riesgo potencial, por lo cual se debió cumplir con la obligación señalada en el numeral 14, con título "Presentación del consentimiento y opinión ante el Instituto", del Lineamiento para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes en Materia Político-Electoral, es decir el precandidato tiene obligación de conservar en su poder, durante el tiempo exigido por la normatividad aplicable en materia de archivos, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de otras leyes, la grabación en video de la conversación por medio de la cual se explicó a la niña, niño o adolescente el alcance, contenido, temporalidad y medio de difusión, así como el original del medio por el que se documentó la opinión informada de la persona menor de edad, sobre su participación en la propaganda político-electoral, mensajes electorales, o su presencia en actos políticos, actos de precampaña o campaña conforme al manual y las guías metodológicas referidas en el Lineamiento 9, hecho contrario la autoridad estará obligada a salvaguardar la integridad, de los menores, así como a determinar las sanciones pertinentes al precandidato y a la brevedad tomar las medidas cautelares pertinentes.

Es importante señalar que la fotografía publicada el 11 de febrero del 2024, a las 9:02 pm con el título "La historia de Mazatlán se mide en carnavales y el que no es parte de esta fiesta se pierde de grandes historias y momentos de convivencia", como se aprecia en la siguiente liga electrónica

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=381161694672372&set=pcb.381162014672340> en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del **C. Guillermo Romero Rodríguez**, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, en la cual también se identifican de forma directa niños, niñas y adolescentes, se presume no cumple el entonces precandidato **Guillermo Romero Rodríguez**, ni los Partidos Políticos PAN, PRI, PAS Y PRD con la obligación de llevar a cabo el difuminado del rostro de los menores, con lo anterior se encuentra aprovechándose de los indefensos menores, actuando con alevosía menoscabando los derechos político electorales y humanos de los niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo a lo señalado en el Anexo 3. emitido por el Instituto Nacional Electoral, de nombre "Instructivo para realizar la conversación y recabar la opinión informada de las niñas, niños y adolescentes en base en las guías metodológicas anexas", redactado con objeto de proporcionar una guía para realizar las conversaciones con niñas, niños y adolescentes, la cual les brinde la información oportuna, necesaria y suficiente a fin de que entiendan el alcance y los riesgos de su participación en propaganda político-electoral, mensajes electorales, o en actos políticos, actos de precampaña o campaña, así como sobre exhibición de su imagen, voz o cualquier dato que los identifique a través de cualquier medio de difusión, mismo, que pretende que en la información que se les proporciona a niñas, niños o adolescentes se les indique en qué medios y durante cuánto tiempo se va a difundir su imagen y de qué forma será su participación (activa o pasiva), por quién podría ser visto (familia, amigos y gente que no conoce) y los riesgos que implica ello, buscando establecer el mecanismo para garantizar que la opinión que se recabe sea expresa, propia, individual, libre, informada y espontánea, además de que sea acorde a la edad, desarrollo cognitivo y madurez de la persona menor de edad, evidenciado con la fotografía subida el 11 de febrero del 2024, a las 9:02 pm con el título "La historia de Mazatlán se mide en carnavales y el que no es parte de esta fiesta se pierde de grandes historias y momentos de convivencia", como se aprecia en la siguiente liga electrónica <https://www.facebook.com/photo/?fbid=381161694672372&set=pcb.381162014672340> en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del **C. Guillermo Romero Rodríguez**, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, en la cual se identifican de forma directa niños, niñas y adolescentes, el denunciado tiene y tuvo la obligación de cumplir cabalmente dicha metodología, con el objetivo claro de brindar la información oportuna, necesaria y suficiente a fin de que entiendan el alcance y los riesgos de su participación en propaganda político-electoral, mensajes electorales, o en actos políticos, actos de precampaña o campaña, así como de darle certeza y seguridad jurídica a los niños, niñas y adolescentes.

El Anexo 2. con título "Manual para recabar la opinión y el consentimiento informado de niñas, niños y adolescentes para la utilización de su imagen, voz o cualquier dato que los haga identificables en propaganda político-electoral y mensajes electorales, actos políticos, de precampaña o campaña a través de cualquier medio de difusión", señala en su punto IV, inciso a), para las Niñas y niños de 6 a 11 años, la obligación de recabar la opinión y el consentimiento informado de niñas, niños y adolescentes para la utilización de su imagen, voz o cualquier dato que los haga identificables en propaganda político-electoral y mensajes electorales, actos políticos, de precampaña o campaña a través de cualquier medio de difusión, antes de la elaboración o producción de la propaganda político-electoral o mensajes electorales, o previo a la participación en un acto de precampaña o campaña, así como un consentimiento informado durante la elaboración de videos o cualquier tipo de propaganda o mensaje electoral (previo a la difusión) y después de la difusión; o durante la celebración de actos políticos, de precampaña o campaña y su aparición en redes sociales o cualquier plataforma digital tales como Twitter, "X", YouTube, Facebook, y notas emitidas por periódicos digitales, o por influencers, que posicionan o apoyen al candidato.

Concatenado a lo anterior en el punto IV, inciso b), el cual señala que las niñas, niños y adolescentes, antes de la elaboración o producción de la propaganda político-electoral o mensajes electorales, o previo a la participación en un acto de precampaña o campaña. Consentimiento informado durante la elaboración de videos o cualquier tipo de propaganda o mensaje electoral (previo a la difusión) y después de la difusión; o durante la celebración de actos políticos, de precampaña o campaña y su aparición en redes sociales o cualquier plataforma digital, considerando que el denunciado no cumplió con los requisitos mínimos necesarios establecidos en la Ley para utilizar la imagen de los menores de edad; aunado a que, a no existe motivo, causa o fin lícito y legítimo para la aparición de éste en la fotografía subida en fecha 11 de febrero del 2024, a las 9:02 pm con el título "La historia de Mazatlán se mide en carnavales y el que no es parte de esta fiesta se pierde de grandes historias y momentos de convivencia", como se aprecia en la siguiente liga electrónica <https://www.facebook.com/photo/?fbid=381161694672372&set=pcb.381162014672340> en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del **C. Guillermo Romero Rodríguez**, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal.

Así mismo, la resolución número **SUP-REP-170/2018** y **SUP-REP-5/2019**. Tesis XXIX/2018 PROPAGANDA POLÍTICA ELECTORAL. CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTOS DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN. señala lo siguiente;

... III. La protección reforzada del derecho a la propia imagen de menores de edad Los menores de edad, como cualquier persona, gozan del derecho a la propia imagen, como un derivado del derecho a la privacidad y, en dicho sentido, tienen la protección de dicho derecho fundamental frente a intromisiones indebidas. Esto ha sido reconocido no sólo por los tribunales nacionales, sino por diversos organismos internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño, firmada en 1989, establece que (Artículo 16): 1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. 2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef), en el documento de debate sobre los derechos de los niños en el mundo digital,¹⁷ señala que, a pesar de que el derecho a la intimidad de los menores y las personas adultas tiene la misma protección, es evidente que, considerando los demás derechos, el mejor interés y capacidades en evolución de los menores, es necesario un enfoque diferenciado de la protección del derecho a la intimidad de los menores. En dicho sentido, en la Observación General No. 14 del Comité de los Derechos del Niño (CRC/C/GC/14), se explica que el "interés superior del niño" es un concepto triple que involucra un derecho sustantivo, un principio interpretativo y una norma de procedimiento. Como principio interpretativo, este concepto implica que "si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño". Como norma de procedimiento implica que "siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados" (párr. 6). En el caso de que los derechos de otras personas entren en conflicto con el interés superior del niño y no sea posible armonizarlos, el referido Comité resalta que las autoridades "habrán de analizar y sopesar los derechos de todos los interesados, teniendo en cuenta que el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial significa que los intereses del niño tienen máxima prioridad y no son una de tantas consideraciones". El principio del interés superior de la niñez está también reconocido en el artículo 4, párrafo 9, de la Constitución Federal. En cuanto a la protección de la imagen de los menores, en el contexto español, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de España considera que "siempre que no medie el consentimiento de los padres o representantes legales de los menores con la ausencia del Ministerio Fiscal, la difusión de cualquier imagen de éstos ha de ser reputada contraria al ordenamiento jurídico" (Recurso 2895/2013). En dicho caso, el Tribunal determinó que publicar la fotografía de un menor en una revista gratuita sin el permiso de sus padres, vulnera su derecho a la imagen, a pesar de que la fotografía fue capturada por el tío del niño. Enfatizó que la violación se actualiza "por la inclusión de la imagen del menor en una revista con independencia de los fines perseguidos por su publicación o de que pudiera o no afectar a la reputación del afectado" y que lo

decisivo es "la entrega de esta fotografía de un codemandado a otro sin que se acredite la existencia del consentimiento necesario para su publicación". Los derechos tutelados en el artículo 6 constitucional, no son exclusivamente oponibles a los partidos políticos, sino también a los particulares, por lo que es posible concluir que la propaganda y mensajes de contenido político o electoral que difundan las personas físicas y morales en la temporalidad referida por el numeral 24724 de la ley electoral, también deben ajustarse a la norma constitucional citada, siendo posible que en el caso de que no sea así, el sujeto emisor de la misma, pueda ser sancionado. • La Sala Especializada consideró necesario, a manera de acción preventiva, establecer un llamamiento respecto de aquellas personas físicas y morales vinculadas con cualquier fuerza política que elaboren o difundan por cualquier medio de comunicación legalmente previsto para hacerlo, cualquier tipo de propaganda política o electoral que, en determinado momento pudieran emitir en ejercicio de su libertad de expresión y participación política ya sea a favor o en contra de algún partido político, precandidato/a, candidato/a, aspirante, candidato/a independiente, coalición, dentro o fuera de un proceso electoral federal o local, para que tengan especial cuidado al utilizar cualquier elemento audiovisual que pudiera colocar en riesgo el interés superior de la niñez, ya que siempre debe tenerse presente que los derechos humanos de la niñez requieren de mayor respeto, protección y cuidado reforzado por parte de cualquier persona y no sólo de las autoridades. ... (Sic)

Por lo anterior el entonces precandidato y partidos políticos vulneran el derecho a la intimidad de los infantes que aparecen en su promoción electoral, sin cumplir con la normatividad electoral ya que divulga el rostro de niños y niñas sin tener el consentimiento de las personas que ejercen sobre ellos la patria potestad o tutela, así como la opinión de las niñas, niños o adolescentes en función de la edad y madurez, sin que se advierta que el denunciado haya difuminado el rostro de los menores.

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=381161694672372&set=pcb.381162014672340>





Memo Romero
11 FEB A LAS 9:02 P. M.



Memo Romero ●
11 feb · 🌐

La historia de Mazatlán se mide en carnavales y el que no es parte de esta fiesta se pierde de grandes historias y momentos de convivencia.... Ver más



Hechos que evidentemente vulnera el derecho a la intimidad, violenta su imagen, honra o reputación presente en su ambiente escolar o social y en su futuro, pues al llegar a la edad adulta puede no aprobar la ideología política con la que sus tutores, o aprovechada mente el precandidato lo vinculó durante su infancia, violando así, la normatividad local, federal y la convencionalidad que protege los derechos de los infantes que aparecen en su promoción electoral, sin cumplir con la normatividad electoral y los derechos humanos, constituyendo violaciones al proceso electoral, así como a la neutralidad, equidad e imparcialidad de la contienda a favor del precandidato conocido como Guillermo Romero Rodríguez.

Por su parte La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa establece lo siguiente:

... **Artículo 11 Bis.** Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

...**XVII.** Derecho a la intimidad; ...

Artículo 66. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales.

No podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, tampoco de divulgaciones o diffusiones ilícitas de

información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación.

Quienes ejerzan su patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán orientar, supervisar, y en su caso, restringir sus conductas y hábitos sin que esto se considere injerencia, siempre que atiendan al interés superior de la niñez.

Artículo 67. Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación locales, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez.

Artículo 67 Bis. Cualquier medio de comunicación que difunda entrevistas a niñas, niños y adolescentes, procederá como sigue:

I. Deberá recabar el consentimiento por escrito o cualquier otro medio, de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente, respectivamente, conforme a lo señalado en el artículo anterior y a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 66 de la presente Ley; y,

II. La persona que realice la entrevista será respetuosa y no podrá mostrar actitudes ni emitir comentarios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

En el caso de que no sea posible recabar el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de un adolescente, éste podrá otorgarlo siempre que ello no implique una afectación a su derecho a la privacidad por el menoscabo a su honra o reputación.

(Adic. Según Decreto No. 434, publicado en el P.O. No. 063, del 24 de mayo de 2023).

Artículo 67 Bis 1. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la protección de la identidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes que sean víctimas, ofendidos, testigos o que estén relacionados de cualquier manera en la comisión de un delito, a fin de evitar su identificación pública.

La misma protección se otorgará a adolescentes a quienes se les atribuya la realización o participación en un delito, conforme a la legislación aplicable en la materia.

(Adic. Según Decreto No. 434, publicado en el P.O. No. 063, del 24 de mayo de 2023).

Artículo 67 Bis 2. Los medios de comunicación deberán asegurarse que las imágenes, voz o datos a difundir, no pongan en peligro, de forma individual o colectiva, la vida, integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes, aun cuando se modifiquen, se difuminen o no se especifiquen sus identidades, y evitarán la difusión de imágenes o noticias que propicien o sean tendentes a su discriminación, criminalización o estigmatización, en contravención a las disposiciones aplicables.

En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente artículo, niñas, niños o adolescentes afectados, por conducto de su representante legal o, en su caso, de la Procuraduría de Protección, actuando de oficio o en representación sustituta, podrá promover las acciones civiles de reparación del daño e iniciar los procedimientos por la responsabilidad administrativa a que haya lugar; así como dar seguimiento a los procedimientos hasta su conclusión. Niñas, niños o adolescentes afectados, considerando su edad, grado de desarrollo cognoscitivo y madurez, solicitarán la intervención de la Procuraduría de Protección.

Cuarto. Que el 13 de febrero del 2024, a las 8:46 pm con el título "En medio de un gran ambiente y en compañía de mi esposa "Francis Cazarez Oliveros, disfrute del segundo desfile de carnaval", como se aprecia en la siguiente liga electrónica

<https://www.facebook.com/photo?fbid=382348954553646&set=pcb.382349117886963>, en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del C. Guillermo Romero Rodríguez, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, es importante señalar que en primer término se debe considerarse propaganda electoral, así como un acto político por cumplir con los

requisitos para el efecto, y de lo acontecido el precandidato difundió varias imágenes de niños, niñas y adolescentes, ello para promocionar su campaña política y posicionar su imagen ante los electores, lo cual vulnera el derecho a la intimidad de los infantes que aparecen en su promoción electoral, y se presume puede devenir en un riesgo potencial, en relación con la imagen, honra o reputación presente en su ambiente escolar o social y en su futuro, pues en la edad adulta al decidir sobre su ideología política puede no aprobar con la que fue relacionado desde la infancia, en consecuencia a lo anterior el precandidato Guillermo Romero Rodríguez, así como los partidos políticos PAN, PRI, PAS Y PRD, no protegen el interés superior del menor pues anteponen la auto determinación arbitraria del candidato y los partidos en el contenido de sus promocionales, publicados en diversos medios, sin cumplir con la normatividad electoral, señalada en el Lineamiento para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, emitido el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo General, mediante Acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales, en acatamiento a la sentencia SUP-REP60/2016 de la Sala Superior, y SRE-PSC-102/2016 de la Sala Regional Especializada, ambas salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación” (en adelante Lineamientos), identificado con la clave INE/CG20/2017.

En los cuales se señalan las formas de aparición y participación de niñas, niños o adolescentes, siendo de manera directa en propaganda político electoral y mensajes electorales; y directa o incidental en actos políticos, actos de precampaña o campaña. En un acto político, un acto precampaña o campaña, la aparición es incidental, siempre y cuando las niñas, niños o adolescentes sean exhibidos de manera involuntaria y sin el propósito de que formen parte de éstos, por ser situaciones no planeadas o controladas por los sujetos obligados.

Así mismo se observa de la fotografía publicada en fecha 13 de febrero del 2024, a las 8:46 pm con el título “En medio de un gran ambiente y en compañía de mi esposa “Francis Cazarez Oliveros, disfrute del segundo desfile de carnaval”, como se aprecia en la siguiente liga electrónica <https://www.facebook.com/photo?fbid=382348954553646&set=pcb.382349117886963>, en la cuenta “POLÍTICA VERIFICADA”, de la red social Facebook del C. Guillermo Romero Rodríguez, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, mediante la cual se difundieron varias imágenes de niñas, niños o adolescentes, donde se tienen una participación DIRECTA, lo anterior en un acto político electoral, pues de la imagen en un análisis exhaustivo se observa a los menores, manifestando un apoyo directo al hacer gestos de manera corporal, acreditando entonces su participación activa y directa, con objeto de promocionar la campaña política del precandidato, y posicionar su imagen ante los electores, lo cual vulnera el derecho a la intimidad de los infantes así como su imagen, honra o reputación, presente en su ambiente escolar o social y en su futuro, pues a la edad adulta puede NO APROBAR la ideología política con la que fue identificado en su infancia.

La aplicación convencional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala que la aparición de menores de edad en propaganda política o electoral implica un riesgo potencial de ASOCIAR a los menores con una determinada preferencia política o ideológica.

Es de importancia señalar que la protección del interés superior del menor se antepone a la libertad de los partidos de autodeterminar el contenido de sus promocionales.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala que se debe partir de una concepción de niños, niñas y adolescentes como titulares activos de derechos y no solamente como sujetos de protección, bajo el derecho del infante a la preservación de su imagen, considerando que una exposición inadecuada puede fomentar estereotipos o una situación de riesgo para el menor, garantizando con una correcta aplicación de la norma, no ser objeto de injerencias en su vida privada,

familia, domicilio, y correspondencia, así como no ser atacado en su honor y reputación.

En todas las decisiones y actuaciones el Estado velará y cumplirá con el principio del Interés superior de la Niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Es decir, los niños, las niñas y adolescentes tienen derecho a que, antes de que se tome cualquier medida que pueda influir sobre estos se evalúen y ponderen las posibles repercusiones, a fin de decidir por la que promueva y proteja sus derechos, considerando que la propia imagen de los menores de edad, goza de protección, por lo que su exhibición implica un riesgo potencial, así mismo la propaganda política o electoral es un riesgo potencial porque siempre hay un elemento ideológico o preferencia política.

Concatenado a lo anterior, la resolución número SRE-PSC-121/2015 tituló **USO INDEBIDO DE LA PAUTA POR LA DIFUSIÓN PROPAGANDA ELECTORAL QUE AFECTA AL INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES**. señala lo siguiente;

El promovente alude a la supuesta vulneración a los derechos de los menores que aparecen en el promocional denominado Quien pompo 2, en torno a la utilización de su imagen y la protección de sus datos personales, e invoca y transcribe el contenido del artículo 4, párrafo noveno³⁰, de la Constitución Federal, en el cual se prescribe la obligación del Estado de velar por el interés superior de la niñez y garantizar de manera plena los derechos de los menores.

Al respecto, se tiene en cuenta que el contenido de la propaganda difundida por los partidos políticos se encuentra amparada por la libertad de expresión, en relación a la cual, el Tribunal Electoral ha sostenido en reiteradas ocasiones que debe ser objeto de maximización en el contexto del debate político, a efecto de que se aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática.³¹

No obstante, el ejercicio de dicha libertad fundamental no es absoluto, sino que tiene límites, entre los que se encuentran, los vinculados con la dignidad o la reputación de las personas y los derechos de terceros, acorde con lo dispuesto en los artículos 6º, párrafo primero de la Constitución Federal³², así como 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles³³ y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos³⁴.

En tal virtud, la acotación en torno a los aspectos que no deben perturbarse con las expresiones de ideas, se traduce en una obligación de abstenerse de incurrir en tales conductas a efecto de salvaguardar los bienes jurídicos ahí protegidos, como lo es, el pleno respeto a los derechos de terceros, incluyendo, por supuesto los derechos de los menores, cuya protección se encuentra expresamente ordenada en el artículo 4º de nuestra Constitución Federal.

Por tanto, la comisión de alguna conducta que provoca la inobservancia de tal obligación, implica por sí misma un aspecto que atenta contra el propio orden constitucional y, en el caso de la materia electoral, constituye una vulneración específica en cuanto al uso del tiempo pautado por el INE para la difusión de la propaganda electoral, en términos de lo dispuesto en el artículo 247, párrafo 1, de la Ley Electoral.

Así, la Sala Superior³⁵ ha señalado que en el derecho administrativo sancionador electoral el "tipo" infractor se constituye con los elementos siguientes:

- (i) Una norma que contenga una obligación o una prohibición a cargo de algún sujeto.*
- (ii) Otra norma con una prevención general, relativa a que, si alguien inobserva la ley (ya sea por incumplir alguna obligación o por violar una disposición), se impondrán sanciones.*
- (iii) Un catálogo general de sanciones aplicables cuando se inobserve la normativa.*

Luego, en el caso de la normativa sobre la cual se afirma su incumplimiento, los elementos que constituyen el tipo administrativo electoral que nos ocupa, se obtienen de los referidos artículos 4 y 6, párrafo primero de la Constitución Federal en torno a que en la difusión de las ideas se atienda a la obligación de respetar los

derechos de terceros y, en específico, los derechos de los menores; ello, en relación con el artículo 247, párrafo 1, de la Ley Electoral, referente al mandato específico de que en el uso de las pautas asignadas para la difusión de propaganda electoral se acaten los lineamientos constitucionales.

Lo anterior, se relaciona con lo dispuesto en los diversos 25, párrafo 1, incisos a) y u), de la Ley de Partidos Políticos y 443, párrafo 1, incisos a) y n) de la Ley Electoral, en los que se establece la prevención general concerniente a la inobservancia de las disposiciones establecidas en la normativa electoral.

Y finalmente, el catálogo de sanciones aplicables se encuentra previsto en el artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la Ley Electoral, toda vez que el sujeto denunciado en el presente caso, resulta ser un partido político.

En tales condiciones, el tipo administrativo electoral antes referido se actualiza cuando en el uso de las pautas asignadas por el INE se difundan mensajes que puedan afectar derechos de terceros, y que en el caso, resultan ser menores de edad, a quienes debe garantizárseles sus derechos en el marco de su interés superior.

Al respecto, se tiene en cuenta el concepto de "interés superior del niño", el cual ha sido descrito por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al destacar que "implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño".^[11]

Así, el Estado Mexicano, a través de sus instituciones, autoridades y tribunales, está constreñido a tener en consideración primordial el respeto al interés superior del menor, a través de la adopción de las medidas necesarias para asegurar y maximizar la protección y efectividad de los derechos de los niños, acorde con lo establecido en los artículos 3, párrafo 1 y 4,^[12] de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En esa tesitura, acorde con el "Protocolo de actuación de quienes imparten justicia en caso que involucren niñas, niños y adolescentes" emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el interés superior del niño tiene las siguientes implicaciones:

- a) coloca en plena satisfacción de los derechos del niño como parámetro y fin en sí mismo;
- b) define la obligación del Estado respecto del niño, y
- c) orienta decisiones que protegen los derechos del niño.

Por ello, la Primera Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la mera situación de riesgo de los menores es suficiente para que se estime que se afectan los derechos de los niños y, ante ello, deben adoptarse las medidas que resulten más benéficas para la protección de los infantes.^[13]

Pues bien, en el caso que nos ocupa, la supuesta vulneración al interés superior del menor se desarrolla a través de la exposición de la imagen de diversos niños que participan en el promocional denunciado, de ahí que, la afectación concreta a analizar se refiera al derecho a la propia imagen de los menores participantes.

Para tal efecto, se parte de la base relativa a que el derecho a la propia imagen de los menores goza de una protección especial, de ahí que para el otorgamiento de la salvaguarda judicial es suficiente que los menores se ubiquen en una situación de riesgo potencial, sin que sea necesario que esté plenamente acreditado el perjuicio ocasionado, pues, en congruencia con el interés superior de los niños, debe operar una modalidad del principio in dubio pro infante, a fin de dar prevalencia al derecho de los menores, por encima del ejercicio de la libertad de expresión, con el objeto de que se garanticen los derechos de los niños, por encima de cualquier duda que se presente en los casos que se analicen.

En similares términos el Tribunal Constitucional de España ha establecido que "en los casos en que se analice la captación y difusión de fotografías de niños en medios de comunicación social[...] es preciso tener en cuenta, que el ordenamiento jurídico establece una protección especial, en aras a proteger el interés superior del menor".^[14]

Asimismo, señala el mismo Tribunal Constitucional Español que el derecho a la propia imagen "se configura como un derecho de la personalidad, que atribuye a su titular la facultad de disponer de la representación de su aspecto físico que

permita su identificación, lo que conlleva tanto el derecho a determinar la información gráfica generada por los rasgos físicos que le hagan reconocible que puede ser captada o tener difusión pública, como el derecho a impedir la obtención, reproducción o publicación de su propia imagen por un tercero no autorizado".¹¹⁵¹

Así, en el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño¹¹⁵², se establece que ningún niño puede ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, ni ataques ilegales a su honra y reputación y, por su parte, en los artículos 76 y 77 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes¹¹⁵³ se contempla igualmente la salvaguarda de los menores ante cualquier riesgo de afectación o manejo directo de su imagen, nombre, datos o referencias que permitan su identificación.

Pues bien, en el caso de la propaganda política o electoral hay siempre presente un elemento ideológico que identifica a la opción política que la presenta, por tanto, en principio, la utilización de menores en la misma implica un riesgo potencial de asociar a tales infantes con una determinada preferencia política e ideológica.

Lo anterior puede devenir en un riesgo potencial en relación con su imagen, honra o reputación presente en su ambiente escolar o social y, por supuesto, en su futuro, pues al llegar a la vida adulta pueden no aprobar la ideología política con la cual fueron identificados en su infancia.

En ese sentido, acorde con la disposiciones internacionales y nacionales antes descritas, esta Sala Especializada se encuentra obligada a determinar la implementación de todas aquellas medidas que sirvan para evitar que se presenten tales situaciones de riesgo potencial que puedan afectar el interés superior del menor en relación con los promocionales de contenido político electoral.

Así, en una primera actuación, necesaria para garantizar que no se presenta alguna situación de riesgo, es criterio de esta Sala, que la autoridad que analice en algún momento, un promocional político en que participen menores, deberá contar con la plena certeza de que se respetó el elemento relativo al consentimiento parental o, en su caso, de los tutores, en torno a su participación en la propaganda electoral, toda vez de lo dispuesto por los artículos 424 y 425 del Código Civil Federal y sus correlativos de los códigos civiles de la República Mexicana.

Igualmente, tal autoridad deberá garantizar el derecho que tienen los infantes de ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, en términos de lo dispuesto en el artículo 71¹¹⁵⁴ de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Al efecto, y como elementos instrumentales de tales derechos, directamente relacionados con el interés superior del menor, la autoridad que analice la validez de promocionales de contenido político electoral deberá verificar lo siguiente:

i. Consentimiento por escrito debidamente firmado por el padre y la madre o por quien(es) ejerza(n) efectivamente la patria potestad o tutela del menor.

Tal documento se acompañara de copia certificada del acta de nacimiento, o bien, constancia de pérdida de patria potestad o acta de defunción del padre o madre que no firme (para el caso de que se otorgue solo por uno de los padres o tutores).

ii. Manifestación del menor por cuanto hace a su opinión libre y expresa respecto de su participación en el promocional electoral en cuestión. Tal opinión será valorada atendiendo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

iii. El consentimiento parental o, en su caso, de los tutores, y la manifestación de la opinión del menor deberá ser ratificado ante la Oficialía Electoral del INE o fedatario público, a fin de que se haga constar el otorgamiento del mismo en un acto revestido de fe pública. Lo anterior a fin generar certeza y garantizar plenamente el interés superior de los menores.

Asimismo, aunado a contar con la certeza plena en torno al otorgamiento del consentimiento respectivo, acorde con las condiciones antes relatadas, la autoridad que en su momento, analice la validez del promocional político en que participen menores de edad deberá valorar minuciosa y neutralmente su contenido, a fin de que, tomando en cuenta su edad y madurez, se les garantice entre otras cuestiones: pleno respeto a su imagen, honra, nombre o datos personales, evitando en todo caso situaciones de riesgo, que de manera actual o al menos potencial, pudieran correr en su entorno social o educativo por su participación en tal promocional electoral.

Además, tal autoridad, ya sea administrativa o judicial, deberá allegarse de los elementos necesarios para analizar y justificar de manera razonable el motivo y necesidad sustantiva para la participación de los menores en mensajes de propaganda política electoral. Tal cuestión deberá ser ponderada en cada caso, en relación con el interés superior del menor y garantizando objetivamente el pleno respeto a su desarrollo físico, psíquico y emocional.

Ahora bien, en la especie, no se tiene plena certeza en relación a que efectivamente se haya otorgado el consentimiento necesario para la participación de los menores en el promocional denominado Quien pompo 2.

El PAN allegó documentación con la intención de acreditar que efectivamente se recabó la autorización de los padres o tutores, para la participación de los menores en el promocional denunciado, sin embargo, se trata de elementos que no cumplen con las características y formalidades legales razonables para acreditar lo que pretenden

Esto es, en el promocional denunciado se aprecia a simple vista que en el desarrollo del mismo participaron cuando menos veintiún niños y, a pesar de ello, el PAN solamente allegó nueve "cartas de autorización",⁽¹⁹⁾ aunque la Unidad Técnica le requirió la documentación que acreditara el otorgamiento del consentimiento de parte de quienes ejercen la patria potestad o tutela de quienes aparecen en el promocional.

En tales condiciones, no se cuenta con elementos que sirvan para acreditar el otorgamiento del consentimiento en torno a cuando menos doce menores que participaron en la propaganda denunciada, lo cual, es suficiente para estimar que se vulneró al menos potencialmente, el derecho a la propia imagen de tales menores, al no contar con la autorización relativa a su aparición en el promocional.

Además, el contenido mismo de tales cartas carece de las formalidades necesarias para dotar de plena certeza el acto de autorización que ahí se pretende hacer constar, de hecho, en tres de ellas⁽²⁰⁾ ni siquiera se asienta el nombre del padre o la madre quienes firmaron tal documento.

Por otra parte, en la totalidad de las cartas aportadas, consta solamente la firma de uno de los padres y no de ambos, sin que se haga precisión respecto a la razón de la ausencia del otro padre o madre; ni se acompaña documentación que acredite el parentesco de quien firma en representación de los menores.

En ese sentido, no hay certeza de que quien firmó efectivamente sea el padre o la madre del menor, en ejercicio efectivo de su patria potestad.

Finalmente, no obra en autos documento alguno que evidencie que se tomó en cuenta la opinión libre y expresa del menor.

Así las cosas, esta Sala Especializada determina que no se implementaron las medidas necesarias para garantizar que los padres o tutores de los menores otorgaran su consentimiento para la aparición de los mismos en el promocional electoral denunciado, de ahí que se estime que se vulneró el interés superior del menor y, por ende, se actualiza la infracción que se denuncia, sin que sea necesario analizar el contenido del mismo.

Luego entonces, al haberse acreditado la infracción relativa al uso indebido de la pauta por la difusión de propaganda electoral que vulnera el interés superior del menor, se vincula al Instituto Nacional Electoral para que adopte las medidas necesarias a fin de que no se difunda el promocional denominado Quien pompo 2 (RV00738-15) bajo ningún tipo de pauta, ni federal ni local, atendiendo a que el mismo ha sido determinado ilegal en esta resolución y con la finalidad de evitar que se genere alguna situación que pueda poner en riesgo a los menores que aparecen en el mismo.

Asimismo, cabe indicar que es criterio de esta autoridad judicial que en el caso de los asuntos en que se aborde una posible afectación al interés superior del menor, corresponde a la persona que realiza la exposición de los niños acreditar que efectivamente actuó salvaguardando la integridad y las prerrogativas de los mismos, pues de lo contrario, se desnaturalizaría por completo la obligación de las autoridades de velar por el pleno respeto a los derechos de los niños, en tanto que actuaría una suerte de presunción de legalidad en torno a potenciales situaciones de riesgo para los menores, en vez de que se optara por emprender acciones que sirvan para tener la plena certeza respecto a la protección de los mismos.

En ese sentido, y considerando que el PAN en la contestación al requerimiento de fecha doce de mayo, indicó que no había contratado a empresa alguna para la participación de los menores en el promocional referido, se evidencia que es el único responsable por su participación sin el debido consentimiento parental o, en su caso, de los tutores, en el promocional político electoral pautado por ese mismo instituto político.

De la misma manera la resolución TESIN-PSE-39-2021, emitida por el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, declara la existencia de la infracción por incurrir en actos violatorios a los Lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños, y adolescentes en materia político-electoral por parte de Fernando Pucheta Sánchez, candidato a la presidencia municipal de Mazatlán, mismo que señala lo siguiente:

En el perfil de la red social Facebook del denuncia, los días 14 de marzo, 09, 10, 14, 15, 19, y 21 de abril, 06, 07, 17, y 28 de mayo, publica y difunde varias imágenes de niños, niñas y adolescentes, ello para promocionar su campaña política y posicionar su imagen ante los electores, lo cual a su decir, vulnera el derecho a la intimidad de los infantes que aparece en su promoción electoral, sin cumplir con la normativa electoral ya que divulga el rostro de niños y niñas sin tener el consentimiento de las personas que ejercen sobre ellos la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente en función de la edad y madurez, sin que se advierta que el denunciado haya difuminado el rostro de los menores.

Marco normativo. Interés superior de la niñez. -

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 19, establece que toda niña, niño y adolescente, tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del estado.

Por su parte la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña en su artículo 3, establece que en todas las medidas que los involucren se deberá atender como consideración primordial el interés superior de la niñez.

sobre lo anterior, el comité de los derechos del niño y de la niña de la organización de las naciones unidas, en su observación general 14 del 2013, sostuvo que el concepto del interés superior de la niñez, implica tres vertientes;

Derecho sustantivo: Consistente en el derecho de la niñez a que su interés superior sea valorado y tomado como de fundamental protección cuando diversos intereses estén involucrados, con el objeto de alcanzar una decisión sobre la cuestión a resolver.

Un principio fundamental de interpretación legal: cuando se esté ante una previsión legal abierta, a más de una interpretación, se debe optar por aquella que ofrezca una protección más efectiva al interés superior de la niñez.

una regla procesal: cuando exista una decisión que pudiera afectar a la niñez o adolescencia, específicamente o en general a un grupo identificable o no identificable, en el proceso para la toma de la misma, se debe incluir una evaluación del posible impacto, ya sea negativo o positivo, de la decisión sobre la persona menor de edad involucrada.

Así mismo se ha señalado que el concepto de interés superior de la niñez no es nuevo, sino que ya se consagraba en la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, y en la convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, por lo que se toma como un concepto dinámico que debe evaluarse adecuadamente en cada concepto., cuyo objetivo debe ser el garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos para él o la menor.

Por su parte el artículo cuarto de nuestra Constitución General, en su noveno párrafo establece que el Estado en todas su decisiones y actuaciones velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando así de manera plena sus derechos.

Así mismo, en la ley general de las niñas, niños y adolescentes, en sus artículos segundo y dieciocho se establece que el interés superior de la niñez, deberá ser considerado de manera primordial en la toma de

decisiones sobre una cuestión debatida que involucren niñas, niños y adolescentes.

Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en la jurisprudencia de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO", que, para la determinación en concreto del interés superior de la niñez, se debe atender a sus deseos, sentimientos, y opiniones, siempre que sean compatibles con sus necesidades vitales.

Aparición de niñas, niños, y adolescentes en la propaganda electoral.

La propaganda electoral difundida por los partidos políticos, se encuentra amparada por la libertad de expresión, que se consagra en el artículo sexto Constitucional, sin embargo, dicha libertad no es absoluta pues encuentra sus límites en la dignidad, y reputación de las personas y los derechos de las mismas, dentro de las cuales se encuentran las de los niños, niñas y adolescentes.

Por lo expuesto el Instituto Nacional Electoral emitió los Lineamientos para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en materia político-electoral, cuyo objetivo es establecer las directrices para la protección de los citados que aparezcan en la propaganda político-electoral, mensajes electorales y en actos políticos, actos de precampaña o campaña de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas independientes, así como de los mensajes transmitidos por las autoridades electorales, federales y locales, o las personas físicas o morales que se encuentren vinculadas directamente a uno de los sujetos mencionado, atendiendo a su calidad o naturaleza jurídica, por cualquier medio de comunicación y difusión, incluida las redes sociales o cualquier plataforma digital, sea esta transmitida en vivo o videograbada, debiendo ajustar los sujetos antes mencionados sus actos de propaganda político-electoral, o mensajes a través de radio o televisión, toda vez que:

- a. pueden aparecer de manera directa e incidental en la propaganda.
- b. Cuando se utilice la imagen, voz o cualquier otro dato que les haga identificable, se deberá proporcionar la máxima información sobre sus derechos, opiniones y riesgos respecto de su aparición en la propaganda político electoral.
- c. Si la aparición es incidental y ante la falta de consentimientos, se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, voz, o cualquier otro dato que le haga identificable, garantizando la máxima protección de su dignidad o derechos.

Aunado a lo anterior, la resolución número **SUP-JE-144/2021**, Sentencia que confirma la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, en el procedimiento especial sancionador, que declaró existente la violación a los requisitos sobre la aparición de menores en propaganda electoral, atribuida a Fernando Alejandro Larrazábal Bretón y al Partido Acción Nacional, este último promovente del juicio electoral. señala lo siguiente;

La imagen de una niña, niño o adolescente en fuentes de acceso público es insuficiente para poderla incluir en propaganda electoral a) Marco jurídico La imagen es la reproducción identificable de los rasgos físicos de una persona sobre cualquier soporte material. 9 El derecho a la propia imagen constituye uno de los derechos inherentes de la persona, que le permite disponer de su apariencia; considerado por la Suprema Corte como un derecho de defensa y garantía esencial para la condición humana, porque puede reclamarse tanto en defensa de la intimidad violada o amenazada como exigir del Estado que prevenga la existencia de eventuales intromisiones que lo lesione. 10 Si bien no es un derecho absoluto tendría que justificarse su intromisión por un interés público, o bien, cuando se cuente con el consentimiento u autorización de la persona. 11 Estos límites sobre la captación, reproducción o publicación de la imagen de una persona tratándose de menores de edad exige una protección reforzada debido al interés superior de la niñez. El interés superior de la niñez es un principio constitucional y convencional de interpretación que ante la toma de una decisión que involucre niñas, niños y adolescentes se debe evaluar y ponderar las 9 Véanse artículos 16 y 17 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal. 10 Véase tesis P. LXVII/2009, emitida por el Pleno, de rubro: "DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA." 11 Por ejemplo, la Ley Federal del Derecho de Autor

establece como infracción en materia de comercio el utilizar una imagen de una persona sin su autorización o la de sus causahabientes (artículo 231, f.II). SUP-JE-144/2021 10 posibles repercusiones en sus derechos y asegurar una protección plena. 12 Dicho principio exige la prevalencia de los derechos de la infancia frente a cualquier otro interés, por lo que ante un conflicto se debe ponderar por encima de cualquier otro ese derecho infantil. 13 Así, la Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 3 que el niño (a) tiene derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten. 14 De modo que, cualquier medida o decisión pública que pueda afectarlos (a) requiere adoptar medidas reforzadas o gravadas, para protegerlos con una mayor intensidad. 15 12 Véase artículo 4º de la Constitución, en su párrafo noveno, que dice: "En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez." Asimismo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece en su artículo 2 y 3 párrafos: "El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales." 13 Acción de inconstitucionalidad 2/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pfo. 129: "En suma, el ejercicio de los derechos fundamentales de las niñas y los niños se encuentran por encima de cualquier otro interés, incluyendo el de sus padres, pues, al ser la infancia concebida ya como sujeto de derechos, los niños y las niñas pueden ejercerlos en todo momento y las autoridades están no sólo obligadas a garantizar ese ejercicio, sino a velar porque el mismo se cumpla. Cuando se anteponen los derechos de la infancia con los de sus padres, la autoridad tiene obligación de ponderar por encima de cualquier otro, ese derecho infantil." 14 Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 15 Tesis aislada 1a. LXXXIII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL." SUP-JE-144/2021 11 Por eso, las autoridades del Estado deben garantizar y sancionar aquellas intromisiones arbitrarias e ilegales en la intimidad de las niñas, niños y adolescentes, que atenten contra su honra, imagen y reputación. Así, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes considera una violación a su intimidad, cualquier manejo directo de su imagen en los medios de comunicación con una concesión o medios impresos (art. 77). Asimismo, dicha ley considera una vulneración a la intimidad de las y los menores, cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación, bien porque menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o los ponga en riesgo. Ahora bien, el INE emitió los Lineamientos para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes que aparezcan en la propaganda político-electoral. Los sujetos obligados a esas directrices son los partidos políticos, coaliciones, candidaturas, autoridades y personas físicas o morales que se encuentren vinculadas. Los Lineamientos obligan a que en cualquier acto, mensaje o medio de difusión de propaganda político-electoral en el que aparezcan niñas, niños o adolescentes ya sea de manera directa o incidental, debe existir el consentimiento de quien o quienes ejerzan la patria potestad o el tutor o, en su caso, la autoridad debe suplirlos. Al igual deben contar con las manifestaciones de los menores sobre su opinión libre e informada respecto a la propaganda en la que participen. En caso de que no se tenga esa documentación, independientemente si la aparición fue directa o incidental se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que haga SUP-JE-144/2021 12 identificable a los niños, niñas o adolescentes, a fin de salvaguardar su imagen y, por ende, su derecho a la intimidad. 16 También, este órgano jurisdiccional ha señalado que los Lineamientos son aplicables en las imágenes que difundan las candidaturas en redes sociales. 17 b. Valoración de la Sala Superior El actor se duele de que la responsable omitió pronunciarse respecto a que en el motor de búsqueda "https://tineye.com" se podía observar que al menos hay otras ciento un publicaciones que utilizan la misma imagen genérica de la menor que apareció en las publicaciones del candidato denunciado y que no se podía presumir que el material hubiera sido producido en México o que correspondiera al presente año. Señaló que la plataforma estaba sujeta a las leyes de Israel con uso lícito de la propiedad intelectual. Al respecto, el Tribunal local determinó que los

Lineamientos del INE eran aplicables sin importar que la imagen hubiera sido generada en otro país o tuviera un uso comercial, por lo que debían observarse las pautas de consentimiento e información ahí establecidas. Esta Sala Superior considera apegada a Derecho la determinación de la responsable porque el partido político parte de la premisa inexacta de que si las imágenes de menores se alojan en algún sitio público es innecesario demostrar una autorización para su uso en propaganda electoral. Jurisprudencia 20/2019 de rubro: "PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN." Véase tesis XXIX/2019, de rubro: "MENORES DE EDAD. LOS LINEAMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA SU PROTECCIÓN, SON APLICABLES A LAS IMÁGENES QUE DE ELLOS DIFUNDAN LAS CANDIDATURAS EN SUS REDES SOCIALES EN EL CONTEXTO DE ACTOS PROSELITISTAS." SUP-JE-144/2021 La premisa es incorrecta porque: El derecho a la imagen es uno de los derechos esenciales de la persona, que tratándose de menores de edad requiere de un escrutinio más estricto sobre su difusión, reproducción o captura, derivado del interés superior de la niñez y de que son un grupo vulnerable. Por eso, en materia electoral se necesita recabar el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela y la opinión informada de la o el menor, sin que se prevean excepciones al respecto. No puede extenderse un permiso o derecho de autor para disponer de una imagen de un infante o adolescente para usos electorales. En efecto, una autorización o consentimiento de una imagen para uso comercial o para aparecer en cierta página o sitio web no puede considerarse una cláusula abierta y usarse para fines no expresamente señalados. Pues la forma en cómo y dónde se muestran a los demás es un derecho esencial de toda persona derivado de su dignidad humana, que impide una difusión irrestricta de ésta. Más aún si la imagen o fotografía corresponde a menores de edad, el escrutinio es aún más estricto, porque no se puede perder de vista que ellas y ellos precisan de la representación de un adulto y son un grupo vulnerable que requieren una protección reforzada ante una posible afectación a su desarrollo. Por esa razón, en materia electoral rigen los Lineamientos emitidos por el INE que fijan los requerimientos para que puedan aparecer niñas, niños y adolescentes en la propaganda electoral. SUP-JE-144/2021. Los Lineamientos no establecen alguna excepción en su aplicación, incluso son exigibles en aquellos casos de apariciones incidentales de menores en propaganda electoral. Por lo que también en esos casos, los sujetos obligados deben recabar el consentimiento de la madre, padre o tutor, o en su caso, de la autoridad que los supla y de la opinión informada de la o el menor, de lo contrario tendrán que difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, voz o cualquier otro dato que los haga identificables. La circunstancia de que no existan hipótesis de excepción en las que sea innecesario el consentimiento es precisamente porque se trata de menores de edad, a los que se les debe garantizar la máxima protección de la dignidad y sus derechos. Si un partido político no confeccionó o adquirió la imagen no lo releva de la obligación constitucional y convencional de salvaguardar el interés superior de cualquier niña, niño o adolescente que aparezca en su propaganda política electoral. Lo anterior, debido a que los partidos políticos y las personas candidatas son responsables de proteger los derechos de la infancia desde el momento en que deciden insertar tales imágenes en su propaganda. Sin que sea suficiente exhibir un permiso del uso de la imagen porque en todo caso habría que revisar los términos y condiciones en que fue emitido, es decir, que contenga la autorización de quienes representan al menor y, en su caso, un consentimiento informado del menor, pero, sobre todo, que permita su utilización para fines político electorales. De ahí que, deba desestimarse el planteamiento de que por tratarse de una fotografía extraída de una galería digital pública, eran inexigibles los Lineamientos porque esa razón es insuficiente para concluir que la SUP-JE-144/2021 15 imagen, el honor y la intimidad de la menor en cuestión efectivamente se encuentre protegido en ese sitio electrónico. 2. El partido no demostró tener una autorización para el uso electoral de la imagen de la menor. Era deber del partido demostrar que efectivamente tuviera una autorización electoral para poder incluir la imagen de la menor en las publicaciones del candidato. Sin embargo, el actor se limita a sostener que deben existir excepciones en la aplicación de los Lineamientos cuando la persona no está expuesta a riesgos que afecten su integridad personal. De modo que se trata de afirmaciones genéricas y subjetivas sin sustento probatorio que permita corroborar la licitud y autorización electoral para divulgar la fotografía de la menor, pues el hecho de que ésta se encuentre alojada en un buscador de Internet no equivale a demostrar que sea lícita su aparición. Máxime si se considera que la información, documentos, imágenes que circulan en la Red no necesariamente son lícitos, dado que no hay un control previo sobre el contenido de las plataformas electrónicas. Incluso tratándose de niñas, niños y adolescentes hay muchos riesgos de que sus fotografías, imágenes, videos circulen sin autorización alguna y debido a que no todos pueden reclamar por sí mismos la violación a sus derechos puedan impedir su divulgación. En esos casos se deben adoptar medidas mucho más estrictas sobre imágenes de menores alojadas en redes sociales o en la web. Por tanto, carece de razón el partido al sostener que

era suficiente con demostrar que la imagen aparece en un buscador de internet y que ha sido publicada en infinidad de páginas electrónicas, dado que no SUP-JE-144/2021 16 demuestra que su difusión o divulgación sea lícita y, menos, para fines electorales. La imagen denunciada correspondía a una menor con una discapacidad lo que exige una tutela reforzada. En las constancias de autos se aprecia que la menor incluida en las publicaciones del candidato tiene síndrome de Down, que es una alteración genética que puede llevar algún grado de discapacidad intelectual. En ese sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad garantiza que todos los niños y niñas gocen plenamente de los derechos humanos en igualdad de condiciones con los demás niños y que puedan expresar su opinión libremente sobre las cuestiones que les afecten (art. 7). También, se debe garantizar su derecho a expresar su opinión y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad. Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en su artículo 56 que tienen derecho a que en todo momento a que se les facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que les permitan obtener información de forma comprensible. Por ello, al estar involucrada una niña con una discapacidad exige que se hubieran respetado los principios de no discriminación, de una protección reforzada y atender a la especial vulnerabilidad en que se encuentran. Garantizando a la niña su derecho a opinar y a recibir información de manera accesible, para poder divulgar su fotografía. Información extraída de: <https://www.un.org/es/observances/down-syndrome-day> SUP-JE-144/2021 17 Sin embargo, dado que nada de eso obra en el expediente de forma alguna puede concluirse que todas estas condiciones ocurrieron para la difusión de su imagen. Por lo que, esta Sala Superior concluye que fue correcta la determinación de la responsable porque el candidato vulneró el interés superior de la niñez lo que actualizó la infracción y, en el caso del partido político hoy actor, le generó una responsabilidad indirecta.

Concatenado a lo anterior, la resolución número SRE-PSC-039/2017, Sentencia que resuelve el procedimiento especial sancionador UT/SCG/PE/PRI/CG/39/2017, en la que se determina la existencia del uso indebido de la pauta por parte del Partido Unidad Democrática por Coahuila, de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila; así como la vulneración al interés superior del menor por parte de la citada Coalición, como sea;

Por cuestión de método, en primer lugar, se estudiará, de manera conjunta, el supuesto uso indebido de la pauta por parte de la Coalición y tres de sus cuatro partidos, por supuestamente haber promocionado a la Coalición durante la precampaña y, si la Coalición, indebidamente, difundió promocionales relacionados con el proceso de selección interna del PAN y uno de sus precandidatos, a través de su tiempo en radio y televisión; posteriormente, se abordará lo correspondiente a la supuesta promoción indebida de la Coalición por parte del Partido Unión Democrática de Coahuila; y por último, se examinará lo SRE-PSC-039/2017 18 relacionado con el uso de imágenes de menores de edad en uno de los promocionales de la Coalición. 3.1 Marco Normativo respecto del uso indebido de la pauta. La Constitución Federal en su artículo 41, Base III, Apartados A y B, así como la Ley Electoral en los diversos 159, párrafos 1 y 2, 160, párrafos 1 y 2 y 226, párrafo 5, han establecido que los partidos políticos nacionales tienen derecho al uso permanente de los medios de comunicación social. Asimismo, que el INE es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los fines propios, a los de otras autoridades electorales, así como a los partidos políticos; y, que será también este quien garantizará a los partidos políticos el uso de sus prerrogativas constitucionales en radio y televisión. Además, establecen que los precandidatos tienen prohibido contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempo en cualquier modalidad de radio y televisión. Por otro lado, el artículo 226 de la referida Ley Electoral, en su párrafo cuarto, señala que los partidos políticos harán uso del tiempo en radio y televisión que conforme a Derecho les corresponda, para la difusión de sus procedimientos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular. Asimismo, que los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, accederán a radio y televisión en el tiempo que corresponda a los institutos políticos. En este mismo sentido, el artículo 168 de la Ley Electoral, dispone que cada partido político podrá decidir libremente la asignación, por tipo de precampaña, de los mensajes que le correspondan, incluyendo su uso para precampañas locales en las entidades federativas. SRE-PSC-039/2017 19 A su vez, el Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral del INE en su artículo 5, párrafo primero, fracción III, inciso i), dispone que por materiales se entiende a los promocionales o mensajes realizados por los partidos políticos, coaliciones o candidatos/as independientes y autoridades electorales, fijados o reproducidos en los medios de almacenamiento y formatos que determine el INE, para su transmisión en términos de lo que dispone la Constitución Federal y la Ley Electoral. Mientras que, en el inciso m), establece que la pauta es el documento técnico en el que se distribuye el tiempo,

convertido a número de mensajes, que corresponde a los partidos políticos, coaliciones y candidatos/as independientes, así como a las autoridades electorales en un periodo determinado, precisando la estación de radio o canal de televisión, la hora o rango en que debe transmitirse cada mensaje, y el partido político, coalición, candidato/a independiente o autoridad electoral al que corresponde. El artículo 7 párrafos 1, 3, 4 y 9 del citado Reglamento establece que los partidos políticos y sus candidatos y precandidatos a cargos de elección popular, accederán a mensajes de radio y la televisión, a través del tiempo que la Constitución Federal otorga como prerrogativa en la forma y términos establecidos legalmente; asimismo, que el INE es la única autoridad competente para ordenar la transmisión de propaganda política o electoral en radio o televisión, para el cumplimiento de sus propios fines y de los partidos políticos; y, que la propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas electorales difundan por radio y televisión los partidos políticos, se ajustarán a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6 y el artículo 41, Base III, Apartado A, de la Constitución Federal; así como el artículo 25, fracción I, incisos a) y u), de la Ley de Partidos Políticos y 247, párrafo 1, de la Ley Electoral. SRE-PSC-039/2017 20 El artículo 13, párrafo cuarto, dispone que, si por cualquier causa un partido político no realiza actos de precampaña electoral, los tiempos a que tengan derecho serán utilizados para la difusión de mensajes del partido político de que se trate, en los términos que establezca la ley. Asimismo, el artículo 37, párrafo 1, establece que, en ejercicio de su libertad de expresión, los partidos políticos determinarán el contenido de sus promocionales, por lo que no podrán estar sujetos a censura previa por parte del INE ni de autoridad alguna, sino, en su caso, a ulteriores responsabilidades. Ahora bien, no pasa desapercibido que a nivel local, el artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Coahuila, establece que los partidos políticos tendrán derecho al uso permanente de los medios de comunicación social y que el acceso a radio y televisión durante los procesos electorales se realizará en los términos establecidos en los ordenamientos antes referidos. La Ley General de Partidos Políticos establece que los partidos políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones para las elecciones de Gobernador, diputados a las legislaturas locales de mayoría relativa y ayuntamientos, de conformidad con el artículo 87, numeral 2. De conformidad con el artículo 88, numerales 1, 2, y 3, de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos podrán formar coaliciones totales, parciales y flexibles. Se entiende como coalición total, aquella en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso federal o local, a la totalidad de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral. Tratándose de coaliciones, se estará a lo previsto en los artículos 91, numerales 3, 4 y 5 de la Ley General de Partidos Políticos; 167, numeral 2 de la Ley General de SRE-PSC-039/2017 21 Instituciones y Procedimientos Electorales y 16 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, que establecen que a la coalición total que constituyan los partidos políticos les será otorgada la prerrogativa de acceso a radio y televisión en un treinta por ciento que corresponde distribuir en forma igualitaria, como si se tratara de un solo partido, incluso para efectos de la optimización de promocionales sobrantes. En cambio, para el setenta por ciento restante, deben ser tratados en forma separada. En el supuesto de coaliciones totales, el convenio de coalición establecerá la distribución de dicho tiempo entre los candidatos de la coalición. Asimismo, es aplicable a las coaliciones electorales, cualquiera que sea su ámbito territorial y tipo de elección, en todo tiempo y circunstancia, lo previsto por el artículo 91, numeral 4, de la Ley General de Partidos Políticos. En todo caso los mensajes en radio y televisión que correspondan a candidatos de coalición deberán identificar esa calidad y el partido responsable del mensaje. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el artículo 227 de la Ley General, se entiende por precampaña el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido; y por actos de precampaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado a un cargo de elección popular. El párrafo 3 del citado precepto legal, así como los párrafos 1 y 3 del artículo 211 de dicha ley, estipulan que la propaganda de precampaña es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, y expresiones que durante el periodo establecido por la ley y el que señale la convocatoria respectiva, difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a SRE-PSC-039/2017 22 conocer sus propuestas, debiendo señalarse de manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de quien es promovido. 3.2. Casos concretos. Como se ha quedado acreditado con antelación, no se tiene constancia de que los Partidos Acción Nacional y Encuentro Social hubieran difundido alguno de los spots denunciados, por lo que atendiendo al principio indubio pro reo, debe absolverse a dichos partidos de las conductas que se les imputa; y por tanto, únicamente se analizará la difusión de los promocionales pautados por el Partido Unidad Democrática por Coahuila y de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila. Sirve como sustento a lo anterior, lo determinado por la Sala Superior

en la jurisprudencia intitulada "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES"⁷ en donde determinó que cuando no se cuente con una prueba que acredite la responsabilidad de los denunciados, lo procedente es absolverlos.

3.2.1 Uso indebido de la pauta por parte de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, por la difusión de spots en precampaña. Como se ha dicho, el primer punto a dilucidar es si existió un uso indebido de la pauta, ya que, en concepto del promovente, no está permitido que las Coaliciones, por sí mismas, puedan difundir spots en radio y televisión, durante la etapa de precampañas, pues, en su consideración, dicha prerrogativa es de uso exclusivo de los partidos políticos que contienden en el proceso electoral correspondiente. 7 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60. SRE-PSC-039/2017

23 En ese sentido, el promovente refiere que con la difusión de spots de la Coalición se está realizando una sobreexposición de dicho consorcio político, ya que las coaliciones únicamente se pueden posicionar, a sí mismas, durante la etapa de campañas. Dicho lo anterior, esta Sala Especializada considera que es inexistente esta falta atribuida a la Coalición, ya que el actor parte de una premisa errónea; a saber: "las coaliciones no tienen acceso a radio y televisión durante las precampañas". En efecto, de la lectura integral de la denuncia, se advierte que el actor encamina sus argumentos a evidenciar que sólo los partidos políticos tienen acceso a radio y televisión durante la etapa de precampañas, mientras que las Coaliciones tendrán acceso a partir del inicio de las campañas. Sin embargo, de conformidad con lo previsto en los artículos 87, 88, párrafo 2, 91, párrafos 3, 4 y 5 167, párrafo 2 de la Ley de Partidos; 167, párrafo 2 de la Ley General, en relación con los numerales 13, párrafo 4 y 16 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, los partidos políticos podrán formar coaliciones para contender de manera conjunta en alguna elección, siendo que una de esas modalidades puede ser la de Coalición total, como lo es en el caso que nos ocupa. Además, se advierte que las Coaliciones podrán acceder a tiempo aire en radio y televisión, ya sea en el periodo de precampaña o campaña. Para ello, en caso de Coalición total, se le considerará como si fuera un solo partido político; y por tanto, tendrá acceso al 30% del tiempo en radio y televisión que se reparte de manera igualitaria entre los partidos. No obstante, no tendrá acceso al 70% del tiempo que se distribuye de manera proporcional entre dichos institutos políticos, ya que en este caso, los partidos coaligados accederán a dicha prerrogativa, de manera individual y separada, SRE-PSC-039/2017 24 atendiendo a la votación que cada uno hubiera obtenido en la elección del congreso local inmediata anterior. Bajo ese contexto, ha quedado demostrado que el Comité de Radio y Televisión del INE concedió el uso de la prerrogativa constitucional a la Coalición, situación que fue confirmada por la Sala Superior al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP74/2017, en donde estableció que en el artículo 167 de la Ley General no se hacía ninguna distinción en cuanto a la etapa del proceso electoral en la que se debía repartir el tiempo en radio y televisión destinado a las coaliciones; y por tanto, la regla de distribución que en dicho artículo se contemplaba debía ser aplicada tanto a precampañas como campañas. De ahí que no asista la razón al promovente cuando refiere que la Coalición usó indebidamente la pauta en radio y televisión al difundir los spots: "Registro Coahuila Coalición", en su versión televisiva con número de folio RV00097-17 y en su versión de radio con el registro RA00106-17.

3.2.2 Uso indebido de la pauta por parte de la Coalición, al difundir spots en donde difundió actos relacionados con el proceso de selección interna del PAN. En este punto, el promovente refiere que el hecho de que la Coalición difundiera promocionales en los que se aludía al proceso de selección interna del PAN y a uno de sus precandidatos, es contrario a Derecho, puesto que el PAN únicamente podía haber destinado su pautado para promocionar cualquier acto relacionado con su elección interna. SRE-PSC-039/2017 25 En ese sentido, el promovente refiere que el hecho de que se utilizara el emblema de la Coalición, puede inducir al error de que lo que se promociona es un precandidato de dicho consorcio político; y no así, del PAN en lo individual. Al respecto, como se ha dicho con antelación, las Coaliciones gozan de la prerrogativa de acceso a radio y televisión para el periodo de precampaña, siendo que en el caso que nos ocupa, la autoridad administrativa electoral consideró que la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila era una coalición total; y por tanto, para efectos de la distribución de tiempo aire se le debía considerar como un solo partido y, en consecuencia, sólo tenía acceso a la distribución del 30% que se reparte de manera igualitaria entre los partidos políticos. Por lo que al tener acceso en radio y televisión, dicha Coalición tenía la posibilidad de difundir propaganda genérica o de precampaña, con su propio tiempo aire. Cabe mencionar que similar criterio utilizó la Sala Superior al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP-74/2017, en donde determinó que: "una vez asignado el tiempo en radio y televisión que le corresponde a la coalición [...] para las etapas electorales, corresponde a dichos institutos políticos, en ejercicio de su libre autodeterminación, a través de su convenio de coalición, establecer la forma y los términos en que se hará uso del tiempo que le fue asignado, mismo que puede ser usado no sólo para la difusión de propaganda de precampañas, sino también para la difusión de propaganda

genérica". Así, resulta evidente que las coaliciones están facultadas para difundir spots en radio y televisión, ya sea con contenido genérico o con propaganda electoral atinente a una precampaña; sin embargo, dicha prerrogativa no es absoluta ni ilimitada, sino que se debe ajustar a los parámetros que rigen la difusión de propaganda en la época de precampaña. SRE-PSC-039/2017 26 Al respecto, la Sala Superior al emitir la jurisprudencia intitulada: "RADIO Y TELEVISIÓN. LA UTILIZACIÓN DE LOS TIEMPOS ASIGNADOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PARA PROMOCIONAR LA IMAGEN DE CANDIDATOS POSTULADOS POR OTROS INSTITUTOS POLÍTICOS O COALICIONES, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD"⁸ determinó que los partidos políticos no deben utilizar los espacios en radio y televisión que les corresponden, para promocionar la imagen de candidatos postulados o registrados por otros institutos políticos o coaliciones, pues puede generarse una exposición desigual y, en consecuencia, un mayor posicionamiento a alguna de las opciones políticas en detrimento de las restantes, contraviniendo el principio de equidad en la contienda electoral. En ese contexto, esta Sala Especializada considera que los partidos políticos y coaliciones, ya sea durante las precampañas y campañas, únicamente podrán hacer uso de los tiempos o pautas en radio y televisión para difundir su propia propaganda política o electoral, sin que exista posibilidad alguna de que algún precandidato o candidato de un diverso partido político o coalición pueda participar o beneficiarse de dicha prerrogativa, dado que ello afectaría el principio de equidad en el proceso de selección interna de un partido, puesto que se estaría dotando de mayores beneficios a una sola oferta política. Precisado lo anterior, debe recordarse que en el caso, se tiene acreditado que durante el periodo de precampañas del proceso electoral del estado de Coahuila, la Coalición Alianza, como parte de su prerrogativa en radio y televisión, difundió los spots: "Registro Coahuila Coalición" con folio RV00097-17 [versión televisión] y RA00106-17 [versión radio], cuyo contenido se muestra a continuación: RV00097-17 8 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, En tales circunstancias, a juicio de esta Sala Especializada, dichos promocionales deben ser considerados como spots de precampaña, puesto que el mensaje que se emitió se encontraba vinculado con el proceso de selección interna del PAN, uno de los precandidatos que contendió y la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila. En ese contexto, esta Sala Especializada considera que es existente la infracción atribuida a la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, relacionada con el uso indebido de la pauta que le fue asignada en el periodo de precampaña de la elección de Gobernador de Coahuila. Ello, habida cuenta que ha sido acreditado que los spots controvertidos son de carácter electoral, y que están encaminados a difundir actos relacionados con el proceso de selección interna que, de manera individual, realizó uno de los partidos coaligados, sin que mediara una justificación para ello, puesto que en el convenio no se estableció que la Coalición participaría o coadyuvaría en la elección del Candidato a Gobernador que realizaría el PAN. Lo anterior se considera así, ya que con independencia de que durante las precampañas, el PAN formó parte de la Coalición, lo cierto es que de conformidad con el convenio que integró el consorcio político, ningún otro partido coaligado o la Coalición misma, estaban en posibilidades de realizar actos de promoción de precandidatos o de etapas del proceso de selección interna del PAN, puesto que en el convenio únicamente se refirió que el candidato emanaría de la selección de candidatos del PAN, atendiendo a la determinación que adoptara la Comisión Permanente del Consejo Nacional de dicho partido. En esa lógica, la difusión de promocionales vinculados a la precandidatura de José Guillermo Anaya Llamas debió ser realizada exclusivamente por el PAN con el tiempo que, de manera individual, le correspondía en el periodo de precampaña; es decir, que los spots alusivos a dicho precandidato debieron estar comprendidos entre el tiempo que le fue asignado al PAN como parte del 70% del tiempo aire que SRE-PSC-039/2017 30 se distribuyó de manera proporcional a cada uno de los partidos en lo individual y del cual no le fue asignado a la Coalición denunciada. Lo anterior, ya que la Coalición denunciada, por sí misma, no llevó a cabo un proceso de selección interna, sino que dicha situación fue realizada de manera particular por uno de sus partidos coaligados; y por tanto, la Coalición no estaba facultada para promocionar actos de precampaña que pudieran causar una afectación a la equidad del proceso de selección interna del PAN, al otorgar mayor tiempo del que debía de tener alguno de los sujetos que participarían en dicho proceso electivo. En efecto, al no realizar un proceso de selección interna, la Coalición únicamente debió constreñirse a difundir propaganda genérica sobre temas de interés general; y no así, la exhibición de promocionales con propaganda de precampaña; cuestión diversa hubiera sido que en el convenio de coalición se hubiera establecido que para la elección de candidato a Gobernador, dicho consorcio político realizaría un proceso de selección en el cual se incluyeran, entre otros, a los precandidatos de los partidos coaligados; o bien, que la Coalición participaría en el proceso interno que implementara individualmente alguno de sus coaligados, pues en estos supuestos se justificaría que el tiempo en radio y televisión de la Coalición fuera distribuido y usado por los diferentes precandidatos que participaran en dicha elección interna. De ahí que la Coalición Alianza

Ciudadana por Coahuila utilizó indebidamente su pauta en radio y televisión que le fue asignada durante el periodo de precampaña del proceso electoral que se desarrolla en el estado de Coahuila; y por tanto, contravino lo previsto en 41 párrafo segundo base III apartado A, de la Constitución; 159; 211, 227, párrafo 3, y 443, párrafo 1 incisos a) y n), de la Ley General; 25 párrafo 1 incisos a) y u), de la Ley General de Partidos Políticos; así como 13, párrafos 1 y 3 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. SRE-PSC-039/2017 31 3.2.3 Uso indebido de la pauta por el Partido Unidad Democrática de Coahuila, por la promoción de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila. En este punto, el promovente aduce que dicho partido usó indebidamente la pauta que le fue asignada en el periodo de precampaña de la elección que actualmente se desarrolla en el estado de Coahuila, al haber promocionado a la Coalición por medio de la difusión de los spots: "Coahuila libérate" con folio RV001918 [versión televisión] y RA002366 [versión radio]; "Lenin Precampaña" con folio RV00037-17 [versión televisión] y RA00039-17 [versión radio]; y "Video Alianza" con folio RV00100-17 [versión televisión] y RA00114-17 [versión radio]. En ese sentido, el promovente refiere que es ilegal que se promocioe el logotipo de una coalición en la etapa de precampaña, puesto que se le está posicionando en un momento que no es permitido; más aún, cuando, en su concepto, en dichos promocionales se advierten propuestas de gobierno y campaña, dirigidas a la ciudadanía en lo general. Al respecto, como ya se ha señalado, los partidos políticos gozan de la prerrogativa constitucional de acceso a la radio y televisión, ya sea durante o fuera de algún proceso electoral, puesto que su acceso es de manera permanente atendiendo a las modalidades que establece la propia Constitución y las normas electorales. Bajo ese contexto, debe decirse que en el caso particular, se tiene constancia de que el Partido Unidad Democrática de Coahuila no realizó un proceso de selección interna para elegir candidato a Gobernador de Coahuila, puesto que atendiendo al convenio de coalición que firmó, el candidato a dicho puesto sería el que resultara electo en el proceso interno del PAN. Por q C-039/20 corrupción se te hizo normal. Y es que mientras ellos se enriquecen, tú te vuelves más pobre. Cada vez trabajas más y te pagan menos. ¿Qué pasa Coahuila? Alégrate, decídete, tú tienes la solución. Ahora les toca sufrir a ellos. Que paguen por lo que han hecho. Es ahora o nunca. Voz de un hombre: Unidad Democrática de Coahuila. UDC. Voz de un hombre: Coahuila. Libérate. Como puede advertirse, en estos spots no se hace referencia alguna a la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, sino que únicamente se utiliza el nombre y logo del Partido Unidad Democrática de Coahuila; además, contrario a lo afirmado por el actor, no se aprecia alguna propuesta de campaña de dicho partido político ni alguna referencia a un plan de gobierno. Por el contrario, lo único que se advierte es el posicionamiento de dicho partido frente al supuesto problema de corrupción y pobreza que existe en el estado de Coahuila; usando para ello preguntas retóricas con las que pretende reafirmar su idea, tales y como lo son: "¿Por qué la corrupción se te hizo tan normal?" y "¿Qué pasa Coahuila?". En esas circunstancias, dichos promocionales deben ser considerados como genéricos, pues únicamente pretenden mostrar el posicionamiento del partido en torno a temas de interés social, sin que se aprecie que se haga algún posicionamiento de alguna fuerza política que pudiera influir en la contienda electoral. Por lo que es factible calificar como dentro de la legalidad estos promocionales. Ahora por lo que hace a los promocionales: Promocional Video Alianza con folio RV00100-17 [versión televisión] Imágenes representativas Voz de un hombre: Para llegar a una meta es necesario construir un camino. No podemos fallarle a Coahuila viendo como sufre nuestra gente. Basta ya de divisiones. Basta ya de egoísmo. Es tiempo de una Alianza Ciudadana para construir el Coahuila que todos queremos. Este es el reto y la oportunidad. Dejar a un lado el interés personal y darle esperanza a nuestro pueblo. Hasta la victoria. ¡Venceremos! Voz de un hombre: UDC. Voz de un hombre: Libérate. Voz en off: Alianza Ciudadana por Coahuila. En el caso de estos spots, se advierte que el contenido del mensaje es idéntico, puesto que se escucha el uso de las mismas palabras tanto en radio y televisión; lo cual, permite que se estudien de manera conjunta, a fin de evitar repeticiones innecesarias, con la diferenciación del uso de imágenes en el caso del spot televisivo. Como puede advertirse, en estos promocionales se hace alusión a la visión que tienen tanto UDC como la Coalición Ciudadana por Coahuila, respecto del sufrimiento que se causa a los coahuilenses con la división y egoísmo del interés personal; y ante ello, manifiestan una oportunidad de esperanza al renunciar a ese interés individual. En ese contexto, en dichos promocionales no se aprecia alguna referencia que permita deducir que se pretende posicionar a un partido político; o bien, que se está llamando a votar a favor de determinada fuerza política, ya que lo que realmente se tiene es un posicionamiento general, relacionado con la condición social del Estado y la posibilidad de que ésta cambie con la renuncia de los intereses personales de la población en general. En esa tesitura, es indubitable que estos spots contienen un mensaje genérico, habida cuenta que únicamente refieren la postura ideológica del partido, por lo que no se advierte referencias que impliquen un llamado al voto. SRE-PSC-039/2017 46 En este tenor, este órgano jurisdiccional estima que los promocionales denunciados, por la temporalidad en la que fueron difundidos, están apegados a las

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias en cuanto a su contenido, de tal suerte que no se acredita la infracción, pues no existe prohibición alguna para que durante el periodo de precampañas, el partido político difunda ideas, críticas o manifestaciones en torno a temas de interés general, propio de todo sistema democrático. Esto es, en la época de precampañas, los partidos políticos pueden hacer uso de las pautas en radio y televisión otorgadas por el INE, sin que necesariamente deban contener mensajes de precampaña o campaña, pudiendo versar sobre cuestiones de carácter general. Por otra parte, tampoco se acredita el argumento del quejoso en el sentido de que la difusión de los promocionales denunciados constituye un uso indebido de la pauta, en razón de que fueron hechos con la finalidad de posicionar ilícitamente a la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila ante el electorado. Lo anterior, ya que se reitera que lo que realmente se difunde es un contenido propio de la ideología del partido político, con expresiones críticas, lo cual no encuentra una prohibición expresa en la legislación aplicable, sino por el contrario, dicho contenido se encuentra permitido a los partidos políticos ya sea fuera o dentro de los periodos electorales, al constituir una de las formas que permiten a los institutos políticos alcanzar los fines constitucionales establecidos en el artículo 41 de la Constitución Federal. En ese sentido, esta Sala Especializada considera que del análisis integral y contextual de los promocionales no es posible presumir algún riesgo de afectación en materia electoral; de ahí que el objetivo de los promocionales otorgados al partido SRE-PSC-039/2017 47 político, en este caso específico, no se encuentra desvirtuado, ya que atendiendo al contenido se trata de materiales genéricos con posicionamiento partidista, por lo que es inexistente la conducta señalada por el Promovente.

3.2.4 Uso indebido de la pauta por la Coalición, al usar imágenes de menores de edad en un spot. Es oportuno señalar que esta Sala Especializada, en un nuevo paradigma de protección de los Derechos Humanos, implementó un método tendente a verificar la posible existencia de alguna situación de vulnerabilidad, en el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad auditiva, o bien, cuando en los promocionales se incluyan personas menores, aun cuando forme o no parte de la controversia. Proceder que es plenamente acorde con lo previsto por el artículo 1º, párrafo tercero de la Constitución Federal; en cuanto ordena que todas las autoridades, incluida por supuesto esta Sala Especializada, tienen la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los Derechos Humanos. Acorde con lo anterior, al verificar el contenido del promocional de televisión con folio RV0097-17. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Al respecto, se tiene en cuenta que el contenido de la propaganda difundida por los partidos políticos se encuentra amparada por la libertad de autodeterminación de contenidos; empero, el ejercicio de dicha libertad fundamental no es absoluta, sino que tiene límites, entre los que se encuentran los vinculados con la dignidad o la reputación de las personas y los derechos de terceros, acorde con lo dispuesto en los artículos 6º, párrafo primero de la Constitución Federal, así como 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dicen: Artículo 6º.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Artículo 19.[...] 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesaria para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

SRE-PSC-039/2017 50 Destaca de estos preceptos constitucionales y convencionales una limitación coincidente: esto es, el pleno respeto a los

derechos de terceros, incluidos, por supuesto los derechos de la niñez, cuya protección, se encuentra expresamente ordenada en el artículo 4º de nuestra Constitución Federal. En tales condiciones, cuando en el uso de las pautas asignadas por el Instituto se difundan mensajes que puedan afectar derechos de terceros, y que en el caso, resultan ser personas menores de edad, se debe garantizar sus derechos en el marco de su interés superior. Ahora bien, en el orden conceptual, el "interés superior del niño", ha sido descrito por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: "Implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Al amparo de esa previsión convencional, el Estado Mexicano, a través de sus instituciones, autoridades y tribunales, está constreñido a tener en consideración primordial el respeto al interés superior del menor, con la adopción de medidas necesarias para asegurar y maximizar la protección y efectividad de los derechos de las niñas y niños, acorde con lo establecido en los artículos 3, párrafo 1 y 4, de la Convención sobre los Derechos del Niño: Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Artículo 4. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional. SRE-PSC-039/2017 51 Con tal directriz de protección a la niñez, el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes" emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el interés superior del menor tiene las siguientes implicaciones: a) Coloca en plena satisfacción los derechos de los infantes como parámetro y fin en sí mismo; b) Define la obligación del Estado respecto de los niños, niñas y adolescentes; y c) Orienta decisiones que protegen sus derechos. En sincronía con estos postulados, la Primera Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis de rubro: "DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS" estableció que la mera situación de riesgo de los infantes es suficiente para que se estime que se afectan los derechos de la niñez y, ante ello, deben adoptarse las medidas que resulten más benéficas para la protección de los infantes. En el caso, la posible afectación al interés superior del infante se advierte a través de la exposición de la imagen de diversos niños y posibles adolescentes (sin que de esta circunstancia se tenga absoluta seguridad, atento a su fisonomía), de ahí que el análisis se deba hacer en relación al derecho a la propia imagen de los infantes participantes. Entonces la importancia del asunto radica, precisamente, en la protección reforzada que goza la imagen de las y los menores de edad involucrados en el promocional. SRE-PSC-039/2017 52 Por tanto, para el otorgamiento de la salvaguarda judicial es suficiente que se les ubique en una situación de riesgo potencial, sin que sea necesario que esté plenamente acreditado el perjuicio ocasionado, porque, atento a los valores en juego, el interés superior de las niñas y niños, está por encima del ejercicio de la libertad de autodeterminación del contenido de los spots que tienen los partidos políticos. Con ese parámetro de ponderación, el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece, que ningún niño puede ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, ni ataques ilegales a su honra y reputación. Por su parte, los artículos 2, 5, 76, 77 y 78 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes contemplan, igualmente, la salvaguarda de los infantes ante cualquier riesgo de afectación o manejo directo de su imagen, nombre, datos o referencias que permitan su identificación, así: Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán: I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno; II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia. El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías

procesales. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la SRE-PSC-039/2017 53 asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley. ... Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño. ... Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán orientar, supervisar y, en su caso, restringir, las conductas y hábitos de niñas, niños y adolescentes, siempre que atiendan al interés superior de la niñez. Artículo 77. Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, así como medios impresos, o en medios electrónicos de los que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez. Artículo 78. Cualquier medio de comunicación que difunda entrevistas a niñas, niños y adolescentes, procederá como sigue: I. Deberá recabar el consentimiento por escrito o cualquier otro medio, de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente, respectivamente, conforme a lo señalado en el artículo anterior y a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 76 de la presente Ley, y II. La persona que realice la entrevista será respetuosa y no podrá mostrar actitudes ni emitir comentarios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. En el caso de que no sea posible recabar el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de un menor, éste podrá otorgarlo siempre que ello no implique una afectación a su derecho a la privacidad por el menoscabo a su honra o reputación. SRE-PSC-039/2017 54 Por otra parte, no se requerirá el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de niñas, niños o adolescentes, cuando la entrevista tenga por objeto que éstos expresen libremente, en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, su opinión respecto de los asuntos que les afecten directamente, siempre que ello no implique una afectación a sus derechos, en especial a su honra y reputación. El interés superior a proteger es la sola posibilidad de poner en peligro su imagen con una latente identificación de su persona. Este principio protector, vinculado al tema, nos orienta a reflexionar que en el caso de la propaganda política o electoral, hay siempre un elemento ideológico que identifica a la opción política, por tanto, la presencia de infantes implica un riesgo potencial de asociar a tales infantes con una determinada preferencia política e ideológica, a una edad que todavía no es oportuna. Lo anterior puede devenir en un riesgo potencial en relación con su imagen, honra o reputación presente, en su ambiente escolar o social y, por supuesto, en su futuro, pues al llegar a la vida adulta pueden aceptar o no aprobar la ideología política, con la cual fueron identificados en su infancia. En esta concurrencia de derechos involucrados, acorde con las disposiciones nacionales e internacionales antes descritas, esta Sala Especializada debe hacer un ejercicio de ponderación el cual se decante por la protección reforzada de los menores de edad involucrados en los promocionales de televisión que se analizan. Con tal parámetro este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a implementar todas aquellas medidas que sirvan para evitar que se presenten situaciones de riesgo potencial que puedan afectar el interés superior del menor en relación con los promocionales de contenido político electoral, como en el asunto. SRE-PSC-039/2017 55 De suma importancia destaca tener la seguridad que los infantes fueron escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece: "Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez". Los requerimientos reforzados tienen sustento en los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a ser informados, como una directriz convencional que debe atenderse por todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales, como lo indica la UNICEF, en las Directrices éticas para la información sobre la infancia; conducentes y aplicables a la aparición de infantes en los spots de los partidos políticos, precisamente porque aparecen en medios de comunicación social como la televisión genera su exposición pública. Este instrumento internacional indica, en lo destacable:

"Directrices éticas de UNICEF para la información sobre la infancia Protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la exposición pública ... De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, todos los niños, niñas y adolescentes, sin excepción, deben tener garantizados sus derechos. Uno de esos derechos es el de la protección de la vida privada, por lo que la exposición pública de los niños, niñas o adolescentes... UNICEF plantea una serie de directrices éticas para la información sobre infancia, que tienen como objetivo aportar orientaciones básicas para los medios de comunicación, pero que también son de utilidad para autoridades administrativas, policiales y judiciales que participan en los procesos de justicia, sobre cómo abordar los temas relacionados con la protección de la infancia a fin de respetar en todo momento su interés superior y su dignidad como seres humanos... Directrices éticas de UNICEF para la información sobre la infancia I. Principios 1. Se deberán respetar la dignidad y los derechos de cada niño o niña en toda circunstancia...." SRE-PSC-039/2017 56 Por tanto, a efecto de garantizar el pleno respeto al interés superior de los infantes, la autoridad administrativa electoral conforme a sus facultades adoptó las medidas necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos que procedan, en los términos apuntados y, en su caso, requirió la documentación necesaria a fin de privilegiar y proteger el interés superior de los niños, niñas y/o adolescentes menores de dieciocho años. Conforme lo anterior, mediante acuerdo de siete de marzo, la Unidad Técnica requirió a la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, remitiera la documentación a través de la cual fuera posible advertir las personas que, en su caso, ejercieran la patria potestad de los menores involucrados; así como el documento en el cual se asentara la libre manifestación de la voluntad de los menores. En respuesta, la Coalición exhibió copia fotostática de siete autorizaciones de uso de imagen y voz, en el que se consigna información como el nombre del menor, domicilio, Ciudad/Estado/Código Postal, Teléfono, RFC o CURP; así como la leyenda: "Soy el padre/la madre (o tutor legal) del menor que ha firmado esta autorización y consentimiento, y por la presente acuerdo que yo y el menor estaremos sujetos a todos los términos y condiciones de la presente." Enseguida de lo anterior, se encuentra consignado el nombre de la persona que se dice ostentar como el padre o madre del menor referido en el formato correspondiente. Al respecto, esta Sala Especializada considera que dichos formatos, al ser pruebas documentales privadas por ser documentos elaborados por particulares y 9 Acorde con lo dispuesto en los artículos 461, párrafo 3, inciso b), así como 462, párrafos 1 y 3, de la Ley General. SRE-PSC-039/2017 57 proporcionados por la Coalición denunciada, por sí solos, resultan insuficientes para acreditar que los menores que en ellos se refiere son los mismos que aparecen en el spot controvertido; más aún, cuando la Coalición no proporcionó ningún otro documento que permitiera identificar plenamente a los menores involucrados. En efecto, en los formatos referidos no hay ningún elemento que permita la identificación visual de los menores y tampoco se adjuntó alguna credencial escolar o documento que permitiera a esta autoridad electoral distinguir a que menor de los que aparecen en el vídeo corresponde cada uno de los permisos. Por lo que los citados formatos no son la prueba idónea para acreditar la persona que supuestamente otorgó el permiso. Aunado a ello, es preciso señalar que con la documentación remitida por la Coalición, tampoco se puede acreditar que las personas que firman la autorización, en realidad ostenten la patria potestad de los menores que aparecen en los vídeos, puesto que únicamente se aportó copia de la licencia de manejo de cada uno de los signantes, pero se omitió acompañar copia certificada del acta de nacimiento de los menores o de cualquier otro documento oficial con el que se pudiera identificar plenamente al mayor adulto que tuviera los derechos de representación de cada uno de los niños y/o adolescentes que se observa en el spot en comento. En ese sentido, dada la laxitud que presentan los citados formatos y la falta de algún documento que acredite la persona que tiene la patria potestad de los menores, es que esta Sala Especializada no tener por cierta la existencia del consentimiento pleno, cierto e idóneo, por escrito, debidamente firmado por los padres o quienes ejerzan la patria potestad o tutela del menor, pues como se ha manifestado, no hay mayores elementos que permitan concatenar y tener por acreditado que la participación de los niños en el promocional denunciado ocurrió con apego a las formalidades exigibles. SRE-PSC-039/2017 58 Además, respecto al requisito consistente en la manifestación del menor por cuanto hace a su opinión libre y expresa respecto de su participación en el promocional electoral en cuestión, opinión que será valorada atendiendo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, en el caso concreto, el PAN omitió presentar cualquier tipo de documentación para el cabal cumplimiento de este requisito, sin que el partido político emitiera pronunciamiento al respecto, en el presente procedimiento. No pasa desapercibido a esta autoridad que la representación de la Coalición, en su defensa alegó que: • El plazo otorgado para el desahogo y cumplimiento al requerimiento resultaba insuficiente; • Se trata de documentos ajenos y privados, lo que provocó necesariamente una labor de recaudación de dichos documentos; y por tanto, era claro, evidente y lógico, que el tiempo y la posibilidad de los titulares de los documentos no estaba a disposición del partido político; lo cual retrasaba y tornaba difícil su recaudación. • En vista del plazo otorgado, resultaba

imposible la protocolización del consentimiento de los padres y los menores; más aún si se toma en cuenta el tiempo que conllevan los trámites protocolarios ante fedatario público. • El requerimiento no tiene sustento legal que permita al partido prevenir la obligación de recaudar los documentos que se requirieron, sin embargo no se pretende desconocer los criterios que el INE citó en el acuerdo de requerimiento, solo trata de evidenciar que resulta complicado prever y SRE-PSC-039/2017 59 recaudar documentos para dar exhaustivo cumplimiento a requisitos no contemplados en la legislación. No obstante, a juicio de esta Sala Especializada, dichas consideraciones deben desestimarse, ya que tal y como se ha referido con antelación, la normas constitucionales, convencionales y legales, prevén que quienes difundan en medios de comunicación la imagen de menores, deberán tomar en cuenta aquellas medidas que impliquen la salvaguarda de los infantes ante cualquier riesgo de afectación o manejo directo de su imagen, entre las que se encuentra el recabar con antelación a la difusión, los permisos correspondientes. Por lo que no es aceptable que la Coalición denunciada aduzca que no se le otorgó el tiempo necesario para recabar dicha documentación, ya que estaba plenamente vinculada a contar con ella, desde el momento en que realizó el promocional que posteriormente difundiría como parte de su prerrogativa constitucional de acceso a televisión. En esa lógica, tampoco asiste razón a la Coalición denunciada cuando refiere que resultaba imposible realizar la protocolización del consentimiento de los padres y de los menores, ya que se insiste, dicha situación debió ser realizada con antelación a la difusión del promocional; además, la parte denunciada pasa por alto que los Notarios Públicos no son los únicos que, en materia electoral, podrían realizar una protocolización, ya que también contaba con la posibilidad de solicitar el auxilio de la Oficialía Electoral del INE; sin embargo, no se aportó ningún documento que, cuando menos, generara un indicio de que se solicitó su apoyo ni tampoco se tiene constancia de que la Coalición hubiera requerido los servicios de protocolización ante fedatario público. SRE-PSC-039/2017 60 De ahí que se tengan por desestimadas las manifestaciones de la representación de la Coalición; y por consiguiente, sea dable concluir que esta Sala Especializada no cuenta con los elementos idóneos y suficientes, como puede ser una fotografía, identificación escolar o cualquier otro elemento que sirva para establecer la identidad de los menores; lo cual, permitiría cotejar y establecer el vínculo entre las niñas y niños que aparece en el promocional y de quien, supuestamente, dio el consentimiento es su madre o tutora. Lo que deja en evidencia el riesgo potencial al que se expuso a los menores, por la difusión del promocional, al no tener certeza de que se emitió un consentimiento pleno, cierto e idóneo por parte de los padres, madres o tutores de aquellos, y, sobre todo, por no cuidar de manera idónea el uso de las imágenes de éstos. En consecuencia, se estima que se vulneró el interés superior de los menores involucrados y, por ende, se actualiza por parte de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila la infracción que se denuncia, en contravención a lo dispuesto por los diversos artículos 1, 4, párrafo noveno y 6, párrafo primero de la Constitución Federal; 25, párrafo 1, inciso a) y u), de la Ley de Partidos Políticos; 247, párrafo 1 y 443, párrafo 1, incisos a), h) y n) de la Ley Electoral. CUARTA. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Una vez que ha sido acreditada la existencia de diversas faltas, procede establecer la clase de sanción que legalmente corresponda, tomando en cuenta, entre otras, las siguientes directrices: 1. La importancia de la norma transgredida, es decir, señalar qué principios o valores se violaron o se vieron amenazados y la importancia de esa norma dentro del sistema electoral (principio, valor, ordenamiento, regla). SRE-PSC-039/2017 61 2. Efectos que produce la transgresión, los fines, bienes y valores jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o resultado). 3. El tipo de infracción y la comisión intencional o culposa de la falta, análisis que atañe verificar si el responsable fijó su voluntad para el fin o efecto producido, o bien, pudo prever su resultado. 4. Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así como si la conducta fue reiterada. Para tal efecto, esta Sala Especializada estima procedente retomar la tesis histórica S3ELJ 24/2003, de rubro "SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN", que sostenía que la determinación de la falta puede calificarse como levísima, leve o grave, y, en este último supuesto, como grave ordinaria, especial o mayor, lo que corresponde a una condición o paso previo para estar en aptitud de determinar la clase de sanción que legalmente se deba aplicar al caso concreto, y seleccionar de entre alguna de las previstas en la ley. Ello en virtud de que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior en diversas ejecutorias,¹⁰ que la calificación de las infracciones obedezca a dicha clasificación. Por lo tanto, para una correcta individualización de la sanción, en primer lugar es necesario determinar si la falta a calificar es: i) levísima, ii) leve o iii) grave, y si se incurre en este último supuesto, precisar si la gravedad es de carácter ordinaria, especial o mayor. 10 En los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-45/2015 y acumulados, SUPREP-57/2015 y acumulados, SUP-REP-94/2015 y acumulados, SUP-REP-120/2015 y acumulados, SUP-REP134/2015 y acumulados, SUP-REP-136/2015 y acumulados y SUP-REP-221/2015. SRE-PSC-039/2017 62 Adicionalmente, es menester precisar que cuando se establece un mínimo y un

máximo de la sanción a imponer, se deberá proceder a graduar la misma atendiendo a las circunstancias particulares del caso. Al respecto, una vez que han quedado demostradas la infracciones a la normativa electoral en que incurrió la Coalición Alianza Ciudadana de Coahuila, se procede a imponer la sanción correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la Ley General, que dispone que cuando se trate de infracciones cometidas por los partidos políticos, se podrá imponer desde amonestación pública, multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente, según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda. Para determinar la sanción respectiva, se deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodearon la conducta contraventora de la norma, de conformidad con lo previsto en el artículo 458, párrafo 5 de la Ley General, tomando en consideración los siguientes elementos:

- Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila. 1. Singularidad o pluralidad de faltas. En este punto, en principio, resulta necesario establecer que con una sola conducta se acreditaron dos faltas; esto es, que con la difusión del spot "Registro Coahuila Coalición" con folio RV00097 [versión tv] y 11 Se debe precisar que, mediante reforma al párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo decreto se publicó el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. De igual forma, en términos de los artículos segundo y tercero transitorios del decreto de reforma mencionado, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país. SRE-PSC-039/2017 63 RA00106 [versión radio] se actualizaron las faltas de uso indebido de la pauta y afectación al interés superior de un menor. 2. Bien Jurídico tutelado. Establecido el contexto anterior, debe decirse que con dicha conducta se transgredió, por una parte, el principio de equidad en la contienda interna de un partido político, puesto que se concedió mayor tiempo aire en radio y televisión a uno de los contendientes del proceso de selección interna del PAN; por otra parte, se afectó el interés superior de los menores que aparecieron en el spot televisivo controvertido, puesto que no se acreditó que la Coalición contará con los documentos necesarios para acreditar una participación libre y voluntaria, a sabiendas de la exposición de su imagen para fines electorales; y por tanto, se afectó la integridad, privacidad y reputación de los menores. 3. Circunstancias de modo, tiempo y lugar Modo. La conducta consistió en la difusión por televisión del promocional "Registro Coahuila Coalición" con folio RV00097 [versión tv] y RA00106 [versión radio], relativo al proceso electoral local de Coahuila, con un total de ciento ochenta y siete impactos en televisión y trescientos ochenta y cuatro en radio. Tiempo. La difusión del promocional se realizó durante el desarrollo de los comicios locales en Coahuila, en la etapa de precampañas, en el periodo del doce al quince de febrero. Lugar. La difusión del promocional se efectuó en los canales de televisión cuya transmisión se realiza en Coahuila. SRE-PSC-039/2017 64 4. Condiciones externas y medios de ejecución. El momento en que se realizó la transmisión del promocional, corresponde al periodo de precampaña del proceso electoral local del estado de Coahuila, y el medio de ejecución fueron los canales de radio y televisión de transmisión local, acorde con lo informado por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos en las diversas comunicaciones que han sido referidas en el apartado de acreditación de los hechos denunciados. 5. Beneficio o lucro. No se acredita un beneficio económico cuantificable para la Coalición responsable, en virtud de que se trata de la difusión de promocionales pautados por ella misma, en uso de su prerrogativa constitucional de acceso a los tiempos del Estado. 6. Comisión dolosa o culposa de la falta. Está acreditado que la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila pautó los promocionales aludidos como parte de su prerrogativa de acceso al tiempo aire en radio y televisión que le correspondía en el marco de las precampañas del proceso electoral de Coahuila; y por tanto, es posible afirmar que tenía pleno conocimiento del contenido de los promocionales pautados; lo cual, permite concluir que tuvo la voluntad, por una parte, de usar la imagen de los menores de edad en el contenido de su promocional; y por otra parte, que tuvo el ánimo de difundir el promocional tildado de ilegal durante el periodo de precampañas en el proceso electoral del estado de Coahuila. Además, como Coalición que contiene en un proceso electoral local está plenamente vinculada al conocimiento de las normas constitucionales, convencionales y legales y de los criterios jurisprudenciales que rigen el acceso a la radio y televisión por parte de los actores políticos que participan en un proceso comicial; así como los tendentes a garantizar la salvaguarda del interés superior de los menores al ser utilizados en promocionales que se difundirán en un contexto electoral, a través de los medios electrónicos.

Es importante mencionar la Jurisprudencia 20/2019 en la que se determina la obligación que CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN; como sea;

PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º y 4º, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 y 14 de los Lineamientos Generales para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de Propaganda y Mensajes Electorales establecidos por el Instituto Nacional Electoral; y en la Jurisprudencia de la Sala Superior 5/2017, de rubro PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CUMPLIRSE CUANDO SE DIFUNDAN IMÁGENES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, se advierte que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. En ese sentido, cuando en la propaganda político-electoral, independientemente si es de manera directa o incidental, aparezcan menores de dieciocho años de edad, el partido político deberá recabar por escrito el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o tutela, y en caso de que no cuente con el mismo, deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que haga identificable a los niños, niñas o adolescentes, a fin de salvaguardar su imagen y, por ende, su derecho a la intimidad.

Se presume que el entonces precandidato en cuestión ni los partidos políticos que lo respaldan no cuentan con los requisitos administrativos, expresos en el Lineamiento para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia político-electoral, capítulo "Requisitos para mostrar niñas, niños o adolescentes en propaganda político electoral, mensajes electorales, actos políticos, actos de precampaña o campaña, en cualquier medio de difusión", numeral 8, con título "Consentimiento de la madre y del padre, de quien ejerza la patria potestad o de los tutores", señala lo siguiente:

"...Por regla general, debe otorgar el consentimiento quien o quienes ejerzan la patria potestad o el tutor o, en su caso, la autoridad que debe suplirlos respecto de la niña, el niño o adolescente que aparezca o sea identificable en propaganda político-electoral, mensajes electorales o actos políticos, actos de precampaña o campaña, o para ser exhibidos en cualquier medio de difusión..."

Irregularidad que a simple vista es demostrada, toda vez que el precandidato ni los partidos políticos que lo respaldan, no cumplieron con este requisito, y debiendo esta autoridad electoral, solicitar al infractor de forma inmediata dicho consentimiento, y en caso de negarse a proporcionarlo, sancionarlo cómo corresponda.

Así mismo en el Lineamiento para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, capítulo "Presentación del consentimiento y opinión ante el Instituto", en el numeral 14, señala lo siguiente;

... "Los sujetos obligados que exhiban la imagen, voz o cualquier dato identificable de niñas, niños o adolescentes en su propaganda político-electoral, mensajes o actos políticos, actos de precampaña o campaña, deberán:

... b) Conservar en su poder, durante el tiempo exigido por la normatividad aplicable en materia de archivos, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de otras leyes, la grabación en video de la conversación por medio de la cual se explicó a la niña, niño o adolescente el alcance, contenido, temporalidad y medio de difusión, así como el original del medio por el que se documentó la opinión informada de la persona menor de edad, sobre su participación en la propaganda político-electoral, mensajes electorales, o su presencia en actos políticos, actos de precampaña o campaña conforme al manual y las guías metodológicas referidas en el Lineamiento 9. ... (Sic)

Del análisis de la fotografía publicada el 13 de febrero del 2024, a las 8:46 pm con el título "En medio de un gran ambiente y en compañía de mi esposa "Francis Cazarez Oliveros, disfrute del segundo desfile de carnaval", como se aprecia en la siguiente liga electrónica

<https://www.facebook.com/photo?fbid=382348954553646&set=pcb.382349117886963>, en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del C. Guillermo Romero Rodríguez, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, de la cual se observa difundió varias imágenes de niños, niñas y adolescentes, ello para promocionar su campaña política y posicionar su imagen ante los electores, vulnera el derecho a la intimidad de los infantes que aparecen en su promoción electoral, y se presume puede devenir en un riesgo potencial, por lo cual se debió cumplir con la obligación señalada en el numeral 14, con título "Presentación del consentimiento y opinión ante el Instituto", del Lineamiento para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes en Materia Político-Electoral, es decir el precandidato tiene obligación de conservar en su poder, durante el tiempo exigido por la normatividad aplicable en materia de archivos, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de otras leyes, la grabación en video de la conversación por medio de la cual se explicó a la niña, niño o adolescente el alcance, contenido, temporalidad y medio de difusión, así como el original del medio por el que se documentó la opinión informada de la persona menor de edad, sobre su participación en la propaganda político-electoral, mensajes electorales, o su presencia en actos políticos, actos de precampaña o campaña conforme al manual y las guías metodológicas referidas en el Lineamiento 9, hecho contrario la autoridad estará obligada a salvaguardar la integridad, de los menores, así como a determinar las sanciones pertinentes al entonces precandidato y a la brevedad tomar las medidas cautelares pertinentes.

Es importante señalar que la fotografía publicada el 13 de febrero del 2024, a las 8:46 pm con el título "En medio de un gran ambiente y en compañía de mi esposa "Francis Cazarez Oliveros, disfrute del segundo desfile de carnaval", como se aprecia en la siguiente liga electrónica <https://www.facebook.com/photo?fbid=382348954553646&set=pcb.382349117886963>, en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del C. Guillermo Romero Rodríguez, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, en la cual también se identifican de forma directa niños, niñas y adolescentes, se presume no cumple el entonces precandidato Guillermo Romero Rodríguez, ni los Partidos Políticos PAN, PRI, PAS Y PRD con la obligación de llevar a cabo el difuminado del rostro de los menores, con lo anterior se encuentra aprovechándose de los indefensos menores, actuando con alevosía menoscabando los derechos político electorales y humanos de los niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo a lo señalado en el Anexo 3. emitido por el Instituto Nacional Electoral, de nombre "Instructivo para realizar la conversación y recabar la opinión informada de las niñas, niños y adolescentes en base en las guías metodológicas anexas", redactado con objeto de proporcionar una guía para realizar las conversaciones con niñas, niños y adolescentes, la cual les brinde la información oportuna, necesaria y suficiente a fin de que entiendan el alcance y los riesgos de su participación en propaganda político-electoral, mensajes electorales, o en actos políticos, actos de precampaña o campaña, así como sobre exhibición de su imagen, voz o cualquier dato que los identifique a través de cualquier medio de difusión, mismo, que pretende que en la información que se les proporciona a niñas, niños o adolescentes se les indique en qué medios y durante cuánto tiempo se va a difundir su imagen y de qué forma será su participación (activa o pasiva), por quién podría ser visto (familia, amigos y gente que no conoce) y los riesgos que implica ello, buscando establecer el mecanismo para garantizar que la opinión que se recabe sea expresa, propia, individual, libre, informada y espontánea, además de que sea acorde a la edad, desarrollo cognitivo y madurez de la persona menor de edad, evidenciado con la fotografía subida el 13 de febrero del 2024, a las 8:46 pm con el título "En medio de un gran ambiente y en compañía de mi esposa "Francis Cazarez Oliveros, disfrute del segundo desfile de carnaval", como se aprecia en la siguiente liga electrónica <https://www.facebook.com/photo?fbid=382348954553646&set=pcb.382349117886963>, en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del C. Guillermo Romero Rodríguez, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la

Presidencia Municipal, en la cual se identifican de forma directa niños, niñas y adolescentes, el denunciado tiene y tuvo la obligación de cumplir cabalmente dicha metodología, con el objetivo claro de brindar la información oportuna, necesaria y suficiente a fin de que entiendan el alcance y los riesgos de su participación en propaganda político-electoral, mensajes electorales, o en actos políticos, actos de precampaña o campaña, así como de darle certeza y seguridad jurídica a los niños, niñas y adolescentes.

El Anexo 2. con título "Manual para recabar la opinión y el consentimiento informado de niñas, niños y adolescentes para la utilización de su imagen, voz o cualquier dato que los haga identificables en propaganda político-electoral y mensajes electorales, actos políticos, de precampaña o campaña a través de cualquier medio de difusión", señala en su punto IV, inciso a), para las Niñas y niños de 6 a 11 años, la obligación de recabar la opinión y el consentimiento informado de niñas, niños y adolescentes para la utilización de su imagen, voz o cualquier dato que los haga identificables en propaganda político-electoral y mensajes electorales, actos políticos, de precampaña o campaña a través de cualquier medio de difusión, antes de la elaboración o producción de la propaganda político-electoral o mensajes electorales, o previo a la participación en un acto de precampaña o campaña, así como un consentimiento informado durante la elaboración de videos o cualquier tipo de propaganda o mensaje electoral (previo a la difusión) y después de la difusión; o durante la celebración de actos políticos, de precampaña o campaña y su aparición en redes sociales o cualquier plataforma digital tales como Twitter, "X", YouTube, Facebook, y notas emitidas por periódicos digitales, o por influencers, que posicionan o apoyen al candidato.

Concatenado a lo anterior en el punto IV, inciso b), el cual señala que las niñas, niños y adolescentes, antes de la elaboración o producción de la propaganda político-electoral o mensajes electorales, o previo a la participación en un acto de precampaña o campaña. Consentimiento informado durante la elaboración de videos o cualquier tipo de propaganda o mensaje electoral (previo a la difusión) y después de la difusión; o durante la celebración de actos políticos, de precampaña o campaña y su aparición en redes sociales o cualquier plataforma digital, considerando que el denunciado no cumplió con los requisitos mínimos necesarios establecidos en la Ley para utilizar la imagen de los menores de edad; aunado a que, a no existe motivo, causa o fin lícito y legítimo para la aparición de éste en la fotografía subida en fecha 13 de febrero del 2024, a las 8:46 pm con el título "En medio de un gran ambiente y en compañía de mi esposa "Francis Cazarez Oliveros, disfrute del segundo desfile de carnaval", como se aprecia en la siguiente liga electrónica <https://www.facebook.com/photo?fbid=382348954553646&set=pcb.382349117886963>, en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del C. Guillermo Romero Rodríguez, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal.

Así mismo, la resolución número SUP-REP-170/2018 y SUP-REP-5/2019. Tesis XXIX/2018 PROPAGANDA POLÍTICA ELECTORAL. CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTOS DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN. señala lo siguiente;

... III. La protección reforzada del derecho a la propia imagen de menores de edad Los menores de edad, como cualquier persona, gozan del derecho a la propia imagen, como un derivado del derecho a la privacidad y, en dicho sentido, tienen la protección de dicho derecho fundamental frente a intromisiones indebidas. Esto ha sido reconocido no sólo por los tribunales nacionales, sino por diversos organismos internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño, firmada en 1989, establece que (Artículo 16): 1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. 2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef), en el documento de debate sobre los derechos de los niños en el mundo digital,¹⁷ señala que, a pesar de que el derecho a la intimidad de los menores y las personas adultas tiene la misma protección, es evidente que, considerando los demás derechos,

el mejor interés y capacidades en evolución de los menores, es necesario un enfoque diferenciado de la protección del derecho a la intimidad de los menores. En dicho sentido, en la Observación General No. 14 del Comité de los Derechos del Niño (CRC/C/GC/14), se explica que el "interés superior del niño" es un concepto triple que involucra un derecho sustantivo, un principio interpretativo y una norma de procedimiento. Como principio interpretativo, este concepto implica que "si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño". Como norma de procedimiento implica que "siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados" (párr. 6). En el caso de que los derechos de otras personas entren en conflicto con el interés superior del niño y no sea posible armonizarlos, el referido Comité resalta que las autoridades "habrán de analizar y sopesar los derechos de todos los interesados, teniendo en cuenta que el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial significa que los intereses del niño tienen máxima prioridad y no son una de tantas consideraciones". El principio del interés superior de la niñez está también reconocido en el artículo 4, párrafo 9, de la Constitución Federal. En cuanto a la protección de la imagen de los menores, en el contexto español, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de España considera que "siempre que no medie el consentimiento de los padres o representantes legales de los menores con la ausencia del Ministerio Fiscal, la difusión de cualquier imagen de éstos ha de ser reputada contraria al ordenamiento jurídico" (Recurso 2895/2013). En dicho caso, el Tribunal determinó que publicar la fotografía de un menor en una revista gratuita sin el permiso de sus padres, vulnera su derecho a la imagen, a pesar de que la fotografía fue capturada por el tío del niño. Enfatizó que la violación se actualiza "por la inclusión de la imagen del menor en una revista con independencia de los fines perseguidos por su publicación o de que pudiera o no afectar a la reputación del afectado" y que lo decisivo es "la entrega de esta fotografía de un codemandado a otro sin que se acreditase la existencia del consentimiento necesario para su publicación". Los derechos tutelados en el artículo 6 constitucional, no son exclusivamente oponibles a los partidos políticos, sino también a los particulares, por lo que es posible concluir que la propaganda y mensajes de contenido político o electoral que difundan las personas físicas y morales en la temporalidad referida por el numeral 24724 de la ley electoral, también deben ajustarse a la norma constitucional citada, siendo posible que en el caso de que no sea así, el sujeto emisor de la misma, pueda ser sancionado. • La Sala Especializada consideró necesario, a manera de acción preventiva, establecer un llamamiento respecto de aquellas personas físicas y morales vinculadas con cualquier fuerza política que elaboren o difundan por cualquier medio de comunicación legalmente previsto para hacerlo, cualquier tipo de propaganda política o electoral que, en determinado momento pudieran emitir en ejercicio de su libertad de expresión y participación política ya sea a favor o en contra de algún partido político, precandidato/a, candidato/a, aspirante, candidato/a independiente, coalición, dentro o fuera de un proceso electoral federal o local, para que tengan especial cuidado al utilizar cualquier elemento audiovisual que pudiera colocar en riesgo el interés superior de la niñez, ya que siempre debe tenerse presente que los derechos humanos de la niñez requieren de mayor respeto, protección y cuidado reforzado por parte de cualquier persona y no sólo de las autoridades. ... (Sic)

<https://www.facebook.com/photo?fbid=382348954553646&set=pcb.382349117886963>



Memo Romero ●
13 feb · 🌐

En medio de un gran ambiente y en compañía de mi esposa, Francis Cázarez Oliveros, disfruté del segundo desfile de Carnaval.... Ver más



Hechos que evidentemente vulnera el derecho a la intimidad, violenta su imagen, honra o reputación presente en su ambiente escolar o social y en su futuro, pues al llegar a la edad adulta puede no aprobar la ideología política con la que sus tutores, o aprovechada mente el precandidato lo vinculó durante su infancia, violando así, la normatividad local, federal y la convencionalidad que protege los derechos de los infantes que aparecen en su promoción electoral, sin cumplir con la normatividad electoral y los derechos humanos, constituyendo violaciones al proceso electoral, así como a la neutralidad, equidad e imparcialidad de la contienda a favor del precandidato conocido como Guillermo Romero Rodríguez.

Por su parte La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa establece lo siguiente:

... Artículo 11 Bis. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

...XVII. Derecho a la intimidad; ...

Artículo 66. *Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales.*

No podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquella que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación.

Quienes ejerzan su patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán orientar, supervisar, y en su caso, restringir sus conductas y hábitos sin que esto se considere injerencia, siempre que atiendan al interés superior de la niñez.

Artículo 67. *Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación locales, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez.*

Artículo 67 Bis. *Cualquier medio de comunicación que difunda entrevistas a niñas, niños y adolescentes, procederá como sigue:*

I. Deberá recabar el consentimiento por escrito o cualquier otro medio, de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente, respectivamente, conforme a lo señalado en el artículo anterior y a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 66 de la presente Ley; y,

II. La persona que realice la entrevista será respetuosa y no podrá mostrar actitudes ni emitir comentarios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

En el caso de que no sea posible recabar el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de un adolescente, éste podrá otorgarlo siempre que ello no implique una afectación a su derecho a la privacidad por el menoscabo a su honra o reputación.

(Adic. Según Decreto No. 434, publicado en el P.O. No. 063, del 24 de mayo de 2023).

Artículo 67 Bis 1. *Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la protección de la identidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes que sean víctimas, ofendidos, testigos o que estén relacionados de cualquier manera en la comisión de un delito, a fin de evitar su identificación pública.*

La misma protección se otorgará a adolescentes a quienes se les atribuya la realización o participación en un delito, conforme a la legislación aplicable en la materia.

(Adic. Según Decreto No. 434, publicado en el P.O. No. 063, del 24 de mayo de 2023).

Artículo 67 Bis 2. *Los medios de comunicación deberán asegurarse que las imágenes, voz o datos a difundir, no pongan en peligro, de forma individual o colectiva, la vida, integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes, aun cuando se modifiquen, se difuminen o no se especifiquen sus*

identidades, y evitarán la difusión de imágenes o noticias que propicien o sean tendentes a su discriminación, criminalización o estigmatización, en contravención a las disposiciones aplicables.

En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente artículo, niñas, niños o adolescentes afectados, por conducto de su representante legal o, en su caso, de la Procuraduría de Protección, actuando de oficio o en representación sustituta, podrá promover las acciones civiles de reparación del daño e iniciar los procedimientos por la responsabilidad administrativa a que haya lugar; así como dar seguimiento a los procedimientos hasta su conclusión. Niñas, niños o adolescentes afectados, considerando su edad, grado de desarrollo cognoscitivo y madurez, solicitarán la intervención de la Procuraduría de Protección.

En resumidas cuentas dichas publicaciones se encuentran plagadas de actos constitutivos de infracciones electorales y delitos, de los cuales debe enterarse a las autoridades pertinentes, cómo lo son, la violación a **los Lineamientos Generales para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de Propaganda y Mensajes Electorales establecidos por el Instituto Nacional Electoral y al Reglamento del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, para la difusión, fijación y retiro de la propaganda política y electoral, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, la Convención de los Derechos del Niño**, lo que lleva a violentar la neutralidad, equidad e imparcialidad de la contienda, por lo que se pide a esta Autoridad en apego al protocolo de actuación de quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Quinto. Que el 18 de febrero del 2024, a las 12:09 Am, como se aprecia en la siguiente liga <https://www.facebook.com/share/oyWqvNpUWdEWW6v8/?mibextid=xfxF2i> en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del C. Guillermo Romero Rodríguez, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, es importante señalar que en primer término se debe considerarse propaganda electoral, así como un acto político por cumplir con los requisitos para el efecto, y de lo acontecido el precandidato difundió varias imágenes de niños, niñas y adolescentes, ello para promocionar su campaña política y posicionar su imagen ante los electores, lo cual vulnera el derecho a la intimidad de los infantes que aparecen en su promoción electoral, y se presume puede devenir en un riesgo potencial, en relación con la imagen, honra o reputación presente en su ambiente escolar o social y en su futuro, pues en la edad adulta al decidir sobre su ideología política puede no aprobar con la que fue relacionado desde la infancia, en consecuencia a lo anterior el precandidato Guillermo Romero Rodríguez, así como los partidos políticos PAN, PRI, PAS Y PRD, no protegen el interés superior del menor pues anteponen la auto determinación arbitraria del candidato y los partidos en el contenido de sus promocionales, publicados en diversos medios, sin cumplir con la normatividad electoral, señalada en el Lineamiento para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, emitido el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo General, mediante Acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales, en acatamiento a la sentencia SUP-REP60/2016 de la Sala Superior, y SRE-PSC-102/2016 de la Sala Regional Especializada, ambas salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación" (en adelante Lineamientos), identificado con la clave INE/CG20/2017.

En los cuales se señalan las formas de aparición y participación de niñas, niños o adolescentes, siendo de manera directa en propaganda político electoral y mensajes electorales; y directa o incidental en actos políticos, actos de precampaña o campaña. En un acto político, un acto precampaña o campaña, la aparición es incidental, siempre y cuando las niñas, niños o adolescentes sean exhibidos de manera involuntaria y sin el propósito de que formen parte de éstos, por ser situaciones no planeadas o controladas por los sujetos obligados.

Así mismo se observa de la fotografía publicada en fecha 18 de febrero del 2024, a las 12:09 Am, como se aprecia en la siguiente liga <https://www.facebook.com/share/oyWqvNpUWdEWW6v8/?mibextid=xfxF2i> en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del C. Guillermo Romero Rodríguez, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, mediante la cual se difundieron varias imágenes de niñas, niños o adolescentes, donde se tienen una participación DIRECTA, lo anterior en un acto político electoral, pues de la imagen en un análisis exhaustivo se observa a los menores, manifestando un apoyo directo al hacer gestos de manera corporal, acreditando entonces su participación activa y directa, con objeto de promocionar la campaña política del precandidato, y posicionar su imagen ante los electores, lo cual vulnera el derecho a la intimidad de los infantes así como su imagen, honra o reputación, presente en su ambiente escolar o social y en su futuro, pues a la edad adulta puede NO APROBAR la ideología política con la que fue identificado en su infancia.

La aplicación convencional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala que la aparición de menores de edad en propaganda política o electoral implica un riesgo potencial de ASOCIAR a los menores con una determinada preferencia política o ideológica.

Es de importancia señalar que la protección del interés superior del menor se antepone a la libertad de los partidos de autodeterminar el contenido de sus promocionales.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala que se debe partir de una concepción de niños, niñas y adolescentes como titulares activos de derechos y no solamente como sujetos de protección, bajo el derecho del infante a la preservación de su imagen, considerando que una exposición inadecuada puede fomentar estereotipos o una situación de riesgo para el menor, garantizando con una correcta aplicación de la norma, no ser objeto de injerencias en su vida privada, familia, domicilio, y correspondencia, así como no ser atacado en su honor y reputación.

En todas las decisiones y actuaciones el Estado velará y cumplirá con el principio del Interés superior de la Niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Es decir, los niños, las niñas y adolescentes tienen derecho a que, antes de que se tome cualquier medida que pueda influir sobre estos se evalúen y ponderen las posibles repercusiones, a fin de decidir por la que promueva y proteja sus derechos, considerando que la propia imagen de los menores de edad, goza de protección, por lo que su exhibición implica un riesgo potencial, así mismo la propaganda política o electoral es un riesgo potencial porque siempre hay un elemento ideológico o preferencia política.

Concatenado a lo anterior, la resolución número SRE-PSC-121/2015 tituló **USO INDEBIDO DE LA PAUTA POR LA DIFUSIÓN PROPAGANDA ELECTORAL QUE AFECTA AL INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES.** señala lo siguiente;

El promovente alude a la supuesta vulneración a los derechos de los menores que aparecen en el promocional denominado Quien pompo 2, en torno a la utilización de su imagen y la protección de sus datos personales, e invoca y transcribe el contenido del artículo 4, párrafo noveno^o, de la Constitución Federal, en el cual se prescribe la obligación del Estado de velar por el interés superior de la niñez y garantizar de manera plena los derechos de los menores.

Al respecto, se tiene en cuenta que el contenido de la propaganda difundida por los partidos políticos se encuentra amparada por la libertad de expresión, en relación a la cual, el Tribunal Electoral ha sostenido en reiteradas ocasiones que debe ser objeto de maximización en el contexto del debate político, a efecto de que se aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la

consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática.¹⁰²

No obstante, el ejercicio de dicha libertad fundamental no es absoluto, sino que tiene límites, entre los que se encuentran, los vinculados con la dignidad o la reputación de las personas y los derechos de terceros, acorde con lo dispuesto en los artículos 6º, párrafo primero de la Constitución Federal¹⁰³, así como 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles¹⁰⁴ y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos¹⁰⁵.

En tal virtud, la acotación en torno a los aspectos que no deben perturbarse con las expresiones de ideas, se traduce en una obligación de abstenerse de incurrir en tales conductas a efecto de salvaguardar los bienes jurídicos ahí protegidos, como lo es, el pleno respeto a los derechos de terceros, incluyendo, por supuesto los derechos de los menores, cuya protección se encuentra expresamente ordenada en el artículo 4º de nuestra Constitución Federal.

Por tanto, la comisión de alguna conducta que provoca la inobservancia de tal obligación, implica por sí misma un aspecto que atenta contra el propio orden constitucional y, en el caso de la materia electoral, constituye una vulneración específica en cuanto al uso del tiempo pautado por el INE para la difusión de la propaganda electoral, en términos de lo dispuesto en el artículo 247, párrafo 1, de la Ley Electoral.

Así, la Sala Superior¹⁰⁶ ha señalado que en el derecho administrativo sancionador electoral el "tipo" infractor se constituye con los elementos siguientes:

- (i) Una norma que contenga una obligación o una prohibición a cargo de algún sujeto.
- (ii) Otra norma con una prevención general, relativa a que, si alguien inobserva la ley (ya sea por incumplir alguna obligación o por violar una disposición), se impondrán sanciones.
- (iii) Un catálogo general de sanciones aplicables cuando se inobserve la normativa.

Luego, en el caso de la normativa sobre la cual se afirma su incumplimiento, los elementos que constituyen el tipo administrativo electoral que nos ocupa, se obtienen de los referidos artículos 4 y 6, párrafo primero de la Constitución Federal en torno a que en la difusión de las ideas se atienda a la obligación de respetar los derechos de terceros y, en específico, los derechos de los menores; ello, en relación con el artículo 247, párrafo 1, de la Ley Electoral, referente al mandato específico de que en el uso de las pautas asignadas para la difusión de propaganda electoral se acaten los lineamientos constitucionales.

Lo anterior, se relaciona con lo dispuesto en los diversos 25, párrafo 1, incisos a) y u), de la Ley de Partidos Políticos y 443, párrafo 1, incisos a) y n) de la Ley Electoral, en los que se establece la prevención general concerniente a la inobservancia de las disposiciones establecidas en la normativa electoral.

Y finalmente, el catálogo de sanciones aplicables se encuentra previsto en el artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la Ley Electoral, toda vez que el sujeto denunciado en el presente caso, resulta ser un partido político.

En tales condiciones, el tipo administrativo electoral antes referido se actualiza cuando en el uso de las pautas asignadas por el INE se difundan mensajes que puedan afectar derechos de terceros, y que en el caso, resultan ser menores de edad, a quienes debe garantizárseles sus derechos en el marco de su interés superior.

Al respecto, se tiene en cuenta el concepto de "interés superior del niño", el cual ha sido descrito por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al destacar que "implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño".¹⁰⁷

Así, el Estado Mexicano, a través de sus instituciones, autoridades y tribunales, está constreñido a tener en consideración primordial el respeto al interés superior del menor, a través de la adopción de las medidas necesarias para asegurar y maximizar la protección y efectividad de los derechos de los niños, acorde con lo establecido en los artículos 3, párrafo 1 y 4,¹⁰⁸ de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En esa tesitura, acorde con el "Protocolo de actuación de quienes imparten justicia en caso que involucren niñas, niños y adolescentes" emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el interés superior del niño tiene las siguientes implicaciones:

- a) coloca en plena satisfacción de los derechos del niño como parámetro y fin en sí mismo;
- b) define la obligación del Estado respecto del niño, y
- c) orienta decisiones que protegen los derechos del niño.

Por ello, la Primera Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la mera situación de riesgo de los menores es suficiente para que se estime que se afectan los derechos de los niños y, ante ello, deben adoptarse las medidas que resulten más benéficas para la protección de los infantes.¹¹³¹

Pues bien, en el caso que nos ocupa, la supuesta vulneración al interés superior del menor se desarrolla a través de la exposición de la imagen de diversos niños que participan en el promocional denunciado, de ahí que, la afectación concreta a analizar se refiera al derecho a la propia imagen de los menores participantes.

Para tal efecto, se parte de la base relativa a que el derecho a la propia imagen de los menores goza de una protección especial, de ahí que para el otorgamiento de la salvaguarda judicial es suficiente que los menores se ubiquen en una situación de riesgo potencial, sin que sea necesario que esté plenamente acreditado el perjuicio ocasionado, pues, en congruencia con el interés superior de los niños, debe operar una modalidad del principio in dubio pro infante, a fin de dar prevalencia al derecho de los menores, por encima del ejercicio de la libertad de expresión, con el objeto de que se garanticen los derechos de los niños, por encima de cualquier duda que se presente en los casos que se analicen.

En similares términos el Tribunal Constitucional de España ha establecido que "en los casos en que se analice la captación y difusión de fotografías de niños en medios de comunicación social,[...] es preciso tener en cuenta, que el ordenamiento jurídico establece una protección especial, en aras a proteger el interés superior del menor".¹¹³²

Asimismo, señala el mismo Tribunal Constitucional Español que el derecho a la propia imagen "se configura como un derecho de la personalidad, que atribuye a su titular la facultad de disponer de la representación de su aspecto físico que permita su identificación, lo que conlleva tanto el derecho a determinar la información gráfica generada por los rasgos físicos que le hagan reconocible que puede ser captada o tener difusión pública, como el derecho a impedir la obtención, reproducción o publicación de su propia imagen por un tercero no autorizado".¹¹³³

Así, en el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño¹¹³⁴, se establece que ningún niño puede ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, ni ataques ilegales a su honra y reputación y, por su parte, en los artículos 76 y 77 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes¹¹³⁵ se contempla igualmente la salvaguarda de los menores ante cualquier riesgo de afectación o manejo directo de su imagen, nombre, datos o referencias que permitan su identificación.

Pues bien, en el caso de la propaganda política o electoral hay siempre presente un elemento ideológico que identifica a la opción política que la presenta, por tanto, en principio, la utilización de menores en la misma implica un riesgo potencial de asociar a tales infantes con una determinada preferencia política e ideológica.

Lo anterior puede devenir en un riesgo potencial en relación con su imagen, honra o reputación presente en su ambiente escolar o social y, por supuesto, en su futuro, pues al llegar a la vida adulta pueden no aprobar la ideología política con la cual fueron identificados en su infancia.

En ese sentido, acorde con la disposiciones internacionales y nacionales antes descritas, esta Sala Especializada se encuentra obligada a determinar la implementación de todas aquellas medidas que sirvan para evitar que se presenten tales situaciones de riesgo potencial que puedan afectar el interés superior del menor en relación con los promocionales de contenido político electoral.

Así, en una primera actuación, necesaria para garantizar que no se presenta alguna situación de riesgo, es criterio de esta Sala, que la autoridad que analice en algún momento, un promocional político en que participen menores, deberá contar con la plena certeza de que se respetó el elemento relativo al consentimiento

parental o, en su caso, de los tutores, en torno a su participación en la propaganda electoral, toda vez de lo dispuesto por los artículos 424 y 425 del Código Civil Federal y sus correlativos de los códigos civiles de la República Mexicana.

Igualmente, tal autoridad deberá garantizar el derecho que tienen los infantes de ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, en términos de lo dispuesto en el artículo 71^º de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Al efecto, y como elementos instrumentales de tales derechos, directamente relacionados con el interés superior del menor, la autoridad que analice la validez de promocionales de contenido político electoral deberá verificar lo siguiente:

i. Consentimiento por escrito debidamente firmado por el padre y la madre o por quien(es) ejerza(n) efectivamente la patria potestad o tutela del menor.

Tal documento se acompañara de copia certificada del acta de nacimiento, o bien, constancia de pérdida de patria potestad o acta de defunción del padre o madre que no firme (para el caso de que se otorgue solo por uno de los padres o tutores).

ii. Manifestación del menor por cuanto hace a su opinión libre y expresa respecto de su participación en el promocional electoral en cuestión. Tal opinión será valorada atendiendo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

iii. El consentimiento parental o, en su caso, de los tutores, y la manifestación de la opinión del menor deberá ser ratificado ante la Oficialía Electoral del INE o fedatario público, a fin de que se haga constar el otorgamiento del mismo en un acto revestido de fe pública. Lo anterior a fin generar certeza y garantizar plenamente el interés superior de los menores.

Asimismo, aunado a contar con la certeza plena en torno al otorgamiento del consentimiento respectivo, acorde con las condiciones antes relatadas, la autoridad que en su momento, analice la validez del promocional político en que participen menores de edad deberá valorar minuciosamente su contenido, a fin de que, tomando en cuenta su edad y madurez, se les garantice entre otras cuestiones: pleno respeto a su imagen, honra, nombre o datos personales, evitando en todo caso situaciones de riesgo, que de manera actual o al menos potencial, pudieran correr en su entorno social o educativo por su participación en tal promocional electoral.

Además, tal autoridad, ya sea administrativa o judicial, deberá allegarse de los elementos necesarios para analizar y justificar de manera razonable el motivo y necesidad sustantiva para la participación de los menores en mensajes de propaganda política electoral. Tal cuestión deberá ser ponderada en cada caso, en relación con el interés superior del menor y garantizando objetivamente el pleno respeto a su desarrollo físico, psíquico y emocional.

Ahora bien, en la especie, no se tiene plena certeza en relación a que efectivamente se haya otorgado el consentimiento necesario para la participación de los menores en el promocional denominado Quien pompo 2.

El PAN allegó documentación con la intención de acreditar que efectivamente se recabó la autorización de los padres o tutores, para la participación de los menores en el promocional denunciado, sin embargo, se trata de elementos que no cumplen con las características y formalidades legales razonables para acreditar lo que pretenden.

Esto es, en el promocional denunciado se aprecia a simple vista que en el desarrollo del mismo participaron cuando menos veintiún niños y, a pesar de ello, el PAN solamente allegó nueve "cartas de autorización",⁽¹⁰⁾ aunque la Unidad Técnica le requirió la documentación que acreditara el otorgamiento del consentimiento de parte de quienes ejercen la patria potestad o tutela de quienes aparecen en el promocional.

En tales condiciones, no se cuenta con elementos que sirvan para acreditar el otorgamiento del consentimiento en torno a cuando menos doce menores que participaron en la propaganda denunciada, lo cual, es suficiente para estimar que se vulneró al menos potencialmente, el derecho a la propia imagen de tales menores, al no contar con la autorización relativa a su aparición en el promocional.

Además, el contenido mismo de tales cartas carece de las formalidades necesarias para dotar de plena certeza el acto de autorización que ahí se pretende hacer

constar, de hecho, en tres de ellas²⁰⁰ ni siquiera se asienta el nombre del padre o la madre quienes firmaron tal documento.

Por otra parte, en la totalidad de las cartas aportadas, consta solamente la firma de uno de los padres y no de ambos, sin que se haga precisión respecto a la razón de la ausencia del otro padre o madre; ni se acompaña documentación que acredite el parentesco de quien firma en representación de los menores.

En ese sentido, no hay certeza de que quien firmó efectivamente sea el padre o la madre del menor, en ejercicio efectivo de su patria potestad.

Finalmente, no obra en autos documento alguno que evidencie que se tomó en cuenta la opinión libre y expresa del menor.

Así las cosas, esta Sala Especializada determina que no se implementaron las medidas necesarias para garantizar que los padres o tutores de los menores otorgaran su consentimiento para la aparición de los mismos en el promocional electoral denunciado, de ahí que se estime que se vulneró el interés superior del menor y, por ende, se actualiza la infracción que se denuncia, sin que sea necesario analizar el contenido del mismo.

Luego entonces, al haberse acreditado la infracción relativa al uso indebido de la pauta por la difusión de propaganda electoral que vulnera el interés superior del menor, se vincula al Instituto Nacional Electoral para que adopte las medidas necesarias a fin de que no se difunda el promocional denominado Quien pompo 2 (RV00738-15) bajo ningún tipo de pauta, ni federal ni local, atendiendo a que el mismo ha sido determinado ilegal en esta resolución y con la finalidad de evitar que se genere alguna situación que pueda poner en riesgo a los menores que aparecen en el mismo.

Asimismo, cabe indicar que es criterio de esta autoridad judicial que en el caso de los asuntos en que se aborde una posible afectación al interés superior del menor, corresponde a la persona que realiza la exposición de los niños acreditar que efectivamente actuó salvaguardando la integridad y las prerrogativas de los mismos, pues de lo contrario, se desnaturalizaría por completo la obligación de las autoridades de velar por el pleno respeto a los derechos de los niños, en tanto que actuaría una suerte de presunción de legalidad en torno a potenciales situaciones de riesgo para los menores, en vez de que se optara por emprender acciones que sirvan para tener la plena certeza respecto a la protección de los mismos.

En ese sentido, y considerando que el PAN en la contestación al requerimiento de fecha doce de mayo, indicó que no había contratado a empresa alguna para la participación de los menores en el promocional referido, se evidencia que es el único responsable por su participación sin el debido consentimiento parental o, en su caso, de los tutores, en el promocional político electoral pautado por ese mismo instituto político.

De la misma manera la resolución **TESIN-PSE-39-2021**, emitida por el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, declara la existencia de la infracción por incurrir en actos violatorios a los Lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños, y adolescentes en materia político-electoral por parte de Fernando Pucheta Sánchez, candidato a la presidencia municipal de Mazatlán, mismo que señala lo siguiente:

En el perfil de la red social Facebook del denuncia, los días 14 de marzo, 09, 10, 14, 15, 19, y 21 de abril, 06, 07, 17, y 28 de mayo, publica y difunde varias imágenes de niños, niñas y adolescentes, ello para promocionar su campaña política y posicionar su imagen ante los electores, lo cual a su decir, vulnera el derecho a la intimidad de los infantes que aparece en su promoción electoral, sin cumplir con la normativa electoral ya que divulga el rostro de niños y niñas sin tener el consentimiento de las personas que ejercen sobre ellos la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente en función de la edad y madurez, sin que se advierta que el denunciado haya difuminado el rostro de los menores.

Marco normativo. Interés superior de la niñez. -

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 19, establece que toda niña, niño y adolescente, tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del estado.

Por su parte la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña en su artículo 3, establece que en todas las medidas que los involucren se deberá atender como consideración primordial el interés superior de la niñez.

sobre lo anterior, el comité de los derechos del niño y de la niña de la organización de las naciones unidas, en su observación general 14 del 2013, sostuvo que el concepto del interés superior de la niñez, implica tres vertientes;

Derecho sustantivo: Consistente en el derecho de la niñez a que su interés superior sea valorado y tomado como de fundamental protección cuando diversos intereses estén involucrados, con el objeto de alcanzar una decisión sobre la cuestión a resolver.

Un principio fundamental de interpretación legal: cuando se esté ante una previsión legal abierta, a más de una interpretación, se debe optar por aquella que ofrezca una protección más efectiva al interés superior de la niñez.

una regla procesal: cuando exista una decisión que pudiera afectar a la niñez o adolescencia, específicamente o en general a un grupo identificable o no identificable, en el proceso para la toma de la misma, se debe incluir una evaluación del posible impacto, ya sea negativo o positivo, de la decisión sobre la persona menor de edad involucrada.

Así mismo se ha señalado que el concepto de interés superior de la niñez no es nuevo, sino que ya se consagraba en la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, y en la convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, por lo que se toma como un concepto dinámico que debe evaluarse adecuadamente en cada concepto., cuyo objetivo debe ser el garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos para él o la menor.

Por su parte el artículo cuarto de nuestra Constitución General, en su noveno párrafo establece que el Estado en todas su decisiones y actuaciones velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando así de manera plena sus derechos.

Así mismo, en la ley general de las niñas, niños y adolescentes, en sus artículos segundo y dieciocho se establece que el interés superior de la niñez, deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucren niñas, niños y adolescentes.

Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en la jurisprudencia de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO", que, para la determinación en concreto del interés superior de la niñez, se debe atender a sus deseos, sentimientos, y opiniones, siempre que sean compatibles con sus necesidades vitales.

Aparición de niñas, niños, y adolescentes en la propaganda electoral.

La propaganda electoral difundida por los partidos políticos, se encuentra amparada por la libertad de expresión, que se consagra en el artículo sexto Constitucional, sin embargo, dicha libertad no es absoluta pues encuentra sus límites en la dignidad, y reputación de las personas y los derechos de las mismas, dentro de las cuales se encuentran las de los niños, niñas y adolescentes.

Por lo expuesto el Instituto Nacional Electoral emitió los Lineamientos para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en materia político-electoral, cuyo objetivo es establecer las directrices para la protección de los citados que aparezcan en la propaganda político-electoral, mensajes electorales y en actos políticos, actos de precampaña o campaña de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas independientes, así como de los mensajes transmitidos por las autoridades electorales, federales y locales, o las personas físicas o morales que se encuentren vinculadas directamente a uno de los sujetos mencionado, atendiendo a su calidad o naturaleza jurídica, por cualquier medio de comunicación y difusión, incluida las redes sociales o cualquier plataforma digital, sea esta transmitida en vivo o videograda, debiendo ajustar los sujetos antes mencionados sus actos de propaganda político-electoral, o mensajes a través de radio o televisión, toda vez que:

- a. pueden aparecer de manera directa e incidental en la propaganda.
- b. Cuando se utilice la imagen, voz o cualquier otro dato que les haga identificable, se deberá proporcionar la máxima información sobre sus derechos, opiniones y riesgos respecto de su aparición en la propaganda político electoral.
- c. Si la aparición es incidental y ante la falta de consentimientos, se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, voz, o cualquier otro dato que le haga identificable, garantizando la máxima protección de su dignidad o derechos.

Es importante mencionar la Jurisprudencia **20/2019** en la que se determina la obligación que CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN; como sea;

PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º y 4º, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 y 14 de los Lineamientos Generales para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de Propaganda y Mensajes Electorales establecidos por el Instituto Nacional Electoral; y en la Jurisprudencia de la Sala Superior 5/2017, de rubro PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CUMPLIRSE CUANDO SE DIFUNDAN IMÁGENES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, se advierte que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. En ese sentido, cuando en la propaganda político-electoral, independientemente si es de manera directa o incidental, aparezcan menores de dieciocho años de edad, el partido político deberá recabar por escrito el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o tutela, y en caso de que no cuente con el mismo, deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que haga identificable a los niños, niñas o adolescentes, a fin de salvaguardar su imagen y, por ende, su derecho a la intimidad.

Aunado a lo anterior, la resolución número **SUP-JE-144/2021**, Sentencia que confirma la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, en el procedimiento especial sancionador, que declaró existente la violación a los requisitos sobre la aparición de menores en propaganda electoral, atribuida a Fernando Alejandro Larrazábal Bretón y al Partido Acción Nacional, este último promovente del juicio electoral. señala lo siguiente;

La imagen de una niña, niño o adolescente en fuentes de acceso público es insuficiente para poderla incluir en propaganda electoral a) Marco jurídico La imagen es la reproducción identificable de los rasgos físicos de una persona sobre cualquier soporte material. El derecho a la propia imagen constituye uno de los derechos inherentes de la persona, que le permite disponer de su apariencia; considerado por la Suprema Corte como un derecho de defensa y garantía esencial para la condición humana, porque puede reclamarse tanto en defensa de la intimidad violada o amenazada como exigir del Estado que prevenga la existencia de eventuales intromisiones que lo lesione. Si bien no es un derecho absoluto tendría que justificarse su intromisión por un interés público, o bien, cuando se cuente con el consentimiento u autorización de la persona.¹¹ Estos límites sobre la captación, reproducción o publicación de la imagen de una persona tratándose de menores de edad exige una protección reforzada debido al interés superior de la niñez. El interés superior de la niñez es un principio constitucional y convencional de interpretación que ante la toma de una decisión que involucre niñas, niños y adolescentes se debe evaluar y ponderar las 9 Véanse artículos 16 y 17 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal. 10 Véase tesis P. LXVII/2009, emitida por el Pleno, de rubro: "DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA." 11 Por ejemplo, la Ley Federal del Derecho de Autor establece como infracción en materia de comercio el utilizar una imagen de una persona sin su autorización o la de sus causahabientes (artículo 231, f.II). SUP-JE-144/2021 10 posibles repercusiones en sus derechos y asegurar una protección plena. 12 Dicho principio exige la prevalencia de los derechos de la infancia frente a cualquier otro interés, por lo que ante un conflicto se debe ponderar por encima de cualquier otro ese derecho infantil. 13 Así, la Convención sobre los Derechos del Niño establece en

su artículo 3 que el niño (a) tiene derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten.¹⁴ De modo que, cualquier medida o decisión pública que pueda afectarlos (a) requiere adoptar medidas reforzadas o gravadas, para protegerlos con una mayor intensidad.¹⁵ 12 Véase artículo 4º de la Constitución, en su párrafo noveno, que dice: "En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez." Asimismo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece en su artículo 2 y 3 párrafos: "El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales." 13 Acción de inconstitucionalidad 2/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pfo. 129: "En suma, el ejercicio de los derechos fundamentales de las niñas y los niños se encuentran por encima de cualquier otro interés, incluyendo el de sus padres, pues, al ser la infancia concebida ya como sujeto de derechos, los niños y las niñas pueden ejercerlos en todo momento y las autoridades están no sólo obligadas a garantizar ese ejercicio, sino a velar porque el mismo se cumpla. Cuando se anteponen los derechos de la infancia con los de sus padres, la autoridad tiene obligación de ponderar por encima de cualquier otro, ese derecho infantil." 14 Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 15 Tesis aislada 1a. LXXXIII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL." SUP-JE-144/2021 11 Por eso, las autoridades del Estado deben garantizar y sancionar aquellas intromisiones arbitrarias e ilegales en la intimidad de las niñas, niños y adolescentes, que atenten contra su honra, imagen y reputación. Así, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes considera una violación a su intimidad, cualquier manejo directo de su imagen en los medios de comunicación con una concesión o medios impresos (art. 77). Asimismo, dicha ley considera una vulneración a la intimidad de las y los menores, cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación, bien porque menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o los ponga en riesgo. Ahora bien, el INE emitió los Lineamientos para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes que aparezcan en la propaganda políticoelectoral. Los sujetos obligados a esas directrices son los partidos políticos, coaliciones, candidaturas, autoridades y personas físicas o morales que se encuentren vinculadas. Los Lineamientos obligan a que en cualquier acto, mensaje o medio de difusión de propaganda político-electoral en el que aparezcan niñas, niños o adolescentes ya sea de manera directa o incidental, debe existir el consentimiento de quien o quienes ejerzan la patria potestad o el tutor o, en su caso, la autoridad debe suplirlos. Al igual deben contar con las manifestaciones de los menores sobre su opinión libre e informada respecto a la propaganda en la que participen. En caso de que no se tenga esa documentación, independientemente si la aparición fue directa o incidental se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que haga SUP-JE-144/2021 12 identificable a los niños, niñas o adolescentes, a fin de salvaguardar su imagen y, por ende, su derecho a la intimidad. 16 También, este órgano jurisdiccional ha señalado que los Lineamientos son aplicables en las imágenes que difundan las candidaturas en redes sociales. 17 b. Valoración de la Sala Superior El actor se duele de que la responsable omitió pronunciarse respecto a que en el motor de búsqueda "https://tineye.com" se podía observar que al menos hay otras ciento un publicaciones que utilizan la misma imagen genérica de la menor que apareció en las publicaciones del candidato denunciado y que no se podía presumir que el material hubiera sido producido en México o que correspondiera al presente año. Señaló que la plataforma estaba sujeta a las leyes de Israel con uso lícito de la propiedad intelectual. Al respecto, el Tribunal local determinó que los Lineamientos del INE eran aplicables sin importar que la imagen hubiera sido generada en otro país o tuviera un uso comercial, por lo que debían observarse las pautas de consentimiento e información ahí establecidas. Esta Sala Superior considera apegada a Derecho la determinación de la responsable porque el partido político parte de la premisa inexacta de que si las imágenes de menores se alojan en algún sitio público es innecesario demostrar una autorización para su uso en propaganda electoral. Jurisprudencia 20/2019 de rubro: "PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN." Véase tesis XXIX/2019, de rubro: "MENORES DE EDAD. LOS LINEAMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL

ELECTORAL PARA SU PROTECCIÓN, SON APLICABLES A LAS IMÁGENES QUE DE ELLOS DIFUNDAN LAS CANDIDATURAS EN SUS REDES SOCIALES EN EL CONTEXTO DE ACTOS PROSELITISTAS.” SUP-JE-144/2021 La premisa es incorrecta porque: El derecho a la imagen es uno de los derechos esenciales de la persona, que tratándose de menores de edad requiere de un escrutinio más estricto sobre su difusión, reproducción o captura, derivado del interés superior de la niñez y de que son un grupo vulnerable. Por eso, en materia electoral se necesita recabar el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela y la opinión informada de la o el menor, sin que se prevean excepciones al respecto. No puede extenderse un permiso o derecho de autor para disponer de una imagen de un infante o adolescente para usos electorales. En efecto, una autorización o consentimiento de una imagen para uso comercial o para aparecer en cierta página o sitio web no puede considerarse una cláusula abierta y usarse para fines no expresamente señalados. Pues la forma en cómo y dónde se muestran a los demás es un derecho esencial de toda persona derivado de su dignidad humana, que impide una difusión irrestricta de ésta. Más aún si la imagen o fotografía corresponde a menores de edad, el escrutinio es aún más estricto, porque no se puede perder de vista que ellas y ellos precisan de la representación de un adulto y son un grupo vulnerable que requieren una protección reforzada ante una posible afectación a su desarrollo. Por esa razón, en materia electoral rigen los Lineamientos emitidos por el INE que fijan los requerimientos para que puedan aparecer niñas, niños y adolescentes en la propaganda electoral. SUP-JE-144/2021. Los Lineamientos no establecen alguna excepción en su aplicación, incluso son exigibles en aquellos casos de apariciones incidentales de menores en propaganda electoral. Por lo que también en esos casos, los sujetos obligados deben recabar el consentimiento de la madre, padre o tutor, o en su caso, de la autoridad que los supla y de la opinión informada de la o el menor, de lo contrario tendrán que difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, voz o cualquier otro dato que los haga identificables. La circunstancia de que no existan hipótesis de excepción en las que sea innecesario el consentimiento es precisamente porque se trata de menores de edad, a los que se les debe garantizar la máxima protección de la dignidad y sus derechos. Si un partido político no confeccionó o adquirió la imagen no lo releva de la obligación constitucional y convencional de salvaguardar el interés superior de cualquier niña, niño o adolescente que aparezca en su propaganda política electoral. Lo anterior, debido a que los partidos políticos y las personas candidatas son responsables de proteger los derechos de la infancia desde el momento en que deciden insertar tales imágenes en su propaganda. Sin que sea suficiente exhibir un permiso del uso de la imagen porque en todo caso habría que revisar los términos y condiciones en que fue emitido, es decir, que contenga la autorización de quienes representan al menor y, en su caso, un consentimiento informado del menor, pero, sobre todo, que permita su utilización para fines político electorales. De ahí que, deba desestimarse el planteamiento de que por tratarse de una fotografía extraída de una galería digital pública, eran inexigibles los Lineamientos porque esa razón es insuficiente para concluir que la SUP-JE-144/2021 15 imagen, el honor y la intimidad de la menor en cuestión efectivamente se encuentre protegido en ese sitio electrónico.

2. El partido no demostró tener una autorización para el uso electoral de la imagen de la menor. Era deber del partido demostrar que efectivamente tuviera una autorización electoral para poder incluir la imagen de la menor en las publicaciones del candidato. Sin embargo, el actor se limita a sostener que deben existir excepciones en la aplicación de los Lineamientos cuando la persona no está expuesta a riesgos que afecten su integridad personal. De modo que se trata de afirmaciones genéricas y subjetivas sin sustento probatorio que permita corroborar la licitud y autorización electoral para divulgar la fotografía de la menor, pues el hecho de que ésta se encuentre alojada en un buscador de Internet no equivale a demostrar que sea lícita su aparición. Máxime si se considera que la información, documentos, imágenes que circulan en la Red no necesariamente son lícitos, dado que no hay un control previo sobre el contenido de las plataformas electrónicas. Incluso tratándose de niñas, niños y adolescentes hay muchos riesgos de que sus fotografías, imágenes, videos circulen sin autorización alguna y debido a que no todos pueden reclamar por sí mismos la violación a sus derechos puedan impedir su divulgación. En esos casos se deben adoptar medidas mucho más estrictas sobre imágenes de menores alojadas en redes sociales o en la web. Por tanto, carece de razón el partido al sostener que era suficiente con demostrar que la imagen aparece en un buscador de internet y que ha sido publicada en infinidad de páginas electrónicas, dado que no SUP-JE-144/2021 16 demuestra que su difusión o divulgación sea lícita y, menos, para fines electorales. La imagen denunciada correspondía a una menor con una discapacidad lo que exige una tutela reforzada. En las constancias de autos se aprecia que la menor incluida en las publicaciones del candidato tiene síndrome de Down, que es una alteración genética que puede llevar algún grado de discapacidad intelectual. En ese sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad garantiza que todos los niños y niñas gocen plenamente de los derechos humanos en igualdad de condiciones con los demás niños y que puedan expresar su opinión libremente sobre las cuestiones que les afecten (art.7). También, se debe garantizar su derecho a expresar su opinión y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad. Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en su artículo 56 que tienen derecho a que en todo momento a que se les

facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que les permitan obtener información de forma comprensible. Por ello, al estar involucrada una niña con una discapacidad exige que se hubieran respetado los principios de no discriminación, de una protección reforzada y atender a la especial vulnerabilidad en que se encuentran. Garantizando a la niña su derecho a opinar y a recibir información de manera accesible, para poder divulgar su fotografía. 18 Información extraída de: <https://www.un.org/es/observances/down-syndrome-day> SUP-JE-144/2021 17 Sin embargo, dado que nada de eso obra en el expediente de forma alguna puede concluirse que todas estas condiciones ocurrieron para la difusión de su imagen. Por lo que, esta Sala Superior concluye que fue correcta la determinación de la responsable porque el candidato vulneró el interés superior de la niñez lo que actualizó la infracción y, en el caso del partido político hoy actor, le generó una responsabilidad indirecta.

Concatenado a lo anterior, la resolución número SRE-PSC-039/2017, Sentencia que resuelve el procedimiento especial sancionador UT/SCG/PE/PRI/CG/39/2017, en la que se determina la existencia del uso indebido de la pauta por parte del Partido Unidad Democrática por Coahuila, de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila; así como la vulneración al interés superior del menor por parte de la citada Coalición. como sea;

Por cuestión de método, en primer lugar, se estudiará, de manera conjunta, el supuesto uso indebido de la pauta por parte de la Coalición y tres de sus cuatro partidos, por supuestamente haber promocionado a la Coalición durante la precampaña y, si la Coalición, indebidamente, difundió promocionales relacionados con el proceso de selección interna del PAN y uno de sus precandidatos, a través de su tiempo en radio y televisión; posteriormente, se abordará lo correspondiente a la supuesta promoción indebida de la Coalición por parte del Partido Unión Democrática de Coahuila; y por último, se examinará lo SRE-PSC-039/2017 18 relacionado con el uso de imágenes de menores de edad en uno de los promocionales de la Coalición. 3.1 Marco Normativo respecto del uso indebido de la pauta. La Constitución Federal en su artículo 41, Base III, Apartados A y B, así como la Ley Electoral en los diversos 159, párrafos 1 y 2, 160, párrafos 1 y 2 y 226, párrafo 5, han establecido que los partidos políticos nacionales tienen derecho al uso permanente de los medios de comunicación social. Asimismo, que el INE es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los fines propios, a los de otras autoridades electorales, así como a los partidos políticos; y, que será también este quien garantizará a los partidos políticos el uso de sus prerrogativas constitucionales en radio y televisión. Además, establecen que los precandidatos tienen prohibido contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempo en cualquier modalidad de radio y televisión. Por otro lado, el artículo 226 de la referida Ley Electoral, en su párrafo cuarto, señala que los partidos políticos harán uso del tiempo en radio y televisión que conforme a Derecho les corresponda, para la difusión de sus procedimientos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular. Asimismo, que los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, accederán a radio y televisión en el tiempo que corresponda a los institutos políticos. En este mismo sentido, el artículo 168 de la Ley Electoral, dispone que cada partido político podrá decidir libremente la asignación, por tipo de precampaña, de los mensajes que le correspondan, incluyendo su uso para precampañas locales en las entidades federativas. SRE-PSC-039/2017 19 A su vez, el Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral del INE en su artículo 5, párrafo primero, fracción III, inciso i), dispone que por materiales se entiende a los promocionales o mensajes realizados por los partidos políticos, coaliciones o candidatos/as independientes y autoridades electorales, fijados o reproducidos en los medios de almacenamiento y formatos que determine el INE, para su transmisión en términos de lo que dispone la Constitución Federal y la Ley Electoral. Mientras que, en el inciso m), establece que la pauta es el documento técnico en el que se distribuye el tiempo, convertido a número de mensajes, que corresponde a los partidos políticos, coaliciones y candidatos/as independientes, así como a las autoridades electorales en un periodo determinado, precisando la estación de radio o canal de televisión, la hora o rango en que debe transmitirse cada mensaje, y el partido político, coalición, candidato/a independiente o autoridad electoral al que corresponde. El artículo 7 párrafos 1, 3, 4 y 9 del citado Reglamento establece que los partidos políticos y sus candidatos y precandidatos a cargos de elección popular, accederán a mensajes de radio y la televisión, a través del tiempo que la Constitución Federal otorga como prerrogativa en la forma y términos establecidos legalmente; asimismo, que el INE es la única autoridad competente para ordenar la transmisión de propaganda política o electoral en radio o televisión, para el cumplimiento de sus propios fines y de los partidos políticos; y, que la propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas electorales difundan por radio y televisión los partidos políticos, se ajustarán a lo

dispuesto por el primer párrafo del artículo 6 y el artículo 41, Base III, Apartado A, de la Constitución Federal; así como el artículo 25, fracción I, incisos a) y u), de la Ley de Partidos Políticos y 247, párrafo 1, de la Ley Electoral. SRE-PSC-039/2017 20 El artículo 13, párrafo cuarto, dispone que, si por cualquier causa un partido político no realiza actos de precampaña electoral, los tiempos a que tengan derecho serán utilizados para la difusión de mensajes del partido político de que se trate, en los términos que establezca la ley. Asimismo, el artículo 37, párrafo 1, establece que, en ejercicio de su libertad de expresión, los partidos políticos determinarán el contenido de sus promocionales, por lo que no podrán estar sujetos a censura previa por parte del INE ni de autoridad alguna, sino, en su caso, a ulteriores responsabilidades. Ahora bien, no pasa desapercibido que a nivel local, el artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Coahuila, establece que los partidos políticos tendrán derecho al uso permanente de los medios de comunicación social y que el acceso a radio y televisión durante los procesos electorales se realizará en los términos establecidos en los ordenamientos antes referidos. La Ley General de Partidos Políticos establece que los partidos políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones para las elecciones de Gobernador, diputados a las legislaturas locales de mayoría relativa y ayuntamientos, de conformidad con el artículo 87, numeral 2. De conformidad con el artículo 88, numerales 1, 2, y 3, de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos podrán formar coaliciones totales, parciales y flexibles. Se entiende como coalición total, aquella en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso federal o local, a la totalidad de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral. Tratándose de coaliciones, se estará a lo previsto en los artículos 91, numerales 3, 4 y 5 de la Ley General de Partidos Políticos; 167, numeral 2 de la Ley General de SRE-PSC-039/2017 21 Instituciones y Procedimientos Electorales y 16 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, que establecen que a la coalición total que constituyan los partidos políticos les será otorgada la prerrogativa de acceso a radio y televisión en un treinta por ciento que corresponde distribuir en forma igualitaria, como si se tratara de un solo partido, incluso para efectos de la optimización de promocionales sobrantes. En cambio, para el setenta por ciento restante, deben ser tratados en forma separada. En el supuesto de coaliciones totales, el convenio de coalición establecerá la distribución de dicho tiempo entre los candidatos de la coalición. Asimismo, es aplicable a las coaliciones electorales, cualquiera que sea su ámbito territorial y tipo de elección, en todo tiempo y circunstancia, lo previsto por el artículo 91, numeral 4, de la Ley General de Partidos Políticos. En todo caso los mensajes en radio y televisión que correspondan a candidatos de coalición deberán identificar esa calidad y el partido responsable del mensaje. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el artículo 227 de la Ley General, se entiende por precampaña el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido; y por actos de precampaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado a un cargo de elección popular. El párrafo 3 del citado precepto legal, así como los párrafos 1 y 3 del artículo 211 de dicha ley, estipulan que la propaganda de precampaña es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, y expresiones que durante el periodo establecido por la ley y el que señale la convocatoria respectiva, difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a SRE-PSC-039/2017 22 conocer sus propuestas, debiendo señalarse de manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de quien es promovido. 3.2. Casos concretos. Como se ha quedado acreditado con antelación, no se tiene constancia de que los Partidos Acción Nacional y Encuentro Social hubieran difundido alguno de los spots denunciados, por lo que atendiendo al principio indubio pro reo, debe absolverse a dichos partidos de las conductas que se les imputa; y por tanto, únicamente se analizará la difusión de los promocionales pautados por el Partido Unidad Democrática por Coahuila y de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila. Sirve como sustento a lo anterior, lo determinado por la Sala Superior en la jurisprudencia intitulada "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES"⁷ en donde determinó que cuando no se cuente con una prueba que acredite la responsabilidad de los denunciados, lo procedente es absolverlos. 3.2.1 Uso indebido de la pauta por parte de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, por la difusión de spots en precampaña. Como se ha dicho, el primer punto a dilucidar es si existió un uso indebido de la pauta, ya que, en concepto del promovente, no está permitido que las Coaliciones, por sí mismas, puedan difundir spots en radio y televisión, durante la etapa de precampañas, pues, en su consideración, dicha prerrogativa es de uso exclusivo de los partidos políticos que contienden en el proceso electoral correspondiente. 7 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60. SRE-PSC-039/2017 23 En ese sentido, el promovente refiere que con la difusión de spots de la Coalición se está realizando una sobreexposición de dicho consorcio político, ya que las coaliciones únicamente se pueden posicionar,

a sí mismas, durante la etapa de campañas. Dicho lo anterior, esta Sala Especializada considera que es inexistente esta falta atribuida a la Coalición, ya que el actor parte de una premisa errónea; a saber: "las coaliciones no tienen acceso a radio y televisión durante las precampañas". En efecto, de la lectura integral de la denuncia, se advierte que el actor encamina sus argumentos a evidenciar que sólo los partidos políticos tienen acceso a radio y televisión durante la etapa de precampañas, mientras que las Coaliciones tendrán acceso a partir del inicio de las campañas. Sin embargo, de conformidad con lo previsto en los artículos 87, 88, párrafo 2, 91, párrafos 3, 4 y 5 167, párrafo 2 de la Ley de Partidos; 167, párrafo 2 de la Ley General, en relación con los numerales 13, párrafo 4 y 16 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, los partidos políticos podrán formar coaliciones para contender de manera conjunta en alguna elección, siendo que una de esas modalidades puede ser la de Coalición total, como lo es en el caso que nos ocupa. Además, se advierte que las Coaliciones podrán acceder a tiempo aire en radio y televisión, ya sea en el periodo de precampaña o campaña. Para ello, en caso de Coalición total, se le considerará como si fuera un solo partido político; y por tanto, tendrá acceso al 30% del tiempo en radio y televisión que se reparte de manera igualitaria entre los partidos. No obstante, no tendrá acceso al 70% del tiempo que se distribuye de manera proporcional entre dichos institutos políticos, ya que en este caso, los partidos coaligados accederán a dicha prerrogativa, de manera individual y separada, SRE-PSC-039/2017 24 atendiendo a la votación que cada uno hubiera obtenido en la elección del congreso local inmediata anterior. Bajo ese contexto, ha quedado demostrado que el Comité de Radio y Televisión del INE concedió el uso de la prerrogativa constitucional a la Coalición, situación que fue confirmada por la Sala Superior al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP74/2017, en donde estableció que en el artículo 167 de la Ley General no se hacía ninguna distinción en cuanto a la etapa del proceso electoral en la que se debía repartir el tiempo en radio y televisión destinado a las coaliciones; y por tanto, la regla de distribución que en dicho artículo se contemplaba debía ser aplicada tanto a precampañas como campañas. De ahí que no asista la razón al promovente cuando refiere que la Coalición usó indebidamente la pauta en radio y televisión al difundir los spots: "Registro Coahuila Coalición", en su versión televisiva con número de folio RV00097-17 y en su versión de radio con el registro RA00106-17. 3.2.2 Uso indebido de la pauta por parte de la Coalición, al difundir spots en donde difundió actos relacionados con el proceso de selección interna del PAN. En este punto, el promovente refiere que el hecho de que la Coalición difundiera promocionales en los que se aludía al proceso de selección interna del PAN y a uno de sus precandidatos, es contrario a Derecho, puesto que el PAN únicamente podía haber destinado su pautado para promocionar cualquier acto relacionado con su elección interna. SRE-PSC-039/2017 25 En ese sentido, el promovente refiere que el hecho de que se utilizara el emblema de la Coalición, puede inducir al error de que lo que se promociona es un precandidato de dicho consorcio político; y no así, del PAN en lo individual. Al respecto, como se ha dicho con antelación, las Coaliciones gozan de la prerrogativa de acceso a radio y televisión para el periodo de precampaña, siendo que en el caso que nos ocupa, la autoridad administrativa electoral consideró que la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila era una coalición total; y por tanto, para efectos de la distribución de tiempo aire se le debía considerar como un solo partido y, en consecuencia, sólo tenía acceso a la distribución del 30% que se reparte de manera igualitaria entre los partidos políticos. Por lo que al tener acceso en radio y televisión, dicha Coalición tenía la posibilidad de difundir propaganda genérica o de precampaña, con su propio tiempo aire. Cabe mencionar que similar criterio utilizó la Sala Superior al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP-74/2017, en donde determinó que: "una vez asignado el tiempo en radio y televisión que le corresponde a la coalición [...] para las etapas electorales, corresponde a dichos institutos políticos, en ejercicio de su libre autodeterminación, a través de su convenio de coalición, establecer la forma y los términos en que se hará uso del tiempo que le fue asignado, mismo que puede ser usado no sólo para la difusión de propaganda de precampañas, sino también para la difusión de propaganda genérica". Así, resulta evidente que las coaliciones están facultadas para difundir spots en radio y televisión, ya sea con contenido genérico o con propaganda electoral atinente a una precampaña; sin embargo, dicha prerrogativa no es absoluta ni ilimitada, sino que se debe ajustar a los parámetros que rigen la difusión de propaganda en la época de precampaña. SRE-PSC-039/2017 26 Al respecto, la Sala Superior al emitir la jurisprudencia intitulada: "RADIO Y TELEVISIÓN. LA UTILIZACIÓN DE LOS TIEMPOS ASIGNADOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PARA PROMOCIONAR LA IMAGEN DE CANDIDATOS POSTULADOS POR OTROS INSTITUTOS POLÍTICOS O COALICIONES, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD"8 determinó que los partidos políticos no deben utilizar los espacios en radio y televisión que les corresponden, para promocionar la imagen de candidatos postulados o registrados por otros institutos políticos o coaliciones, pues puede generarse una exposición desigual y, en consecuencia, un mayor posicionamiento a alguna de las opciones políticas en detrimento de las restantes, contraviniendo el principio de equidad en la contienda electoral. En ese contexto, esta Sala Especializada considera que los partidos políticos y coaliciones, ya sea durante las precampañas y campañas, únicamente podrán hacer uso de los tiempos

o pautas en radio y televisión para difundir su propia propaganda política o electoral, sin que exista posibilidad alguna de que algún precandidato o candidato de un diverso partido político o coalición pueda participar o beneficiarse de dicha prerrogativa, dado que ello afectaría el principio de equidad en el proceso de selección interna de un partido, puesto que se estaría dotando de mayores beneficios a una sola oferta política. Precisado lo anterior, debe recordarse que en el caso, se tiene acreditado que durante el periodo de precampañas del proceso electoral del estado de Coahuila, la Coalición Alianza, como parte de su prerrogativa en radio y televisión, difundió los spots: "Registro Coahuila Coalición" con folio RV00097-17 [versión televisión] y RA00106-17 [versión radio], cuyo contenido se muestra a continuación: RV00097-17 8 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, En tales circunstancias, a juicio de esta Sala Especializada, dichos promocionales deben ser considerados como spots de precampaña, puesto que el mensaje que se emitió se encontraba vinculado con el proceso de selección interna del PAN, uno de los precandidatos que contendió y la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila. En ese contexto, esta Sala Especializada considera que es existente la infracción atribuida a la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, relacionada con el uso indebido de la pauta que le fue asignada en el periodo de precampaña de la elección de Gobernador de Coahuila. Ello, habida cuenta que ha sido acreditado que los spots controvertidos son de carácter electoral, y que están encaminados a difundir actos relacionados con el proceso de selección interna que, de manera individual, realizó uno de los partidos coaligados, sin que mediara una justificación para ello, puesto que en el convenio no se estableció que la Coalición participaría o coadyuvaría en la elección del Candidato a Gobernador que realizaría el PAN. Lo anterior se considera así, ya que con independencia de que durante las precampañas, el PAN formó parte de la Coalición, lo cierto es que de conformidad con el convenio que integró el consorcio político, ningún otro partido coaligado o la Coalición misma, estaban en posibilidades de realizar actos de promoción de precandidatos o de etapas del proceso de selección interna del PAN, puesto que en el convenio únicamente se refirió que el candidato emanaría de la selección de candidatos del PAN, atendiendo a la determinación que adoptara la Comisión Permanente del Consejo Nacional de dicho partido. En esa lógica, la difusión de promocionales vinculados a la precandidatura de José Guillermo Anaya Llamas debió ser realizada exclusivamente por el PAN con el tiempo que, de manera individual, le correspondía en el periodo de precampaña; es decir, que los spots alusivos a dicho precandidato debieron estar comprendidos entre el tiempo que le fue asignado al PAN como parte del 70% del tiempo aire que SRE-PSC-039/2017 30 se distribuyó de manera proporcional a cada uno de los partidos en lo individual y del cual no le fue asignado a la Coalición denunciada. Lo anterior, ya que la Coalición denunciada, por sí misma, no llevó a cabo un proceso de selección interna, sino que dicha situación fue realizada de manera particular por uno de sus partidos coaligados; y por tanto, la Coalición no estaba facultada para promocionar actos de precampaña que pudieran causar una afectación a la equidad del proceso de selección interna del PAN, al otorgar mayor tiempo del que debía de tener alguno de los sujetos que participarían en dicho proceso electivo. En efecto, al no realizar un proceso de selección interna, la Coalición únicamente debió constreñirse a difundir propaganda genérica sobre temas de interés general; y no así, la exhibición de promocionales con propaganda de precampaña; cuestión diversa hubiera sido que en el convenio de coalición se hubiera establecido que para la elección de candidato a Gobernador, dicho consorcio político realizaría un proceso de selección en el cual se incluyeran, entre otros, a los precandidatos de los partidos coaligados; o bien, que la Coalición participaría en el proceso interno que implementara individualmente alguno de sus coaligados, pues en estos supuestos se justificaría que el tiempo en radio y televisión de la Coalición fuera distribuido y usado por los diferentes precandidatos que participaran en dicha elección interna. De ahí que la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila utilizó indebidamente su pauta en radio y televisión que le fue asignada durante el periodo de precampaña del proceso electoral que se desarrolla en el estado de Coahuila; y por tanto, contravino lo previsto en 41 párrafo segundo base III apartado A, de la Constitución; 159; 211, 227, párrafo 3, y 443, párrafo 1 incisos a) y n), de la Ley General; 25 párrafo 1 incisos a) y u), de la Ley General de Partidos Políticos; así como 13, párrafos 1 y 3 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. SRE-PSC-039/2017 31 3.2.3 Uso indebido de la pauta por el Partido Unidad Democrática de Coahuila, por la promoción de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila. En este punto, el promovente aduce que dicho partido usó indebidamente la pauta que le fue asignada en el periodo de precampaña de la elección que actualmente se desarrolla en el estado de Coahuila, al haber promocionado a la Coalición por medio de la difusión de los spots: "Coahuila libérate" con folio RV001918 [versión televisión] y RA002366 [versión radio]; "Lenin Precampaña" con folio RV00037-17 [versión televisión] y RA00039-17 [versión radio]; y "Video Alianza" con folio RV00100-17 [versión televisión] y RA00114-17 [versión radio]. En ese sentido, el promovente refiere que es ilegal que se promoció el logotipo de una coalición en la etapa de precampaña, puesto que se le está posicionando en un momento que no es permitido; más aún, cuando, en su concepto, en dichos

promocionales se advierten propuestas de gobierno y campaña, dirigidas a la ciudadanía en lo general. Al respecto, como ya se ha señalado, los partidos políticos gozan de la prerrogativa constitucional de acceso a la radio y televisión, ya sea durante o fuera de algún proceso electoral, puesto que su acceso es de manera permanente atendiendo a las modalidades que establece la propia Constitución y las normas electorales. Bajo ese contexto, debe decirse que en el caso particular, se tiene constancia de que el Partido Unidad Democrática de Coahuila no realizó un proceso de selección interna para elegir candidato a Gobernador de Coahuila, puesto que atendiendo al convenio de coalición que firmó, el candidato a dicho puesto sería el que resultara electo en el proceso interno del PAN. Por q C-039/20 corrupción se te hizo normal. Y es que mientras ellos se enriquecen, tú te vuelves más pobre. Cada vez trabajas más y te pagan menos. ¿Qué pasa Coahuila? Alégrate, decidete, tú tienes la solución. Ahora les toca sufrir a ellos. Que paguen por lo que han hecho. Es ahora o nunca. Voz de un hombre: Unidad Democrática de Coahuila. UDC. Voz de un hombre: Coahuila. Libérate. Como puede advertirse, en estos spots no se hace referencia alguna a la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, sino que únicamente se utiliza el nombre y logo del Partido Unidad Democrática de Coahuila; además, contrario a lo afirmado por el actor, no se aprecia alguna propuesta de campaña de dicho partido político ni alguna referencia a un plan de gobierno. Por el contrario, lo único que se advierte es el posicionamiento de dicho partido frente al supuesto problema de corrupción y pobreza que existe en el estado de Coahuila; usando para ello preguntas retóricas con las que pretende reafirmar su idea, tales y como lo son: "¿Por qué la corrupción se te hizo tan normal?" y "¿Qué pasa Coahuila?". En esas circunstancias, dichos promocionales deben ser considerados como genéricos, pues únicamente pretenden mostrar el posicionamiento del partido en torno a temas de interés social, sin que se aprecie que se haga algún posicionamiento de alguna fuerza política que pudiera influir en la contienda electoral. Por lo que es factible calificar como dentro de la legalidad estos promocionales. Ahora por lo que hace a los promocionales: Promocional Video Alianza con folio RV00100-17 [versión televisión] Imágenes representativas Voz de un hombre: Para llegar a una meta es necesario construir un camino. No podemos fallarle a Coahuila viendo como sufre nuestra gente. Basta ya de divisiones. Basta ya de egoísmo. Es tiempo de una Alianza Ciudadana para construir el Coahuila que todos queremos. Este es el reto y la oportunidad. Dejar a un lado el interés personal y darle esperanza a nuestro pueblo. Hasta la victoria. ¡Venceremos! Voz de un hombre: UDC. Voz de un hombre: Libérate. Voz en off: Alianza Ciudadana por Coahuila. En el caso de estos spots, se advierte que el contenido del mensaje es idéntico, puesto que se escucha el uso de las mismas palabras tanto en radio y televisión; lo cual, permite que se estudien de manera conjunta, a fin de evitar repeticiones innecesarias, con la diferenciación del uso de imágenes en el caso del spot televisivo. Como puede advertirse, en estos promocionales se hace alusión a la visión que tienen tanto UDC como la Coalición Ciudadana por Coahuila, respecto del sufrimiento que se causa a los coahuilenses con la división y egoísmo del interés personal; y ante ello, manifiestan una oportunidad de esperanza al renunciar a ese interés individual. En ese contexto, en dichos promocionales no se aprecia alguna referencia que permita deducir que se pretende posicionar a un partido político; o bien, que se está llamando a votar a favor de determinada fuerza política, ya que lo que realmente se tiene es un posicionamiento general, relacionado con la condición social del Estado y la posibilidad de que ésta cambie con la renuncia de los intereses personales de la población en general. En esa tesitura, es indubitable que estos spots contienen un mensaje genérico, habida cuenta que únicamente refieren la postura ideológica del partido, por lo que no se advierte referencias que impliquen un llamado al voto. SRE-PSC-039/2017 46 En este tenor, este órgano jurisdiccional estima que los promocionales denunciados, por la temporalidad en la que fueron difundidos, están apegados a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias en cuanto a su contenido, de tal suerte que no se acredita la infracción, pues no existe prohibición alguna para que durante el periodo de precampañas, el partido político difunda ideas, críticas o manifestaciones en torno a temas de interés general, propio de todo sistema democrático. Esto es, en la época de precampañas, los partidos políticos pueden hacer uso de las pautas en radio y televisión otorgadas por el INE, sin que necesariamente deban contener mensajes de precampaña o campaña, pudiendo versar sobre cuestiones de carácter general. Por otra parte, tampoco se acredita el argumento del quejoso en el sentido de que la difusión de los promocionales denunciados constituye un uso indebido de la pauta, en razón de que fueron hechos con la finalidad de posicionar ilícitamente a la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila ante el electorado. Lo anterior, ya que se reitera que lo que realmente se difunde es un contenido propio de la ideología del partido político, con expresiones críticas, lo cual no encuentra una prohibición expresa en la legislación aplicable, sino por el contrario, dicho contenido se encuentra permitido a los partidos políticos ya sea fuera o dentro de los periodos electorales, al constituir una de las formas que permiten a los institutos políticos alcanzar los fines constitucionales establecidos en el artículo 41 de la Constitución Federal. En ese sentido, esta Sala Especializada considera que del análisis integral y contextual de los promocionales no es posible presumir algún riesgo de afectación en materia electoral; de ahí que el objetivo de los promocionales otorgados al partido

SRE-PSC-039/2017 47 político, en este caso específico, no se encuentra desvirtuado, ya que atendiendo al contenido se trata de materiales genéricos con posicionamiento partidista, por lo que es inexistente la conducta señalada por el Promovente. 3.2.4 Uso indebido de la pauta por la Coalición, al usar imágenes de menores de edad en un spot. Es oportuno señalar que esta Sala Especializada, en un nuevo paradigma de protección de los Derechos Humanos, implementó un método tendente a verificar la posible existencia de alguna situación de vulnerabilidad, en el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad auditiva, o bien, cuando en los promocionales se incluyan personas menores, aun cuando forme o no parte de la controversia. Proceder que es plenamente acorde con lo previsto por el artículo 1º, párrafo tercero de la Constitución Federal; en cuanto ordena que todas las autoridades, incluida por supuesto esta Sala Especializada, tienen la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los Derechos Humanos. Acorde con lo anterior, al verificar el contenido del promocional de televisión con folio RV0097-17. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Al respecto, se tiene en cuenta que el contenido de la propaganda difundida por los partidos políticos se encuentra amparada por la libertad de autodeterminación de contenidos; empero, el ejercicio de dicha libertad fundamental no es absoluta, sino que tiene límites, entre los que se encuentran los vinculados con la dignidad o la reputación de las personas y los derechos de terceros, acorde con lo dispuesto en los artículos 6º, párrafo primero de la Constitución Federal, así como 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dicen: Artículo 6º.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Artículo 19.[...] 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. SRE-PSC-039/2017 50 Destaca de estos preceptos constitucionales y convencionales una limitación coincidente: esto es, el pleno respeto a los derechos de terceros, incluidos, por supuesto los derechos de la niñez, cuya protección, se encuentra expresamente ordenada en el artículo 4º de nuestra Constitución Federal. En tales condiciones, cuando en el uso de las pautas asignadas por el Instituto se difundan mensajes que puedan afectar derechos de terceros, y que en el caso, resultan ser personas menores de edad, se debe garantizar sus derechos en el marco de su interés superior. Ahora bien, en el orden conceptual, el "interés superior del niño", ha sido descrito por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: "Implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Al amparo de esa previsión convencional, el Estado Mexicano, a través de sus instituciones, autoridades y tribunales, está constreñido a tener en consideración primordial el respeto al interés superior del menor, con la adopción de medidas necesarias para asegurar y maximizar la protección y efectividad de los derechos de las niñas y niños, acorde con lo establecido en los artículos 3, párrafo 1 y 4, de la Convención sobre los Derechos del Niño: Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Artículo 4. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos

económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional. SRE-PSC-039/2017 51 Con tal directriz de protección a la niñez, el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes" emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el interés superior del menor tiene las siguientes implicaciones: a) Coloca en plena satisfacción los derechos de los infantes como parámetro y fin en sí mismo; b) Define la obligación del Estado respecto de los niños, niñas y adolescentes; y c) Orienta decisiones que protegen sus derechos. En sincronía con estos postulados, la Primera Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis de rubro: "DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS" estableció que la mera situación de riesgo de los infantes es suficiente para que se estime que se afectan los derechos de la niñez y, ante ello, deben adoptarse las medidas que resulten más benéficas para la protección de los infantes. En el caso, la posible afectación al interés superior del infante se advierte a través de la exposición de la imagen de diversos niños y posibles adolescentes (sin que de esta circunstancia se tenga absoluta seguridad, atento a su fisonomía), de ahí que el análisis se deba hacer en relación al derecho a la propia imagen de los infantes participantes. Entonces la importancia del asunto radica, precisamente, en la protección reforzada que goza la imagen de las y los menores de edad involucrados en el promocional. SRE-PSC-039/2017 52 Por tanto, para el otorgamiento de la salvaguarda judicial es suficiente que se les ubique en una situación de riesgo potencial, sin que sea necesario que esté plenamente acreditado el perjuicio ocasionado, porque, atento a los valores en juego, el interés superior de las niñas y niños, está por encima del ejercicio de la libertad de autodeterminación del contenido de los spots que tienen los partidos políticos. Con ese parámetro de ponderación, el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece, que ningún niño puede ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, ni ataques ilegales a su honra y reputación. Por su parte, los artículos 2, 5, 76, 77 y 78 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes contemplan, igualmente, la salvaguarda de los infantes ante cualquier riesgo de afectación o manejo directo de su imagen, nombre, datos o referencias que permitan su identificación, así: Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán: I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno; II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia. El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la SRE-PSC-039/2017 53 asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley. ... Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño. ... Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquella que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán orientar, supervisar y, en su caso, restringir, las conductas y hábitos de niñas, niños y adolescentes, siempre que atiendan al interés superior de la niñez. Artículo 77. Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, así como medios impresos, o en medios electrónicos de los que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe

su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez. Artículo 78. Cualquier medio de comunicación que difunda entrevistas a niñas, niños y adolescentes, procederá como sigue: I. Deberá recabar el consentimiento por escrito o cualquier otro medio, de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente, respectivamente, conforme a lo señalado en el artículo anterior y a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 76 de la presente Ley, y II. La persona que realice la entrevista será respetuosa y no podrá mostrar actitudes ni emitir comentarios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. En el caso de que no sea posible recabar el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de un menor, éste podrá otorgarlo siempre que ello no implique una afectación a su derecho a la privacidad por el menoscabo a su honra o reputación. SRE-PSC-039/2017 54 Por otra parte, no se requerirá el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de niñas, niños o adolescentes, cuando la entrevista tenga por objeto que éstos expresen libremente, en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, su opinión respecto de los asuntos que les afecten directamente, siempre que ello no implique una afectación a sus derechos, en especial a su honra y reputación. El interés superior a proteger es la sola posibilidad de poner en peligro su imagen con una latente identificación de su persona. Este principio protector, vinculado al tema, nos orienta a reflexionar que en el caso de la propaganda política o electoral, hay siempre un elemento ideológico que identifica a la opción política, por tanto, la presencia de infantes implica un riesgo potencial de asociar a tales infantes con una determinada preferencia política e ideológica, a una edad que todavía no es oportuna. Lo anterior puede devenir en un riesgo potencial en relación con su imagen, honra o reputación presente, en su ambiente escolar o social y, por supuesto, en su futuro, pues al llegar a la vida adulta pueden aceptar o no aprobar la ideología política, con la cual fueron identificados en su infancia. En esta concurrencia de derechos involucrados, acorde con las disposiciones nacionales e internacionales antes descritas, esta Sala Especializada debe hacer un ejercicio de ponderación el cual se decante por la protección reforzada de los menores de edad involucrados en los promocionales de televisión que se analizan. Con tal parámetro este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a implementar todas aquellas medidas que sirvan para evitar que se presenten situaciones de riesgo potencial que puedan afectar el interés superior del menor en relación con los promocionales de contenido político electoral, como en el asunto. SRE-PSC-039/2017 55 De suma importancia destaca tener la seguridad que los infantes fueron escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece: "Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez". Los requerimientos reforzados tienen sustento en los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a ser informados, como una directriz convencional que debe atenderse por todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales, como lo indica la UNICEF, en las Directrices éticas para la información sobre la infancia; conducentes y aplicables a la aparición de infantes en los spots de los partidos políticos, precisamente porque aparecen en medios de comunicación social como la televisión genera su exposición pública. Este instrumento internacional indica, en lo destacable: "Directrices éticas de UNICEF para la información sobre la infancia Protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la exposición pública ... De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, todos los niños, niñas y adolescentes, sin excepción, deben tener garantizados sus derechos. Uno de esos derechos es el de la protección de la vida privada, por lo que la exposición pública de los niños, niñas o adolescentes... UNICEF plantea una serie de directrices éticas para la información sobre infancia, que tienen como objetivo aportar orientaciones básicas para los medios de comunicación, pero que también son de utilidad para autoridades administrativas, policiales y judiciales que participan en los procesos de justicia, sobre cómo abordar los temas relacionados con la protección de la infancia a fin de respetar en todo momento su interés superior y su dignidad como seres humanos... Directrices éticas de UNICEF para la información sobre la infancia I. Principios 1. Se deberán respetar la dignidad y los derechos de cada niño o niña en toda circunstancia...." SRE-PSC-039/2017 56 Por tanto, a efecto de garantizar el pleno respeto al interés superior de los infantes, la autoridad administrativa electoral conforme a sus facultades adoptó las medidas necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos que procedan, en los términos apuntados y, en su caso, requirió la documentación necesaria a fin de privilegiar y proteger el interés superior de los niños, niñas y/o adolescentes menores de dieciocho años. Conforme lo anterior, mediante acuerdo de siete de marzo, la Unidad Técnica requirió a la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, remitiera la documentación a través de la cual fuera posible advertir las personas que, en su caso, ejercieran la patria potestad de los menores involucrados; así como el documento en el cual se asentara la libre manifestación de la voluntad de los menores. En respuesta, la Coalición exhibió copia fotostática de siete autorizaciones de uso de imagen y voz, en el que se consigna información como el nombre del menor, domicilio, Ciudad/Estado/Código Postal, Teléfono, RFC o CURP;

así como la leyenda: "Soy el padre/la madre (o tutor legal) del menor que ha firmado esta autorización y consentimiento, y por la presente acuerdo que yo y el menor estaremos sujetos a todos los términos y condiciones de la presente." Enseguida de lo anterior, se encuentra consignado el nombre de la persona que se dice ostentar como el padre o madre del menor referido en el formato correspondiente. Al respecto, esta Sala Especializada considera que dichos formatos, al ser pruebas documentales privadas por ser documentos elaborados por particulares y 9 Acorde con lo dispuesto en los artículos 461, párrafo 3, inciso b), así como 462, párrafos 1 y 3, de la Ley General. SRE-PSC-039/2017 57 proporcionados por la Coalición denunciada, por sí solos, resultan insuficientes para acreditar que los menores que en ellos se refiere son los mismos que aparecen en el spot controvertido; más aún, cuando la Coalición no proporcionó ningún otro documento que permitiera identificar plenamente a los menores involucrados. En efecto, en los formatos referidos no hay ningún elemento que permita la identificación visual de los menores y tampoco se adjuntó alguna credencial escolar o documento que permitiera a esta autoridad electoral distinguir a que menor de los que aparecen en el video corresponde cada uno de los permisos. Por lo que los citados formatos no son la prueba idónea para acreditar la persona que supuestamente otorgó el permiso. Aunado a ello, es preciso señalar que con la documentación remitida por la Coalición, tampoco se puede acreditar que las personas que firman la autorización, en realidad ostenten la patria potestad de los menores que aparecen en los videos, puesto que únicamente se aportó copia de la licencia de manejo de cada uno de los signantes, pero se omitió acompañar copia certificada del acta de nacimiento de los menores o de cualquier otro documento oficial con el que se pudiera identificar plenamente al mayor adulto que tuviera los derechos de representación de cada uno de los niños y/o adolescentes que se observa en el spot en comento. En ese sentido, dada la laxitud que presentan los citados formatos y la falta de algún documento que acredite la persona que tiene la patria potestad de los menores, es que esta Sala Especializada no tener por cierta la existencia del consentimiento pleno, cierto e idóneo, por escrito, debidamente firmado por los padres o quienes ejerzan la patria potestad o tutela del menor, pues como se ha manifestado, no hay mayores elementos que permitan concatenar y tener por acreditado que la participación de los niños en el promocional denunciado ocurrió con apego a las formalidades exigibles. SRE-PSC-039/2017 58 Además, respecto al requisito consistente en la manifestación del menor por cuanto hace a su opinión libre y expresa respecto de su participación en el promocional electoral en cuestión, opinión que será valorada atendiendo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, en el caso concreto, el PAN omitió presentar cualquier tipo de documentación para el cabal cumplimiento de este requisito, sin que el partido político emitiera pronunciamiento al respecto, en el presente procedimiento. No pasa desapercibido a esta autoridad que la representación de la Coalición, en su defensa alegó que: • El plazo otorgado para el desahogo y cumplimiento al requerimiento resultaba insuficiente; • Se trata de documentos ajenos y privados, lo que provocó necesariamente una labor de recaudación de dichos documentos; y por tanto, era claro, evidente y lógico, que el tiempo y la posibilidad de los titulares de los documentos no estaba a disposición del partido político; lo cual retrasaba y tornaba difícil su recaudación. • En vista del plazo otorgado, resultaba imposible la protocolización del consentimiento de los padres y los menores; más aún si se toma en cuenta el tiempo que conllevan los trámites protocolarios ante fedatario público. • El requerimiento no tiene sustento legal que permita al partido prevenir la obligación de recaudar los documentos que se requirieron, sin embargo no se pretende desconocer los criterios que el INE citó en el acuerdo de requerimiento, solo trata de evidenciar que resulta complicado prever y SRE-PSC-039/2017 59 recaudar documentos para dar exhaustivo cumplimiento a requisitos no contemplados en la legislación. No obstante, a juicio de esta Sala Especializada, dichas consideraciones deben desestimarse, ya que tal y como se ha referido con antelación, la normas constitucionales, convencionales y legales, prevén que quienes difundan en medios de comunicación la imagen de menores, deberán tomar en cuenta aquellas medidas que impliquen la salvaguarda de los infantes ante cualquier riesgo de afectación o manejo directo de su imagen, entre las que se encuentra el recabar con antelación a la difusión, los permisos correspondientes. Por lo que no es aceptable que la Coalición denunciada aduzca que no se le otorgó el tiempo necesario para recabar dicha documentación, ya que estaba plenamente vinculada a contar con ella, desde el momento en que realizó el promocional que posteriormente difundiría como parte de su prerrogativa constitucional de acceso a televisión. En esa lógica, tampoco asiste razón a la Coalición denunciada cuando refiere que resultaba imposible realizar la protocolización del consentimiento de los padres y de los menores, ya que se insiste, dicha situación debió ser realizada con antelación a la difusión del promocional; además, la parte denunciada pasa por alto que los Notarios Públicos no son los únicos que, en materia electoral, podrían realizar una protocolización, ya que también contaba con la posibilidad de solicitar el auxilio de la Oficialía Electoral del INE; sin embargo, no se aportó ningún documento que, cuando menos, generara un indicio de que se solicitó su apoyo ni tampoco se tiene constancia de que la Coalición hubiera requerido los servicios de protocolización ante fedatario público. SRE-PSC-039/2017 60 De ahí que se tengan por desestimadas las manifestaciones de la

representación de la Coalición; y por consiguiente, sea dable concluir que esta Sala Especializada no cuenta con los elementos idóneos y suficientes, como puede ser una fotografía, identificación escolar o cualquier otro elemento que sirva para establecer la identidad de los menores; lo cual, permitiría cotejar y establecer el vínculo entre las niñas y niños que aparece en el promocional y de quien, supuestamente, dio el consentimiento es su madre o tutora. Lo que deja en evidencia el riesgo potencial al que se expuso a los menores, por la difusión del promocional, al no tener certeza de que se emitió un consentimiento pleno, cierto e idóneo por parte de los padres, madres o tutores de aquellos, y, sobre todo, por no cuidar de manera idónea el uso de las imágenes de éstos. En consecuencia, se estima que se vulneró el interés superior de los menores involucrados y, por ende, se actualiza por parte de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila la infracción que se denuncia, en contravención a lo dispuesto por los diversos artículos 1, 4, párrafo noveno y 6, párrafo primero de la Constitución Federal; 25, párrafo 1, inciso a) y u), de la Ley de Partidos Políticos; 247, párrafo 1 y 443, párrafo 1, incisos a), h) y n) de la Ley Electoral. CUARTA. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Una vez que ha sido acreditada la existencia de diversas faltas, procede establecer la clase de sanción que legalmente corresponda, tomando en cuenta, entre otras, las siguientes directrices: 1. La importancia de la norma transgredida, es decir, señalar qué principios o valores se violaron o se vieron amenazados y la importancia de esa norma dentro del sistema electoral (principio, valor, ordenamiento, regla). SRE-PSC-039/2017 61 2. Efectos que produce la transgresión, los fines, bienes y valores jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o resultado). 3. El tipo de infracción y la comisión intencional o culposa de la falta, análisis que atañe verificar si el responsable fijó su voluntad para el fin o efecto producido, o bien, pudo prever su resultado. 4. Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así como si la conducta fue reiterada. Para tal efecto, esta Sala Especializada estima procedente retomar la tesis histórica S3ELJ 24/2003, de rubro "SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN", que sostenía que la determinación de la falta puede calificarse como levísima, leve o grave, y, en este último supuesto, como grave ordinaria, especial o mayor, lo que corresponde a una condición o paso previo para estar en aptitud de determinar la clase de sanción que legalmente se deba aplicar al caso concreto, y seleccionar de entre alguna de las previstas en la ley. Ello en virtud de que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior en diversas ejecutorias,¹⁰ que la calificación de las infracciones obedezca a dicha clasificación. Por lo tanto, para una correcta individualización de la sanción, en primer lugar es necesario determinar si la falta a calificar es: i) levísima, ii) leve o iii) grave, y si se incurre en este último supuesto, precisar si la gravedad es de carácter ordinaria, especial o mayor. 10 En los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-45/2015 y acumulados, SUPREP-57/2015 y acumulados, SUP-REP-94/2015 y acumulados, SUP-REP-120/2015 y acumulados, SUP-REP-134/2015 y acumulados, SUP-REP-136/2015 y acumulados y SUP-REP-221/2015. SRE-PSC-039/2017 62 Adicionalmente, es menester precisar que cuando se establece un mínimo y un máximo de la sanción a imponer, se deberá proceder a graduar la misma atendiendo a las circunstancias particulares del caso. Al respecto, una vez que han quedado demostradas la infracciones a la normativa electoral en que incurrió la Coalición Alianza Ciudadana de Coahuila, se procede a imponer la sanción correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la Ley General, que dispone que cuando se trate de infracciones cometidas por los partidos políticos, se podrá imponer desde amonestación pública, multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente, según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda. Para determinar la sanción respectiva, se deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodearon la conducta contraventora de la norma, de conformidad con lo previsto en el artículo 458, párrafo 5 de la Ley General, tomando en consideración los siguientes elementos: • Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila. 1. Singularidad o pluralidad de faltas. En este punto, en principio, resulta necesario establecer que con una sola conducta se acreditaron dos faltas; esto es, que con la difusión del spot "Registro Coahuila Coalición" con folio RV00097 [versión tv] y 11 Se debe precisar que, mediante reforma al párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo decreto se publicó el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. De igual forma, en términos de los artículos segundo y tercero transitorios del decreto de reforma mencionado, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país. SRE-PSC-039/2017 63 RA00106 [versión radio] se actualizaron las faltas de uso indebido de la pauta y afectación al interés superior de un menor. 2. Bien Jurídico tutelado. Establecido el contexto anterior, debe decirse que con dicha conducta se

transgredió, por una parte, el principio de equidad en la contienda interna de un partido político, puesto que se concedió mayor tiempo aire en radio y televisión a uno de los contendientes del proceso de selección interna del PAN; por otra parte, se afectó el interés superior de los menores que aparecieron en el spot televisivo controvertido, puesto que no se acreditó que la Coalición contará con los documentos necesarios para acreditar una participación libre y voluntaria, a sabiendas de la exposición de su imagen para fines electorales; y por tanto, se afectó la integridad, privacidad y reputación de los menores. 3. Circunstancias de modo, tiempo y lugar. Modo. La conducta consistió en la difusión por televisión del promocional "Registro Coahuila Coalición" con folio RV00097 [versión tv] y RA00106 [versión radio], relativo al proceso electoral local de Coahuila, con un total de ciento ochenta y siete impactos en televisión y trescientos ochenta y cuatro en radio. Tiempo. La difusión del promocional se realizó durante el desarrollo de los comicios locales en Coahuila, en la etapa de precampañas, en el periodo del doce al quince de febrero. Lugar. La difusión del promocional se efectuó en los canales de televisión cuya transmisión se realiza en Coahuila. SRE-PSC-039/2017 64 4. Condiciones externas y medios de ejecución. El momento en que se realizó la transmisión del promocional, corresponde al periodo de precampaña del proceso electoral local del estado de Coahuila, y el medio de ejecución fueron los canales de radio y televisión de transmisión local, acorde con lo informado por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos en las diversas comunicaciones que han sido referidas en el apartado de acreditación de los hechos denunciados. 5. Beneficio o lucro. No se acredita un beneficio económico cuantificable para la Coalición responsable, en virtud de que se trata de la difusión de promocionales pautados por ella misma, en uso de su prerrogativa constitucional de acceso a los tiempos del Estado. 6. Comisión dolosa o culposa de la falta. Está acreditado que la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila pautó los promocionales aludidos como parte de su prerrogativa de acceso al tiempo aire en radio y televisión que le correspondía en el marco de las precampañas del proceso electoral de Coahuila; y por tanto, es posible afirmar que tenía pleno conocimiento del contenido de los promocionales pautados; lo cual, permite concluir que tuvo la voluntad, por una parte, de usar la imagen de los menores de edad en el contenido de su promocional; y por otra parte, que tuvo el ánimo de difundir el promocional tildado de ilegal durante el periodo de precampañas en el proceso electoral del estado de Coahuila. Además, como Coalición que contienda en un proceso electoral local está plenamente vinculada al conocimiento de las normas constitucionales, convencionales y legales y de los criterios jurisprudenciales que rigen el acceso a la radio y televisión por parte de los actores políticos que participan en un proceso comicial; así como los tendentes a garantizar la salvaguarda del interés superior de los menores al ser utilizados en promocionales que se difundirán en un contexto electoral, a través de los medios electrónicos.

Se presume que el entonces precandidato en cuestión ni los partidos políticos que lo respaldan no cuentan con los requisitos administrativos, expresos en el Lineamiento para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia político-electoral, capítulo "Requisitos para mostrar niñas, niños o adolescentes en propaganda político electoral, mensajes electorales, actos políticos, actos de precampaña o campaña, en cualquier medio de difusión", numeral 8, con título "Consentimiento de la madre y del padre, de quien ejerza la patria potestad o de los tutores", señala lo siguiente:

"...Por regla general, debe otorgar el consentimiento quien o quienes ejerzan la patria potestad o el tutor o, en su caso, la autoridad que debe suplirlos respecto de la niña, el niño o adolescente que aparezca o sea identificable en propaganda político-electoral, mensajes electorales o actos políticos, actos de precampaña o campaña, o para ser exhibidos en cualquier medio de difusión..."

Irregularidad que a simple vista es demostrada, toda vez que el precandidato ni los partidos políticos que lo respaldan, no cumplieron con este requisito, y debiendo esta autoridad electoral, solicitar al infractor de forma inmediata dicho consentimiento, y en caso de negarse a proporcionarlo, sancionarlo cómo corresponda.

Así mismo en el Lineamiento para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, capítulo "Presentación del consentimiento y opinión ante el Instituto", en el numeral 14, señala lo siguiente;

... "Los sujetos obligados que exhiban la imagen, voz o cualquier dato identificable de niñas, niños o adolescentes en su propaganda político-electoral, mensajes o actos políticos, actos de precampaña o campaña, deberán:

... b) Conservar en su poder, durante el tiempo exigido por la normatividad aplicable en materia de archivos, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de otras leyes, la grabación en video de la conversación por medio de la cual se explicó a la niña, niño o adolescente el alcance, contenido, temporalidad y medio de difusión, así como el original del medio por el que se documentó la opinión informada de la persona menor de edad, sobre su participación en la propaganda político-electoral, mensajes electorales, o su presencia en actos políticos, actos de precampaña o campaña conforme al manual y las guías metodológicas referidas en el Lineamiento 9. ... (Sic)

Del análisis de la fotografía publicada el 18 de febrero del 2024, a las 12:09 Am, como se aprecia en la siguiente liga <https://www.facebook.com/share/oyWqvNpUWdEWW6v8/?mibextid=xfxF2i> en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del C. Guillermo Romero Rodríguez, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, de la cual se observa difundió varias imágenes de niños, niñas y adolescentes, ello para promocionar su campaña política y posicionar su imagen ante los electores, vulnera el derecho a la intimidad de los infantes que aparecen en su promoción electoral, y se presume puede devenir en un riesgo potencial, por lo cual se debió cumplir con la obligación señalada en el numeral 14, con título "Presentación del consentimiento y opinión ante el Instituto", del Lineamiento para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes en Materia Político-Electoral, es decir el precandidato tiene obligación de conservar en su poder, durante el tiempo exigido por la normatividad aplicable en materia de archivos, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de otras leyes, la grabación en video de la conversación por medio de la cual se explicó a la niña, niño o adolescente el alcance, contenido, temporalidad y medio de difusión, así como el original del medio por el que se documentó la opinión informada de la persona menor de edad, sobre su participación en la propaganda político-electoral, mensajes electorales, o su presencia en actos políticos, actos de precampaña o campaña conforme al manual y las guías metodológicas referidas en el Lineamiento 9, hecho contrario la autoridad estará obligada a salvaguardar la integridad, de los menores, así como a determinar las sanciones pertinentes al entonces precandidato y a la brevedad tomar las medidas cautelares pertinentes.

Es importante señalar que la fotografía publicada el 18 de febrero del 2024, a las 12:09 Am, como se aprecia en la siguiente liga <https://www.facebook.com/share/oyWqvNpUWdEWW6v8/?mibextid=xfxF2i> en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del C. Guillermo Romero Rodríguez, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, en la cual también se identifican de forma directa niños, niñas y adolescentes, se presume no cumple el entonces precandidato Guillermo Romero Rodríguez, ni los Partidos Políticos PAN, PRI, PAS Y PRD con la obligación de llevar a cabo el difuminado del rostro de los menores, con lo anterior se encuentra aprovechándose de los indefensos menores, actuando con alevosía menoscabando los derechos político electorales y humanos de los niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo a lo señalado en el Anexo 3. emitido por el Instituto Nacional Electoral, de nombre "Instructivo para realizar la conversación y recabar la opinión informada de las niñas, niños y adolescentes en base en las guías metodológicas anexas", redactado con objeto de proporcionar una guía para realizar las conversaciones con niñas, niños y adolescentes, la cual les brinde la información oportuna, necesaria y suficiente a fin de que entiendan el alcance y los riesgos de su participación en propaganda político-electoral, mensajes electorales, o en actos políticos, actos de precampaña o campaña, así como sobre exhibición de su imagen, voz o cualquier dato que los identifique a través de cualquier medio de difusión, mismo, que pretende que en la información que se les proporciona a niñas, niños o adolescentes se les indique en qué medios y durante cuánto tiempo se va a difundir su imagen y de qué forma será su participación (activa o pasiva), por quién

podría ser visto (familia, amigos y gente que no conoce) y los riesgos que implica ello, buscando establecer el mecanismo para garantizar que la opinión que se recabe sea expresa, propia, individual, libre, informada y espontánea, además de que sea acorde a la edad, desarrollo cognitivo y madurez de la persona menor de edad, evidenciado con la fotografía subida el 18 de febrero del 2024, a las 12:09 Am, como se aprecia en la siguiente liga <https://www.facebook.com/share/oyWqvNpUWdEWW6v8/?mibextid=xfxF2i> en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del C. Guillermo Romero Rodríguez, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, en la cual se identifican de forma directa niños, niñas y adolescentes, el denunciado tiene y tuvo la obligación de cumplir cabalmente dicha metodología, con el objetivo claro de brindar la información oportuna, necesaria y suficiente a fin de que entiendan el alcance y los riesgos de su participación en propaganda político-electoral, mensajes electorales, o en actos políticos, actos de precampaña o campaña, así como de darle certeza y seguridad jurídica a los niños, niñas y adolescentes.

El Anexo 2. con título "Manual para recabar la opinión y el consentimiento informado de niñas, niños y adolescentes para la utilización de su imagen, voz o cualquier dato que los haga identificables en propaganda político-electoral y mensajes electorales, actos políticos, de precampaña o campaña a través de cualquier medio de difusión", señala en su punto IV, inciso a), para las Niñas y niños de 6 a 11 años, la obligación de recabar la opinión y el consentimiento informado de niñas, niños y adolescentes para la utilización de su imagen, voz o cualquier dato que los haga identificables en propaganda político-electoral y mensajes electorales, actos políticos, de precampaña o campaña a través de cualquier medio de difusión, antes de la elaboración o producción de la propaganda político-electoral o mensajes electorales, o previo a la participación en un acto de precampaña o campaña, así como un consentimiento informado durante la elaboración de videos o cualquier tipo de propaganda o mensaje electoral (previo a la difusión) y después de la difusión; o durante la celebración de actos políticos, de precampaña o campaña y su aparición en redes sociales o cualquier plataforma digital tales como Twitter, "X", YouTube, Facebook, y notas emitidas por periódicos digitales, o por influencers, que posicionan o apoyen al candidato.

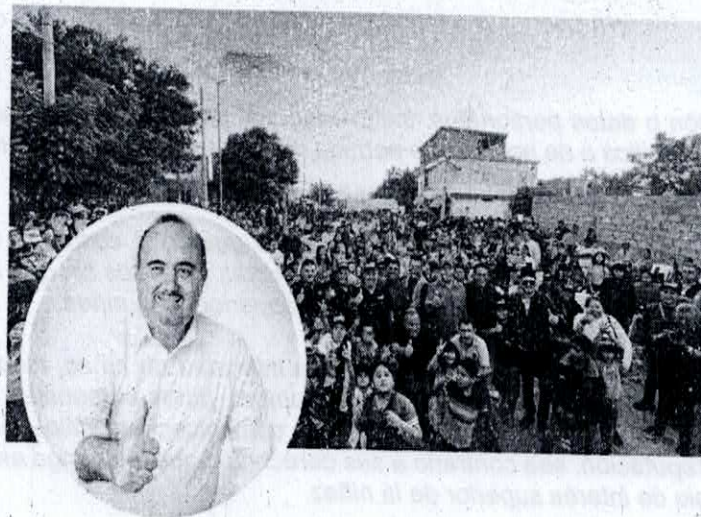
Concatenado a lo anterior en el punto IV, inciso b), el cual señala que las niñas, niños y adolescentes, antes de la elaboración o producción de la propaganda político-electoral o mensajes electorales, o previo a la participación en un acto de precampaña o campaña. Consentimiento informado durante la elaboración de videos o cualquier tipo de propaganda o mensaje electoral (previo a la difusión) y después de la difusión; o durante la celebración de actos políticos, de precampaña o campaña y su aparición en redes sociales o cualquier plataforma digital, considerando que el denunciado no cumplió con los requisitos mínimos necesarios establecidos en la Ley para utilizar la imagen de los menores de edad; aunado a que, a no existe motivo, causa o fin lícito y legítimo para la aparición de éste en la fotografía subida en fecha 18 de febrero del 2024, a las 12:09 Am, como se aprecia en la siguiente liga <https://www.facebook.com/share/oyWqvNpUWdEWW6v8/?mibextid=xfxF2i> en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del C. Guillermo Romero Rodríguez, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal.

Así mismo, la resolución número SUP-REP-170/2018 y SUP-REP-5/2019. Tesis XXIX/2018 PROPAGANDA POLÍTICA ELECTORAL. CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTOS DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA. SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN. señala lo siguiente;

... III. La protección reforzada del derecho a la propia imagen de menores de edad Los menores de edad, como cualquier persona, gozan del derecho a la propia imagen, como un derivado del derecho a la privacidad y, en dicho sentido, tienen la protección de dicho derecho fundamental frente a intromisiones indebidas. Esto ha sido reconocido no sólo por los tribunales nacionales, sino por diversos organismos internacionales. La Convención sobre los Derechos del

Niño, firmada en 1989, establece que (Artículo 16): 1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. 2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef), en el documento de debate sobre los derechos de los niños en el mundo digital, 17 señala que, a pesar de que el derecho a la intimidad de los menores y las personas adultas tiene la misma protección, es evidente que, considerando los demás derechos, el mejor interés y capacidades en evolución de los menores, es necesario un enfoque diferenciado de la protección del derecho a la intimidad de los menores. En dicho sentido, en la Observación General No. 14 del Comité de los Derechos del Niño (CRC/C/GC/14), se explica que el "interés superior del niño" es un concepto triple que involucra un derecho sustantivo, un principio interpretativo y una norma de procedimiento. Como principio interpretativo, este concepto implica que "si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño". Como norma de procedimiento implica que "siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados" (párr. 6). En el caso de que los derechos de otras personas entren en conflicto con el interés superior del niño y no sea posible armonizarlos, el referido Comité resalta que las autoridades "habrán de analizar y sopesar los derechos de todos los interesados, teniendo en cuenta que el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial significa que los intereses del niño tienen máxima prioridad y no son una de tantas consideraciones". El principio del interés superior de la niñez está también reconocido en el artículo 4, párrafo 9, de la Constitución Federal. En cuanto a la protección de la imagen de los menores, en el contexto español, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de España considera que "siempre que no medie el consentimiento de los padres o representantes legales de los menores con la ausencia del Ministerio Fiscal, la difusión de cualquier imagen de éstos ha de ser reputada contraria al ordenamiento jurídico" (Recurso 2895/2013). En dicho caso, el Tribunal determinó que publicar la fotografía de un menor en una revista gratuita sin el permiso de sus padres, vulnera su derecho a la imagen, a pesar de que la fotografía fue capturada por el tío del niño. Enfatizó que la violación se actualiza "por la inclusión de la imagen del menor en una revista con independencia de los fines perseguidos por su publicación o de que pudiera o no afectar a la reputación del afectado" y que lo decisivo es "la entrega de esta fotografía de un codemandado a otro sin que se acredite la existencia del consentimiento necesario para su publicación". Los derechos tutelados en el artículo 6 constitucional, no son exclusivamente oponibles a los partidos políticos, sino también a los particulares, por lo que es posible concluir que la propaganda y mensajes de contenido político o electoral que difundan las personas físicas y morales en la temporalidad referida por el numeral 24724 de la ley electoral, también deben ajustarse a la norma constitucional citada, siendo posible que en el caso de que no sea así, el sujeto emisor de la misma, pueda ser sancionado. • La Sala Especializada consideró necesario, a manera de acción preventiva, establecer un llamamiento respecto de aquellas personas físicas y morales vinculadas con cualquier fuerza política que elaboren o difundan por cualquier medio de comunicación legalmente previsto para hacerlo, cualquier tipo de propaganda política o electoral que, en determinado momento pudieran emitir en ejercicio de su libertad de expresión y participación política ya sea a favor o en contra de algún partido político, precandidato/a, candidato/a, aspirante, candidato/a independiente, coalición, dentro o fuera de un proceso electoral federal o local, para que tengan especial cuidado al utilizar cualquier elemento audiovisual que pudiera colocar en riesgo el interés superior de la niñez, ya que siempre debe tenerse presente que los derechos humanos de la niñez requieren de mayor respeto, protección y cuidado reforzado por parte de cualquier persona y no sólo de las autoridades. ... (Sic)

<https://www.facebook.com/share/oyWqvNpUWdEWW6v8/?mibextid=xfxF2i>



Memo Romero

Página · Político(a)

152 mil Me gusta · 170 mil seguidores



Hechos que evidentemente vulnera el derecho a la intimidad, violenta su imagen, honra o reputación presente en su ambiente escolar o social y en su futuro, pues al llegar a la edad adulta puede no aprobar la ideología política con la que sus tutores, o aprovechada mente el precandidato lo vinculó durante su infancia, violando así, la normatividad local, federal y la convencionalidad que protege los derechos de los infantes que aparecen en su promoción electoral, sin cumplir con la normatividad electoral y los derechos humanos, constituyendo violaciones al proceso electoral, así como a la neutralidad, equidad e imparcialidad de la contienda a favor del precandidato conocido como Guillermo Romero Rodríguez.

Por su parte La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa establece lo siguiente:

... Artículo 11 Bis. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

...XVII. Derecho a la intimidad; ...

Artículo 66. *Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales.*

No podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de

información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación.

Quienes ejerzan su patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán orientar, supervisar, y en su caso, restringir sus conductas y hábitos sin que esto se considere injerencia, siempre que atiendan al interés superior de la niñez.

Artículo 67. Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación locales, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez.

Artículo 67 Bis. Cualquier medio de comunicación que difunda entrevistas a niñas, niños y adolescentes, procederá como sigue:

I. Deberá recabar el consentimiento por escrito o cualquier otro medio, de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente, respectivamente, conforme a lo señalado en el artículo anterior y a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 66 de la presente Ley; y,

II. La persona que realice la entrevista será respetuosa y no podrá mostrar actitudes ni emitir comentarios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

En el caso de que no sea posible recabar el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de un adolescente, éste podrá otorgarlo siempre que ello no implique una afectación a su derecho a la privacidad por el menoscabo a su honra o reputación.

(Adic. Según Decreto No. 434, publicado en el P.O. No. 063, del 24 de mayo de 2023).

Artículo 67 Bis 1. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la protección de la identidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes que sean víctimas, ofendidos, testigos o que estén relacionados de cualquier manera en la comisión de un delito, a fin de evitar su identificación pública.

La misma protección se otorgará a adolescentes a quienes se les atribuya la realización o participación en un delito, conforme a la legislación aplicable en la materia.

(Adic. Según Decreto No. 434, publicado en el P.O. No. 063, del 24 de mayo de 2023).

Artículo 67 Bis 2. Los medios de comunicación deberán asegurarse que las imágenes, voz o datos a difundir, no pongan en peligro, de forma individual o colectiva, la vida, integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes, aun cuando se modifiquen, se difuminen o no se especifiquen sus identidades, y evitarán la difusión de imágenes o noticias que propicien o sean tendentes a su discriminación, criminalización o estigmatización, en contravención a las disposiciones aplicables.

En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente artículo, niñas, niños o adolescentes afectados, por conducto de su representante legal o, en su caso, de la Procuraduría de Protección, actuando de oficio o en representación sustituta, podrá promover las acciones civiles de reparación del daño e iniciar los procedimientos por la responsabilidad administrativa a que haya lugar; así como dar seguimiento a los procedimientos hasta su conclusión. Niñas, niños o adolescentes afectados, considerando su edad, grado de desarrollo cognoscitivo y madurez, solicitarán la intervención de la Procuraduría de Protección.

En resumidas cuentas dichas publicaciones se encuentran plagadas de actos constitutivos de infracciones electorales y delitos, de los cuales debe enterarse a las autoridades pertinentes, cómo lo son, la violación a **los Lineamientos Generales para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de Propaganda y Mensajes Electorales** establecidos por el Instituto Nacional Electoral y al **Reglamento del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa**, para la difusión, fijación y retiro de la propaganda política y electoral, la **Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes**, la **Ley General de Transparencia y Acceso a la Información**, la **Convención de los Derechos del Niño**, lo que lleva a violentar la neutralidad, equidad e imparcialidad de la contienda, por lo que se pide

a esta Autoridad en apego al protocolo de actuación de quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sexto. El 14 de febrero del 2024, a las 10:28 p.m. con el título "En el día del Amor y la Amistad, me reuní con gente que ama y respeta a Mazatlán." como se aprecia en la siguiente liga <https://www.facebook.com/photo/?fbid=383024711152737&set=pcb.383024821152726> en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del **C. Guillermo Romero Rodríguez**, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, es importante señalar que en primer término se debe considerarse propaganda electoral, así como un acto político por cumplir con los requisitos para el efecto, y de lo acontecido el precandidato difundió varias imágenes de niños, niñas y adolescentes, ello para promocionar su campaña política y posicionar su imagen ante los electores, lo cual vulnera el derecho a la intimidad de los infantes que aparecen en su promoción electoral, y se presume puede devenir en un riesgo potencial, en relación con la imagen, honra o reputación presente en su ambiente escolar o social y en su futuro, pues en la edad adulta al decidir sobre su ideología política puede no aprobar con la que fue relacionado desde la infancia, en consecuencia a lo anterior el precandidato **Guillermo Romero Rodríguez, así como los partidos políticos PAN, PRI, PAS Y PRD**, no protegen el interés superior del menor pues anteponen la auto determinación arbitraria del candidato y los partidos en el contenido de sus promocionales, publicados en diversos medios, sin cumplir con la normatividad electoral, señalada en el Lineamiento para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, emitido el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo General, mediante Acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales, en acatamiento a la sentencia SUP-REP60/2016 de la Sala Superior, y SRE-PSC-102/2016 de la Sala Regional Especializada, ambas salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación" (en adelante Lineamientos), identificado con la clave INE/CG20/2017.

En los cuales se señalan las formas de aparición y participación de niñas, niños o adolescentes, siendo de manera directa en propaganda político electoral y mensajes electorales; y directa o incidental en actos políticos, actos de precampaña o campaña. En un acto político, un acto precampaña o campaña, la aparición es incidental, siempre y cuando las niñas, niños o adolescentes sean exhibidos de manera involuntaria y sin el propósito de que formen parte de éstos, por ser situaciones no planeadas o controladas por los sujetos obligados.

Así mismo se observa de la fotografía publicada en fecha 14 de febrero del 2024, a las 10:28 p.m. con el título "En el día del Amor y la Amistad, me reuní con gente que ama y respeta a Mazatlán." como se aprecia en la siguiente liga <https://www.facebook.com/photo/?fbid=383024711152737&set=pcb.383024821152726> en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del **C. Guillermo Romero Rodríguez**, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, mediante la cual se difundieron varias imágenes de niñas, niños o adolescentes, donde se tienen una participación **DIRECTA, lo anterior** en un acto político electoral, pues de la imagen en un análisis exhaustivo se observa a los menores, manifestando un apoyo directo al hacer gestos de manera corporal, acreditando entonces su participación activa y directa, con objeto de promocionar la campaña política del precandidato, y posicionar su imagen ante los electores, lo cual vulnera el derecho a la intimidad de los infantes así como su imagen, honra o reputación, presente en su ambiente escolar o social y en su futuro, pues a la edad adulta puede NO APROBAR la ideología política con la que fue identificado en su infancia.

La aplicación convencional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala que la aparición de menores de edad en propaganda política o

electoral implica un riesgo potencial de ASOCIAR a los menores con una determinada preferencia política o ideológica.

Es de importancia señalar que la protección del interés superior del menor se antepone a la libertad de los partidos de autodeterminar el contenido de sus promocionales.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala que se debe partir de una concepción de niños, niñas y adolescentes como titulares activos de derechos y no solamente como sujetos de protección, bajo el derecho del infante a la preservación de su imagen, considerando que una exposición inadecuada puede fomentar estereotipos o una situación de riesgo para el menor, garantizando con una correcta aplicación de la norma, no ser objeto de injerencias en su vida privada, familia, domicilio, y correspondencia, así como no ser atacado en su honor y reputación.

En todas las decisiones y actuaciones el Estado velará y cumplirá con el principio del Interés superior de la Niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Es decir, los niños, las niñas y adolescentes tienen derecho a que, antes de que se tome cualquier medida que pueda influir sobre estos se evalúen y ponderen las posibles repercusiones, a fin de decidir por la que promueva y proteja sus derechos, considerando que **la propia imagen de los menores de edad, goza de protección, por lo que su exhibición implica un riesgo potencial**, así mismo la propaganda política o electoral es un riesgo potencial porque siempre hay un elemento ideológico o preferencia política.

Concatenado a lo anterior, la resolución número **SRE-PSC-121/2015** tituló **USO INDEBIDO DE LA PAUTA POR LA DIFUSIÓN PROPAGANDA ELECTORAL QUE AFECTA AL INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES**. señala lo siguiente;

El promovente alude a la supuesta vulneración a los derechos de los menores que aparecen en el promocional denominado Quien pompo 2, en torno a la utilización de su imagen y la protección de sus datos personales, e invoca y transcribe el contenido del artículo 4, párrafo noveno²³, de la Constitución Federal, en el cual se prescribe la obligación del Estado de velar por el interés superior de la niñez y garantizar de manera plena los derechos de los menores.

Al respecto, se tiene en cuenta que el contenido de la propaganda difundida por los partidos políticos se encuentra amparada por la libertad de expresión, en relación a la cual, el Tribunal Electoral ha sostenido en reiteradas ocasiones que debe ser objeto de maximización en el contexto del debate político, a efecto de que se aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática.²⁴

No obstante, el ejercicio de dicha libertad fundamental no es absoluto, sino que tiene límites, entre los que se encuentran, los vinculados con la dignidad o la reputación de las personas y los derechos de terceros, acorde con lo dispuesto en los artículos 6º, párrafo primero de la Constitución Federal²⁵, así como 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles²⁶ y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos²⁷.

En tal virtud, la acotación en torno a los aspectos que no deben perturbarse con las expresiones de ideas, se traduce en una obligación de abstenerse de incurrir en tales conductas a efecto de salvaguardar los bienes jurídicos ahí protegidos, como lo es, el pleno respeto a los derechos de terceros, incluyendo, por supuesto los derechos de los menores, cuya protección se encuentra expresamente ordenada en el artículo 4º de nuestra Constitución Federal.

Por tanto, la comisión de alguna conducta que provoca la inobservancia de tal obligación, implica por sí misma un aspecto que atenta contra el propio orden constitucional y, en el caso de la materia electoral, constituye una vulneración específica en cuanto al uso del tiempo pautado por el INE para la difusión de la

propaganda electoral, en términos de lo dispuesto en el artículo 247, párrafo 1, de la Ley Electoral.

Así, la Sala Superior^[10] ha señalado que en el derecho administrativo sancionador electoral el "tipo" infractor se constituye con los elementos siguientes:

- (i) Una norma que contenga una obligación o una prohibición a cargo de algún sujeto.
- (ii) Otra norma con una prevención general, relativa a que, si alguien inobserva la ley (ya sea por incumplir alguna obligación o por violar una disposición), se impondrán sanciones.
- (iii) Un catálogo general de sanciones aplicables cuando se inobserve la normativa.

Luego, en el caso de la normativa sobre la cual se afirma su incumplimiento, los elementos que constituyen el tipo administrativo electoral que nos ocupa, se obtienen de los referidos artículos 4 y 6, párrafo primero de la Constitución Federal en torno a que en la difusión de las ideas se atienda a la obligación de respetar los derechos de terceros y, en específico, los derechos de los menores; ello, en relación con el artículo 247, párrafo 1, de la Ley Electoral, referente al mandato específico de que en el uso de las pautas asignadas para la difusión de propaganda electoral se acaten los lineamientos constitucionales.

Lo anterior, se relaciona con lo dispuesto en los diversos 25, párrafo 1, incisos a) y u), de la Ley de Partidos Políticos y 443, párrafo 1, incisos a) y n) de la Ley Electoral, en los que se establece la prevención general concerniente a la inobservancia de las disposiciones establecidas en la normativa electoral.

Y finalmente, el catálogo de sanciones aplicables se encuentra previsto en el artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la Ley Electoral, toda vez que el sujeto denunciado en el presente caso, resulta ser un partido político.

En tales condiciones, el tipo administrativo electoral antes referido se actualiza cuando en el uso de las pautas asignadas por el INE se difundan mensajes que puedan afectar derechos de terceros, y que en el caso, resultan ser menores de edad, a quienes debe garantizárseles sus derechos en el marco de su interés superior.

Al respecto, se tiene en cuenta el concepto de "interés superior del niño", el cual ha sido descrito por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al destacar que "implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño".^[11]

Así, el Estado Mexicano, a través de sus instituciones, autoridades y tribunales, está constreñido a tener en consideración primordial el respeto al interés superior del menor, a través de la adopción de las medidas necesarias para asegurar y maximizar la protección y efectividad de los derechos de los niños, acorde con lo establecido en los artículos 3, párrafo 1 y 4,^[12] de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En esa tesitura, acorde con el "Protocolo de actuación de quienes imparten justicia en caso que involucren niñas, niños y adolescentes" emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el interés superior del niño tiene las siguientes implicaciones:

- a) coloca en plena satisfacción de los derechos del niño como parámetro y fin en sí mismo;
- b) define la obligación del Estado respecto del niño, y
- c) orienta decisiones que protegen los derechos del niño.

Por ello, la Primera Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la mera situación de riesgo de los menores es suficiente para que se estime que se afectan los derechos de los niños y, ante ello, deben adoptarse las medidas que resulten más benéficas para la protección de los infantes.^[13]

Pues bien, en el caso que nos ocupa, la supuesta vulneración al interés superior del menor se desarrolla a través de la exposición de la imagen de diversos niños que participan en el promocional denunciado, de ahí que, la afectación concreta a analizar se refiera al derecho a la propia imagen de los menores participantes.

Para tal efecto, se parte de la base relativa a que el derecho a la propia imagen de los menores goza de una protección especial, de ahí que para el otorgamiento de la salvaguarda judicial es suficiente que los menores se ubiquen en una situación de riesgo potencial, sin que sea necesario que esté plenamente acreditado el perjuicio ocasionado, pues, en congruencia con el interés superior de los niños, debe operar una modalidad del principio in dubio pro infante, a fin de dar prevalencia al derecho de los menores, por encima del ejercicio de la libertad de expresión, con el objeto de que se garanticen los derechos de los niños, por encima de cualquier duda que se presente en los casos que se analicen.

En similares términos el Tribunal Constitucional de España ha establecido que "en los casos en que se analice la captación y difusión de fotografías de niños en medios de comunicación social[...] es preciso tener en cuenta, que el ordenamiento jurídico establece una protección especial, en aras a proteger el interés superior del menor".^[14]

Asimismo, señala el mismo Tribunal Constitucional Español que el derecho a la propia imagen "se configura como un derecho de la personalidad, que atribuye a su titular la facultad de disponer de la representación de su aspecto físico que permita su identificación, lo que conlleva tanto el derecho a determinar la información gráfica generada por los rasgos físicos que le hagan reconocible que puede ser captada o tener difusión pública, como el derecho a impedir la obtención, reproducción o publicación de su propia imagen por un tercero no autorizado".^[15]

Así, en el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño^[16], se establece que ningún niño puede ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, ni ataques ilegales a su honra y reputación y, por su parte, en los artículos 76 y 77 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes^[17] se contempla igualmente la salvaguarda de los menores ante cualquier riesgo de afectación o manejo directo de su imagen, nombre, datos o referencias que permitan su identificación.

Pues bien, en el caso de la propaganda política o electoral hay siempre presente un elemento ideológico que identifica a la opción política que la presenta, por tanto, en principio, la utilización de menores en la misma implica un riesgo potencial de asociar a tales infantes con una determinada preferencia política e ideológica.

Lo anterior puede devenir en un riesgo potencial en relación con su imagen, honra o reputación presente en su ambiente escolar o social y, por supuesto, en su futuro, pues al llegar a la vida adulta pueden no aprobar la ideología política con la cual fueron identificados en su infancia.

En ese sentido, acorde con la disposiciones internacionales y nacionales antes descritas, esta Sala Especializada se encuentra obligada a determinar la implementación de todas aquellas medidas que sirvan para evitar que se presenten tales situaciones de riesgo potencial que puedan afectar el interés superior del menor en relación con los promocionales de contenido político electoral.

Así, en una primera actuación, necesaria para garantizar que no se presenta alguna situación de riesgo, es criterio de esta Sala, que la autoridad que analice en algún momento, un promocional político en que participen menores, deberá contar con la plena certeza de que se respetó el elemento relativo al consentimiento parental o, en su caso, de los tutores, en torno a su participación en la propaganda electoral, toda vez de lo dispuesto por los artículos 424 y 425 del Código Civil Federal y sus correlativos de los códigos civiles de la República Mexicana.

Igualmente, tal autoridad deberá garantizar el derecho que tienen los infantes de ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, en términos de lo dispuesto en el artículo 71^[18] de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Al efecto, y como elementos instrumentales de tales derechos, directamente relacionados con el interés superior del menor, la autoridad que analice la validez de promocionales de contenido político electoral deberá verificar lo siguiente:

i. Consentimiento por escrito debidamente firmado por el padre y la madre o por quien(es) ejerza(n) efectivamente la patria potestad o tutela del menor.

Tal documento se acompañara de copia certificada del acta de nacimiento, o bien, constancia de pérdida de patria potestad o acta de defunción del padre o madre que no firme (para el caso de que se otorgue solo por uno de los padres o tutores).

ii. Manifestación del menor por cuanto hace a su opinión libre y expresa respecto de su participación en el promocional electoral en cuestión. Tal opinión será valorada atendiendo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

iii. El consentimiento parental o, en su caso, de los tutores, y la manifestación de la opinión del menor deberá ser ratificado ante la Oficialía Electoral del INE o fedatario público, a fin de que se haga constar el otorgamiento del mismo en un acto revestido de fe pública. Lo anterior a fin de generar certeza y garantizar plenamente el interés superior de los menores.

Asimismo, aunado a contar con la certeza plena en torno al otorgamiento del consentimiento respectivo, acorde con las condiciones antes relatadas, la autoridad que en su momento, analice la validez del promocional político en que participen menores de edad deberá valorar minuciosamente su contenido, a fin de que, tomando en cuenta su edad y madurez, se les garantice entre otras cuestiones: pleno respeto a su imagen, honra, nombre o datos personales, evitando en todo caso situaciones de riesgo, que de manera actual o al menos potencial, pudieran correr en su entorno social o educativo por su participación en tal promocional electoral.

Además, tal autoridad, ya sea administrativa o judicial, deberá allegarse de los elementos necesarios para analizar y justificar de manera razonable el motivo y necesidad sustantiva para la participación de los menores en mensajes de propaganda política electoral. Tal cuestión deberá ser ponderada en cada caso, en relación con el interés superior del menor y garantizando objetivamente el pleno respeto a su desarrollo físico, psíquico y emocional.

Ahora bien, en la especie, no se tiene plena certeza en relación a que efectivamente se haya otorgado el consentimiento necesario para la participación de los menores en el promocional denominado Quien pompo 2.

El PAN allegó documentación con la intención de acreditar que efectivamente se recabó la autorización de los padres o tutores, para la participación de los menores en el promocional denunciado, sin embargo, se trata de elementos que no cumplen con las características y formalidades legales razonables para acreditar lo que pretenden

Esto es, en el promocional denunciado se aprecia a simple vista que en el desarrollo del mismo participaron cuando menos veintiún niños y, a pesar de ello, el PAN solamente allegó nueve "cartas de autorización"⁽¹⁹⁾ aunque la Unidad Técnica le requirió la documentación que acreditara el otorgamiento del consentimiento de parte de quienes ejercen la patria potestad o tutela de quienes aparecen en el promocional.

En tales condiciones, no se cuenta con elementos que sirvan para acreditar el otorgamiento del consentimiento en torno a cuando menos doce menores que participaron en la propaganda denunciada, lo cual, es suficiente para estimar que se vulneró al menos potencialmente, el derecho a la propia imagen de tales menores, al no contar con la autorización relativa a su aparición en el promocional.

Además, el contenido mismo de tales cartas carece de las formalidades necesarias para dotar de plena certeza el acto de autorización que ahí se pretende hacer constar, de hecho, en tres de ellas⁽²⁰⁾ ni siquiera se asienta el nombre del padre o la madre quienes firmaron tal documento.

Por otra parte, en la totalidad de las cartas aportadas, consta solamente la firma de uno de los padres y no de ambos, sin que se haga precisión respecto a la razón de la ausencia del otro padre o madre; ni se acompaña documentación que acredite el parentesco de quien firma en representación de los menores.

En ese sentido, no hay certeza de que quien firmó efectivamente sea el padre o la madre del menor, en ejercicio efectivo de su patria potestad.

Finalmente, no obra en autos documento alguno que evidencie que se tomó en cuenta la opinión libre y expresa del menor.

Así las cosas, esta Sala Especializada determina que no se implementaron las medidas necesarias para garantizar que los padres o tutores de los menores otorgaran su consentimiento para la aparición de los mismos en el promocional electoral denunciado, de ahí que se estime que se vulneró el interés superior del menor y, por ende, se actualiza la infracción que se denuncia, sin que sea necesario analizar el contenido del mismo.

Luego entonces, al haberse acreditado la infracción relativa al uso indebido de la pauta por la difusión de propaganda electoral que vulnera el interés superior del menor, se vincula al Instituto Nacional Electoral para que adopte las medidas necesarias a fin de que no se difunda el promocional denominado Quien pompo 2 (RV00738-15) bajo ningún tipo de pauta, ni federal ni local, atendiendo a que el mismo ha sido determinado ilegal en esta resolución y con la finalidad de evitar que se genere alguna situación que pueda poner en riesgo a los menores que aparecen en el mismo.

Asimismo, cabe indicar que es criterio de esta autoridad judicial que en el caso de los asuntos en que se aborde una posible afectación al interés superior del menor, corresponde a la persona que realiza la exposición de los niños acreditar que efectivamente actuó salvaguardando la integridad y las prerrogativas de los mismos, pues de lo contrario, se desnaturalizaría por completo la obligación de las autoridades de velar por el pleno respeto a los derechos de los niños, en tanto que actuaría una suerte de presunción de legalidad en torno a potenciales situaciones de riesgo para los menores, en vez de que se optara por emprender acciones que sirvan para tener la plena certeza respecto a la protección de los mismos.

En ese sentido, y considerando que el PAN en la contestación al requerimiento de fecha doce de mayo, indicó que no había contratado a empresa alguna para la participación de los menores en el promocional referido, se evidencia que es el único responsable por su participación sin el debido consentimiento parental o, en su caso, de los tutores, en el promocional político electoral pautado por ese mismo instituto político.

De la misma manera la resolución **TESIN-PSE-39-2021**, emitida por el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, declara la existencia de la infracción por incurrir en actos violatorios a los Lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños, y adolescentes en materia político-electoral por parte de Fernando Pucheta Sánchez, candidato a la presidencia municipal de Mazatlán, mismo que señala lo siguiente:

En el perfil de la red social Facebook del denuncia, los días 14 de marzo, 09, 10, 14, 15, 19, y 21 de abril, 06, 07, 17, y 28 de mayo, publica y difunde varias imágenes de niños, niñas y adolescentes, ello para promocionar su campaña política y posicionar su imagen ante los electores, lo cual a su decir, vulnera el derecho a la intimidad de los infantes que aparece en su promoción electoral, sin cumplir con la normativa electoral ya que divulga el rostro de niños y niñas sin tener el consentimiento de las personas que ejercen sobre ellos la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente en función de la edad y madurez, sin que se advierta que el denunciado haya difuminado el rostro de los menores.

Marco normativo. Interés superior de la niñez. -

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 19, establece que toda niña, niño y adolescente, tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del estado.

Por su parte la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña en su artículo 3, establece que en todas las medidas que los involucren se deberá atender como consideración primordial el interés superior de la niñez.

sobre lo anterior, el comité de los derechos del niño y de la niña de la organización de las naciones unidas, en su observación general 14 del 2013, sostuvo que el concepto del interés superior de la niñez, implica tres vertientes;

Derecho sustantivo: Consistente en el derecho de la niñez a que su interés superior sea valorado y tomado como de fundamental protección cuando diversos intereses estén involucrados, con el objeto de alcanzar una decisión sobre la cuestión a resolver.

Un principio fundamental de interpretación legal: cuando se esté ante una previsión legal abierta, a más de una interpretación, se debe optar por aquella que ofrezca una protección más efectiva al interés superior de la niñez.

una regla procesal: cuando exista una decisión que pudiera afectar a la niñez o adolescencia, específicamente o en general a un grupo

identificable o no identificable, en el proceso para la toma de la misma, se debe incluir una evaluación del posible impacto, ya sea negativo o positivo, de la decisión sobre la persona menor de edad involucrada.

Así mismo se ha señalado que el concepto de interés superior de la niñez no es nuevo, sino que ya se consagraba en la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, y en la convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, por lo que se toma como un concepto dinámico que debe evaluarse adecuadamente en cada concepto., cuyo objetivo debe ser el garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos para él o la menor.

Por su parte el artículo cuarto de nuestra Constitución General, en su noveno párrafo establece que el Estado en todas su decisiones y actuaciones velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando así de manera plena sus derechos.

Así mismo, en la ley general de las niñas, niños y adolescentes, en sus artículos segundo y dieciocho se establece que el interés superior de la niñez, deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucren niñas, niños y adolescentes.

Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en la jurisprudencia de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO", que, para la determinación en concreto del interés superior de la niñez, se debe atender a sus deseos, sentimientos, y opiniones, siempre que sean compatibles con sus necesidades vitales.

Aparición de niñas, niños, y adolescentes en la propaganda electoral.

La propaganda electoral difundida por los partidos políticos, se encuentra amparada por la libertad de expresión, que se consagra en el artículo sexto Constitucional, sin embargo, dicha libertad no es absoluta pues encuentra sus límites en la dignidad, y reputación de las personas y los derechos de las mismas, dentro de las cuales se encuentran las de los niños, niñas y adolescentes.

Por lo expuesto el Instituto Nacional Electoral emitió los Lineamientos para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en materia político-electoral, cuyo objetivo es establecer las directrices para la protección de los citados que aparezcan en la propaganda político-electoral, mensajes electorales y en actos políticos, actos de precampaña o campaña de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas independientes, así como de los mensajes transmitidos por las autoridades electorales, federales y locales, o las personas físicas o morales que se encuentren vinculadas directamente a uno de los sujetos mencionado, atendiendo a su calidad o naturaleza jurídica, por cualquier medio de comunicación y difusión, incluida las redes sociales o cualquier plataforma digital, sea esta transmitida en vivo o videograbada, debiendo ajustar los sujetos antes mencionados sus actos de propaganda político-electoral, o mensajes a través de radio o televisión, toda vez que:

- a. pueden aparecer de manera directa e incidental en la propaganda.
- b. Cuando se utilice la imagen, voz o cualquier otro dato que les haga identificable, se deberá proporcionar la máxima información sobre sus derechos, opiniones y riesgos respecto de su aparición en la propaganda político electoral.
- c. Si la aparición es incidental y ante la falta de consentimientos, se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, voz, o cualquier otro dato que le haga identificable, garantizando la máxima protección de su dignidad o derechos.

Aunado a lo anterior, la resolución número **SUP-JE-144/2021**, Sentencia que confirma la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, en el procedimiento especial sancionador, que declaró existente la violación a los requisitos sobre la aparición de menores en propaganda electoral, atribuida a Fernando Alejandro Larrazábal Bretón y al Partido Acción Nacional, este último promovente del juicio electoral. señala lo siguiente;

La imagen de una niña, niño o adolescente en fuentes de acceso público es insuficiente para poderla incluir en propaganda electoral a) Marco jurídico La

imagen es la reproducción identificable de los rasgos físicos de una persona sobre cualquier soporte material. 9 El derecho a la propia imagen constituye uno de los derechos inherentes de la persona, que le permite disponer de su apariencia; considerado por la Suprema Corte como un derecho de defensa y garantía esencial para la condición humana, porque puede reclamarse tanto en defensa de la intimidad violada o amenazada como exigir del Estado que prevenga la existencia de eventuales intromisiones que lo lesione. 10 Si bien no es un derecho absoluto tendría que justificarse su intromisión por un interés público, o bien, cuando se cuente con el consentimiento u autorización de la persona. 11 Estos límites sobre la captación, reproducción o publicación de la imagen de una persona tratándose de menores de edad exige una protección reforzada debido al interés superior de la niñez. El interés superior de la niñez es un principio constitucional y convencional de interpretación que ante la toma de una decisión que involucre niñas, niños y adolescentes se debe evaluar y ponderar las 9 Véanse artículos 16 y 17 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal. 10 Véase tesis P. LXVII/2009, emitida por el Pleno, de rubro: "DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA." 11 Por ejemplo, la Ley Federal del Derecho de Autor establece como infracción en materia de comercio el utilizar una imagen de una persona sin su autorización o la de sus causahabientes (artículo 231, f.II). SUP-JE-144/2021 10 posibles repercusiones en sus derechos y asegurar una protección plena. 12 Dicho principio exige la prevalencia de los derechos de la infancia frente a cualquier otro interés, por lo que ante un conflicto se debe ponderar por encima de cualquier otro ese derecho infantil. 13 Así, la Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 3 que el niño (a) tiene derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten. 14 De modo que, cualquier medida o decisión pública que pueda afectarlos (a) requiere adoptar medidas reforzadas o gravadas, para protegerlos con una mayor intensidad. 15 12 Véase artículo 4º de la Constitución, en su párrafo noveno, que dice: "En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez." Asimismo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece en su artículo 2 y 3 párrafos: "El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales." 13 Acción de inconstitucionalidad 2/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pfo. 129: "En suma, el ejercicio de los derechos fundamentales de las niñas y los niños se encuentran por encima de cualquier otro interés, incluyendo el de sus padres, pues, al ser la infancia concebida ya como sujeto de derechos, los niños y las niñas pueden ejercerlos en todo momento y las autoridades están no sólo obligadas a garantizar ese ejercicio, sino a velar porque el mismo se cumpla. Cuando se anteponen los derechos de la infancia con los de sus padres, la autoridad tiene obligación de ponderar por encima de cualquier otro, ese derecho infantil." 14 Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 15 Tesis aislada 1a. LXXXIII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL." SUP-JE-144/2021 11 Por eso, las autoridades del Estado deben garantizar y sancionar aquellas intromisiones arbitrarias e ilegales en la intimidad de las niñas, niños y adolescentes, que atenten contra su honra, imagen y reputación. Así, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes considera una violación a su intimidad, cualquier manejo directo de su imagen en los medios de comunicación con una concesión o medios impresos (art. 77). Asimismo, dicha ley considera una vulneración a la intimidad de las y los menores, cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación, bien porque menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o los ponga en riesgo. Ahora bien, el INE emitió los Lineamientos para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes que aparezcan en la propaganda políticoelectoral. Los sujetos obligados a esas directrices son los partidos políticos, coaliciones, candidaturas, autoridades y personas físicas o morales que se encuentren

vinculadas. Los Lineamientos obligan a que en cualquier acto, mensaje o medio de difusión de propaganda político-electoral en el que aparezcan niñas, niños o adolescentes ya sea de manera directa o incidental, debe existir el consentimiento de quien o quienes ejerzan la patria potestad o el tutor o, en su caso, la autoridad debe suplirlos. Al igual deben contar con las manifestaciones de los menores sobre su opinión libre e informada respecto a la propaganda en la que participen. En caso de que no se tenga esa documentación, independientemente si la aparición fue directa o incidental se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que haga SUP-JE-144/2021 12 identificable a los niños, niñas o adolescentes, a fin de salvaguardar su imagen y, por ende, su derecho a la intimidad. 16 También, este órgano jurisdiccional ha señalado que los Lineamientos son aplicables en las imágenes que difundan las candidaturas en redes sociales. 17 b. Valoración de la Sala Superior El actor se duele de que la responsable omitió pronunciarse respecto a que en el motor de búsqueda "https://tineye.com" se podía observar que al menos hay otras ciento un publicaciones que utilizan la misma imagen genérica de la menor que apareció en las publicaciones del candidato denunciado y que no se podía presumir que el material hubiera sido producido en México o que correspondiera al presente año. Señaló que la plataforma estaba sujeta a las leyes de Israel con uso lícito de la propiedad intelectual. Al respecto, el Tribunal local determinó que los Lineamientos del INE eran aplicables sin importar que la imagen hubiera sido generada en otro país o tuviera un uso comercial, por lo que debían observarse las pautas de consentimiento e información ahí establecidas. Esta Sala Superior considera apegada a Derecho la determinación de la responsable porque el partido político parte de la premisa inexacta de que si las imágenes de menores se alojan en algún sitio público es innecesario demostrar una autorización para su uso en propaganda electoral. Jurisprudencia 20/2019 de rubro: "PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN." Véase tesis XXIX/2019, de rubro: "MENORES DE EDAD. LOS LINEAMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA SU PROTECCIÓN, SON APLICABLES A LAS IMÁGENES QUE DE ELLOS DIFUNDAN LAS CANDIDATURAS EN SUS REDES SOCIALES EN EL CONTEXTO DE ACTOS PROSELITISTAS." SUP-JE-144/2021 La premisa es incorrecta porque: El derecho a la imagen es uno de los derechos esenciales de la persona, que tratándose de menores de edad requiere de un escrutinio más estricto sobre su difusión, reproducción o captura, derivado del interés superior de la niñez y de que son un grupo vulnerable. Por eso, en materia electoral se necesita recabar el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela y la opinión informada de la o el menor, sin que se prevean excepciones al respecto. No puede extenderse un permiso o derecho de autor para disponer de una imagen de un infante o adolescente para usos electorales. En efecto, una autorización o consentimiento de una imagen para uso comercial o para aparecer en cierta página o sitio web no puede considerarse una cláusula abierta y usarse para fines no expresamente señalados. Pues la forma en cómo y dónde se muestran a los demás es un derecho esencial de toda persona derivado de su dignidad humana, que impide una difusión irrestricta de ésta. Más aún si la imagen o fotografía corresponde a menores de edad, el escrutinio es aún más estricto, porque no se puede perder de vista que ellas y ellos precisan de la representación de un adulto y son un grupo vulnerable que requieren una protección reforzada ante una posible afectación a su desarrollo. Por esa razón, en materia electoral rigen los Lineamientos emitidos por el INE que fijan los requerimientos para que puedan aparecer niñas, niños y adolescentes en la propaganda electoral. SUP-JE-144/2021. Los Lineamientos no establecen alguna excepción en su aplicación, incluso son exigibles en aquellos casos de apariciones incidentales de menores en propaganda electoral. Por lo que también en esos casos, los sujetos obligados deben recabar el consentimiento de la madre, padre o tutor, o en su caso, de la autoridad que los supla y de la opinión informada de la o el menor, de lo contrario tendrán que difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, voz o cualquier otro dato que los haga identificables. La circunstancia de que no existan hipótesis de excepción en las que sea innecesario el consentimiento es precisamente porque se trata de menores de edad, a los que se les debe garantizar la máxima protección de la dignidad y sus derechos. Si un partido político no confeccionó o adquirió la imagen no lo releva de la obligación constitucional y convencional de salvaguardar el interés superior de cualquier niña, niño o adolescente que aparezca en su propaganda política electoral. Lo anterior, debido a que los partidos políticos y las personas candidatas son responsables de proteger los derechos de la infancia desde el momento en que deciden insertar tales imágenes en su propaganda. Sin que sea suficiente exhibir un permiso del uso de la imagen porque en todo caso habría que revisar los términos y condiciones en que fue emitido, es decir, que contenga la autorización de quienes representan al menor y, en su caso, un consentimiento informado del menor, pero, sobre todo, que permita su utilización para fines político electorales. De ahí que, deba desestimarse el planteamiento de que por tratarse de una fotografía extraída de una galería digital pública, eran inexigibles los Lineamientos porque esa razón es

insuficiente para concluir que la SUP-JE-144/2021 15 imagen, el honor y la intimidad de la menor en cuestión efectivamente se encuentre protegido en ese sitio electrónico. 2. El partido no demostró tener una autorización para el uso electoral de la imagen de la menor. Era deber del partido demostrar que efectivamente tuviera una autorización electoral para poder incluir la imagen de la menor en las publicaciones del candidato. Sin embargo, el actor se limita a sostener que deben existir excepciones en la aplicación de los Lineamientos cuando la persona no está expuesta a riesgos que afecten su integridad personal. De modo que se trata de afirmaciones genéricas y subjetivas sin sustento probatorio que permita corroborar la licitud y autorización electoral para divulgar la fotografía de la menor, pues el hecho de que ésta se encuentre alojada en un buscador de Internet no equivale a demostrar que sea lícita su aparición. Máxime si se considera que la información, documentos, imágenes que circulan en la Red no necesariamente son lícitos, dado que no hay un control previo sobre el contenido de las plataformas electrónicas. Incluso tratándose de niñas, niños y adolescentes hay muchos riesgos de que sus fotografías, imágenes, videos circulen sin autorización alguna y debido a que no todos pueden reclamar por sí mismos la violación a sus derechos puedan impedir su divulgación. En esos casos se deben adoptar medidas mucho más estrictas sobre imágenes de menores alojadas en redes sociales o en la web. Por tanto, carece de razón el partido al sostener que era suficiente con demostrar que la imagen aparece en un buscador de internet y que ha sido publicada en infinidad de páginas electrónicas, dado que no SUP-JE-144/2021 16 demuestra que su difusión o divulgación sea lícita y, menos, para fines electorales. La imagen denunciada correspondía a una menor con una discapacidad lo que exige una tutela reforzada. En las constancias de autos se aprecia que la menor incluida en las publicaciones del candidato tiene síndrome de Down, que es una alteración genética que puede llevar algún grado de discapacidad intelectual. En ese sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad garantiza que todos los niños y niñas gocen plenamente de los derechos humanos en igualdad de condiciones con los demás niños y que puedan expresar su opinión libremente sobre las cuestiones que les afecten (art. 7). También, se debe garantizar su derecho a expresar su opinión y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad. Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en su artículo 56 que tienen derecho a que en todo momento a que se les facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que les permitan obtener información de forma comprensible. Por ello, al estar involucrada una niña con una discapacidad exige que se hubieran respetado los principios de no discriminación, de una protección reforzada y atender a la especial vulnerabilidad en que se encuentran. Garantizando a la niña su derecho a opinar y a recibir información de manera accesible, para poder divulgar su fotografía. 18 Información extraída de: <https://www.un.org/es/observances/down-syndrome-day> SUP-JE-144/2021 17 Sin embargo, dado que nada de eso obra en el expediente de forma alguna puede concluirse que todas estas condiciones ocurrieron para la difusión de su imagen. Por lo que, esta Sala Superior concluye que fue correcta la determinación de la responsable porque el candidato vulneró el interés superior de la niñez lo que actualizó la infracción y, en el caso del partido político hoy actor, le generó una responsabilidad indirecta.

Es importante mencionar la Jurisprudencia **20/2019** en la que se determina la obligación que CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN; como sea;

PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º y 4º, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 y 14 de los Lineamientos Generales para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de Propaganda y Mensajes Electorales establecidos por el Instituto Nacional Electoral; y en la Jurisprudencia de la Sala Superior 5/2017, de rubro PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CUMPLIRSE CUANDO SE DIFUNDAN IMÁGENES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, se advierte que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. En ese sentido, cuando en la propaganda político-electoral, independientemente si es de manera directa o incidental, aparezcan menores de dieciocho años de edad, el partido político deberá recabar por escrito el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o tutela, y en caso de que no cuente con el mismo, deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que haga identificable a los niños, niñas o adolescentes, a fin de salvaguardar su imagen y, por ende, su derecho a la intimidad.

Concatenado a lo anterior, la resolución número **SRE-PSC-039/2017**, Sentencia que resuelve el procedimiento especial sancionador UT/SCG/PE/PRI/CG/39/2017, en la que se determina la existencia del uso indebido de la pauta por parte del Partido Unidad Democrática por Coahuila, de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila; así como la vulneración al interés superior del menor por parte de la citada Coalición, como sea;

Por cuestión de método, en primer lugar, se estudiará, de manera conjunta, el supuesto uso indebido de la pauta por parte de la Coalición y tres de sus cuatro partidos, por supuestamente haber promocionado a la Coalición durante la precampaña y, si la Coalición, indebidamente, difundió promocionales relacionados con el proceso de selección interna del PAN y uno de sus precandidatos, a través de su tiempo en radio y televisión; posteriormente, se abordará lo correspondiente a la supuesta promoción indebida de la Coalición por parte del Partido Unión Democrática de Coahuila; y por último, se examinará lo SRE-PSC-039/2017 18 relacionado con el uso de imágenes de menores de edad en uno de los promocionales de la Coalición. 3.1 Marco Normativo respecto del uso indebido de la pauta. La Constitución Federal en su artículo 41, Base III, Apartados A y B, así como la Ley Electoral en los diversos 159, párrafos 1 y 2, 160, párrafos 1 y 2 y 226, párrafo 5, han establecido que los partidos políticos nacionales tienen derecho al uso permanente de los medios de comunicación social. Asimismo, que el INE es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los fines propios, a los de otras autoridades electorales, así como a los partidos políticos; y, que será también este quien garantizará a los partidos políticos el uso de sus prerrogativas constitucionales en radio y televisión. Además, establecen que los precandidatos tienen prohibido contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempo en cualquier modalidad de radio y televisión. Por otro lado, el artículo 226 de la referida Ley Electoral, en su párrafo cuarto, señala que los partidos políticos harán uso del tiempo en radio y televisión que conforme a Derecho les corresponda, para la difusión de sus procedimientos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular. Asimismo, que los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, accederán a radio y televisión en el tiempo que corresponda a los institutos políticos. En este mismo sentido, el artículo 168 de la Ley Electoral, dispone que cada partido político podrá decidir libremente la asignación, por tipo de precampaña, de los mensajes que le correspondan, incluyendo su uso para precampañas locales en las entidades federativas. SRE-PSC-039/2017 19 A su vez, el Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral del INE en su artículo 5, párrafo primero, fracción III, inciso i), dispone que por materiales se entiende a los promocionales o mensajes realizados por los partidos políticos, coaliciones o candidatos/as independientes y autoridades electorales, fijados o reproducidos en los medios de almacenamiento y formatos que determine el INE, para su transmisión en términos de lo que dispone la Constitución Federal y la Ley Electoral. Mientras que, en el inciso m), establece que la pauta es el documento técnico en el que se distribuye el tiempo, convertido a número de mensajes, que corresponde a los partidos políticos, coaliciones y candidatos/as independientes, así como a las autoridades electorales en un periodo determinado, precisando la estación de radio o canal de televisión, la hora o rango en que debe transmitirse cada mensaje, y el partido político, coalición, candidato/a independiente o autoridad electoral al que corresponde. El artículo 7 párrafos 1, 3, 4 y 9 del citado Reglamento establece que los partidos políticos y sus candidatos y precandidatos a cargos de elección popular, accederán a mensajes de radio y la televisión, a través del tiempo que la Constitución Federal otorga como prerrogativa en la forma y términos establecidos legalmente; asimismo, que el INE es la única autoridad competente para ordenar la transmisión de propaganda política o electoral en radio o televisión, para el cumplimiento de sus propios fines y de los partidos políticos; y, que la propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas electorales difundan por radio y televisión los partidos políticos, se ajustarán a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6 y el artículo 41, Base III, Apartado A, de la Constitución Federal; así como el artículo 25, fracción I, incisos a) y u), de la Ley de Partidos Políticos y 247, párrafo 1, de la Ley Electoral. SRE-PSC-039/2017 20 El artículo 13, párrafo cuarto, dispone que, si por cualquier causa un partido político no realiza actos de precampaña electoral, los tiempos a que tengan derecho serán utilizados para la difusión de mensajes del partido político de que se trate, en los términos que establezca la ley. Asimismo, el artículo 37, párrafo 1, establece que, en ejercicio de su libertad de expresión, los partidos políticos determinarán el contenido de sus promocionales, por lo que no podrán estar sujetos a censura previa por parte del INE ni de autoridad alguna, sino, en su caso, a ulteriores responsabilidades. Ahora bien, no pasa desapercibido que a nivel local, el artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Coahuila, establece que los partidos políticos tendrán derecho al uso permanente de los medios de comunicación social y que el acceso a radio y televisión durante los procesos electorales se realizará en los términos establecidos en los ordenamientos antes referidos. La Ley General de Partidos Políticos establece que los partidos políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones para las elecciones de Gobernador, diputados a las legislaturas

locales de mayoría relativa y ayuntamientos, de conformidad con el artículo 87, numeral 2. De conformidad con el artículo 88, numerales 1, 2, y 3, de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos podrán formar coaliciones totales, parciales y flexibles. Se entiende como coalición total, aquella en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso federal o local, a la totalidad de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral. Tratándose de coaliciones, se estará a lo previsto en los artículos 91, numerales 3, 4 y 5 de la Ley General de Partidos Políticos; 167, numeral 2 de la Ley General de SRE-PSC-039/2017 21 Instituciones y Procedimientos Electorales y 16 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, que establecen que a la coalición total que constituyan los partidos políticos les será otorgada la prerrogativa de acceso a radio y televisión en un treinta por ciento que corresponde distribuir en forma igualitaria, como si se tratara de un solo partido, incluso para efectos de la optimización de promocionales sobrantes. En cambio, para el setenta por ciento restante, deben ser tratados en forma separada. En el supuesto de coaliciones totales, el convenio de coalición establecerá la distribución de dicho tiempo entre los candidatos de la coalición. Asimismo, es aplicable a las coaliciones electorales, cualquiera que sea su ámbito territorial y tipo de elección, en todo tiempo y circunstancia, lo previsto por el artículo 91, numeral 4, de la Ley General de Partidos Políticos. En todo caso los mensajes en radio y televisión que correspondan a candidatos de coalición deberán identificar esa calidad y el partido responsable del mensaje. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el artículo 227 de la Ley General, se entiende por precampaña el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido; y por actos de precampaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado a un cargo de elección popular. El párrafo 3 del citado precepto legal, así como los párrafos 1 y 3 del artículo 211 de dicha ley, estipulan que la propaganda de precampaña es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, y expresiones que durante el periodo establecido por la ley y el que señale la convocatoria respectiva, difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a SRE-PSC-039/2017 22 conocer sus propuestas, debiendo señalarse de manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de quien es promovido.

3.2. Casos concretos. Como se ha quedado acreditado con antelación, no se tiene constancia de que los Partidos Acción Nacional y Encuentro Social hubieran difundido alguno de los spots denunciados, por lo que atendiendo al principio indubio pro reo, debe absolverse a dichos partidos de las conductas que se les imputa; y por tanto, únicamente se analizará la difusión de los promocionales pautados por el Partido Unidad Democrática por Coahuila y de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila. Sirve como sustento a lo anterior, lo determinado por la Sala Superior en la jurisprudencia intitulada "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES"⁷ en donde determinó que cuando no se cuente con una prueba que acredite la responsabilidad de los denunciados, lo procedente es absolverlos.

3.2.1 Uso indebido de la pauta por parte de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, por la difusión de spots en precampaña. Como se ha dicho, el primer punto a dilucidar es si existió un uso indebido de la pauta, ya que, en concepto del promovente, no está permitido que las Coaliciones, por sí mismas, puedan difundir spots en radio y televisión, durante la etapa de precampañas, pues, en su consideración, dicha prerrogativa es de uso exclusivo de los partidos políticos que contienden en el proceso electoral correspondiente.

⁷ Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60. SRE-PSC-039/2017 23 En ese sentido, el promovente refiere que con la difusión de spots de la Coalición se está realizando una sobreexposición de dicho consorcio político, ya que las coaliciones únicamente se pueden posicionar, a sí mismas, durante la etapa de campañas. Dicho lo anterior, esta Sala Especializada considera que es inexistente esta falta atribuida a la Coalición, ya que el actor parte de una premisa errónea; a saber: "las coaliciones no tienen acceso a radio y televisión durante las precampañas". En efecto, de la lectura integral de la denuncia, se advierte que el actor encamina sus argumentos a evidenciar que sólo los partidos políticos tienen acceso a radio y televisión durante la etapa de precampañas, mientras que las Coaliciones tendrán acceso a partir del inicio de las campañas. Sin embargo, de conformidad con lo previsto en los artículos 87, 88, párrafo 2, 91, párrafos 3, 4 y 5 167, párrafo 2 de la Ley de Partidos; 167, párrafo 2 de la Ley General, en relación con los numerales 13, párrafo 4 y 16 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, los partidos políticos podrán formar coaliciones para contender de manera conjunta en alguna elección, siendo que una de esas modalidades puede ser la de Coalición total, como lo es en el caso que nos ocupa. Además, se advierte que las Coaliciones podrán acceder a tiempo aire en radio y televisión, ya sea en el periodo de precampaña o campaña. Para ello, en caso de Coalición total, se le considerará como si fuera un solo partido político; y por tanto, tendrá acceso al 30% del tiempo en radio y televisión que se reparte de

manera igualitaria entre los partidos. No obstante, no tendrá acceso al 70% del tiempo que se distribuye de manera proporcional entre dichos institutos políticos, ya que en este caso, los partidos coaligados accederán a dicha prerrogativa, de manera individual y separada, SRE-PSC-039/2017 24 atendiendo a la votación que cada uno hubiera obtenido en la elección del congreso local inmediata anterior. Bajo ese contexto, ha quedado demostrado que el Comité de Radio y Televisión del INE concedió el uso de la prerrogativa constitucional a la Coalición, situación que fue confirmada por la Sala Superior al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP74/2017, en donde estableció que en el artículo 167 de la Ley General no se hacía ninguna distinción en cuanto a la etapa del proceso electoral en la que se debía repartir el tiempo en radio y televisión destinado a las coaliciones; y por tanto, la regla de distribución que en dicho artículo se contemplaba debía ser aplicada tanto a precampañas como campañas. De ahí que no asista la razón al promovente cuando refiere que la Coalición usó indebidamente la pauta en radio y televisión al difundir los spots: "Registro Coahuila Coalición", en su versión televisiva con número de folio RV00097-17 y en su versión de radio con el registro RA00106-17. 3.2.2 Uso indebido de la pauta por parte de la Coalición, al difundir spots en donde difundió actos relacionados con el proceso de selección interna del PAN. En este punto, el promovente refiere que el hecho de que la Coalición difundiera promocionales en los que se aludía al proceso de selección interna del PAN y a uno de sus precandidatos, es contrario a Derecho, puesto que el PAN únicamente podía haber destinado su pauta para promocionar cualquier acto relacionado con su elección interna. SRE-PSC-039/2017 25 En ese sentido, el promovente refiere que el hecho de que se utilizara el emblema de la Coalición, puede inducir al error de que lo que se promociona es un precandidato de dicho consorcio político; y no así, del PAN en lo individual. Al respecto, como se ha dicho con antelación, las Coaliciones gozan de la prerrogativa de acceso a radio y televisión para el periodo de precampaña, siendo que en el caso que nos ocupa, la autoridad administrativa electoral consideró que la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila era una coalición total; y por tanto, para efectos de la distribución de tiempo aire se le debía considerar como un solo partido y, en consecuencia, sólo tenía acceso a la distribución del 30% que se reparte de manera igualitaria entre los partidos políticos. Por lo que al tener acceso en radio y televisión, dicha Coalición tenía la posibilidad de difundir propaganda genérica o de precampaña, con su propio tiempo aire. Cabe mencionar que similar criterio utilizó la Sala Superior al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP-74/2017, en donde determinó que: "una vez asignado el tiempo en radio y televisión que le corresponde a la coalición [...] para las etapas electorales, corresponde a dichos institutos políticos, en ejercicio de su libre autodeterminación, a través de su convenio de coalición, establecer la forma y los términos en que se hará uso del tiempo que le fue asignado, mismo que puede ser usado no sólo para la difusión de propaganda de precampañas, sino también para la difusión de propaganda genérica". Así, resulta evidente que las coaliciones están facultadas para difundir spots en radio y televisión, ya sea con contenido genérico o con propaganda electoral atinente a una precampaña; sin embargo, dicha prerrogativa no es absoluta ni ilimitada, sino que se debe ajustar a los parámetros que rigen la difusión de propaganda en la época de precampaña. SRE-PSC-039/2017 26 Al respecto, la Sala Superior al emitir la jurisprudencia intitulada: "RADIO Y TELEVISIÓN. LA UTILIZACIÓN DE LOS TIEMPOS ASIGNADOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PARA PROMOCIONAR LA IMAGEN DE CANDIDATOS POSTULADOS POR OTROS INSTITUTOS POLÍTICOS O COALICIONES, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD"8 determinó que los partidos políticos no deben utilizar los espacios en radio y televisión que les corresponden, para promocionar la imagen de candidatos postulados o registrados por otros institutos políticos o coaliciones, pues puede generarse una exposición desigual y, en consecuencia, un mayor posicionamiento a alguna de las opciones políticas en detrimento de las restantes, contraviniendo el principio de equidad en la contienda electoral. En ese contexto, esta Sala Especializada considera que los partidos políticos y coaliciones, ya sea durante las precampañas y campañas, únicamente podrán hacer uso de los tiempos o pautas en radio y televisión para difundir su propia propaganda política o electoral, sin que exista posibilidad alguna de que algún precandidato o candidato de un diverso partido político o coalición pueda participar o beneficiarse de dicha prerrogativa, dado que ello afectaría el principio de equidad en el proceso de selección interna de un partido, puesto que se estaría dotando de mayores beneficios a una sola oferta política. Precitado lo anterior, debe recordarse que en el caso, se tiene acreditado que durante el periodo de precampañas del proceso electoral del estado de Coahuila, la Coalición Alianza, como parte de su prerrogativa en radio y televisión, difundió los spots: "Registro Coahuila Coalición" con folio RV00097-17 [versión televisión] y RA00106-17 [versión radio], cuyo contenido se muestra a continuación: RV00097-17 8 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, En tales circunstancias, a juicio de esta Sala Especializada, dichos promocionales deben ser considerados como spots de precampaña, puesto que el mensaje que se emitió se encontraba vinculado con el proceso de selección interna del PAN, uno de los precandidatos que contendió y la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila. En ese contexto, esta Sala

Especializada considera que es existente la infracción atribuida a la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, relacionada con el uso indebido de la pauta que le fue asignada en el periodo de precampaña de la elección de Gobernador de Coahuila. Ello, habida cuenta que ha sido acreditado que los spots controvertidos son de carácter electoral, y que están encaminados a difundir actos relacionados con el proceso de selección interna que, de manera individual, realizó uno de los partidos coaligados, sin que mediara una justificación para ello, puesto que en el convenio no se estableció que la Coalición participaría o coadyuvaría en la elección del Candidato a Gobernador que realizaría el PAN. Lo anterior se considera así, ya que con independencia de que durante las precampañas, el PAN formó parte de la Coalición, lo cierto es que de conformidad con el convenio que integró el consorcio político, ningún otro partido coaligado o la Coalición misma, estaban en posibilidades de realizar actos de promoción de precandidatos o de etapas del proceso de selección interna del PAN, puesto que en el convenio únicamente se refirió que el candidato emanaría de la selección de candidatos del PAN, atendiendo a la determinación que adoptara la Comisión Permanente del Consejo Nacional de dicho partido. En esa lógica, la difusión de promocionales vinculados a la precandidatura de José Guillermo Anaya Llamas debió ser realizada exclusivamente por el PAN con el tiempo que, de manera individual, le correspondía en el periodo de precampaña; es decir, que los spots alusivos a dicho precandidato debieron estar comprendidos entre el tiempo que le fue asignado al PAN como parte del 70% del tiempo aire que SRE-PSC-039/2017 30 se distribuyó de manera proporcional a cada uno de los partidos en lo individual y del cual no le fue asignado a la Coalición denunciada. Lo anterior, ya que la Coalición denunciada, por sí misma, no llevó a cabo un proceso de selección interna, sino que dicha situación fue realizada de manera particular por uno de sus partidos coaligados; y por tanto, la Coalición no estaba facultada para promocionar actos de precampaña que pudieran causar una afectación a la equidad del proceso de selección interna del PAN, al otorgar mayor tiempo del que debía de tener alguno de los sujetos que participarían en dicho proceso electivo. En efecto, al no realizar un proceso de selección interna, la Coalición únicamente debió constreñirse a difundir propaganda genérica sobre temas de interés general; y no así, la exhibición de promocionales con propaganda de precampaña; cuestión diversa hubiera sido que en el convenio de coalición se hubiera establecido que para la elección de candidato a Gobernador, dicho consorcio político realizaría un proceso de selección en el cual se incluyeran, entre otros, a los precandidatos de los partidos coaligados; o bien, que la Coalición participaría en el proceso interno que implementara individualmente alguno de sus coaligados, pues en estos supuestos se justificaría que el tiempo en radio y televisión de la Coalición fuera distribuido y usado por los diferentes precandidatos que participaran en dicha elección interna. De ahí que la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila utilizó indebidamente su pauta en radio y televisión que le fue asignada durante el periodo de precampaña del proceso electoral que se desarrolla en el estado de Coahuila; y por tanto, contravino lo previsto en 41 párrafo segundo base III apartado A, de la Constitución; 159; 211, 227, párrafo 3, y 443, párrafo 1 incisos a) y n), de la Ley General; 25 párrafo 1 incisos a) y u), de la Ley General de Partidos Políticos; así como 13, párrafos 1 y 3 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. SRE-PSC-039/2017 31 3.2.3 Uso indebido de la pauta por el Partido Unidad Democrática de Coahuila, por la promoción de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila. En este punto, el promovente aduce que dicho partido usó indebidamente la pauta que le fue asignada en el periodo de precampaña de la elección que actualmente se desarrolla en el estado de Coahuila, al haber promocionado a la Coalición por medio de la difusión de los spots: "Coahuila libérate" con folio RV001918 [versión televisión] y RA002366 [versión radio]; "Lenin Precampaña" con folio RV00037-17 [versión televisión] y RA00039-17 [versión radio]; y "Video Alianza" con folio RV00100-17 [versión televisión] y RA00114-17 [versión radio]. En ese sentido, el promovente refiere que es ilegal que se promoció el logotipo de una coalición en la etapa de precampaña, puesto que se le está posicionando en un momento que no es permitido; más aún, cuando, en su concepto, en dichos promocionales se advierten propuestas de gobierno y campaña, dirigidas a la ciudadanía en lo general. Al respecto, como ya se ha señalado, los partidos políticos gozan de la prerrogativa constitucional de acceso a la radio y televisión, ya sea durante o fuera de algún proceso electoral, puesto que su acceso es de manera permanente atendiendo a las modalidades que establece la propia Constitución y las normas electorales. Bajo ese contexto, debe decirse que en el caso particular, se tiene constancia de que el Partido Unidad Democrática de Coahuila no realizó un proceso de selección interna para elegir candidato a Gobernador de Coahuila, puesto que atendiendo al convenio de coalición que firmó, el candidato a dicho puesto sería el que resultara electo en el proceso interno del PAN. Por q C-039/20 corrupción se te hizo normal. Y es que mientras ellos se enriquecen, tú te vuelves más pobre. Cada vez trabajas más y te pagan menos. ¿Qué pasa Coahuila? Alégrate, decídette, tú tienes la solución. Ahora les toca sufrir a ellos. Que paguen por lo que han hecho. Es ahora o nunca. Voz de un hombre: Unidad Democrática de Coahuila. UDC. Voz de un hombre: Coahuila. Libérate. Como puede advertirse, en estos spots no se hace referencia alguna a la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, sino que únicamente se utiliza el nombre y logo

del Partido Unidad Democrática de Coahuila; además, contrario a lo afirmado por el actor, no se aprecia alguna propuesta de campaña de dicho partido político ni alguna referencia a un plan de gobierno. Por el contrario, lo único que se advierte es el posicionamiento de dicho partido frente al supuesto problema de corrupción y pobreza que existe en el estado de Coahuila; usando para ello preguntas retóricas con las que pretende reafirmar su idea, tales y como lo son: "¿Por qué la corrupción se te hizo tan normal?" y "¿Qué pasa Coahuila?". En esas circunstancias, dichos promocionales deben ser considerados como genéricos, pues únicamente pretenden mostrar el posicionamiento del partido en torno a temas de interés social, sin que se aprecie que se haga algún posicionamiento de alguna fuerza política que pudiera influir en la contienda electoral. Por lo que es factible calificar como dentro de la legalidad estos promocionales. Ahora por lo que hace a los promocionales: Promocional Video Alianza con folio RV00100-17 [versión televisión] Imágenes representativas Voz de un hombre: Para llegar a una meta es necesario construir un camino. No podemos fallarle a Coahuila viendo como sufre nuestra gente. Basta ya de divisiones. Basta ya de egoísmo. Es tiempo de una Alianza Ciudadana para construir el Coahuila que todos queremos. Este es el reto y la oportunidad. Dejar a un lado el interés personal y darle esperanza a nuestro pueblo. Hasta la victoria. ¡Venceremos! Voz de un hombre: UDC. Voz de un hombre: Libérate. Voz en off: Alianza Ciudadana por Coahuila. En el caso de estos spots, se advierte que el contenido del mensaje es idéntico, puesto que se escucha el uso de las mismas palabras tanto en radio y televisión; lo cual, permite que se estudien de manera conjunta, a fin de evitar repeticiones innecesarias, con la diferenciación del uso de imágenes en el caso del spot televisivo. Como puede advertirse, en estos promocionales se hace alusión a la visión que tienen tanto UDC como la Coalición Ciudadana por Coahuila, respecto del sufrimiento que se causa a los coahuilenses con la división y egoísmo del interés personal; y ante ello, manifiestan una oportunidad de esperanza al renunciar a ese interés individual. En ese contexto, en dichos promocionales no se aprecia alguna referencia que permita deducir que se pretende posicionar a un partido político; o bien, que se está llamando a votar a favor de determinada fuerza política, ya que lo que realmente se tiene es un posicionamiento general, relacionado con la condición social del Estado y la posibilidad de que ésta cambie con la renuncia de los intereses personales de la población en general. En esa tesitura, es indubitable que estos spots contienen un mensaje genérico, habida cuenta que únicamente refieren la postura ideológica del partido, por lo que no se advierte referencias que impliquen un llamado al voto. SRE-PSC-039/2017 46 En este tenor, este órgano jurisdiccional estima que los promocionales denunciados, por la temporalidad en la que fueron difundidos, están apegados a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias en cuanto a su contenido, de tal suerte que no se acredita la infracción, pues no existe prohibición alguna para que durante el periodo de precampañas, el partido político difunda ideas, críticas o manifestaciones en torno a temas de interés general, propio de todo sistema democrático. Esto es, en la época de precampañas, los partidos políticos pueden hacer uso de las pautas en radio y televisión otorgadas por el INE, sin que necesariamente deban contener mensajes de precampaña o campaña, pudiendo versar sobre cuestiones de carácter general. Por otra parte, tampoco se acredita el argumento del quejoso en el sentido de que la difusión de los promocionales denunciados constituye un uso indebido de la pauta, en razón de que fueron hechos con la finalidad de posicionar ilícitamente a la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila ante el electorado. Lo anterior, ya que se reitera que lo que realmente se difunde es un contenido propio de la ideología del partido político, con expresiones críticas, lo cual no encuentra una prohibición expresa en la legislación aplicable, sino por el contrario, dicho contenido se encuentra permitido a los partidos políticos ya sea fuera o dentro de los periodos electorales, al constituir una de las formas que permiten a los institutos políticos alcanzar los fines constitucionales establecidos en el artículo 41 de la Constitución Federal. En ese sentido, esta Sala Especializada considera que del análisis integral y contextual de los promocionales no es posible presumir algún riesgo de afectación en materia electoral; de ahí que el objetivo de los promocionales otorgados al partido SRE-PSC-039/2017 47 político, en este caso específico, no se encuentra desvirtuado, ya que atendiendo al contenido se trata de materiales genéricos con posicionamiento partidista, por lo que es inexistente la conducta señalada por el Promovente. 3.2.4 Uso indebido de la pauta por la Coalición, al usar imágenes de menores de edad en un spot. Es oportuno señalar que esta Sala Especializada, en un nuevo paradigma de protección de los Derechos Humanos, implementó un método tendente a verificar la posible existencia de alguna situación de vulnerabilidad, en el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad auditiva, o bien, cuando en los promocionales se incluyan personas menores, aun cuando forme o no parte de la controversia. Proceder que es plenamente acorde con lo previsto por el artículo 1º, párrafo tercero de la Constitución Federal; en cuanto ordena que todas las autoridades, incluida por supuesto esta Sala Especializada, tienen la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los Derechos Humanos. Acorde con lo anterior, al verificar el contenido del promocional de televisión con folio RV0097-17. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera

plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Al respecto, se tiene en cuenta que el contenido de la propaganda difundida por los partidos políticos se encuentra amparada por la libertad de autodeterminación de contenidos; empero, el ejercicio de dicha libertad fundamental no es absoluta, sino que tiene límites, entre los que se encuentran los vinculados con la dignidad o la reputación de las personas y los derechos de terceros, acorde con lo dispuesto en los artículos 6º, párrafo primero de la Constitución Federal, así como 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dicen: Artículo 6º.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Artículo 19.[...] 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. SRE-PSC-039/2017 50 Destaca de estos preceptos constitucionales y convencionales una limitación coincidente: esto es, el pleno respeto a los derechos de terceros, incluidos, por supuesto los derechos de la niñez, cuya protección, se encuentra expresamente ordenada en el artículo 4º de nuestra Constitución Federal. En tales condiciones, cuando en el uso de las pautas asignadas por el Instituto se difundan mensajes que puedan afectar derechos de terceros, y que en el caso, resultan ser personas menores de edad, se debe garantizar sus derechos en el marco de su interés superior. Ahora bien, en el orden conceptual, el "interés superior del niño", ha sido descrito por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: "Implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Al amparo de esa previsión convencional, el Estado Mexicano, a través de sus instituciones, autoridades y tribunales, está constreñido a tener en consideración primordial el respeto al interés superior del menor, con la adopción de medidas necesarias para asegurar y maximizar la protección y efectividad de los derechos de las niñas y niños, acorde con lo establecido en los artículos 3, párrafo 1 y 4, de la Convención sobre los Derechos del Niño: Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Artículo 4. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional. SRE-PSC-039/2017 51 Con tal directriz de protección a la niñez, el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes" emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el interés superior del menor tiene las siguientes implicaciones: a) Coloca en plena satisfacción los derechos de los infantes como parámetro y fin en sí mismo; b) Define la obligación del Estado respecto de los niños, niñas y adolescentes; y c) Orienta decisiones que protegen sus derechos. En sincronía con estos postulados, la Primera Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis de rubro: "DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS" estableció que la mera situación de riesgo de los infantes es suficiente para que se estime que se afectan los derechos de la niñez y, ante ello, deben adoptarse las medidas que resulten más benéficas para la protección de los infantes. En el caso, la posible afectación al interés superior del infante se advierte a través de la exposición de la imagen de diversos niños y

posibles adolescentes (sin que de esta circunstancia se tenga absoluta seguridad, atento a su fisonomía), de ahí que el análisis se deba hacer en relación al derecho a la propia imagen de los infantes participantes. Entonces la importancia del asunto radica, precisamente, en la protección reforzada que goza la imagen de las y los menores de edad involucrados en el promocional. SRE-PSC-039/2017 52 Por tanto, para el otorgamiento de la salvaguarda judicial es suficiente que se les ubique en una situación de riesgo potencial, sin que sea necesario que esté plenamente acreditado el perjuicio ocasionado, porque, atento a los valores en juego, el interés superior de las niñas y niños, está por encima del ejercicio de la libertad de autodeterminación del contenido de los spots que tienen los partidos políticos. Con ese parámetro de ponderación, el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece, que ningún niño puede ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, ni ataques ilegales a su honra y reputación. Por su parte, los artículos 2, 5, 76, 77 y 78 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes contemplan, igualmente, la salvaguarda de los infantes ante cualquier riesgo de afectación o manejo directo de su imagen, nombre, datos o referencias que permitan su identificación, así: Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán: I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno; II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia. El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la SRE-PSC-039/2017 53 asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley. ... Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño. ... Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquella que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán orientar, supervisar y, en su caso, restringir, las conductas y hábitos de niñas, niños y adolescentes, siempre que atiendan al interés superior de la niñez. Artículo 77. Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, así como medios impresos, o en medios electrónicos de los que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez. Artículo 78. Cualquier medio de comunicación que difunda entrevistas a niñas, niños y adolescentes, procederá como sigue: I. Deberá recabar el consentimiento por escrito o cualquier otro medio, de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente, respectivamente, conforme a lo señalado en el artículo anterior y a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 76 de la presente Ley, y II. La persona que realice la entrevista será respetuosa y no podrá mostrar actitudes ni emitir comentarios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. En el caso de que no sea posible recabar el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de un menor, éste podrá otorgarlo siempre que ello no implique una afectación a su derecho a la privacidad por el menoscabo a su honra o reputación. SRE-PSC-039/2017 54 Por otra parte, no se requerirá el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de niñas, niños o adolescentes, cuando la entrevista tenga por objeto que éstos expresen libremente, en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, su opinión respecto de los asuntos que les afecten directamente, siempre que ello no implique

una afectación a sus derechos, en especial a su honra y reputación. El interés superior a proteger es la sola posibilidad de poner en peligro su imagen con una latente identificación de su persona. Este principio protector, vinculado al tema, nos orienta a reflexionar que en el caso de la propaganda política o electoral, hay siempre un elemento ideológico que identifica a la opción política, por tanto, la presencia de infantes implica un riesgo potencial de asociar a tales infantes con una determinada preferencia política e ideológica, a una edad que todavía no es oportuna. Lo anterior puede devenir en un riesgo potencial en relación con su imagen, honra o reputación presente, en su ambiente escolar o social y, por supuesto, en su futuro, pues al llegar a la vida adulta pueden aceptar o no aprobar la ideología política, con la cual fueron identificados en su infancia. En esta concurrencia de derechos involucrados, acorde con las disposiciones nacionales e internacionales antes descritas, esta Sala Especializada debe hacer un ejercicio de ponderación el cual se decante por la protección reforzada de los menores de edad involucrados en los promocionales de televisión que se analizan. Con tal parámetro este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a implementar todas aquellas medidas que sirvan para evitar que se presenten situaciones de riesgo potencial que puedan afectar el interés superior del menor en relación con los promocionales de contenido político electoral, como en el asunto. SRE-PSC-039/2017 55 De suma importancia destaca tener la seguridad que los infantes fueron escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece: "Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez". Los requerimientos reforzados tienen sustento en los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a ser informados, como una directriz convencional que debe atenderse por todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales, como lo indica la UNICEF, en las Directrices éticas para la información sobre la infancia; conducentes y aplicables a la aparición de infantes en los spots de los partidos políticos, precisamente porque aparecen en medios de comunicación social como la televisión genera su exposición pública. Este instrumento internacional indica, en lo destacable: "Directrices éticas de UNICEF para la información sobre la infancia Protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la exposición pública ... De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, todos los niños, niñas y adolescentes, sin excepción, deben tener garantizados sus derechos. Uno de esos derechos es el de la protección de la vida privada, por lo que la exposición pública de los niños, niñas o adolescentes... ...UNICEF plantea una serie de directrices éticas para la información sobre infancia, que tienen como objetivo aportar orientaciones básicas para los medios de comunicación, pero que también son de utilidad para autoridades administrativas, policiales y judiciales que participan en los procesos de justicia, sobre cómo abordar los temas relacionados con la protección de la infancia a fin de respetar en todo momento su interés superior y su dignidad como seres humanos... Directrices éticas de UNICEF para la información sobre la infancia I. Principios 1. Se deberán respetar la dignidad y los derechos de cada niño o niña en toda circunstancia..." SRE-PSC-039/2017 56 Por tanto, a efecto de garantizar el pleno respeto al interés superior de los infantes, la autoridad administrativa electoral conforme a sus facultades adoptó las medidas necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos que procedan, en los términos apuntados y, en su caso, requirió la documentación necesaria a fin de privilegiar y proteger el interés superior de los niños, niñas y/o adolescentes menores de dieciocho años. Conforme lo anterior, mediante acuerdo de siete de marzo, la Unidad Técnica requirió a la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, remitiera la documentación a través de la cual fuera posible advertir las personas que, en su caso, ejercieran la patria potestad de los menores involucrados; así como el documento en el cual se asentara la libre manifestación de la voluntad de los menores. En respuesta, la Coalición exhibió copia fotostática de siete autorizaciones de uso de imagen y voz, en el que se consigna información como el nombre del menor, domicilio, Ciudad/Estado/Código Postal, Teléfono, RFC o CURP; así como la leyenda: "Soy el padre/la madre (o tutor legal) del menor que ha firmado esta autorización y consentimiento, y por la presente acuerdo que yo y el menor estaremos sujetos a todos los términos y condiciones de la presente." Enseguida de lo anterior, se encuentra consignado el nombre de la persona que se dice ostentar como el padre o madre del menor referido en el formato correspondiente. Al respecto, esta Sala Especializada considera que dichos formatos, al ser pruebas documentales privadas por ser documentos elaborados por particulares y 9 Acorde con lo dispuesto en los artículos 461, párrafo 3, inciso b), así como 462, párrafos 1 y 3, de la Ley General. SRE-PSC-039/2017 57 proporcionados por la Coalición denunciada, por sí solos, resultan insuficientes para acreditar que los menores que en ellos se refiere son los mismos que aparecen en el spot controvertido; más aún, cuando la Coalición no proporcionó ningún otro documento que permitiera identificar plenamente a los menores involucrados. En efecto, en los formatos referidos no hay ningún elemento que permita la identificación visual de los menores y tampoco se adjuntó alguna credencial escolar o documento que permitiera a esta autoridad electoral distinguir a que menor de los que aparecen en el vídeo corresponde cada uno de los permisos. Por lo que los citados formatos no son la prueba idónea para

acreditar la persona que supuestamente otorgó el permiso. Aunado a ello, es preciso señalar que con la documentación remitida por la Coalición, tampoco se puede acreditar que las personas que firman la autorización, en realidad ostenten la patria potestad de los menores que aparecen en los vídeos, puesto que únicamente se aportó copia de la licencia de manejo de cada uno de los signantes, pero se omitió acompañar copia certificada del acta de nacimiento de los menores o de cualquier otro documento oficial con el que se pudiera identificar plenamente al mayor adulto que tuviera los derechos de representación de cada uno de los niños y/o adolescentes que se observa en el spot en comento. En ese sentido, dada la laxitud que presentan los citados formatos y la falta de algún documento que acredite la persona que tiene la patria potestad de los menores, es que esta Sala Especializada no tener por cierta la existencia del consentimiento pleno, cierto e idóneo, por escrito, debidamente firmado por los padres o quienes ejerzan la patria potestad o tutela del menor, pues como se ha manifestado, no hay mayores elementos que permitan concatenar y tener por acreditado que la participación de los niños en el promocional denunciado ocurrió con apego a las formalidades exigibles. SRE-PSC-039/2017 58 Además, respecto al requisito consistente en la manifestación del menor por cuanto hace a su opinión libre y expresa respecto de su participación en el promocional electoral en cuestión, opinión que será valorada atendiendo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, en el caso concreto, el PAN omitió presentar cualquier tipo de documentación para el cabal cumplimiento de este requisito, sin que el partido político emitiera pronunciamiento al respecto, en el presente procedimiento. No pasa desapercibido a esta autoridad que la representación de la Coalición, en su defensa alegó que: • El plazo otorgado para el desahogo y cumplimiento al requerimiento resultaba insuficiente; • Se trata de documentos ajenos y privados, lo que provocó necesariamente una labor de recaudación de dichos documentos; y por tanto, era claro, evidente y lógico, que el tiempo y la posibilidad de los titulares de los documentos no estaba a disposición del partido político; lo cual retrasaba y tornaba difícil su recaudación. • En vista del plazo otorgado, resultaba imposible la protocolización del consentimiento de los padres y los menores; más aún si se toma en cuenta el tiempo que conllevan los trámites protocolarios ante fedatario público. • El requerimiento no tiene sustento legal que permita al partido prevenir la obligación de recaudar los documentos que se requirieron, sin embargo no se pretende desconocer los criterios que el INE citó en el acuerdo de requerimiento, solo trata de evidenciar que resulta complicado prever y SRE-PSC-039/2017 59 recaudar documentos para dar exhaustivo cumplimiento a requisitos no contemplados en la legislación. No obstante, a juicio de esta Sala Especializada, dichas consideraciones deben desestimarse, ya que tal y como se ha referido con antelación, la normas constitucionales, convencionales y legales, prevén que quienes difundan en medios de comunicación la imagen de menores, deberán tomar en cuenta aquellas medidas que impliquen la salvaguarda de los infantes ante cualquier riesgo de afectación o manejo directo de su imagen, entre las que se encuentra el recabar con antelación a la difusión, los permisos correspondientes. Por lo que no es aceptable que la Coalición denunciada aduzca que no se le otorgó el tiempo necesario para recabar dicha documentación, ya que estaba plenamente vinculada a contar con ella, desde el momento en que realizó el promocional que posteriormente difundiría como parte de su prerrogativa constitucional de acceso a televisión. En esa lógica, tampoco asiste razón a la Coalición denunciada cuando refiere que resultaba imposible realizar la protocolización del consentimiento de los padres y de los menores, ya que se insiste, dicha situación debió ser realizada con antelación a la difusión del promocional; además, la parte denunciada pasa por alto que los Notarios Públicos no son los únicos que, en materia electoral, podrían realizar una protocolización, ya que también contaba con la posibilidad de solicitar el auxilio de la Oficialía Electoral del INE; sin embargo, no se aportó ningún documento que, cuando menos, generara un indicio de que se solicitó su apoyo ni tampoco se tiene constancia de que la Coalición hubiera requerido los servicios de protocolización ante fedatario público. SRE-PSC-039/2017 60 De ahí que se tengan por desestimadas las manifestaciones de la representación de la Coalición; y por consiguiente, sea dable concluir que esta Sala Especializada no cuenta con los elementos idóneos y suficientes, como puede ser una fotografía, identificación escolar o cualquier otro elemento que sirva para establecer la identidad de los menores; lo cual, permitiría cotejar y establecer el vínculo entre las niñas y niños que aparece en el promocional y de quien, supuestamente, dio el consentimiento es su madre o tutora. Lo que deja en evidencia el riesgo potencial al que se expuso a los menores, por la difusión del promocional, al no tener certeza de que se emitió un consentimiento pleno, cierto e idóneo por parte de los padres, madres o tutores de aquellos, y, sobre todo, por no cuidar de manera idónea el uso de las imágenes de éstos. En consecuencia, se estima que se vulneró el interés superior de los menores involucrados y, por ende, se actualiza por parte de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila la infracción que se denuncia, en contravención a lo dispuesto por los diversos artículos 1, 4, párrafo noveno y 6, párrafo primero de la Constitución Federal; 25, párrafo 1, inciso a) y u), de la Ley de Partidos Políticos; 247, párrafo 1 y 443, párrafo 1, incisos a), h) y n) de la Ley Electoral. CUARTA. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Una vez que ha sido acreditada la existencia de diversas faltas, procede establecer la clase

de sanción que legalmente corresponda, tomando en cuenta, entre otras, las siguientes directrices: 1. La importancia de la norma transgredida, es decir, señalar qué principios o valores se violaron o se vieron amenazados y la importancia de esa norma dentro del sistema electoral (principio, valor, ordenamiento, regla). SRE-PSC-039/2017 61 2. Efectos que produce la transgresión, los fines, bienes y valores jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o resultado). 3. El tipo de infracción y la comisión intencional o culposa de la falta, análisis que atañe verificar si el responsable fijó su voluntad para el fin o efecto producido, o bien, pudo prever su resultado. 4. Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así como si la conducta fue reiterada. Para tal efecto, esta Sala Especializada estima procedente retomar la tesis histórica S3ELJ 24/2003, de rubro "SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN", que sostenía que la determinación de la falta puede calificarse como levísima, leve o grave, y, en este último supuesto, como grave ordinaria, especial o mayor, lo que corresponde a una condición o paso previo para estar en aptitud de determinar la clase de sanción que legalmente se deba aplicar al caso concreto, y seleccionar de entre alguna de las previstas en la ley. Ello en virtud de que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior en diversas ejecutorias,¹⁰ que la calificación de las infracciones obedezca a dicha clasificación. Por lo tanto, para una correcta individualización de la sanción, en primer lugar es necesario determinar si la falta a calificar es: i) levísima, ii) leve o iii) grave, y si se incurre en este último supuesto, precisar si la gravedad es de carácter ordinaria, especial o mayor. 10 En los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-45/2015 y acumulados, SUPREP-57/2015 y acumulados, SUP-REP-94/2015 y acumulados, SUP-REP-120/2015 y acumulados, SUP-REP-134/2015 y acumulados, SUP-REP-136/2015 y acumulados y SUP-REP-221/2015. SRE-PSC-039/2017 62 Adicionalmente, es menester precisar que cuando se establece un mínimo y un máximo de la sanción a imponer, se deberá proceder a graduar la misma atendiendo a las circunstancias particulares del caso. Al respecto, una vez que han quedado demostradas la infracciones a la normativa electoral en que incurrió la Coalición Alianza Ciudadana de Coahuila, se procede a imponer la sanción correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la Ley General, que dispone que cuando se trate de infracciones cometidas por los partidos políticos, se podrá imponer desde amonestación pública, multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente¹¹, según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda. Para determinar la sanción respectiva, se deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodearon la conducta contraventora de la norma, de conformidad con lo previsto en el artículo 458, párrafo 5 de la Ley General, tomando en consideración los siguientes elementos: • Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila. 1. Singularidad o pluralidad de faltas. En este punto, en principio, resulta necesario establecer que con una sola conducta se acreditaron dos faltas; esto es, que con la difusión del spot "Registro Coahuila Coalición" con folio RV00097 [versión tv] y 11 Se debe precisar que, mediante reforma al párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo decreto se publicó el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. De igual forma, en términos de los artículos segundo y tercero transitorios del decreto de reforma mencionado, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país. SRE-PSC-039/2017 63 RA00106 [versión radio] se actualizaron las faltas de uso indebido de la pauta y afectación al interés superior de un menor. 2. Bien Jurídico tutelado. Establecido el contexto anterior, debe decirse que con dicha conducta se transgredió, por una parte, el principio de equidad en la contienda interna de un partido político, puesto que se concedió mayor tiempo aire en radio y televisión a uno de los contendientes del proceso de selección interna del PAN; por otra parte, se afectó el interés superior de los menores que aparecieron en el spot televisivo controvertido, puesto que no se acreditó que la Coalición contará con los documentos necesarios para acreditar una participación libre y voluntaria, a sabiendas de la exposición de su imagen para fines electorales; y por tanto, se afectó la integridad, privacidad y reputación de los menores. 3. Circunstancias de modo, tiempo y lugar Modo. La conducta consistió en la difusión por televisión del promocional "Registro Coahuila Coalición" con folio RV00097 [versión tv] y RA00106 [versión radio], relativo al proceso electoral local de Coahuila, con un total de ciento ochenta y siete impactos en televisión y trescientos ochenta y cuatro en radio. Tiempo. La difusión del promocional se realizó durante el desarrollo de los comicios locales en Coahuila, en la etapa de precampañas, en el periodo del doce al quince de febrero. Lugar. La difusión del promocional se efectuó en los canales de televisión cuya transmisión se realiza en Coahuila. SRE-PSC-039/2017 64 4. Condiciones externas y medios de ejecución. El momento en que se realizó la transmisión del

promocional, corresponde al periodo de precampaña del proceso electoral local del estado de Coahuila, y el medio de ejecución fueron los canales de radio y televisión de transmisión local, acorde con lo informado por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos en las diversas comunicaciones que han sido referidas en el apartado de acreditación de los hechos denunciados. 5. Beneficio o lucro. No se acredita un beneficio económico cuantificable para la Coalición responsable, en virtud de que se trata de la difusión de promocionales pautados por ella misma, en uso de su prerrogativa constitucional de acceso a los tiempos del Estado. 6. Comisión dolosa o culposa de la falta. Está acreditado que la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila pautó los promocionales aludidos como parte de su prerrogativa de acceso al tiempo aire en radio y televisión que le correspondía en el marco de las precampañas del proceso electoral de Coahuila; y por tanto, es posible afirmar que tenía pleno conocimiento del contenido de los promocionales pautados; lo cual, permite concluir que tuvo la voluntad, por una parte, de usar la imagen de los menores de edad en el contenido de su promocional; y por otra parte, que tuvo el ánimo de difundir el promocional tildado de ilegal durante el periodo de precampañas en el proceso electoral del estado de Coahuila. Además, como Coalición que contiene en un proceso electoral local está plenamente vinculada al conocimiento de las normas constitucionales, convencionales y legales y de los criterios jurisprudenciales que rigen el acceso a la radio y televisión por parte de los actores políticos que participan en un proceso comicial; así como los tendentes a garantizar la salvaguarda del interés superior de los menores al ser utilizados en promocionales que se difundirán en un contexto electoral, a través de los medios electrónicos.

Se presume que el entonces precandidato en cuestión ni los partidos políticos que lo respaldan no cuentan con los requisitos administrativos, expresos en el Lineamiento para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia político-electoral, **capítulo “Requisitos para mostrar niñas, niños o adolescentes en propaganda político electoral, mensajes electorales, actos políticos, actos de precampaña o campaña, en cualquier medio de difusión”, numeral 8**, con título “Consentimiento de la madre y del padre, de quien ejerza la patria potestad o de los tutores”, señala lo siguiente:

“...Por regla general, debe otorgar el consentimiento quien o quienes ejerzan la patria potestad o el tutor o, en su caso, la autoridad que debe suplirlos respecto de la niña, el niño o adolescente que aparezca o sea identificable en propaganda político-electoral, mensajes electorales o actos políticos, actos de precampaña o campaña, o para ser exhibidos en cualquier medio de difusión...”

Irregularidad que a simple vista es demostrada, toda vez que el precandidato ni los partidos políticos que lo respaldan, no cumplieron con este requisito, y debiendo esta autoridad electoral, solicitar al infractor de forma inmediata dicho consentimiento, y en caso de negarse a proporcionarlo, sancionarlo cómo corresponda.

Así mismo en el Lineamiento para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, **capítulo “Presentación del consentimiento y opinión ante el Instituto”, en el numeral 14**, señala lo siguiente;

“... Los sujetos obligados que exhiban la imagen, voz o cualquier dato identificable de niñas, niños o adolescentes en su propaganda político-electoral, mensajes o actos políticos, actos de precampaña o campaña, deberán:

... b) Conservar en su poder, durante el tiempo exigido por la normatividad aplicable en materia de archivos, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de otras leyes, la grabación en video de la conversación por medio de la cual se explicó a la niña, niño o adolescente el alcance, contenido, temporalidad y medio de difusión, así como el original del medio por el que se documentó la opinión informada de la persona menor de edad, sobre su participación en la propaganda político-electoral, mensajes electorales, o su presencia en actos políticos, actos de precampaña o campaña conforme al manual y las guías metodológicas referidas en el Lineamiento 9. ... (Sic)

Del análisis de la fotografía publicada el 14 de febrero del 2024, a las 10:28 p.m. con el título “En el día del Amor y la Amistad, me reuní con gente que ama y respeta a Mazatlán.” como se aprecia en la siguiente liga <https://www.facebook.com/photo/?fbid=383024711152737&set=pcb.383024821152726> en la cuenta “POLÍTICA VERIFICADA”, de la red social Facebook del C.

Guillermo Romero Rodríguez, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, de la cual se observa difundió varias imágenes de niños, niñas y adolescentes, ello para promocionar su campaña política y posicionar su imagen ante los electores, vulnera el derecho a la intimidad de los infantes que aparecen en su promoción electoral, y se presume puede devenir en un riesgo potencial, por lo cual se debió cumplir con la obligación señalada en el numeral 14, con título "Presentación del consentimiento y opinión ante el Instituto", del Lineamiento para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes en Materia Político-Electoral, es decir el precandidato tiene obligación de conservar en su poder, durante el tiempo exigido por la normatividad aplicable en materia de archivos, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de otras leyes, la grabación en video de la conversación por medio de la cual se explicó a la niña, niño o adolescente el alcance, contenido, temporalidad y medio de difusión, así como el original del medio por el que se documentó la opinión informada de la persona menor de edad, sobre su participación en la propaganda político-electoral, mensajes electorales, o su presencia en actos políticos, actos de precampaña o campaña conforme al manual y las guías metodológicas referidas en el Lineamiento 9, hecho contrario la autoridad estará obligada a salvaguardar la integridad, de los menores, así como a determinar las sanciones pertinentes al entonces precandidato y a la brevedad tomar las medidas cautelares pertinentes.

Es importante señalar que la fotografía publicada el 14 de febrero del 2024, a las 10:28 p.m. con el título "En el día del Amor y la Amistad, me reuní con gente que ama y respeta a Mazatlán." como se aprecia en la siguiente liga <https://www.facebook.com/photo/?fbid=383024711152737&set=pcb.383024821152726> en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del **C. Guillermo Romero Rodríguez**, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, en la cual también se identifican de forma directa niños, niñas y adolescentes, se presume no cumple el entonces precandidato **Guillermo Romero Rodríguez**, ni los Partidos Políticos PAN, PRI, PAS Y PRD con la obligación de llevar a cabo el difuminado del rostro de los menores, con lo anterior se encuentra aprovechándose de los indefensos menores, actuando con alevosía menoscabando los derechos político electorales y humanos de los niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo a lo señalado en el Anexo 3. emitido por el Instituto Nacional Electoral, de nombre "Instructivo para realizar la conversación y recabar la opinión informada de las niñas, niños y adolescentes en base en las guías metodológicas anexas", redactado con objeto de proporcionar una guía para realizar las conversaciones con niñas, niños y adolescentes, la cual les brinde la información oportuna, necesaria y suficiente a fin de que entiendan el alcance y los riesgos de su participación en propaganda político-electoral, mensajes electorales, o en actos políticos, actos de precampaña o campaña, así como sobre exhibición de su imagen, voz o cualquier dato que los identifique a través de cualquier medio de difusión, mismo, que pretende que en la información que se les proporciona a niñas, niños o adolescentes se les indique en qué medios y durante cuánto tiempo se va a difundir su imagen y de qué forma será su participación (activa o pasiva), por quién podría ser visto (familia, amigos y gente que no conoce) y los riesgos que implica ello, buscando establecer el mecanismo para garantizar que la opinión que se recabe sea expresa, propia, individual, libre, informada y espontánea, además de que sea acorde a la edad, desarrollo cognitivo y madurez de la persona menor de edad, evidenciado con la fotografía subida el 14 de febrero del 2024, a las 10:28 p.m. con el título "En el día del Amor y la Amistad, me reuní con gente que ama y respeta a Mazatlán." como se aprecia en la siguiente liga <https://www.facebook.com/photo/?fbid=383024711152737&set=pcb.383024821152726> en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del **C. Guillermo Romero Rodríguez**, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, en la cual se identifican de forma directa niños, niñas y adolescentes, el denunciado tiene y tuvo la obligación de cumplir cabalmente dicha metodología, con el objetivo claro de brindar la información oportuna, necesaria y

suficiente a fin de que entiendan el alcance y los riesgos de su participación en propaganda político-electoral, mensajes electorales, o en actos políticos, actos de precampaña o campaña, así como de darle certeza y seguridad jurídica a los niños, niñas y adolescentes.

El Anexo 2. con título "Manual para recabar la opinión y el consentimiento informado de niñas, niños y adolescentes para la utilización de su imagen, voz o cualquier dato que los haga identificables en propaganda político-electoral y mensajes electorales, actos políticos, de precampaña o campaña a través de cualquier medio de difusión", señala en su punto IV, inciso a), para las Niñas y niños de 6 a 11 años, la obligación de recabar la opinión y el consentimiento informado de niñas, niños y adolescentes para la utilización de su imagen, voz o cualquier dato que los haga identificables en propaganda político-electoral y mensajes electorales, actos políticos, de precampaña o campaña a través de cualquier medio de difusión, antes de la elaboración o producción de la propaganda político-electoral o mensajes electorales, o previo a la participación en un acto de precampaña o campaña, así como un consentimiento informado durante la elaboración de videos o cualquier tipo de propaganda o mensaje electoral (previo a la difusión) y después de la difusión; o durante la celebración de actos políticos, de precampaña o campaña y su aparición en redes sociales o cualquier plataforma digital tales como Twitter, "X", YouTube, Facebook, y notas emitidas por periódicos digitales, o por influencers, que posicionan o apoyen al candidato.

Concatenado a lo anterior en el punto IV, inciso b), el cual señala que las niñas, niños y adolescentes, antes de la elaboración o producción de la propaganda político-electoral o mensajes electorales, o previo a la participación en un acto de precampaña o campaña. Consentimiento informado durante la elaboración de videos o cualquier tipo de propaganda o mensaje electoral (previo a la difusión) y después de la difusión; o durante la celebración de actos políticos, de precampaña o campaña y su aparición en redes sociales o cualquier plataforma digital, considerando que el denunciado no cumplió con los requisitos mínimos necesarios establecidos en la Ley para utilizar la imagen de los menores de edad; aunado a que, a no existe motivo, causa o fin lícito y legítimo para la aparición de éste en la fotografía subida en fecha 14 de febrero del 2024, a las 10:28 p.m. con el título "En el día del Amor y la Amistad, me reuní con gente que ama y respeta a Mazatlán." como se aprecia en la siguiente liga <https://www.facebook.com/photo/?fbid=383024711152737&set=pcb.383024821152726> en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del **C. Guillermo Romero Rodríguez**, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal.

Así mismo, la resolución número **SUP-REP-170/2018** y **SUP-REP-5/2019**. Tesis XXIX/2018 PROPAGANDA POLÍTICA ELECTORAL. CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTOS DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN. señala lo siguiente;

... III. La protección reforzada del derecho a la propia imagen de menores de edad Los menores de edad, como cualquier persona, gozan del derecho a la propia imagen, como un derivado del derecho a la privacidad y, en dicho sentido, tienen la protección de dicho derecho fundamental frente a intromisiones indebidas. Esto ha sido reconocido no sólo por los tribunales nacionales, sino por diversos organismos internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño, firmada en 1989, establece que (Artículo 16): 1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. 2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef), en el documento de debate sobre los derechos de los niños en el mundo digital,¹⁷ señala que, a pesar de que el derecho a la intimidad de los menores y las personas adultas tiene la misma protección, es evidente que, considerando los demás derechos, el mejor interés y capacidades en evolución de los menores, es necesario un enfoque diferenciado de la protección del derecho a la intimidad de los menores En dicho sentido, en la Observación General No. 14 del Comité de los Derechos del Niño (CRC/C/GC/14), se explica que el "interés superior del niño" es un concepto triple que involucra un derecho sustantivo, un principio interpretativo y

una norma de procedimiento. Como principio interpretativo, este concepto implica que "si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño". Como norma de procedimiento implica que "siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados" (párr. 6). En el caso de que los derechos de otras personas entren en conflicto con el interés superior del niño y no sea posible armonizarlos, el referido Comité resalta que las autoridades "habrán de analizar y sopesar los derechos de todos los interesados, teniendo en cuenta que el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial significa que los intereses del niño tienen máxima prioridad y no son una de tantas consideraciones". El principio del interés superior de la niñez está también reconocido en el artículo 4, párrafo 9, de la Constitución Federal. En cuanto a la protección de la imagen de los menores, en el contexto español, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de España considera que "siempre que no medie el consentimiento de los padres o representantes legales de los menores con la ausencia del Ministerio Fiscal, la difusión de cualquier imagen de éstos ha de ser reputada contraria al ordenamiento jurídico" (Recurso 2895/2013). En dicho caso, el Tribunal determinó que publicar la fotografía de un menor en una revista gratuita sin el permiso de sus padres, vulnera su derecho a la imagen, a pesar de que la fotografía fue capturada por el tío del niño. Enfatizó que la violación se actualiza "por la inclusión de la imagen del menor en una revista con independencia de los fines perseguidos por su publicación o de que pudiera o no afectar a la reputación del afectado" y que lo decisivo es "la entrega de esta fotografía de un codemandado a otro sin que se acredite la existencia del consentimiento necesario para su publicación". Los derechos tutelados en el artículo 6 constitucional, no son exclusivamente oponibles a los partidos políticos, sino también a los particulares, por lo que es posible concluir que la propaganda y mensajes de contenido político o electoral que difundan las personas físicas y morales en la temporalidad referida por el numeral 24724 de la ley electoral, también deben ajustarse a la norma constitucional citada, siendo posible que en el caso de que no sea así, el sujeto emisor de la misma, pueda ser sancionado. • La Sala Especializada consideró necesario, a manera de acción preventiva, establecer un llamamiento respecto de aquellas personas físicas y morales vinculadas con cualquier fuerza política que elaboren o difundan por cualquier medio de comunicación legalmente previsto para hacerlo, cualquier tipo de propaganda política o electoral que, en determinado momento pudieran emitir en ejercicio de su libertad de expresión y participación política ya sea a favor o en contra de algún partido político, precandidato/a, candidato/a, aspirante, candidato/a independiente, coalición, dentro o fuera de un proceso electoral federal o local, para que tengan especial cuidado al utilizar cualquier elemento audiovisual que pudiera colocar en riesgo el interés superior de la niñez, ya que siempre debe tenerse presente que los derechos humanos de la niñez requieren de mayor respeto, protección y cuidado reforzado por parte de cualquier persona y no sólo de las autoridades. ... (Sic)

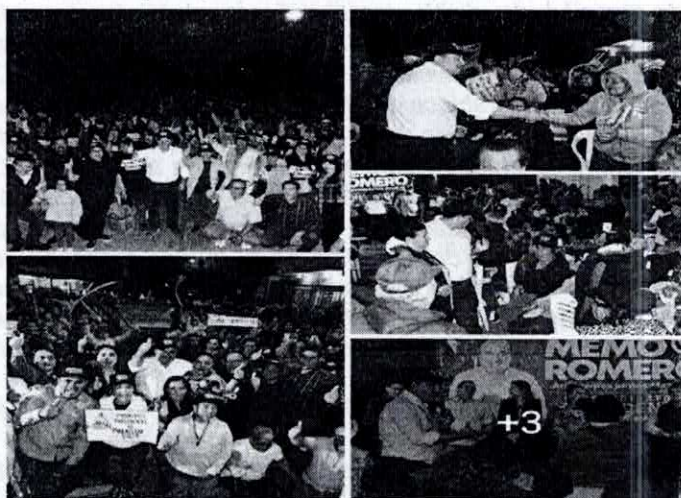
<https://www.facebook.com/photo/?fbid=383024711152737&set=pcb.383024821152726>



Memo Romero

14 feb ·

En el Día del Amor y la Amistad, me reuní con gente que ama y respeta a Mazatlán.... Ver más





Memo Romero

14 FEB A LAS 10:28 P. M.

Hechos que evidentemente vulnera el derecho a la intimidad, violenta su imagen, honra o reputación presente en su ambiente escolar o social y en su futuro, pues al llegar a la edad adulta puede no aprobar la ideología política con la que sus tutores, o aprovechada mente el precandidato lo vinculó durante su infancia, violando así, la normatividad local, federal y la convencionalidad que protege los derechos de los infantes que aparecen en su promoción electoral, sin cumplir con la normatividad electoral y los derechos humanos, constituyendo violaciones al proceso electoral, así como a la neutralidad, equidad e imparcialidad de la contienda a favor del precandidato conocido como Guillermo Romero Rodríguez.

Por su parte La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa establece lo siguiente:

... Artículo 11 Bis. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

...XVII. Derecho a la intimidad; ...

Artículo 66. *Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales.*

No podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquella que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación.

Quienes ejerzan su patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán orientar, supervisar, y en su caso, restringir sus conductas y hábitos sin que esto se considere injerencia, siempre que atiendan al interés superior de la niñez.

Artículo 67. *Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación locales, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez.*

Artículo 67 Bis. *Cualquier medio de comunicación que difunda entrevistas a niñas, niños y adolescentes, procederá como sigue:*

I. Deberá recabar el consentimiento por escrito o cualquier otro medio, de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente, respectivamente, conforme a lo señalado en el artículo anterior y a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 66 de la presente Ley; y,

II. La persona que realice la entrevista será respetuosa y no podrá mostrar actitudes ni emitir comentarios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

En el caso de que no sea posible recabar el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de un adolescente, éste podrá otorgarlo siempre que ello no implique una afectación a su derecho a la privacidad por el menoscabo a su honra o reputación.

(Adic. Según Decreto No. 434, publicado en el P.O. No. 063, del 24 de mayo de 2023).

Artículo 67 Bis 1. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la protección de la identidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes que sean víctimas, ofendidos, testigos o que estén relacionados de cualquier manera en la comisión de un delito, a fin de evitar su identificación pública.

La misma protección se otorgará a adolescentes a quienes se les atribuya la realización o participación en un delito, conforme a la legislación aplicable en la materia.

(Adic. Según Decreto No. 434, publicado en el P.O. No. 063, del 24 de mayo de 2023).

Artículo 67 Bis 2. Los medios de comunicación deberán asegurarse que las imágenes, voz o datos a difundir, no pongan en peligro, de forma individual o colectiva, la vida, integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes, aun cuando se modifiquen, se difuminen o no se especifiquen sus identidades, y evitarán la difusión de imágenes o noticias que propicien o sean tendientes a su discriminación, criminalización o estigmatización, en contravención a las disposiciones aplicables.

En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente artículo, niñas, niños o adolescentes afectados, por conducto de su representante legal o, en su caso, de la Procuraduría de Protección, actuando de oficio o en representación sustituta, podrá promover las acciones civiles de reparación del daño e iniciar los procedimientos por la responsabilidad administrativa a que haya lugar; así como dar seguimiento a los procedimientos hasta su conclusión. Niñas, niños o adolescentes afectados, considerando su edad, grado de desarrollo cognoscitivo y madurez, solicitarán la intervención de la Procuraduría de Protección.

Séptimo. Que el 17 de febrero del 2024, a las 7:21 pm con el título "Gracias!, El entusiasmo me gana, más de 10 mil Mazatlecos nos reunimos para el cierre de precampaña que es uno de los primeros pasos para construir un mejor Mazatlán", como se aprecia en la siguiente liga <https://www.facebook.com/photo/?fbid=384738334314708&set=pcb.384738434314698> en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del **C. Guillermo Romero Rodríguez**, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, es importante señalar que en primer término se debe considerarse propaganda electoral, así como un acto político por cumplir con los requisitos para el efecto, y de lo acontecido el precandidato difundió varias imágenes de niños, niñas y adolescentes, ello para promocionar su campaña política y posicionar su imagen ante los electores, lo cual vulnera el derecho a la intimidad de los infantes que aparecen en su promoción electoral, y se presume puede devenir en un riesgo potencial, en relación con la imagen, honra o reputación presente en su ambiente escolar o social y en su futuro, pues en la edad adulta al decidir sobre su ideología política puede no aprobar con la que fue relacionado desde la infancia, en consecuencia a lo anterior el precandidato **Guillermo Romero Rodríguez, así como los partidos políticos PAN, PRI, PAS Y PRD**, no protegen el interés superior del menor pues anteponen la auto determinación arbitraria del candidato y los partidos en el contenido de sus promocionales, publicados en diversos medios, sin cumplir con la normatividad electoral, señalada en el Lineamiento para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, emitido el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo General, mediante Acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales, en acatamiento a la sentencia SUP-REP60/2016 de la Sala Superior, y SRE-PSC-102/2016 de la Sala Regional

Especializada, ambas salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación" (en adelante Lineamientos), identificado con la clave INE/CG20/2017.

En los cuales se señalan las formas de aparición y participación de niñas, niños o adolescentes, siendo de manera directa en propaganda político electoral y mensajes electorales; y directa o incidental en actos políticos, actos de precampaña o campaña. En un acto político, un acto precampaña o campaña, la aparición es incidental, siempre y cuando las niñas, niños o adolescentes sean exhibidos de manera involuntaria y sin el propósito de que formen parte de éstos, por ser situaciones no planeadas o controladas por los sujetos obligados.

Así mismo se observa de la fotografía publicada en fecha 17 de febrero del 2024, a las 7:21 pm con el título "Gracias!, El entusiasmo me gana, más de 10 mil Mazatlecos nos reunimos para el cierre de precampaña que es uno de los primeros pasos para construir un mejor Mazatlán", , como se aprecia en la siguiente liga <https://www.facebook.com/photo/?fbid=384738334314708&set=pcb.384738434314698> en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del **C. Guillermo Romero Rodríguez**, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, mediante la cual se difundieron varias imágenes de niñas, niños o adolescentes, donde se tienen una participación **DIRECTA, lo anterior** en un acto político electoral, pues de la imagen en un análisis exhaustivo se observa a los menores, manifestando un apoyo directo al hacer gestos de manera corporal, acreditando entonces su participación activa y directa, con objeto de promocionar la campaña política del precandidato, y posicionar su imagen ante los electores, lo cual vulnera el derecho a la intimidad de los infantes así como su imagen, honra o reputación, presente en su ambiente escolar o social y en su futuro, pues a la edad adulta puede NO APROBAR la ideología política con la que fue identificado en su infancia.

La aplicación convencional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala que la aparición de menores de edad en propaganda política o electoral implica un riesgo potencial de ASOCIAR a los menores con una determinada preferencia política o ideológica.

Es de importancia señalar que la protección del interés superior del menor se antepone a la libertad de los partidos de autodeterminar el contenido de sus promocionales.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala que se debe partir de una concepción de niños, niñas y adolescentes como titulares activos de derechos y no solamente como sujetos de protección, bajo el derecho del infante a la preservación de su imagen, considerando que una exposición inadecuada puede fomentar estereotipos o una situación de riesgo para el menor, garantizando con una correcta aplicación de la norma, no ser objeto de injerencias en su vida privada, familia, domicilio, y correspondencia, así como no ser atacado en su honor y reputación.

En todas las decisiones y actuaciones el Estado velará y cumplirá con el principio del Interés superior de la Niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Es decir, los niños, las niñas y adolescentes tienen derecho a que, antes de que se tome cualquier medida que pueda influir sobre estos se evalúen y ponderen las posibles repercusiones, a fin de decidir por la que promueva y proteja sus derechos, considerando que **la propia imagen de los menores de edad, goza de protección, por lo que su exhibición implica un riesgo potencial**, así mismo la propaganda política o electoral es un riesgo potencial porque siempre hay un elemento ideológico o preferencia política.

Concatenado a lo anterior, la resolución número **SRE-PSC-121/2015** tituló **USO INDEBIDO DE LA PAUTA POR LA DIFUSIÓN PROPAGANDA ELECTORAL QUE AFECTA AL INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES**. señala lo siguiente;

electoral pautado por ese mismo instituto político. El promovente alude a la supuesta vulneración a los derechos de los menores que aparecen en el promocional denominado Quien pompo 2, en torno a la utilización de su imagen y la protección de sus datos personales, e invoca y transcribe el contenido del artículo 4, párrafo noveno¹⁰¹, de la Constitución Federal, en el cual se prescribe la obligación del Estado de velar por el interés superior de la niñez y garantizar de manera plena los derechos de los menores.

Al respecto, se tiene en cuenta que el contenido de la propaganda difundida por los partidos políticos se encuentra amparada por la libertad de expresión, en relación a la cual, el Tribunal Electoral ha sostenido en reiteradas ocasiones que debe ser objeto de maximización en el contexto del debate político, a efecto de que se aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática.¹⁰²

No obstante, el ejercicio de dicha libertad fundamental no es absoluto, sino que tiene límites, entre los que se encuentran, los vinculados con la dignidad o la reputación de las personas y los derechos de terceros, acorde con lo dispuesto en los artículos 6º, párrafo primero de la Constitución Federal¹⁰³, así como 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles¹⁰⁴ y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos¹⁰⁵.

En tal virtud, la acotación en torno a los aspectos que no deben perturbarse con las expresiones de ideas, se traduce en una obligación de abstenerse de incurrir en tales conductas a efecto de salvaguardar los bienes jurídicos ahí protegidos, como lo es, el pleno respeto a los derechos de terceros, incluyendo, por supuesto los derechos de los menores, cuya protección se encuentra expresamente ordenada en el artículo 4º de nuestra Constitución Federal.

Por tanto, la comisión de alguna conducta que provoca la inobservancia de tal obligación, implica por sí misma un aspecto que atenta contra el propio orden constitucional y, en el caso de la materia electoral, constituye una vulneración específica en cuanto al uso del tiempo pautado por el INE para la difusión de la propaganda electoral, en términos de lo dispuesto en el artículo 247, párrafo 1, de la Ley Electoral.

Así, la Sala Superior¹⁰⁶ ha señalado que en el derecho administrativo sancionador electoral el "tipo" infractor se constituye con los elementos siguientes:

- (i) Una norma que contenga una obligación o una prohibición a cargo de algún sujeto.
- (ii) Otra norma con una prevención general, relativa a que, si alguien inobserva la ley (ya sea por incumplir alguna obligación o por violar una disposición), se impondrán sanciones.
- (iii) Un catálogo general de sanciones aplicables cuando se inobserve la normativa.

Luego, en el caso de la normativa sobre la cual se afirma su incumplimiento, los elementos que constituyen el tipo administrativo electoral que nos ocupa, se obtienen de los referidos artículos 4 y 6, párrafo primero de la Constitución Federal en torno a que en la difusión de las ideas se atienda a la obligación de respetar los derechos de terceros y, en específico, los derechos de los menores; ello, en relación con el artículo 247, párrafo 1, de la Ley Electoral, referente al mandato específico de que en el uso de las pautas asignadas para la difusión de propaganda electoral se acaten los lineamientos constitucionales.

Lo anterior, se relaciona con lo dispuesto en los diversos 25, párrafo 1, incisos a) y u), de la Ley de Partidos Políticos y 443, párrafo 1, incisos a) y n) de la Ley Electoral, en los que se establece la prevención general concerniente a la inobservancia de las disposiciones establecidas en la normativa electoral.

Y finalmente, el catálogo de sanciones aplicables se encuentra previsto en el artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la Ley Electoral, toda vez que el sujeto denunciado en el presente caso, resulta ser un partido político.

En tales condiciones, el tipo administrativo electoral antes referido se actualiza cuando en el uso de las pautas asignadas por el INE se difundan mensajes que puedan afectar derechos de terceros, y que en el caso, resultan ser menores de

edad, a quienes debe garantizárseles sus derechos en el marco de su interés superior.

Al respecto, se tiene en cuenta el concepto de "interés superior del niño", el cual ha sido descrito por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al destacar que "implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño".^[13]

Así, el Estado Mexicano, a través de sus instituciones, autoridades y tribunales, está constreñido a tener en consideración primordial el respeto al interés superior del menor, a través de la adopción de las medidas necesarias para asegurar y maximizar la protección y efectividad de los derechos de los niños, acorde con lo establecido en los artículos 3, párrafo 1 y 4,^[14] de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En esa tesitura, acorde con el "Protocolo de actuación de quienes imparten justicia en caso que involucren niñas, niños y adolescentes" emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el interés superior del niño tiene las siguientes implicaciones:

- a) coloca en plena satisfacción de los derechos del niño como parámetro y fin en sí mismo;
- b) define la obligación del Estado respecto del niño, y
- c) orienta decisiones que protegen los derechos del niño.

Por ello, la Primera Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la mera situación de riesgo de los menores es suficiente para que se estime que se afectan los derechos de los niños y, ante ello, deben adoptarse las medidas que resulten más benéficas para la protección de los infantes.^[15]

Pues bien, en el caso que nos ocupa, la supuesta vulneración al interés superior del menor se desarrolla a través de la exposición de la imagen de diversos niños que participan en el promocional denunciado, de ahí que, la afectación concreta a analizar se refiera al derecho a la propia imagen de los menores participantes.

Para tal efecto, se parte de la base relativa a que el derecho a la propia imagen de los menores goza de una protección especial, de ahí que para el otorgamiento de la salvaguarda judicial es suficiente que los menores se ubiquen en una situación de riesgo potencial, sin que sea necesario que esté plenamente acreditado el perjuicio ocasionado, pues, en congruencia con el interés superior de los niños, debe operar una modalidad del principio in dubio pro infante, a fin de dar prevalencia al derecho de los menores, por encima del ejercicio de la libertad de expresión, con el objeto de que se garanticen los derechos de los niños, por encima de cualquier duda que se presente en los casos que se analicen.

En similares términos el Tribunal Constitucional de España ha establecido que "en los casos en que se analice la captación y difusión de fotografías de niños en medios de comunicación social, [...] es preciso tener en cuenta, que el ordenamiento jurídico establece una protección especial, en aras a proteger el interés superior del menor".^[16]

Asimismo, señala el mismo Tribunal Constitucional Español que el derecho a la propia imagen "se configura como un derecho de la personalidad, que atribuye a su titular la facultad de disponer de la representación de su aspecto físico que permita su identificación, lo que conlleva tanto el derecho a determinar la información gráfica generada por los rasgos físicos que le hagan reconocible que puede ser captada o tener difusión pública, como el derecho a impedir la obtención, reproducción o publicación de su propia imagen por un tercero no autorizado".^[17]

Así, en el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño^[18], se establece que ningún niño puede ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, ni ataques ilegales a su honra y reputación y, por su parte, en los artículos 76 y 77 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes^[19] se contempla igualmente la salvaguarda de los menores ante cualquier riesgo de afectación o manejo directo de su imagen, nombre, datos o referencias que permitan su identificación.

Pues bien, en el caso de la propaganda política o electoral hay siempre presente un elemento ideológico que identifica a la opción política que la presenta, por tanto,

en principio, la utilización de menores en la misma implica un riesgo potencial de asociar a tales infantes con una determinada preferencia política e ideológica.

Lo anterior puede devenir en un riesgo potencial en relación con su imagen, honra o reputación presente en su ambiente escolar o social y, por supuesto, en su futuro, pues al llegar a la vida adulta pueden no aprobar la ideología política con la cual fueron identificados en su infancia.

En ese sentido, acorde con la disposiciones internacionales y nacionales antes descritas, esta Sala Especializada se encuentra obligada a determinar la implementación de todas aquellas medidas que sirvan para evitar que se presenten tales situaciones de riesgo potencial que puedan afectar el interés superior del menor en relación con los promocionales de contenido político electoral.

Así, en una primera actuación, necesaria para garantizar que no se presenta alguna situación de riesgo, es criterio de esta Sala, que la autoridad que analice en algún momento, un promocional político en que participen menores, deberá contar con la plena certeza de que se respetó el elemento relativo al consentimiento parental o, en su caso, de los tutores, en torno a su participación en la propaganda electoral, toda vez de lo dispuesto por los artículos 424 y 425 del Código Civil Federal y sus correlativos de los códigos civiles de la República Mexicana.

Igualmente, tal autoridad deberá garantizar el derecho que tienen los infantes de ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, en términos de lo dispuesto en el artículo 71^º de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Al efecto, y como elementos instrumentales de tales derechos, directamente relacionados con el interés superior del menor, la autoridad que analice la validez de promocionales de contenido político electoral deberá verificar lo siguiente:

i. Consentimiento por escrito debidamente firmado por el padre y la madre o por quien(es) ejerza(n) efectivamente la patria potestad o tutela del menor.

Tal documento se acompañara de copia certificada del acta de nacimiento, o bien, constancia de pérdida de patria potestad o acta de defunción del padre o madre que no firme (para el caso de que se otorgue solo por uno de los padres o tutores).

ii. Manifestación del menor por cuanto hace a su opinión libre y expresa respecto de su participación en el promocional electoral en cuestión. Tal opinión será valorada atendiendo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

iii. El consentimiento parental o, en su caso, de los tutores, y la manifestación de la opinión del menor deberá ser ratificado ante la Oficialía Electoral del INE o fedatario público, a fin de que se haga constar el otorgamiento del mismo en un acto revestido de fe pública. Lo anterior a fin generar certeza y garantizar plenamente el interés superior de los menores.

Asimismo, aunado a contar con la certeza plena en torno al otorgamiento del consentimiento respectivo, acorde con las condiciones antes relatadas, la autoridad que en su momento, analice la validez del promocional político en que participen menores de edad deberá valorar minuciosamente y neutralmente su contenido, a fin de que, tomando en cuenta su edad y madurez, se les garantice entre otras cuestiones: pleno respeto a su imagen, honra, nombre o datos personales, evitando en todo caso situaciones de riesgo, que de manera actual o al menos potencial, pudieran correr en su entorno social o educativo por su participación en tal promocional electoral.

Además, tal autoridad, ya sea administrativa o judicial, deberá allegarse de los elementos necesarios para analizar y justificar de manera razonable el motivo y necesidad sustantiva para la participación de los menores en mensajes de propaganda política electoral. Tal cuestión deberá ser ponderada en cada caso, en relación con el interés superior del menor y garantizando objetivamente el pleno respeto a su desarrollo físico, psíquico y emocional.

Ahora bien, en la especie, no se tiene plena certeza en relación a que efectivamente se haya otorgado el consentimiento necesario para la participación de los menores en el promocional denominado Quien pompo 2.

El PAN allegó documentación con la intención de acreditar que efectivamente se recabó la autorización de los padres o tutores, para la participación de los menores en el promocional denunciado, sin embargo, se trata de elementos que no cumplen

con las características y formalidades legales razonables para acreditar lo que pretenden

Esto es, en el promocional denunciado se aprecia a simple vista que en el desarrollo del mismo participaron cuando menos veintiún niños y, a pesar de ello, el PAN solamente allegó nueve "cartas de autorización",⁽¹⁹⁾ aunque la Unidad Técnica le requirió la documentación que acreditara el otorgamiento del consentimiento de parte de quienes ejercen la patria potestad o tutela de quienes aparecen en el promocional.

En tales condiciones, no se cuenta con elementos que sirvan para acreditar el otorgamiento del consentimiento en torno a cuando menos doce menores que participaron en la propaganda denunciada, lo cual, es suficiente para estimar que se vulneró al menos potencialmente, el derecho a la propia imagen de tales menores, al no contar con la autorización relativa a su aparición en el promocional.

Además, el contenido mismo de tales cartas carece de las formalidades necesarias para dotar de plena certeza el acto de autorización que ahí se pretende hacer constar, de hecho, en tres de ellas⁽²⁰⁾ ni siquiera se asienta el nombre del padre o la madre quienes firmaron tal documento.

Por otra parte, en la totalidad de las cartas aportadas, consta solamente la firma de uno de los padres y no de ambos, sin que se haga precisión respecto a la razón de la ausencia del otro padre o madre; ni se acompaña documentación que acredite el parentesco de quien firma en representación de los menores.

En ese sentido, no hay certeza de que quien firmó efectivamente sea el padre o la madre del menor, en ejercicio efectivo de su patria potestad.

Finalmente, no obra en autos documento alguno que evidencie que se tomó en cuenta la opinión libre y expresa del menor.

Así las cosas, esta Sala Especializada determina que no se implementaron las medidas necesarias para garantizar que los padres o tutores de los menores otorgaran su consentimiento para la aparición de los mismos en el promocional electoral denunciado, de ahí que se estime que se vulneró el interés superior del menor y, por ende, se actualiza la infracción que se denuncia, sin que sea necesario analizar el contenido del mismo.

Luego entonces, al haberse acreditado la infracción relativa al uso indebido de la pauta por la difusión de propaganda electoral que vulnera el interés superior del menor, se vincula al Instituto Nacional Electoral para que adopte las medidas necesarias a fin de que no se difunda el promocional denominado Quien pompo 2 (RV00738-15) bajo ningún tipo de pauta, ni federal ni local, atendiendo a que el mismo ha sido determinado ilegal en esta resolución y con la finalidad de evitar que se genere alguna situación que pueda poner en riesgo a los menores que aparecen en el mismo.

Asimismo, cabe indicar que es criterio de esta autoridad judicial que en el caso de los asuntos en que se aborde una posible afectación al interés superior del menor, corresponde a la persona que realiza la exposición de los niños acreditar que efectivamente actuó salvaguardando la integridad y las prerrogativas de los mismos, pues de lo contrario, se desnaturalizaría por completo la obligación de las autoridades de velar por el pleno respeto a los derechos de los niños, en tanto que actuaría una suerte de presunción de legalidad en torno a potenciales situaciones de riesgo para los menores, en vez de que se optara por emprender acciones que sirvan para tener la plena certeza respecto a la protección de los mismos.

En ese sentido, y considerando que el PAN en la contestación al requerimiento de fecha doce de mayo, indicó que no había contratado a empresa alguna para la participación de los menores en el promocional referido, se evidencia que es el único responsable por su participación sin el debido consentimiento parental o, en su caso, de los tutores, en el promocional político.

De la misma manera la resolución **TESIN-PSE-39-2021**, emitida por el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, declara la existencia de la infracción por incurrir en actos violatorios a los Lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños, y adolescentes en materia político-electoral por parte de Fernando Pucheta Sánchez, candidato a la presidencia municipal de Mazatlán, mismo que señala lo siguiente:

En el perfil de la red social Facebook del denuncia, los días 14 de marzo, 09, 10, 14, 15, 19, y 21 de abril, 06, 07, 17, y 28 de mayo, publica y difunde varias imágenes de niños, niñas y adolescentes, ello para promocionar su campaña política y posicionar su imagen ante los electores, lo cual a su decir, vulnera el derecho a la intimidad de los infantes que aparece en su promoción electoral, sin cumplir con la normativa electoral ya que divulga el rostro de niños y niñas sin tener el consentimiento de las personas que ejercen sobre ellos la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente en función de la edad y madurez, sin que se advierta que el denunciado haya difuminado el rostro de los menores.

Marco normativo. Interés superior de la niñez. -

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 19, establece que toda niña, niño y adolescente, tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del estado.

Por su parte la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña en su artículo 3, establece que en todas las medidas que los involucren se deberá atender como consideración primordial el interés superior de la niñez.

sobre lo anterior, el comité de los derechos del niño y de la niña de la organización de las naciones unidas, en su observación general 14 del 2013, sostuvo que el concepto del interés superior de la niñez, implica tres vertientes;

Derecho sustantivo: Consistente en el derecho de la niñez a que su interés superior sea valorado y tomado como de fundamental protección cuando diversos intereses estén involucrados, con el objeto de alcanzar una decisión sobre la cuestión a resolver.

Un principio fundamental de interpretación legal: cuando se esté ante una previsión legal abierta, a más de una interpretación, se debe optar por aquella que ofrezca una protección más efectiva al interés superior de la niñez.

una regla procesal: cuando exista una decisión que pudiera afectar a la niñez o adolescencia, específicamente o en general a un grupo identificable o no identificable, en el proceso para la toma de la misma, se debe incluir una evaluación del posible impacto, ya sea negativo o positivo, de la decisión sobre la persona menor de edad involucrada.

Así mismo se ha señalado que el concepto de interés superior de la niñez no es nuevo, sino que ya se consagraba en la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, y en la convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, por lo que se toma como un concepto dinámico que debe evaluarse adecuadamente en cada concepto., cuyo objetivo debe ser el garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos para él o la menor.

Por su parte el artículo cuarto de nuestra Constitución General, en su noveno párrafo establece que el Estado en todas su decisiones y actuaciones velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando así de manera plena sus derechos.

Así mismo, en la ley general de las niñas, niños y adolescentes, en sus artículos segundo y dieciocho se establece que el interés superior de la niñez, deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucren niñas, niños y adolescentes.

Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en la jurisprudencia de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO", que, para la determinación en concreto del interés superior de la niñez, se debe atender a sus deseos, sentimientos, y opiniones, siempre que sean compatibles con sus necesidades vitales.

Aparición de niñas, niños, y adolescentes en la propaganda electoral.

La propaganda electoral difundida por los partidos políticos, se encuentra amparada por la libertad de expresión, que se consagra en el

artículo sexto Constitucional, sin embargo, dicha libertad no es absoluta pues encuentra sus límites en la dignidad, y reputación de las personas y los derechos de las mismas, dentro de las cuales se encuentran las de los niños, niñas y adolescentes.

Por lo expuesto el Instituto Nacional Electoral emitió los Lineamientos para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en materia político-electoral, cuyo objetivo es establecer las directrices para la protección de los citados que aparezcan en la propaganda político-electoral, mensajes electorales y en actos políticos, actos de precampaña o campaña de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas independientes, así como de los mensajes transmitidos por las autoridades electorales, federales y locales, o las personas físicas o morales que se encuentren vinculadas directamente a uno de los sujetos mencionado, atendiendo a su calidad o naturaleza jurídica, por cualquier medio de comunicación y difusión, incluida las redes sociales o cualquier plataforma digital, sea esta transmitida en vivo o videograda, debiendo ajustar los sujetos antes mencionados sus actos de propaganda político-electoral, o mensajes a través de radio o televisión, toda vez que:

- a. pueden aparecer de manera directa e incidental en la propaganda.
- b. Cuando se utilice la imagen, voz o cualquier otro dato que les haga identificable, se deberá proporcionar la máxima información sobre sus derechos, opiniones y riesgos respecto de su aparición en la propaganda político electoral.
- c. Si la aparición es incidental y ante la falta de consentimientos, se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, voz, o cualquier otro dato que le haga identificable, garantizando la máxima protección de su dignidad o derechos.

Es importante mencionar la Jurisprudencia **20/2019** en la que se determina la obligación que CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN; como sea;

PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º y 4º, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 y 14 de los Lineamientos Generales para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de Propaganda y Mensajes Electorales establecidos por el Instituto Nacional Electoral; y en la Jurisprudencia de la Sala Superior 5/2017, de rubro PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CUMPLIRSE CUANDO SE DIFUNDAN IMÁGENES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, se advierte que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. En ese sentido, cuando en la propaganda político-electoral, independientemente si es de manera directa o incidental, aparezcan menores de dieciocho años de edad, el partido político deberá recabar por escrito el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o tutela, y en caso de que no cuente con el mismo, deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que haga identificable a los niños, niñas o adolescentes, a fin de salvaguardar su imagen y, por ende, su derecho a la intimidad.

Aunado a lo anterior, la resolución número **SUP-JE-144/2021**, Sentencia que confirma la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, en el procedimiento especial sancionador, que declaró existente la violación a los requisitos sobre la aparición de menores en propaganda electoral, atribuida a Fernando Alejandro Larrazábal Bretón y al Partido Acción Nacional, este último promovente del juicio electoral. señala lo siguiente;

La imagen de una niña, niño o adolescente en fuentes de acceso público es insuficiente para poderla incluir en propaganda electoral a) Marco jurídico La imagen es la reproducción identificable de los rasgos físicos de una persona sobre cualquier soporte material. 9 El derecho a la propia imagen constituye uno de los derechos inherentes de la persona, que le permite disponer de su apariencia; considerado por

la Suprema Corte como un derecho de defensa y garantía esencial para la condición humana, porque puede reclamarse tanto en defensa de la intimidad violada o amenazada como exigir del Estado que prevenga la existencia de eventuales intromisiones que lo lesione.¹⁰ Si bien no es un derecho absoluto tendría que justificarse su intromisión por un interés público, o bien, cuando se cuente con el consentimiento u autorización de la persona.¹¹ Estos límites sobre la captación, reproducción o publicación de la imagen de una persona tratándose de menores de edad exige una protección reforzada debido al interés superior de la niñez. El interés superior de la niñez es un principio constitucional y convencional de interpretación que ante la toma de una decisión que involucre niñas, niños y adolescentes se debe evaluar y ponderar las 9 Véanse artículos 16 y 17 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal. 10 Véase tesis P. LXVII/2009, emitida por el Pleno, de rubro: "DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA." 11 Por ejemplo, la Ley Federal del Derecho de Autor establece como infracción en materia de comercio el utilizar una imagen de una persona sin su autorización o la de sus causahabientes (artículo 231, f.II). SUP-JE-144/2021 10 posibles repercusiones en sus derechos y asegurar una protección plena. 12 Dicho principio exige la prevalencia de los derechos de la infancia frente a cualquier otro interés, por lo que ante un conflicto se debe ponderar por encima de cualquier otro ese derecho infantil. 13 Así, la Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 3 que el niño (a) tiene derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten. 14 De modo que, cualquier medida o decisión pública que pueda afectarlos (a) requiere adoptar medidas reforzadas o gravadas, para protegerlos con una mayor intensidad. 15 12 Véase artículo 4º de la Constitución, en su párrafo noveno, que dice: "En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez." Asimismo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece en su artículo 2 y 3 párrafos: "El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales." 13 Acción de inconstitucionalidad 2/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pfo. 129: "En suma, el ejercicio de los derechos fundamentales de las niñas y los niños se encuentran por encima de cualquier otro interés, incluyendo el de sus padres, pues, al ser la infancia concebida ya como sujeto de derechos, los niños y las niñas pueden ejercerlos en todo momento y las autoridades están no sólo obligadas a garantizar ese ejercicio, sino a velar porque el mismo se cumpla. Cuando se anteponen los derechos de la infancia con los de sus padres, la autoridad tiene obligación de ponderar por encima de cualquier otro, ese derecho infantil." 14 Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 15 Tesis aislada 1a. LXXXIII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL." SUP-JE-144/2021 11 Por eso, las autoridades del Estado deben garantizar y sancionar aquellas intromisiones arbitrarias e ilegales en la intimidad de las niñas, niños y adolescentes, que atenten contra su honra, imagen y reputación. Así, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes considera una violación a su intimidad, cualquier manejo directo de su imagen en los medios de comunicación con una concesión o medios impresos (art. 77). Asimismo, dicha ley considera una vulneración a la intimidad de las y los menores, cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación, bien porque menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o los ponga en riesgo. Ahora bien, el INE emitió los Lineamientos para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes que aparezcan en la propaganda políticoelectoral. Los sujetos obligados a esas directrices son los partidos políticos, coaliciones, candidaturas, autoridades y personas físicas o morales que se encuentren vinculadas. Los Lineamientos obligan a que en cualquier acto, mensaje o medio de difusión de propaganda político-electoral en el que aparezcan niñas, niños o adolescentes ya sea de manera directa o incidental, debe existir el consentimiento de quien o quienes ejerzan la patria potestad o el tutor o, en su caso, la autoridad debe suplirlos. Al igual deben contar con las manifestaciones de los menores sobre su opinión libre e informada respecto a la propaganda en la que participen. En caso

de que no se tenga esa documentación, independientemente si la aparición fue directa o incidental se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que haga SUP-JE-144/2021 12 identificable a los niños, niñas o adolescentes, a fin de salvaguardar su imagen y, por ende, su derecho a la intimidad. 16 También, este órgano jurisdiccional ha señalado que los Lineamientos son aplicables en las imágenes que difundan las candidaturas en redes sociales. 17 b. Valoración de la Sala Superior. El actor se duele de que la responsable omitió pronunciarse respecto a que en el motor de búsqueda "https://tineye.com" se podía observar que al menos hay otras ciento un publicaciones que utilizan la misma imagen genérica de la menor que apareció en las publicaciones del candidato denunciado y que no se podía presumir que el material hubiera sido producido en México o que correspondiera al presente año. Señaló que la plataforma estaba sujeta a las leyes de Israel con uso lícito de la propiedad intelectual. Al respecto, el Tribunal local determinó que los Lineamientos del INE eran aplicables sin importar que la imagen hubiera sido generada en otro país o tuviera un uso comercial, por lo que debían observarse las pautas de consentimiento e información ahí establecidas. Esta Sala Superior considera apegada a Derecho la determinación de la responsable porque el partido político parte de la premisa inexacta de que si las imágenes de menores se alojan en algún sitio público es innecesario demostrar una autorización para su uso en propaganda electoral. Jurisprudencia 20/2019 de rubro: "PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN." Véase tesis XXIX/2019, de rubro: "MENORES DE EDAD. LOS LINEAMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA SU PROTECCIÓN, SON APLICABLES A LAS IMÁGENES QUE DE ELLOS DIFUNDAN LAS CANDIDATURAS EN SUS REDES SOCIALES EN EL CONTEXTO DE ACTOS PROSELITISTAS." SUP-JE-144/2021 La premisa es incorrecta porque: El derecho a la imagen es uno de los derechos esenciales de la persona, que tratándose de menores de edad requiere de un escrutinio más estricto sobre su difusión, reproducción o captura, derivado del interés superior de la niñez y de que son un grupo vulnerable. Por eso, en materia electoral se necesita recabar el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela y la opinión informada de la o el menor, sin que se prevean excepciones al respecto. No puede extenderse un permiso o derecho de autor para disponer de una imagen de un infante o adolescente para usos electorales. En efecto, una autorización o consentimiento de una imagen para uso comercial o para aparecer en cierta página o sitio web no puede considerarse una cláusula abierta y usarse para fines no expresamente señalados. Pues la forma en cómo y dónde te muestras a los demás es un derecho esencial de toda persona derivado de su dignidad humana, que impide una difusión irrestricta de ésta. Más aún si la imagen o fotografía corresponde a menores de edad, el escrutinio es aún más estricto, porque no se puede perder de vista que ellas y ellos precisan de la representación de un adulto y son un grupo vulnerable que requieren una protección reforzada ante una posible afectación a su desarrollo. Por esa razón, en materia electoral rigen los Lineamientos emitidos por el INE que fijan los requerimientos para que puedan aparecer niñas, niños y adolescentes en la propaganda electoral. SUP-JE-144/2021. Los Lineamientos no establecen alguna excepción en su aplicación, incluso son exigibles en aquellos casos de apariciones incidentales de menores en propaganda electoral. Por lo que también en esos casos, los sujetos obligados deben recabar el consentimiento de la madre, padre o tutor, o en su caso, de la autoridad que los supla y de la opinión informada de la o el menor, de lo contrario tendrán que difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, voz o cualquier otro dato que los haga identificables. La circunstancia de que no existan hipótesis de excepción en las que sea innecesario el consentimiento es precisamente porque se trata de menores de edad, a los que se les debe garantizar la máxima protección de la dignidad y sus derechos. Si un partido político no confeccionó o adquirió la imagen no lo releva de la obligación constitucional y convencional de salvaguardar el interés superior de cualquier niña, niño o adolescente que aparezca en su propaganda política electoral. Lo anterior, debido a que los partidos políticos y las personas candidatas son responsables de proteger los derechos de la infancia desde el momento en que deciden insertar tales imágenes en su propaganda. Sin que sea suficiente exhibir un permiso del uso de la imagen porque en todo caso habría que revisar los términos y condiciones en que fue emitido, es decir, que contenga la autorización de quienes representan al menor y, en su caso, un consentimiento informado del menor, pero, sobre todo, que permita su utilización para fines político electorales. De ahí que, deba desestimarse el planteamiento de que por tratarse de una fotografía extraída de una galería digital pública, eran inexigibles los Lineamientos porque esa razón es insuficiente para concluir que la SUP-JE-144/2021 15 imagen, el honor y la intimidad de la menor en cuestión efectivamente se encuentre protegido en ese sitio electrónico. 2. El partido no demostró tener una autorización para el uso electoral de la imagen de la menor. Era deber del partido demostrar que efectivamente tuviera una autorización electoral para poder incluir la imagen de la menor en las publicaciones del candidato. Sin embargo, el actor se limita a sostener que deben existir excepciones en la aplicación de los Lineamientos cuando la persona no está expuesta a riesgos que afecten su

integridad personal. De modo que se trata de afirmaciones genéricas y subjetivas sin sustento probatorio que permita corroborar la licitud y autorización electoral para divulgar la fotografía de la menor, pues el hecho de que ésta se encuentre alojada en un buscador de Internet no equivale a demostrar que sea lícita su aparición. Máxime si se considera que la información, documentos, imágenes que circulan en la Red no necesariamente son lícitos, dado que no hay un control previo sobre el contenido de las plataformas electrónicas. Incluso tratándose de niñas, niños y adolescentes hay muchos riesgos de que sus fotografías, imágenes, videos circulen sin autorización alguna y debido a que no todos pueden reclamar por sí mismos la violación a sus derechos puedan impedir su divulgación. En esos casos se deben adoptar medidas mucho más estrictas sobre imágenes de menores alojadas en redes sociales o en la web. Por tanto, carece de razón el partido al sostener que era suficiente con demostrar que la imagen aparece en un buscador de internet y que ha sido publicada en infinidad de páginas electrónicas, dado que no SUP-JE-144/2021 16 demuestra que su difusión o divulgación sea lícita y, menos, para fines electorales. La imagen denunciada correspondía a una menor con una discapacidad lo que exige una tutela reforzada. En las constancias de autos se aprecia que la menor incluida en las publicaciones del candidato tiene síndrome de Down, que es una alteración genética que puede llevar algún grado de discapacidad intelectual. En ese sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad garantiza que todos los niños y niñas gocen plenamente de los derechos humanos en igualdad de condiciones con los demás niños y que puedan expresar su opinión libremente sobre las cuestiones que les afecten (art.7). También, se debe garantizar su derecho a expresar su opinión y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad. Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en su artículo 56 que tienen derecho a que en todo momento a que se les facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que les permitan obtener información de forma comprensible. Por ello, al estar involucrada una niña con una discapacidad exige que se hubieran respetado los principios de no discriminación, de una protección reforzada y atender a la especial vulnerabilidad en que se encuentran. Garantizando a la niña su derecho a opinar y a recibir información de manera accesible, para poder divulgar su fotografía. Información extraída de: <https://www.un.org/es/observances/down-syndrome-day> SUP-JE-144/2021 17 Sin embargo, dado que nada de eso obra en el expediente de forma alguna puede concluirse que todas estas condiciones ocurrieron para la difusión de su imagen. Por lo que, esta Sala Superior concluye que fue correcta la determinación de la responsable porque el candidato vulneró el interés superior de la niñez lo que actualizó la infracción y, en el caso del partido político hoy actor, le generó una responsabilidad indirecta.

Concatenado a lo anterior, la resolución número **SRE-PSC-039/2017**, Sentencia que resuelve el procedimiento especial sancionador UT/SCG/PE/PRI/CG/39/2017, en la que se determina la existencia del uso indebido de la pauta por parte del Partido Unidad Democrática por Coahuila, de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila; así como la vulneración al interés superior del menor por parte de la citada Coalición, como sea;

Por cuestión de método, en primer lugar, se estudiará, de manera conjunta, el supuesto uso indebido de la pauta por parte de la Coalición y tres de sus cuatro partidos, por supuestamente haber promocionado a la Coalición durante la precampaña y, si la Coalición, indebidamente, difundió promocionales relacionados con el proceso de selección interna del PAN y uno de sus precandidatos, a través de su tiempo en radio y televisión; posteriormente, se abordará lo correspondiente a la supuesta promoción indebida de la Coalición por parte del Partido Unión Democrática de Coahuila; y por último, se examinará lo SRE-PSC-039/2017 18 relacionado con el uso de imágenes de menores de edad en uno de los promocionales de la Coalición. 3.1 Marco Normativo respecto del uso indebido de la pauta. La Constitución Federal en su artículo 41, Base III, Apartados A y B, así como la Ley Electoral en los diversos 159, párrafos 1 y 2, 160, párrafos 1 y 2 y 226, párrafo 5, han establecido que los partidos políticos nacionales tienen derecho al uso permanente de los medios de comunicación social. Asimismo, que el INE es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los fines propios, a los de otras autoridades electorales, así como a los partidos políticos; y, que será también este quien garantizará a los partidos políticos el uso de sus prerrogativas constitucionales en radio y televisión. Además, establecen que los precandidatos tienen prohibido contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempo en cualquier modalidad de radio y televisión. Por otro lado, el artículo 226 de la referida Ley Electoral, en su párrafo cuarto, señala que los partidos políticos harán uso del tiempo en radio y televisión que conforme a Derecho les corresponda, para la difusión de sus procedimientos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular. Asimismo, que los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, accederán a radio y televisión en el tiempo que corresponda a los institutos políticos. En este mismo sentido, el

artículo 168 de la Ley Electoral, dispone que cada partido político podrá decidir libremente la asignación, por tipo de precampaña, de los mensajes que le correspondan, incluyendo su uso para precampañas locales en las entidades federativas. SRE-PSC-039/2017 19 A su vez, el Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral del INE en su artículo 5, párrafo primero, fracción III, inciso i), dispone que por materiales se entiende a los promocionales o mensajes realizados por los partidos políticos, coaliciones o candidatos/as independientes y autoridades electorales, fijados o reproducidos en los medios de almacenamiento y formatos que determine el INE, para su transmisión en términos de lo que dispone la Constitución Federal y la Ley Electoral. Mientras que, en el inciso m), establece que la pauta es el documento técnico en el que se distribuye el tiempo, convertido a número de mensajes, que corresponde a los partidos políticos, coaliciones y candidatos/as independientes, así como a las autoridades electorales en un periodo determinado, precisando la estación de radio o canal de televisión, la hora o rango en que debe transmitirse cada mensaje, y el partido político, coalición, candidato/a independiente o autoridad electoral al que corresponde. El artículo 7 párrafos 1, 3, 4 y 9 del citado Reglamento establece que los partidos políticos y sus candidatos y precandidatos a cargos de elección popular, accederán a mensajes de radio y la televisión, a través del tiempo que la Constitución Federal otorga como prerrogativa en la forma y términos establecidos legalmente; asimismo, que el INE es la única autoridad competente para ordenar la transmisión de propaganda política o electoral en radio o televisión, para el cumplimiento de sus propios fines y de los partidos políticos; y, que la propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas electorales difundan por radio y televisión los partidos políticos, se ajustarán a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6 y el artículo 41, Base III, Apartado A, de la Constitución Federal; así como el artículo 25, fracción I, incisos a) y u), de la Ley de Partidos Políticos y 247, párrafo 1, de la Ley Electoral. SRE-PSC-039/2017 20 El artículo 13, párrafo cuarto, dispone que, si por cualquier causa un partido político no realiza actos de precampaña electoral, los tiempos a que tengan derecho serán utilizados para la difusión de mensajes del partido político de que se trate, en los términos que establezca la ley. Asimismo, el artículo 37, párrafo 1, establece que, en ejercicio de su libertad de expresión, los partidos políticos determinarán el contenido de sus promocionales, por lo que no podrán estar sujetos a censura previa por parte del INE ni de autoridad alguna, sino, en su caso, a ulteriores responsabilidades. Ahora bien, no pasa desapercibido que a nivel local, el artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Coahuila, establece que los partidos políticos tendrán derecho al uso permanente de los medios de comunicación social y que el acceso a radio y televisión durante los procesos electorales se realizará en los términos establecidos en los ordenamientos antes referidos. La Ley General de Partidos Políticos establece que los partidos políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones para las elecciones de Gobernador, diputados a las legislaturas locales de mayoría relativa y ayuntamientos, de conformidad con el artículo 87, numeral 2. De conformidad con el artículo 88, numerales 1, 2, y 3, de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos podrán formar coaliciones totales, parciales y flexibles. Se entiende como coalición total, aquella en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso federal o local, a la totalidad de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral. Tratándose de coaliciones, se estará a lo previsto en los artículos 91, numerales 3, 4 y 5 de la Ley General de Partidos Políticos; 167, numeral 2 de la Ley General de SRE-PSC-039/2017 21 Instituciones y Procedimientos Electorales y 16 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, que establecen que a la coalición total que constituyan los partidos políticos les será otorgada la prerrogativa de acceso a radio y televisión en un treinta por ciento que corresponde distribuir en forma igualitaria, como si se tratara de un solo partido, incluso para efectos de la optimización de promocionales sobrantes. En cambio, para el setenta por ciento restante, deben ser tratados en forma separada. En el supuesto de coaliciones totales, el convenio de coalición establecerá la distribución de dicho tiempo entre los candidatos de la coalición. Asimismo, es aplicable a las coaliciones electorales, cualquiera que sea su ámbito territorial y tipo de elección, en todo tiempo y circunstancia, lo previsto por el artículo 91, numeral 4, de la Ley General de Partidos Políticos. En todo caso los mensajes en radio y televisión que correspondan a candidatos de coalición deberán identificar esa calidad y el partido responsable del mensaje. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el artículo 227 de la Ley General, se entiende por precampaña el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido; y por actos de precampaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado a un cargo de elección popular. El párrafo 3 del citado precepto legal, así como los párrafos 1 y 3 del artículo 211 de dicha ley, estipulan que la propaganda de precampaña es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, y expresiones que durante el periodo establecido por la ley y el que

señale la convocatoria respectiva, difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a SRE-PSC-039/2017 22 conocer sus propuestas, debiendo señalarse de manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de quien es promovido. 3.2. Casos concretos. Como se ha quedado acreditado con antelación, no se tiene constancia de que los Partidos Acción Nacional y Encuentro Social hubieran difundido alguno de los spots denunciados, por lo que atendiendo al principio indubio pro reo, debe absolverse a dichos partidos de las conductas que se les imputa; y por tanto, únicamente se analizará la difusión de los promocionales pautados por el Partido Unidad Democrática por Coahuila y de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila. Sirve como sustento a lo anterior, lo determinado por la Sala Superior en la jurisprudencia intitulada "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES"⁷ en donde determinó que cuando no se cuente con una prueba que acredite la responsabilidad de los denunciados, lo procedente es absolverlos.

3.2.1 Uso indebido de la pauta por parte de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, por la difusión de spots en precampaña. Como se ha dicho, el primer punto a dilucidar es si existió un uso indebido de la pauta, ya que, en concepto del promovente, no está permitido que las Coaliciones, por sí mismas, puedan difundir spots en radio y televisión, durante la etapa de precampañas, pues, en su consideración, dicha prerrogativa es de uso exclusivo de los partidos políticos que contienden en el proceso electoral correspondiente. 7 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60. SRE-PSC-039/2017 23 En ese sentido, el promovente refiere que con la difusión de spots de la Coalición se está realizando una sobreexposición de dicho consorcio político, ya que las coaliciones únicamente se pueden posicionar, a sí mismas, durante la etapa de campañas. Dicho lo anterior, esta Sala Especializada considera que es inexistente esta falta atribuida a la Coalición, ya que el actor parte de una premisa errónea; a saber: "las coaliciones no tienen acceso a radio y televisión durante las precampañas". En efecto, de la lectura integral de la denuncia, se advierte que el actor encamina sus argumentos a evidenciar que sólo los partidos políticos tienen acceso a radio y televisión durante la etapa de precampañas, mientras que las Coaliciones tendrán acceso a partir del inicio de las campañas. Sin embargo, de conformidad con lo previsto en los artículos 87, 88, párrafo 2, 91, párrafos 3, 4 y 5 167, párrafo 2 de la Ley de Partidos; 167, párrafo 2 de la Ley General, en relación con los numerales 13, párrafo 4 y 16 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, los partidos políticos podrán formar coaliciones para contender de manera conjunta en alguna elección, siendo que una de esas modalidades puede ser la de Coalición total, como lo es en el caso que nos ocupa. Además, se advierte que las Coaliciones podrán acceder a tiempo aire en radio y televisión, ya sea en el periodo de precampaña o campaña. Para ello, en caso de Coalición total, se le considerará como si fuera un solo partido político; y por tanto, tendrá acceso al 30% del tiempo en radio y televisión que se reparte de manera igualitaria entre los partidos. No obstante, no tendrá acceso al 70% del tiempo que se distribuye de manera proporcional entre dichos institutos políticos, ya que en este caso, los partidos coaligados accederán a dicha prerrogativa, de manera individual y separada, SRE-PSC-039/2017 24 atendiendo a la votación que cada uno hubiera obtenido en la elección del congreso local inmediata anterior. Bajo ese contexto, ha quedado demostrado que el Comité de Radio y Televisión del INE concedió el uso de la prerrogativa constitucional a la Coalición, situación que fue confirmada por la Sala Superior al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP74/2017, en donde estableció que en el artículo 167 de la Ley General no se hacía ninguna distinción en cuanto a la etapa del proceso electoral en la que se debía repartir el tiempo en radio y televisión destinado a las coaliciones; y por tanto, la regla de distribución que en dicho artículo se contemplaba debía ser aplicada tanto a precampañas como campañas. De ahí que no asista la razón al promovente cuando refiere que la Coalición usó indebidamente la pauta en radio y televisión al difundir los spots: "Registro Coahuila Coalición", en su versión televisiva con número de folio RV00097-17 y en su versión de radio con el registro RA00106-17. 3.2.2 Uso indebido de la pauta por parte de la Coalición, al difundir spots en donde difundió actos relacionados con el proceso de selección interna del PAN. En este punto, el promovente refiere que el hecho de que la Coalición difundiera promocionales en los que se aludía al proceso de selección interna del PAN y a uno de sus precandidatos, es contrario a Derecho, puesto que el PAN únicamente podía haber destinado su pautado para promocionar cualquier acto relacionado con su elección interna. SRE-PSC-039/2017 25 En ese sentido, el promovente refiere que el hecho de que se utilizara el emblema de la Coalición, puede inducir al error de que lo que se promociona es un precandidato de dicho consorcio político; y no así, del PAN en lo individual. Al respecto, como se ha dicho con antelación, las Coaliciones gozan de la prerrogativa de acceso a radio y televisión para el periodo de precampaña, siendo que en el caso que nos ocupa, la autoridad administrativa electoral consideró que la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila era una coalición total; y por tanto, para efectos de la distribución de tiempo aire se le debía considerar como un solo partido y, en consecuencia, sólo

tenía acceso a la distribución del 30% que se reparte de manera igualitaria entre los partidos políticos. Por lo que al tener acceso en radio y televisión, dicha Coalición tenía la posibilidad de difundir propaganda genérica o de precampaña, con su propio tiempo aire. Cabe mencionar que similar criterio utilizó la Sala Superior al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP-74/2017, en donde determinó que: "una vez asignado el tiempo en radio y televisión que le corresponde a la coalición [...] para las etapas electorales, corresponde a dichos institutos políticos, en ejercicio de su libre autodeterminación, a través de su convenio de coalición, establecer la forma y los términos en que se hará uso del tiempo que le fue asignado, mismo que puede ser usado no sólo para la difusión de propaganda de precampañas, sino también para la difusión de propaganda genérica". Así, resulta evidente que las coaliciones están facultadas para difundir spots en radio y televisión, ya sea con contenido genérico o con propaganda electoral atinente a una precampaña; sin embargo, dicha prerrogativa no es absoluta ni ilimitada, sino que se debe ajustar a los parámetros que rigen la difusión de propaganda en la época de precampaña. SRE-PSC-039/2017 26 Al respecto, la Sala Superior al emitir la jurisprudencia intitulada: "RADIO Y TELEVISIÓN. LA UTILIZACIÓN DE LOS TIEMPOS ASIGNADOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PARA PROMOCIONAR LA IMAGEN DE CANDIDATOS POSTULADOS POR OTROS INSTITUTOS POLÍTICOS O COALICIONES, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD"⁸ determinó que los partidos políticos no deben utilizar los espacios en radio y televisión que les corresponden, para promocionar la imagen de candidatos postulados o registrados por otros institutos políticos o coaliciones, pues puede generarse una exposición desigual y, en consecuencia, un mayor posicionamiento a alguna de las opciones políticas en detrimento de las restantes, contravinendo el principio de equidad en la contienda electoral. En ese contexto, esta Sala Especializada considera que los partidos políticos y coaliciones, ya sea durante las precampañas y campañas, únicamente podrán hacer uso de los tiempos o pautas en radio y televisión para difundir su propia propaganda política o electoral, sin que exista posibilidad alguna de que algún precandidato o candidato de un diverso partido político o coalición pueda participar o beneficiarse de dicha prerrogativa, dado que ello afectaría el principio de equidad en el proceso de selección interna de un partido, puesto que se estaría dotando de mayores beneficios a una sola oferta política. Precisado lo anterior, debe recordarse que en el caso, se tiene acreditado que durante el periodo de precampañas del proceso electoral del estado de Coahuila, la Coalición Alianza, como parte de su prerrogativa en radio y televisión, difundió los spots: "Registro Coahuila Coalición" con folio RV00097-17 [versión televisión] y RA00106-17 [versión radio], cuyo contenido se muestra a continuación: RV00097-17 8 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, En tales circunstancias, a juicio de esta Sala Especializada, dichos promocionales deben ser considerados como spots de precampaña, puesto que el mensaje que se emitió se encontraba vinculado con el proceso de selección interna del PAN, uno de los precandidatos que contendió y la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila. En ese contexto, esta Sala Especializada considera que es existente la infracción atribuida a la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, relacionada con el uso indebido de la pauta que le fue asignada en el periodo de precampaña de la elección de Gobernador de Coahuila. Ello, habida cuenta que ha sido acreditado que los spots controvertidos son de carácter electoral, y que están encaminados a difundir actos relacionados con el proceso de selección interna que, de manera individual, realizó uno de los partidos coaligados, sin que mediara una justificación para ello, puesto que en el convenio no se estableció que la Coalición participaría o coadyuvaría en la elección del Candidato a Gobernador que realizaría el PAN. Lo anterior se considera así, ya que con independencia de que durante las precampañas, el PAN formó parte de la Coalición, lo cierto es que de conformidad con el convenio que integró el consorcio político, ningún otro partido coaligado o la Coalición misma, estaban en posibilidades de realizar actos de promoción de precandidatos o de etapas del proceso de selección interna del PAN, puesto que en el convenio únicamente se refirió que el candidato emanaría de la selección de candidatos del PAN, atendiendo a la determinación que adoptara la Comisión Permanente del Consejo Nacional de dicho partido. En esa lógica, la difusión de promocionales vinculados a la precandidatura de José Guillermo Anaya Llamas debió ser realizada exclusivamente por el PAN con el tiempo que, de manera individual, le correspondía en el periodo de precampaña; es decir, que los spots alusivos a dicho precandidato debieron estar comprendidos entre el tiempo que le fue asignado al PAN como parte del 70% del tiempo aire que SRE-PSC-039/2017 30 se distribuyó de manera proporcional a cada uno de los partidos en lo individual y del cual no le fue asignado a la Coalición denunciada. Lo anterior, ya que la Coalición denunciada, por sí misma, no llevó a cabo un proceso de selección interna, sino que dicha situación fue realizada de manera particular por uno de sus partidos coaligados; y por tanto, la Coalición no estaba facultada para promocionar actos de precampaña que pudieran causar una afectación a la equidad del proceso de selección interna del PAN, al otorgar mayor tiempo del que debía de tener alguno de los sujetos que participarían en dicho

proceso electivo. En efecto, al no realizar un proceso de selección interna, la Coalición únicamente debió constreñirse a difundir propaganda genérica sobre temas de interés general; y no así, la exhibición de promocionales con propaganda de precampaña; cuestión diversa hubiera sido que en el convenio de coalición se hubiera establecido que para la elección de candidato a Gobernador, dicho consorcio político realizaría un proceso de selección en el cual se incluyeran, entre otros, a los precandidatos de los partidos coaligados; o bien, que la Coalición participaría en el proceso interno que implementara individualmente alguno de sus coaligados, pues en estos supuestos se justificaría que el tiempo en radio y televisión de la Coalición fuera distribuido y usado por los diferentes precandidatos que participaran en dicha elección interna. De ahí que la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila utilizó indebidamente su pauta en radio y televisión que le fue asignada durante el periodo de precampaña del proceso electoral que se desarrolla en el estado de Coahuila; y por tanto, contravino lo previsto en 41 párrafo segundo base III apartado A, de la Constitución; 159; 211, 227, párrafo 3, y 443, párrafo 1 incisos a) y n), de la Ley General; 25 párrafo 1 incisos a) y u), de la Ley General de Partidos Políticos; así como 13, párrafos 1 y 3 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. SRE-PSC-039/2017 31 3.2.3 Uso indebido de la pauta por el Partido Unidad Democrática de Coahuila, por la promoción de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila. En este punto, el promovente aduce que dicho partido usó indebidamente la pauta que le fue asignada en el periodo de precampaña de la elección que actualmente se desarrolla en el estado de Coahuila, al haber promocionado a la Coalición por medio de la difusión de los spots: "Coahuila libérate" con folio RV001918 [versión televisión] y RA002366 [versión radio]; "Lenin Precampaña" con folio RV00037-17 [versión televisión] y RA00039-17 [versión radio]; y "Video Alianza" con folio RV00100-17 [versión televisión] y RA00114-17 [versión radio]. En ese sentido, el promovente refiere que es ilegal que se promoció el logotipo de una coalición en la etapa de precampaña, puesto que se le está posicionando en un momento que no es permitido; más aún, cuando, en su concepto, en dichos promocionales se advierten propuestas de gobierno y campaña, dirigidas a la ciudadanía en lo general. Al respecto, como ya se ha señalado, los partidos políticos gozan de la prerrogativa constitucional de acceso a la radio y televisión, ya sea durante o fuera de algún proceso electoral, puesto que su acceso es de manera permanente atendiendo a las modalidades que establece la propia Constitución y las normas electorales. Bajo ese contexto, debe decirse que en el caso particular, se tiene constancia de que el Partido Unidad Democrática de Coahuila no realizó un proceso de selección interna para elegir candidato a Gobernador de Coahuila, puesto que atendiendo al convenio de coalición que firmó, el candidato a dicho puesto sería el que resultara electo en el proceso interno del PAN. Por q C-039/20 corrupción se te hizo normal. Y es que mientras ellos se enriquecen, tú te vuelves más pobre. Cada vez trabajas más y te pagan menos. ¿Qué pasa Coahuila? Alégrate, decídete, tú tienes la solución. Ahora les toca sufrir a ellos. Que paguen por lo que han hecho. Es ahora o nunca. Voz de un hombre: Unidad Democrática de Coahuila. UDC. Voz de un hombre: Coahuila. Libérate. Como puede advertirse, en estos spots no se hace referencia alguna a la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, sino que únicamente se utiliza el nombre y logo del Partido Unidad Democrática de Coahuila; además, contrario a lo afirmado por el actor, no se aprecia alguna propuesta de campaña de dicho partido político ni alguna referencia a un plan de gobierno. Por el contrario, lo único que se advierte es el posicionamiento de dicho partido frente al supuesto problema de corrupción y pobreza que existe en el estado de Coahuila; usando para ello preguntas retóricas con las que pretende reafirmar su idea, tales y como lo son: "¿Por qué la corrupción se te hizo tan normal?" y "¿Qué pasa Coahuila?". En esas circunstancias, dichos promocionales deben ser considerados como genéricos, pues únicamente pretenden mostrar el posicionamiento del partido en torno a temas de interés social, sin que se aprecie que se haga algún posicionamiento de alguna fuerza política que pudiera influir en la contienda electoral. Por lo que es factible calificar como dentro de la legalidad estos promocionales. Ahora por lo que hace a los promocionales: Promocional Video Alianza con folio RV00100-17 [versión televisión] Imágenes representativas Voz de un hombre: Para llegar a una meta es necesario construir un camino. No podemos fallarle a Coahuila viendo como sufre nuestra gente. Basta ya de divisiones. Basta ya de egoísmo. Es tiempo de una Alianza Ciudadana para construir el Coahuila que todos queremos. Este es el reto y la oportunidad. Dejar a un lado el interés personal y darle esperanza a nuestro pueblo. Hasta la victoria. ¡Venceremos! Voz de un hombre: UDC. Voz de un hombre: Libérate. Voz en off: Alianza Ciudadana por Coahuila. En el caso de estos spots, se advierte que el contenido del mensaje es idéntico, puesto que se escucha el uso de las mismas palabras tanto en radio y televisión; lo cual, permite que se estudien de manera conjunta, a fin de evitar repeticiones innecesarias, con la diferenciación del uso de imágenes en el caso del spot televisivo. Como puede advertirse, en estos promocionales se hace alusión a la visión que tienen tanto UDC como la Coalición Ciudadana por Coahuila, respecto del sufrimiento que se causa a los coahuilenses con la división y egoísmo del interés personal; y ante ello, manifiestan una oportunidad de esperanza al

renunciar a ese interés individual. En ese contexto, en dichos promocionales no se aprecia alguna referencia que permita deducir que se pretende posicionar a un partido político; o bien, que se está llamando a votar a favor de determinada fuerza política, ya que lo que realmente se tiene es un posicionamiento general, relacionado con la condición social del Estado y la posibilidad de que ésta cambie con la renuncia de los intereses personales de la población en general. En esa tesitura, es indubitable que estos spots contienen un mensaje genérico, habida cuenta que únicamente refieren la postura ideológica del partido, por lo que no se advierte referencias que impliquen un llamado al voto. SRE-PSC-039/2017 46 En este tenor, este órgano jurisdiccional estima que los promocionales denunciados, por la temporalidad en la que fueron difundidos, están apegados a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias en cuanto a su contenido, de tal suerte que no se acredita la infracción, pues no existe prohibición alguna para que durante el periodo de precampañas, el partido político difunda ideas, críticas o manifestaciones en torno a temas de interés general, propio de todo sistema democrático. Esto es, en la época de precampañas, los partidos políticos pueden hacer uso de las pautas en radio y televisión otorgadas por el INE, sin que necesariamente deban contener mensajes de precampaña o campaña, pudiendo versar sobre cuestiones de carácter general. Por otra parte, tampoco se acredita el argumento del quejoso en el sentido de que la difusión de los promocionales denunciados constituye un uso indebido de la pauta, en razón de que fueron hechos con la finalidad de posicionar ilícitamente a la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila ante el electorado. Lo anterior, ya que se reitera que lo que realmente se difunde es un contenido propio de la ideología del partido político, con expresiones críticas, lo cual no encuentra una prohibición expresa en la legislación aplicable, sino por el contrario, dicho contenido se encuentra permitido a los partidos políticos ya sea fuera o dentro de los periodos electorales, al constituir una de las formas que permiten a los institutos políticos alcanzar los fines constitucionales establecidos en el artículo 41 de la Constitución Federal. En ese sentido, esta Sala Especializada considera que del análisis integral y contextual de los promocionales no es posible presumir algún riesgo de afectación en materia electoral; de ahí que el objetivo de los promocionales otorgados al partido SRE-PSC-039/2017 47 político, en este caso específico, no se encuentra desvirtuado, ya que atendiendo al contenido se trata de materiales genéricos con posicionamiento partidista, por lo que es inexistente la conducta señalada por el Promovente.

3.2.4 Uso indebido de la pauta por la Coalición, al usar imágenes de menores de edad en un spot. Es oportuno señalar que esta Sala Especializada, en un nuevo paradigma de protección de los Derechos Humanos, implementó un método tendente a verificar la posible existencia de alguna situación de vulnerabilidad, en el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad auditiva, o bien, cuando en los promocionales se incluyan personas menores, aun cuando forme o no parte de la controversia. Proceder que es plenamente acorde con lo previsto por el artículo 1º, párrafo tercero de la Constitución Federal; en cuanto ordena que todas las autoridades, incluida por supuesto esta Sala Especializada, tienen la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los Derechos Humanos. Acorde con lo anterior, al verificar el contenido del promocional de televisión con folio RV0097-17. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Al respecto, se tiene en cuenta que el contenido de la propaganda difundida por los partidos políticos se encuentra amparada por la libertad de autodeterminación de contenidos; empero, el ejercicio de dicha libertad fundamental no es absoluta, sino que tiene límites, entre los que se encuentran los vinculados con la dignidad o la reputación de las personas y los derechos de terceros, acorde con lo dispuesto en los artículos 6º, párrafo primero de la Constitución Federal, así como 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dicen: Artículo 6º.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Artículo 19.[...] 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Artículo 13. Libertad de

Pensamiento y de Expresión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

SRE-PSC-039/2017 50 Destaca de estos preceptos constitucionales y convencionales una limitación coincidente: esto es, el pleno respeto a los derechos de terceros, incluidos, por supuesto los derechos de la niñez, cuya protección, se encuentra expresamente ordenada en el artículo 4º de nuestra Constitución Federal. En tales condiciones, cuando en el uso de las pautas asignadas por el Instituto se difundan mensajes que puedan afectar derechos de terceros, y que en el caso, resultan ser personas menores de edad, se debe garantizar sus derechos en el marco de su interés superior. Ahora bien, en el orden conceptual, el "interés superior del niño", ha sido descrito por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: "Implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Al amparo de esa previsión convencional, el Estado Mexicano, a través de sus instituciones, autoridades y tribunales, está constreñido a tener en consideración primordial el respeto al interés superior del menor, con la adopción de medidas necesarias para asegurar y maximizar la protección y efectividad de los derechos de las niñas y niños, acorde con lo establecido en los artículos 3, párrafo 1 y 4, de la Convención sobre los Derechos del Niño: Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Artículo 4. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

SRE-PSC-039/2017 51 Con tal directriz de protección a la niñez, el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes" emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el interés superior del menor tiene las siguientes implicaciones: a) Coloca en plena satisfacción los derechos de los infantes como parámetro y fin en sí mismo; b) Define la obligación del Estado respecto de los niños, niñas y adolescentes; y c) Orienta decisiones que protegen sus derechos. En sincronía con estos postulados, la Primera Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis de rubro: "DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS" estableció que la mera situación de riesgo de los infantes es suficiente para que se estime que se afectan los derechos de la niñez y, ante ello, deben adoptarse las medidas que resulten más benéficas para la protección de los infantes. En el caso, la posible afectación al interés superior del infante se advierte a través de la exposición de la imagen de diversos niños y posibles adolescentes (sin que de esta circunstancia se tenga absoluta seguridad, atento a su fisonomía), de ahí que el análisis se deba hacer en relación al derecho a la propia imagen de los infantes participantes. Entonces la importancia del asunto radica, precisamente, en la protección reforzada que goza la imagen de las y los menores de edad involucrados en el promocional.

SRE-PSC-039/2017 52 Por tanto, para el otorgamiento de la salvaguarda judicial es suficiente que se les ubique en una situación de riesgo potencial, sin que sea necesario que esté plenamente acreditado el perjuicio ocasionado, porque, atento a los valores en juego, el interés superior de las niñas y niños, está por encima del ejercicio de la libertad de autodeterminación del contenido de los spots que tienen los partidos políticos. Con ese parámetro de ponderación, el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece, que ningún niño puede ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, ni ataques ilegales a su honra y reputación. Por su parte, los artículos 2, 5, 76, 77 y 78 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes contemplan, igualmente, la salvaguarda de los infantes ante cualquier riesgo de afectación o manejo directo de su imagen, nombre, datos o referencias que permitan su identificación, así: Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán: I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno; II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos

aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia. El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la SRE-PSC-039/2017 53 asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley. ... Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño. ... Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquella que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán orientar, supervisar y, en su caso, restringir, las conductas y hábitos de niñas, niños y adolescentes, siempre que atiendan al interés superior de la niñez. Artículo 77. Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, así como medios impresos, o en medios electrónicos de los que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez. Artículo 78. Cualquier medio de comunicación que difunda entrevistas a niñas, niños y adolescentes, procederá como sigue: I. Deberá recabar el consentimiento por escrito o cualquier otro medio, de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente, respectivamente, conforme a lo señalado en el artículo anterior y a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 76 de la presente Ley, y II. La persona que realice la entrevista será respetuosa y no podrá mostrar actitudes ni emitir comentarios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. En el caso de que no sea posible recabar el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de un menor, éste podrá otorgarlo siempre que ello no implique una afectación a su derecho a la privacidad por el menoscabo a su honra o reputación. SRE-PSC-039/2017 54 Por otra parte, no se requerirá el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de niñas, niños o adolescentes, cuando la entrevista tenga por objeto que éstos expresen libremente, en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, su opinión respecto de los asuntos que les afecten directamente, siempre que ello no implique una afectación a sus derechos, en especial a su honra y reputación. El interés superior a proteger es la sola posibilidad de poner en peligro su imagen con una latente identificación de su persona. Este principio protector, vinculado al tema, nos orienta a reflexionar que en el caso de la propaganda política o electoral, hay siempre un elemento ideológico que identifica a la opción política, por tanto, la presencia de infantes implica un riesgo potencial de asociar a tales infantes con una determinada preferencia política e ideológica, a una edad que todavía no es oportuna. Lo anterior puede devenir en un riesgo potencial en relación con su imagen, honra o reputación presente, en su ambiente escolar o social y, por supuesto, en su futuro, pues al llegar a la vida adulta pueden aceptar o no aprobar la ideología política, con la cual fueron identificados en su infancia. En esta concurrencia de derechos involucrados, acorde con las disposiciones nacionales e internacionales antes descritas, esta Sala Especializada debe hacer un ejercicio de ponderación el cual se decante por la protección reforzada de los menores de edad involucrados en los promocionales de televisión que se analizan. Con tal parámetro este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a implementar todas aquellas medidas que sirvan para evitar que se presenten situaciones de riesgo potencial que puedan afectar el interés superior del menor en relación con los promocionales de contenido político electoral, como en el asunto. SRE-PSC-039/2017 55 De suma importancia destaca tener la seguridad que los infantes fueron escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a lo dispuesto en el

artículo 71 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece: "Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez". Los requerimientos reforzados tienen sustento en los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a ser informados, como una directriz convencional que debe atenderse por todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales, como lo indica la UNICEF, en las Directrices éticas para la información sobre la infancia; conducentes y aplicables a la aparición de infantes en los spots de los partidos políticos, precisamente porque aparecen en medios de comunicación social como la televisión genera su exposición pública. Este instrumento internacional indica, en lo destacable: "Directrices éticas de UNICEF para la información sobre la infancia Protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la exposición pública ... De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, todos los niños, niñas y adolescentes, sin excepción, deben tener garantizados sus derechos. Uno de esos derechos es el de la protección de la vida privada, por lo que la exposición pública de los niños, niñas o adolescentes... UNICEF plantea una serie de directrices éticas para la información sobre infancia, que tienen como objetivo aportar orientaciones básicas para los medios de comunicación, pero que también son de utilidad para autoridades administrativas, policiales y judiciales que participan en los procesos de justicia, sobre cómo abordar los temas relacionados con la protección de la infancia a fin de respetar en todo momento su interés superior y su dignidad como seres humanos... Directrices éticas de UNICEF para la información sobre la infancia I. Principios 1. Se deberán respetar la dignidad y los derechos de cada niño o niña en toda circunstancia..." SRE-PSC-039/2017 56 Por tanto, a efecto de garantizar el pleno respeto al interés superior de los infantes, la autoridad administrativa electoral conforme a sus facultades adoptó las medidas necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos que procedan, en los términos apuntados y, en su caso, requirió la documentación necesaria a fin de privilegiar y proteger el interés superior de los niños, niñas y/o adolescentes menores de dieciocho años. Conforme lo anterior, mediante acuerdo de siete de marzo, la Unidad Técnica requirió a la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, remitiera la documentación a través de la cual fuera posible advertir las personas que, en su caso, ejercieran la patria potestad de los menores involucrados; así como el documento en el cual se asentara la libre manifestación de la voluntad de los menores. En respuesta, la Coalición exhibió copia fotostática de siete autorizaciones de uso de imagen y voz, en el que se consigna información como el nombre del menor, domicilio, Ciudad/Estado/Código Postal, Teléfono, RFC o CURP; así como la leyenda: "Soy el padre/la madre (o tutor legal) del menor que ha firmado esta autorización y consentimiento, y por la presente acuerdo que yo y el menor estaremos sujetos a todos los términos y condiciones de la presente." Enseguida de lo anterior, se encuentra consignado el nombre de la persona que se dice ostentar como el padre o madre del menor referido en el formato correspondiente. Al respecto, esta Sala Especializada considera que dichos formatos, al ser pruebas documentales privadas⁹ por ser documentos elaborados por particulares y 9 Acorde con lo dispuesto en los artículos 461, párrafo 3, inciso b), así como 462, párrafos 1 y 3, de la Ley General. SRE-PSC-039/2017 57 proporcionados por la Coalición denunciada, por sí solos, resultan insuficientes para acreditar que los menores que en ellos se refiere son los mismos que aparecen en el spot controvertido; más aún, cuando la Coalición no proporcionó ningún otro documento que permitiera identificar plenamente a los menores involucrados. En efecto, en los formatos referidos no hay ningún elemento que permita la identificación visual de los menores y tampoco se adjuntó alguna credencial escolar o documento que permitiera a esta autoridad electoral distinguir a que menor de los que aparecen en el video corresponde cada uno de los permisos. Por lo que los citados formatos no son la prueba idónea para acreditar la persona que supuestamente otorgó el permiso. Aunado a ello, es preciso señalar que con la documentación remitida por la Coalición, tampoco se puede acreditar que las personas que firman la autorización, en realidad ostenten la patria potestad de los menores que aparecen en los videos, puesto que únicamente se aportó copia de la licencia de manejo de cada uno de los signantes, pero se omitió acompañar copia certificada del acta de nacimiento de los menores o de cualquier otro documento oficial con el que se pudiera identificar plenamente al mayor adulto que tuviera los derechos de representación de cada uno de los niños y/o adolescentes que se observa en el spot en comento. En ese sentido, dada la laxitud que presentan los citados formatos y la falta de algún documento que acredite la persona que tiene la patria potestad de los menores, es que esta Sala Especializada no tener por cierta la existencia del consentimiento pleno, cierto e idóneo, por escrito, debidamente firmado por los padres o quienes ejerzan la patria potestad o tutela del menor, pues como se ha manifestado, no hay mayores elementos que permitan concatenar y tener por acreditado que la participación de los niños en el promocional denunciado ocurrió con apego a las formalidades exigibles. SRE-PSC-039/2017 58 Además, respecto al requisito consistente en la manifestación del menor por cuanto hace a su opinión libre y expresa respecto de su participación en el promocional electoral en cuestión,

opinión que será valorada atendiendo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, en el caso concreto, el PAN omitió presentar cualquier tipo de documentación para el cabal cumplimiento de este requisito, sin que el partido político emitiera pronunciamiento al respecto, en el presente procedimiento. No pasa desapercibido a esta autoridad que la representación de la Coalición, en su defensa alegó que: • El plazo otorgado para el desahogo y cumplimiento al requerimiento resultaba insuficiente; • Se trata de documentos ajenos y privados, lo que provocó necesariamente una labor de recaudación de dichos documentos; y por tanto, era claro, evidente y lógico, que el tiempo y la posibilidad de los titulares de los documentos no estaba a disposición del partido político; lo cual retrasaba y tornaba difícil su recaudación. • En vista del plazo otorgado, resultaba imposible la protocolización del consentimiento de los padres y los menores; más aún si se toma en cuenta el tiempo que conllevan los trámites protocolarios ante fedatario público. • El requerimiento no tiene sustento legal que permita al partido prevenir la obligación de recaudar los documentos que se requirieron, sin embargo no se pretende desconocer los criterios que el INE citó en el acuerdo de requerimiento, solo trata de evidenciar que resulta complicado prever y SRE-PSC-039/2017 59 recaudar documentos para dar exhaustivo cumplimiento a requisitos no contemplados en la legislación. No obstante, a juicio de esta Sala Especializada, dichas consideraciones deben desestimarse, ya que tal y como se ha referido con antelación, la normas constitucionales, convencionales y legales, prevén que quienes difundan en medios de comunicación la imagen de menores, deberán tomar en cuenta aquellas medidas que impliquen la salvaguarda de los infantes ante cualquier riesgo de afectación o manejo directo de su imagen, entre las que se encuentra el recabar con antelación a la difusión, los permisos correspondientes. Por lo que no es aceptable que la Coalición denunciada aduzca que no se le otorgó el tiempo necesario para recabar dicha documentación, ya que estaba plenamente vinculada a contar con ella, desde el momento en que realizó el promocional que posteriormente difundiría como parte de su prerrogativa constitucional de acceso a televisión. En esa lógica, tampoco asiste razón a la Coalición denunciada cuando refiere que resultaba imposible realizar la protocolización del consentimiento de los padres y de los menores, ya que se insiste, dicha situación debió ser realizada con antelación a la difusión del promocional; además, la parte denunciada pasa por alto que los Notarios Públicos no son los únicos que, en materia electoral, podrían realizar una protocolización, ya que también contaba con la posibilidad de solicitar el auxilio de la Oficialía Electoral del INE; sin embargo, no se aportó ningún documento que, cuando menos, generara un indicio de que se solicitó su apoyo ni tampoco se tiene constancia de que la Coalición hubiera requerido los servicios de protocolización ante fedatario público. SRE-PSC-039/2017 60 De ahí que se tengan por desestimadas las manifestaciones de la representación de la Coalición; y por consiguiente, sea dable concluir que esta Sala Especializada no cuenta con los elementos idóneos y suficientes, como puede ser una fotografía, identificación escolar o cualquier otro elemento que sirva para establecer la identidad de los menores; lo cual, permitiría cotejar y establecer el vínculo entre las niñas y niños que aparece en el promocional y de quien, supuestamente, dio el consentimiento es su madre o tutora. Lo que deja en evidencia el riesgo potencial al que se expuso a los menores, por la difusión del promocional, al no tener certeza de que se emitió un consentimiento pleno, cierto e idóneo por parte de los padres, madres o tutores de aquellos, y, sobre todo, por no cuidar de manera idónea el uso de las imágenes de éstos. En consecuencia, se estima que se vulneró el interés superior de los menores involucrados y, por ende, se actualiza por parte de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila la infracción que se denuncia, en contravención a lo dispuesto por los diversos artículos 1, 4, párrafo noveno y 6, párrafo primero de la Constitución Federal; 25, párrafo 1, inciso a) y u), de la Ley de Partidos Políticos; 247, párrafo 1 y 443, párrafo 1, incisos a), h) y n) de la Ley Electoral. CUARTA. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Una vez que ha sido acreditada la existencia de diversas faltas, procede establecer la clase de sanción que legalmente corresponda, tomando en cuenta, entre otras, las siguientes directrices: 1. La importancia de la norma transgredida, es decir, señalar qué principios o valores se violaron o se vieron amenazados y la importancia de esa norma dentro del sistema electoral (principio, valor, ordenamiento, regla). SRE-PSC-039/2017 61 2. Efectos que produce la transgresión, los fines, bienes y valores jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o resultado). 3. El tipo de infracción y la comisión intencional o culposa de la falta, análisis que atañe verificar si el responsable fijó su voluntad para el fin o efecto producido, o bien, pudo prever su resultado. 4. Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así como si la conducta fue reiterada. Para tal efecto, esta Sala Especializada estima procedente retomar la tesis histórica S3ELJ 24/2003, de rubro "SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN", que sostenía que la determinación de la falta puede calificarse como levísima, leve o grave, y, en este último supuesto, como grave ordinaria, especial o mayor, lo que corresponde a una condición o paso previo para estar en aptitud de determinar la clase de sanción que legalmente se deba aplicar al caso concreto, y seleccionar de entre

alguna de las previstas en la ley. Ello en virtud de que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior en diversas ejecutorias,¹⁰ que la calificación de las infracciones obedezca a dicha clasificación. Por lo tanto, para una correcta individualización de la sanción, en primer lugar es necesario determinar si la falta a calificar es: i) levísima, ii) leve o iii) grave, y si se incurre en este último supuesto, precisar si la gravedad es de carácter ordinaria, especial o mayor. ¹⁰ En los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-45/2015 y acumulados, SUPREP-57/2015 y acumulados, SUP-REP-94/2015 y acumulados, SUP-REP-120/2015 y acumulados, SUP-REP134/2015 y acumulados, SUP-REP-136/2015 y acumulados y SUP-REP-221/2015. SRE-PSC-039/2017 ⁶² Adicionalmente, es menester precisar que cuando se establece un mínimo y un máximo de la sanción a imponer, se deberá proceder a graduar la misma atendiendo a las circunstancias particulares del caso. Al respecto, una vez que han quedado demostradas la infracciones a la normativa electoral en que incurrió la Coalición Alianza Ciudadana de Coahuila, se procede a imponer la sanción correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la Ley General, que dispone que cuando se trate de infracciones cometidas por los partidos políticos, se podrá imponer desde amonestación pública, multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente¹¹, según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda. Para determinar la sanción respectiva, se deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodearon la conducta contraventora de la norma, de conformidad con lo previsto en el artículo 458, párrafo 5 de la Ley General, tomando en consideración los siguientes elementos:

- Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila. 1. Singularidad o pluralidad de faltas. En este punto, en principio, resulta necesario establecer que con una sola conducta se acreditaron dos faltas; esto es, que con la difusión del spot "Registro Coahuila Coalición" con folio RV00097 [versión tv] y 11 Se debe precisar que, mediante reforma al párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo decreto se publicó el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. De igual forma, en términos de los artículos segundo y tercero transitorios del decreto de reforma mencionado, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país. SRE-PSC-039/2017 ⁶³ RA00106 [versión radio] se actualizaron las faltas de uso indebido de la pauta y afectación al interés superior de un menor. 2. Bien Jurídico tutelado. Establecido el contexto anterior, debe decirse que con dicha conducta se transgredió, por una parte, el principio de equidad en la contienda interna de un partido político, puesto que se concedió mayor tiempo aire en radio y televisión a uno de los contendientes del proceso de selección interna del PAN; por otra parte, se afectó el interés superior de los menores que aparecieron en el spot televisivo controvertido, puesto que no se acreditó que la Coalición contará con los documentos necesarios para acreditar una participación libre y voluntaria, a sabiendas de la exposición de su imagen para fines electorales; y por tanto, se afectó la integridad, privacidad y reputación de los menores. 3. Circunstancias de modo, tiempo y lugar Modo. La conducta consistió en la difusión por televisión del promocional "Registro Coahuila Coalición" con folio RV00097 [versión tv] y RA00106 [versión radio], relativo al proceso electoral local de Coahuila, con un total de ciento ochenta y siete impactos en televisión y trescientos ochenta y cuatro en radio. Tiempo. La difusión del promocional se realizó durante el desarrollo de los comicios locales en Coahuila, en la etapa de precampañas, en el periodo del doce al quince de febrero. Lugar. La difusión del promocional se efectuó en los canales de televisión cuya transmisión se realiza en Coahuila. SRE-PSC-039/2017 ⁶⁴ 4. Condiciones externas y medios de ejecución. El momento en que se realizó la transmisión del promocional, corresponde al periodo de precampaña del proceso electoral local del estado de Coahuila, y el medio de ejecución fueron los canales de radio y televisión de transmisión local, acorde con lo informado por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos en las diversas comunicaciones que han sido referidas en el apartado de acreditación de los hechos denunciados. 5. Beneficio o lucro. No se acredita un beneficio económico cuantificable para la Coalición responsable, en virtud de que se trata de la difusión de promocionales pautados por ella misma, en uso de su prerrogativa constitucional de acceso a los tiempos del Estado. 6. Comisión dolosa o culposa de la falta. Está acreditado que la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila pautó los promocionales aludidos como parte de su prerrogativa de acceso al tiempo aire en radio y televisión que le correspondía en el marco de las precampañas del proceso electoral de Coahuila; y por tanto, es posible afirmar que tenía pleno conocimiento del contenido de los promocionales pautados; lo cual, permite concluir que tuvo la voluntad, por una parte, de usar la imagen de los menores de edad en el contenido de su

promocional; y por otra parte, que tuvo el ánimo de difundir el promocional tildado de ilegal durante el periodo de precampañas en el proceso electoral del estado de Coahuila. Además, como Coalición que contiene en un proceso electoral local está plenamente vinculada al conocimiento de las normas constitucionales, convencionales y legales y de los criterios jurisprudenciales que rigen el acceso a la radio y televisión por parte de los actores políticos que participan en un proceso comicial; así como los tendientes a garantizar la salvaguarda del interés superior de los menores al ser utilizados en promocionales que se difundirán en un contexto electoral, a través de los medios electrónicos.

Se presume que el entonces precandidato en cuestión ni los partidos políticos que lo respaldan no cuentan con los requisitos administrativos, expresos en el Lineamiento para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia político-electoral, **capítulo “Requisitos para mostrar niñas, niños o adolescentes en propaganda político electoral, mensajes electorales, actos políticos, actos de precampaña o campaña, en cualquier medio de difusión”, numeral 8**, con título “Consentimiento de la madre y del padre, de quien ejerza la patria potestad o de los tutores”, señala lo siguiente:

“...Por regla general, debe otorgar el consentimiento quien o quienes ejerzan la patria potestad o el tutor o, en su caso, la autoridad que debe suplirlos respecto de la niña, el niño o adolescente que aparezca o sea identificable en propaganda político-electoral, mensajes electorales o actos políticos, actos de precampaña o campaña, o para ser exhibidos en cualquier medio de difusión...”

Irregularidad que a simple vista es demostrada, toda vez que el precandidato ni los partidos políticos que lo respaldan, no cumplieron con este requisito, y debiendo esta autoridad electoral, solicitar al infractor de forma inmediata dicho consentimiento, y en caso de negarse a proporcionarlo, sancionarlo cómo corresponda.

Así mismo en el Lineamiento para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, **capítulo “Presentación del consentimiento y opinión ante el Instituto”, en el numeral 14**, señala lo siguiente;

“... Los sujetos obligados que exhiban la imagen, voz o cualquier dato identificable de niñas, niños o adolescentes en su propaganda político-electoral, mensajes o actos políticos, actos de precampaña o campaña, deberán:

... b) Conservar en su poder, durante el tiempo exigido por la normatividad aplicable en materia de archivos, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de otras leyes, la grabación en video de la conversación por medio de la cual se explicó a la niña, niño o adolescente el alcance, contenido, temporalidad y medio de difusión, así como el original del medio por el que se documentó la opinión informada de la persona menor de edad, sobre su participación en la propaganda político-electoral, mensajes electorales, o su presencia en actos políticos, actos de precampaña o campaña conforme al manual y las guías metodológicas referidas en el Lineamiento 9. ... (Sic)

Del análisis de la fotografía publicada el 17 de febrero del 2024, a las 7:21 pm con el título “Gracias!, El entusiasmo me gana, más de 10 mil Mazatlecos nos reunimos para el cierre de precampaña que es uno de los primeros pasos para construir un mejor Mazatlán”, , como se aprecia en la siguiente liga <https://www.facebook.com/photo/?fbid=384738334314708&set=pcb.384738434314698> en la cuenta “POLÍTICA VERIFICADA”, de la red social Facebook del **C. Guillermo Romero Rodríguez**, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, de la cual se observa difundió varias imágenes de niños, niñas y adolescentes, ello para promocionar su campaña política y posicionar su imagen ante los electores, vulnera el derecho a la intimidad de los infantes que aparecen en su promoción electoral, y se presume puede devenir en un riesgo potencial, por lo cual se debió cumplir con la obligación señalada en el numeral 14, con título “Presentación del consentimiento y opinión ante el Instituto”, del Lineamiento para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes en Materia Político-Electoral, es decir el precandidato tiene obligación de conservar en su poder, durante el tiempo exigido por la normatividad aplicable en materia de archivos, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de otras leyes, la

grabación en video de la conversación por medio de la cual se explicó a la niña, niño o adolescente el alcance, contenido, temporalidad y medio de difusión, así como el original del medio por el que se documentó la opinión informada de la persona menor de edad, sobre su participación en la propaganda político-electoral, mensajes electorales, o su presencia en actos políticos, actos de precampaña o campaña conforme al manual y las guías metodológicas referidas en el Lineamiento 9, hecho contrario la autoridad estará obligada a salvaguardar la integridad, de los menores, así como a determinar las sanciones pertinentes al entonces precandidato y a la brevedad tomar las medidas cautelares pertinentes.

Es importante señalar que la fotografía publicada el 17 de febrero del 2024, a las 7:21 pm con el título "Gracias!, El entusiasmo me gana, más de 10 mil Mazatlecos nos reunimos para el cierre de precampaña que es uno de los primeros pasos para construir un mejor Mazatlán", , como se aprecia en la siguiente liga <https://www.facebook.com/photo/?fbid=384738334314708&set=pcb.384738434314698> en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del **C. Guillermo Romero Rodríguez**, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, en la cual también se identifican de forma directa niños, niñas y adolescentes, se presume no cumple el entonces precandidato **Guillermo Romero Rodríguez**, ni los Partidos Políticos PAN, PRI, PAS Y PRD con la obligación de llevar a cabo el difuminado del rostro de los menores, con lo anterior se encuentra aprovechándose de los indefensos menores, actuando con alevosía menoscabando los derechos político electorales y humanos de los niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo a lo señalado en el Anexo 3. emitido por el Instituto Nacional Electoral, de nombre "Instructivo para realizar la conversación y recabar la opinión informada de las niñas, niños y adolescentes en base en las guías metodológicas anexas", redactado con objeto de proporcionar una guía para realizar las conversaciones con niñas, niños y adolescentes, la cual les brinde la información oportuna, necesaria y suficiente a fin de que entiendan el alcance y los riesgos de su participación en propaganda político-electoral, mensajes electorales, o en actos políticos, actos de precampaña o campaña, así como sobre exhibición de su imagen, voz o cualquier dato que los identifique a través de cualquier medio de difusión, mismo, que pretende que en la información que se les proporciona a niñas, niños o adolescentes se les indique en qué medios y durante cuánto tiempo se va a difundir su imagen y de qué forma será su participación (activa o pasiva), por quién podría ser visto (familia, amigos y gente que no conoce) y los riesgos que implica ello, buscando establecer el mecanismo para garantizar que la opinión que se recabe sea expresa, propia, individual, libre, informada y espontánea, además de que sea acorde a la edad, desarrollo cognitivo y madurez de la persona menor de edad, evidenciado con la fotografía subida el 17 de febrero del 2024, a las 7:21 pm con el título "Gracias!, El entusiasmo me gana, más de 10 mil Mazatlecos nos reunimos para el cierre de precampaña que es uno de los primeros pasos para construir un mejor Mazatlán", , como se aprecia en la siguiente liga <https://www.facebook.com/photo/?fbid=384738334314708&set=pcb.384738434314698> en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del **C. Guillermo Romero Rodríguez**, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, en la cual se identifican de forma directa niños, niñas y adolescentes, el denunciado tiene y tuvo la obligación de cumplir cabalmente dicha metodología, con el objetivo claro de brindar la información oportuna, necesaria y suficiente a fin de que entiendan el alcance y los riesgos de su participación en propaganda político-electoral, mensajes electorales, o en actos políticos, actos de precampaña o campaña, así como de darle certeza y seguridad jurídica a los niños, niñas y adolescentes.

El Anexo 2. con título "Manual para recabar la opinión y el consentimiento informado de niñas, niños y adolescentes para la utilización de su imagen, voz o cualquier dato que los haga identificables en propaganda político-electoral y mensajes electorales, actos políticos, de precampaña o campaña a través de cualquier medio de difusión", señala en su punto IV, inciso a), para las Niñas y niños

de 6 a 11 años, la obligación de recabar la opinión y el consentimiento informado de niñas, niños y adolescentes para la utilización de su imagen, voz o cualquier dato que los haga identificables en propaganda político-electoral y mensajes electorales, actos políticos, de precampaña o campaña a través de cualquier medio de difusión, antes de la elaboración o producción de la propaganda político-electoral o mensajes electorales, o previo a la participación en un acto de precampaña o campaña, así como un consentimiento informado durante la elaboración de videos o cualquier tipo de propaganda o mensaje electoral (previo a la difusión) y después de la difusión; o durante la celebración de actos políticos, de precampaña o campaña y su aparición en redes sociales o cualquier plataforma digital tales como Twitter, "X", YouTube, Facebook, y notas emitidas por periódicos digitales, o por influencers, que posicionan o apoyen al candidato.

Concatenado a lo anterior en el punto IV, inciso b), el cual señala que las niñas, niños y adolescentes, antes de la elaboración o producción de la propaganda político-electoral o mensajes electorales, o previo a la participación en un acto de precampaña o campaña. Consentimiento informado durante la elaboración de videos o cualquier tipo de propaganda o mensaje electoral (previo a la difusión) y después de la difusión; o durante la celebración de actos políticos, de precampaña o campaña y su aparición en redes sociales o cualquier plataforma digital, considerando que el denunciado no cumplió con los requisitos mínimos necesarios establecidos en la Ley para utilizar la imagen de los menores de edad; aunado a que, a no existe motivo, causa o fin lícito y legítimo para la aparición de éste en la fotografía subida en fecha 17 de febrero del 2024, a las 7:21 pm con el título "Gracias!, El entusiasmo me gana, más de 10 mil Mazatlecos nos reunimos para el cierre de precampaña que es uno de los primeros pasos para construir un mejor Mazatlán", , como se aprecia en la siguiente liga <https://www.facebook.com/photo/?fbid=384738334314708&set=pcb.384738434314698> en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del **C. Guillermo Romero Rodríguez**, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal.

Así mismo, la resolución número SUP-REP-170/2018 y SUP-REP-5/2019. Tesis XXIX/2018 PROPAGANDA POLÍTICA ELECTORAL. CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTOS DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN. señala lo siguiente;

... III. La protección reforzada del derecho a la propia imagen de menores de edad Los menores de edad, como cualquier persona, gozan del derecho a la propia imagen, como un derivado del derecho a la privacidad y, en dicho sentido, tienen la protección de dicho derecho fundamental frente a intromisiones indebidas. Esto ha sido reconocido no sólo por los tribunales nacionales, sino por diversos organismos internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño, firmada en 1989, establece que (Artículo 16): 1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. 2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef), en el documento de debate sobre los derechos de los niños en el mundo digital, 17 señala que, a pesar de que el derecho a la intimidad de los menores y las personas adultas tiene la misma protección, es evidente que, considerando los demás derechos, el mejor interés y capacidades en evolución de los menores, es necesario un enfoque diferenciado de la protección del derecho a la intimidad de los menores En dicho sentido, en la Observación General No. 14 del Comité de los Derechos del Niño (CRC/C/GC/14), se explica que el "interés superior del niño" es un concepto triple que involucra un derecho sustantivo, un principio interpretativo y una norma de procedimiento. Como principio interpretativo, este concepto implica que "si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño". Como norma de procedimiento implica que "siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados" (párr. 6). En el caso de que los derechos de otras personas entren en conflicto con el interés superior del niño y no sea posible armonizarlos, el referido Comité resalta que las autoridades "habrán de analizar y sopesar los derechos de todos los interesados, teniendo

en cuenta que el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial significa que los intereses del niño tienen máxima prioridad y no son una de tantas consideraciones". El principio del interés superior de la niñez está también reconocido en el artículo 4, párrafo 9, de la Constitución Federal. En cuanto a la protección de la imagen de los menores, en el contexto español, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de España considera que "siempre que no medie el consentimiento de los padres o representantes legales de los menores con la ausencia del Ministerio Fiscal, la difusión de cualquier imagen de éstos ha de ser reputada contraria al ordenamiento jurídico" (Recurso 2895/2013). En dicho caso, el Tribunal determinó que publicar la fotografía de un menor en una revista gratuita sin el permiso de sus padres, vulnera su derecho a la imagen, a pesar de que la fotografía fue capturada por el tío del niño. Enfatizó que la violación se actualiza "por la inclusión de la imagen del menor en una revista con independencia de los fines perseguidos por su publicación o de que pudiera o no afectar a la reputación del afectado" y que lo decisivo es "la entrega de esta fotografía de un codemandado a otro sin que se acredite la existencia del consentimiento necesario para su publicación". Los derechos tutelados en el artículo 6 constitucional, no son exclusivamente oponibles a los partidos políticos, sino también a los particulares, por lo que es posible concluir que la propaganda y mensajes de contenido político o electoral que difundan las personas físicas y morales en la temporalidad referida por el numeral 24724 de la ley electoral, también deben ajustarse a la norma constitucional citada, siendo posible que en el caso de que no sea así, el sujeto emisor de la misma, pueda ser sancionado. • La Sala Especializada consideró necesario, a manera de acción preventiva, establecer un llamamiento respecto de aquellas personas físicas y morales vinculadas con cualquier fuerza política que elaboren o difundan por cualquier medio de comunicación legalmente previsto para hacerlo, cualquier tipo de propaganda política o electoral que, en determinado momento pudieran emitir en ejercicio de su libertad de expresión y participación política ya sea a favor o en contra de algún partido político, precandidato/a, candidato/a, aspirante, candidato/a independiente, coalición, dentro o fuera de un proceso electoral federal o local, para que tengan especial cuidado al utilizar cualquier elemento audiovisual que pudiera colocar en riesgo el interés superior de la niñez, ya que siempre debe tenerse presente que los derechos humanos de la niñez requieren de mayor respeto, protección y cuidado reforzado por parte de cualquier persona y no sólo de las autoridades. ... (Sic)

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=384738334314708&set=pcb.384738434314698>



Memo Romero ●

17 feb · 🌐

¡Gracias!

El entusiasmo me gana, más de 10 mil m... Ver más





Hechos que evidentemente vulnera el derecho a la intimidad, violenta su imagen, honra o reputación presente en su ambiente escolar o social y en su futuro, pues al llegar a la edad adulta puede no aprobar la ideología política con la que sus tutores, o aprovechada mente el precandidato lo vinculó durante su infancia, violando así, la normatividad local, federal y la convencionalidad que protege los derechos de los infantes que aparecen en su promoción electoral, sin cumplir con la normatividad electoral y los derechos humanos, constituyendo violaciones al proceso electoral, así como a la neutralidad, equidad e imparcialidad de la contienda a favor del precandidato conocido como Guillermo Romero Rodríguez.

Por su parte La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa establece lo siguiente:

... Artículo 11 Bis. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

...XVII. Derecho a la intimidad; ...

Artículo 66. *Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales.*

No podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación.

Quienes ejerzan su patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán orientar, supervisar, y en su caso, restringir sus conductas y hábitos sin que esto se considere injerencia, siempre que atiendan al interés superior de la niñez.

Artículo 67. *Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación locales, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez.*

Artículo 67 Bis. *Cualquier medio de comunicación que difunda entrevistas a niñas, niños y adolescentes, procederá como sigue:*

I. Deberá recabar el consentimiento por escrito o cualquier otro medio, de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente, respectivamente, conforme a lo señalado en el artículo anterior y a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 66 de la presente Ley; y,

II. La persona que realice la entrevista será respetuosa y no podrá mostrar actitudes ni emitir comentarios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

En el caso de que no sea posible recabar el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de un adolescente, éste podrá otorgarlo siempre que ello no implique una afectación a su derecho a la privacidad por el menoscabo a su honra o reputación.

(Adic. Según Decreto No. 434, publicado en el P.O. No. 063, del 24 de mayo de 2023).

Artículo 67 Bis 1. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la protección de la identidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes que sean víctimas, ofendidos, testigos o que estén relacionados de cualquier manera en la comisión de un delito, a fin de evitar su identificación pública.

La misma protección se otorgará a adolescentes a quienes se les atribuya la realización o participación en un delito, conforme a la legislación aplicable en la materia.

(Adic. Según Decreto No. 434, publicado en el P.O. No. 063, del 24 de mayo de 2023).

Artículo 67 Bis 2. Los medios de comunicación deberán asegurarse que las imágenes, voz o datos a difundir, no pongan en peligro, de forma individual o colectiva, la vida, integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes, aun cuando se modifiquen, se difuminen o no se especifiquen sus identidades, y evitarán la difusión de imágenes o noticias que propicien o sean tendentes a su discriminación, criminalización o estigmatización, en contravención a las disposiciones aplicables.

En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente artículo, niñas, niños o adolescentes afectados, por conducto de su representante legal o, en su caso, de la Procuraduría de Protección, actuando de oficio o en representación sustituta, podrá promover las acciones civiles de reparación del daño e iniciar los procedimientos por la responsabilidad administrativa a que haya lugar; así como dar seguimiento a los procedimientos hasta su conclusión. Niñas, niños o adolescentes afectados, considerando su edad, grado de desarrollo cognoscitivo y madurez, solicitarán la intervención de la Procuraduría de Protección.

En resumidas cuentas dichas publicaciones se encuentran plagadas de actos constitutivos de infracciones electorales y delitos, de los cuales debe enterarse a las autoridades pertinentes, cómo lo son, la violación a **los Lineamientos Generales para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de Propaganda y Mensajes Electorales** establecidos por el Instituto Nacional Electoral y al **Reglamento del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa**, para la difusión, fijación y retiro de la propaganda política y electoral, la **Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes**, la **Ley General de Transparencia y Acceso a la Información**, la **Convención de los Derechos del Niño**, lo que lleva a violentar la neutralidad, equidad e imparcialidad de la contienda, por lo que se pide a esta Autoridad en apego al protocolo de actuación de quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Octavo. Que el 09 de abril del 2024, a las 7:21 pm con el título "Hoy tuve el placer de saludar a mis amigas. ¡Mujeres empacadoras!, fue un encuentro lleno de alegría y camaradería. Gracias por la invitación y por compartir este momento conmigo!", como se aprecia en la siguiente liga <https://www.facebook.com/share/r/jm3kkKdoV1cbpJQB/?mibextid=oFDknk> en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del **C. Guillermo Romero Rodríguez**, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, es importante señalar que en primer término se debe considerarse propaganda electoral, así como un acto político por cumplir con los requisitos para el efecto, y de lo acontecido el precandidato difundió varias imágenes de niños, niñas y adolescentes, ello para promocionar su campaña política y posicionar su imagen ante los electores, lo cual vulnera el derecho a la intimidad de los infantes que aparecen en su promoción electoral, y se presume puede devenir en un riesgo potencial, en relación con la imagen, honra o reputación presente en su ambiente escolar o social y en su futuro, pues en la edad adulta al decidir sobre su ideología política puede no aprobar con la que fue relacionado desde la infancia, en consecuencia a lo anterior el precandidato **Guillermo Romero Rodríguez**, así

como los partidos políticos PAN, PRI, PAS Y PRD, no protegen el interés superior del menor pues anteponen la auto-determinación arbitraria del candidato y los partidos en el contenido de sus promocionales, publicados en diversos medios, sin cumplir con la normatividad electoral, señalada en el Lineamiento para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, emitido el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo General, mediante Acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales, en acatamiento a la sentencia SUP-REP60/2016 de la Sala Superior, y SRE-PSC-102/2016 de la Sala Regional Especializada, ambas salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación” (en adelante Lineamientos), identificado con la clave INE/CG20/2017.

En los cuales se señalan las formas de aparición y participación de niñas, niños o adolescentes, siendo de manera directa en propaganda político electoral y mensajes electorales; y directa o incidental en actos políticos, actos de precampaña o campaña. En un acto político, un acto precampaña o campaña, la aparición es incidental, siempre y cuando las niñas, niños o adolescentes sean exhibidos de manera involuntaria y sin el propósito de que formen parte de éstos, por ser situaciones no planeadas o controladas por los sujetos obligados.

Así mismo se observa de la fotografía publicada en fecha 09 de abril del 2024, a las 7:21 pm con el título “Hoy tuve el placer de saludar a mis amigas. ¡Mujeres empacadoras!, fue un encuentro lleno de alegría y camaradería. Gracias por la invitación y por compartir este momento conmigo!”, como se aprecia en la siguiente [liga](https://www.facebook.com/share/r/jm3kkKdoV1cbpJQB/?mibextid=oFDknk) <https://www.facebook.com/share/r/jm3kkKdoV1cbpJQB/?mibextid=oFDknk> en la cuenta “POLÍTICA VERIFICADA”, de la red social Facebook del **C. Guillermo Romero Rodríguez**, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, en la cuenta “POLÍTICA VERIFICADA”, de la red social Facebook del **C. Guillermo Romero Rodríguez**, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, mediante la cual se difundieron varias imágenes de niñas, niños o adolescentes, donde se tienen una participación **DIRECTA, lo anterior** en un acto político electoral, pues de la imagen en un análisis exhaustivo se observa a los menores, manifestando un apoyo directo al hacer gestos de manera corporal, acreditando entonces su participación activa y directa, con objeto de promocionar la campaña política del precandidato, y posicionar su imagen ante los electores, lo cual vulnera el derecho a la intimidad de los infantes así como su imagen, honra o reputación, presente en su ambiente escolar o social y en su futuro, pues a la edad adulta puede NO APROBAR la ideología política con la que fue identificado en su infancia.

La aplicación convencional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala que la aparición de menores de edad en propaganda política o electoral implica un riesgo potencial de ASOCIAR a los menores con una determinada preferencia política o ideológica.

Es de importancia señalar que la protección del interés superior del menor se antepone a la libertad de los partidos de autodeterminar el contenido de sus promocionales.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala que se debe partir de una concepción de niños, niñas y adolescentes como titulares activos de derechos y no solamente como sujetos de protección, bajo el derecho del infante a la preservación de su imagen, considerando que una exposición inadecuada puede fomentar estereotipos o una situación de riesgo para el menor, garantizando con una correcta aplicación de la norma, no ser objeto de injerencias en su vida privada, familia, domicilio, y correspondencia, así como no ser atacado en su honor y reputación.

En todas las decisiones y actuaciones el Estado velará y cumplirá con el principio del Interés superior de la Niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Es decir, los niños, las niñas y adolescentes tienen derecho a que, antes de que se tome cualquier medida que pueda influir sobre estos se evalúen y ponderen las posibles repercusiones, a fin de decidir por la que promueva y proteja sus derechos, considerando que **la propia imagen de los menores de edad, goza de protección, por lo que su exhibición implica un riesgo potencial**, así mismo la propaganda política o electoral es un riesgo potencial porque siempre hay un elemento ideológico o preferencia política.

Concatenado a lo anterior, la resolución número **SRE-PSC-121/2015** tituló **USO INDEBIDO DE LA PAUTA POR LA DIFUSIÓN PROPAGANDA ELECTORAL QUE AFECTA AL INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES**. señala lo siguiente;

El promovente alude a la supuesta vulneración a los derechos de los menores que aparecen en el promocional denominado Quien pompo 2, en torno a la utilización de su imagen y la protección de sus datos personales, e invoca y transcribe el contenido del artículo 4, párrafo noveno²³, de la Constitución Federal, en el cual se prescribe la obligación del Estado de velar por el interés superior de la niñez y garantizar de manera plena los derechos de los menores.

Al respecto, se tiene en cuenta que el contenido de la propaganda difundida por los partidos políticos se encuentra amparada por la libertad de expresión, en relación a la cual, el Tribunal Electoral ha sostenido en reiteradas ocasiones que debe ser objeto de maximización en el contexto del debate político, a efecto de que se aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática.²⁴

No obstante, el ejercicio de dicha libertad fundamental no es absoluto, sino que tiene límites, entre los que se encuentran, los vinculados con la dignidad o la reputación de las personas y los derechos de terceros, acorde con lo dispuesto en los artículos 6º, párrafo primero de la Constitución Federal²⁵, así como 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles²⁶ y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos²⁷.

En tal virtud, la acotación en torno a los aspectos que no deben perturbarse con las expresiones de ideas, se traduce en una obligación de abstenerse de incurrir en tales conductas a efecto de salvaguardar los bienes jurídicos ahí protegidos, como lo es, el pleno respeto a los derechos de terceros, incluyendo, por supuesto los derechos de los menores, cuya protección se encuentra expresamente ordenada en el artículo 4º de nuestra Constitución Federal.

Por tanto, la comisión de alguna conducta que provoca la inobservancia de tal obligación, implica por sí misma un aspecto que atenta contra el propio orden constitucional y, en el caso de la materia electoral, constituye una vulneración específica en cuanto al uso del tiempo pautado por el INE para la difusión de la propaganda electoral, en términos de lo dispuesto en el artículo 247, párrafo 1, de la Ley Electoral.

Así, la Sala Superior²⁸ ha señalado que en el derecho administrativo sancionador electoral el "tipo" infractor se constituye con los elementos siguientes:

- (i) Una norma que contenga una obligación o una prohibición a cargo de algún sujeto.*
- (ii) Otra norma con una prevención general, relativa a que, si alguien inobserva la ley (ya sea por incumplir alguna obligación o por violar una disposición), se impondrán sanciones.*
- (iii) Un catálogo general de sanciones aplicables cuando se inobserve la normativa.*

Luego, en el caso de la normativa sobre la cual se afirma su incumplimiento, los elementos que constituyen el tipo administrativo electoral que nos ocupa, se obtienen de los referidos artículos 4 y 6, párrafo primero de la Constitución Federal en torno a que en la difusión de las ideas se atienda a la obligación de respetar los derechos de terceros y, en específico, los derechos de los menores; ello, en relación con el artículo 247, párrafo 1, de la Ley Electoral, referente al mandato

específico de que en el uso de las pautas asignadas para la difusión de propaganda electoral se acaten los lineamientos constitucionales.

Lo anterior, se relaciona con lo dispuesto en los diversos 25, párrafo 1, incisos a) y u), de la Ley de Partidos Políticos y 443, párrafo 1, incisos a) y n) de la Ley Electoral, en los que se establece la prevención general concerniente a la inobservancia de las disposiciones establecidas en la normativa electoral.

Y finalmente, el catálogo de sanciones aplicables se encuentra previsto en el artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la Ley Electoral, toda vez que el sujeto denunciado en el presente caso, resulta ser un partido político.

En tales condiciones, el tipo administrativo electoral antes referido se actualiza cuando en el uso de las pautas asignadas por el INE se difundan mensajes que puedan afectar derechos de terceros, y que en el caso, resultan ser menores de edad, a quienes debe garantizárseles sus derechos en el marco de su interés superior.

Al respecto, se tiene en cuenta el concepto de "interés superior del niño", el cual ha sido descrito por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al destacar que "implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño".^[11]

Así, el Estado Mexicano, a través de sus instituciones, autoridades y tribunales, está constreñido a tener en consideración primordial el respeto al interés superior del menor, a través de la adopción de las medidas necesarias para asegurar y maximizar la protección y efectividad de los derechos de los niños, acorde con lo establecido en los artículos 3, párrafo 1 y 4,^[12] de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En esa tesitura, acorde con el "Protocolo de actuación de quienes imparten justicia en caso que involucren niñas, niños y adolescentes" emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el interés superior del niño tiene las siguientes implicaciones:

- a) coloca en plena satisfacción de los derechos del niño como parámetro y fin en sí mismo;
- b) define la obligación del Estado respecto del niño, y
- c) orienta decisiones que protegen los derechos del niño.

Por ello, la Primera Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la mera situación de riesgo de los menores es suficiente para que se estime que se afectan los derechos de los niños y, ante ello, deben adoptarse las medidas que resulten más benéficas para la protección de los infantes.^[13]

Pues bien, en el caso que nos ocupa, la supuesta vulneración al interés superior del menor se desarrolla a través de la exposición de la imagen de diversos niños que participan en el promocional denunciado, de ahí que, la afectación concreta a analizar se refiera al derecho a la propia imagen de los menores participantes.

Para tal efecto, se parte de la base relativa a que el derecho a la propia imagen de los menores goza de una protección especial, de ahí que para el otorgamiento de la salvaguarda judicial es suficiente que los menores se ubiquen en una situación de riesgo potencial, sin que sea necesario que esté plenamente acreditado el perjuicio ocasionado, pues, en congruencia con el interés superior de los niños, debe operar una modalidad del principio *in dubio pro infante*, a fin de dar prevalencia al derecho de los menores, por encima del ejercicio de la libertad de expresión, con el objeto de que se garanticen los derechos de los niños, por encima de cualquier duda que se presente en los casos que se analicen.

En similares términos el Tribunal Constitucional de España ha establecido que "en los casos en que se analice la captación y difusión de fotografías de niños en medios de comunicación social, [...] es preciso tener en cuenta, que el ordenamiento jurídico establece una protección especial, en aras a proteger el interés superior del menor".^[14]

Asimismo, señala el mismo Tribunal Constitucional Español que el derecho a la propia imagen "se configura como un derecho de la personalidad, que atribuye a su titular la facultad de disponer de la representación de su aspecto físico que permita su identificación, lo que conlleva tanto el derecho a determinar la información gráfica generada por los rasgos físicos que le hagan reconocible que

puede ser captada o tener difusión pública, como el derecho a impedir la obtención, reproducción o publicación de su propia imagen por un tercero no autorizado".¹¹⁵³

Así, en el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño¹¹⁵⁴, se establece que ningún niño puede ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, ni ataques ilegales a su honra y reputación y, por su parte, en los artículos 76 y 77 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes¹¹⁵⁵ se contempla igualmente la salvaguarda de los menores ante cualquier riesgo de afectación o manejo directo de su imagen, nombre, datos o referencias que permitan su identificación.

Pues bien, en el caso de la propaganda política o electoral hay siempre presente un elemento ideológico que identifica a la opción política que la presenta, por tanto, en principio, la utilización de menores en la misma implica un riesgo potencial de asociar a tales infantes con una determinada preferencia política e ideológica.

Lo anterior puede devenir en un riesgo potencial en relación con su imagen, honra o reputación presente en su ambiente escolar o social y, por supuesto, en su futuro, pues al llegar a la vida adulta pueden no aprobar la ideología política con la cual fueron identificados en su infancia.

En ese sentido, acorde con la disposiciones internacionales y nacionales antes descritas, esta Sala Especializada se encuentra obligada a determinar la implementación de todas aquellas medidas que sirvan para evitar que se presenten tales situaciones de riesgo potencial que puedan afectar el interés superior del menor en relación con los promocionales de contenido político electoral.

Así, en una primera actuación, necesaria para garantizar que no se presenta alguna situación de riesgo, es criterio de esta Sala, que la autoridad que analice en algún momento, un promocional político en que participen menores, deberá contar con la plena certeza de que se respetó el elemento relativo al consentimiento parental o, en su caso, de los tutores, en torno a su participación en la propaganda electoral, toda vez de lo dispuesto por los artículos 424 y 425 del Código Civil Federal y sus correlativos de los códigos civiles de la República Mexicana.

Igualmente, tal autoridad deberá garantizar el derecho que tienen los infantes de ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, en términos de lo dispuesto en el artículo 71¹¹⁵⁶ de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Al efecto, y como elementos instrumentales de tales derechos, directamente relacionados con el interés superior del menor, la autoridad que analice la validez de promocionales de contenido político electoral deberá verificar lo siguiente:

i. Consentimiento por escrito debidamente firmado por el padre y la madre o por quien(es) ejerza(n) efectivamente la patria potestad o tutela del menor.

Tal documento se acompañara de copia certificada del acta de nacimiento, o bien, constancia de pérdida de patria potestad o acta de defunción del padre o madre que no firme (para el caso de que se otorgue solo por uno de los padres o tutores).

ii. Manifestación del menor por cuanto hace a su opinión libre y expresa respecto de su participación en el promocional electoral en cuestión. Tal opinión será valorada atendiendo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

iii. El consentimiento parental o, en su caso, de los tutores, y la manifestación de la opinión del menor deberá ser ratificado ante la Oficialía Electoral del INE o fedatario público, a fin de que se haga constar el otorgamiento del mismo en un acto revestido de fe pública. Lo anterior a fin generar certeza y garantizar plenamente el interés superior de los menores.

Asimismo, aunado a contar con la certeza plena en torno al otorgamiento del consentimiento respectivo, acorde con las condiciones antes relatadas, la autoridad que en su momento, analice la validez del promocional político en que participen menores de edad deberá valorar minuciosa y neutralmente su contenido, a fin de que, tomando en cuenta su edad y madurez, se les garantice entre otras cuestiones: pleno respeto a su imagen, honra, nombre o datos personales, evitando en todo caso situaciones de riesgo, que de manera actual o al menos potencial, pudieran correr en su entorno social o educativo por su participación en tal promocional electoral.

Además, tal autoridad, ya sea administrativa o judicial, deberá allegarse de los elementos necesarios para analizar y justificar de manera razonable el motivo y necesidad sustantiva para la participación de los menores en mensajes de propaganda política electoral. Tal cuestión deberá ser ponderada en cada caso, en relación con el interés superior del menor y garantizando objetivamente el pleno respeto a su desarrollo físico, psíquico y emocional.

Ahora bien, en la especie, no se tiene plena certeza en relación a que efectivamente se haya otorgado el consentimiento necesario para la participación de los menores en el promocional denominado Quien pompo 2.

El PAN allegó documentación con la intención de acreditar que efectivamente se recabó la autorización de los padres o tutores, para la participación de los menores en el promocional denunciado, sin embargo, se trata de elementos que no cumplen con las características y formalidades legales razonables para acreditar lo que pretenden

Esto es, en el promocional denunciado se aprecia a simple vista que en el desarrollo del mismo participaron cuando menos veintiún niños y, a pesar de ello, el PAN solamente allegó nueve "cartas de autorización",^[19] aunque la Unidad Técnica le requirió la documentación que acreditara el otorgamiento del consentimiento de parte de quienes ejercen la patria potestad o tutela de quienes aparecen en el promocional.

En tales condiciones, no se cuenta con elementos que sirvan para acreditar el otorgamiento del consentimiento en torno a cuando menos doce menores que participaron en la propaganda denunciada, lo cual, es suficiente para estimar que se vulneró al menos potencialmente, el derecho a la propia imagen de tales menores, al no contar con la autorización relativa a su aparición en el promocional.

Además, el contenido mismo de tales cartas carece de las formalidades necesarias para dotar de plena certeza el acto de autorización que ahí se pretende hacer constar, de hecho, en tres de ellas^[20] ni siquiera se asienta el nombre del padre o la madre quienes firmaron tal documento.

Por otra parte, en la totalidad de las cartas aportadas, consta solamente la firma de uno de los padres y no de ambos, sin que se haga precisión respecto a la razón de la ausencia del otro padre o madre; ni se acompaña documentación que acredite el parentesco de quien firma en representación de los menores.

En ese sentido, no hay certeza de que quien firmó efectivamente sea el padre o la madre del menor, en ejercicio efectivo de su patria potestad.

Finalmente, no obra en autos documento alguno que evidencie que se tomó en cuenta la opinión libre y expresa del menor.

Así las cosas, esta Sala Especializada determina que no se implementaron las medidas necesarias para garantizar que los padres o tutores de los menores otorgaran su consentimiento para la aparición de los mismos en el promocional electoral denunciado, de ahí que se estime que se vulneró el interés superior del menor y, por ende, se actualiza la infracción que se denuncia, sin que sea necesario analizar el contenido del mismo.

Luego entonces, al haberse acreditado la infracción relativa al uso indebido de la pauta por la difusión de propaganda electoral que vulnera el interés superior del menor, se vincula al Instituto Nacional Electoral para que adopte las medidas necesarias a fin de que no se difunda el promocional denominado Quien pompo 2 (RV00738-15) bajo ningún tipo de pauta, ni federal ni local, atendiendo a que el mismo ha sido determinado ilegal en esta resolución y con la finalidad de evitar que se genere alguna situación que pueda poner en riesgo a los menores que aparecen en el mismo.

Asimismo, cabe indicar que es criterio de esta autoridad judicial que en el caso de los asuntos en que se aborde una posible afectación al interés superior del menor, corresponde a la persona que realiza la exposición de los niños acreditar que efectivamente actuó salvaguardando la integridad y las prerrogativas de los mismos, pues de lo contrario, se desnaturalizaría por completo la obligación de las autoridades de velar por el pleno respeto a los derechos de los niños, en tanto que actuaría una suerte de presunción de legalidad en torno a potenciales situaciones de riesgo para los menores, en vez de que se optara por emprender acciones que sirvan para tener la plena certeza respecto a la protección de los mismos.

En ese sentido, y considerando que el PAN en la contestación al requerimiento de fecha doce de mayo, indicó que no había contratado a empresa alguna para la participación de los menores en el promocional referido, se evidencia que es el único responsable por su participación sin el debido consentimiento parental o, en su caso, de los tutores, en el promocional político electoral pautado por ese mismo instituto político.

De la misma manera la resolución **TESIN-PSE-39-2021**, emitida por el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, declara la existencia de la infracción por incurrir en actos violatorios a los Lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños, y adolescentes en materia político-electoral por parte de Fernando Pucheta Sánchez, candidato a la presidencia municipal de Mazatlán, mismo que señala lo siguiente:

En el perfil de la red social Facebook del denuncia, los días 14 de marzo, 09, 10, 14, 15, 19, y 21 de abril, 06, 07, 17, y 28 de mayo, publica y difunde varias imágenes de niños, niñas y adolescentes, ello para promocionar su campaña política y posicionar su imagen ante los electores, lo cual a su decir, vulnera el derecho a la intimidad de los infantes que aparece en su promoción electoral, sin cumplir con la normativa electoral ya que divulga el rostro de niños y niñas sin tener el consentimiento de las personas que ejercen sobre ellos la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente en función de la edad y madurez, sin que se advierta que el denunciado haya difuminado el rostro de los menores.

Marco normativo. Interés superior de la niñez. -

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 19, establece que toda niña, niño y adolescente, tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del estado.

Por su parte la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña en su artículo 3, establece que en todas las medidas que los involucren se deberá atender como consideración primordial el interés superior de la niñez.

sobre lo anterior, el comité de los derechos del niño y de la niña de la organización de las naciones unidas, en su observación general 14 del 2013, sostuvo que el concepto del interés superior de la niñez, implica tres vertientes;

Derecho sustantivo: Consistente en el derecho de la niñez a que su interés superior sea valorado y tomado como de fundamental protección cuando diversos intereses estén involucrados, con el objeto de alcanzar una decisión sobre la cuestión a resolver.

Un principio fundamental de interpretación legal: cuando se esté ante una previsión legal abierta, a más de una interpretación, se debe optar por aquella que ofrezca una protección más efectiva al interés superior de la niñez.

una regla procesal: cuando exista una decisión que pudiera afectar a la niñez o adolescencia, específicamente o en general a un grupo identificable o no identificable, en el proceso para la toma de la misma, se debe incluir una evaluación del posible impacto, ya sea negativo o positivo, de la decisión sobre la persona menor de edad involucrada.

Así mismo se ha señalado que el concepto de interés superior de la niñez no es nuevo, sino que ya se consagraba en la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, y en la convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, por lo que se toma como un concepto dinámico que debe evaluarse adecuadamente en cada concepto., cuyo objetivo debe ser el garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos para él o la menor.

Por su parte el artículo cuarto de nuestra Constitución General, en su noveno párrafo establece que el Estado en todas su decisiones y actuaciones velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando así de manera plena sus derechos.

Así mismo, en la ley general de las niñas, niños y adolescentes, en sus artículos segundo y dieciocho se establece que el interés superior de la

niñez, deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucren niñas, niños y adolescentes.

Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en la jurisprudencia de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO", que, para la determinación en concreto del interés superior de la niñez, se debe atender a sus deseos, sentimientos, y opiniones, siempre que sean compatibles con sus necesidades vitales.

Aparición de niñas, niños, y adolescentes en la propaganda electoral.

La propaganda electoral difundida por los partidos políticos, se encuentra amparada por la libertad de expresión, que se consagra en el artículo sexto Constitucional, sin embargo, dicha libertad no es absoluta pues encuentra sus límites en la dignidad, y reputación de las personas y los derechos de las mismas, dentro de las cuales se encuentran las de los niños, niñas y adolescentes.

Por lo expuesto el Instituto Nacional Electoral emitió los Lineamientos para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en materia político-electoral, cuyo objetivo es establecer las directrices para la protección de los citados que aparezcan en la propaganda político-electoral, mensajes electorales y en actos políticos, actos de precampaña o campaña de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas independientes, así como de los mensajes transmitidos por las autoridades electorales, federales y locales, o las personas físicas o morales que se encuentren vinculadas directamente a uno de los sujetos mencionado, atendiendo a su calidad o naturaleza jurídica, por cualquier medio de comunicación y difusión, incluida las redes sociales o cualquier plataforma digital, sea esta transmitida en vivo o videograbada, debiendo ajustar los sujetos antes mencionados sus actos de propaganda político-electoral, o mensajes a través de radio o televisión, toda vez que:

- a. pueden aparecer de manera directa e incidental en la propaganda.
- b. Cuando se utilice la imagen, voz o cualquier otro dato que les haga identificable, se deberá proporcionar la máxima información sobre sus derechos, opiniones y riesgos respecto de su aparición en la propaganda político electoral.
- c. Si la aparición es incidental y ante la falta de consentimientos, se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, voz, o cualquier otro dato que le haga identificable, garantizando la máxima protección de su dignidad o derechos.

Es importante mencionar la Jurisprudencia **20/2019** en la que se determina la obligación que CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN; como sea.

PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º y 4º, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 y 14 de los Lineamientos Generales para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de Propaganda y Mensajes Electorales establecidos por el Instituto Nacional Electoral; y en la Jurisprudencia de la Sala Superior 5/2017, de rubro PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CUMPLIRSE CUANDO SE DIFUNDAN IMÁGENES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, se advierte que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. En ese sentido, cuando en la propaganda político-electoral, independientemente si es de manera directa o incidental, aparezcan menores de dieciocho años de edad, el partido político deberá recabar por escrito el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o tutela, y en caso de que no cuente con el mismo, deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que haga identificable a los niños, niñas o adolescentes, a fin de salvaguardar su imagen y; por ende, su derecho a la intimidad.

Aunado a lo anterior, la resolución número **SUP-JE-144/2021**, Sentencia que confirma la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, en el procedimiento especial sancionador, que declaró existente la violación a los requisitos sobre la aparición de menores en propaganda electoral, atribuida a Fernando Alejandro Larrazábal Bretón y al Partido Acción Nacional, este último promovente del juicio electoral. señala lo siguiente;

La imagen de una niña, niño o adolescente en fuentes de acceso público es insuficiente para poderla incluir en propaganda electoral a) Marco jurídico La imagen es la reproducción identificable de los rasgos físicos de una persona sobre cualquier soporte material. 9 El derecho a la propia imagen constituye uno de los derechos inherentes de la persona, que le permite disponer de su apariencia; considerado por la Suprema Corte como un derecho de defensa y garantía esencial para la condición humana, porque puede reclamarse tanto en defensa de la intimidad violada o amenazada como exigir del Estado que prevenga la existencia de eventuales intromisiones que lo lesione. 10 Si bien no es un derecho absoluto tendría que justificarse su intromisión por un interés público, o bien, cuando se cuente con el consentimiento u autorización de la persona. 11 Estos límites sobre la captación, reproducción o publicación de la imagen de una persona tratándose de menores de edad exige una protección reforzada debido al interés superior de la niñez. El interés superior de la niñez es un principio constitucional y convencional de interpretación que ante la toma de una decisión que involucre niñas, niños y adolescentes se debe evaluar y ponderar las 9 Véanse artículos 16 y 17 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal. 10 Véase tesis P. LXVII/2009, emitida por el Pleno, de rubro: "DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA." 11 Por ejemplo, la Ley Federal del Derecho de Autor establece como infracción en materia de comercio el utilizar una imagen de una persona sin su autorización o la de sus causahabientes (artículo 231, f.II). SUP-JE-144/2021 10 posibles repercusiones en sus derechos y asegurar una protección plena. 12 Dicho principio exige la prevalencia de los derechos de la infancia frente a cualquier otro interés, por lo que ante un conflicto se debe ponderar por encima de cualquier otro ese derecho infantil. 13 Así, la Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 3 que el niño (a) tiene derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten. 14 De modo que, cualquier medida o decisión pública que pueda afectarlos (a) requiere adoptar medidas reforzadas o gravadas, para protegerlos con una mayor intensidad. 15 12 Véase artículo 4º de la Constitución, en su párrafo noveno, que dice: "En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez." Asimismo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece en su artículo 2 y 3 párrafos: "El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales." 13 Acción de inconstitucionalidad 2/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pfo. 129: "En suma, el ejercicio de los derechos fundamentales de las niñas y los niños se encuentran por encima de cualquier otro interés, incluyendo el de sus padres, pues, al ser la infancia concebida ya como sujeto de derechos, los niños y las niñas pueden ejercerlos en todo momento y las autoridades están no sólo obligadas a garantizar ese ejercicio, sino a velar porque el mismo se cumpla. Cuando se anteponen los derechos de la infancia con los de sus padres, la autoridad tiene obligación de ponderar por encima de cualquier otro, ese derecho infantil." 14 Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 15 Tesis aislada 1a. LXXXIII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL." SUP-JE-144/2021 11 Por eso, las autoridades del Estado deben garantizar y sancionar aquellas intromisiones arbitrarias e ilegales en la intimidad de las niñas, niños y adolescentes, que atenten contra su honra, imagen y reputación. Así, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes considera una violación a su intimidad, cualquier manejo directo de su imagen en los medios de comunicación con una concesión o medios impresos (art. 77). Asimismo, dicha ley considera una vulneración a la intimidad de las y los menores, cualquier manejo

directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación, bien porque menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o los ponga en riesgo. Ahora bien, el INE emitió los Lineamientos para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes que aparezcan en la propaganda políticoelectoral. Los sujetos obligados a esas directrices son los partidos políticos, coaliciones, candidaturas, autoridades y personas físicas o morales que se encuentren vinculadas. Los Lineamientos obligan a que en cualquier acto, mensaje o medio de difusión de propaganda político-electoral en el que aparezcan niñas, niños o adolescentes ya sea de manera directa o incidental, debe existir el consentimiento de quien o quienes ejerzan la patria potestad o el tutor o, en su caso, la autoridad debe suplirlos. Al igual deben contar con las manifestaciones de los menores sobre su opinión libre e informada respecto a la propaganda en la que participen. En caso de que no se tenga esa documentación, independientemente si la aparición fue directa o incidental se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que haga SUP-JE-144/2021 12 identificable a los niños, niñas o adolescentes, a fin de salvaguardar su imagen y, por ende, su derecho a la intimidad. 16 También, este órgano jurisdiccional ha señalado que los Lineamientos son aplicables en las imágenes que difundan las candidaturas en redes sociales. 17 b. Valoración de la Sala Superior El actor se duele de que la responsable omitió pronunciarse respecto a que en el motor de búsqueda "https://tineye.com" se podía observar que al menos hay otras ciento un publicaciones que utilizan la misma imagen genérica de la menor que apareció en las publicaciones del candidato denunciado y que no se podía presumir que el material hubiera sido producido en México o que correspondiera al presente año. Señaló que la plataforma estaba sujeta a las leyes de Israel con uso lícito de la propiedad intelectual. Al respecto, el Tribunal local determinó que los Lineamientos del INE eran aplicables sin importar que la imagen hubiera sido generada en otro país o tuviera un uso comercial, por lo que debían observarse las pautas de consentimiento e información ahí establecidas. Esta Sala Superior considera apegada a Derecho la determinación de la responsable porque el partido político parte de la premisa inexacta de que si las imágenes de menores se alojan en algún sitio público es innecesario demostrar una autorización para su uso en propaganda electoral. Jurisprudencia 20/2019 de rubro: "PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN." Véase tesis XXIX/2019, de rubro: "MENORES DE EDAD. LOS LINEAMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA SU PROTECCIÓN, SON APLICABLES A LAS IMÁGENES QUE DE ELLOS DIFUNDAN LAS CANDIDATURAS EN SUS REDES SOCIALES EN EL CONTEXTO DE ACTOS PROSELITISTAS." SUP-JE-144/2021 La premisa es incorrecta porque: El derecho a la imagen es uno de los derechos esenciales de la persona, que tratándose de menores de edad requiere de un escrutinio más estricto sobre su difusión, reproducción o captura, derivado del interés superior de la niñez y de que son un grupo vulnerable. Por eso, en materia electoral se necesita recabar el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela y la opinión informada de la o el menor, sin que se prevean excepciones al respecto. No puede extenderse un permiso o derecho de autor para disponer de una imagen de un infante o adolescente para usos electorales. En efecto, una autorización o consentimiento de una imagen para uso comercial o para aparecer en cierta página o sitio web no puede considerarse una cláusula abierta y usarse para fines no expresamente señalados. Pues la forma en cómo y dónde te muestras a los demás es un derecho esencial de toda persona derivado de su dignidad humana, que impide una difusión irrestricta de ésta. Más aún si la imagen o fotografía corresponde a menores de edad, el escrutinio es aún más estricto, porque no se puede perder de vista que ellas y ellos precisan de la representación de un adulto y son un grupo vulnerable que requieren una protección reforzada ante una posible afectación a su desarrollo. Por esa razón, en materia electoral rigen los Lineamientos emitidos por el INE que fijan los requerimientos para que puedan aparecer niñas, niños y adolescentes en la propaganda electoral. SUP-JE-144/2021. Los Lineamientos no establecen alguna excepción en su aplicación, incluso son exigibles en aquellos casos de apariciones incidentales de menores en propaganda electoral. Por lo que también en esos casos, los sujetos obligados deben recabar el consentimiento de la madre, padre o tutor, o en su caso, de la autoridad que los supla y de la opinión informada de la o el menor, de lo contrario tendrán que difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, voz o cualquier otro dato que los haga identificables. La circunstancia de que no existan hipótesis de excepción en las que sea innecesario el consentimiento es precisamente porque se trata de menores de edad, a los que se les debe garantizar la máxima protección de la dignidad y sus derechos. Si un partido político no confeccionó o adquirió la imagen no lo releva de la obligación constitucional y convencional de salvaguardar el interés superior de cualquier niña, niño o adolescente que aparezca en su propaganda política electoral. Lo anterior, debido a que los partidos políticos y las personas candidatas son responsables de proteger los derechos de la infancia desde el momento en que deciden insertar tales imágenes en su propaganda. Sin que sea suficiente exhibir un permiso del uso de la imagen porque en todo caso habría que revisar los términos y condiciones en que fue emitido, es decir, que

contenga la autorización de quienes representan al menor y, en su caso, un consentimiento informado del menor, pero, sobre todo, que permita su utilización para fines político electorales. De ahí que, deba desestimarse el planteamiento de que por tratarse de una fotografía extraída de una galería digital pública, eran inexigibles los Lineamientos porque esa razón es insuficiente para concluir que la SUP-JE-144/2021 15 imagen, el honor y la intimidad de la menor en cuestión efectivamente se encuentre protegido en ese sitio electrónico. 2. El partido no demostró tener una autorización para el uso electoral de la imagen de la menor. Era deber del partido demostrar que efectivamente tuviera una autorización electoral para poder incluir la imagen de la menor en las publicaciones del candidato. Sin embargo, el actor se limita a sostener que deben existir excepciones en la aplicación de los Lineamientos cuando la persona no está expuesta a riesgos que afecten su integridad personal. De modo que se trata de afirmaciones genéricas y subjetivas sin sustento probatorio que permita corroborar la licitud y autorización electoral para divulgar la fotografía de la menor, pues el hecho de que ésta se encuentre alojada en un buscador de Internet no equivale a demostrar que sea lícita su aparición. Máxime si se considera que la información, documentos, imágenes que circulan en la Red no necesariamente son lícito, dado que no hay un control previo sobre el contenido de las plataformas electrónicas. Incluso tratándose de niñas, niños y adolescentes hay muchos riesgos de que sus fotografías, imágenes, videos circulen sin autorización alguna y debido a que no todos pueden reclamar por sí mismos la violación a sus derechos puedan impedir su divulgación. En esos casos se deben adoptar medidas mucho más estrictas sobre imágenes de menores alojadas en redes sociales o en la web. Por tanto, carece de razón el partido al sostener que era suficiente con demostrar que la imagen aparece en un buscador de internet y que ha sido publicada en infinidad de páginas electrónicas, dado que no SUP-JE-144/2021 16 demuestra que su difusión o divulgación sea lícita y, menos, para fines electorales. La imagen denunciada correspondía a una menor con una discapacidad lo que exige una tutela reforzada. En las constancias de autos se aprecia que la menor incluida en las publicaciones del candidato tiene síndrome de Down, que es una alteración genética que puede llevar algún grado de discapacidad intelectual. En ese sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad garantiza que todos los niños y niñas gocen plenamente de los derechos humanos en igualdad de condiciones con los demás niños y que puedan expresar su opinión libremente sobre las cuestiones que les afecten (art.7). También, se debe garantizar su derecho a expresar su opinión y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad. Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en su artículo 56 que tienen derecho a que en todo momento a que se les facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que les permitan obtener información de forma comprensible. Por ello, al estar involucrada una niña con una discapacidad exige que se hubieran respetado los principios de no discriminación, de una protección reforzada y atender a la especial vulnerabilidad en que se encuentran. Garantizando a la niña su derecho a opinar y a recibir información de manera accesible, para poder divulgar su fotografía. 18 Información extraída de: <https://www.un.org/es/observances/down-syndrome-day> SUP-JE-144/2021 17 Sin embargo, dado que nada de eso obra en el expediente de forma alguna puede concluirse que todas estas condiciones ocurrieron para la difusión de su imagen. Por lo que, esta Sala Superior concluye que fue correcta la determinación de la responsable porque el candidato vulneró el interés superior de la niñez lo que actualizó la infracción y, en el caso del partido político hoy actor, le generó una responsabilidad indirecta.

Concatenado a lo anterior, la resolución número **SRE-PSC-039/2017**, Sentencia que resuelve el procedimiento especial sancionador UT/SCG/PE/PRI/CG/39/2017, en la que se determina la existencia del uso indebido de la pauta por parte del Partido Unidad Democrática por Coahuila, de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila; así como la vulneración al interés superior del menor por parte de la citada Coalición, como sea;

Por cuestión de método, en primer lugar, se estudiará, de manera conjunta, el supuesto uso indebido de la pauta por parte de la Coalición y tres de sus cuatro partidos, por supuestamente haber promocionado a la Coalición durante la precampaña y, si la Coalición, indebidamente, difundió promocionales relacionados con el proceso de selección interna del PAN y uno de sus precandidatos, a través de su tiempo en radio y televisión; posteriormente, se abordará lo correspondiente a la supuesta promoción indebida de la Coalición por parte del Partido Unión Democrática de Coahuila; y por último, se examinará lo SRE-PSC-039/2017 18 relacionado con el uso de imágenes de menores de edad en uno de los promocionales de la Coalición. 3.1 Marco Normativo respecto del uso indebido de la pauta. La Constitución Federal en su artículo 41, Base III, Apartados A y B, así como la Ley Electoral en los diversos 159, párrafos 1 y 2, 160, párrafos 1 y 2 y 226, párrafo 5, han establecido que los partidos políticos nacionales tienen derecho al uso permanente de los medios de comunicación social. Asimismo, que el INE es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en

radio y televisión destinado a los fines propios, a los de otras autoridades electorales, así como a los partidos políticos; y, que será también este quien garantizará a los partidos políticos el uso de sus prerrogativas constitucionales en radio y televisión. Además, establecen que los precandidatos tienen prohibido contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempo en cualquier modalidad de radio y televisión. Por otro lado, el artículo 226 de la referida Ley Electoral, en su párrafo cuarto, señala que los partidos políticos harán uso del tiempo en radio y televisión que conforme a Derecho les corresponda, para la difusión de sus procedimientos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular. Asimismo, que los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, accederán a radio y televisión en el tiempo que corresponda a los institutos políticos. En este mismo sentido, el artículo 168 de la Ley Electoral, dispone que cada partido político podrá decidir libremente la asignación, por tipo de precampaña, de los mensajes que le correspondan, incluyendo su uso para precampañas locales en las entidades federativas. SRE-PSC-039/2017 19 A su vez, el Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral del INE en su artículo 5, párrafo primero, fracción III, inciso i), dispone que por materiales se entiende a los promocionales o mensajes realizados por los partidos políticos, coaliciones o candidatos/as independientes y autoridades electorales, fijados o reproducidos en los medios de almacenamiento y formatos que determine el INE, para su transmisión en términos de lo que dispone la Constitución Federal y la Ley Electoral. Mientras que, en el inciso m), establece que la pauta es el documento técnico en el que se distribuye el tiempo, convertido a número de mensajes, que corresponde a los partidos políticos, coaliciones y candidatos/as independientes, así como a las autoridades electorales en un periodo determinado, precisando la estación de radio o canal de televisión, la hora o rango en que debe transmitirse cada mensaje, y el partido político, coalición, candidato/a independiente o autoridad electoral al que corresponde. El artículo 7 párrafos 1, 3, 4 y 9 del citado Reglamento establece que los partidos políticos y sus candidatos y precandidatos a cargos de elección popular, accederán a mensajes de radio y la televisión, a través del tiempo que la Constitución Federal otorga como prerrogativa en la forma y términos establecidos legalmente; asimismo, que el INE es la única autoridad competente para ordenar la transmisión de propaganda política o electoral en radio o televisión, para el cumplimiento de sus propios fines y de los partidos políticos; y, que la propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas electorales difundan por radio y televisión los partidos políticos, se ajustarán a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6 y el artículo 41, Base III, Apartado A, de la Constitución Federal; así como el artículo 25, fracción I, incisos a) y u), de la Ley de Partidos Políticos y 247, párrafo 1, de la Ley Electoral. SRE-PSC-039/2017 20 El artículo 13, párrafo cuarto, dispone que, si por cualquier causa un partido político no realiza actos de precampaña electoral, los tiempos a que tengan derecho serán utilizados para la difusión de mensajes del partido político de que se trate, en los términos que establezca la ley. Asimismo, el artículo 37, párrafo 1, establece que, en ejercicio de su libertad de expresión, los partidos políticos determinarán el contenido de sus promocionales, por lo que no podrán estar sujetos a censura previa por parte del INE ni de autoridad alguna, sino, en su caso, a ulteriores responsabilidades. Ahora bien, no pasa desapercibido que a nivel local, el artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Coahuila, establece que los partidos políticos tendrán derecho al uso permanente de los medios de comunicación social y que el acceso a radio y televisión durante los procesos electorales se realizará en los términos establecidos en los ordenamientos antes referidos. La Ley General de Partidos Políticos establece que los partidos políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones para las elecciones de Gobernador, diputados a las legislaturas locales de mayoría relativa y ayuntamientos, de conformidad con el artículo 87, numeral 2. De conformidad con el artículo 88, numerales 1, 2, y 3, de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos podrán formar coaliciones totales, parciales y flexibles. Se entiende como coalición total, aquella en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso federal o local, a la totalidad de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral. Tratándose de coaliciones, se estará a lo previsto en los artículos 91, numerales 3, 4 y 5 de la Ley General de Partidos Políticos; 167, numeral 2 de la Ley General de SRE-PSC-039/2017 21 Instituciones y Procedimientos Electorales y 16 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, que establecen que a la coalición total que constituyan los partidos políticos les será otorgada la prerrogativa de acceso a radio y televisión en un treinta por ciento que corresponde distribuir en forma igualitaria, como si se tratara de un solo partido, incluso para efectos de la optimización de promocionales sobrantes. En cambio, para el setenta por ciento restante, deben ser tratados en forma separada. En el supuesto de coaliciones totales, el convenio de coalición establecerá la distribución de dicho tiempo entre los candidatos de la coalición. Asimismo, es aplicable a las coaliciones electorales, cualquiera que sea su ámbito territorial y tipo de elección, en todo tiempo y circunstancia, lo previsto por el artículo 91, numeral 4, de la Ley General de Partidos Políticos. En todo caso los mensajes en radio y televisión que correspondan a candidatos de coalición deberán identificar esa calidad y el partido responsable del mensaje. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el artículo 227 de la Ley General, se entiende por precampaña el conjunto de actos que realizan los

partidos políticos, sus militantes y precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido; y por actos de precampaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado a un cargo de elección popular. El párrafo 3 del citado precepto legal, así como los párrafos 1 y 3 del artículo 211 de dicha ley, estipulan que la propaganda de precampaña es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, y expresiones que durante el periodo establecido por la ley y el que señale la convocatoria respectiva, difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a SRE-PSC-039/2017 22 conocer sus propuestas, debiendo señalarse de manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de quien es promovido. 3.2. Casos concretos. Como se ha quedado acreditado con antelación, no se tiene constancia de que los Partidos Acción Nacional y Encuentro Social hubieran difundido alguno de los spots denunciados, por lo que atendiendo al principio indubio pro reo, debe absolverse a dichos partidos de las conductas que se les imputa; y por tanto, únicamente se analizará la difusión de los promocionales pautados por el Partido Unidad Democrática por Coahuila y de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila. Sirve como sustento a lo anterior, lo determinado por la Sala Superior en la jurisprudencia intitulada "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES"⁷ en donde determinó que cuando no se cuente con una prueba que acredite la responsabilidad de los denunciados, lo procedente es absolverlos. 3.2.1 Uso indebido de la pauta por parte de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, por la difusión de spots en precampaña. Como se ha dicho, el primer punto a dilucidar es si existió un uso indebido de la pauta, ya que, en concepto del promovente, no está permitido que las Coaliciones, por sí mismas, puedan difundir spots en radio y televisión, durante la etapa de precampañas, pues, en su consideración, dicha prerrogativa es de uso exclusivo de los partidos políticos que contienden en el proceso electoral correspondiente. 7 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60. SRE-PSC-039/2017 23 En ese sentido, el promovente refiere que con la difusión de spots de la Coalición se está realizando una sobreexposición de dicho consorcio político, ya que las coaliciones únicamente se pueden posicionar, a sí mismas, durante la etapa de campañas. Dicho lo anterior, esta Sala Especializada considera que es inexistente esta falta atribuida a la Coalición, ya que el actor parte de una premisa errónea; a saber: "las coaliciones no tienen acceso a radio y televisión durante las precampañas". En efecto, de la lectura integral de la denuncia, se advierte que el actor encamina sus argumentos a evidenciar que sólo los partidos políticos tienen acceso a radio y televisión durante la etapa de precampañas, mientras que las Coaliciones tendrán acceso a partir del inicio de las campañas. Sin embargo, de conformidad con lo previsto en los artículos 87, 88, párrafo 2, 91, párrafos 3, 4 y 5 167, párrafo 2 de la Ley de Partidos; 167, párrafo 2 de la Ley General, en relación con los numerales 13, párrafo 4 y 16 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, los partidos políticos podrán formar coaliciones para contender de manera conjunta en alguna elección, siendo que una de esas modalidades puede ser la de Coalición total, como lo es en el caso que nos ocupa. Además, se advierte que las Coaliciones podrán acceder a tiempo aire en radio y televisión, ya sea en el periodo de precampaña o campaña. Para ello, en caso de Coalición total, se le considerará como si fuera un solo partido político; y por tanto, tendrá acceso al 30% del tiempo en radio y televisión que se reparte de manera igualitaria entre los partidos. No obstante, no tendrá acceso al 70% del tiempo que se distribuye de manera proporcional entre dichos institutos políticos, ya que en este caso, los partidos coaligados accederán a dicha prerrogativa, de manera individual y separada, SRE-PSC-039/2017 24 atendiendo a la votación que cada uno hubiera obtenido en la elección del congreso local inmediata anterior. Bajo ese contexto, ha quedado demostrado que el Comité de Radio y Televisión del INE concedió el uso de la prerrogativa constitucional a la Coalición, situación que fue confirmada por la Sala Superior al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP74/2017, en donde estableció que en el artículo 167 de la Ley General no se hacía ninguna distinción en cuanto a la etapa del proceso electoral en la que se debía repartir el tiempo en radio y televisión destinado a las coaliciones; y por tanto, la regla de distribución que en dicho artículo se contemplaba debía ser aplicada tanto a precampañas como campañas. De ahí que no asista la razón al promovente cuando refiere que la Coalición usó indebidamente la pauta en radio y televisión al difundir los spots: "Registro Coahuila Coalición", en su versión televisiva con número de folio RV00097-17 y en su versión de radio con el registro RA00106-17. 3.2.2 Uso indebido de la pauta por parte de la Coalición, al difundir spots en donde difundió actos relacionados con el proceso de selección interna del PAN. En este punto, el promovente refiere que el hecho de que la Coalición difundiera promocionales en los que se aludía al proceso de selección interna del PAN y a uno de sus precandidatos, es contrario a Derecho, puesto que el PAN únicamente podía haber destinado su pautado para promocionar cualquier acto relacionado con su elección interna. SRE-PSC-039/2017 25 En ese sentido, el promovente refiere que el hecho

de que se utilizara el emblema de la Coalición, puede inducir al error de que lo que se promociona es un precandidato de dicho consorcio político; y no así, del PAN en lo individual. Al respecto, como se ha dicho con antelación, las Coaliciones gozan de la prerrogativa de acceso a radio y televisión para el periodo de precampaña, siendo que en el caso que nos ocupa, la autoridad administrativa electoral consideró que la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila era una coalición total; y por tanto, para efectos de la distribución de tiempo aire se le debía considerar como un solo partido y, en consecuencia, sólo tenía acceso a la distribución del 30% que se reparte de manera igualitaria entre los partidos políticos. Por lo que al tener acceso en radio y televisión, dicha Coalición tenía la posibilidad de difundir propaganda genérica o de precampaña, con su propio tiempo aire. Cabe mencionar que similar criterio utilizó la Sala Superior al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP-74/2017, en donde determinó que: "una vez asignado el tiempo en radio y televisión que le corresponde a la coalición [...] para las etapas electorales, corresponde a dichos institutos políticos, en ejercicio de su libre autodeterminación, a través de su convenio de coalición, establecer la forma y los términos en que se hará uso del tiempo que le fue asignado, mismo que puede ser usado no sólo para la difusión de propaganda de precampañas, sino también para la difusión de propaganda genérica". Así, resulta evidente que las coaliciones están facultadas para difundir spots en radio y televisión, ya sea con contenido genérico o con propaganda electoral atinente a una precampaña; sin embargo, dicha prerrogativa no es absoluta ni ilimitada, sino que se debe ajustar a los parámetros que rigen la difusión de propaganda en la época de precampaña. SRE-PSC-039/2017 26 Al respecto, la Sala Superior al emitir la jurisprudencia intitulada: "RADIO Y TELEVISIÓN. LA UTILIZACIÓN DE LOS TIEMPOS ASIGNADOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PARA PROMOCIONAR LA IMAGEN DE CANDIDATOS POSTULADOS POR OTROS INSTITUTOS POLÍTICOS O COALICIONES, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD"⁸ determinó que los partidos políticos no deben utilizar los espacios en radio y televisión que les corresponden, para promocionar la imagen de candidatos postulados o registrados por otros institutos políticos o coaliciones, pues puede generarse una exposición desigual y, en consecuencia, un mayor posicionamiento a alguna de las opciones políticas en detrimento de las restantes, contraviniendo el principio de equidad en la contienda electoral. En ese contexto, esta Sala Especializada considera que los partidos políticos y coaliciones, ya sea durante las precampañas y campañas, únicamente podrán hacer uso de los tiempos o pautas en radio y televisión para difundir su propia propaganda política o electoral, sin que exista posibilidad alguna de que algún precandidato o candidato de un diverso partido político o coalición pueda participar o beneficiarse de dicha prerrogativa, dado que ello afectaría el principio de equidad en el proceso de selección interna de un partido, puesto que se estaría dotando de mayores beneficios a una sola oferta política. Precisado lo anterior, debe recordarse que en el caso, se tiene acreditado que durante el periodo de precampañas del proceso electoral del estado de Coahuila, la Coalición Alianza, como parte de su prerrogativa en radio y televisión, difundió los spots: "Registro Coahuila Coalición" con folio RV00097-17 [versión televisión] y RA00106-17 [versión radio], cuyo contenido se muestra a continuación: RV00097-17 8 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, En tales circunstancias, a juicio de esta Sala Especializada, dichos promocionales deben ser considerados como spots de precampaña, puesto que el mensaje que se emitió se encontraba vinculado con el proceso de selección interna del PAN, uno de los precandidatos que contendió y la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila. En ese contexto, esta Sala Especializada considera que es existente la infracción atribuida a la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, relacionada con el uso indebido de la pauta que le fue asignada en el periodo de precampaña de la elección de Gobernador de Coahuila. Ello, habida cuenta que ha sido acreditado que los spots controvertidos son de carácter electoral, y que están encaminados a difundir actos relacionados con el proceso de selección interna que, de manera individual, realizó uno de los partidos coaligados, sin que mediara una justificación para ello, puesto que en el convenio no se estableció que la Coalición participaría o coadyuvaría en la elección del Candidato a Gobernador que realizaría el PAN. Lo anterior se considera así, ya que con independencia de que durante las precampañas, el PAN formó parte de la Coalición, lo cierto es que de conformidad con el convenio que integró el consorcio político, ningún otro partido coaligado o la Coalición misma, estaban en posibilidades de realizar actos de promoción de precandidatos o de etapas del proceso de selección interna del PAN, puesto que en el convenio únicamente se refirió que el candidato emanaría de la selección de candidatos del PAN, atendiendo a la determinación que adoptara la Comisión Permanente del Consejo Nacional de dicho partido. En esa lógica, la difusión de promocionales vinculados a la precandidatura de José Guillermo Anaya Llamas debió ser realizada exclusivamente por el PAN con el tiempo que, de manera individual, le correspondía en el periodo de precampaña; es decir, que los spots alusivos a dicho precandidato debieron estar comprendidos entre el tiempo que le fue asignado al PAN como parte del 70% del tiempo aire que SRE-PSC-039/2017 30 se distribuyó de manera proporcional a cada uno de los partidos en lo individual y del cual no le fue asignado a la Coalición

denunciada. Lo anterior, ya que la Coalición denunciada, por sí misma, no llevó a cabo un proceso de selección interna, sino que dicha situación fue realizada de manera particular por uno de sus partidos coaligados; y por tanto, la Coalición no estaba facultada para promocionar actos de precampaña que pudieran causar una afectación a la equidad del proceso de selección interna del PAN, al otorgar mayor tiempo del que debía de tener alguno de los sujetos que participarían en dicho proceso electivo. En efecto, al no realizar un proceso de selección interna, la Coalición únicamente debió constreñirse a difundir propaganda genérica sobre temas de interés general; y no así, la exhibición de promocionales con propaganda de precampaña; cuestión diversa hubiera sido que en el convenio de coalición se hubiera establecido que para la elección de candidato a Gobernador, dicho consorcio político realizaría un proceso de selección en el cual se incluyeran, entre otros, a los precandidatos de los partidos coaligados; o bien, que la Coalición participaría en el proceso interno que implementara individualmente alguno de sus coaligados, pues en estos supuestos se justificaría que el tiempo en radio y televisión de la Coalición fuera distribuido y usado por los diferentes precandidatos que participaran en dicha elección interna. De ahí que la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila utilizó indebidamente su pauta en radio y televisión que le fue asignada durante el periodo de precampaña del proceso electoral que se desarrolla en el estado de Coahuila; y por tanto, contravino lo previsto en 41 párrafo segundo base III apartado A, de la Constitución; 159; 211, 227, párrafo 3, y 443, párrafo 1 incisos a) y n), de la Ley General; 25 párrafo 1 incisos a) y u), de la Ley General de Partidos Políticos; así como 13, párrafos 1 y 3 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. SRE-PSC-039/2017 31 3.2.3 Uso indebido de la pauta por el Partido Unidad Democrática de Coahuila, por la promoción de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila. En este punto, el promovente aduce que dicho partido usó indebidamente la pauta que le fue asignada en el periodo de precampaña de la elección que actualmente se desarrolla en el estado de Coahuila, al haber promocionado a la Coalición por medio de la difusión de los spots: "Coahuila libérate" con folio RV001918 [versión televisión] y RA002366 [versión radio]; "Lenin Precampaña" con folio RV00037-17 [versión televisión] y RA00039-17 [versión radio]; y "Video Alianza" con folio RV00100-17 [versión televisión] y RA00114-17 [versión radio]. En ese sentido, el promovente refiere que es ilegal que se promocioe el logotipo de una coalición en la etapa de precampaña, puesto que se le está posicionando en un momento que no es permitido; más aún, cuando, en su concepto, en dichos promocionales se advierten propuestas de gobierno y campaña, dirigidas a la ciudadanía en lo general. Al respecto, como ya se ha señalado, los partidos políticos gozan de la prerrogativa constitucional de acceso a la radio y televisión, ya sea durante o fuera de algún proceso electoral, puesto que su acceso es de manera permanente atendiendo a las modalidades que establece la propia Constitución y las normas electorales. Bajo ese contexto, debe decirse que en el caso particular, se tiene constancia de que el Partido Unidad Democrática de Coahuila no realizó un proceso de selección interna para elegir candidato a Gobernador de Coahuila, puesto que atendiendo al convenio de coalición que firmó, el candidato a dicho puesto sería el que resultara electo en el proceso interno del PAN. Por q C-039/20 corrupción se te hizo normal. Y es que mientras ellos se enriquecen, tú te vuelves más pobre. Cada vez trabajas más y te pagan menos. ¿Qué pasa Coahuila? Alégrate, decídette, tú tienes la solución. Ahora les toca sufrir a ellos. Que paguen por lo que han hecho. Es ahora o nunca. Voz de un hombre: Unidad Democrática de Coahuila. UDC. Voz de un hombre: Coahuila. Libérate. Como puede advertirse, en estos spots no se hace referencia alguna a la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, sino que únicamente se utiliza el nombre y logo del Partido Unidad Democrática de Coahuila; además, contrario a lo afirmado por el actor, no se aprecia alguna propuesta de campaña de dicho partido político ni alguna referencia a un plan de gobierno. Por el contrario, lo único que se advierte es el posicionamiento de dicho partido frente al supuesto problema de corrupción y pobreza que existe en el estado de Coahuila; usando para ello preguntas retóricas con las que pretende reafirmar su idea, tales y como lo son: "¿Por qué la corrupción se te hizo tan normal?" y "¿Qué pasa Coahuila?". En esas circunstancias, dichos promocionales deben ser considerados como genéricos, pues únicamente pretenden mostrar el posicionamiento del partido en torno a temas de interés social, sin que se aprecie que se haga algún posicionamiento de alguna fuerza política que pudiera influir en la contienda electoral. Por lo que es factible calificar como dentro de la legalidad estos promocionales. Ahora por lo que hace a los promocionales: Promocional Video Alianza con folio RV00100-17 [versión televisión] Imágenes representativas Voz de un hombre: Para llegar a una meta es necesario construir un camino. No podemos fallarle a Coahuila viendo como sufre nuestra gente. Basta ya de divisiones. Basta ya de egoísmo. Es tiempo de una Alianza Ciudadana para construir el Coahuila que todos queremos. Este es el reto y la oportunidad. Dejar a un lado el interés personal y darle esperanza a nuestro pueblo. Hasta la victoria. ¡Venceremos! Voz de un hombre: UDC. Voz de un hombre: Libérate. Voz en off: Alianza Ciudadana por Coahuila. En el caso de estos spots, se advierte que el contenido del mensaje es idéntico, puesto que se escucha el uso de las mismas palabras tanto en radio y televisión; lo cual, permite que se estudien de manera conjunta, a fin de evitar repeticiones innecesarias, con la diferenciación del uso de

imágenes en el caso del spot televisivo. Como puede advertirse, en estos promocionales se hace alusión a la visión que tienen tanto UDC como la Coalición Ciudadana por Coahuila, respecto del sufrimiento que se causa a los coahuilenses con la división y egoísmo del interés personal; y ante ello, manifiestan una oportunidad de esperanza al renunciar a ese interés individual. En ese contexto, en dichos promocionales no se aprecia alguna referencia que permita deducir que se pretende posicionar a un partido político; o bien, que se está llamando a votar a favor de determinada fuerza política, ya que lo que realmente se tiene es un posicionamiento general, relacionado con la condición social del Estado y la posibilidad de que ésta cambie con la renuncia de los intereses personales de la población en general. En esa tesitura, es indubitable que estos spots contienen un mensaje genérico, habida cuenta que únicamente refieren la postura ideológica del partido, por lo que no se advierte referencias que impliquen un llamado al voto. SRE-PSC-039/2017 46 En este tenor, este órgano jurisdiccional estima que los promocionales denunciados, por la temporalidad en la que fueron difundidos, están apegados a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias en cuanto a su contenido, de tal suerte que no se acredita la infracción, pues no existe prohibición alguna para que durante el periodo de precampañas, el partido político difunda ideas, críticas o manifestaciones en torno a temas de interés general, propio de todo sistema democrático. Esto es, en la época de precampañas, los partidos políticos pueden hacer uso de las pautas en radio y televisión otorgadas por el INE, sin que necesariamente deban contener mensajes de precampaña o campaña, pudiendo versar sobre cuestiones de carácter general. Por otra parte, tampoco se acredita el argumento del quejoso en el sentido de que la difusión de los promocionales denunciados constituye un uso indebido de la pauta, en razón de que fueron hechos con la finalidad de posicionar ilícitamente a la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila ante el electorado. Lo anterior, ya que se reitera que lo que realmente se difunde es un contenido propio de la ideología del partido político, con expresiones críticas, lo cual no encuentra una prohibición expresa en la legislación aplicable, sino por el contrario, dicho contenido se encuentra permitido a los partidos políticos ya sea fuera o dentro de los periodos electorales, al constituir una de las formas que permiten a los institutos políticos alcanzar los fines constitucionales establecidos en el artículo 41 de la Constitución Federal. En ese sentido, esta Sala Especializada considera que del análisis integral y contextual de los promocionales no es posible presumir algún riesgo de afectación en materia electoral; de ahí que el objetivo de los promocionales otorgados al partido SRE-PSC-039/2017 47 político, en este caso específico, no se encuentra desvirtuado, ya que atendiendo al contenido se trata de materiales genéricos con posicionamiento partidista, por lo que es inexistente la conducta señalada por el Promovente. 3.2.4 Uso indebido de la pauta por la Coalición, al usar imágenes de menores de edad en un spot. Es oportuno señalar que esta Sala Especializada, en un nuevo paradigma de protección de los Derechos Humanos, implementó un método tendente a verificar la posible existencia de alguna situación de vulnerabilidad, en el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad auditiva, o bien, cuando en los promocionales se incluyan personas menores, aun cuando forme o no parte de la controversia. Proceder que es plenamente acorde con lo previsto por el artículo 1º, párrafo tercero de la Constitución Federal; en cuanto ordena que todas las autoridades, incluida por supuesto esta Sala Especializada, tienen la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los Derechos Humanos. Acorde con lo anterior, al verificar el contenido del promocional de televisión con folio RV0097-17. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Al respecto, se tiene en cuenta que el contenido de la propaganda difundida por los partidos políticos se encuentra amparada por la libertad de autodeterminación de contenidos; empero, el ejercicio de dicha libertad fundamental no es absoluta, sino que tiene límites, entre los que se encuentran los vinculados con la dignidad o la reputación de las personas y los derechos de terceros, acorde con lo dispuesto en los artículos 6º, párrafo primero de la Constitución Federal, así como 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dicen: Artículo 6º.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Artículo 19.[...] 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser

necesaria para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. SRE-PSC-039/2017 50 Destaca de estos preceptos constitucionales y convencionales una limitación coincidente: esto es, el pleno respeto a los derechos de terceros, incluidos, por supuesto los derechos de la niñez, cuya protección, se encuentra expresamente ordenada en el artículo 4º de nuestra Constitución Federal. En tales condiciones, cuando en el uso de las pautas asignadas por el Instituto se difundan mensajes que puedan afectar derechos de terceros, y que en el caso, resultan ser personas menores de edad, se debe garantizar sus derechos en el marco de su interés superior. Ahora bien, en el orden conceptual, el "interés superior del niño", ha sido descrito por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: "Implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Al amparo de esa previsión convencional, el Estado Mexicano, a través de sus instituciones, autoridades y tribunales, está constreñido a tener en consideración primordial el respeto al interés superior del menor, con la adopción de medidas necesarias para asegurar y maximizar la protección y efectividad de los derechos de las niñas y niños, acorde con lo establecido en los artículos 3, párrafo 1 y 4, de la Convención sobre los Derechos del Niño: Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Artículo 4. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional. SRE-PSC-039/2017 51 Con tal directriz de protección a la niñez, el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes" emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el interés superior del menor tiene las siguientes implicaciones: a) Coloca en plena satisfacción los derechos de los infantes como parámetro y fin en sí mismo; b) Define la obligación del Estado respecto de los niños, niñas y adolescentes; y c) Orienta decisiones que protegen sus derechos. En sincronía con estos postulados, la Primera Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis de rubro: "DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS" estableció que la mera situación de riesgo de los infantes es suficiente para que se estime que se afectan los derechos de la niñez y, ante ello, deben adoptarse las medidas que resulten más benéficas para la protección de los infantes. En el caso, la posible afectación al interés superior del infante se advierte a través de la exposición de la imagen de diversos niños y posibles adolescentes (sin que de esta circunstancia se tenga absoluta seguridad, atento a su fisonomía), de ahí que el análisis se deba hacer en relación al derecho a la propia imagen de los infantes participantes. Entonces la importancia del asunto radica, precisamente, en la protección reforzada que goza la imagen de las y los menores de edad involucrados en el promocional. SRE-PSC-039/2017 52 Por tanto, para el otorgamiento de la salvaguarda judicial es suficiente que se les ubique en una situación de riesgo potencial, sin que sea necesario que esté plenamente acreditado el perjuicio ocasionado, porque, atento a los valores en juego, el interés superior de las niñas y niños, está por encima del ejercicio de la libertad de autodeterminación del contenido de los spots que tienen los partidos políticos. Con ese parámetro de ponderación, el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece, que ningún niño puede ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, ni ataques ilegales a su honra y reputación. Por su parte, los artículos 2, 5, 76, 77 y 78 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes contemplan, igualmente, la salvaguarda de los infantes ante cualquier riesgo de afectación o manejo directo de su imagen, nombre, datos o referencias que permitan su identificación, así: Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán: I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno; II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas,

niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia. El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la SRE-PSC-039/2017 53 asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley. ... Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño. ... Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán orientar, supervisar y, en su caso, restringir, las conductas y hábitos de niñas, niños y adolescentes, siempre que atiendan al interés superior de la niñez. Artículo 77. Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, así como medios impresos, o en medios electrónicos de los que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez. Artículo 78. Cualquier medio de comunicación que difunda entrevistas a niñas, niños y adolescentes, procederá como sigue: I. Deberá recabar el consentimiento por escrito o cualquier otro medio, de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente, respectivamente, conforme a lo señalado en el artículo anterior y a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 76 de la presente Ley, y II. La persona que realice la entrevista será respetuosa y no podrá mostrar actitudes ni emitir comentarios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. En el caso de que no sea posible recabar el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de un menor, éste podrá otorgarlo siempre que ello no implique una afectación a su derecho a la privacidad por el menoscabo a su honra o reputación. SRE-PSC-039/2017 54 Por otra parte, no se requerirá el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de niñas, niños o adolescentes, cuando la entrevista tenga por objeto que éstos expresen libremente, en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, su opinión respecto de los asuntos que les afecten directamente, siempre que ello no implique una afectación a sus derechos, en especial a su honra y reputación. El interés superior a proteger es la sola posibilidad de poner en peligro su imagen con una latente identificación de su persona. Este principio protector, vinculado al tema, nos orienta a reflexionar que en el caso de la propaganda política o electoral, hay siempre un elemento ideológico que identifica a la opción política, por tanto, la presencia de infantes implica un riesgo potencial de asociar a tales infantes con una determinada preferencia política e ideológica, a una edad que todavía no es oportuna. Lo anterior puede devenir en un riesgo potencial en relación con su imagen, honra o reputación presente, en su ambiente escolar o social y, por supuesto, en su futuro, pues al llegar a la vida adulta pueden aceptar o no aprobar la ideología política, con la cual fueron identificados en su infancia. En esta concurrencia de derechos involucrados, acorde con las disposiciones nacionales e internacionales antes descritas, esta Sala Especializada debe hacer un ejercicio de ponderación el cual se decante por la protección reforzada de los menores de edad involucrados en los promocionales de televisión que se analizan. Con tal parámetro este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a implementar todas aquellas medidas que sirvan para evitar que se presenten situaciones de riesgo potencial que puedan afectar el interés superior del menor en relación con los promocionales de contenido político electoral, como en el asunto. SRE-PSC-039/2017 55 De suma importancia destaca tener la seguridad que los infantes fueron escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece: "Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados

en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez". Los requerimientos reforzados tienen sustento en los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a ser informados, como una directriz convencional que debe atenderse por todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales, como lo indica la UNICEF, en las Directrices éticas para la información sobre la infancia; conducentes y aplicables a la aparición de infantes en los spots de los partidos políticos, precisamente porque aparecen en medios de comunicación social como la televisión genera su exposición pública. Este instrumento internacional indica, en lo destacable: "Directrices éticas de UNICEF para la información sobre la infancia Protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la exposición pública ... De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, todos los niños, niñas y adolescentes, sin excepción, deben tener garantizados sus derechos. Uno de esos derechos es el de la protección de la vida privada, por lo que la exposición pública de los niños, niñas o adolescentes... UNICEF plantea una serie de directrices éticas para la información sobre infancia, que tienen como objetivo aportar orientaciones básicas para los medios de comunicación, pero que también son de utilidad para autoridades administrativas, policiales y judiciales que participan en los procesos de justicia, sobre cómo abordar los temas relacionados con la protección de la infancia a fin de respetar en todo momento su interés superior y su dignidad como seres humanos... Directrices éticas de UNICEF para la información sobre la infancia I. Principios 1. Se deberán respetar la dignidad y los derechos de cada niño o niña en toda circunstancia..." SRE-PSC-039/2017 56 Por tanto, a efecto de garantizar el pleno respeto al interés superior de los infantes, la autoridad administrativa electoral conforme a sus facultades adoptó las medidas necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos que procedan, en los términos apuntados y, en su caso, requirió la documentación necesaria a fin de privilegiar y proteger el interés superior de los niños, niñas y/o adolescentes menores de dieciocho años. Conforme lo anterior, mediante acuerdo de siete de marzo, la Unidad Técnica requirió a la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, remitiera la documentación a través de la cual fuera posible advertir las personas que, en su caso, ejercieran la patria potestad de los menores involucrados; así como el documento en el cual se asentara la libre manifestación de la voluntad de los menores. En respuesta, la Coalición exhibió copia fotostática de siete autorizaciones de uso de imagen y voz, en el que se consigna información como el nombre del menor, domicilio, Ciudad/Estado/Código Postal, Teléfono, RFC o CURP; así como la leyenda: "Soy el padre/la madre (o tutor legal) del menor que ha firmado esta autorización y consentimiento, y por la presente acuerdo que yo y el menor estaremos sujetos a todos los términos y condiciones de la presente." Enseguida de lo anterior, se encuentra consignado el nombre de la persona que se dice ostentar como el padre o madre del menor referido en el formato correspondiente. Al respecto, esta Sala Especializada considera que dichos formatos, al ser pruebas documentales privadas⁹ por ser documentos elaborados por particulares y 9 Acorde con lo dispuesto en los artículos 461, párrafo 3, inciso b), así como 462, párrafos 1 y 3, de la Ley General. SRE-PSC-039/2017 57 proporcionados por la Coalición denunciada, por sí solos, resultan insuficientes para acreditar que los menores que en ellos se refiere son los mismos que aparecen en el spot controvertido; más aún, cuando la Coalición no proporcionó ningún otro documento que permitiera identificar plenamente a los menores involucrados. En efecto, en los formatos referidos no hay ningún elemento que permita la identificación visual de los menores y tampoco se adjuntó alguna credencial escolar o documento que permitiera a esta autoridad electoral distinguir a que menor de los que aparecen en el video corresponde cada uno de los permisos. Por lo que los citados formatos no son la prueba idónea para acreditar la persona que supuestamente otorgó el permiso. Aunado a ello, es preciso señalar que con la documentación remitida por la Coalición, tampoco se puede acreditar que las personas que firman la autorización, en realidad ostenten la patria potestad de los menores que aparecen en los videos, puesto que únicamente se aportó copia de la licencia de manejo de cada uno de los signantes, pero se omitió acompañar copia certificada del acta de nacimiento de los menores o de cualquier otro documento oficial con el que se pudiera identificar plenamente al mayor adulto que tuviera los derechos de representación de cada uno de los niños y/o adolescentes que se observa en el spot en comento. En ese sentido, dada la laxitud que presentan los citados formatos y la falta de algún documento que acredite la persona que tiene la patria potestad de los menores, es que esta Sala Especializada no tener por cierta la existencia del consentimiento pleno, cierto e idóneo, por escrito, debidamente firmado por los padres o quienes ejerzan la patria potestad o tutela del menor, pues como se ha manifestado, no hay mayores elementos que permitan concatenar y tener por acreditado que la participación de los niños en el promocional denunciado ocurrió con apego a las formalidades exigibles. SRE-PSC-039/2017 58 Además, respecto al requisito consistente en la manifestación del menor por cuanto hace a su opinión libre y expresa respecto de su participación en el promocional electoral en cuestión, opinión que será valorada atendiendo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, en el caso concreto, el PAN omitió presentar cualquier tipo de documentación para el cabal cumplimiento de este requisito, sin que el partido político emitiera pronunciamiento al respecto, en el presente procedimiento. No pasa desapercibido a esta autoridad que la

representación de la Coalición, en su defensa alegó que: • El plazo otorgado para el desahogo y cumplimiento al requerimiento resultaba insuficiente; • Se trata de documentos ajenos y privados, lo que provocó necesariamente una labor de recaudación de dichos documentos; y por tanto, era claro, evidente y lógico, que el tiempo y la posibilidad de los titulares de los documentos no estaba a disposición del partido político; lo cual retrasaba y tornaba difícil su recaudación. • En vista del plazo otorgado, resultaba imposible la protocolización del consentimiento de los padres y los menores; más aún si se toma en cuenta el tiempo que conllevan los trámites protocolarios ante fedatario público. • El requerimiento no tiene sustento legal que permita al partido prevenir la obligación de recaudar los documentos que se requirieron, sin embargo no se pretende desconocer los criterios que el INE citó en el acuerdo de requerimiento, solo trata de evidenciar que resulta complicado prever y SRE-PSC-039/2017 59 recaudar documentos para dar exhaustivo cumplimiento a requisitos no contemplados en la legislación. No obstante, a juicio de esta Sala Especializada, dichas consideraciones deben desestimarse, ya que tal y como se ha referido con antelación, la normas constitucionales, convencionales y legales, prevén que quienes difundan en medios de comunicación la imagen de menores, deberán tomar en cuenta aquellas medidas que impliquen la salvaguarda de los infantes ante cualquier riesgo de afectación o manejo directo de su imagen, entre las que se encuentra el recabar con antelación a la difusión, los permisos correspondientes. Por lo que no es aceptable que la Coalición denunciada aduzca que no se le otorgó el tiempo necesario para recabar dicha documentación, ya que estaba plenamente vinculada a contar con ella, desde el momento en que realizó el promocional que posteriormente difundiría como parte de su prerrogativa constitucional de acceso a televisión. En esa lógica, tampoco asiste razón a la Coalición denunciada cuando refiere que resultaba imposible realizar la protocolización del consentimiento de los padres y de los menores, ya que se insiste, dicha situación debió ser realizada con antelación a la difusión del promocional; además, la parte denunciada pasa por alto que los Notarios Públicos no son los únicos que, en materia electoral, podrían realizar una protocolización, ya que también contaba con la posibilidad de solicitar el auxilio de la Oficialía Electoral del INE; sin embargo, no se aportó ningún documento que, cuando menos, generara un indicio de que se solicitó su apoyo ni tampoco se tiene constancia de que la Coalición hubiera requerido los servicios de protocolización ante fedatario público. SRE-PSC-039/2017 60 De ahí que se tengan por desestimadas las manifestaciones de la representación de la Coalición; y por consiguiente, sea dable concluir que esta Sala Especializada no cuenta con los elementos idóneos y suficientes, como puede ser una fotografía, identificación escolar o cualquier otro elemento que sirva para establecer la identidad de los menores; lo cual, permitiría cotejar y establecer el vínculo entre las niñas y niños que aparece en el promocional y de quien, supuestamente, dio el consentimiento es su madre o tutora. Lo que deja en evidencia el riesgo potencial al que se expuso a los menores, por la difusión del promocional, al no tener certeza de que se emitió un consentimiento pleno, cierto e idóneo por parte de los padres, madres o tutores de aquellos, y, sobre todo, por no cuidar de manera idónea el uso de las imágenes de éstos. En consecuencia, se estima que se vulneró el interés superior de los menores involucrados y, por ende, se actualiza por parte de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila la infracción que se denuncia, en contravención a lo dispuesto por los diversos artículos 1, 4, párrafo noveno y 6, párrafo primero de la Constitución Federal; 25, párrafo 1, inciso a) y u), de la Ley de Partidos Políticos; 247, párrafo 1 y 443, párrafo 1, incisos a), h) y n) de la Ley Electoral. CUARTA. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Una vez que ha sido acreditada la existencia de diversas faltas, procede establecer la clase de sanción que legalmente corresponda, tomando en cuenta, entre otras, las siguientes directrices: 1. La importancia de la norma transgredida, es decir, señalar qué principios o valores se violaron o se vieron amenazados y la importancia de esa norma dentro del sistema electoral (principio, valor, ordenamiento, regla). SRE-PSC-039/2017 61 2. Efectos que produce la transgresión, los fines, bienes y valores jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o resultado). 3. El tipo de infracción y la comisión intencional o culposa de la falta, análisis que atañe verificar si el responsable fijó su voluntad para el fin o efecto producido, o bien, pudo prever su resultado. 4. Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así como si la conducta fue reiterada. Para tal efecto, esta Sala Especializada estima procedente retomar la tesis histórica S3ELJ 24/2003, de rubro "SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN", que sostenía que la determinación de la falta puede calificarse como levísima, leve o grave, y, en este último supuesto, como grave ordinaria, especial o mayor, lo que corresponde a una condición o paso previo para estar en aptitud de determinar la clase de sanción que legalmente se deba aplicar al caso concreto, y seleccionar de entre alguna de las previstas en la ley. Ello en virtud de que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior en diversas ejecutorias, 10 que la calificación de las infracciones obedezca a dicha clasificación. Por lo tanto, para una correcta individualización de la sanción, en primer lugar es necesario determinar si la falta a calificar es: i) levísima, ii) leve o iii) grave, y si se incurre en este último supuesto, precisar si la gravedad es de carácter ordinaria, especial o mayor. 10 En los recursos de revisión del procedimiento especial

sancionador SUP-REP-45/2015 y acumulados, SUPREP-57/2015 y acumulados, SUP-REP-94/2015 y acumulados, SUP-REP-120/2015 y acumulados, SUP-REP-134/2015 y acumulados, SUP-REP-136/2015 y acumulados y SUP-REP-221/2015. SRE-PSC-039/2017 62 Adicionalmente, es menester precisar que cuando se establece un mínimo y un máximo de la sanción a imponer, se deberá proceder a graduar la misma atendiendo a las circunstancias particulares del caso. Al respecto, una vez que han quedado demostradas la infracciones a la normativa electoral en que incurrió la Coalición Alianza Ciudadana de Coahuila, se procede a imponer la sanción correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la Ley General, que dispone que cuando se trate de infracciones cometidas por los partidos políticos, se podrá imponer desde amonestación pública, multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente¹¹, según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda. Para determinar la sanción respectiva, se deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodearon la conducta contraventora de la norma, de conformidad con lo previsto en el artículo 458, párrafo 5 de la Ley General, tomando en consideración los siguientes elementos:

- Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila. 1. Singularidad o pluralidad de faltas. En este punto, en principio, resulta necesario establecer que con una sola conducta se acreditaron dos faltas; esto es, que con la difusión del spot "Registro Coahuila Coalición" con folio RV00097 [versión tv] y 11 Se debe precisar que, mediante reforma al párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo decreto se publicó el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. De igual forma, en términos de los artículos segundo y tercero transitorios del decreto de reforma mencionado, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país. SRE-PSC-039/2017 63 RA00106 [versión radio] se actualizaron las faltas de uso indebido de la pauta y afectación al interés superior de un menor. 2. Bien Jurídico tutelado. Establecido el contexto anterior, debe decirse que con dicha conducta se transgredió, por una parte, el principio de equidad en la contienda interna de un partido político, puesto que se concedió mayor tiempo aire en radio y televisión a uno de los contendientes del proceso de selección interna del PAN; por otra parte, se afectó el interés superior de los menores que aparecieron en el spot televisivo controvertido, puesto que no se acreditó que la Coalición contará con los documentos necesarios para acreditar una participación libre y voluntaria, a sabiendas de la exposición de su imagen para fines electorales; y por tanto, se afectó la integridad, privacidad y reputación de los menores. 3. Circunstancias de modo, tiempo y lugar. La conducta consistió en la difusión por televisión del promocional "Registro Coahuila Coalición" con folio RV00097 [versión tv] y RA00106 [versión radio], relativo al proceso electoral local de Coahuila, con un total de ciento ochenta y siete impactos en televisión y trescientos ochenta y cuatro en radio. Tiempo. La difusión del promocional se realizó durante el desarrollo de los comicios locales en Coahuila, en la etapa de precampañas, en el periodo del doce al quince de febrero. Lugar. La difusión del promocional se efectuó en los canales de televisión cuya transmisión se realiza en Coahuila. SRE-PSC-039/2017 64 4. Condiciones externas y medios de ejecución. El momento en que se realizó la transmisión del promocional, corresponde al periodo de precampaña del proceso electoral local del estado de Coahuila, y el medio de ejecución fueron los canales de radio y televisión de transmisión local, acorde con lo informado por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos en las diversas comunicaciones que han sido referidas en el apartado de acreditación de los hechos denunciados. 5. Beneficio o lucro. No se acredita un beneficio económico cuantificable para la Coalición responsable, en virtud de que se trata de la difusión de promocionales pautados por ella misma, en uso de su prerrogativa constitucional de acceso a los tiempos del Estado. 6. Comisión dolosa o culposa de la falta. Está acreditado que la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila pautó los promocionales aludidos como parte de su prerrogativa de acceso al tiempo aire en radio y televisión que le correspondía en el marco de las precampañas del proceso electoral de Coahuila; y por tanto, es posible afirmar que tenía pleno conocimiento del contenido de los promocionales pautados; lo cual, permite concluir que tuvo la voluntad, por una parte, de usar la imagen de los menores de edad en el contenido de su promocional; y por otra parte, que tuvo el ánimo de difundir el promocional tildado de ilegal durante el periodo de precampañas en el proceso electoral del estado de Coahuila. Además, como Coalición que contiene en un proceso electoral local está plenamente vinculada al conocimiento de las normas constitucionales, convencionales y legales y de los criterios jurisprudenciales que rigen el acceso a la radio y televisión por parte de los actores políticos que participan en un proceso comicial; así como los tendentes a garantizar la salvaguarda del interés superior de los menores al ser utilizados en

Se presume que el entonces precandidato en cuestión ni los partidos políticos que lo respaldan no cuentan con los requisitos administrativos, expresos en el Lineamiento para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia político-electoral, **capítulo "Requisitos para mostrar niñas, niños o adolescentes en propaganda político electoral, mensajes electorales, actos políticos, actos de precampaña o campaña, en cualquier medio de difusión", numeral 8**, con título "Consentimiento de la madre y del padre, de quien ejerza la patria potestad o de los tutores", señala lo siguiente:

"...Por regla general, debe otorgar el consentimiento quien o quienes ejerzan la patria potestad o el tutor o, en su caso, la autoridad que debe suplirlos respecto de la niña, el niño o adolescente que aparezca o sea identificable en propaganda político-electoral, mensajes electorales o actos políticos, actos de precampaña o campaña, o para ser exhibidos en cualquier medio de difusión..."

Irregularidad que a simple vista es demostrada, toda vez que el precandidato ni los partidos políticos que lo respaldan, no cumplieron con este requisito, y debiendo esta autoridad electoral, solicitar al infractor de forma inmediata dicho consentimiento, y en caso de negarse a proporcionarlo, sancionarlo cómo corresponda.

Así mismo en el Lineamiento para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, **capítulo "Presentación del consentimiento y opinión ante el Instituto", en el numeral 14**, señala lo siguiente;

... "Los sujetos obligados que exhiban la imagen, voz o cualquier dato identificable de niñas, niños o adolescentes en su propaganda político-electoral, mensajes o actos políticos, actos de precampaña o campaña, deberán:

... b) Conservar en su poder, durante el tiempo exigido por la normatividad aplicable en materia de archivos, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de otras leyes, la grabación en video de la conversación por medio de la cual se explicó a la niña, niño o adolescente el alcance, contenido, temporalidad y medio de difusión, así como el original del medio por el que se documentó la opinión informada de la persona menor de edad, sobre su participación en la propaganda político-electoral, mensajes electorales, o su presencia en actos políticos, actos de precampaña o campaña conforme al manual y las guías metodológicas referidas en el Lineamiento 9. ... (Sic)

Del análisis de la fotografía publicada el 09 de abril del 2024, a las 7:21 pm con el título "Hoy tuve el placer de saludar a mis amigas. ¡Mujeres empacadoras!, fue un encuentro lleno de alegría y camaradería. Gracias por la invitación y por compartir este momento conmigo!", como se aprecia en la siguiente liga <https://www.facebook.com/share/r/jm3kkKdoV1cbpJQB/?mibextid=oFDknk> en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del **C. Guillermo Romero Rodríguez**, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, de la cual se observa difundió varias imágenes de niños, niñas y adolescentes, ello para promocionar su campaña política y posicionar su imagen ante los electores, vulnera el derecho a la intimidad de los infantes que aparecen en su promoción electoral, y se presume puede devenir en un riesgo potencial, por lo cual se debió cumplir con la obligación señalada en el numeral 14, con título "Presentación del consentimiento y opinión ante el Instituto", del Lineamiento para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes en Materia Político-Electoral, es decir el precandidato tiene obligación de conservar en su poder, durante el tiempo exigido por la normatividad aplicable en materia de archivos, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de otras leyes, la grabación en video de la conversación por medio de la cual se explicó a la niña, niño o adolescente el alcance, contenido, temporalidad y medio de difusión, así como el original del medio por el que se documentó la opinión informada de la persona menor de edad, sobre su participación en la propaganda político-electoral, mensajes electorales, o su presencia en actos políticos, actos de precampaña o campaña conforme al manual

y las guías metodológicas referidas en el Lineamiento 9, hecho contrario la autoridad estará obligada a salvaguardar la integridad, de los menores, así como a determinar las sanciones pertinentes al entonces precandidato y a la brevedad tomar las medidas cautelares pertinentes.

Es importante señalar que la fotografía publicada el 09 de abril del 2024, a las 7:21 pm con el título "Hoy tuve el placer de saludar a mis amigas. ¡Mujeres empacadoras!, fue un encuentro lleno de alegría y camaradería. Gracias por la invitación y por compartir este momento conmigo!", como se aprecia en la siguiente liga <https://www.facebook.com/share/r/jm3kkKdoV1cbpJQB/?mibextid=oFDknk> en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del **C. Guillermo Romero Rodríguez**, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, en la cual también se identifican de forma directa niños, niñas y adolescentes, se presume no cumple el entonces precandidato **Guillermo Romero Rodríguez**, ni los Partidos Políticos PAN, PRI, PAS Y PRD con la obligación de llevar a cabo el difuminado del rostro de los menores, con lo anterior se encuentra aprovechándose de los indefensos menores, actuando con alevosía menoscabando los derechos político electorales y humanos de los niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo a lo señalado en el Anexo 3. emitido por el Instituto Nacional Electoral, de nombre "Instructivo para realizar la conversación y recabar la opinión informada de las niñas, niños y adolescentes en base en las guías metodológicas anexas", redactado con objeto de proporcionar una guía para realizar las conversaciones con niñas, niños y adolescentes, la cual les brinde la información oportuna, necesaria y suficiente a fin de que entiendan el alcance y los riesgos de su participación en propaganda político-electoral, mensajes electorales, o en actos políticos, actos de precampaña o campaña, así como sobre exhibición de su imagen, voz o cualquier dato que los identifique a través de cualquier medio de difusión, mismo, que pretende que en la información que se les proporciona a niñas, niños o adolescentes se les indique en qué medios y durante cuánto tiempo se va a difundir su imagen y de qué forma será su participación (activa o pasiva), por quién podría ser visto (familia, amigos y gente que no conoce) y los riesgos que implica ello, buscando establecer el mecanismo para garantizar que la opinión que se recabe sea expresa, propia, individual, libre, informada y espontánea, además de que sea acorde a la edad, desarrollo cognitivo y madurez de la persona menor de edad, evidenciado con la fotografía subida el 09 de abril del 2024, a las 7:21 pm con el título "Hoy tuve el placer de saludar a mis amigas. ¡Mujeres empacadoras!, fue un encuentro lleno de alegría y camaradería. Gracias por la invitación y por compartir este momento conmigo!", como se aprecia en la siguiente liga <https://www.facebook.com/share/r/jm3kkKdoV1cbpJQB/?mibextid=oFDknk> en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del **C. Guillermo Romero Rodríguez**, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, en la cual se identifican de forma directa niños, niñas y adolescentes, el denunciado tiene y tuvo la obligación de cumplir cabalmente dicha metodología, con el objetivo claro de brindar la información oportuna, necesaria y suficiente a fin de que entiendan el alcance y los riesgos de su participación en propaganda político-electoral, mensajes electorales, o en actos políticos, actos de precampaña o campaña, así como de darle certeza y seguridad jurídica a los niños, niñas y adolescentes.

El Anexo 2. con título "Manual para recabar la opinión y el consentimiento informado de niñas, niños y adolescentes para la utilización de su imagen, voz o cualquier dato que los haga identificables en propaganda político-electoral y mensajes electorales, actos políticos, de precampaña o campaña a través de cualquier medio de difusión", señala en su punto IV, inciso a), para las Niñas y niños de 6 a 11 años, la obligación de recabar la opinión y el consentimiento informado de niñas, niños y adolescentes para la utilización de su imagen, voz o cualquier dato que los haga identificables en propaganda político-electoral y mensajes electorales, actos políticos, de precampaña o campaña a través de cualquier medio de difusión, antes de la elaboración o producción de la propaganda político-electoral o mensajes electorales, o previo a la participación en un acto de precampaña o campaña, así

como un consentimiento informado durante la elaboración de videos o cualquier tipo de propaganda o mensaje electoral (previo a la difusión) y después de la difusión; o durante la celebración de actos políticos, de precampaña o campaña y su aparición en redes sociales o cualquier plataforma digital tales como Twitter, "X", YouTube, Facebook, y notas emitidas por periódicos digitales, o por influencers, que posicionan o apoyen al candidato.

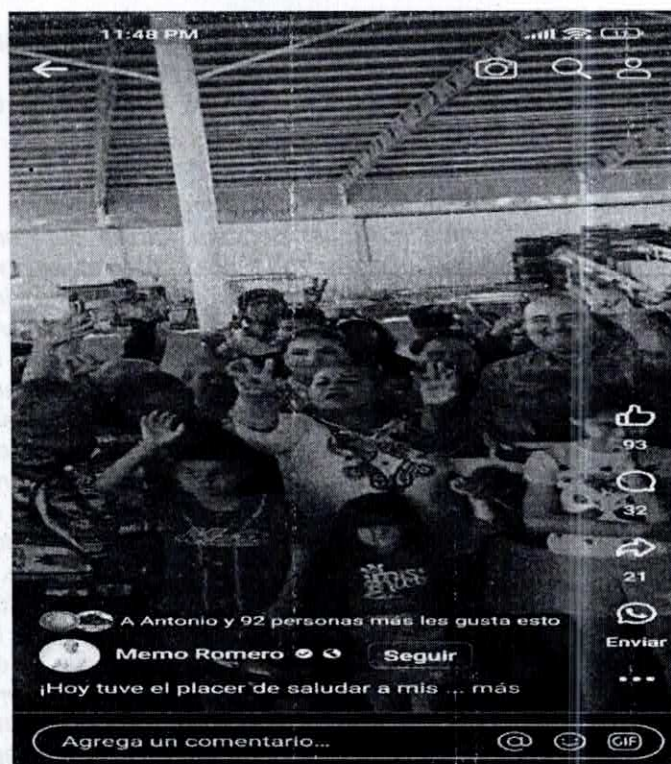
Concatenado a lo anterior en el punto IV, inciso b), el cual señala que las niñas, niños y adolescentes, antes de la elaboración o producción de la propaganda político-electoral o mensajes electorales, o previo a la participación en un acto de precampaña o campaña. Consentimiento informado durante la elaboración de videos o cualquier tipo de propaganda o mensaje electoral (previo a la difusión) y después de la difusión; o durante la celebración de actos políticos, de precampaña o campaña y su aparición en redes sociales o cualquier plataforma digital, considerando que el denunciado no cumplió con los requisitos mínimos necesarios establecidos en la Ley para utilizar la imagen de los menores de edad; aunado a que, a no existe motivo, causa o fin lícito y legítimo para la aparición de éste en la fotografía subida en fecha 09 de abril del 2024, a las 7:21 pm con el título "Hoy tuve el placer de saludar a mis amigas. ¡Mujeres empacadoras!, fue un encuentro lleno de alegría y camaradería. Gracias por la invitación y por compartir este momento conmigo!", como se aprecia en la siguiente liga <https://www.facebook.com/share/r/jm3kkKdoV1cbpJQB/?mibextid=oFDknk> en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del **C. Guillermo Romero Rodríguez**, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal.

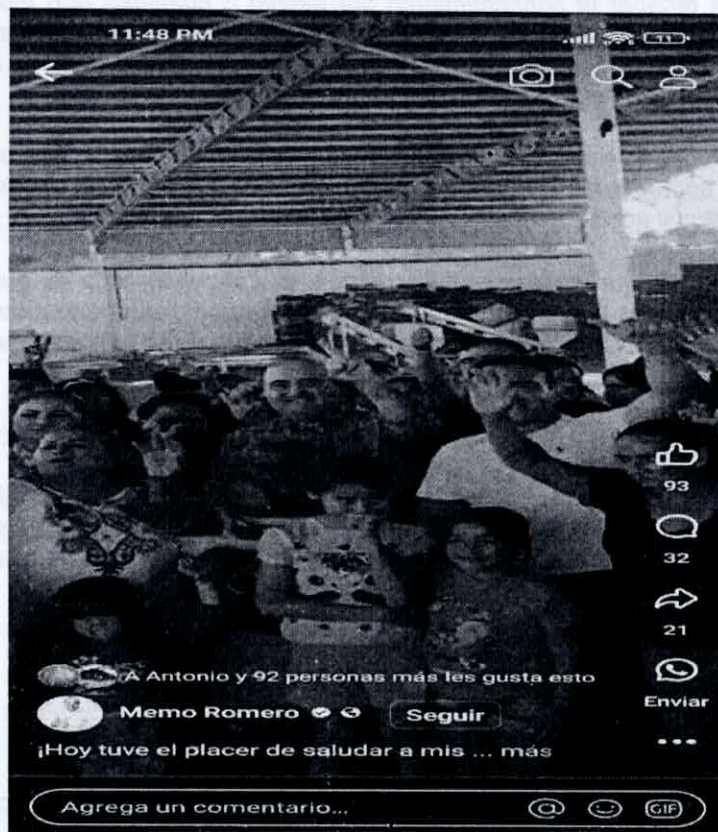
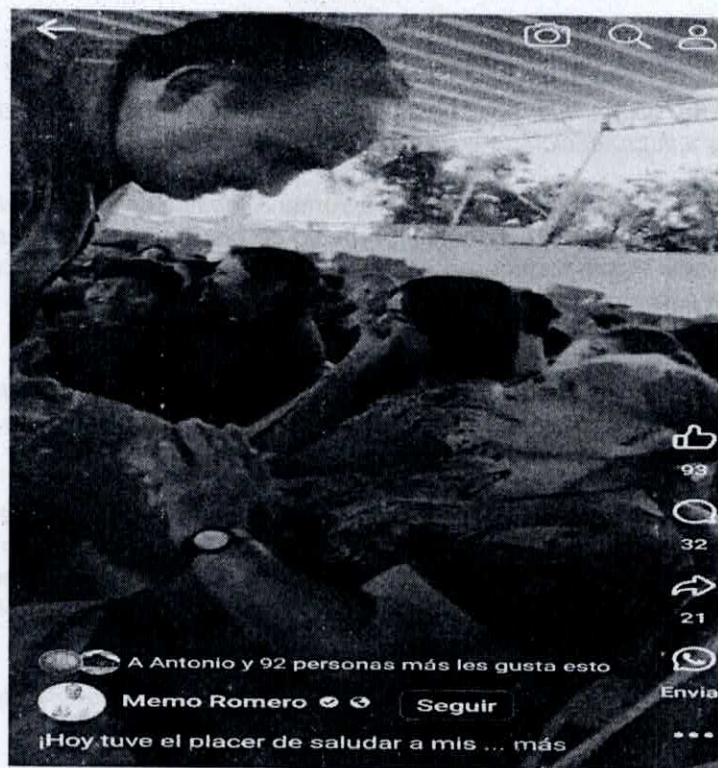
Así mismo, la resolución número **SUP-REP-170/2018** y **SUP-REP-5/2019**. Tesis XXIX/2018 PROPAGANDA POLÍTICA ELECTORAL. CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTOS DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN. señala lo siguiente;

... III. La protección reforzada del derecho a la propia imagen de menores de edad
Los menores de edad, como cualquier persona, gozan del derecho a la propia imagen, como un derivado del derecho a la privacidad y, en dicho sentido, tienen la protección de dicho derecho fundamental frente a intromisiones indebidas. Esto ha sido reconocido no sólo por los tribunales nacionales, sino por diversos organismos internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño, firmada en 1989, establece que (Artículo 16): 1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. 2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef), en el documento de debate sobre los derechos de los niños en el mundo digital, 17 señala que, a pesar de que el derecho a la intimidad de los menores y las personas adultas tiene la misma protección, es evidente que, considerando los demás derechos, el mejor interés y capacidades en evolución de los menores, es necesario un enfoque diferenciado de la protección del derecho a la intimidad de los menores. En dicho sentido, en la Observación General No. 14 del Comité de los Derechos del Niño (CRC/C/GC/14), se explica que el "interés superior del niño" es un concepto triple que involucra un derecho sustantivo, un principio interpretativo y una norma de procedimiento. Como principio interpretativo, este concepto implica que "si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño". Como norma de procedimiento implica que "siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados" (párr. 6). En el caso de que los derechos de otras personas entren en conflicto con el interés superior del niño y no sea posible armonizarlos, el referido Comité resalta que las autoridades "habrán de analizar y sopesar los derechos de todos los interesados, teniendo en cuenta que el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial significa que los intereses del niño tienen máxima prioridad y no son una de tantas consideraciones". El principio del interés superior de la niñez está también reconocido en el artículo 4, párrafo 9, de la Constitución Federal. En cuanto a la protección de la imagen de los menores, en el contexto español, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de España considera que "siempre que no medie el consentimiento de los padres o representantes legales de los menores con la ausencia del Ministerio Fiscal, la difusión de cualquier imagen de éstos ha de ser reputada contraria al ordenamiento jurídico" (Recurso 2895/2013). En dicho caso, el Tribunal determinó que publicar la fotografía de un menor en una

revista gratuita sin el permiso de sus padres, vulnera su derecho a la imagen, a pesar de que la fotografía fue capturada por el tío del niño. Enfatizó que la violación se actualiza "por la inclusión de la imagen del menor en una revista con independencia de los fines perseguidos por su publicación o de que pudiera o no afectar a la reputación del afectado" y que lo decisivo es "la entrega de esta fotografía de un codemandado a otro sin que se acredite la existencia del consentimiento necesario para su publicación". Los derechos tutelados en el artículo 6 constitucional, no son exclusivamente oponibles a los partidos políticos, sino también a los particulares, por lo que es posible concluir que la propaganda y mensajes de contenido político o electoral que difundan las personas físicas y morales en la temporalidad referida por el numeral 24724 de la ley electoral, también deben ajustarse a la norma constitucional citada, siendo posible que en el caso de que no sea así, el sujeto emisor de la misma, pueda ser sancionado. • La Sala Especializada consideró necesario, a manera de acción preventiva, establecer un llamamiento respecto de aquellas personas físicas y morales vinculadas con cualquier fuerza política que elaboren o difundan por cualquier medio de comunicación legalmente previsto para hacerlo, cualquier tipo de propaganda política o electoral que, en determinado momento pudieran emitir en ejercicio de su libertad de expresión y participación política ya sea a favor o en contra de algún partido político, precandidato/a, candidato/a, aspirante, candidato/a independiente, coalición, dentro o fuera de un proceso electoral federal o local, para que tengan especial cuidado al utilizar cualquier elemento audiovisual que pudiera colocar en riesgo el interés superior de la niñez, ya que siempre debe tenerse presente que los derechos humanos de la niñez requieren de mayor respeto, protección y cuidado reforzado por parte de cualquier persona y no sólo de las autoridades. ... (Sic)

<https://www.facebook.com/share/r/jm3kkKdoV1cbpJQB/?mibextid=oFDknk>





Hechos que evidentemente vulnera el derecho a la intimidad, violenta su imagen, honra o reputación presente en su ambiente escolar o social y en su futuro, pues al llegar a la edad adulta puede no aprobar la ideología política con la que sus tutores, o aprovechada mente el precandidato lo vinculó durante su infancia, violando así, la normatividad local, federal y la convencionalidad que protege los derechos de los infantes que aparecen en su promoción electoral, sin cumplir con la normatividad electoral y los derechos humanos, constituyendo violaciones al proceso electoral, así como a la neutralidad, equidad e imparcialidad de la contienda a favor del entonces precandidato conocido como Guillermo Romero Rodríguez.

Por su parte La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa establece lo siguiente:

... Artículo 11 Bis. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

...XVII. Derecho a la intimidad; ...

Artículo 66. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales.

No podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación.

Quienes ejerzan su patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán orientar, supervisar, y en su caso, restringir sus conductas y hábitos sin que esto se considere injerencia, siempre que atiendan al interés superior de la niñez.

Artículo 67. Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación locales, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez.

Artículo 67 Bis. Cualquier medio de comunicación que difunda entrevistas a niñas, niños y adolescentes, procederá como sigue:

I. Deberá recabar el consentimiento por escrito o cualquier otro medio, de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente, respectivamente, conforme a lo señalado en el artículo anterior y a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 66 de la presente Ley; y,

II. La persona que realice la entrevista será respetuosa y no podrá mostrar actitudes ni emitir comentarios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

En el caso de que no sea posible recabar el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de un adolescente, éste podrá otorgarlo siempre que ello no implique una afectación a su derecho a la privacidad por el menoscabo a su honra o reputación.

(Adic. Según Decreto No. 434, publicado en el P.O. No. 063, del 24 de mayo de 2023).

Artículo 67 Bis 1. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la protección de la identidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes que sean víctimas, ofendidos, testigos o que estén relacionados de cualquier manera en la comisión de un delito, a fin de evitar su identificación pública.

La misma protección se otorgará a adolescentes a quienes se les atribuya la realización o participación en un delito, conforme a la legislación aplicable en la materia.

(Adic. Según Decreto No. 434, publicado en el P.O. No. 063, del 24 de mayo de 2023).

Artículo 67 Bis 2. Los medios de comunicación deberán asegurarse que las imágenes, voz o datos a difundir, no pongan en peligro, de forma individual o colectiva, la vida, integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes, aun cuando se modifiquen, se difuminen o no se especifiquen sus identidades, y evitarán la difusión de imágenes o noticias que propicien o sean tendentes a su discriminación, criminalización o estigmatización, en contravención a las disposiciones aplicables.

En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente artículo, niñas, niños o adolescentes afectados, por conducto de su representante legal o, en su caso, de la Procuraduría de Protección, actuando de oficio o en representación sustituta, podrá promover las acciones civiles de reparación del daño e iniciar los procedimientos por la responsabilidad administrativa a que haya lugar; así como dar seguimiento a los procedimientos hasta su conclusión. Niñas, niños o adolescentes afectados, considerando su edad, grado de desarrollo cognoscitivo y madurez, solicitarán la intervención de la Procuraduría de Protección.

Lo que evidentemente constituye violaciones al proceso electoral, entre ellos a la neutralidad, equidad e imparcialidad de la contienda pues con la manifestación de dichas imágenes de niñas, niños y menores, se pretende posicionar la imagen a favor del entonces precandidato conocido como Guillermo Romero Rodríguez, realizándose acciones que los infantes no entienden y que corresponden totalmente a intereses ajenos a los suyos.

En resumidas cuentas dichas fotografías subidas a la red, en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del **C. Guillermo Romero Rodríguez**, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, se encuentran plagadas de actos constitutivos de infracciones electorales y delitos, de los cuales debe enterarse a las autoridades pertinentes, acciones que tienen como objetivo favorecer al posicionamiento de un precandidato mediante la utilización de la imagen de niños, niñas y adolescentes, sin contar con los requisitos mínimos necesarios de su consentimiento, lo que lleva a violentar la neutralidad, equidad e imparcialidad de la contienda.

Noveno.- Que el martes 16 de abril del 2024, a las 10:05 pm con el título "Que tarde tan gratificante", como se aprecia en la siguiente liga <https://www.facebook.com/share/p/WdmgonAXhCUMWmFn/?mibextid=WC7FNe> en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del C. Guillermo Romero Rodríguez, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, es importante señalar que en primer término se debe considerarse propaganda electoral, así como un acto político por cumplir con los requisitos para el efecto, y de lo acontecido el precandidato difundió varias imágenes de niños, niñas y adolescentes, ello para promocionar su campaña política y posicionar su imagen ante los electores, lo cual vulnera el derecho a la intimidad de los infantes que aparecen en su promoción electoral, y se presume puede devenir en un riesgo potencial, en relación con la imagen, honra o reputación presente en su ambiente escolar o social y en su futuro, pues en la edad adulta al decidir sobre su ideología política puede no aprobar con la que fue relacionado desde la infancia, en consecuencia a lo anterior el precandidato Guillermo Romero Rodríguez, así como los partidos políticos PAN, PRI, PAS Y PRD, no protegen el interés superior del menor pues anteponen la auto determinación arbitraria del candidato y los partidos en el contenido de sus promocionales, publicados en diversos medios, sin cumplir con la normatividad electoral, señalada en el Lineamiento para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, emitido el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo General, mediante Acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales, en acatamiento a la sentencia SUP-REP60/2016 de la Sala Superior, y SRE-PSC-102/2016 de la Sala Regional Especializada, ambas salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación" (en adelante Lineamientos), identificado con la clave INE/CG20/2017.

En los cuales se señalan las formas de aparición y participación de niñas, niños o adolescentes, siendo de manera directa en propaganda político electoral y mensajes electorales; y directa o incidental en actos políticos, actos de precampaña o campaña. En un acto político, un acto precampaña o campaña, la aparición es incidental, siempre y cuando las niñas, niños o adolescentes sean exhibidos de manera involuntaria y sin el propósito de que formen parte de éstos, por ser situaciones no planeadas o controladas por los sujetos obligados.

Así mismo se observa de la fotografía publicada en fecha martes 16 de abril del 2024, a las 10:05 pm con el título "Que tarde tan gratificante", como se aprecia en la siguiente liga <https://www.facebook.com/share/p/WdmgonAXhCUMWmFn/?mibextid=WC7FNe> en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del C. Guillermo Romero Rodríguez, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, mediante la cual se difundieron varias imágenes de niñas, niños o adolescentes, donde se tienen una participación DIRECTA, lo anterior en un acto político electoral, pues de la imagen en un análisis exhaustivo se observa a los menores, manifestando un apoyo directo al hacer gestos de manera corporal, acreditando entonces su participación activa y directa, con objeto de promocionar la campaña política del precandidato, y posicionar su imagen ante los electores, lo cual vulnera el derecho a la intimidad de los infantes así como su imagen, honra o reputación,

presente en su ambiente escolar o social y en su futuro, pues a la edad adulta puede NO APROBAR la ideología política con la que fue identificado en su infancia.

La aplicación convencional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala que la aparición de menores de edad en propaganda política o electoral implica un riesgo potencial de ASOCIAR a los menores con una determinada preferencia política o ideológica.

Es de importancia señalar que la protección del interés superior del menor se antepone a la libertad de los partidos de autodeterminar el contenido de sus promocionales.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala que se debe partir de una concepción de niños, niñas y adolescentes como titulares activos de derechos y no solamente como sujetos de protección, bajo el derecho del infante a la preservación de su imagen, considerando que una exposición inadecuada puede fomentar estereotipos o una situación de riesgo para el menor, garantizando con una correcta aplicación de la norma, no ser objeto de injerencias en su vida privada, familia, domicilio, y correspondencia, así como no ser atacado en su honor y reputación.

En todas las decisiones y actuaciones el Estado velará y cumplirá con el principio del Interés superior de la Niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Es decir, los niños, las niñas y adolescentes tienen derecho a que, antes de que se tome cualquier medida que pueda influir sobre estos se evalúen y ponderen las posibles repercusiones, a fin de decidir por la que promueva y proteja sus derechos, considerando que la propia imagen de los menores de edad, goza de protección, por lo que su exhibición implica un riesgo potencial, así mismo la propaganda política o electoral es un riesgo potencial porque siempre hay un elemento ideológico o preferencia política.

Concatenado a lo anterior, la resolución número SRE-PSC-121/2015 tituló **USO INDEBIDO DE LA PAUTA POR LA DIFUSIÓN PROPAGANDA ELECTORAL QUE AFECTA AL INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES**. señala lo siguiente;

El promovente alude a la supuesta vulneración a los derechos de los menores que aparecen en el promocional denominado Quien pompo 2, en torno a la utilización de su imagen y la protección de sus datos personales, e invoca y transcribe el contenido del artículo 4, párrafo noveno[5], de la Constitución Federal, en el cual se prescribe la obligación del Estado de velar por el interés superior de la niñez y garantizar de manera plena los derechos de los menores.

Al respecto, se tiene en cuenta que el contenido de la propaganda difundida por los partidos políticos se encuentra amparada por la libertad de expresión, en relación a la cual, el Tribunal Electoral ha sostenido en reiteradas ocasiones que debe ser objeto de maximización en el contexto del debate político, a efecto de que se aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática.[6]

No obstante, el ejercicio de dicha libertad fundamental no es absoluto, sino que tiene límites, entre los que se encuentran, los vinculados con la dignidad o la reputación de las personas y los derechos de terceros, acorde con lo dispuesto en los artículos 6º, párrafo primero de la Constitución Federal[7], así como 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles[8] y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[9].

En tal virtud, la acotación en torno a los aspectos que no deben perturbarse con las expresiones de ideas, se traduce en una obligación de abstenerse de incurrir en tales conductas a efecto de salvaguardar los bienes jurídicos ahí protegidos, como lo es, el pleno respeto a los derechos de terceros, incluyendo, por supuesto los derechos de los menores, cuya protección se encuentra expresamente ordenada en el artículo 4º de nuestra Constitución Federal.

Por tanto, la comisión de alguna conducta que provoca la inobservancia de tal obligación, implica por sí misma un aspecto que atenta contra el propio orden

constitucional y, en el caso de la materia electoral, constituye una vulneración específica en cuanto al uso del tiempo pautado por el INE para la difusión de la propaganda electoral, en términos de lo dispuesto en el artículo 247, párrafo 1, de la Ley Electoral.

Así, la Sala Superior[10] ha señalado que en el derecho administrativo sancionador electoral el "tipo" infractor se constituye con los elementos siguientes:

(i) Una norma que contenga una obligación o una prohibición a cargo de algún sujeto.

(ii) Otra norma con una prevención general, relativa a que, si alguien inobserva la ley (ya sea por incumplir alguna obligación o por violar una disposición), se impondrán sanciones.

(iii) Un catálogo general de sanciones aplicables cuando se inobserve la normativa.

Luego, en el caso de la normativa sobre la cual se afirma su incumplimiento, los elementos que constituyen el tipo administrativo electoral que nos ocupa, se obtienen de los referidos artículos 4 y 6, párrafo primero de la Constitución Federal en torno a que en la difusión de las ideas se atienda a la obligación de respetar los derechos de terceros y, en específico, los derechos de los menores; ello, en relación con el artículo 247, párrafo 1, de la Ley Electoral, referente al mandato específico de que en el uso de las pautas asignadas para la difusión de propaganda electoral se acaten los lineamientos constitucionales.

Lo anterior, se relaciona con lo dispuesto en los diversos 25, párrafo 1, incisos a) y u), de la Ley de Partidos Políticos y 443, párrafo 1, incisos a) y n) de la Ley Electoral, en los que se establece la prevención general concerniente a la inobservancia de las disposiciones establecidas en la normativa electoral.

Y finalmente, el catálogo de sanciones aplicables se encuentra previsto en el artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la Ley Electoral, toda vez que el sujeto denunciado en el presente caso, resulta ser un partido político.

En tales condiciones, el tipo administrativo electoral antes referido se actualiza cuando en el uso de las pautas asignadas por el INE se difundan mensajes que puedan afectar derechos de terceros, y que en el caso, resultan ser menores de edad, a quienes debe garantizárseles sus derechos en el marco de su interés superior.

Al respecto, se tiene en cuenta el concepto de "interés superior del niño", el cual ha sido descrito por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al destacar que "implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño".[11]

Así, el Estado Mexicano, a través de sus instituciones, autoridades y tribunales, está constreñido a tener en consideración primordial el respeto al interés superior del menor, a través de la adopción de las medidas necesarias para asegurar y maximizar la protección y efectividad de los derechos de los niños, acorde con lo establecido en los artículos 3, párrafo 1 y 4,[12] de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En esa tesitura, acorde con el "Protocolo de actuación de quienes imparten justicia en caso que involucren niñas, niños y adolescentes" emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el interés superior del niño tiene las siguientes implicaciones:

a) coloca en plena satisfacción de los derechos del niño como parámetro y fin en sí mismo;

b) define la obligación del Estado respecto del niño, y

c) orienta decisiones que protegen los derechos del niño.

Por ello, la Primera Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la mera situación de riesgo de los menores es suficiente para que se estime que se afectan los derechos de los niños y, ante ello, deben adoptarse las medidas que resulten más benéficas para la protección de los infantes.[13]

Pues bien, en el caso que nos ocupa, la supuesta vulneración al interés superior del menor se desarrolla a través de la exposición de la imagen de diversos

niños que participan en el promocional denunciado, de ahí que, la afectación concreta a analizar se refiera al derecho a la propia imagen de los menores participantes.

Para tal efecto, se parte de la base relativa a que el derecho a la propia imagen de los menores goza de una protección especial, de ahí que para el otorgamiento de la salvaguarda judicial es suficiente que los menores se ubiquen en una situación de riesgo potencial, sin que sea necesario que esté plenamente acreditado el perjuicio ocasionado, pues, en congruencia con el interés superior de los niños, debe operar una modalidad del principio in dubio pro infante, a fin de dar prevalencia al derecho de los menores, por encima del ejercicio de la libertad de expresión, con el objeto de que se garanticen los derechos de los niños, por encima de cualquier duda que se presente en los casos que se analicen.

En similares términos el Tribunal Constitucional de España ha establecido que "en los casos en que se analice la captación y difusión de fotografías de niños en medios de comunicación social,[...] es preciso tener en cuenta, que el ordenamiento jurídico establece una protección especial, en aras a proteger el interés superior del menor".[14]

Asimismo, señala el mismo Tribunal Constitucional Español que el derecho a la propia imagen "se configura como un derecho de la personalidad, que atribuye a su titular la facultad de disponer de la representación de su aspecto físico que permita su identificación, lo que conlleva tanto el derecho a determinar la información gráfica generada por los rasgos físicos que le hagan reconocible que puede ser captada o tener difusión pública, como el derecho a impedir la obtención, reproducción o publicación de su propia imagen por un tercero no autorizado".[15]

Así, en el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño[16], se establece que ningún niño puede ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, ni ataques ilegales a su honra y reputación y, por su parte, en los artículos 76 y 77 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes[17] se contempla igualmente la salvaguarda de los menores ante cualquier riesgo de afectación o manejo directo de su imagen, nombre, datos o referencias que permitan su identificación.

Pues bien, en el caso de la propaganda política o electoral hay siempre presente un elemento ideológico que identifica a la opción política que la presenta, por tanto, en principio, la utilización de menores en la misma implica un riesgo potencial de asociar a tales infantes con una determinada preferencia política e ideológica.

Lo anterior puede devenir en un riesgo potencial en relación con su imagen, honra o reputación presente en su ambiente escolar o social y, por supuesto, en su futuro, pues al llegar a la vida adulta pueden no aprobar la ideología política con la cual fueron identificados en su infancia.

En ese sentido, acorde con la disposiciones internacionales y nacionales antes descritas, esta Sala Especializada se encuentra obligada a determinar la implementación de todas aquellas medidas que sirvan para evitar que se presenten tales situaciones de riesgo potencial que puedan afectar el interés superior del menor en relación con los promocionales de contenido político electoral.

Así, en una primera actuación, necesaria para garantizar que no se presenta alguna situación de riesgo, es criterio de esta Sala, que la autoridad que analice en algún momento, un promocional político en que participen menores, deberá contar con la plena certeza de que se respetó el elemento relativo al consentimiento parental o, en su caso, de los tutores, en torno a su participación en la propaganda electoral, toda vez de lo dispuesto por los artículos 424 y 425 del Código Civil Federal y sus correlativos de los códigos civiles de la República Mexicana.

Igualmente, tal autoridad deberá garantizar el derecho que tienen los infantes de ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, en términos de lo dispuesto en el artículo 71[18] de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Al efecto, y como elementos instrumentales de tales derechos, directamente relacionados con el interés superior del menor, la autoridad que analice la validez de promocionales de contenido político electoral deberá verificar lo siguiente:

i. Consentimiento por escrito debidamente firmado por el padre y la madre o por quien(es) ejerza(n) efectivamente la patria potestad o tutela del menor.

Tal documento se acompañará de copia certificada del acta de nacimiento, o bien, constancia de pérdida de patria potestad o acta de defunción del padre o madre que no firme (para el caso de que se otorgue solo por uno de los padres o tutores).

ii. Manifestación del menor por cuanto hace a su opinión libre y expresa respecto de su participación en el promocional electoral en cuestión. Tal opinión será valorada atendiendo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

iii. El consentimiento parental o, en su caso, de los tutores, y la manifestación de la opinión del menor deberá ser ratificado ante la Oficialía Electoral del INE o fedatario público, a fin de que se haga constar el otorgamiento del mismo en un acto revestido de fe pública. Lo anterior a fin de generar certeza y garantizar plenamente el interés superior de los menores.

Asimismo, aunado a contar con la certeza plena en torno al otorgamiento del consentimiento respectivo, acorde con las condiciones antes relatadas, la autoridad que en su momento, analice la validez del promocional político en que participen menores de edad deberá valorar minuciosamente y neutralmente su contenido, a fin de que, tomando en cuenta su edad y madurez, se les garantice entre otras cuestiones: pleno respeto a su imagen, honra, nombre o datos personales, evitando en todo caso situaciones de riesgo, que de manera actual o al menos potencial, pudieran correr en su entorno social o educativo por su participación en tal promocional electoral.

Además, tal autoridad, ya sea administrativa o judicial, deberá allegarse de los elementos necesarios para analizar y justificar de manera razonable el motivo y necesidad sustantiva para la participación de los menores en mensajes de propaganda política electoral. Tal cuestión deberá ser ponderada en cada caso, en relación con el interés superior del menor y garantizando objetivamente el pleno respeto a su desarrollo físico, psíquico y emocional.

Ahora bien, en la especie, no se tiene plena certeza en relación a que efectivamente se haya otorgado el consentimiento necesario para la participación de los menores en el promocional denominado Quien pompo 2.

El PAN allegó documentación con la intención de acreditar que efectivamente se recabó la autorización de los padres o tutores, para la participación de los menores en el promocional denunciado, sin embargo, se trata de elementos que no cumplen con las características y formalidades legales razonables para acreditar lo que pretenden.

Esto es, en el promocional denunciado se aprecia a simple vista que en el desarrollo del mismo participaron cuando menos veintiún niños y, a pesar de ello, el PAN solamente allegó nueve "cartas de autorización", [19] aunque la Unidad Técnica le requirió la documentación que acreditara el otorgamiento del consentimiento de parte de quienes ejercen la patria potestad o tutela de quienes aparecen en el promocional.

En tales condiciones, no se cuenta con elementos que sirvan para acreditar el otorgamiento del consentimiento en torno a cuando menos doce menores que participaron en la propaganda denunciada, lo cual, es suficiente para estimar que se vulneró al menos potencialmente, el derecho a la propia imagen de tales menores, al no contar con la autorización relativa a su aparición en el promocional.

Además, el contenido mismo de tales cartas carece de las formalidades necesarias para dotar de plena certeza el acto de autorización que ahí se pretende hacer constar, de hecho, en tres de ellas [20] ni siquiera se asienta el nombre del padre o la madre quienes firmaron tal documento.

Por otra parte, en la totalidad de las cartas aportadas, consta solamente la firma de uno de los padres y no de ambos, sin que se haga precisión respecto a la razón de la ausencia del otro padre o madre; ni se acompaña documentación que acredite el parentesco de quien firma en representación de los menores.

En ese sentido, no hay certeza de que quien firmó efectivamente sea el padre o la madre del menor, en ejercicio efectivo de su patria potestad.

Finalmente, no obra en autos documento alguno que evidencie que se tomó en cuenta la opinión libre y expresa del menor.

Así las cosas, esta Sala Especializada determina que no se implementaron las medidas necesarias para garantizar que los padres o tutores de los menores otorgaran su consentimiento para la aparición de los mismos en el promocional electoral denunciado, de ahí que se estime que se vulneró el interés superior del

menor y, por ende, se actualiza la infracción que se denuncia, sin que sea necesario analizar el contenido del mismo.

Luego entonces, al haberse acreditado la infracción relativa al uso indebido de la pauta por la difusión de propaganda electoral que vulnera el interés superior del menor, se vincula al Instituto Nacional Electoral para que adopte las medidas necesarias a fin de que no se difunda el promocional denominado Quien pompo 2 (RV00738-15) bajo ningún tipo de pauta, ni federal ni local, atendiendo a que el mismo ha sido determinado ilegal en esta resolución y con la finalidad de evitar que se genere alguna situación que pueda poner en riesgo a los menores que aparecen en el mismo.

Asimismo, cabe indicar que es criterio de esta autoridad judicial que en el caso de los asuntos en que se aborde una posible afectación al interés superior del menor, corresponde a la persona que realiza la exposición de los niños acreditar que efectivamente actuó salvaguardando la integridad y las prerrogativas de los mismos, pues de lo contrario, se desnaturalizaría por completo la obligación de las autoridades de velar por el pleno respeto a los derechos de los niños, en tanto que actuaría una suerte de presunción de legalidad en torno a potenciales situaciones de riesgo para los menores, en vez de que se optara por emprender acciones que sirvan para tener la plena certeza respecto a la protección de los mismos.

En ese sentido, y considerando que el PAN en la contestación al requerimiento de fecha doce de mayo, indicó que no había contratado a empresa alguna para la participación de los menores en el promocional referido, se evidencia que es el único responsable por su participación sin el debido consentimiento parental o, en su caso, de los tutores, en el promocional político electoral pautado por ese mismo instituto político.

De la misma manera la resolución TESIN-PSE-39-2021, emitida por el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, declara la existencia de la infracción por incurrir en actos violatorios a los Lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños, y adolescentes en materia político-electoral por parte de Fernando Pucheta Sánchez, candidato a la presidencia municipal de Mazatlán, mismo que señala lo siguiente:

En el perfil de la red social Facebook del denuncia, los días 14 de marzo, 09, 10, 14, 15, 19, y 21 de abril, 06, 07, 17, y 28 de mayo, publica y difunde varias imágenes de niños, niñas y adolescentes, ello para promocionar su campaña política y posicionar su imagen ante los electores, lo cual a su decir, vulnera el derecho a la intimidad de los infantes que aparece en su promoción electoral, sin cumplir con la normativa electoral ya que divulga el rostro de niños y niñas sin tener el consentimiento de las personas que ejercen sobre ellos la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente en función de la edad y madurez, sin que se advierta que el denunciado haya difuminado el rostro de los menores.

Marco normativo. Interés superior de la niñez. -

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 19, establece que toda niña, niño y adolescente, tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del estado.

Por su parte la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña en su artículo 3, establece que en todas las medidas que los involucren se deberá atender como consideración primordial el interés superior de la niñez.

sobre lo anterior, el comité de los derechos del niño y de la niña de la organización de las naciones unidas, en su observación general 14 del 2013, sostuvo que el concepto del interés superior de la niñez, implica tres vertientes;

Derecho sustantivo: Consistente en el derecho de la niñez a que su interés superior sea valorado y tomado como de fundamental protección cuando diversos intereses estén involucrados, con el objeto de alcanzar una decisión sobre la cuestión a resolver.

Un principio fundamental de interpretación legal: cuando se esté ante una previsión legal abierta, a más de una interpretación, se debe optar por aquella que ofrezca una protección más efectiva al interés superior de la niñez.

una regla procesal: cuando exista una decisión que pudiera afectar a la niñez o adolescencia, específicamente o en general a un grupo identificable o no identificable, en el proceso para la toma de la misma, se debe incluir una evaluación del posible

impacto, ya sea negativo o positivo, de la decisión sobre la persona menor de edad involucrada.

Así mismo se ha señalado que el concepto de interés superior de la niñez no es nuevo, sino que ya se consagraba en la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, y en la convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, por lo que se toma como un concepto dinámico que debe evaluarse adecuadamente en cada concepto., cuyo objetivo debe ser el garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos para él o la menor.

Por su parte el artículo cuarto de nuestra Constitución General, en su noveno párrafo establece que el Estado en todas su decisiones y actuaciones velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando así de manera plena sus derechos.

Así mismo, en la ley general de las niñas, niños y adolescentes, en sus artículos segundo y dieciocho se establece que el interés superior de la niñez, deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucren niñas, niños y adolescentes.

Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en la jurisprudencia de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO", que, para la determinación en concreto del interés superior de la niñez, se debe atender a sus deseos, sentimientos, y opiniones, siempre que sean compatibles con sus necesidades vitales.

Aparición de niñas, niños, y adolescentes en la propaganda electoral.

La propaganda electoral difundida por los partidos políticos, se encuentra amparada por la libertad de expresión, que se consagra en el artículo sexto Constitucional, sin embargo, dicha libertad no es absoluta pues encuentra sus límites en la dignidad, y reputación de las personas y los derechos de las mismas, dentro de las cuales se encuentran las de los niños, niñas y adolescentes.

Por lo expuesto el Instituto Nacional Electoral emitió los Lineamientos para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en materia político-electoral, cuyo objetivo es establecer las directrices para la protección de los citados que aparezcan en la propaganda político-electoral, mensajes electorales y en actos políticos, actos de precampaña o campaña de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas independientes, así como de los mensajes transmitidos por las autoridades electorales, federales y locales, o las personas físicas o morales que se encuentren vinculadas directamente a uno de los sujetos mencionado, atendiendo a su calidad o naturaleza jurídica, por cualquier medio de comunicación y difusión, incluida las redes sociales o cualquier plataforma digital, sea esta transmitida en vivo o videograbada, debiendo ajustar los sujetos antes mencionados sus actos de propaganda político-electoral, o mensajes a través de radio o televisión, toda vez que:

- a. pueden aparecer de manera directa e incidental en la propaganda.
- b. Cuando se utilice la imagen, voz o cualquier otro dato que les haga identificable, se deberá proporcionar la máxima información sobre sus derechos, opiniones y riesgos respecto de su aparición en la propaganda político electoral.
- c. Si la aparición es incidental y ante la falta de consentimientos, se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, voz, o cualquier otro dato que le haga identificable, garantizando la máxima protección de su dignidad o derechos.

*Es importante mencionar la Jurisprudencia **20/2019** en la que se determina la obligación que CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN; como sea;*

PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º y 4º, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 y 14 de los Lineamientos Generales para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de Propaganda y Mensajes Electorales establecidos por el Instituto Nacional Electoral; y en la Jurisprudencia de la Sala Superior 5/2017, de rubro PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CUMPLIRSE CUANDO SE DIFUNDAN IMÁGENES DE NIÑOS, NIÑAS

Y ADOLESCENTES, se advierte que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. En ese sentido, cuando en la propaganda político-electoral, independientemente si es de manera directa o incidental, aparezcan menores de dieciocho años de edad, el partido político deberá recabar por escrito el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o tutela, y en caso de que no cuente con el mismo, deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que haga identificable a los niños, niñas o adolescentes, a fin de salvaguardar su imagen y, por ende, su derecho a la intimidad.

Aunado a lo anterior, la resolución número SUP-JE-144/2021, Sentencia que confirma la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, en el procedimiento especial sancionador, que declaró existente la violación a los requisitos sobre la aparición de menores en propaganda electoral, atribuida a Fernando Alejandro Larrazábal Bretón y al Partido Acción Nacional, este último promovente del juicio electoral. señala lo siguiente;

La imagen de una niña, niño o adolescente en fuentes de acceso público es insuficiente para poderla incluir en propaganda electoral a) Marco jurídico La imagen es la reproducción identificable de los rasgos físicos de una persona sobre cualquier soporte material. 9 El derecho a la propia imagen constituye uno de los derechos inherentes de la persona, que le permite disponer de su apariencia; considerado por la Suprema Corte como un derecho de defensa y garantía esencial para la condición humana, porque puede reclamarse tanto en defensa de la intimidad violada o amenazada como exigir del Estado que prevenga la existencia de eventuales intromisiones que lo lesionen. 10 Si bien no es un derecho absoluto tendría que justificarse su intromisión por un interés público, o bien, cuando se cuente con el consentimiento u autorización de la persona. 11 Estos límites sobre la captación, reproducción o publicación de la imagen de una persona tratándose de menores de edad exige una protección reforzada debido al interés superior de la niñez. El interés superior de la niñez es un principio constitucional y convencional de interpretación que ante la toma de una decisión que involucre niñas, niños y adolescentes se debe evaluar y ponderar las 9 Véanse artículos 16 y 17 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal. 10 Véase tesis P. LXVII/2009, emitida por el Pleno, de rubro: "DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA." 11 Por ejemplo, la Ley Federal del Derecho de Autor establece como infracción en materia de comercio el utilizar una imagen de una persona sin su autorización o la de sus causahabientes (artículo 231, f.II). SUP-JE-144/2021 10 posibles repercusiones en sus derechos y asegurar una protección plena. 12 Dicho principio exige la prevalencia de los derechos de la infancia frente a cualquier otro interés, por lo que ante un conflicto se debe ponderar por encima de cualquier otro ese derecho infantil. 13 Así, la Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 3 que el niño (a) tiene derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten. 14 De modo que, cualquier medida o decisión pública que pueda afectarlos (a) requiere adoptar medidas reforzadas o gravadas, para protegerlos con una mayor intensidad. 15 12 Véase artículo 4º de la Constitución, en su párrafo noveno, que dice: "En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez." Asimismo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece en su artículo 2 y 3 párrafos: "El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales." 13 Acción de inconstitucionalidad 2/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pfo. 129: "En suma, el ejercicio de los derechos fundamentales de las niñas y los niños se encuentran por encima de cualquier otro interés, incluyendo el de sus padres, pues, al ser la infancia concebida ya como sujeto de derechos, los niños y las niñas pueden ejercerlos en todo momento y las autoridades están no sólo obligadas a garantizar ese ejercicio, sino a velar porque el mismo se cumpla. Cuando se anteponen los derechos de la infancia con los de sus padres, la autoridad tiene obligación de ponderar por encima de cualquier otro, ese derecho infantil." 14 Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 15 Tesis aislada 1a. LXXXIII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS

SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL.” SUP-JE-144/2021 11 Por eso, las autoridades del Estado deben garantizar y sancionar aquellas intromisiones arbitrarias e ilegales en la intimidad de las niñas, niños y adolescentes, que atenten contra su honra, imagen y reputación. Así, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes considera una violación a su intimidad, cualquier manejo directo de su imagen en los medios de comunicación con una concesión o medios impresos (art. 77). Asimismo, dicha ley considera una vulneración a la intimidad de las y los menores, cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación, bien porque menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o los ponga en riesgo. Ahora bien, el INE emitió los Lineamientos para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes que aparezcan en la propaganda políticoelectoral. Los sujetos obligados a esas directrices son los partidos políticos, coaliciones, candidaturas, autoridades y personas físicas o morales que se encuentren vinculadas. Los Lineamientos obligan a que en cualquier acto, mensaje o medio de difusión de propaganda político-electoral en el que aparezcan niñas, niños o adolescentes ya sea de manera directa o incidental, debe existir el consentimiento de quien o quienes ejerzan la patria potestad o el tutor o, en su caso, la autoridad debe suplirlos. Al igual deben contar con las manifestaciones de los menores sobre su opinión libre e informada respecto a la propaganda en la que participen. En caso de que no se tenga esa documentación, independientemente si la aparición fue directa o incidental se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que haga SUP-JE-144/2021 12 identificable a los niños, niñas o adolescentes, a fin de salvaguardar su imagen y, por ende, su derecho a la intimidad. 16 También, este órgano jurisdiccional ha señalado que los Lineamientos son aplicables en las imágenes que difundan las candidaturas en redes sociales. 17 b. Valoración de la Sala Superior El actor se duele de que la responsable omitió pronunciarse respecto a que en el motor de búsqueda “https://tineye.com” se podía observar que al menos hay otras ciento un publicaciones que utilizan la misma imagen genérica de la menor que apareció en las publicaciones del candidato denunciado y que no se podía presumir que el material hubiera sido producido en México o que correspondiera al presente año. Señaló que la plataforma estaba sujeta a las leyes de Israel con uso lícito de la propiedad intelectual. Al respecto, el Tribunal local determinó que los Lineamientos del INE eran aplicables sin importar que la imagen hubiera sido generada en otro país o tuviera un uso comercial, por lo que debían observarse las pautas de consentimiento e información ahí establecidas. Esta Sala Superior considera apegada a Derecho la determinación de la responsable porque el partido político parte de la premisa inexacta de que si las imágenes de menores se alojan en algún sitio público es innecesario demostrar una autorización para su uso en propaganda electoral. Jurisprudencia 20/2019 de rubro: “PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN.” Véase tesis XXIX/2019, de rubro: “MENORES DE EDAD. LOS LINEAMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA SU PROTECCIÓN, SON APLICABLES A LAS IMÁGENES QUE DE ELLOS DIFUNDAN LAS CANDIDATURAS EN SUS REDES SOCIALES EN EL CONTEXTO DE ACTOS PROSELITISTAS.” SUP-JE-144/2021 La premisa es incorrecta porque: El derecho a la imagen es uno de los derechos esenciales de la persona, que tratándose de menores de edad requiere de un escrutinio más estricto sobre su difusión, reproducción o captura, derivado del interés superior de la niñez y de que son un grupo vulnerable. Por eso, en materia electoral se necesita recabar el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela y la opinión informada de la o el menor, sin que se prevean excepciones al respecto. No puede extenderse un permiso o derecho de autor para disponer de una imagen de un infante o adolescente para usos electorales. En efecto, una autorización o consentimiento de una imagen para uso comercial o para aparecer en cierta página o sitio web no puede considerarse una cláusula abierta y usarse para fines no expresamente señalados. Pues la forma en cómo y dónde se muestran a los demás es un derecho esencial de toda persona derivado de su dignidad humana, que impide una difusión irrestricta de ésta. Más aún si la imagen o fotografía corresponde a menores de edad, el escrutinio es aún más estricto, porque no se puede perder de vista que ellas y ellos precisan de la representación de un adulto y son un grupo vulnerable que requieren una protección reforzada ante una posible afectación a su desarrollo. Por esa razón, en materia electoral rigen los Lineamientos emitidos por el INE que fijan los requerimientos para que puedan aparecer niñas, niños y adolescentes en la propaganda electoral. SUP-JE-144/2021. Los Lineamientos no establecen alguna excepción en su aplicación, incluso son exigibles en aquellos casos de apariciones incidentales de menores en propaganda electoral. Por lo que también en esos casos, los sujetos obligados deben recabar el consentimiento de la madre, padre o tutor, o en su caso, de la autoridad que los supla y de la opinión informada de la o el menor, de lo contrario tendrán que difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, voz o cualquier otro dato que los haga identificables. La circunstancia de que no existan hipótesis de excepción en las que sea innecesario el consentimiento es precisamente porque se trata de menores de edad, a los que se les debe garantizar la máxima protección de la dignidad y sus derechos. Si un partido político no confeccionó o adquirió la imagen no lo releva de la obligación constitucional y convencional de salvaguardar el interés superior de cualquier niña, niño o adolescente que aparezca en su propaganda política electoral. Lo anterior, debido a que los partidos

políticos y las personas candidatas son responsables de proteger los derechos de la infancia desde el momento en que deciden insertar tales imágenes en su propaganda. Sin que sea suficiente exhibir un permiso del uso de la imagen porque en todo caso habría que revisar los términos y condiciones en que fue emitido, es decir, que contenga la autorización de quienes representan al menor y, en su caso, un consentimiento informado del menor, pero, sobre todo, que permita su utilización para fines político electorales. De ahí que, deba desestimarse el planteamiento de que por tratarse de una fotografía extraída de una galería digital pública, eran inexigibles los Lineamientos porque esa razón es insuficiente para concluir que la SUP-JE-144/2021 15 imagen, el honor y la intimidad de la menor en cuestión efectivamente se encuentre protegido en ese sitio electrónico. 2. El partido no demostró tener una autorización para el uso electoral de la imagen de la menor. Era deber del partido demostrar que efectivamente tuviera una autorización electoral para poder incluir la imagen de la menor en las publicaciones del candidato. Sin embargo, el actor se limita a sostener que deben existir excepciones en la aplicación de los Lineamientos cuando la persona no está expuesta a riesgos que afecten su integridad personal. De modo que se trata de afirmaciones genéricas y subjetivas sin sustento probatorio que permita corroborar la licitud y autorización electoral para divulgar la fotografía de la menor, pues el hecho de que ésta se encuentre alojada en un buscador de Internet no equivale a demostrar que sea lícita su aparición. Máxime si se considera que la información, documentos, imágenes que circulan en la Red no necesariamente son lícitos, dado que no hay un control previo sobre el contenido de las plataformas electrónicas. Incluso tratándose de niñas, niños y adolescentes hay muchos riesgos de que sus fotografías, imágenes, videos circulen sin autorización alguna y debido a que no todos pueden reclamar por sí mismos la violación a sus derechos puedan impedir su divulgación. En esos casos se deben adoptar medidas mucho más estrictas sobre imágenes de menores alojadas en redes sociales o en la web. Por tanto, carece de razón el partido al sostener que era suficiente con demostrar que la imagen aparece en un buscador de internet y que ha sido publicada en infinidad de páginas electrónicas, dado que no SUP-JE-144/2021 16 demuestra que su difusión o divulgación sea lícita y, menos, para fines electorales. La imagen denunciada correspondía a una menor con una discapacidad lo que exige una tutela reforzada. En las constancias de autos se aprecia que la menor incluida en las publicaciones del candidato tiene síndrome de Down, que es una alteración genética que puede llevar algún grado de discapacidad intelectual. En ese sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad garantiza que todos los niños y niñas gocen plenamente de los derechos humanos en igualdad de condiciones con los demás niños y que puedan expresar su opinión libremente sobre las cuestiones que les afecten (art.7). También, se debe garantizar su derecho a expresar su opinión y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad. Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en su artículo 56 que tienen derecho a que en todo momento a que se les facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que les permitan obtener información de forma comprensible. Por ello, al estar involucrada una niña con una discapacidad exige que se hubieran respetado los principios de no discriminación, de una protección reforzada y atender a la especial vulnerabilidad en que se encuentran. Garantizando a la niña su derecho a opinar y a recibir información de manera accesible, para poder divulgar su fotografía. 18 Información extraída de: <https://www.un.org/es/observances/down-syndrome-day> SUP-JE-144/2021 17 Sin embargo, dado que nada de eso obra en el expediente de forma alguna puede concluirse que todas estas condiciones ocurrieron para la difusión de su imagen. Por lo que, esta Sala Superior concluye que fue correcta la determinación de la responsable porque el candidato vulneró el interés superior de la niñez lo que actualizó la infracción y, en el caso del partido político hoy actor, le generó una responsabilidad indirecta.

Concatenado a lo anterior, la resolución número **SRE-PSC-039/2017**, Sentencia que resuelve el procedimiento especial sancionador UT/SCG/PE/PRI/CG/39/2017, en la que se determina la existencia del uso indebido de la pauta por parte del Partido Unidad Democrática por Coahuila, de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila; así como la vulneración al interés superior del menor por parte de la citada Coalición. como sea;

Por cuestión de método, en primer lugar, se estudiará, de manera conjunta, el supuesto uso indebido de la pauta por parte de la Coalición y tres de sus cuatro partidos, por supuestamente haber promocionado a la Coalición durante la precampaña y, si la Coalición, indebidamente, difundió promocionales relacionados con el proceso de selección interna del PAN y uno de sus precandidatos, a través de su tiempo en radio y televisión; posteriormente, se abordará lo correspondiente a la supuesta promoción indebida de la Coalición por parte del Partido Unión Democrática de Coahuila; y por último, se examinará lo SRE-PSC-039/2017 18 relacionado con el uso de imágenes de menores de edad en uno de los promocionales de la Coalición. 3.1 Marco Normativo respecto del uso indebido de la pauta. La Constitución Federal en su artículo 41, Base III, Apartados A y B, así como la Ley Electoral en los diversos 159, párrafos 1 y 2, 160, párrafos 1 y 2 y 226, párrafo 5, han establecido que los partidos políticos nacionales tienen derecho al uso permanente de los medios de comunicación social. Asimismo, que el INE es la autoridad única para la administración del tiempo

que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los fines propios, a los de otras autoridades electorales, así como a los partidos políticos; y, que será también este quien garantizará a los partidos políticos el uso de sus prerrogativas constitucionales en radio y televisión. Además, establecen que los precandidatos tienen prohibido contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempo en cualquier modalidad de radio y televisión. Por otro lado, el artículo 226 de la referida Ley Electoral, en su párrafo cuarto, señala que los partidos políticos harán uso del tiempo en radio y televisión que conforme a Derecho les corresponda, para la difusión de sus procedimientos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular. Asimismo, que los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, accederán a radio y televisión en el tiempo que corresponda a los institutos políticos. En este mismo sentido, el artículo 168 de la Ley Electoral, dispone que cada partido político podrá decidir libremente la asignación, por tipo de precampaña, de los mensajes que le correspondan, incluyendo su uso para precampañas locales en las entidades federativas. SRE-PSC-039/2017 19 A su vez, el Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral del INE en su artículo 5, párrafo primero, fracción III, inciso i), dispone que por materiales se entiende a los promocionales o mensajes realizados por los partidos políticos, coaliciones o candidatos/as independientes y autoridades electorales, fijados o reproducidos en los medios de almacenamiento y formatos que determine el INE, para su transmisión en términos de lo que dispone la Constitución Federal y la Ley Electoral. Mientras que, en el inciso m), establece que la pauta es el documento técnico en el que se distribuye el tiempo, convertido a número de mensajes, que corresponde a los partidos políticos, coaliciones y candidatos/as independientes, así como a las autoridades electorales en un periodo determinado, precisando la estación de radio o canal de televisión, la hora o rango en que debe transmitirse cada mensaje, y el partido político, coalición, candidato/a independiente o autoridad electoral al que corresponde. El artículo 7 párrafos 1, 3, 4 y 9 del citado Reglamento establece que los partidos políticos y sus candidatos y precandidatos a cargos de elección popular, accederán a mensajes de radio y la televisión, a través del tiempo que la Constitución Federal otorga como prerrogativa en la forma y términos establecidos legalmente; asimismo, que el INE es la única autoridad competente para ordenar la transmisión de propaganda política o electoral en radio o televisión, para el cumplimiento de sus propios fines y de los partidos políticos; y, que la propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas electorales difundan por radio y televisión los partidos políticos, se ajustarán a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6 y el artículo 41, Base III, Apartado A, de la Constitución Federal; así como el artículo 25, fracción I, incisos a) y u), de la Ley de Partidos Políticos y 247, párrafo 1, de la Ley Electoral. SRE-PSC-039/2017 20 El artículo 13, párrafo cuarto, dispone que, si por cualquier causa un partido político no realiza actos de precampaña electoral, los tiempos a que tengan derecho serán utilizados para la difusión de mensajes del partido político de que se trate, en los términos que establezca la ley. Asimismo, el artículo 37, párrafo 1, establece que, en ejercicio de su libertad de expresión, los partidos políticos determinarán el contenido de sus promocionales, por lo que no podrán estar sujetos a censura previa por parte del INE ni de autoridad alguna, sino, en su caso, a ulteriores responsabilidades. Ahora bien, no pasa desapercibido que a nivel local, el artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Coahuila, establece que los partidos políticos tendrán derecho al uso permanente de los medios de comunicación social y que el acceso a radio y televisión durante los procesos electorales se realizará en los términos establecidos en los ordenamientos antes referidos. La Ley General de Partidos Políticos establece que los partidos políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones para las elecciones de Gobernador, diputados a las legislaturas locales de mayoría relativa y ayuntamientos, de conformidad con el artículo 87, numeral 2. De conformidad con el artículo 88, numerales 1, 2, y 3, de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos podrán formar coaliciones totales, parciales y flexibles. Se entiende como coalición total, aquella en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso federal o local, a la totalidad de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral. Tratándose de coaliciones, se estará a lo previsto en los artículos 91, numerales 3, 4 y 5 de la Ley General de Partidos Políticos; 167, numeral 2 de la Ley General de SRE-PSC-039/2017 21 Instituciones y Procedimientos Electorales y 16 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, que establecen que a la coalición total que constituyan los partidos políticos les será otorgada la prerrogativa de acceso a radio y televisión en un treinta por ciento que corresponde distribuir en forma igualitaria, como si se tratara de un solo partido, incluso para efectos de la optimización de promocionales sobrantes. En cambio, para el setenta por ciento restante, deben ser tratados en forma separada. En el supuesto de coaliciones totales, el convenio de coalición establecerá la distribución de dicho tiempo entre los candidatos de la coalición. Asimismo, es aplicable a las coaliciones electorales, cualquiera que sea su ámbito territorial y tipo de elección, en todo tiempo y circunstancia, lo previsto por el artículo 91, numeral 4, de la Ley General de Partidos Políticos. En todo caso los mensajes en radio y televisión que correspondan a candidatos de coalición deberán identificar esa calidad y el partido responsable del mensaje. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el artículo 227 de la Ley General, se entiende por precampaña el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido; y por actos de precampaña las reuniones

públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado a un cargo de elección popular. El párrafo 3 del citado precepto legal, así como los párrafos 1 y 3 del artículo 211 de dicha ley, estipulan que la propaganda de precampaña es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, y expresiones que durante el periodo establecido por la ley y el que señale la convocatoria respectiva, difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a SRE-PSC-039/2017 22 conocer sus propuestas, debiendo señalarse de manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de quien es promovido.

3.2. Casos concretos. Como se ha quedado acreditado con antelación, no se tiene constancia de que los Partidos Acción Nacional y Encuentro Social hubieran difundido alguno de los spots denunciados, por lo que atendiendo al principio indubio pro reo, debe absolverse a dichos partidos de las conductas que se les imputa; y por tanto, únicamente se analizará la difusión de los promocionales pautados por el Partido Unidad Democrática por Coahuila y de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila. Sirve como sustento a lo anterior, lo determinado por la Sala Superior en la jurisprudencia intitulada "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES"⁷ en donde determinó que cuando no se cuente con una prueba que acredite la responsabilidad de los denunciados, lo procedente es absolverlos.

3.2.1 Uso indebido de la pauta por parte de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, por la difusión de spots en precampaña. Como se ha dicho, el primer punto a dilucidar es si existió un uso indebido de la pauta, ya que, en concepto del promovente, no está permitido que las Coaliciones, por sí mismas, puedan difundir spots en radio y televisión, durante la etapa de precampañas, pues, en su consideración, dicha prerrogativa es de uso exclusivo de los partidos políticos que contienden en el proceso electoral correspondiente.

7 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60. SRE-PSC-039/2017 23 En ese sentido, el promovente refiere que con la difusión de spots de la Coalición se está realizando una sobreexposición de dicho consorcio político, ya que las coaliciones únicamente se pueden posicionar, a sí mismas, durante la etapa de campañas. Dicho lo anterior, esta Sala Especializada considera que es inexistente esta falta atribuida a la Coalición, ya que el actor parte de una premisa errónea; a saber: "las coaliciones no tienen acceso a radio y televisión durante las precampañas". En efecto, de la lectura integral de la denuncia, se advierte que el actor encamina sus argumentos a evidenciar que sólo los partidos políticos tienen acceso a radio y televisión durante la etapa de precampañas, mientras que las Coaliciones tendrán acceso a partir del inicio de las campañas. Sin embargo, de conformidad con lo previsto en los artículos 87, 88, párrafo 2, 91, párrafos 3, 4 y 5 167, párrafo 2 de la Ley de Partidos; 167, párrafo 2 de la Ley General, en relación con los numerales 13, párrafo 4 y 16 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, los partidos políticos podrán formar coaliciones para contender de manera conjunta en alguna elección, siendo que una de esas modalidades puede ser la de Coalición total, como lo es en el caso que nos ocupa. Además, se advierte que las Coaliciones podrán acceder a tiempo aire en radio y televisión, ya sea en el periodo de precampaña o campaña. Para ello, en caso de Coalición total, se le considerará como si fuera un solo partido político; y por tanto, tendrá acceso al 30% del tiempo en radio y televisión que se reparte de manera igualitaria entre los partidos. No obstante, no tendrá acceso al 70% del tiempo que se distribuye de manera proporcional entre dichos institutos políticos, ya que en este caso, los partidos coaligados accederán a dicha prerrogativa, de manera individual y separada, SRE-PSC-039/2017 24 atendiendo a la votación que cada uno hubiera obtenido en la elección del congreso local inmediata anterior. Bajo ese contexto, ha quedado demostrado que el Comité de Radio y Televisión del INE concedió el uso de la prerrogativa constitucional a la Coalición, situación que fue confirmada por la Sala Superior al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP74/2017, en donde estableció que en el artículo 167 de la Ley General no se hacía ninguna distinción en cuanto a la etapa del proceso electoral en la que se debía repartir el tiempo en radio y televisión destinado a las coaliciones; y por tanto, la regla de distribución que en dicho artículo se contemplaba debía ser aplicada tanto a precampañas como campañas. De ahí que no asista la razón al promovente cuando refiere que la Coalición usó indebidamente la pauta en radio y televisión al difundir los spots: "Registro Coahuila Coalición", en su versión televisiva con número de folio RV00097-17 y en su versión de radio con el registro RA00106-17.

3.2.2 Uso indebido de la pauta por parte de la Coalición, al difundir spots en donde difundió actos relacionados con el proceso de selección interna del PAN. En este punto, el promovente refiere que el hecho de que la Coalición difundiera promocionales en los que se aludía al proceso de selección interna del PAN y a uno de sus precandidatos, es contrario a Derecho, puesto que el PAN únicamente podía haber destinado su pautado para promocionar cualquier acto relacionado con su elección interna. SRE-PSC-039/2017 25 En ese sentido, el promovente refiere que el hecho de que se utilizara el emblema de la Coalición, puede inducir al error de que lo que se promociona es un precandidato de dicho consorcio político; y no así, del PAN en lo individual. Al respecto, como se ha dicho con antelación, las Coaliciones gozan de la prerrogativa de acceso a radio y televisión para el periodo de precampaña, siendo que en el caso que nos ocupa, la autoridad administrativa electoral consideró que la

Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila era una coalición total; y por tanto, para efectos de la distribución de tiempo aire se le debía considerar como un solo partido y, en consecuencia, sólo tenía acceso a la distribución del 30% que se reparte de manera igualitaria entre los partidos políticos. Por lo que al tener acceso en radio y televisión, dicha Coalición tenía la posibilidad de difundir propaganda genérica o de precampaña, con su propio tiempo aire. Cabe mencionar que similar criterio utilizó la Sala Superior al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP-74/2017, en donde determinó que: "una vez asignado el tiempo en radio y televisión que le corresponde a la coalición [...] para las etapas electorales, corresponde a dichos institutos políticos, en ejercicio de su libre autodeterminación, a través de su convenio de coalición, establecer la forma y los términos en que se hará uso del tiempo que le fue asignado, mismo que puede ser usado no sólo para la difusión de propaganda de precampañas, sino también para la difusión de propaganda genérica". Así, resulta evidente que las coaliciones están facultadas para difundir spots en radio y televisión, ya sea con contenido genérico o con propaganda electoral atinente a una precampaña; sin embargo, dicha prerrogativa no es absoluta ni ilimitada, sino que se debe ajustar a los parámetros que rigen la difusión de propaganda en la época de precampaña. SRE-PSC-039/2017 26 Al respecto, la Sala Superior al emitir la jurisprudencia intitulada: "RADIO Y TELEVISIÓN. LA UTILIZACIÓN DE LOS TIEMPOS ASIGNADOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PARA PROMOCIONAR LA IMAGEN DE CANDIDATOS POSTULADOS POR OTROS INSTITUTOS POLÍTICOS O COALICIONES, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD"⁸ determinó que los partidos políticos no deben utilizar los espacios en radio y televisión que les corresponden, para promocionar la imagen de candidatos postulados o registrados por otros institutos políticos o coaliciones, pues puede generarse una exposición desigual y, en consecuencia, un mayor posicionamiento a alguna de las opciones políticas en detrimento de las restantes, contraviniendo el principio de equidad en la contienda electoral. En ese contexto, esta Sala Especializada considera que los partidos políticos y coaliciones, ya sea durante las precampañas y campañas, únicamente podrán hacer uso de los tiempos o pautas en radio y televisión para difundir su propia propaganda política o electoral, sin que exista posibilidad alguna de que algún precandidato o candidato de un diverso partido político o coalición pueda participar o beneficiarse de dicha prerrogativa, dado que ello afectaría el principio de equidad en el proceso de selección interna de un partido, puesto que se estaría dotando de mayores beneficios a una sola oferta política. Preciso lo anterior, debe recordarse que en el caso, se tiene acreditado que durante el periodo de precampañas del proceso electoral del estado de Coahuila, la Coalición Alianza, como parte de su prerrogativa en radio y televisión, difundió los spots: "Registro Coahuila Coalición" con folio RV00097-17 [versión televisión] y RA00106-17 [versión radio], cuyo contenido se muestra a continuación: RV00097-17 8 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, En tales circunstancias, a juicio de esta Sala Especializada, dichos promocionales deben ser considerados como spots de precampaña, puesto que el mensaje que se emitió se encontraba vinculado con el proceso de selección interna del PAN, uno de los precandidatos que contendió y la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila. En ese contexto, esta Sala Especializada considera que es existente la infracción atribuida a la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, relacionada con el uso indebido de la pauta que le fue asignada en el periodo de precampaña de la elección de Gobernador de Coahuila. Ello, habida cuenta que ha sido acreditado que los spots controvertidos son de carácter electoral, y que están encaminados a difundir actos relacionados con el proceso de selección interna que, de manera individual, realizó uno de los partidos coaligados, sin que mediara una justificación para ello, puesto que en el convenio no se estableció que la Coalición participaría o coadyuvaría en la elección del Candidato a Gobernador que realizaría el PAN. Lo anterior se considera así, ya que con independencia de que durante las precampañas, el PAN formó parte de la Coalición, lo cierto es que de conformidad con el convenio que integró el consorcio político, ningún otro partido coaligado o la Coalición misma, estaban en posibilidades de realizar actos de promoción de precandidatos o de etapas del proceso de selección interna del PAN, puesto que en el convenio únicamente se refirió que el candidato emanaría de la selección de candidatos del PAN, atendiendo a la determinación que adoptara la Comisión Permanente del Consejo Nacional de dicho partido. En esa lógica, la difusión de promocionales vinculados a la precandidatura de José Guillermo Anaya Llamas debió ser realizada exclusivamente por el PAN con el tiempo que, de manera individual, le correspondía en el periodo de precampaña; es decir, que los spots alusivos a dicho precandidato debieron estar comprendidos entre el tiempo que le fue asignado al PAN como parte del 70% del tiempo aire que SRE-PSC-039/2017 30 se distribuyó de manera proporcional a cada uno de los partidos en lo individual y del cual no le fue asignado a la Coalición denunciada. Lo anterior, ya que la Coalición denunciada, por sí misma, no llevó a cabo un proceso de selección interna, sino que dicha situación fue realizada de manera particular por uno de sus partidos coaligados; y por tanto, la Coalición no estaba facultada para promocionar actos de precampaña que pudieran causar una afectación a la equidad del proceso de selección interna del PAN, al otorgar mayor tiempo del que debía de tener alguno de los sujetos que participarían en dicho proceso electivo. En efecto, al no realizar un proceso de selección interna, la Coalición únicamente debió constreñirse a difundir propaganda genérica sobre temas de interés general; y no así, la exhibición de promocionales con

propaganda de precampaña; cuestión diversa hubiera sido que en el convenio de coalición se hubiera establecido que para la elección de candidato a Gobernador, dicho consorcio político realizaría un proceso de selección en el cual se incluyeran, entre otros, a los precandidatos de los partidos coaligados; o bien, que la Coalición participaría en el proceso interno que implementara individualmente alguno de sus coaligados, pues en estos supuestos se justificaría que el tiempo en radio y televisión de la Coalición fuera distribuido y usado por los diferentes precandidatos que participaran en dicha elección interna. De ahí que la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila utilizó indebidamente su pauta en radio y televisión que le fue asignada durante el periodo de precampaña del proceso electoral que se desarrolla en el estado de Coahuila; y por tanto, contravino lo previsto en 41 párrafo segundo base III apartado A, de la Constitución; 159; 211, 227, párrafo 3, y 443, párrafo 1 incisos a) y n), de la Ley General; 25 párrafo 1 incisos a) y u), de la Ley General de Partidos Políticos; así como 13, párrafos 1 y 3 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. SRE-PSC-039/2017 31 3.2.3 Uso indebido de la pauta por el Partido Unidad Democrática de Coahuila, por la promoción de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila. En este punto, el promovente aduce que dicho partido usó indebidamente la pauta que le fue asignada en el periodo de precampaña de la elección que actualmente se desarrolla en el estado de Coahuila, al haber promocionado a la Coalición por medio de la difusión de los spots: "Coahuila libérate" con folio RV001918 [versión televisión] y RA002366 [versión radio]; "Lenin Precampaña" con folio RV00037-17 [versión televisión] y RA00039-17 [versión radio]; y "Video Alianza" con folio RV00100-17 [versión televisión] y RA00114-17 [versión radio]. En ese sentido, el promovente refiere que es ilegal que se promoció el logotipo de una coalición en la etapa de precampaña, puesto que se le está posicionando en un momento que no es permitido; más aún, cuando, en su concepto, en dichos promocionales se advierten propuestas de gobierno y campaña, dirigidas a la ciudadanía en lo general. Al respecto, como ya se ha señalado, los partidos políticos gozan de la prerrogativa constitucional de acceso a la radio y televisión, ya sea durante o fuera de algún proceso electoral, puesto que su acceso es de manera permanente atendiendo a las modalidades que establece la propia Constitución y las normas electorales. Bajo ese contexto, debe decirse que en el caso particular, se tiene constancia de que el Partido Unidad Democrática de Coahuila no realizó un proceso de selección interna para elegir candidato a Gobernador de Coahuila, puesto que atendiendo al convenio de coalición que firmó, el candidato a dicho puesto sería el que resultara electo en el proceso interno del PAN. Por q C-039/20 corrupción se te hizo normal. Y es que mientras ellos se enriquecen, tú te vuelves más pobre. Cada vez trabajas más y te pagan menos. ¿Qué pasa Coahuila? Alégrate, decídeté, tú tienes la solución. Ahora les toca sufrir a ellos. Que paguen por lo que han hecho. Es ahora o nunca. Voz de un hombre: Unidad Democrática de Coahuila. UDC. Voz de un hombre: Coahuila. Libérate. Como puede advertirse, en estos spots no se hace referencia alguna a la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, sino que únicamente se utiliza el nombre y logo del Partido Unidad Democrática de Coahuila; además, contrario a lo afirmado por el actor, no se aprecia alguna propuesta de campaña de dicho partido político ni alguna referencia a un plan de gobierno. Por el contrario, lo único que se advierte es el posicionamiento de dicho partido frente al supuesto problema de corrupción y pobreza que existe en el estado de Coahuila; usando para ello preguntas retóricas con las que pretende reafirmar su idea, tales y como lo son: "¿Por qué la corrupción se te hizo tan normal?" y "¿Qué pasa Coahuila?". En esas circunstancias, dichos promocionales deben ser considerados como genéricos, pues únicamente pretenden mostrar el posicionamiento del partido en torno a temas de interés social, sin que se aprecie que se haga algún posicionamiento de alguna fuerza política que pudiera influir en la contienda electoral. Por lo que es factible calificar como dentro de la legalidad estos promocionales. Ahora por lo que hace a los promocionales: Promocional Video Alianza con folio RV00100-17 [versión televisión] .Imágenes representativas Voz de un hombre: Para llegar a una meta es necesario construir un camino. No podemos fallarle a Coahuila viendo como sufre nuestra gente. Basta ya de divisiones. Basta ya de egoísmo. Es tiempo de una Alianza Ciudadana para construir el Coahuila que todos queremos. Este es el reto y la oportunidad. Dejar a un lado el interés personal y darle esperanza a nuestro pueblo. Hasta la victoria. ¡Venceremos! Voz de un hombre: UDC. Voz de un hombre: Libérate. Voz en off: Alianza Ciudadana por Coahuila. En el caso de estos spots, se advierte que el contenido del mensaje es idéntico, puesto que se escucha el uso de las mismas palabras tanto en radio y televisión; lo cual, permite que se estudien de manera conjunta, a fin de evitar repeticiones innecesarias, con la diferenciación del uso de imágenes en el caso del spot televisivo. Como puede advertirse, en estos promocionales se hace alusión a la visión que tienen tanto UDC como la Coalición Ciudadana por Coahuila, respecto del sufrimiento que se causa a los coahuilenses con la división y egoísmo del interés personal; y ante ello, manifiestan una oportunidad de esperanza al renunciar a ese interés individual. En ese contexto, en dichos promocionales no se aprecia alguna referencia que permita deducir que se pretende posicionar a un partido político; o bien, que se está llamando a votar a favor de determinada fuerza política, ya que lo que realmente se tiene es un posicionamiento general, relacionado con la condición social del Estado y la posibilidad de que ésta cambie con la renuncia de los intereses personales de la población en general. En esa tesitura, es indubitable que estos spots contienen un mensaje genérico, habida cuenta que únicamente refieren la postura

ideológica del partido, por lo que no se advierte referencias que impliquen un llamado al voto. SRE-PSC-039/2017 46 En este tenor, este órgano jurisdiccional estima que los promocionales denunciados, por la temporalidad en la que fueron difundidos, están apegados a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias en cuanto a su contenido, de tal suerte que no se acredita la infracción, pues no existe prohibición alguna para que durante el periodo de precampañas, el partido político difunda ideas, críticas o manifestaciones en torno a temas de interés general, propio de todo sistema democrático. Esto es, en la época de precampañas, los partidos políticos pueden hacer uso de las pautas en radio y televisión otorgadas por el INE, sin que necesariamente deban contener mensajes de precampaña o campaña, pudiendo versar sobre cuestiones de carácter general. Por otra parte, tampoco se acredita el argumento del quejoso en el sentido de que la difusión de los promocionales denunciados constituye un uso indebido de la pauta, en razón de que fueron hechos con la finalidad de posicionar ilícitamente a la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila ante el electorado. Lo anterior, ya que se reitera que lo que realmente se difunde es un contenido propio de la ideología del partido político, con expresiones críticas, lo cual no encuentra una prohibición expresa en la legislación aplicable, sino por el contrario, dicho contenido se encuentra permitido a los partidos políticos ya sea fuera o dentro de los periodos electorales, al constituir una de las formas que permiten a los institutos políticos alcanzar los fines constitucionales establecidos en el artículo 41 de la Constitución Federal. En ese sentido, esta Sala Especializada considera que del análisis integral y contextual de los promocionales no es posible presumir algún riesgo de afectación en materia electoral; de ahí que el objetivo de los promocionales otorgados al partido SRE-PSC-039/2017 47 político, en este caso específico, no se encuentra desvirtuado, ya que atendiendo al contenido se trata de materiales genéricos con posicionamiento partidista, por lo que es inexistente la conducta señalada por el Promovente.

3.2.4 Uso indebido de la pauta por la Coalición, al usar imágenes de menores de edad en un spot. Es oportuno señalar que esta Sala Especializada, en un nuevo paradigma de protección de los Derechos Humanos, implementó un método tendente a verificar la posible existencia de alguna situación de vulnerabilidad, en el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad auditiva, o bien, cuando en los promocionales se incluyan personas menores, aun cuando forme o no parte de la controversia. Proceder que es plenamente acorde con lo previsto por el artículo 1º, párrafo tercero de la Constitución Federal; en cuanto ordena que todas las autoridades, incluida por supuesto esta Sala Especializada, tienen la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los Derechos Humanos. Acorde con lo anterior, al verificar el contenido del promocional de televisión con folio RV0097-17. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Al respecto, se tiene en cuenta que el contenido de la propaganda difundida por los partidos políticos se encuentra amparada por la libertad de autodeterminación de contenidos; empero, el ejercicio de dicha libertad fundamental no es absoluta, sino que tiene límites, entre los que se encuentran los vinculados con la dignidad o la reputación de las personas y los derechos de terceros, acorde con lo dispuesto en los artículos 6º, párrafo primero de la Constitución Federal, así como 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dicen: Artículo 6º.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Artículo 19.[...] 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesaria para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. SRE-PSC-039/2017 50 Destaca de estos preceptos constitucionales y convencionales una limitación coincidente: esto es, el pleno respeto a los derechos de terceros, incluidos, por supuesto los derechos de la

niñez, cuya protección, se encuentra expresamente ordenada en el artículo 4º de nuestra Constitución Federal. En tales condiciones, cuando en el uso de las pautas asignadas por el Instituto se difundan mensajes que puedan afectar derechos de terceros, y que en el caso, resultan ser personas menores de edad, se debe garantizar sus derechos en el marco de su interés superior. Ahora bien, en el orden conceptual, el "interés superior del niño", ha sido descrito por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: "Implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Al amparo de esa previsión convencional, el Estado Mexicano, a través de sus instituciones, autoridades y tribunales, está constreñido a tener en consideración primordial el respeto al interés superior del menor, con la adopción de medidas necesarias para asegurar y maximizar la protección y efectividad de los derechos de las niñas y niños, acorde con lo establecido en los artículos 3, párrafo 1 y 4, de la Convención sobre los Derechos del Niño: Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Artículo 4. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional. SRE-PSC-039/2017 51 Con tal directriz de protección a la niñez, el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes" emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el interés superior del menor tiene las siguientes implicaciones: a) Coloca en plena satisfacción los derechos de los infantes como parámetro y fin en sí mismo; b) Define la obligación del Estado respecto de los niños, niñas y adolescentes; y c) Orienta decisiones que protegen sus derechos. En sincronía con estos postulados, la Primera Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis de rubro: "DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS" estableció que la mera situación de riesgo de los infantes es suficiente para que se estime que se afectan los derechos de la niñez y, ante ello, deben adoptarse las medidas que resulten más benéficas para la protección de los infantes. En el caso, la posible afectación al interés superior del infante se advierte a través de la exposición de la imagen de diversos niños y posibles adolescentes (sin que de esta circunstancia se tenga absoluta seguridad, atento a su fisonomía), de ahí que el análisis se deba hacer en relación al derecho a la propia imagen de los infantes participantes. Entonces la importancia del asunto radica, precisamente, en la protección reforzada que goza la imagen de las y los menores de edad involucrados en el promocional. SRE-PSC-039/2017 52 Por tanto, para el otorgamiento de la salvaguarda judicial es suficiente que se les ubique en una situación de riesgo potencial, sin que sea necesario que esté plenamente acreditado el perjuicio ocasionado, porque, atento a los valores en juego, el interés superior de las niñas y niños, está por encima del ejercicio de la libertad de autodeterminación del contenido de los spots que tienen los partidos políticos. Con ese parámetro de ponderación, el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece, que ningún niño puede ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, ni ataques ilegales a su honra y reputación. Por su parte, los artículos 2, 5, 76, 77 y 78 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes contemplan, igualmente, la salvaguarda de los infantes ante cualquier riesgo de afectación o manejo directo de su imagen, nombre, datos o referencias que permitan su identificación, así: Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán: I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno; II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia. El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la SRE-PSC-039/2017 53 asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley. ... Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años

cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño. ... Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquella que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán orientar, supervisar y, en su caso, restringir, las conductas y hábitos de niñas, niños y adolescentes, siempre que atiendan al interés superior de la niñez. Artículo 77. Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, así como medios impresos, o en medios electrónicos de los que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez. Artículo 78. Cualquier medio de comunicación que difunda entrevistas a niñas, niños y adolescentes, procederá como sigue: I. Deberá recabar el consentimiento por escrito o cualquier otro medio, de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente, respectivamente, conforme a lo señalado en el artículo anterior y a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 76 de la presente Ley, y II. La persona que realice la entrevista será respetuosa y no podrá mostrar actitudes ni emitir comentarios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. En el caso de que no sea posible recabar el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de un menor, éste podrá otorgarlo siempre que ello no implique una afectación a su derecho a la privacidad por el menoscabo a su honra o reputación. SRE-PSC-039/2017 54 Por otra parte, no se requerirá el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de niñas, niños o adolescentes, cuando la entrevista tenga por objeto que éstos expresen libremente, en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, su opinión respecto de los asuntos que les afecten directamente, siempre que ello no implique una afectación a sus derechos, en especial a su honra y reputación. El interés superior a proteger es la sola posibilidad de poner en peligro su imagen con una latente identificación de su persona. Este principio protector, vinculado al tema, nos orienta a reflexionar que en el caso de la propaganda política o electoral, hay siempre un elemento ideológico que identifica a la opción política, por tanto, la presencia de infantes implica un riesgo potencial de asociar a tales infantes con una determinada preferencia política e ideológica, a una edad que todavía no es oportuna. Lo anterior puede devenir en un riesgo potencial en relación con su imagen, honra o reputación presente, en su ambiente escolar o social y, por supuesto, en su futuro, pues al llegar a la vida adulta pueden aceptar o no aprobar la ideología política, con la cual fueron identificados en su infancia. En esta concurrencia de derechos involucrados, acorde con las disposiciones nacionales e internacionales antes descritas, esta Sala Especializada debe hacer un ejercicio de ponderación el cual se decante por la protección reforzada de los menores de edad involucrados en los promocionales de televisión que se analizan. Con tal parámetro este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a implementar todas aquellas medidas que sirvan para evitar que se presenten situaciones de riesgo potencial que puedan afectar el interés superior del menor en relación con los promocionales de contenido político electoral, como en el asunto. SRE-PSC-039/2017 55 De suma importancia destaca tener la seguridad que los infantes fueron escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece: "Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez". Los requerimientos reforzados tienen sustento en los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a ser informados, como una directriz convencional que debe atenderse por todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales, como lo indica la UNICEF, en las Directrices éticas para la información sobre la infancia; conducentes y aplicables a la aparición de infantes en los spots de los partidos políticos, precisamente porque aparecen en medios de comunicación social como la televisión genera su exposición pública. Este instrumento internacional indica, en lo destacable: "Directrices éticas de UNICEF para la información sobre la infancia Protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la exposición pública ... De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, todos los niños, niñas y adolescentes, sin excepción, deben tener garantizados sus derechos. Uno de esos derechos es el de la protección de la vida privada, por lo que la exposición pública de los niños, niñas o adolescentes... UNICEF plantea una serie de directrices éticas para la información sobre infancia, que tienen como objetivo aportar orientaciones básicas para los medios de comunicación, pero que también son de utilidad para autoridades administrativas, policiales y judiciales que participan en los procesos de justicia, sobre cómo abordar los temas relacionados con la protección de la infancia a fin de respetar en todo

momento su interés superior y su dignidad como seres humanos... Directrices éticas de UNICEF para la información sobre la infancia I. Principios 1. Se deberán respetar la dignidad y los derechos de cada niño o niña en toda circunstancia...." SRE-PSC-039/2017 56 Por tanto, a efecto de garantizar el pleno respeto al interés superior de los infantes, la autoridad administrativa electoral conforme a sus facultades adoptó las medidas necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos que procedan, en los términos apuntados y, en su caso, requirió la documentación necesaria a fin de privilegiar y proteger el interés superior de los niños, niñas y/o adolescentes menores de dieciocho años. Conforme lo anterior, mediante acuerdo de siete de marzo, la Unidad Técnica requirió a la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, remitiera la documentación a través de la cual fuera posible advertir las personas que, en su caso, ejercieran la patria potestad de los menores involucrados; así como el documento en el cual se asentara la libre manifestación de la voluntad de los menores. En respuesta, la Coalición exhibió copia fotostática de siete autorizaciones de uso de imagen y voz, en el que se consigna información como el nombre del menor, domicilio, Ciudad/Estado/Código Postal, Teléfono, RFC o CURP; así como la leyenda: "Soy el padre/la madre (o tutor legal) del menor que ha firmado esta autorización y consentimiento, y por la presente acuerdo que yo y el menor estaremos sujetos a todos los términos y condiciones de la presente." Enseguida de lo anterior, se encuentra consignado el nombre de la persona que se dice ostentar como el padre o madre del menor referido en el formato correspondiente. Al respecto, esta Sala Especializada considera que dichos formatos, al ser pruebas documentales privadas⁹ por ser documentos elaborados por particulares y 9 Acorde con lo dispuesto en los artículos 461, párrafo 3, inciso b), así como 462, párrafos 1 y 3, de la Ley General. SRE-PSC-039/2017 57 proporcionados por la Coalición denunciada, por sí solos, resultan insuficientes para acreditar que los menores que en ellos se refiere son los mismos que aparecen en el spot controvertido; más aún, cuando la Coalición no proporcionó ningún otro documento que permitiera identificar plenamente a los menores involucrados. En efecto, en los formatos referidos no hay ningún elemento que permita la identificación visual de los menores y tampoco se adjuntó alguna credencial escolar o documento que permitiera a esta autoridad electoral distinguir a que menor de los que aparecen en el video corresponde cada uno de los permisos. Por lo que los citados formatos no son la prueba idónea para acreditar la persona que supuestamente otorgó el permiso. Aunado a ello, es preciso señalar que con la documentación remitida por la Coalición, tampoco se puede acreditar que las personas que firman la autorización, en realidad ostenten la patria potestad de los menores que aparecen en los videos, puesto que únicamente se aportó copia de la licencia de manejo de cada uno de los signantes, pero se omitió acompañar copia certificada del acta de nacimiento de los menores o de cualquier otro documento oficial con el que se pudiera identificar plenamente al mayor adulto que tuviera los derechos de representación de cada uno de los niños y/o adolescentes que se observa en el spot en comento. En ese sentido, dada la laxitud que presentan los citados formatos y la falta de algún documento que acredite la persona que tiene la patria potestad de los menores, es que esta Sala Especializada no tener por cierta la existencia del consentimiento pleno, cierto e idóneo, por escrito, debidamente firmado por los padres o quienes ejerzan la patria potestad o tutela del menor, pues como se ha manifestado, no hay mayores elementos que permitan concatenar y tener por acreditado que la participación de los niños en el promocional denunciado ocurrió con apego a las formalidades exigibles. SRE-PSC-039/2017 58 Además, respecto al requisito consistente en la manifestación del menor por cuanto hace a su opinión libre y expresa respecto de su participación en el promocional electoral en cuestión, opinión que será valorada atendiendo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, en el caso concreto, el PAN omitió presentar cualquier tipo de documentación para el cabal cumplimiento de este requisito, sin que el partido político emitiera pronunciamiento al respecto, en el presente procedimiento. No pasa desapercibido a esta autoridad que la representación de la Coalición, en su defensa alegó que: • El plazo otorgado para el desahogo y cumplimiento al requerimiento resultaba insuficiente; • Se trata de documentos ajenos y privados, lo que provocó necesariamente una labor de recaudación de dichos documentos; y por tanto, era claro, evidente y lógico, que el tiempo y la posibilidad de los titulares de los documentos no estaba a disposición del partido político; lo cual retrasaba y tornaba difícil su recaudación. • En vista del plazo otorgado, resultaba imposible la protocolización del consentimiento de los padres y los menores; más aún si se toma en cuenta el tiempo que conllevan los trámites protocolarios ante fedatario público. • El requerimiento no tiene sustento legal que permita al partido prevenir la obligación de recaudar los documentos que se requirieron, sin embargo no se pretende desconocer los criterios que el INE citó en el acuerdo de requerimiento, solo trata de evidenciar que resulta complicado prever y SRE-PSC-039/2017 59 recaudar documentos para dar exhaustivo cumplimiento a requisitos no contemplados en la legislación. No obstante, a juicio de esta Sala Especializada, dichas consideraciones deben desestimarse, ya que tal y como se ha referido con antelación, la normas constitucionales, convencionales y legales, prevén que quienes difundan en medios de comunicación la imagen de menores, deberán tomar en cuenta aquellas medidas que impliquen la salvaguarda de los infantes ante cualquier riesgo de afectación o manejo directo de su imagen, entre las que se encuentra el recabar con antelación a la difusión, los permisos correspondientes. Por lo que no es aceptable que la Coalición denunciada aduzca que

no se le otorgó el tiempo necesario para recabar dicha documentación, ya que estaba plenamente vinculada a contar con ella, desde el momento en que realizó el promocional que posteriormente difundiría como parte de su prerrogativa constitucional de acceso a televisión. En esa lógica, tampoco asiste razón a la Coalición denunciada cuando refiere que resultaba imposible realizar la protocolización del consentimiento de los padres y de los menores, ya que se insiste, dicha situación debió ser realizada con antelación a la difusión del promocional; además, la parte denunciada pasa por alto que los Notarios Públicos no son los únicos que, en materia electoral, podrían realizar una protocolización, ya que también contaba con la posibilidad de solicitar el auxilio de la Oficialía Electoral del INE; sin embargo, no se aportó ningún documento que, cuando menos, generara un indicio de que se solicitó su apoyo ni tampoco se tiene constancia de que la Coalición hubiera requerido los servicios de protocolización ante fedatario público. SRE-PSC-039/2017 60 De ahí que se tengan por desestimadas las manifestaciones de la representación de la Coalición; y por consiguiente, sea dable concluir que esta Sala Especializada no cuenta con los elementos idóneos y suficientes, como puede ser una fotografía, identificación escolar o cualquier otro elemento que sirva para establecer la identidad de los menores; lo cual, permitiría cotejar y establecer el vínculo entre las niñas y niños que aparece en el promocional y de quien, supuestamente, dio el consentimiento es su madre o tutora. Lo que deja en evidencia el riesgo potencial al que se expuso a los menores, por la difusión del promocional, al no tener certeza de que se emitió un consentimiento pleno, cierto e idóneo por parte de los padres, madres o tutores de aquellos, y, sobre todo, por no cuidar de manera idónea el uso de las imágenes de éstos. En consecuencia, se estima que se vulneró el interés superior de los menores involucrados y, por ende, se actualiza por parte de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila la infracción que se denuncia, en contravención a lo dispuesto por los diversos artículos 1, 4, párrafo noveno y 6, párrafo primero de la Constitución Federal; 25, párrafo 1, inciso a) y u), de la Ley de Partidos Políticos; 247, párrafo 1 y 443, párrafo 1, incisos a), h) y n) de la Ley Electoral.

CUARTA. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Una vez que ha sido acreditada la existencia de diversas faltas, procede establecer la clase de sanción que legalmente corresponda, tomando en cuenta, entre otras, las siguientes directrices: 1. La importancia de la norma transgredida, es decir, señalar qué principios o valores se violaron o se vieron amenazados y la importancia de esa norma dentro del sistema electoral (principio, valor, ordenamiento, regla). SRE-PSC-039/2017 61 2. Efectos que produce la transgresión, los fines, bienes y valores jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o resultado). 3. El tipo de infracción y la comisión intencional o culposa de la falta, análisis que atañe verificar si el responsable fijó su voluntad para el fin o efecto producido, o bien, pudo prever su resultado. 4. Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así como si la conducta fue reiterada. Para tal efecto, esta Sala Especializada estima procedente retomar la tesis histórica S3ELJ 24/2003, de rubro "SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN", que sostenía que la determinación de la falta puede calificarse como levisima, leve o grave, y, en este último supuesto, como grave ordinaria, especial o mayor, lo que corresponde a una condición o paso previo para estar en aptitud de determinar la clase de sanción que legalmente se deba aplicar al caso concreto, y seleccionar de entre alguna de las previstas en la ley. Ello en virtud de que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior en diversas ejecutorias,¹⁰ que la calificación de las infracciones obedezca a dicha clasificación. Por lo tanto, para una correcta individualización de la sanción, en primer lugar es necesario determinar si la falta a calificar es: i) levisima, ii) leve o iii) grave, y si se incurre en este último supuesto, precisar si la gravedad es de carácter ordinaria, especial o mayor. ¹⁰ En los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-45/2015 y acumulados, SUPREP-57/2015 y acumulados, SUP-REP-94/2015 y acumulados, SUP-REP-120/2015 y acumulados, SUP-REP134/2015 y acumulados, SUP-REP-136/2015 y acumulados y SUP-REP-221/2015. SRE-PSC-039/2017 62

Adicionalmente, es menester precisar que cuando se establece un mínimo y un máximo de la sanción a imponer, se deberá proceder a graduar la misma atendiendo a las circunstancias particulares del caso. Al respecto, una vez que han quedado demostradas la infracciones a la normativa electoral en que incurrió la Coalición Alianza Ciudadana de Coahuila, se procede a imponer la sanción correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la Ley General, que dispone que cuando se trate de infracciones cometidas por los partidos políticos, se podrá imponer desde amonestación pública, multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente¹¹, según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda. Para determinar la sanción respectiva, se deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodearon la conducta contraventora de la norma, de conformidad con lo previsto en el artículo 458, párrafo 5 de la Ley General, tomando en consideración los siguientes elementos: • Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila. 1. Singularidad o pluralidad de faltas. En este punto, en principio, resulta necesario establecer que con una sola conducta se acreditaron dos faltas; esto es, que con la difusión del spot "Registro Coahuila Coalición" con folio RV00097 [versión tv] y 11 Se debe precisar que, mediante reforma al párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo decreto se publicó el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, el salario

mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. De igual forma, en términos de los artículos segundo y tercero transitorios del decreto de reforma mencionado, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país. SRE-PSC-039/2017 63 RA00106 [versión radio] se actualizaron las faltas de uso indebido de la pauta y afectación al interés superior de un menor. 2. Bien Jurídico tutelado. Establecido el contexto anterior, debe decirse que con dicha conducta se transgredió, por una parte, el principio de equidad en la contienda interna de un partido político, puesto que se concedió mayor tiempo aire en radio y televisión a uno de los contendientes del proceso de selección interna del PAN; por otra parte, se afectó el interés superior de los menores que aparecieron en el spot televisivo controvertido, puesto que no se acreditó que la Coalición contará con los documentos necesarios para acreditar una participación libre y voluntaria, a sabiendas de la exposición de su imagen para fines electorales; y por tanto, se afectó la integridad, privacidad y reputación de los menores. 3. Circunstancias de modo, tiempo y lugar Modo. La conducta consistió en la difusión por televisión del promocional "Registro Coahuila Coalición" con folio RV00097 [versión tv] y RA00106 [versión radio], relativo al proceso electoral local de Coahuila, con un total de ciento ochenta y siete impactos en televisión y trescientos ochenta y cuatro en radio. Tiempo. La difusión del promocional se realizó durante el desarrollo de los comicios locales en Coahuila, en la etapa de precampañas, en el periodo del doce al quince de febrero. Lugar. La difusión del promocional se efectuó en los canales de televisión cuya transmisión se realiza en Coahuila. SRE-PSC-039/2017 64 4. Condiciones externas y medios de ejecución. El momento en que se realizó la transmisión del promocional, corresponde al periodo de precampaña del proceso electoral local del estado de Coahuila, y el medio de ejecución fueron los canales de radio y televisión de transmisión local, acorde con lo informado por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos en las diversas comunicaciones que han sido referidas en el apartado de acreditación de los hechos denunciados. 5. Beneficio o lucro. No se acredita un beneficio económico cuantificable para la Coalición responsable, en virtud de que se trata de la difusión de promocionales pautados por ella misma, en uso de su prerrogativa constitucional de acceso a los tiempos del Estado. 6. Comisión dolosa o culposa de la falta. Está acreditado que la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila pautó los promocionales aludidos como parte de su prerrogativa de acceso al tiempo aire en radio y televisión que le correspondía en el marco de las precampañas del proceso electoral de Coahuila; y por tanto, es posible afirmar que tenía pleno conocimiento del contenido de los promocionales pautados; lo cual, permite concluir que tuvo la voluntad, por una parte, de usar la imagen de los menores de edad en el contenido de su promocional; y por otra parte, que tuvo el ánimo de difundir el promocional tildado de ilegal durante el periodo de precampañas en el proceso electoral del estado de Coahuila. Además, como Coalición que contiene en un proceso electoral local está plenamente vinculada al conocimiento de las normas constitucionales, convencionales y legales y de los criterios jurisprudenciales que rigen el acceso a la radio y televisión por parte de los actores políticos que participan en un proceso comicial; así como los tendentes a garantizar la salvaguarda del interés superior de los menores al ser utilizados en promocionales que se difundirán en un contexto electoral, a través de los medios electrónicos.

Se presume que el entonces precandidato en cuestión ni los partidos políticos que lo respaldan, no cuentan con los requisitos administrativos, expresos en el Lineamiento para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia político-electoral, capítulo "Requisitos para mostrar niñas, niños o adolescentes en propaganda político electoral, mensajes electorales, actos políticos, actos de precampaña o campaña, en cualquier medio de difusión", numeral 8, con título "Consentimiento de la madre y del padre, de quien ejerza la patria potestad o de los tutores", señala lo siguiente:

"...Por regla general, debe otorgar el consentimiento quien o quienes ejerzan la patria potestad o el tutor o, en su caso, la autoridad que debe suplirlos respecto de la niña, el niño o adolescente que aparezca o sea identificable en propaganda político-electoral, mensajes electorales o actos políticos, actos de precampaña o campaña, o para ser exhibidos en cualquier medio de difusión..."

Irregularidad que a simple vista es demostrada, toda vez que el precandidato ni los partidos políticos que lo respaldan, no cumplieron con este requisito, y debiendo esta autoridad electoral, solicitar al infractor de forma inmediata dicho consentimiento, y en caso de negarse a proporcionarlo, sancionarlo cómo corresponda.

Así mismo en el Lineamiento para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, capítulo "Presentación del consentimiento y opinión ante el Instituto", en el numeral 14, señala lo siguiente;

... "Los sujetos obligados que exhiban la imagen, voz o cualquier dato identificable de niñas, niños o adolescentes en su propaganda político-electoral, mensajes o actos políticos, actos de precampaña o campaña, deberán:

... b) Conservar en su poder, durante el tiempo exigido por la normatividad aplicable en materia de archivos, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de otras leyes, la grabación en video de la conversación por medio de la cual se explicó a la niña, niño o adolescente el alcance, contenido, temporalidad y medio de difusión, así como el original del medio por el que se documentó la opinión informada de la persona menor de edad, sobre su participación en la propaganda político-electoral, mensajes electorales, o su presencia en actos políticos, actos de precampaña o campaña conforme al manual y las guías metodológicas referidas en el Lineamiento 9. ... (Sic)

Del análisis de la fotografía publicada el martes 16 de abril del 2024, a las 10:05 pm con el título "Que tarde tan gratificante", como se aprecia en la siguiente liga

<https://www.facebook.com/share/p/WdmgonAXhCUMWmFn/?mibextid=WC7FNe> en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del C. Guillermo Romero Rodríguez, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, de la cual se observa difundió varias imágenes de niños, niñas y adolescentes, ello para promocionar su campaña política y posicionar su imagen ante los electores, vulnera el derecho a la intimidad de los infantes que aparecen en su promoción electoral, y se presume puede devenir en un riesgo potencial, por lo cual se debió cumplir con la obligación señalada en el numeral 14, con título "Presentación del consentimiento y opinión ante el Instituto", del Lineamiento para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes en Materia Político-Electoral, es decir el precandidato tiene obligación de conservar en su poder, durante el tiempo exigido por la normatividad aplicable en materia de archivos, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de otras leyes, la grabación en video de la conversación por medio de la cual se explicó a la niña, niño o adolescente el alcance, contenido, temporalidad y medio de difusión, así como el original del medio por el que se documentó la opinión informada de la persona menor de edad, sobre su participación en la propaganda político-electoral, mensajes electorales, o su presencia en actos políticos, actos de precampaña o campaña conforme al manual y las guías metodológicas referidas en el Lineamiento 9, hecho contrario la autoridad estará obligada a salvaguardar la integridad, de los menores, así como a determinar las sanciones pertinentes al entonces precandidato y a la brevedad tomar las medidas cautelares pertinentes.

Es importante señalar que la fotografía publicada el martes 16 de abril del 2024, a las 10:05 pm con el título "Que tarde tan gratificante", como se aprecia en la siguiente liga

<https://www.facebook.com/share/p/WdmgonAXhCUMWmFn/?mibextid=WC7FNe> en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del C. Guillermo Romero Rodríguez, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, en la cual también se identifican de forma directa niños, niñas y adolescentes, se presume no cumple el entonces precandidato Guillermo Romero Rodríguez, ni los Partidos Políticos PAN, PRI, PAS Y PRD con la obligación de llevar a cabo el difuminado del rostro de los menores, con lo anterior se encuentra aprovechándose de los indefensos menores, actuando con alevosía menoscabando los derechos político electorales y humanos de los niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo a lo señalado en el Anexo 3. emitido por el Instituto Nacional Electoral, de nombre "Instructivo para realizar la conversación y recabar la opinión informada de las niñas, niños y adolescentes en base en las guías metodológicas anexas", redactado con objeto de proporcionar una guía para realizar las

conversaciones con niñas, niños y adolescentes, la cual les brinde la información oportuna, necesaria y suficiente a fin de que entiendan el alcance y los riesgos de su participación en propaganda político-electoral, mensajes electorales, o en actos políticos, actos de precampaña o campaña, así como sobre exhibición de su imagen, voz o cualquier dato que los identifique a través de cualquier medio de difusión, mismo, que pretende que en la información que se les proporciona a niñas, niños o adolescentes se les indique en qué medios y durante cuánto tiempo se va a difundir su imagen y de qué forma será su participación (activa o pasiva), por quién podría ser visto (familia, amigos y gente que no conoce) y los riesgos que implica ello, buscando establecer el mecanismo para garantizar que la opinión que se recabe sea expresa, propia, individual, libre, informada y espontánea, además de que sea acorde a la edad, desarrollo cognitivo y madurez de la persona menor de edad, evidenciado con la fotografía subida el martes 16 de abril del 2024, a las 10:05 pm con el título "Que tarde tan gratificante", como se aprecia en la siguiente liga <https://www.facebook.com/share/p/WdmgonAXhCUMWmFn/?mibextid=WC7FNe> en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del C. Guillermo Romero Rodríguez, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, en la cual se identifican de forma directa niños, niñas y adolescentes, el denunciado tiene y tuvo la obligación de cumplir cabalmente dicha metodología, con el objetivo claro de brindar la información oportuna, necesaria y suficiente a fin de que entiendan el alcance y los riesgos de su participación en propaganda político-electoral, mensajes electorales, o en actos políticos, actos de precampaña o campaña, así como de darle certeza y seguridad jurídica a los niños, niñas y adolescentes.

El Anexo 2. con título "Manual para recabar la opinión y el consentimiento informado de niñas, niños y adolescentes para la utilización de su imagen, voz o cualquier dato que los haga identificables en propaganda político-electoral y mensajes electorales, actos políticos, de precampaña o campaña a través de cualquier medio de difusión", señala en su punto IV, inciso a), para las Niñas y niños de 6 a 11 años, la obligación de recabar la opinión y el consentimiento informado de niñas, niños y adolescentes para la utilización de su imagen, voz o cualquier dato que los haga identificables en propaganda político-electoral y mensajes electorales, actos políticos, de precampaña o campaña a través de cualquier medio de difusión, antes de la elaboración o producción de la propaganda político-electoral o mensajes electorales, o previo a la participación en un acto de precampaña o campaña, así como un consentimiento informado durante la elaboración de videos o cualquier tipo de propaganda o mensaje electoral (previo a la difusión) y después de la difusión; o durante la celebración de actos políticos, de precampaña o campaña y su aparición en redes sociales o cualquier plataforma digital tales como Twitter, "X", YouTube, Facebook, y notas emitidas por periódicos digitales, o por influencers, que posicionan o apoyen al candidato.

Concatenado a lo anterior en el punto IV, inciso b), el cual señala que las niñas, niños y adolescentes, antes de la elaboración o producción de la propaganda político-electoral o mensajes electorales, o previo a la participación en un acto de precampaña o campaña. Consentimiento informado durante la elaboración de videos o cualquier tipo de propaganda o mensaje electoral (previo a la difusión) y después de la difusión; o durante la celebración de actos políticos, de precampaña o campaña y su aparición en redes sociales o cualquier plataforma digital, considerando que el denunciado no cumplió con los requisitos mínimos necesarios establecidos en la Ley para utilizar la imagen de los menores de edad; aunado a que, a no existe motivo, causa o fin lícito y legítimo para la aparición de éste en la fotografía subida en fecha martes 16 de abril del 2024, a las 10:05 pm con el título "Que tarde tan gratificante", como se aprecia en la siguiente liga <https://www.facebook.com/share/p/WdmgonAXhCUMWmFn/?mibextid=WC7FNe> en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del C. Guillermo Romero Rodríguez, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal.

Así mismo, la resolución número SUP-REP-170/2018 y SUP-REP-5/2019. Tesis XXIX/2018 PROPAGANDA POLÍTICA ELECTORAL. CUANDO APAREZCAN

MENORES SIN EL CONSENTIMIENTOS DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN. señala lo siguiente;

... III. La protección reforzada del derecho a la propia imagen de menores de edad. Los menores de edad, como cualquier persona, gozan del derecho a la propia imagen, como un derivado del derecho a la privacidad y, en dicho sentido, tienen la protección de dicho derecho fundamental frente a intromisiones indebidas. Esto ha sido reconocido no sólo por los tribunales nacionales, sino por diversos organismos internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño, firmada en 1989, establece que (Artículo 16): 1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. 2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef), en el documento de debate sobre los derechos de los niños en el mundo digital,¹⁷ señala que, a pesar de que el derecho a la intimidad de los menores y las personas adultas tiene la misma protección, es evidente que, considerando los demás derechos, el mejor interés y capacidades en evolución de los menores, es necesario un enfoque diferenciado de la protección del derecho a la intimidad de los menores. En dicho sentido, en la Observación General No. 14 del Comité de los Derechos del Niño (CRC/C/GC/14), se explica que el "interés superior del niño" es un concepto triple que involucra un derecho sustantivo, un principio interpretativo y una norma de procedimiento. Como principio interpretativo, este concepto implica que "si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño". Como norma de procedimiento implica que "siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados" (párr. 6). En el caso de que los derechos de otras personas entren en conflicto con el interés superior del niño y no sea posible armonizarlos, el referido Comité resalta que las autoridades "habrán de analizar y sopesar los derechos de todos los interesados, teniendo en cuenta que el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial significa que los intereses del niño tienen máxima prioridad y no son una de tantas consideraciones". El principio del interés superior de la niñez está también reconocido en el artículo 4, párrafo 9, de la Constitución Federal. En cuanto a la protección de la imagen de los menores, en el contexto español, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de España considera que "siempre que no medie el consentimiento de los padres o representantes legales de los menores con la ausencia del Ministerio Fiscal, la difusión de cualquier imagen de éstos ha de ser reputada contraria al ordenamiento jurídico" (Recurso 2895/2013). En dicho caso, el Tribunal determinó que publicar la fotografía de un menor en una revista gratuita sin el permiso de sus padres, vulnera su derecho a la imagen, a pesar de que la fotografía fue capturada por el tío del niño. Enfatizó que la violación se actualiza "por la inclusión de la imagen del menor en una revista con independencia de los fines perseguidos por su publicación o de que pudiera o no afectar a la reputación del afectado" y que lo decisivo es "la entrega de esta fotografía de un codemandado a otro sin que se acreditase la existencia del consentimiento necesario para su publicación". Los derechos tutelados en el artículo 6 constitucional, no son exclusivamente oponibles a los partidos políticos, sino también a los particulares, por lo que es posible concluir que la propaganda y mensajes de contenido político o electoral que difundan las personas físicas y morales en la temporalidad referida por el numeral 24724 de la ley electoral, también deben ajustarse a la norma constitucional citada, siendo posible que en el caso de que no sea así, el sujeto emisor de la misma, pueda ser sancionado. • La Sala Especializada consideró necesario, a manera de acción preventiva, establecer un llamamiento respecto de aquellas personas físicas y morales vinculadas con cualquier fuerza política que elaboren o difundan por cualquier medio de comunicación legalmente previsto para hacerlo, cualquier tipo de propaganda política o electoral que, en determinado momento pudieran emitir en ejercicio de su libertad de expresión y participación política ya sea a favor o en contra de algún partido político, precandidato/a, candidato/a, aspirante, candidato/a independiente, coalición, dentro o fuera de un proceso electoral federal o local, para que tengan especial cuidado al utilizar cualquier elemento audiovisual que pudiera colocar en riesgo el interés superior de la niñez, ya que siempre debe tenerse presente que los derechos humanos de la niñez requieren de mayor respeto, protección y cuidado reforzado por parte de cualquier persona y no sólo de las autoridades. ... (Sic)

<https://www.facebook.com/share/p/WdmgonAXhCUMWmFn/?mibextid=WC7FNe>

Memo Romero
1 día · 📍

¡Que tarde tan gratificante!

Hoy tuve el honor de recorrer las calles, tocando puertas y compartiendo momentos entrañables con mi gente del Infonavit Jabañes.

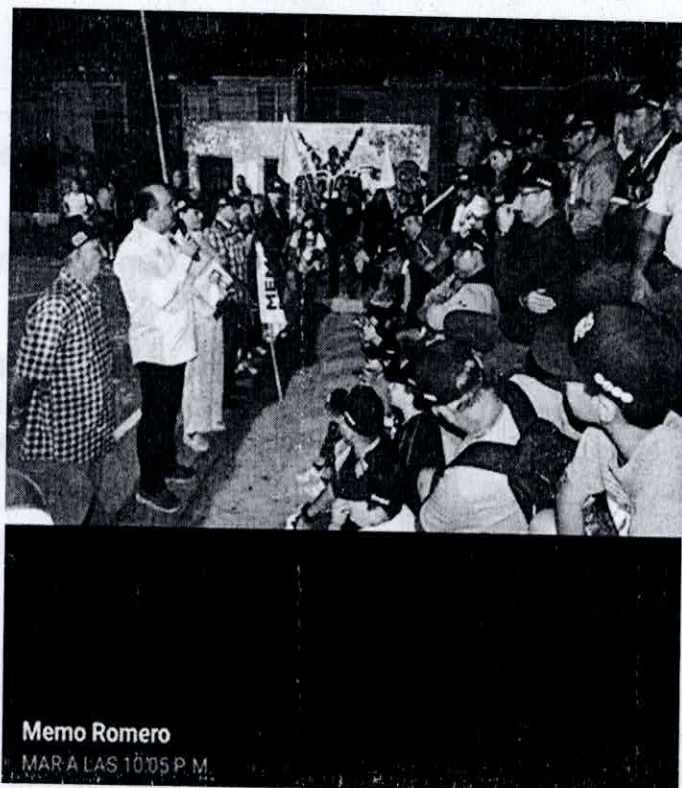
¡Qué alegría saludarlos y escuchar sus inquietudes! Además, tuve el gusto de sostener una reunión informal con los apasionados promotores deportivos de nuestra comunidad.

¡Juntos, arreglemos Mazatlán!

#ArreglemosJuntosMazatlán
#MemoRomero #CampañaMazatlán



Memo Romero
MAR A LAS 10:05 P.M.



Hechos que evidentemente vulnera el derecho a la intimidad, violenta su imagen, honra o reputación presente en su ambiente escolar o social y en su futuro, pues al llegar a la edad adulta puede no aprobar la ideología política con la que sus tutores, o aprovechada mente el precandidato lo vinculó durante su infancia, violando así, la normatividad local, federal y la convencionalidad que protege los derechos de los infantes que aparecen en su promoción electoral, sin cumplir con la normatividad electoral y los derechos humanos, constituyendo violaciones al proceso electoral, así como a la neutralidad, equidad e imparcialidad de la contienda a favor del entonces precandidato conocido como Guillermo Romero Rodríguez.

Por su parte La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa establece lo siguiente:

... Artículo 11 Bis. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

...XVII. Derecho a la intimidad; ...

Artículo 66. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales.

No podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquella que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación.

Quienes ejerzan su patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán orientar, supervisar, y en su caso, restringir sus conductas y hábitos sin que esto se considere injerencia, siempre que atiendan al interés superior de la niñez.

Artículo 67. Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación locales, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez.

Artículo 67 Bis. Cualquier medio de comunicación que difunda entrevistas a niñas, niños y adolescentes, procederá como sigue:

I. Deberá recabar el consentimiento por escrito o cualquier otro medio, de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o

adolescente, respectivamente, conforme a lo señalado en el artículo anterior y a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 66 de la presente Ley; y,

II. La persona que realice la entrevista será respetuosa y no podrá mostrar actitudes ni emitir comentarios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

En el caso de que no sea posible recabar el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de un adolescente, éste podrá otorgarlo siempre que ello no implique una afectación a su derecho a la privacidad por el menoscabo a su honra o reputación.

(Adic. Según Decreto No. 434, publicado en el P.O. No. 063, del 24 de mayo de 2023).

Artículo 67 Bis 1. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la protección de la identidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes que sean víctimas, ofendidos, testigos o que estén relacionados de cualquier manera en la comisión de un delito, a fin de evitar su identificación pública.

La misma protección se otorgará a adolescentes a quienes se les atribuya la realización o participación en un delito, conforme a la legislación aplicable en la materia.

(Adic. Según Decreto No. 434, publicado en el P.O. No. 063, del 24 de mayo de 2023).

Artículo 67 Bis 2. Los medios de comunicación deberán asegurarse que las imágenes, voz o datos a difundir, no pongan en peligro, de forma individual o colectiva, la vida, integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes, aun cuando se modifiquen, se difuminen o no se especifiquen sus identidades, y evitarán la difusión de imágenes o noticias que propicien o sean tendentes a su discriminación, criminalización o estigmatización, en contravención a las disposiciones aplicables.

En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente artículo, niñas, niños o adolescentes afectados, por conducto de su representante legal o, en su caso, de la Procuraduría de Protección, actuando de oficio o en representación sustituta, podrá promover las acciones civiles de reparación del daño e iniciar los procedimientos por la responsabilidad administrativa a que haya lugar; así como dar seguimiento a los procedimientos hasta su conclusión. Niñas, niños o adolescentes afectados, considerando su edad, grado de desarrollo cognoscitivo y madurez, solicitarán la intervención de la Procuraduría de Protección.

Lo que evidentemente constituye violaciones al proceso electoral, entre ellos a la neutralidad, equidad e imparcialidad de la contienda pues con la manifestación de dichas imágenes de niñas, niños y menores, se pretende posicionar la imagen a favor del entonces precandidato conocido como Guillermo Romero Rodríguez, realizándose acciones que los infantes no entienden y que corresponden totalmente a intereses ajenos a los suyos.

En resumidas cuentas dichas fotografías subidas a la red, en la cuenta "POLÍTICA VERIFICADA", de la red social Facebook del C. Guillermo Romero Rodríguez, con el carácter de entonces precandidato a presidente municipal de Mazatlán en su momento y actual candidato a la Presidencia Municipal, se encuentran plagadas de actos constitutivos de infracciones electorales y delitos, de los cuales debe enterarse a las autoridades pertinentes, acciones que tienen como objetivo favorecer al posicionamiento de un precandidato mediante la utilización de la imagen de niños, niñas y adolescentes, sin contar con los requisitos mínimos necesarios de su consentimiento, lo que lleva a violentar la neutralidad, equidad e imparcialidad de la contienda.

Preceptos presuntamente violados:

1. Derechos políticos electorales de las niñas, niños y adolescentes

Para un mayor entendimiento se define lo que es propaganda en sus dos vertientes electoral y política, de la siguiente manera:

Electoral: Es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral se difunden con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas; es decir, se trata de una forma de comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia hacia una candidata o candidato, coalición o partido político (jurisprudencia 37/2010).

Política: El TEPJF diferencia la propaganda política de la electoral porque sus contenidos son de carácter ideológico y tiene el fin de crear, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, o a estimular determinadas conductas políticas (SUP-JRC-182/2016 y acumulados). Se enfoca en la presentación de la ideología, programa o plataforma política que detente un partido político en general, o bien en la invitación que haga a la ciudadanía para formar parte de este, y de promover la participación de las y los ciudadanos en la vida democrática del país (SUP-REP-196/2015; SUP-JRC182/2016 y acumulados; SRE-PSC-50/2017).

Concatenado con lo anterior el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la Jurisprudencia 5/2017 con el rubro "Propaganda política y electoral. Requisitos mínimos que deben cumplirse cuando se difundan imágenes de niños, niñas y adolescentes", el TEPJF determinó que el derecho a la imagen de las niñas, niños y adolescentes está vinculado con el derecho a la intimidad y al honor, entre otros derechos inherentes a su personalidad, que pueden resultar lesionados a partir de la difusión de su imagen en los medios de comunicación social, como ocurre con los spots televisivos de los partidos políticos.

Por ello, "si en la propaganda política o electoral se recurre a imágenes de personas menores de edad como recurso propagandístico y parte de la inclusión democrática, se deben cumplir ciertos requisitos mínimos para garantizar sus derechos, como el consentimiento por escrito o cualquier otro medio de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente en función de la edad y su madurez" en este caso no se ha cumplido.

La jurisprudencia antes referida tiene fundamento en lo dispuesto en los artículos 1° y 4°, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, de la Convención sobre los Derechos del Niño; 78, fracción I, en relación con el 76, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y 471, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se distingue que el precandidato violenta el derecho a la intimidad y consentimiento de los menores, pues utilizó las fotos de niñas, niños y adolescentes, como se desprenden de los hechos antes mencionados, en difusión deliberada y sistemática de mensajes entre un público para crear una imagen positiva o negativa de personas, instituciones, fenómenos o acciones y, con ello, influir en sus percepciones y valores, así como dirigir su comportamiento y sus acciones. Etimológicamente, el término proviene del latín "propagandus", que significa 'propagar', aunque también se sostiene que deriva de la palabra propagare, que hace referencia a 'sembrar' o 'difundir', de tal forma que cuando se habla de propaganda se refiere a la acción de difundir o hacer extensivo algo de forma cuidadosa, estratégica y constante, con lo anterior se acreditan las violaciones e infracciones a la Constitución Política de México, normatividad electoral federal, estatal, así como a los lineamientos y procedimientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral, a su vez violentaron leyes federales como la Ley General Niños, Niñas y Adolescentes, Ley General de Transparencia y acceso a la Información Pública y la Ley de Propiedad Intelectual, así como a diversas disposiciones de orden penal federal y local, por lo que sí de las investigaciones realizadas por esta

autoridad electoral observa la constitución de algún delito, se solicita se dé vista al Ministerio Público correspondiente.

2. Derechos humanos de los menores.

Es importante reconocer a los niños, niñas y adolescentes como titulares de derecho, con capacidad de goce de los mismos.

Desde esta tesitura los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (publicada el 4 de diciembre de 2014), la cual reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y, en su artículo 13, de manera enunciativa y no limitativa señala los siguientes:

- Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;
- Derecho de prioridad;
- Derecho a la identidad;
- Derecho a vivir en familia;
- Derecho a la igualdad sustantiva;
- Derecho a no ser discriminado;
- Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;
- Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;
- Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;
- Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad;
- Derecho a la educación;
- Derecho al descanso y al esparcimiento;
- Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura;
- Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información;
- Derecho de participación;
- Derecho de asociación y reunión;
- Derecho a la intimidad;
- Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso;
- Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y
- Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet.

En este caso en particular el candidato y los partidos políticos que lo respaldan violentaron y siguen violentando los derechos, al utilizar sin el consentimiento expreso y previo de los niños, niñas y adolescentes los derechos humanos siguientes:

Derecho a la intimidad

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, así como a la protección de sus datos personales. No podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquéllos que tengan carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permitan identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación.

Derecho a la seguridad jurídica

Niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos y garantías de seguridad jurídica y debido proceso establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, la Ley General de

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y demás disposiciones aplicables.

Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura.

Las Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán este derecho en el marco del Estado laico.

La libertad de profesar la propia religión o creencias en todas sus dimensiones, estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger los derechos y libertades fundamentales de los demás.

3. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El denunciado (señalarlo) y los partidos políticos que los respaldan, violentan las disposiciones previstas por los artículos:

art 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 13 frac xii y xiii, 15, 46 al 49, 76 al 81, y 82 al 86, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en particular el artículos 11

Artículo 11 que a la letra señala:

Artículo 11. Es deber de la familia, la comunidad a la que pertenecen, del Estado y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida.

Es obligación del denunciado y los partidos el respeto y auxilio para protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en este caso en específico, no lo realizaron y en contrario sensus, violaron y permitieron la violación a los derechos de los menores, socabando la integridad y el proyecto de vida de los indefensos menores.

Aunado a lo anterior el artículo 12 señala:

Artículo 12. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las medidas cautelares, de protección y de restitución integrales procedentes en términos de las disposiciones aplicables.

No obstante que hubieron más personas presente en los eventos mencionados y descritos en los antecedentes de esta denuncia, ninguno de los participantes de estos hechos es decir ni el denunciado (señalar memo) ni los partidos que lo apoyan, ni la ciudadanía en general, dieron conocimiento a las autoridades competentes, por lo que en un hecho de justicia y seguridad jurídica se solicita que está autoridad instrumente las medidas cautelares necesarias, sancione en su caso a los violadores de derechos y procure la restitución integral de los derechos violentados así como del proyecto de vida de los niños, niñas y adolescentes.

4. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares

*El denunciado **C. Guillermo Romero Rodríguez**, con el carácter en su momento de Precandidato a Presidente Municipal de Mazatlán, Sinaloa representante de los Partidos Políticos **PAN, PRI, PAS Y PRD** que forman la coalición "Fuerza y Corazón X Sinaloa", violenta flagrantemente las siguientes disposiciones contempladas en los Art. 1,2, 3 fracciones I, IV, V y VI, 6, 7, 8, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, por las siguientes consideraciones:*

De los artículos citados se desprende que el objeto de la Ley es proteger los datos personales en posesión de los particulares, sean personas físicas o morales de carácter privado, garantizando la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas y regular el tratamiento de los datos personales.

Al respecto, encontramos que el numeral 3 a la letra señala:

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. **Aviso de privacidad:** Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el responsable que es puesto a disposición del titular, previo al tratamiento de sus datos personales, de conformidad con el artículo 15 de la presente Ley.

IV. **Consentimiento:** Manifestación de la voluntad del titular de los datos mediante la cual se efectúa el tratamiento de los mismos.

V. **Datos personales:** Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.

VI. **Datos personales sensibles:** Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.

En el contexto del marco anterior, resulta evidente que el denunciado **C. Guillermo Romero Rodríguez**, en su momento con el carácter de Precandidato a Presidente Municipal de Mazatlán, no observó los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley, toda vez que no priorizó la privacidad y el interés superior de los menores, el cual debe prevalecer en todo momento, mucho menos cuidó su integridad, al exhibir de manera deliberada su imagen como una herramienta de persuasión, con la finalidad de atraer el interés del espectador.

Aunado a lo anterior, es imprescindible contar con el consentimiento expreso de sus padres o tutores para la divulgación de su imagen, así como la opinión informada de los menores, pues va más allá de una simple afectación a la imagen de los niños, niñas y adolescentes, ya que se encuentra vulnerando la intimidad, la honra y la reputación de los menores, además de colocarlos en una situación de riesgo, exponiendo su persona al escarnio, al relacionar su imagen con actos de naturaleza política, sin haber manifestado su voluntad de participar en los mismos.

...

5. **Convenios internacionales y resoluciones de la CIDH.**

La Convención sobre los Derechos de los Niños

Esta autoridad deberá de tomar en cuenta en particular lo siguiente: artículos 3, 12, 13, 14, 15, 16 y 19.

Ya que es potestad del estado el velar por el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y perseguir cualquier abuso, violación a sus derechos e infracciones cometidas, en este caso por el actual candidato (señalarlo) y los partidos políticos que lo arropan.

6.- **Resolución AG/RES. 2905 de la Asamblea General de la OEA.**

La *Carta Democrática Interamericana* establece que la participación ciudadana en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho humano fundamental, el cual se extiende a niñas, niños y adolescentes. Asimismo, el derecho a la participación de esta población está reconocido en varios instrumentos internacionales, por la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en la resolución **AG/RES. 2905** de la Asamblea General de la OEA que establece diálogos intergeneracionales como forma de promover la participación de la niñez.

Resolución **AG/RES. 2905** de la Asamblea General de la OEA establece lo siguiente.-

XII. **Derechos del niño 1.** Apoyar las acciones que viene desarrollando el IIN en la promoción de **la participación de los niños, niñas y adolescentes** y el ejercicio de su libertad para buscar, recibir y difundir información e ideas, **teniendo en cuenta en todo momento el interés superior del niño**, y alentar a las autoridades, actores políticos y adultos en general a escuchar y respetar las opiniones y propuestas de niños, niñas y adolescentes.

Dicha resolución señala que las autoridades, actores políticos y adultos en general **deberan de escuchar y respetar las opiniones y propuestas de los niños, niñas y adolescentes, siempre anteponiendo y teniendo en cuenta en todo momento el interés superior del niño y**

perseguir cualquier abuso, violación a sus derechos e infracciones cometidas, en este caso por el actual candidato **C. Guillermo Romero Rodríguez**, con el carácter en su momento de Precandidato a Presidente Municipal de Mazatlán, Sinaloa representante de los Partidos Políticos **PAN, PRI, PAS Y PRD** que forman la coalición "Fuerza y Corazón X Sinaloa".

7.- Por otra parte, debe considerarse que se actualiza la figura de la Culpa In Vigilando; pues acorde con lo sostenido por la Sala Superior en numerosos precedentes, en el Derecho Administrativo Sancionador Electoral, existe la figura de la Culpa In Vigilando, es decir, la responsabilidad que surge en contra de una persona (física o jurídica), por la comisión de un hecho infractor del marco jurídico, misma que le es imputable por el incumplimiento del deber de cuidado que la ley le impone.

Esta figura está reconocida en el inciso e), párrafo primero del artículo 23; inciso a), párrafo primero del artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos; por la fracción VI, del artículo 33 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la obligación de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado Democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos, para un mejor entendimiento se transcribe el texto en lo que interesa, de la siguiente manera:

"Artículo 23.

1. Son derechos de los partidos políticos:

e) Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidaturas en las elecciones garantizando la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, en los términos de esta Ley y las leyes federales o locales aplicables;

Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;

Artículo 33. Los partidos políticos, en el cumplimiento de sus fines deberán:

VI. Garantizar la participación de sus miembros bajo el principio de igualdad y paridad de género en los cargos directivos partidarios y en los cargos de elección popular;"

En ese sentido, la Sala Superior TEPJF ha determinado que los partidos políticos tienen la calidad de garantes respecto de las conductas de sus miembros y simpatizantes, derivado de su obligación de velar porque su actuación se ajuste a los principios referidos.

En igual sentido, se ha considerado que el citado artículo 25, de la Ley de Partidos Políticos, regula:

a) El principio de respeto absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión a la norma como base de la responsabilidad del partido; y,

b) La posición de garante del partido político respecto de la conducta de sus miembros y simpatizantes, al imponer la obligación de velar porque ésta se ajuste a los principios del Estado democrático, entre los cuales destaca el respeto absoluto a la legalidad, de manera que las infracciones que cometan dichos individuos constituyen el correlativo incumplimiento de la obligación del garante —partido político— que determina su responsabilidad por haber aceptado o al menos tolerado las conductas realizadas dentro de las actividades propias del instituto político; esto conlleva, en último caso, la aceptación de las consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de la responsabilidad individual. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXXIV/2004, cuyo rubro es: "PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES".

PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.- La interpretación de los artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) y 269, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales permite concluir, que los partidos políticos son personas jurídicas que pueden cometer infracciones a disposiciones electorales a través de sus dirigentes, militantes,

simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al partido político. Para arribar a esta conclusión, se tiene en cuenta que las personas jurídicas (entre las que se cuentan los partidos políticos) por su naturaleza, no pueden actuar por sí solas, pero son susceptibles de hacerlo a través de acciones de personas físicas, razón por la cual, la conducta legal o ilegal en que incurra una persona jurídica sólo puede realizarse a través de la actividad de aquéllas. El legislador mexicano reconoce a los partidos políticos como entes capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales a través de personas físicas, tanto en la Constitución federal, al establecer en el artículo 41 que los partidos políticos serán sancionados por el incumplimiento de las disposiciones referidas en el precepto, como en el ámbito legal, en el artículo 38, que prevé como obligación de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático; este precepto regula: a) el principio de respeto absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión a la norma como base de la responsabilidad del partido, lo que es acorde con el artículo 269 mencionado, el cual dispone que al partido se le impondrá una sanción por la violación a la ley y, b) la posición de garante del partido político respecto de la conducta de sus miembros y simpatizantes, al imponerle la obligación de velar porque ésta se ajuste a los principios del Estado democrático, entre los cuales destaca el respeto absoluto a la legalidad, de manera que las infracciones que cometan dichos individuos constituyen el correlativo incumplimiento de la obligación del garante — partido político— que determina su responsabilidad por haber aceptado o al menos tolerado las conductas realizadas dentro de las actividades propias del instituto político; esto conlleva, en último caso, la aceptación de las consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de la responsabilidad individual. El partido político puede ser responsable también de la actuación de terceros que no necesariamente se encuentran dentro de su estructura interna, si le resulta la calidad de garante de la conducta de tales sujetos. Lo anterior sobre la base de que, tanto en la Constitución como en la ley electoral secundaria, se establece que el incumplimiento a cualquiera de las normas que contienen los valores que se protegen con el establecimiento a nivel constitucional de los partidos políticos, acarrea la imposición de sanciones; estos valores consisten en la conformación de la voluntad general y la representatividad a través del cumplimiento de la función pública conferida a los partidos políticos, la transparencia en el manejo de los recursos, especialmente los de origen público, así como su independencia ideológica y funcional, razón por la cual es posible establecer que el partido es garante de la conducta, tanto de sus miembros, como de las personas relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, así como en la consecución de sus fines. Lo anterior se ve reforzado con lo establecido en la doctrina, en el sentido de que los actos que los órganos estatutarios ejecutan en el desempeño de las funciones que les competen se consideran como actos de la propia persona jurídica, y del deber de vigilancia de la persona jurídica — culpa in vigilando— sobre las personas que actúan en su ámbito.

V.- Ofrecimiento y exhibición de:

PRUEBAS:

1.- Prueba Documental. - Consistente en la constancia o acta de investigación que esta autoridad tenga levantar en páginas de internet, redes sociales, sobre los Links (URL) siguientes:

<https://www.facebook.com/Memoromerooficial>

<https://www.facebook.com/Memoromerooficial/posts/pfbid0tYy5cdGgsHFyZwu eQVLfgLKoJfoFv7i6sa1wqSATmMmGSQopeJqKXMR4aoRk5ur8l>

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=381161694672372&set=pcb.381162014672340>

<https://www.facebook.com/photo?fbid=382348954553646&set=pcb.382349117 886963>

<https://www.facebook.com/share/oyWqvNpUWdEWW6v8/?mibextid=xfxF2i>

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=383024711152737&set=pcb.38302482 1152726>

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=384738334314708&set=pcb.384738434314698>

<https://www.facebook.com/share/r/jm3kkKdoV1cbpJQB/?mibextid=oFDknk>

<https://www.facebook.com/share/p/WdmgonAXhCUMWmFn/?mibextid=WC7FNe>

Con esta prueba pretendo acreditar lo relacionado con la cuenta oficial del C. Guillermo Romero Rodríguez en su página del portal Facebook, política-verificada denominada **MEMO ROMERO**, así como las imágenes subidas a la red social del entonces precandidato donde se muestra la imagen de niños, niñas y adolescentes, sin difuminar, mismos que no cumplen con los requisitos, y consentimientos para acreditar la legal protección al menor.

Esta prueba la relaciono con los puntos **PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, OCTAVO, y NOVENO** del capítulo de hechos de la presente denuncia.

2.- Prueba Técnica I. - Consisten en Links (ULS) en redes sociales:

<https://www.facebook.com/Memoromerooficial>

Con esta prueba pretendo acreditar lo relacionado con la cuenta oficial del C. Guillermo Romero Rodríguez en su página del portal Facebook. (página política y verificada.)

Esta prueba la relaciono con el punto **PRIMERO** del capítulo de hechos de la presente denuncia.

3.- Prueba Técnica II. - Consisten en Links (ULS) en redes sociales:

<https://www.facebook.com/Memoromerooficial/posts/pfbid0tYy5cdGgsHFyZwueQVLfgLKoJfoFv7i6sa1wqSATmMmGSQopeJqKXMR4aoRk5ur8l>

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=381161694672372&set=pcb.381162014672340>

<https://www.facebook.com/photo?fbid=382348954553646&set=pcb.382349117886963>

<https://www.facebook.com/share/oyWqvNpUWdEWW6v8/?mibextid=xfxF2i>

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=383024711152737&set=pcb.383024821152726>

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=384738334314708&set=pcb.384738434314698>

<https://www.facebook.com/share/r/jm3kkKdoV1cbpJQB/?mibextid=oFDknk>

<https://www.facebook.com/share/p/WdmgonAXhCUMWmFn/?mibextid=WC7FNe>

Con esta prueba pretendo acreditar lo relacionado con las imágenes subidas a la red social del entonces precandidato donde se muestra la imagen de niños, niñas y adolescentes, sin difuminar, mismos que no cumplen con los requisitos, y consentimientos para acreditar la legal protección al menor.

Esta prueba la relaciono con los puntos **SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, OCTAVO, y NOVENO** del capítulo de hechos de la presente denuncia.

4.- Prueba Técnica III.- Consistente en una memoria de almacenamiento tipo USB. Que contiene las imágenes descargadas en diversas publicaciones donde aparecen los infantes.

Con esta prueba pretendo acreditar lo relacionado con la cuenta oficial del C. Guillermo Romero Rodríguez en su página del portal Facebook, denominada MEMO ROMERO, así como las imágenes subidas a la red social del entonces precandidato donde se muestra la imagen de niños, niñas y adolescentes, sin difuminar, mismos que no cumplen con los requisitos, y consentimientos para acreditar la legal protección al menor.

Esta prueba la relaciono con los puntos **PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, OCTAVO, y NOVENO** del capítulo de hechos de la presente denuncia.

5. Diligencias para mejor proveer, constantes en las prácticas que ordene el Consejo cuando pueda ser útil para aclarar o fijar hechos relativos a la controversia, así como las que este consejo para mejor proveer, pudiera ordenar, respecto de la existencia e inexistencia de las infracciones en débito del cumplimiento del principio de exhaustividad y para la búsqueda de la verdad.

VI. En este caso, se solicitan las siguientes:

MEDIDAS CAUTELARES:

Solicito se ordene las medidas cautelares, lo anterior por la apariencia del buen derecho (fumus bonis iuris) y el peligro en la demora en el dictado de la resolución definitiva (periculum in mora), consistentes en que se solicite al ciudadano, **Guillermo Romero Rodríguez en su carácter de candidato a presidente municipal de Mazatlán, y a los Partidos Políticos PAN, PRI, PAS Y PRD que forman la coalición "Fuerza y Corazón X Sinaloa",** para que, se abstenga de utilizar imágenes de niños, niñas y adolescentes, y en un término prudente por el interés superior de los menores, retire toda la propaganda política ilegal que violente el derecho de los niños, niñas y adolescentes, lo anterior para que no cause un daño irreparable en los menores, así como por que existe una afectación al bien jurídico de estos.

Por lo anteriormente expuesto. A Ustedes Integrantes de la Comisión de Quejas y denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sinaloa, atentamente pedimos:

Primero. Tenerme presentando formal denuncia en los términos señalados en el presente escrito.

Segundo. Tenerme por ofrecidas las pruebas señaladas en el presente escrito y acordar su admisión y desahogo.

Tercero. Se desahogue el procedimiento en todos sus términos.

Cuarto. Desahogadas todas las diligencias remita el presente con las actuaciones al tribunal para los efectos correspondientes y se apliquen las sanciones conforme a derecho por los actos denunciados.

PROTESTO LO NECESARIO.

C. JOSÉ LUIS GÓMEZ NUÑEZ
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MORENA

Instituto Electoral
del Estado de Sinaloa
Electoral Mazatlán